

PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

GACETA

DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



DÉCIMA ÉPOCA

LIBRO 27

Tomo III

Febrero de 2016

Tribunales Colegiados de Circuito
y Normativa y Acuerdos Relevantes

México 2016

Impreso en México
Printed in Mexico

GACETA

DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

LA COMPILACIÓN Y EDICIÓN DE ESTA GACETA ESTUVIERON A CARGO
DE LA COORDINACIÓN DE COMPILACIÓN Y
SISTEMATIZACIÓN DE TESIS DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

PODER JUDICIAL
DE LA FEDERACIÓN

SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN

GACETA

DEL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN



DÉCIMA ÉPOCA

LIBRO 27

Tomo III

Febrero de 2016

Tribunales Colegiados de Circuito
y Normativa y Acuerdos Relevantes

México 2016

DIRECTORIO

Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis:

Cielito Bolívar Galindo

Coordinadora

Erika Arellano Hobelsberger

*Subdirectora General de Compilación
del Semanario Judicial de la Federación*

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Presidente: Ministro Luis María Aguilar Morales

PRIMERA SALA

Presidente: Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

Ministros José Ramón Cossío Díaz
Jorge Mario Pardo Rebolledo
Norma Lucía Piña Hernández
Arturo Zaldívar Lelo de Larrea

SEGUNDA SALA

Presidente: Ministro Alberto Pérez Dayán

Ministros José Fernando Franco González Salas
Javier Laynez Potisek
Margarita Beatriz Luna Ramos
Eduardo Medina Mora Icaza

QUINTA PARTE
TRIBUNALES COLEGIADOS
DE CIRCUITO

SECCIÓN PRIMERA

JURISPRUDENCIA

Subsección 1. POR REITERACIÓN

DEMANDA LABORAL. EL REQUERIMIENTO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA QUE EL PROMOVENTE ACREDITE SU IDENTIDAD, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE TENERLA POR NO INTERPUESTA, ES ILEGAL Y CONTRARÍA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

AMPARO DIRECTO 387/2015. 10 DE SEPTIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: SAMUEL ALVARADO ECHAVARRÍA. SECRETARIO: RUBÉN LAUREANO BRIONES DEL RÍO.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Acto reclamado. El acuerdo que se reclama textualmente dice:

"Cuatro veces heroica Puebla de Zaragoza, a veintidós de mayo de dos mil quince.

[illegible]

crito de fecha diecinueve de agosto de dos mil catorce, toda vez que el citado actor no dio cabal cumplimiento al requerimiento señalado en autos.

"Cabe hacer mención que los requerimientos señalados en los diversos proveídos de veintisiete de marzo y siete de mayo, ambos de dos mil quince, se debieron a que esta autoridad consideró pertinente que la parte actora acreditara su identidad ante este órgano colegiado, con la finalidad de no vulnerar los derechos de carácter personalísimo y en atención a las facultades que le confieren los artículos 83 y 94 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla; y toda vez que como ya quedó plasmado, la parte actora fue omisa en dar cumplimiento al requerimiento en comento, se evidencia una falta de interés jurídico para la continuación de la presente causa laboral, por lo que se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, por carecer de interés jurídico de la (sic) parte actora."

SEXTO.—Conceptos de violación. Los conceptos de violación expresados por la parte quejosa son los siguientes:

"Conceptos de violación

"Por cuestión de orden y método hago del conocimiento a este tribunal que la procedencia de todos y cada uno de los conceptos de violación hechos valer por el suscrito encuentran fundamento en lo dispuesto en los arábigos 1o., 14 y 16 de nuestra Carta Magna, ya que el primero de estos tres establece de forma clara y específica la obligación que tienen las autoridades jurisdiccionales de siempre realizar sus actuaciones buscando hacer respetar los derechos humanos fundamentales que otorga la Constitución Federal así como los tratados internacionales que en términos del (sic) 133 constitucional tienen la obligación de observar, ya que dicho principio, el cual se encuentra denominado como *pro homine*, pretende hacer que las autoridades que encuentran sus facultades conforme a las normas del Estado aplicables, hagan respetar y hacer respetar todos y cada uno de los derechos humanos de los gobernados, situación que en la especie de ninguna forma aconteció, ya que la autoridad laboral no sólo pasó por alto dicho principio si no (sic) que por si esto no fuera suficiente, omitió observar las obligaciones y facultades que le otorga la ley del procedimiento aplicable, violando así el principio de legalidad que todo gobernado goza por el simple y sencillo hecho de ser ciudadano mexicano, de igual forma los diversos dispositivos constitucionales establecen las garantías y derechos que todo mexicano goza para el acceso a la impartición de la justicia por tribunales competentes los cuales deberán de observar todos y cada uno de los derechos procesales que emanan de las leyes adjetivas aplicables, motivo por el cual en el momento en que

la autoridad señalada como responsable emite un acuerdo que viola dichos principios procedimentales, resulta en consecuencia procedente a criterio del hoy quejoso que este tribunal, en su esfera jurisdiccional haga valer dichos derechos y los proteja de las acotaciones por demás ilegales que realiza la autoridad señalada como responsable.

"Así las cosas tenemos que el proveído combatido de fecha veintidós de mayo del año dos mil quince se encuentra dictado en completa contravención a lo establecido por el arábigo 14 constitucional, el cual a la letra dice: (reproduce el mencionado artículo).

"A la luz del precepto constitucional transcrito, tenemos que la Constitución Federal es muy específica al momento de establecer como obligación de las autoridades judiciales el observar todas y cada una de la (sic) formalidades esenciales del procedimiento que se encuentran establecidas en la ley adjetiva aplicable, lo que en la especie se traduce en el título XIV de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria al procedimiento de origen, conforme al numeral 11 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, situación que en la especie de ninguna forma aconteció, ya que del análisis de las constancias que integran el expediente laboral de origen, se desprenden las siguientes violaciones:

"Primero. Causa agravios al suscrito el acuerdo de fecha veintisiete de marzo el año dos mil quince, por virtud del cual se apercibe al suscrito que para el caso en que no exhiba documento por virtud del cual acredite su (sic) personalidad, se tendrá por no interpuesta la demanda laboral de origen, por las razones que se expondrán a continuación:

"Es ilegal y contrario a derecho el acuerdo de fecha veintisiete de marzo del año dos mil quince, por carecer de la debida fundamentación y motivación necesaria para que pudiera surtir efectos legales derivado de que del mismo se desprende lo siguiente:

"...con fundamento en los artículos 83, 85 y demás relativos aplicables de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado (sic), así como 685, 686 y 873 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley de la materia y a efecto de no transgredir tanto derechos procesales así como derechos humanos, así como para tener debidamente integrada la presente causa laboral y para mejor proveer, requiérase al actor para que en el término (sic) de tres días posteriores a la notificación del presente proveído, exhiba carta poder debidamente requisitada, a efecto de que los profesionistas mencionados en el escrito de cuenta, puedan representarlo en el presente juicio laboral, debiendo acompañar documento idóneo que acredite que estos últimos tengan el carácter con el que se pretenden ostentar, apercibido que en

caso de ser omisa al presente requerimiento se tendrá por no interpuesta la demanda, lo anterior con fundamento en lo establecido en los artículos 85 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado; 17, 685 y 735 de la Ley Federal del Trabajo...'

"Así las cosas podemos percatarnos que la autoridad señalada como responsable se encuentra ordenando el archivo definitivo del juicio laboral de origen mediante la resolución combatida, ya que según su dicho no se había proveído lo necesario por parte del suscrito para la continuación del procedimiento y en consecuencia se presumía una falta de interés en la causa laboral de origen, situación completamente falsa y alejada de la realidad ya que omite percatarse que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, a través de su arábigo 129 impone al suscrito como requisitos para promover juicio laboral burocrático los siguientes:

"Artículo 129. La demanda deberá contener:

"I. El nombre y domicilio del reclamante;

"II. El nombre y domicilio del demandado;

"III. El objeto de la demanda;

"IV. Una relación de los hechos, y

"V. La indicación del lugar en que puedan obtenerse las pruebas que el reglamante (sic) no pudiere aportar directamente y que tengan por objeto la verificación de los hechos en que funde su demanda, y las diligencias cuya práctica solicite con el mismo fin.

"A la demanda acompañará las pruebas de que disponga y los documentos que acrediten la personalidad de su representante, si no concurre personalmente.'

"De lo anterior podemos observar que la ley de la materia de origen, en ningún momento impone al suscrito los requerimientos que fueran realizados por la autoridad señalada como responsable, por lo que al dictar un acuerdo que no se encuentre debidamente fundamentado hace ilegal y contrario a derecho el acuerdo combatido. Ahora bien y para que no exista lugar a dudas me permito hacer ver (sic) autoridad federal que el dispositivo legal que aplica de forma supletoria al procedimiento de origen, la Ley Federal del Trabajo, a través de sus ordenamientos (sic) 871 y 872, señala requisitos para presentar la demanda laboral, que en ningún momento difieren en cuanto a su

esencia de los anteriormente mencionados, los cuales me permito citar a continuación:

"(Transcribe los mencionados artículos).

"De todo lo anterior podemos concluir, que las leyes que rigen el procedimiento natural, en ningún momento establecen como requisitos para presentar la demanda inicial, los que se encuentra requiriendo la autoridad señalada como responsable, lo que se traduce, sin lugar a dudas, en un acuerdo carente de toda fundamentación y motivación y en consecuencia una violación a los derechos procesales a los que tiene acceso el suscrito por el simple y sencillo hecho de ser ciudadano mexicano. Lo anterior encuentra relevancia en virtud de que los principios procesales que rigen las controversias laborales que se ventilan ante la autoridad señalada como responsable, los cuales se esgrimen de la Ley Federal del Trabajo, que en términos del artículo 11 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla se aplica de forma supletoria, establecen de forma clara y específica que por excelencia (sic) la carga de la prueba le corresponde al patrón cuando se trate de condiciones generales de trabajo, ya que al respecto los artículos 784 y 804 del código obrero, imponen a la parte demandada la carga de la prueba cuando exista alguna controversia que tenga a (sic) lugar entre los tópicos señalados anteriormente, del tal suerte que para el caso de que la parte patronal sea omisa en exhibir la documentación relacionada con la misma, se tendrá por acreditado el dicho del trabajador, es decir, de la parte actora, numerales que en virtud de su importancia me permito transcribir y a la letra dice:

"(Transcribe los artículos 784 y 804 del código obrero).

"Lo anterior se afirma derivado de que el mismo principio de la carga de la prueba, se aplica de forma procesal para el caso del escrito de contestación a la demanda, ya que tal y como se puede apreciar de la literalidad del artículo 879 del mismo dispositivo legal, el cual establece que para el caso de que la parte demandada no comparezca al desahogo de la audiencia de ley en su etapa de conciliación, demanda y excepciones, se tendrá por contestado en sentido afirmativo el escrito inicial de demanda, es decir se reconocerá la existencia de los hechos plasmados por el accionante y en consecuencia la procedencia de las acciones pretendidas en contra del demandado, numeral que en su parte conducente a la letra dice:

"(Transcribe parte del artículo 879 de la Ley Federal del Trabajo).

"Ahora bien, lo anterior encuentra relevancia derivado de que el requerimiento combatido en el acuerdo de referencia resulta ser violatorio de los

derechos procesales a los que tiene acceso al (sic) suscrito, por el simple y sencillo hecho de ser ciudadano mexicano y que se encuentra previsto y tutelado en el artículo 16 constitucional, ya que la autoridad señalada como responsable requiere que el hoy quejoso se encuentra, es decir el trabajador en el juicio natural, tiene que exhibir documental con la que acredite el vínculo laboral sostenido con el organismo demandado, situación que se encuentra realizado en contravención con los principios antes referidos, derivado de que el estudio de la existencia del vínculo obrero patronal, es materia del laudo que dirima las controversias que existan dentro del litigio que nos ocupa y específicamente con la litis que se esgrima del escrito de contestación a la demanda que en su momento realice el representante legal de la parte demandada, ya que será éste quien se encontrará en las aptitudes necesarias para poder objetar y oponer las excepciones (perentorias o dilatorias) relacionadas con las prestaciones reclamadas por el suscrito.

"Al respecto cabe resaltar que la personalidad es un requisito para la procedencia de la acción, ya que emana de un vínculo procesal previamente existente derivado de que un sujeto adquirió un derecho sustantivo, por lo que se puede entender que la personalidad consiste en la capacidad en la causa para accionar de ella, esto es (sic), la facultad de una persona para hacer valer sus derechos antes (sic) una autoridad jurisdiccional, de tal suerte que si la parte adjetiva de la Ley Federal del Trabajo en ningún momento le impone al trabajador la carga de acreditar su personalidad resulta por demás incongruente que la autoridad de origen pretenda realizar dicho acto en contra del hoy demandante, lo que a todas luces violaría los derechos humanos del quejoso y que esta autoridad tiene la obligación de observar bajo el principio *pro homine* previsto en el artículo 1o. constitucional.

"Finalmente tenemos que efectivamente la autoridad señalada como responsable fundamenta el acto que por este medio se combate en diversos numerales de la Ley Federal del Trabajo, sin embargo omite percatarse que dichos numerales en ningún momento facultan a los tribunales laborales el poder ordenar el archivo de un expediente por el (sic) no dar cumplimiento a un requerimiento en el tiempo y forma de ley, sino que por el contrario la Ley Federal del Trabajo prevé como único medio para archivar el expediente, lo que se encuentra previsto por su numeral 773 y el cual establece que se tendrá por desistida de la acción a toda persona que no realice promoción alguna en el término de seis meses siempre y cuando ésta sea necesaria para la continuación del procedimiento, de tal suerte que tal virtud es de notarse que la autoridad señalada como responsable de forma ilegal y completamente alejada de derecho, violando de forma colosal el derecho del suscrito al debido proceso previsto por el artículo 16 constitucional, ordenando un apercibimiento que carece de un fundamento legal necesario para su validez, en virtud de que

los arábigos invocados por la responsable para sustentar su medida de apremio resultan ser por demás inoperantes para el supuesto en el que se encontraba la responsable, lo que por sí solo transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica al que tiene acceso el suscrito por el simple y sencillo hecho de ser ciudadano mexicano. De todo lo anterior podemos percatarnos que la autoridad señalada como responsable fundó y motivó sus actuaciones en artículos elegidos al azar, situación que por sí solo no satisfizo la carga impuesta por los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que la fundamentación en la que basen sus acuerdos las autoridades jurisdiccionales, deberán de tener una correcta aplicación para el caso en el que sean ocupados, a fin de no dejar en estado de indefensión al afectado. Esto encuentra lugar en virtud de que el principio hecho valer al inicio del presente capítulo denominado *pro homine* y que resulta ser aplicable derivado de que este principio busca el hacer respetar los derechos humanos de los gobernados, y que en la especie resultaron ser vulnerados por parte de la responsable al fundamentar de forma indebida sus actuaciones en artículos que no encuentran una correcta aplicabilidad en el juicio laboral de donde emanan los actos reclamados, ya que tal y como se manifestó anteriormente la Ley Federal del Trabajo y/o la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, en ningún momento facultan a la autoridad señalada como responsable para realizar el apercibimiento combatido, motivo por el cual el mismo resulta ser ilegal y contrario a derecho, lo que por sí solo se traduce en un apercibimiento nulo por ser violatorio de los derechos humanos del suscrito, motivo por el cual al encontrarse la responsable en contravención con lo establecido por los numerales 14 y 16 de nuestra Carta Magna, y que como se ha hecho mención con anterioridad la responsable debe observar el debido procedimiento.

"En ese mismo orden de ideas e independientemente de lo expuesto en el párrafo que antecede y sin que implique contradicción con el mismo, se advierte que siendo una obligación de la autoridad responsable de conformidad con el artículo 16 constitucional de en todo momento fundar y motivar debidamente sus resoluciones, esto no acontece, al apercibir al suscrito fundando su actuación en numerales que no tienen aplicación al caso concreto, violando de esta manera las garantías de legalidad y seguridad jurídicas de mi representada, debido a que el citado artículo 16 constitucional constriñe al juzgador a expresar las circunstancias especiales y razones particulares que justifican la aplicación del derecho, esto es, los motivos de hecho y fundamentos de derecho aplicables a tales hechos que justifiquen su resolución; de tal suerte que si no existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, entonces el acto de autoridad carece de respaldo constitucional, hipótesis ésta de indebida fundamentación y motivación que se actualiza al caso que nos ocupa este estudio, esto al no cumplir con tales

requisitos la autoridad responsable al momento de apereibir al suscrito que de no dar cabal cumplimiento al requerimiento, se ordenara el archivo definitivo del expediente laboral al no tenerse por interpuesta la demanda de origen, debido a que no tiene aplicación al caso concreto el criterio que aplicó la responsable, esto es, existe una indebida fundamentación y motivación en la resolución emitida, de tal suerte que al carecer la resolución combatida de los requisitos sine qua non de debida fundamentación y motivación consagrados por el artículo 16 de nuestra Carta Magna, requisitos éstos que deben revestir todo acto de autoridad, tenemos que en tales condiciones resulta procedente la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal para que se deje sin efecto el acuerdo reclamado y se le restituya a mi representada en el goce de sus derechos humanos violados con la finalidad de que se reponga el procedimiento y le sea ordenado a la autoridad responsable requiera al suscrito debiéndole de apereibir que para el caso de que no se dé cumplimiento empezaría a correr el término previsto por el artículo 773 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, emitiendo una resolución debidamente fundada y motivada.

"Por si lo anterior no fuese suficiente, me permito hacer del conocimiento a esta autoridad que bajo la literalidad del artículo 693 de la Ley Federal del Trabajo, que de forma supletoria se aplica al procedimiento de origen, establece de forma clara y específica que le podrá reconocer la personería a los profesionistas que acrediten de forma fehaciente que representa los intereses de la parte actora, por lo que en tal óbice resulta procedente que lo expuesto en el proemio del escrito primigenio de demanda laboral de origen en la que se autorizó a diversas personas para representar al hoy suscrito, y tal argumento debería de haber sido suficiente para que la autoridad señalada como responsable tenga por acreditada tales facultades a los profesionistas allí mencionados, situación que en la especie de ninguna forma aconteció y que viola en perjuicio del hoy quejoso sus derechos humanos previstos y tutelados en los artículos 14 y 16 constitucionales.

"En tal premisa y de conformidad con lo dispuesto por la normatividad citada y transcrita tenemos que los actos de autoridad para que tengan el respaldo constitucional previsto por los artículos 14 y 16 de nuestra Carta Magna deben ser emitidos por autoridad competente en el que además funde y motive correctamente su competencia, de lo contrario carecerán de respaldo constitucional tales resoluciones dando como consecuencia que produzcan su nulidad total, cuestiones éstas que no dio cumplimiento la autoridad hoy indicada como responsable, en virtud de que tal y como se ha demostrado anteriormente los artículos invocados resultan ser inoperantes para el apereibimiento que fuera establecido, razones todas las anteriores por las cuales

resulta procedente la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal con la finalidad de que se deje insubsistente el acto reclamado y se le restituya a mi mandante en el goce de sus derechos humanos violados, lo anterior por ser la resolución que hoy se combate violatoria del derecho humano de mi mandante a la correcta administración de justicia.

"Segundo. Causa agravios al suscrito el acuerdo de fecha seis de mayo del (sic) año dos mil quince, por virtud del cual se apercibe al suscrito que para el caso en que no exhiba documento por virtud del cual acredite su identidad, se tendrá por no interpuesta la demanda laboral de origen, por las razones que se expondrán a continuación:

"Es ilegal y contrario a derecho el acuerdo de fecha seis de mayo del año dos mil quince, por carecer de la debida fundamentación y motivación necesaria para que pudiera surtir efectos legales derivado de que del mismo se desprende lo siguiente:

"...con fundamento en el artículo 83 y demás relativos aplicables de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, en relación con el artículo 735 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la de la materia, se ordena requerir de nueva cuenta a la parte actora, para que en el término de tres días posteriores a la notificación del presente acuerdo, exhiba ante esta autoridad documento idóneo por virtud del cual acredite su identidad con la finalidad de que esta autoridad no vulnere derechos personalísimos de la parte señalada como actora, apercibiéndole que en caso de ser omiso al requerimiento se le tendrá por no interpuesta la demanda (sic)..."

"Así las cosas podemos percatarnos que la autoridad señalada como responsable se encuentra ordenando el archivo definitivo del juicio laboral de origen mediante la resolución combatida, ya que según su dicho no se había proveído lo necesario por parte del suscrito para la continuación del procedimiento y en consecuencia se presumía una falta de interés en la causa laboral de origen, situación completamente falsa y alejada de la realidad ya que omite percatarse que la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, a través de su arábigo 129 impone al suscrito como requisitos para promover juicio laboral burocrático los siguientes:

"(Vuelve a transcribir el mencionado artículo 129).

"De lo anterior podemos observar que la ley de la materia de origen, en ningún momento impone al suscrito los requerimientos que fueran realizados por la autoridad señalada como responsable, por lo que al dictar un acuerdo

que no se encuentre debidamente fundamentado hace ilegal y contrario a derecho el acuerdo combatido. Ahora bien y para que no exista lugar a dudas me permito hacer ver (sic) autoridad federal que el dispositivo legal que aplica de forma supletoria al procedimiento de origen, la Ley Federal del Trabajo, a través de sus ordenamientos 871 y 872, señala requisitos para presentar la demanda laboral, que en ningún momento difieren en cuanto a su esencia de los anteriormente mencionados, los cuales me permito citar a continuación: (transcribe los artículos 871 y 872 de la Ley Federal del Trabajo).

"De todo lo anterior podemos concluir, que las leyes que rigen el procedimiento natural, en ningún momento establecen como requisitos para presentar la demanda inicial, los que se encuentra requiriendo la autoridad señalada como responsable, lo que se traduce, sin lugar a dudas, en un acuerdo carente de toda fundamentación y motivación y en consecuencia una violación a los derechos procesales a los que tiene acceso el suscrito por el simple y sencillo hecho de ser ciudadano mexicano.

"Así las cosas tenemos que efectivamente la autoridad señalada como responsable fundamenta el acto que por este medio se combate en diversos numerales de la Ley Federal del Trabajo, sin embargo omite percatarse que dichos numerales en ningún momento facultan a los tribunales laborales de poder realizar lo siguiente:

"1. Solicitar a la parte actora documento alguno por virtud del cual se pueda tener por acreditada su identidad.

"2. El apercibir a la parte actora que para el caso de no dar cumplimiento en el tiempo y forma que se encuentra ordenado, se podrá ordenar el archivo definitivo de la demanda primigenia laboral.

"En tal virtud tenemos que la autoridad señalada como responsable se encuentra violando en perjuicio del suscrito el derecho al debido proceso que se encuentra previsto y tutelado por el artículo 16 constitucional en perfecta concomitancia con la garantía de legalidad que impone a toda autoridad el artículo 14 del mismo dispositivo de referencia, ya que en el acuerdo que por este medio se combate se observa que la responsable solicita a la parte actora exhiba un documento con el cual acredite su identidad, no obstante lo anterior y conforme a un análisis íntegro y sistemático del proveído de cuenta, me permito hacer del (sic) notar a esta autoridad, que previo estudio del contenido de la Ley Federal del Trabajo, la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, y la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el suscrito jamás encontró algún dispositivo legal por virtud del

cual pudiera obtener la correcta definición del concepto de identidad, y en consecuencia la obligación de la hoy parte quejosa para exhibir ante la autoridad responsable la documental en referencia, lo que se traduce en una flagrante violación a los derechos humanos del hoy impetrante de amparo, ya que momento (sic) en que la autoridad de origen incurre en actos que no le es facultado por las leyes competentes, resulta una transgresión al principio de legalidad de nuestra Carta Magna, lo que por sí solo resulta procedente la concesión del amparo federal a fin de que instruya a la autoridad señalada como responsable se apegue a los términos y condiciones previstos por las leyes correspondientes para realizar el correcto desahogo del procedimiento de origen, por así establecerlo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

"De igual forma resulta ilegal y contrario a derecho el acuerdo combatido por virtud del cual apercibe al suscrito de poder ordenar el archivo de un expediente por el caso (sic) no dar cumplimiento a un requerimiento en el tiempo y forma de ley, sino que por el contrario la Ley Federal del Trabajo prevé como único medio para archivar el expediente, lo que se encuentra previsto por su numeral 773 y el cual establece que se tendrá por desistida de la acción a toda persona que no realice promoción alguna en el término de seis meses siempre y cuando ésta sea necesaria para la continuación del procedimiento, de tal suerte que tal virtud (sic) es de notarse que la autoridad señalada como responsable de forma ilegal y completamente alejada de derecho, violando de forma colosal el derecho del suscrito al debido proceso previsto por el arábigo 16 constitucional, ordenando un apercibimiento que carece de un fundamento legal necesario para su validez, en virtud de que los arábigos invocados por la responsable para sustentar su medida de apremio resultan ser por demás inoperantes para el supuesto en el que se encontraba la responsable, lo que por sí solo transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica al que tiene acceso el suscrito por el simple y sencillo hecho de ser ciudadano mexicano.

"Por si lo anterior no fuese suficiente me permito resaltar a este Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, que no es suficiente que la autoridad jurisdiccional funde y motive sus actuaciones en artículos elegidos al azar, tal y como pretendió realizar la autoridad señalada como responsable, sino que éstos deben tener una correcta aplicación para el caso en el que sean ocupados, esto a la luz del principio hecho valer al inicio del presente capítulo denominado *pro homine*, y que resulta ser aplicable derivado de que este principio busca el hacer respetar los derechos humanos de los gobernados, y que en la especie resultaron ser vulnerados por parte de la responsable al fundamentar de forma indebida sus actuaciones, ya que al momento en el que

la Ley Federal del Trabajo no faculta a la autoridad señalada como responsable para realizar dicho apercibimiento, tenemos en consecuencia que el mismo resulta ser ilegal y contrario a derecho, lo que por sí solo se traduce en un apercibimiento nulo por ser violatorio de los derechos humanos del suscrito, motivo por el cual al encontrarse la responsable en contravención con lo establecido por los numerales 14 y 16 de nuestra Carta Magna, y que como se ha hecho mención con anterioridad la responsable debe observar el debido procedimiento.

"En ese mismo orden de ideas e independientemente de lo expuesto en el párrafo que antecede y sin que implique contradicción con el mismo, se advierte que siendo una obligación de la autoridad responsable de conformidad con el artículo 16 constitucional de en todo momento fundar y motivar debidamente sus resoluciones, esto no acontece, al apercibir al suscrito fundando su actuación en numerales que no tienen aplicación al caso concreto, violando de esta manera las garantías de legalidad y seguridad jurídicas de mi representada, debido a que el citado artículo 16 constitucional constriñe al juzgador a expresar las circunstancias especiales y razones particulares que justifican la aplicación del derecho, esto es los motivos de hecho y fundamentos de derecho aplicables a tales hechos que justifiquen su resolución; de tal suerte que si no existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, entonces el acto de autoridad carece de respaldo constitucional, hipótesis ésta de indebida fundamentación y motivación que se actualiza al caso que nos ocupa este estudio, esto al no cumplir con tales requisitos la autoridad responsable al momento de apercibir al suscrito que de no dar cabal cumplimiento al requerimiento, se ordenará el archivo definitivo del expediente laboral al no tenerse por interpuesta la demanda de origen, debido a que no tiene aplicación al caso concreto el criterio que aplicó la responsable, esto es, existe una indebida fundamentación y motivación en la resolución emitida, de tal suerte que al carecer la resolución combatida de los requisitos sine qua non de debida fundamentación y motivación consagrados por el artículo 16 de nuestra Carta Magna, requisitos éstos que deben revestir todo acto de autoridad, tenemos que en tales condiciones resulta procedente la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal para que se deje sin efecto el acuerdo reclamado y se le restituya a mi representada en el goce de sus derechos humanos violados con la finalidad de que se reponga el procedimiento y le sea ordenado a la autoridad responsable requiera al suscrito debiéndole de apercibir que para el caso de que no se dé cumplimiento empezaría a correr el término previsto por el artículo 773 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, emitiendo una resolución debidamente fundada y motivada.

"Tercero. Causa agravios al suscrito la resolución por la que se da por terminado el juicio laboral promovido por el hoy quejoso de fecha veintidós de mayo del año dos mil quince, por virtud de la cual determinan procedente tener por no interpuesta la demanda laboral promovida por el suscrito y en consecuencia el archivo definitivo del mismo, derivado de que la misma resolución carece de la debida fundamentación y motivación necesarias que por sí solo resulta ser un acto ilegal y violatorio de todo derecho humano, tal y como se demostrará a continuación:

"Consta del expediente laboral de donde emanan los actos reclamados que con fecha veintidós de mayo del año dos mil quince, la autoridad laboral dictó una resolución por virtud de la cual determinó lo que en su parte conducente a la letra dice:

"...se presentó un escrito firmado por el C. ***** (sic), el cual no goza de personalidad dentro del presente procedimiento. Asimismo, se anexó una carta poder firmada por el actor C. *****, el cual concede facultades a los CC. *****, *****, *****, *****, ***** y *****, sin que con ello este tribunal pueda dar certeza del cumplimiento al requerimiento realizado a la parte actora, por lo que este tribunal considera pertinente hacer efectivo el apercibimiento señalado en el acuerdo que antecede, teniéndose por no presentada la demanda promovida por el C. *****, mediante escrito de fecha diecinueve de agosto de dos mil catorce, toda vez que el actor no dio cabal cumplimiento al requerimiento señalado en autos.

"...y toda vez que como ya quedó plasmado, la parte actora fue omisa en dar cabal cumplimiento al requerimiento en comento, por lo que se evidencia una falta de interés jurídico para continuación (sic) con la presente causa laboral, por lo que se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, por carecer de interés jurídico de la (sic) parte actora.'

"De lo anterior tenemos que la autoridad señalada como responsable tuvo a bien el tener por no interpuesta la demanda laboral promovida por el suscrito por la simple y sencilla razón de que según su criterio el hoy quejoso no dio cumplimiento al requerimiento de fecha seis de mayo del año dos mil quince (el cual ya fuera impugnado en el concepto de violación que antecede por transgredir los derechos procesales del suscrito), sin embargo dicho acuerdo resulta ser por demás ilegal y contrario a derecho derivado de que por sí solo contraviene los elementos establecidos por la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria al procedimiento en términos del artículo 11

de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, los cuales me permito detallar más adelante:

"Resulta ser ilegal la indebida determinación por virtud de la cual la autoridad señalada como responsable tiene a bien el tener por no interpuesta la demanda laboral de origen, derivado de en primer lugar ni siquiera fundamenta su acto en alguno (sic) numerales de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado o en su defecto en la Ley Federal del Trabajo, remitiéndose únicamente a lo expuesto en el escrito de fecha anterior a éste, lo que por sí solo ya hace ilegal el acuerdo que en este acto se combate, ya que por ministerio de ley todo acuerdo debe de contener, el debido fundamento y motivaciones que conforme a derecho corresponda, y más aún si éste es la resolución que da por terminada la litis expuesta en un libelo laboral, situación que hace por demás ilegal la citada determinación realizada por la autoridad de origen.

"En segundo término y remitiéndonos al acuerdo de fecha seis de mayo del año dos mil quince, podemos percatarnos que al momento en el que dicta el apercibimiento inconstitucional que fuera combatido en el concepto de violación que antecede, ya que la autoridad señalada como responsable sostiene su actuación en los artículos 17, 685 y 735 de la Ley Federal del Trabajo, hecho por demás ilegal y violatorio de todo derecho y lógica humana posible, derivado de que dichos arábigos ni siquiera contemplan los hechos ordenados en dicho acuerdo por la responsable de los actos reclamados, y lo anterior se afirma al momento en el que se realiza una simple lectura de dichos artículos para poder percatarnos que el legislador en ningún momento facultó a las autoridades laborales para poder ordenar el archivo de un expediente por no haber dado cumplimiento a un requerimiento, y por el contrario omite apegarse a lo establecido por el artículo 129 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, de forma concomitante a lo previsto por los numerales 871 y 872 de la Ley Federal del Trabajo, los cuales detallan de forma específica los requisitos que todo el que pretenda demandar una acción laboral ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, debe de expresar en su escrito primigenio de demanda, y de los cuales se desprenden situaciones completamente diversas a las que le fueran requeridas al suscrito, por parte de la autoridad señalada como responsable, motivo por el cual resulta ser ilegal el que la responsable determine actuar fuera del principio de legalidad que el artículo 16 constitucional establece como norma protectora de los derechos humanos, y procesales de todo gobernado, por lo que al no tener una debida fundamentación dicho acuerdo resulta ser nulo y en consecuencia resultan ser nulos los efectos jurídicos que pretendían otorgarle a dichos acuerdos.

"Numerales que en virtud de su importancia me permito transcribir y a la letra dicen:

"Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado.

"(Transcribe artículo 129).

"Ley Federal del Trabajo.

(Transcribe artículos 871 y 872).

"En tal premisa podemos concluir, que las leyes que rigen el procedimiento natural, en ningún momento establecen como requisitos para presentar la demanda inicial, los que se encuentra señalando de forma arbitraria la autoridad señalada como responsable, lo que se traduce, sin lugar a dudas, en un acuerdo carente de toda fundamentación y motivación y en consecuencia una violación a los derechos humanos del suscrito que se encuentran previstos y tutelados por los artículos 14, 16 y 123 de nuestra Carta Magna.

"En ese mismo orden de ideas e independientemente de lo expuesto en el párrafo que antecede y sin que implique contradicción con el mismo, se advierte que siendo una obligación de la autoridad responsable de conformidad con el artículo 16 constitucional de en todo momento fundar y motivar debidamente sus resoluciones, esto no acontece, al apercibir al suscrito fundando su actuación en numerales que no tienen aplicación al caso concreto, violando de esta manera las garantías de legalidad y seguridad jurídicas de mi representada, debido a que el citado artículo 16 constitucional constriñe al juzgador a expresar las circunstancias especiales y razones particulares que justifican la aplicación del derecho, esto es los motivos de hecho y fundamentos de derecho aplicables a tales hechos que justifiquen su resolución; de tal suerte que si no existe adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, entonces el acto de autoridad carece de respaldo constitucional, hipótesis ésta de indebida fundamentación y motivación que se actualiza al caso que nos ocupa este estudio, (sic) esto al no cumplir con tales requisitos la autoridad responsable al momento de apercibir al suscrito que de no dar cabal cumplimiento al requerimiento, se ordenara el archivo definitivo del expediente laboral al no tenerse por interpuesta la demanda de origen, debido a que no tiene aplicación al caso concreto el criterio que aplicó la responsable, esto es, existe una indebida fundamentación y motivación en la resolución emitida, de tal suerte que al carecer la resolución combatida de los requisitos sine qua non de debida fundamentación y motivación consagrados por el artículo 16 de nuestra Carta Magna, requisitos éstos que debe revestir todo acto de autoridad, tenemos que en tales condiciones resulta procedente la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal para

que se deje sin efecto el acuerdo reclamado y se le restituya a mi representada en el goce de sus derechos humanos violados con la finalidad de que se reponga el procedimiento y se ordene realizar los emplazamientos en los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria al citado procedimiento por preverlo así el artículo 11 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, por todas y cada una de las razones antes expuestas.

"Por si lo anterior no fuese suficiente y sin que implique contradicción con lo anteriormente mencionado, me permito hacer notar a esta autoridad federal que en el supuesto en el que resultara aplicable que la autoridad señalada como responsable ordenara el archivo definitivo del expediente de origen, era su obligación cumplir con todos los supuestos antes detallados, los cuales son necesarios para poder determinar un legal archivo del expediente, sin embargo cabe resaltar que la figura de la caducidad es un supuesto laboral que se encuentra previsto en el procedimiento laboral que se constituye por el transcurso del tiempo acompañado de diversos factores que deberán de llevar al juzgador al convencimiento de que la parte actora ha perdido el interés jurídico en el desarrollo y conclusión del proceso obrero patronal, esto encuentra a (sic) lugar en el momento que (sic) Ley Federal del Trabajo impone como requisitos una serie de notificaciones (no únicamente al trabajador, sino que inclusive a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo), sin embargo la omisión de uno solo de estos factores resulta hacer nulos el resto del procedimiento de caducidad, derivado de que la autoridad laboral carecerá de los argumentos necesarios para determinar que efectivamente la parte actora carece del interés necesario para proveer lo conducente. Así las cosas en la especie tenemos que la autoridad señalada como responsable no únicamente omitió observar todas las notificaciones que debió de haber realizado, así como la audiencia que tenía que haber ordenado, sino que inclusive omite apegarse a los términos previstos para iniciar dicho procedimiento y que era de seis meses, ya que se limitó a señalar que como el apercibimiento hecho valer en el acuerdo de fecha veintidós de mayo del año dos mil quince de no tener por no interpuesta (sic) la demanda (que al haberse realizado de forma indebida se encuentra impugnado en el concepto de violación que antecede), y tan no se incurrió en la falta de interés jurídico por parte del suscrito, que el hoy quejoso se encuentra promoviendo juicio de amparo en la vía indirecta en contra de la dilación procesal en la que incurre la autoridad señalada como responsable, tal y como se manifestó en el capítulo de antecedentes de la presente demanda de amparo, por lo que resulta absurdo que la autoridad señalada como responsable pretenda archivar el expediente de origen por la falta de interés jurídico, sin buscar hacer respetar los derechos humanos del suscrito tal y como era su obligación en términos del principio del artículo 1o. de nuestra Carta Magna, motivo por el cual al no haberse observado dicho prin-

cipio y que se admiculada (sic) con la omisión de apegarse a los requisitos para decretar la caducidad del expediente de origen, resulta en consecuencia procedente a criterio del suscrito la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal para que se deje sin efecto el acuerdo reclamado y se le restituya a mi representada en el goce de sus derechos humanos violados con la finalidad de que se reponga el procedimiento y se ordene la continuación del procedimiento en los términos y condiciones previstos por las leyes procesales aplicables.

"Ahora bien, sin que implique contradicción y/o reconocimiento con lo anteriormente expuesto, me permito resaltar a esta autoridad federal que si bien es cierto la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, prevé una solución para el caso en el que la parte actora pierda el interés jurídico en el proceso laboral, y esto es el procedimiento de caducidad previsto por los artículos del 771 al 775 del mismo dispositivo legal, cierto también lo es que dichos arábigos establecen varios requisitos sine qua non para el archivo de un expediente laboral por falta de interés en la parte actora y éstos son:

"1. Se notificará al accionante que empezará a correr en su perjuicio el término de la caducidad previsto por el artículo 773 de la Ley Federal del Trabajo.

"2. Que en caso de insistir en el silencio por parte de la parte (sic) actora, se notificará a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo para que prevenga al actor.

"3. Que el accionante omita realizar una promoción que sea necesaria para la continuación de procedimiento.

"4. Que exista una inactividad procesal imputable al accionante en el término de seis meses.

"5. Señalar día y hora para la audiencia de caducidad, debiendo notificar previamente a las partes.

"Así las cosas, considerando dichos requisitos podemos llegar a la conclusión de que el legislador al momento de redactar el código obrero, buscó proteger los derechos procesales del accionante, otorgando para dicho efecto, un procedimiento de caducidad que en ningún momento da lugar a duda alguna, ya que es muy específica la forma en que se debe de seguir para poder ordenar el archivo de un expediente por inactividad procesal, y en la especie

tenemos que de los cinco requisitos antes detallados la autoridad señalada como responsable no satisfizo ninguno de éstos, y es que hay que darse cuenta que sustancialmente se estableció como requisitos esenciales el transcurso de tiempo de seis meses y la inactividad procesal, los cuales al no haberse colmado por parte de la responsable resulta por obvia inoperante el resto de los requisitos, ya que jamás transcurrió el término previsto por dichos numerales para poder iniciar dicho proceso, no omitiendo mencionar que en ningún momento resultaba necesario para la continuación del procedimiento, el hecho de que el hoy quejoso exhibiera documental con la que acreditara su identidad, ya que dicho requerimiento ni siquiera se encuentra previsto por las leyes que rigen el procedimiento laboral de origen, lo que se traduce en el que dicho requerimiento ya se encontraba dictado en contravención a los principios procesales y de forma específica al principio de legalidad que toda autoridad debe de observar por así establecerlo nuestra Carta Magna, y que cabe señalar que en ningún momento dicho requerimiento emanaba por haber detenido el juicio de origen ya que la responsable de todas formas tenía la obligación de ordenar los emplazamientos correspondientes, por lo que al no existir un hecho imputable al suscrito por virtud del cual se encontrara detenido el procedimiento nos encontramos ante un acuerdo a todas luces ilegal, carente de un debido sustento legal y violatorio de derechos humanos, resulta procedente la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal para que se deje sin efecto el acuerdo reclamado y se le restituya a mi representada en el goce de sus derechos humanos violados con la finalidad de que se reponga el procedimiento y le sea ordenado a la autoridad responsable requiera al suscrito debiéndole de apercibir que para el caso de que no se dé cumplimiento empezaría a correr el término previsto por el artículo 773 de la Ley Federal del Trabajo aplicable, emitiendo una resolución debidamente fundada y motivada y ordenen los emplazamientos pendientes por parte de la autoridad señalada como responsable.

"Por si lo anterior no fuese poco, resulta ilegal y contrario a derecho que la autoridad señalada como responsable pretenda tener por no cumplimentado el requerimiento realizado en acuerdo de fecha seis de mayo del año en curso, porque según su dicho el escrito presentado por el Lic. ***** (sic), carecía de la personalidad necesaria para promoverse, sin embargo omite observar que dicho apoderado anexa una carta poder debidamente requisitada con la cual solicita se le tenga por reconocida su personalidad en términos de los artículos 692 y 693 de la Ley Federal del Trabajo, motivo por el cual resulta por demás ilegal y contrario a derecho el desconocimiento de la personería del profesionista antes nombrado realizado por la autoridad de origen, derivado de que las leyes que rigen el procedimiento natural en ningún

momento prevén un límite de tiempo y una etapa procesal específica para poder comparecer a nombre del actor, acreditándolo con los medios e instituciones previstos por los mismos dispositivos legales, lo que una vez más evidencia las innumerables violaciones a los derechos realizados por el tribunal señalado como responsable.

"Sirve de aplicación para todos los conceptos de violación hechos valer:

"'PERSONALIDAD, PERSONERÍA, LEGITIMACIÓN E INTERÉS JURÍDICO, DISTINCIÓN.'

"'FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA.'

"'INADECUADAS FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ALCANCE Y EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR.'

"'FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR.'

"'FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. ARGUMENTOS QUE DEBEN EXAMINARSE PARA DETERMINAR LO FUNDADO O INFUNDADO DE UNA INCONFORMIDAD CUANDO SE ALEGA LA AUSENCIA DE AQUÉLLA O SE TACHA DE INDEBIDA.'

"'CADUCIDAD EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. NO OPERA CUANDO SU CONTINUACIÓN DEPENDE DE QUE LA AUTORIDAD PROVEA SOBRE LA ADMISIÓN DE PRUEBAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).'

"'CADUCIDAD EN MATERIA LABORAL.'

"(Transcribe textos de las citadas tesis).

"'SUPLENCIA DE LA QUEJA.'

"Por otro lado y con apoyo en lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, por ser el hoy recurrente parte actora dentro de un juicio laboral y que de forma concomitante con la tesis de jurisprudencia que a continuación se transcribe resulta procedente el beneficio de la suplencia de la queja deficiente a favor del hoy impetrante del amparo.

"SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN EL JUICIO DE AMPARO. PROCEDE CUANDO EL JUZGADOR ADVIERTA LA VIOLACIÓN DE DERECHOS HUMANOS.' (transcribe texto)."

SÉPTIMO.—Estudio del fondo del asunto.

Resultan fundados los conceptos de violación que adelante se precisan y suficientes para conceder el amparo solicitado, conforme a las razones de derecho que a continuación se expresan.

En dichos motivos de disenso el inconforme señala, en síntesis:

Que fue ilegal que el tribunal responsable desechara la demanda laboral bajo el argumento de que el actor aquí quejoso mostró una "falta de interés jurídico" al no exhibir la identificación que le fue requerida, no obstante que el artículo 129 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla no prevé tal aspecto como uno de los requisitos para promover un juicio laboral burocrático, por lo que resulta ilegal el desechamiento decretado en el acuerdo combatido.

Que el requisito exigido por la responsable consistente en que el actor se "identifique" al promover una demanda laboral, no se encuentra previsto en las leyes que rigen el procedimiento natural, por lo que el desechamiento de la demanda con base en ese requisito resulta violatorio del derecho humano de acceso a la justicia, al cual tiene derecho por ser ciudadano mexicano.

Que debe hacerse una interpretación *pro homine* para hacer respetar el derecho humano vulnerado, debido a que ni la Ley Federal del Trabajo ni la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla facultan a la responsable a realizar la prevención de mérito, menos a desechar la demanda y ordenar el archivo del asunto, con motivo de no desahogar tal prevención ilegal.

Que resulta absurdo que la autoridad responsable ordenara el archivo del expediente de origen por falta de interés jurídico, sin respetar los derechos humanos del quejoso, tal como se lo exige el artículo 1o. de la Constitución Federal.

Que solicita se le conceda el amparo para que se deje sin efecto el acuerdo reclamado y se le restituya en el goce de sus derechos humanos violados.

Los argumentos apenas sintetizados, como se adelantó, resultan fundados.

A manera de preámbulo conviene precisar brevemente los antecedentes que tienen especial relación con el problema jurídico a resolver.

Mediante escrito presentado el veintiuno de agosto de dos mil catorce ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, el aquí quejoso ***** demandó, por su propio derecho, del Ayuntamiento del Municipio de Teziutlán, Puebla y otros codemandados físicos, la reinstalación, salarios caídos y diversas prestaciones accesorias y autónomas, derivadas del despido injustificado del que dijo fue objeto.

Por acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil quince el tribunal responsable registró la demanda en el libro de gobierno respectivo –no la admitió– y requirió al actor en el siguiente sentido:

"...y a efecto de no transgredir tanto derechos procesales como derechos humanos, así como para tener por debidamente integrada la presente causa laboral y para un (sic) mejor proveer, y toda vez que de la literalidad del escrito inicial del demanda, en particular, en el segundo párrafo del punto número dos del capítulo de hechos, se recoge que el actor formula manifestación expresa en el sentido de: '...Es importante mencionar que el actor realizó una actividad de carácter permanente tal y como aparece en los recibos de pago mediante el cual consta el monto de su salario base, así como las prestaciones a que tiene derecho y que fueron pactadas por ella y/o por costumbre con los ahora demandados, por lo anterior la relación laboral sostenida entre el actor y los demandados debe considerarse como trabajador de base, ya que conforme a la actividad para la que fue contratado de ninguna forma existe una eventualidad para que se pudiese hacer valer una contratación de carácter temporal...' sin que en la especie hayan sido acompañados por el actor al escrito primigenio de demanda, los recibos de pago de referencia, ni como anexos, ni como pruebas; máxime que no se encuentra acreditada la personalidad del citado actor, por lo que con fundamento en los artículos 83, 85 y demás relativos y aplicables de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, así como 685 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley de la materia, y a efecto de no transgredir tanto derechos procesales como derechos humanos, así como para tener por debidamente integrada la presente causa laboral y para un (sic) mejor proveer, requiérase a la actora para que en el término de tres días posteriores a la notificación del presente proveído, exhiba ante esta autoridad laboral documento idóneo mediante el cual acredite su personalidad, apercibida que en caso de ser omisa al presente requerimiento se tendrá por no interpuesta la presente demanda..." (foja 9)

Posteriormente, el seis de mayo de dos mil quince, el tribunal responsable dictó un proveído en el que requirió nuevamente al actor en los siguientes términos:

"...Téngase por recibido el escrito de cuenta y por hechas las manifestaciones del promovente, y toda vez que de actuaciones se desprende que mediante proveído de veintisiete de marzo de dos mil quince, se requirió a la actora para que en el término de tres días contados a partir de la notificación del citado proveído, exhibiera ante esta autoridad documento idóneo mediante el cual acreditara su personalidad, con el apercibimiento de que en caso de no hacer manifestación alguna se le tendría por no interpuesta su demanda; téngase al ocurso, a través del escrito de cuenta, dando contestación parcial al requerimiento formulado; siendo dable aclarar a la actora que el requerimiento en cita fue en el sentido de que acreditara su identidad para efecto de que esta magistratura tenga la certeza de la persona que suscribe y signa el escrito primigenio de demanda es en efecto el C. *****; por lo que con fundamento en los artículos 685 y 735 de la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria a la ley de la materia requiérase nuevamente a la actora para efecto de que en el término de tres días contados a partir de la notificación del citado proveído presente ante esta autoridad laboral **documento idóneo por virtud del cual acredite su identidad**, apercibiéndole que de no hacerlo en el término concedido, se tendrá por no interpuesta la presente demanda..." (foja 34).

Finalmente, el veintidós de mayo del año en curso, el tribunal responsable dictó el acuerdo recurrido, que constituye el acto reclamado, mismo que ha quedado transcrito en apartados anteriores.

Tal proceder del tribunal responsable no sólo es ilegal, sino violatorio del derecho humano de acceso a la justicia, tutelado por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Así es, el artículo 85 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla establece los requisitos que debe contener una demanda laboral, en los siguientes términos:

"Artículo 85. La demanda deberá contener:

"I. El nombre y domicilio del reclamante.

"II. El nombre y domicilio del demandado.

"III. El objeto de la demanda.

"IV. Una relación de los hechos, y

"V. La indicación del lugar en que pueden obtenerse las pruebas que el reclamante no pudiere aportar directamente y que tengan por objeto la verificación de los hechos en que funde su demanda, y las diligencias cuya práctica solicite con el mismo fin.

"A la demanda acompañará las pruebas de que disponga y los documentos que acrediten la personalidad del representante, en su caso."

Del precepto en cita se advierte que no es un requisito legal para la procedencia y admisión de la demanda laboral el relativo a que el trabajador promovente "se identifique", como ilegalmente lo requirió el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, de hecho, no existe precepto alguno en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla o en la Ley Federal del Trabajo –de aplicación supletoria– que establezca tal requisito, por lo que puede decirse válidamente que el tribunal responsable estableció un requisito ilegal, a fin de no dar trámite a la demanda laboral promovida por el trabajador aquí quejoso, proceder que resulta claramente violatorio del derecho humano de acceso a la justicia.

En relación con la tutela de los derechos humanos y al que se vio vulnerado en el caso concreto, los artículos 1o. y 17 de la Constitución Federal, en su parte conducente establecen:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependen-

cia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, **el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley...**"

"Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho.

"Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales..." (énfasis añadido)

Por su parte, los artículos 8, numeral 1 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, adoptado por el Estado Mexicano en la ciudad de San José de Costa Rica el veintidós de noviembre de mil novecientos sesenta y nueve, cuyo decreto promulgatorio se publicó el siete de mayo de mil novecientos ochenta y uno en el Diario Oficial de la Federación, establecen:

"Artículo 8. Garantías Judiciales.

"1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un Juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter."

"Artículo 25. Protección Judicial.

"1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales.

"2. Los Estados partes se comprometen:

"a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;

"b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y

"c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso."

Ahora, la garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios:

1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes;

2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado;

3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y,

4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público.

Luego, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, como debió hacerlo el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla.

Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en

la página 209 del Tomo XXVI, octubre de 2007, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que consigna:

"ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.—La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales."

En ese contexto, como se adelantó, el proceder del Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla violó flagrantemente en perjuicio del actor aquí quejoso ***** el derecho humano de acceso a la justicia, al establecer arbitrariamente un requisito de "identificación del promovente" que ni la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla ni la Ley Federal del Trabajo —de aplicación supletoria— exigen para la admisión de una demanda, lo que motiva a conceder el amparo solicitado.

Sin que sea obstáculo a lo anterior que en el acuerdo recurrido la autoridad responsable haya requerido la "identificación del promovente" con fundamento en los artículos 83 y 94 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, pues el primero de los ordinales en cita se refiere a la forma en que se sustancia el procedimiento ante el Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, hasta el dictado del laudo respectivo; en tanto el segundo se refiere a la facultad que tienen los Magistrados integrantes del tribunal responsable para solicitar información y dictar diligencias para mejor proveer, antes del dictado del laudo respectivo; hipótesis distinta a la que ocupa a este asunto, en el cual ni siquiera se admitió a trámite la demanda laboral; por tanto, tales numerales tampoco facultan a la responsable a solicitar dicho requisito para la admisión de la demanda.

Por otra parte, aunadas a la aludida vulneración al derecho fundamental del quejoso, existen dos violaciones relacionadas con cuestiones de legalidad, cometidas con anterioridad al desechamiento de la demanda, mismas que hace valer el quejoso y en las que aduce, en síntesis:

Que en el escrito inicial de demanda el actor aquí quejoso autorizó a diversas personas para que lo representaran, lo que debió ser suficiente para tener por acreditada la personalidad, misma que fue desconocida por la autoridad responsable.

Que el trabajador aquí quejoso no tenía que exhibir con su demanda –como le exigió la responsable– documental alguna con la cual acreditar el vínculo laboral sostenido con el Ayuntamiento demandado, pues el estudio de la existencia del vínculo obrero patronal es materia del laudo que dirima las controversias que existan en el litigio y específicamente con la litis que se establezca con el escrito de contestación de demanda que en su momento realizará el representante legal de la parte demandada.

Los conceptos de violación apenas sintetizados son fundados.

Ciertamente, tal como lo destaca el inconforme, fue ilegal el que el tribunal responsable le haya requerido, en el acuerdo inicial de veintisiete de marzo de dos mil quince, los documentos tendentes a acreditar la relación laboral que adujo, pues el estudio de la existencia del vínculo obrero patronal será materia de estudio, en su caso –si se desconoce–, en el laudo que dirima las controversias que se establezcan en el litigio, especialmente con la litis que se establezca con el escrito de contestación de demanda que en su momento

realizará el representante legal de la parte demandada; de ahí que resulte ilegal tal requerimiento del tribunal responsable.

Asimismo, como también lo destaca el inconforme, resulta ilegal el proceder del tribunal responsable en el sentido de no reconocer la personalidad de los apoderados que señaló en el escrito inicial de demanda laboral.

Cierto, el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, prevé que las partes podrán comparecer a juicio en forma directa o por conducto de apoderado legalmente autorizado y, que cuando el compareciente actúe como apoderado de persona física, podrá hacerlo mediante poder notarial o carta poder firmada por el otorgante y ante dos testigos, sin necesidad de ser ratificada.

De lo anterior se sigue que el tribunal responsable, para analizar la personalidad de los apoderados del actor, sólo debe ceñirse a lo dispuesto por el numeral en cita, lo que también deberá ser materia de concesión de amparo.

En las relatadas condiciones, procede otorgar el amparo solicitado y, por ende, reponer el procedimiento laboral para que el tribunal responsable deje insubsistente el acuerdo de veintisiete de marzo de dos mil quince y, en su lugar, dicte otro en el que, conforme a los lineamientos de esta ejecutoria, admita a trámite la demanda laboral; prescinda de requerir al trabajador para que se identifique y exhiba los documentos que acrediten la relación laboral —porque la existencia de ésta será materia de la litis laboral que se entable con la contestación de la demanda— y, analice lo relativo a la personalidad de los apoderados que el actor señaló en el escrito inicial de demanda, conforme a lo dispuesto por el artículo 692 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla.

Así, al resultar fundados los mencionados conceptos de violación que motivaron a conceder el amparo en los términos apuntados, en especial para que se admitiera a trámite la demanda laboral del actor aquí quejoso, resulta innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación que giran en torno a que la caducidad en el juicio de origen es el único medio para archivar el expediente laboral, a la obligación de la responsable de ordenar el emplazamiento a los demandados y, los atinentes a la carga de probar de la parte patronal; ello debido a que, al concederse el amparo para que el tribunal responsable cese en la vulneración del derecho de acceso a la justicia del quejoso y admita la demanda laboral que promovió, aquellos aspectos

serán propios del procedimiento que se lleve a cabo con motivo de la admisión de la demanda; de ahí que resulte innecesario el estudio de dichos motivos de disenso.

Es aplicable la jurisprudencia 168, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 113 del Tomo VI, Materia Común del *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917-1995, que establece:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. CUÁNDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.—Si el amparo que se concede por uno de los capítulos de queja, trae por consecuencia que se nulifiquen los otros actos que se reclaman, es inútil decidir sobre éstos."

Por lo expuesto y fundado y, además, con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77 y 186 de la Ley de Amparo vigente, y 35 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a ***** contra el acto reclamado al Tribunal de Arbitraje del Estado de Puebla, consistente en el acuerdo de veintidós de mayo de dos mil quince dictado en el expediente laboral D. *****, por el que tuvo por no interpuesta la demanda laboral promovida por el aquí quejoso.

Notifíquese; publíquese y anótese en el libro de gobierno; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Samuel Alvarado Echavarría, Gloria García Reyes y Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Fue ponente el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DEMANDA LABORAL. EL REQUERIMIENTO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA QUE EL PROMOVENTE ACREDITE SU IDEN-

TIDAD, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE TENERLA POR NO INTERPUESTA, ES ILEGAL Y CONTRARÍA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

El artículo 85 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla establece los requisitos que debe contener una demanda: el nombre y domicilio del reclamante; el del demandado; el objeto de la demanda; una relación de los hechos; la indicación del lugar en que pueden obtenerse las pruebas que el reclamante no pudiese aportar directamente y que tengan por objeto la verificación de los hechos en que funde su demanda, y las diligencias cuya práctica solicite con el mismo fin. Además, deberán acompañarse las pruebas de que disponga y los documentos que acrediten la personalidad del representante, en su caso. Luego, si el Tribunal de Arbitraje del Estado formula al promovente de una demanda requerimiento para que acredite su identidad, bajo el apercibimiento de tenerla por no interpuesta de no cumplir con él, dicho proceder es ilegal, porque al margen de que el precepto invocado no le confiere tal facultad, también contraría el derecho humano de acceso a la justicia previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, traducido en que la administración de justicia debe ser pronta, completa, imparcial y gratuita.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.T. J/2 (10a.)

Amparo directo 387/2015. 10 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Alvarado Echavarría. Secretario: Rubén Laureano Briones del Río.

Amparo directo 385/2015. Martín Murrieta Murrieta. 18 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Gloria García Reyes. Secretario: Salvador Morales Moreno.

Amparo directo 386/2015. Dolores del Carmen Arroyo Ortega. 24 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretaria: Lydia Obdulia Castillo Pérez.

Amparo directo 436/2015. Irasema Ortega Hernández y otra. 16 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: Luis Rubén Baltazar Cedeño.

Amparo directo 522/2015. Jesús Enríquez Díaz. 29 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Samuel Alvarado Echavarría. Secretario: José Castillo Alva.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de febrero de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO.

AMPARO EN REVISIÓN 330/2015. 10 DE DICIEMBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ANTONIO SOTO MARTÍNEZ. SECRETARIO: JAVIER JULIO DÍAZ.

CONSIDERANDO:

III.—Análisis de la cuestión debatida.

Los quejosos-recurrentes omitieron expresar agravios en contra de la sentencia recurrida, por lo que este órgano colegiado procederá al análisis oficioso de la misma, de conformidad con lo dispuesto en la fracción III, inciso a), y penúltimo párrafo del artículo 79 de la Ley de Amparo, al tener el carácter de reos.

Así, es de precisarse que si bien los actos reclamados se hicieron consistir en la negativa de brindarles atención médica adecuada y de los medicamentos relativos, a los quejosos ***** y *****, de la gran cantidad de granos que le brotaron a la altura del tobillo y un orificio en la pierna derivado de un grano que le brotó, respectivamente (foja 3 del juicio de amparo), lo cierto es que se encuentra en controversia el derecho humano a la salud de los quejosos, cuya tutela implica que, en casos como el presente, la autoridad de amparo debe analizar todos los datos que se desprendan del juicio de amparo sin restricción alguna, a fin de obtener la completa interpretación de la voluntad de los amparistas y examinar la constitucionalidad del acto que aparezca probado, sin sujetarse al rigorismo de que precisa, y solamente sea tomado como acto reclamado el que como tal se haya expresado en la demanda, lo cual no significa integrar la acción que intente el gobernado, sino interpretar la voluntad de los quejosos, en cuanto a la resolución que reclaman.

Por lo cual, del contenido integral de los expedientes clínicos de los quejosos, que la autoridad responsable anexó como justificación de su informe (fojas 26 a 31 del juicio de amparo), se advierte que, por cuanto hace a *****, se le detectó una fístula con salida de agua de sangre purulenta

con rubor calor y mal olor con limitación al movimiento, solicitando el médico que lo atendió una radiografía para limitar la lesión, recetándole una dieta normal, aplicarle una inyección de Bencilpenicilina de un millón doscientas mil unidades cada veinticuatro horas por cinco días; Betametasona; Diclofenaco sódico, cada veinticuatro horas por cinco días; tomar una tableta de Metronidazol cada doce horas por siete días; tomar una tableta de Ibuprofeno cada doce horas por cinco días; curación cada tercer día y revisión de herida.

También se obtiene de la hoja de enfermería de tratamiento médico en módulo (foja 27 del juicio de amparo), que al citado quejoso, desde el dieciocho de mayo de dos mil quince al dos de junio de ese mismo año, se le suministró el citado tratamiento, sin evolución alguna, por así desprenderse de la última observación realizada.

En relación con el diverso quejoso ******, se le detectaron en ambos pies engrosamiento ungueal, cambios de coloración y descamación interdital con prurito intenso, diagnosticándosele herpes simple y onicomiosis severa/tiña pedís, por lo que se le recetó medidas higiénico-dietéticas; actividad física mínima; aplicar Terbinafina crema en ambos pies por treinta días; Ketoconazol por treinta días; aplicación de crema Ciclovir por diez días en zonas afectadas; tomar una tableta de Aciclovir cada ocho horas por diez días; tomar Destrostix de control cada ocho días por treinta días y Metamizol tabletas cada doce horas por cinco días.

De igual forma, también se obtiene de la hoja de enfermería de tratamiento médico en módulo (foja 31 del juicio de amparo), que al citado quejoso, desde el veintiocho de febrero de dos mil quince al tres de junio de ese mismo año, se le suministró el citado tratamiento, sin evolución alguna, por así desprenderse de la última observación realizada.

En las relatadas condiciones, el acto reclamado no sólo era la omisión de brindar atención médica a los quejosos, sino de la interpretación de la demanda de amparo, debió precisarse como acto reclamado, la debida atención médica especializada, máxime que del capítulo de antecedentes los impetrantes del amparo, exponen que sólo se les brinda atención médica de forma esporádica.

Ahora bien, del contenido del citado expediente médico que corresponde a los quejosos, que remitió la autoridad responsable, en copia certificada y que tiene valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en vigor, se observa que los reos-quejosos han sido atendidos en varias

ocasiones respecto de las afectaciones médicas señaladas, suministrándoles medicamentos.

Con lo expuesto, el Juez de Distrito consideró que a los ahora recurrentes se les ha proporcionado la atención médica, resolviendo que aunque la parte quejosa tuvo conocimiento del informe justificado de las autoridades responsables con la debida anticipación, no aportó prueba alguna para desvirtuar su negativa ni el contenido de las documentales que ofreció la responsable, por lo que sobreseyó en el juicio de amparo.

Tal determinación pone de manifiesto que no se atendió la demanda de amparo en su integridad, al dejarse de apreciar que a los internos quejosos no se les había proporcionado la atención médica adecuada en relación con los padecimientos antes citados, motivo por el que no se les tuteló su derecho humano de protección a la salud.

Lo anterior, porque si bien es cierto que en las notas médicas que aparecen en sus expedientes clínicos, concretamente las visibles a fojas 26 a 31 y 38 a 41 del juicio de amparo, se desprende que en diversas fechas se ha atendido a ***** y *****, de la gran cantidad de granos que le brotaron a la altura del tobillo y un orificio en la pierna derivado de un grano que le brotó, respectivamente, recetándoles tratamiento al respecto, no menos lo es que no se advierte que hubieren recibido la debida atención médica de manera continua con algún avance en su curación, máxime que a la fecha de interposición del recurso siguen manifestando que se encuentran enfermos de los mismos padecimientos que manifestaron en su demanda de amparo.

Además, de las notas médicas no se advierte que hubiere habido una mejoría ni mucho menos que se les hubiere dado de alta de sus enfermedades.

Asimismo, únicamente acredita la autoridad penitenciaria que entregó a *****, una crema de Recoverón, mas no así la entrega de todos los demás medicamentos que les fueron recetados a los internos.

En esa tesitura, procede revocar la negativa del amparo y, con fundamento en lo dispuesto en la fracción V del artículo 93 de la Ley de Amparo, este Tribunal se avoca a dictar la sentencia que corresponde.

Por ello, conviene señalar que los quejosos tienen reconocido a su favor el derecho fundamental de la salud, mismo que se encuentra protegido

tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en la legislación internacional.

Para demostrar lo anterior, cabe citar los artículos 1o., 4o. y 18 constitucionales, y que disponen lo siguiente:

"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece.

"Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

"Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes.

"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."

"Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia.

"Toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el espaciamiento de sus hijos.

"Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

"Toda persona tiene derecho a la protección de la salud. La ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta Constitución."

"Artículo 18. Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. El sitio de ésta será distinto del que se destinare para la extinción de las penas y estarán completamente separados.

"El sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos, del trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte como medios para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a delinquir, observando los beneficios que para él prevé la ley. Las mujeres compurgarán sus penas en lugares separados de los destinados a los hombres para tal efecto..."

Mientras que en los instrumentos internacionales, cabe resaltar la Carta Internacional de Derechos Humanos que contiene la Declaración Universal de los Derechos Humanos, misma que en su artículo 25, dispone que: "...Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial, la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes de su voluntad."

El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece, en su artículo 12, que los Estados Parte reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos prevé en su artículo 10, que toda persona privada de la libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano.

Por su parte, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre en su artículo XI dice: "...Toda persona tiene derecho a que su salud sea preservada por medidas sanitarias y sociales, relativas a la alimentación, el vestido, la vivienda y la asistencia médica, correspondientes al nivel que permitan los recursos públicos y los de la comunidad."

Asimismo, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales,

prevé en su artículo primero que toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

También cabe citar para lo que el caso requiere, el quinto principio básico para el tratamiento de reclusos aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 45/111, de catorce de diciembre de mil novecientos noventa, que dispone:

"5. Con excepción de las limitaciones que sean evidentemente necesarias por el hecho del encarcelamiento, todos los reclusos seguirán gozando de los derechos humanos y las libertades fundamentales consagrados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y cuando el Estado de que se trate sea parte, como México, en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su Protocolo Facultativo, así como los demás derechos estipulados en otros instrumentos de las Naciones Unidas."

Por su parte, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos en sus numerales 22, 24, 25, 26 y 62, prevén lo siguiente:

"...Servicios médicos

"22. 1) Todo establecimiento penitenciario dispondrá por lo menos de los servicios de un médico calificado que deberá poseer algunos conocimientos psiquiátricos. Los servicios médicos deberían organizarse íntimamente vinculados con la administración general del servicio sanitario de la comunidad o de la nación. Deberán comprender un servicio psiquiátrico para el diagnóstico y, si fuere necesario, para el tratamiento de los casos de enfermedades mentales. 2) Se dispondrá el traslado de los enfermos cuyo estado requiera cuidados especiales, a establecimientos penitenciarios especializados o a hospitales civiles. Cuando el establecimiento disponga de servicios internos de hospital, éstos estarán provistos del material, del instrumental y de los productos farmacéuticos necesario para proporcionar a los reclusos enfermos los cuidados y el tratamiento adecuados. Además, el personal deberá poseer suficiente preparación profesional. 3) Todo recluso debe poder utilizar los servicios de un dentista calificado."

"24. El médico deberá examinar a cada recluso tan pronto sea posible después de su ingreso y ulteriormente tan a menudo como sea necesario, en particular para determinar la existencia de una enfermedad física o mental, tomar en su caso las medidas necesarias; asegurar el aislamiento de los reclusos sospechosos de sufrir enfermedades infecciosas o contagiosas; señalar

las deficiencias físicas y mentales que puedan constituir un obstáculo para la readaptación, y determinar la capacidad física de cada recluso para el trabajo."

"25. 1) El médico estará (sic) de velar por la salud física y mental de los reclusos. Deberá visitar diariamente a todos los reclusos enfermos, a todos los que se quejen de estar enfermos y a todos aquellos sobre los cuales se llame su atención. 2) El médico presentará un informe al director cada vez que estime que la salud física o mental de un recluso haya sido o pueda ser afectada por la prolongación, o por una modalidad cualquiera de la reclusión."

"26. 1) El médico hará inspecciones regulares y asesorará al director respecto a: a) La cantidad, calidad, preparación y distribución de los alimentos; b) La higiene y el aseo de los establecimientos y de los reclusos; c) Las condiciones sanitarias, la calefacción, el alumbrado y la ventilación del establecimiento; d) La calidad y el aseo de las ropas y de la cama de los reclusos; e) La observancia de las reglas relativas a la educación física y deportiva cuando ésta sea organizada por un personal no especializado. 2) El director deberá tener en cuenta los informes y consejos del médico según se dispone en las reglas 25 (2) y 26, y, en caso de conformidad, tomar inmediatamente las medidas necesarias para que se sigan dichas recomendaciones. Cuando no esté conforme o la materia no sea de su competencia, transmitirá inmediatamente a la autoridad superior el informe médico y sus propias observaciones."

"62. Los servicios médicos del establecimiento se esforzarán por descubrir y deberán tratar todas las deficiencias o enfermedades físicas o mentales que constituyen un obstáculo para la readaptación del recluso. Para lograr este fin deberá aplicarse cualquier tratamiento médico, quirúrgico y psiquiátrico que se juzgue necesario."

El artículo 17 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social dispone:

"Artículo 17. Los titulares de los centros federales tendrán las funciones siguientes:

"A) De los CEFERESO:

"I. Dirigir la organización, administración y funcionamiento del CEFERESO, así como garantizar la custodia, permanencia y protección de los internos, visitantes y personal que labore en el mismo;

"II. Vigilar el respeto absoluto a las garantías individuales, los derechos humanos y la dignidad de los internos;

"III. Implantar las medidas necesarias para el tratamiento de los internos y garantizar la seguridad de visitantes y empleados en el CEFERESO;

"IV. ..."

Y finalmente, cabe resaltar para aplicar al caso, el principio 24 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 43/173, de nueve de diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, que dice: "Principio 24. Se ofrecerá a toda persona detenida o presa un examen médico apropiado con la menor dilación posible después de su ingreso en el lugar de detención o prisión y, posteriormente, esas personas recibirán atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario. Esa atención y ese tratamiento serán gratuitos."

Como puede apreciarse de la lectura de las anteriores transcripciones, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los instrumentos internacionales garantizan el derecho fundamental de la salud a todo ser humano, a cuyo reconocimiento se encuentra obligado cualquier servidor público o particular que actúe bajo la anuencia o tolerancia del primero, aun cuando se trate de un interno, pues la protección al derecho a la salud no se merma por encontrarse la persona privada de su libertad en un centro de readaptación social, sino que el Estado tiene la obligación de cuidar su protección, ya que incluso, las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos disponen que todo centro penitenciario debe tener un médico que velará por la salud física y mental de los reclusos, debiendo tratar todas las deficiencias o enfermedades físicas o mentales que constituyen un obstáculo para la readaptación del recluso y, por su parte, el principio 24 del Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión, establece que el interno debe recibir atención y tratamiento médico cada vez que sea necesario y de manera gratuita.

En el caso, como ha quedado precisado, los quejosos ***** y ******, tienen una gran cantidad de granos que le brotaron a la altura del tobillo y un orificio en la pierna derivado de un grano que le brotó, respectivamente, padecimientos que lejos de mostrar una mejoría, se han ido agravando, como lo refieren los citados internos, debido a que no se les da el debido seguimiento a sus afectaciones, sino que esporádicamente los curan y les suministran los medicamentos, sin llegar a erradicar sus males.

Ante ese panorama, se tiene que la autoridad responsable no ha aplicado los tratamientos médicos correspondientes, a pesar de existir diversas recomendaciones médicas en ese tenor.

Incluso, cabe destacar que en la notificación del proveído de diez de junio de dos mil quince (foja 32), los quejosos manifestaron que no les dan los tratamientos de manera completa, porque se los suspenden.

También *****, expone que tiene un hoyo bien feo en su muslo y que no le hacen curaciones; y *****, que tiene una infección en el pie izquierdo, sin que se lo chequen.

Sin embargo, no se advierte que la prescripción de los medicamentos y curaciones se les hayan realizado de manera correcta al grado de curarlos totalmente de sus infecciones, ya que se insiste, lejos de mostrar una mejoría manifiestan que se les ha ido agravando la enfermedad, lo cual pone de manifiesto que la autoridad penitenciaria no proporciona una debida atención médica, al no supervisar la evolución que pudieran tener los quejosos con el uso de los medicamentos supuestamente suministrados, circunstancia que no consta en autos.

Tampoco se opone a lo anterior, la circunstancia de que a los internos quejosos se le hayan otorgado diversos medicamentos para sus enfermedades, porque la obligación de: "la creación de condiciones que aseguren a todos asistencia médica y servicios médicos en casos de enfermedad", que se encuentra prevista en el artículo 12, numeral 2, inciso d), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, no se limita al acceso de atención por enfermedades ordinarias, sino al tratamiento apropiado de enfermedades, afecciones, lesiones y discapacidades, lo que desde luego abarca las medidas tendentes a otorgar, en la medida de lo posible, el diagnóstico adecuado, medicamentos y médicos especialistas, para el caso de que no llegaran a sanar con el tratamiento proporcionado por el médico del centro de reclusión y así evitarles mayores sufrimientos o, incluso, riesgos de desarrollar diversas afectaciones en la integridad de los reclusos-quejosos.

Por consiguiente, la autoridad responsable debió acreditar, con los exámenes médicos correspondientes, el estado de salud de los quejosos, los tratamientos médicos y el otorgamiento de medicinas o, incluso, intervenciones adecuadas que deban llevarse a cabo, para garantizar una debida actividad paliativa o curativa, en aras del respeto al derecho humano a la salud que aquéllos gozan. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 93, fracción V, de la Ley de Amparo, se revoca la sentencia recurrida y se concede la protección constitucional a los quejosos para el efecto de que la autoridad responsable proceda de inmediato a aplicarles los exámenes médicos correspondientes a fin de determinar el tipo de tratamiento médico adecuado

que requieren, atento a su particular condición de salud, así como velar por la protección de esa prerrogativa que tienen como todo ser humano, durante el tiempo que permanezcan a su disposición, de acuerdo con lo expuesto en esta ejecutoria.

Así, el cumplimiento de la sentencia de amparo implica que la autoridad responsable considere qué medida resulta más adecuada para poder brindar a los quejosos el tratamiento médico apropiado a sus padecimientos y, atento a su resultado, suministre los medicamentos o los insumos –al menos básicos y esenciales– para su adecuado tratamiento, en aras de preservar la calidad de vida de los reclusos, recabando constancia de ello, entendiéndose por esto, que deberá recabar las firmas de los internos de que recibieron la debida atención médica.

En caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada no resulte compatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guardan reclusión los quejosos, en virtud de involucrarse el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar las gestiones que estime pertinentes para que los quejosos sean atendidos en algún otro hospital o las clínicas del sector salud en el que puedan recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a sus padecimientos, a efecto de garantizarles el ya referido derecho a obtener el nivel adecuado de salud.

Lo anterior se estima así, porque el respeto al derecho a la salud únicamente se garantiza cuando se demuestra que el Estado ha utilizado todos los recursos que están a su disposición para satisfacer dicha necesidad elemental.

Al caso es aplicable la tesis 2a. CVIII/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 1192, «y en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas» que establece:

"SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. El artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales prevé obligaciones de contenido y de resultado; aquéllas, de carácter inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten sin discriminación y a que el Estado adopte dentro de un plazo breve medidas deliberadas, concretas y orientadas a satisfacer las obligaciones convencionales, mientras que las

de resultado o mediatas, se relacionan con el principio de progresividad, el cual debe analizarse a la luz de un dispositivo de flexibilidad que refleje las realidades del mundo y las dificultades que implica para cada país asegurar la plena efectividad de los derechos económicos, sociales y culturales. En esa lógica, teniendo como referente el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental contenido en el artículo 12 del citado Pacto, se impone al Estado Mexicano, por una parte, la obligación inmediata de asegurar a las personas, al menos, un nivel esencial del derecho a la salud y, por otra, una de cumplimiento progresivo, consistente en lograr su pleno ejercicio por todos los medios apropiados, hasta el máximo de los recursos de que disponga. De ahí que se configurará una violación directa a las obligaciones del Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de otra índole, para dar plena efectividad al derecho indicado."

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Se revoca la sentencia sujeta a revisión.

SEGUNDO.—Para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege a ***** y *****', en contra de los actos y de las autoridades que se puntualizan en el resultando primero de esta ejecutoria.

Notifíquese; personalmente a los quejosos mediante despacho que se gire al Juez de Distrito de Procesos Penales Federales en turno en el Estado, con sede en Cerro de León, Municipio de Villa Aldama, Veracruz; con testimonio de la presente resolución vuelvan los autos al lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así por unanimidad de votos de los Magistrados Juan Carlos Moreno Correa, Antonio Soto Martínez y Arturo Gómez Ochoa, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, firmando el primero de los nombrados como presidente y el segundo como ponente.

En términos de lo previsto en los artículos 8 y 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO.

El marco normativo que integran los artículos 1o., 4o. y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 25, numeral 1, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos; 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; 1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales "Protocolo de San Salvador"; 5 de los Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su resolución 45/111; 22, 24, 25, 26 y 62 de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos; y, 17 del Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, garantiza el derecho fundamental a la salud a todo ser humano, a cuyo reconocimiento está obligado cualquier servidor público, aun cuando se trate de un interno en un establecimiento penitenciario, pues su protección no se merma, sino que el Estado tiene la obligación de procurarla. En ese tenor, se han dispuesto las citadas Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos y el Conjunto de Principios para la Protección de Todas las Personas Sometidas a Cualquier Forma de Detención o Prisión. Por consiguiente, si el quejoso se encuentra recluso en un Centro Federal de Readaptación Social y no se le proporciona la atención médica que requiere, ello obliga al Juez de amparo a que, abordada la cuestión con plenitud y analizadas las implicaciones pronta y frontalmente, exija a la autoridad responsable que lo tenga a su disposición que acredite, con los exámenes médicos respectivos, el estado de salud de aquél, informando los datos que permitan identificar la atención médica que requiere, a fin de asegurar que la proporcionada es la que necesita, de acuerdo con su particular condición de salud, así como requerirle que proceda de inmediato a aplicarle los exámenes médicos correspondientes, para determinar el tipo de tratamiento médico adecuado que necesite, durante el tiempo que permanezca a su disposición. Lo anterior implica que la autoridad responsable considere qué medida es más conveniente para brindar al quejoso el trato médico apropiado a su padecimiento y, atento a

su resultado, suministre los medicamentos o insumos básicos y esenciales para su oportuno tratamiento, en aras de preservar la calidad de vida del recluso. Además, en caso de que se acredite fehacientemente que la opción más adecuada es incompatible con las políticas públicas en materia de salud implementadas por el centro penitenciario en que guarda reclusión el quejoso, en virtud de involucrarse el derecho humano a la salud, la autoridad responsable deberá realizar las gestiones pertinentes para que sea atendido en algún hospital o en las clínicas del sector salud donde pueda recibir su tratamiento en las condiciones adecuadas e idóneas a su padecimiento.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

VII.2o.P. J/2 (10a.)

Amparo en revisión 50/2015. 21 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Gómez Ochoa. Secretaria: Guadalupe Patricia Juárez Hernández.

Amparo en revisión 364/2014. 28 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Soto Martínez. Secretario: Javier Julio Díaz.

Amparo en revisión 184/2015. 30 de julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Gómez Ochoa. Secretario: Edgar Raúl Mendoza Ochoa.

Amparo en revisión 326/2015. 10 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Carlos Moreno Correa. Secretaria: Silvia Valeska Soberanes Sánchez.

Amparo en revisión 330/2015. 10 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Antonio Soto Martínez. Secretario: Javier Julio Díaz.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de febrero de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.

AMPARO EN REVISIÓN 74/2015. 1 DE OCTUBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: MANUEL ALEJANDRO MÉNDEZ ROMO, SECRETARIO DE TRIBUNAL AUTORIZADO PARA DESEMPEÑAR LAS FUNCIONES

DE MAGISTRADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 81, FRACCIÓN XXII, DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, EN RELACIÓN CON EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN V, DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, POR EL QUE SE EXPIDE EL SIMILAR QUE REGLAMENTA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CONSEJO; Y REFORMA Y DEROGA DIVERSAS DISPOSICIONES DE OTROS ACUERDOS GENERALES. SECRETARIO: CARLOS MAURICIO TORRES PEÑA.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Estudio del asunto. Se omite el estudio de la sentencia recurrida, de los agravios y su reproducción, en tanto que se advierte una violación manifiesta a las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio biinstancial, motivo por el cual, ha de revocarse el fallo impugnado y, por razón de la materia, la competencia para resolver en el mismo habrá de fincarse en el Juzgado de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit en turno.

A propósito de que la decisión jurídica tomada en un juicio de amparo por un Juez de Distrito incompetente por razón de materia, se traduce en una violación procesal, se invoca la jurisprudencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son:

"COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.—La competencia de la autoridad es una garantía de legalidad y de seguridad jurídica derivada del primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, es una cuestión de orden público, lo que aplicado al derecho procesal se traduce en la suma de facultades que la ley otorga al juzgador para ejercer su jurisdicción en determinado tipo de litigios, cuya inobservancia conduce a declarar inválido lo resuelto por el Juez incompetente. Por otra parte, de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, constitucionales, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional. En congruencia con lo anterior, se concluye que aquella competencia es un presupuesto de validez del proceso cuya infracción por los citados órganos jurisdiccionales al resolver un juicio de amparo sin tener competencia por razón de materia, se traduce en el desconocimiento de la voluntad del Constituyente y, por ende, de la del legislador que la desarrolla, lo que ocasiona que se violen las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo

en perjuicio de las partes, porque se les sujeta a la determinación proveniente de una autoridad que prorroga indebidamente su competencia y resuelve un juicio específico sin tener facultades para ello, afectando directamente los derechos sustantivos de aquéllas."²

Pese a que el criterio anterior se formó a partir de lo dispuesto en la Ley de Amparo abrogada, se invoca en el caso, puesto que el mismo no se opone a las normas previstas en la Ley de Amparo actual, lo cual guarda apego con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio³ de este último ordenamiento legal.

Para justificar lo que se anunció, tenemos que el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo dispone:

"Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes:

"...

"IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento; ..."

Conforme al artículo parcialmente transcrito, los Tribunales Colegiados –al conocer de los asuntos en revisión–, si advierten que en el juicio de amparo indirecto se incurrió en alguna acción u omisión que trasciende al resultado de la sentencia recurrida, la revocarán y habrán de ordenar reponer el procedimiento.

Por su parte, los artículos 107, fracción VII y 94, párrafo sexto, constitucionales establecen:

"Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes:

² P./J. 21/2009, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 5, registro digital: 167557.

³ "SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente ley."

" ...

"VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; ..."

"Artículo 94. ...

"El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

" ... "

De los artículos parcialmente transcritos, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional.

En congruencia con ello, el artículo 35, párrafo primero, de la Ley de Amparo vigente prevé:

"Artículo 35. Los Juzgados de Distrito y los Tribunales Unitarios de Circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto.

" ... "

En tanto que el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone:

"Artículo 51. Los Jueces de Distrito de amparo en materia penal conocerán:

"I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la

libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ..."

Los artículos transcritos disponen una regla general y otra especial, respectivamente. La primera en el sentido de que los Tribunales Unitarios y los Jueces de Distrito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto. La segunda en relación con que los Jueces de Distrito especializados en materia penal, deben conocer de los juicios biinstanciales que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal, contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo dispuesto en el artículo 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación excluye la posibilidad de que un Juez de Distrito especializado en materia penal conozca de los juicios de amparo indirecto donde se reclamen cualquiera de los actos señalados en los artículos 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,⁴ que establecen

⁴ "Artículo 52. Los Jueces de Distrito en materia administrativa conocerán:

"I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas;

"II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden;

"III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo;

"IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente;

"V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y

"VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

"Artículo 54. Los Jueces de Distrito de Amparo en Materia Civil conocerán:

los casos que son competencia de los Jueces de Distrito en materias administrativa, civil y de trabajo, además de que el legislador no puede regular el mismo supuesto en distintas hipótesis normativas.

En contexto con el marco normativo anterior, referente a los actos provenientes de autoridades administrativas que implican afectación a la libertad personal del ser humano, tenemos que el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha abandonado los criterios, en su momento sostenidos, en las jurisprudencias P/J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros:

"ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA."; y,

"ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA."

"I. De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

"II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil, en los términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

"III. De los asuntos de la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo que no estén enumerados en los artículos 51, 52 y 55 de esta ley; y

"IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia civil, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

"Artículo 55. Los Jueces de Distrito en Materia de Trabajo conocerán:

"I. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial, en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad laboral o de un procedimiento seguido por autoridad del mismo orden;

"II. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo;

"III. De los juicios de amparo que se promuevan en materia de trabajo, contra actos de autoridad distinta de la judicial;

"IV. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales de trabajo ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio; y

"V. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia de trabajo, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos."

El abandono de tales jurisprudencias obedeció a que con motivo de la entrada en vigor el diecinueve de junio de dos mil once, de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, ya no subsiste el contexto constitucional a partir del cual fueron sostenidas.

En su lugar, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional, se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local.

Por eso, consideró el Tribunal Pleno, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados, competen a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo cual conlleva un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que represente un obstáculo a tal criterio que la orden de traslado, motivo de reclamo en el juicio de amparo indirecto, haya sido dictada por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada.

Criterio que está inmerso en la jurisprudencia cuyos rubro y texto son:

"ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL.—El Tribunal Pleno y la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis jurisprudenciales P/J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008, de rubros: 'ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA.' y 'ORDEN DE TRASLADO DE UN CENTRO PENITENCIARIO A OTRO. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA POR UN SENTENCIADO, SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA', respectivamente, sostuvieron que los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa son competentes para conocer de los juicios de amparo promovidos contra la orden de traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro. Ahora bien, con motivo de

la entrada en vigor el 19 de junio de 2011 de la reforma a los artículos 18 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, ya no persiste el contexto constitucional bajo el cual fueron sostenidos dichos criterios, por lo que han quedado sin efectos. Lo anterior es así, pues con la entrada en vigor de dicha reforma constitucional se generó un cambio sustancial en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, sino a las autoridades judiciales y, en particular, a los Jueces de ejecución en materia penal, tanto en el ámbito federal como local, quienes deberán asegurar el cumplimiento de las penas y controlar las diversas situaciones que puedan producirse, así como las decisiones que sobre dicha ejecución pueda adoptar la administración penitenciaria. Por ello, el conocimiento y la solución de cualquier controversia al respecto, en la que participen los sentenciados compete a los Jueces de Distrito en Materia Penal, lo que implica un cambio fundamental en la vía que, de ser administrativa, se transforma en penal, sin que sea óbice a este criterio el hecho de que la orden de traslado que constituya el acto reclamado en un juicio de amparo hubiese sido emitida por una autoridad administrativa, dada la trascendencia de la reforma constitucional citada.¹⁵

En ese sentido, todos los eventos que durante la ejecución de la pena puedan surgir a partir de la mencionada reforma constitucional, quedan bajo la supervisión de la autoridad judicial en materia penal, tales como la aplicación de penas alternativas a la de prisión, los aspectos relacionados con los problemas que en su trato cotidianamente reciben los sentenciados, la concesión o cancelación de beneficios, la determinación de los lugares donde se debe cumplir la pena y situaciones conexas, generadas de la propia ejecución de la sanción.

Por tanto, cualquier controversia que se suscite por parte de los sentenciados, su conocimiento y solución deben corresponder a los Jueces de Distrito en Materia Penal.

En congruencia con lo anterior, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró que la interpretación realizada por el Tribunal Pleno respecto a que la autoridad judicial es la competente para autorizar

⁵ Publicada en la página 17, Libro XIII, Tomo I, octubre de 2012, Décima Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*.

el traslado de un sentenciado de un centro de reclusión a otro, debe extenderse a la orden de traslado que se emita en la fase o etapa del proceso.

Esto estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues el tiempo de la prisión preventiva es parte de la pena de prisión que se impone, toda vez que aquel lapso se resta a los años, meses y días de la pena que en definitiva se impone al sentenciado para cumplir. En ese sentido, si el periodo de duración de la prisión preventiva se resta de la pena impuesta en sentencia definitiva, entonces todo lo relacionado con las condiciones en que se lleve a cabo la prisión preventiva, como el lugar en donde estará preventivamente privado de su libertad, debe ser autorizado por el Juez del proceso o de la causa penal.

Tal criterio deriva de la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se identifica con el título, subtítulo y texto que siguen:

"TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a la competencia de la autoridad a la que corresponde ordenar el traslado de sentenciados en la etapa de ejecución de una sentencia penal, estableció que la reforma a los artículos 18 y 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, introdujo el modelo penitenciario de reinserción social y judicialización del régimen de modificación y duración de penas. Así, con la entrada en vigor de la reforma citada se generó un cambio sustancial, en el sentido de que actualmente no corresponde a las autoridades administrativas supervisar los medios utilizados para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y los eventos acontecidos durante el cumplimiento de las sentencias, como el traslado de internos, que corresponde a las autoridades judiciales. Ahora bien, esta Primera Sala del alto tribunal considera que la interpretación realizada por el Tribunal en Pleno respecto a que la autoridad judicial es la competente para autorizar el traslado de un sentenciado de un centro de reclusión a otro, debe extenderse a la orden de traslado que se emita en la fase o etapa de proceso, pues el tiempo de la prisión preventiva es parte de la pena de prisión que se impone, toda vez que aquél se resta a los años, meses y días de la pena que en definitiva se impone al sentenciado para cumplir. En ese sentido, si el periodo de duración de la prisión preventiva se resta de la pena impuesta en sentencia definitiva, entonces todo lo relacionado con las condiciones en que se lleve a cabo la prisión preventiva, como el lugar en donde estará preventivamente privado de su libertad, debe ser autorizado por el juez del proceso o de la causa penal. De ahí que la orden de traslado emitida por el director de un centro

de reclusión, cuando el interno se encuentre en prisión preventiva durante la etapa procesal del juicio, debe ser autorizada por el juzgador que instruya el proceso."⁶

También congruente con lo anterior, al resolver la contradicción de tesis 345/2011, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que el acta administrativa de imposición de correctivos disciplinarios, como la suspensión parcial o total de estímulos, la suspensión de las visitas familiar e íntima y la restricción de tránsito a los límites de la estancia del reo, pronunciada por el Consejo Técnico Interdisciplinario de un Centro Federal de Readaptación Social, independientemente de los motivos que se hayan considerado para ello, implica una restricción a la libertad de aquél dentro del contexto inherente a su condición de interno en un centro de reclusión, que atenta contra su libertad personal.

Decisión esta última de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 4/2011 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:

"CENTROS FEDERALES DE READAPTACIÓN SOCIAL. TÉRMINO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTA ADMINISTRATIVA DE IMPOSICIÓN DE CORRECTIVOS DISCIPLINARIOS EMITIDA POR SUS CONSEJOS TÉCNICOS INTERDISCIPLINARIOS.—El acta administrativa de imposición de correctivos disciplinarios, como la suspensión parcial o total de estímulos; la suspensión de las visitas familiar e íntima; y la restricción de tránsito a los límites de la estancia del reo, emitida por el Consejo Técnico Interdisciplinario de un Centro Federal de Readaptación Social implica, independientemente de los motivos que se hayan considerado para ello, una restricción a la libertad de aquél dentro del contexto inherente a su condición de interno en un centro de reclusión, que atenta contra su libertad personal, pues al encontrarse en esas condiciones se reduce la que, aun dentro de su encierro, podría tener; de ahí que el juicio de amparo promovido contra el acta relativa no está sujeto al término genérico, sino al caso de excepción previsto en la fracción II del numeral 22 de la Ley de Amparo, por lo que puede interponerse en cualquier tiempo, sin que se actualice la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 73 de la citada ley."⁷

⁶ 1a. CLXVI/2014, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 824, registro digital: 2006256 «y en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:52 horas».

⁷ 2a./J. 4/2011 (10a.), *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro III, Tomo 4, diciembre de 2011, página 2479.

Pues bien, en el juicio de amparo indirecto, el quejoso señaló como autoridades responsables y actos reclamados los siguientes:

"III. Autoridad responsable:

"Director del Centro Federal de Readaptación Social Número Cuatro 'Noroeste', ubicado en el Rincón, Tepic, Estado de Nayarit.

"IV. Actos reclamados:

"De la autoridad señalada como responsable, reclamo el negarme el adecuado servicio médico para la protección de mi salud, consistente en no darme medicamento alguno y la atención adecuada, ya que el dermatólogo que me atendió, en su diagnóstico, me proporcionaría un medicamento para la enfermedad que presento en mi cara, que hasta la fecha desconozco, ya que no he sido adecuadamente atendido y este padecer se agrava cada día más; por lo cual, pido se me brinde la atención necesaria o los estudios correspondientes para que el médico especialista en dermatología me haga del conocimiento qué enfermedad presenta mi persona. Así, con ello dicha autoridad está vulnerando mi garantía, consistente en tener derecho a la protección de la salud y atentando así contra mi integridad física.

"Por lo que hace a la autoridad señalada como ejecutora, el cumplimiento que la titular general del Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número 4 "Noroeste" a la orden emitida por la responsable ordenadora. Así vulnerando también mi garantía, consistente en tener derecho a la protección de la salud." (fojas 2 a la 10 del juicio de amparo indirecto)

Como se observa, el recurrente con la calidad de interno en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 'Noroeste' en el Estado de Nayarit, con sede en Tepic, y en ejercicio de sus derechos fundamentales, reclama de autoridades penitenciarias (administrativas) la falta de un tratamiento médico especializado.

Tales situaciones demuestran que los actos reclamados inciden en la salud del solicitante de amparo, si se atiende al contexto inherente a su condición de interno en dicho centro de reclusión, del cual se obtiene que, a su decir, no se le ha respetado su derecho fundamental referente a la salud, lo cual repercute, como se dijo, en su integridad física.

Ello, pues en el contexto jurisprudencial analizado, de ser ciertos dichos actos, podrían implicar una restricción a la libertad del quejoso en el entorno

referente a su condición de interno en tal centro de reclusión, que atentan contra su libertad personal, pues al encontrarse resintiendo ataques al señalado derecho fundamental, se reduce la que, dentro de su encierro, podría tener; es decir, pese a que el quejoso se encuentra recluso, los actos motivo de reclamo pueden traer consigo una mayor restricción al derecho fundamental de la libertad de la cual ya es objeto por su situación de recluso.

Por esas razones, con fundamento en los artículos 35 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la competencia para pronunciarse en torno a la existencia de los actos reclamados, sobre la procedencia del juicio de amparo indirecto y en todo caso respecto a si los actos motivo de reclamo infringen o no el aludido derecho fundamental, corresponde al Juez de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit en turno.

Lo anterior, aunque los actos reclamados provengan de autoridades administrativas (penitenciarias), y con independencia de si el solicitante de amparo tiene la calidad de procesado o de sentenciado (de constancias no se advierte fehacientemente ni una ni otra de dichas circunstancias), ya que como lo ha decidido la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), transcrita en este fallo, e identificada en el pie de página seis (6), la prisión preventiva también forma parte de la pena y todos los eventos sucedidos durante el cumplimiento de las sentencias, así como las decisiones que sobre su ejecución adopte la administración penitenciaria, deben ser del conocimiento de las autoridades jurisdiccionales en materia penal, incluidas las que ejercen el control de la constitucionalidad de los actos de autoridad, supuesto este último que como se vio en el caso se actualiza.

Por consiguiente, con motivo de que la sentencia recurrida se pronunció por el Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, que en razón de la materia carece de facultades jurídicas especiales para resolver al respecto, situación que además no debe postergarse con base en el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, se revoca únicamente dicha determinación.

En consecuencia, se ordena enviar los autos que conforman el juicio de amparo indirecto *****, promovido por el recurrente, a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nayarit, para que conforme al sistema al efecto establecido lo haga llegar al Juez de Distrito en la misma materia en turno. Decisión que habrá de comunicarse al Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo contenido es:

"COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EN LA REVISIÓN EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIERTE QUE EL JUEZ DE DISTRITO QUE RESOLVIÓ EL JUICIO DE AMPARO CARECÍA DE AQUÉLLA, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.—Tomando en consideración que de la interpretación sistemática de los artículos 107, fracción V y 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se infiere que la competencia especializada por razón de materia de los Juzgados de Distrito está elevada a rango constitucional, y siguiendo los lineamientos establecidos en la jurisprudencia P/J. 8/2001, de rubro: 'COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SI NO LA DECLINA PESE A QUE LA AUTORIDAD RESPONSABLE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGÓ EL ACTO RECLAMADO Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, AL ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIÓN, YA POR EL PLANTEAMIENTO DEL INCONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR LA SENTENCIA Y REMITIR LOS AUTOS AL JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.', se concluye que cuando un Tribunal Colegiado de Circuito, al conocer de un amparo en revisión, advierta que el Juez de Distrito que conoció del juicio de garantías y dictó la sentencia respectiva, era incompetente por razón de materia para resolverlo, con independencia de la responsabilidad en la que este último pudo haber incurrido, debe revocar aquélla y remitir los autos al Juez especializado que considere competente, con fundamento en los artículos 91, fracción IV y 94 de la Ley de Amparo, por haber violado las reglas fundamentales que norman el procedimiento respectivo. Además, el mencionado órgano colegiado deberá señalar que la nulidad de actuaciones se produce respecto del fallo dictado por el Juez de Distrito incompetente y no así por lo que hace a la audiencia constitucional, puesto que atendiendo a una interpretación armónica de los preceptos que regulan la competencia por materia de dichos órganos jurisdiccionales, acorde con el principio de administración de justicia de manera pronta, completa e imparcial, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se deduce que dicho principio es dominante respecto de la declaración de invalidez total, aunado a que la nulidad general de lo actuado por un Juez incompetente no es una regla estricta, sino que admite salvedades según se disponga en la ley, como las contenidas en los artículos 53 y 54 de la Ley de Amparo, relativas a que son válidas las decisiones del Juez incompetente que atañen al incidente de suspensión. Lo anterior, sin menoscabo de la facultad que tiene el Juez competente para regularizar el procedimiento y, en su caso, en alcance de la resolución del Tribunal Colegiado, dejar insubsistente la audiencia constitucional celebrada por el Juez incompetente u otras actuaciones precedentes,

cuando advierta alguna irregularidad que impida que el juicio de amparo se integre adecuadamente para su solución."⁸

Pese a que el criterio anterior se formó a partir de la interpretación de la hipótesis contenida en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo abrogada, se invoca en el caso, puesto que tal disposición está inmersa sustancialmente en el artículo 93, fracción IV,⁹ de la Ley de Amparo actual, conforme se advierte de la redacción de este último.

En el entendido de que el Juez de Distrito en Materia Penal que por razones de turno le corresponda resolver en el juicio de amparo indirecto, habrá de reconocer la validez de las etapas celebradas por el Juez de Distrito incompetente, entre ellas, la audiencia constitucional, y proceder a dictar la sentencia correspondiente, sin menoscabo de la facultad con la que cuenta para regularizar el procedimiento y, en su caso, dejar insubsistente la referida audiencia constitucional u otras actuaciones precedentes, cuando advierta alguna irregularidad que le impida decidir jurídicamente.

Al efecto, se invoca la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del contenido que sigue:

"AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CUANDO EN UN JUICIO DE AMPARO UN JUEZ SE PRONUNCIA SOBRE LAS PRUEBAS Y ALEGATOS PERO, POR UNA INCOMPETENCIA SUPERVENIENTE, EL ASUNTO SE REMITE A UN JUZGADOR DIVERSO, ATENTO AL PRINCIPIO DE UNIDAD QUE RIGE A AQUÉLLA, ÉSTE DEBE, POR REGLA GENERAL LIMITARSE A RECONOCER LA VALIDEZ DE LAS ETAPAS CELEBRADAS ANTE EL PRIMERO Y DICTAR LA SENTENCIA CORRESPONDIENTE.—Los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 155 de la Ley de Amparo, señalan que la audiencia constitucional y la sentencia respectiva habrán de llevarse a cabo en un acto

⁸ P./J. 22/2009, *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIX, abril de 2009, página 6, registro digital: 167556.

⁹ "Artículo 91. El Tribunal en Pleno, las Salas de la Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiados de Circuito, al conocer de los asuntos en revisión, observarán las siguientes reglas:

"...

"IV. Si en la revisión de una sentencia definitiva, en los casos de la fracción IV del artículo 83, encontraren que se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, o que el Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del juicio en primera instancia, incurrió en alguna omisión que hubiere dejando sin defensa al recurrente o pudiese influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva, revocarán la recurrida y mandarán reponer el procedimiento, así como cuando aparezca también que indebidamente no ha sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley; y..."

procesal continuo, integrado por etapas establecidas, pero no ordenan que ello ocurra ante el mismo juzgador. Por tanto, cuando en un juicio de amparo un Juez conoce de las dos primeras etapas de la audiencia constitucional, esto es, el ofrecimiento y desahogo de las pruebas y la recepción de alegatos, pero por la declaración superveniente de incompetencia el asunto se remite a un juzgador diverso, atento al principio de unidad de la audiencia, por regla general y salvo que advierta irregularidades que subsanar, este debe limitarse a reconocer la validez de las etapas ya celebradas ante el otro juzgador y dictar la sentencia que en derecho proceda. Ello es así porque la indicada unidad no es subjetiva, es decir, no significa que deba tratarse del mismo Juez, sino que es objetiva y material en tanto que implica que se trata de un solo acto procesal cuya validez requiere la celebración de sus tres etapas (pruebas, alegatos y sentencia). Además, dada la naturaleza unilateral del dictado de la sentencia, nada impide que se dicte sin trastocar lo actuado en juicio. Lo anterior se fortalece atento al principio constitucional de justicia pronta y expedita que, aplicado analógicamente al juicio de amparo, conlleva la necesidad de evitar diligencias innecesarias que puedan retrasar ociosamente un procedimiento.¹⁰

Finalmente, no se soslaya que por acuerdo tomado en sesión de veintiséis de septiembre de dos mil catorce, se pronunció ejecutoria en el amparo en revisión 199/2014, del índice de este Tribunal Colegiado, donde un interno del referido centro de reclusión reclamó actos de similar naturaleza a los ahora impugnados por el recurrente, y además de que se decidió confirmar, por unanimidad, la sentencia del Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, mediante la cual decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo indirecto.

Criterio respecto del cual este órgano colegiado se aparta por las razones expuestas en este considerando; consecuentemente, se adopta la decisión asumida en este fallo.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Se revoca la sentencia recurrida.

SEGUNDO.—Se declara legalmente competente al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit, en turno, para resolver en el juicio de amparo indirecto *****, promovido por *****, para lo cual

¹⁰ 1a./J. 36/2009, publicada en la página 43, Tomo XXIX, junio de 2009, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*.

se ordena enviarle los autos que integran el mismo. Lo anterior debe comunicarse al Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit.

TERCERO.—Envíese el juicio de amparo a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal para que lo haga llegar al Juez de Distrito en la misma materia, en turno.

Notifíquese; engrósese el fallo en el término legal; anótese en el libro de registro correspondiente; con testimonio de esta resolución remítanse los autos a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Nayarit y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto total y definitivamente concluido.

Así lo resolvió este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, por unanimidad de votos de los Magistrados Germán Martínez Cisneros y David Pérez Chávez, así como Manuel Alejandro Méndez Romo, secretario en funciones de Magistrado en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, siendo presidente el primero, y ponente el último de los mencionados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Nota: Las tesis de jurisprudencia P/J. 37/2010 y 1a./J. 128/2008 citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXI, abril de 2010, página 7 y Tomo XXIX, marzo de 2009, página 228, respectivamente.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO. Conforme lo

estableció la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CLXVI/2014 (10a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 25 de abril de 2014 a las 9:32 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 824, de título y subtítulo: "TRASLADO DE PROCESADOS. LA ORDEN RELATIVA, DEBE AUTORIZARLA EL JUEZ QUE INSTRUYA LA CAUSA PENAL.", la prisión preventiva también forma parte de la pena, y todos los eventos sucedidos durante el cumplimiento de las sentencias, así como las decisiones que sobre su ejecución adopte la administración penitenciaria, deben ser del conocimiento de las autoridades jurisdiccionales en materia penal, incluidas las que ejercen el control de constitucionalidad de los actos de autoridad. En congruencia con dicho criterio, cuando en un juicio de amparo indirecto se reclamen actos que incidan en la falta de atención médica adecuada de un interno en un centro de reclusión, la competencia para conocer de aquél se surte a favor de un Juez de Distrito en Materia Penal, de conformidad con los artículos 35 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Lo anterior, aun cuando dicho acto reclamado provenga de una autoridad formalmente administrativa (penitenciaria), y con independencia de que el interno tenga la calidad de procesado o sentenciado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO.
XXIV.2o. J/1 (10a.)

Amparo en revisión 313/2014. 12 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Secretario: Juan Antonio Moreno Vela.

Amparo en revisión 449/2014. 25 de junio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Alejandro Méndez Romo, secretario de tribunal autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Secretario: Humberto Salcedo Salcedo.

Amparo en revisión 227/2015. 30 de julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Alejandro Méndez Romo, secretario de tribunal autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Secretario: Roberto Martínez Flores.

Amparo en revisión 444/2014. 31 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Alejandro Méndez Romo, secretario de tribunal autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Secretario: Carlos Mauricio Torres Peña.

Amparo en revisión 74/2015. 1 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Manuel Alejandro Méndez Romo, secretario de tribunal autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Secretario: Carlos Mauricio Torres Peña.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 29 de febrero de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR VICIOS FORMALES, AUN CUANDO SE SUSTENTEN EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 150/2010 Y 2a./J. 88/2011).

REVISIÓN ADMINISTRATIVA (LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) 87/2015. DIRECTOR GENERAL DE LO CONTENCIOSO Y DE RECURSOS DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DEL CONSUMIDOR. 22 DE OCTUBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: ENRIQUE VILLANUEVA CHÁVEZ. SECRETARIO: RAMÓN LOZANO BERNAL.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Procedencia.

Es innecesario analizar las consideraciones de la sentencia recurrida y los agravios expresados por la autoridad, en razón de que este Tribunal Colegiado observa que el presente recurso de revisión fiscal es improcedente.

Al efecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que el recurso de revisión fiscal tiene un carácter excepcional, por lo cual, existen

temas que no ameritan estudiarse por el Tribunal Colegiado al resolverlo, lo que lleva a declarar su improcedencia.

Así es, al resolverse la contradicción de tesis 256/2010, por la Segunda Sala del Alto Tribunal, se determinó lo siguiente:

"De lo hasta aquí expuesto, se puede advertir que la intención del legislador fue dotar a dicho medio de defensa de un carácter excepcional en cuanto a su procedencia, reservándola únicamente a ciertos casos que por su cuantía, o por la importancia y trascendencia que revistan los asuntos que se pretenden revisar a través de su interposición, ameriten la instauración de una instancia adicional.

"...

"En congruencia con el anterior criterio, se concluye que si la instauración del recurso de revisión fue creada con la intención de que tal instancia fuera procedente sólo en casos excepcionales, éste será improcedente en los supuestos en que la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, detectó la carencia de fundamentación y motivación del acto impugnado.

"Lo anterior obedece a que la Sala resolutora, en ese tipo de sentencias, no emite pronunciamiento alguno que implique la declaración de un derecho ni la inexigibilidad de una obligación, ya que no resuelven respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino que solamente se limitan al análisis de la posible carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal, como son la fundamentación y la motivación.

"...

"De esa manera, se reserva a los tribunales federales, el conocimiento de aquellos asuntos en que por su importancia y trascendencia, lo resuelto en éstos tenga un impacto en las materias que el legislador consideró importantes, de acuerdo con el catálogo a que se contrae el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo."

De la ejecutoria se destacan los siguientes puntos:

a. Por decisión del legislador, la revisión fiscal tiene un carácter excepcional;

b. Dada esa característica, el recurso será improcedente en los supuestos en que se detecte por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la carencia de fundamentación y motivación del acto impugnado;

c. En este tipo de sentencias, no existe pronunciamiento que implique la declaración de un derecho ni la inexigibilidad de una obligación;

d. El estudio de tales aspectos (vicios formales) debe confiarse plenamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin necesidad de una revisión posterior; y,

e. Se reserva a los tribunales federales el conocimiento de aquellos asuntos en que, por su importancia y trascendencia, lo resuelto en éstos tenga un impacto en las materias que el legislador consideró importantes.

De la contradicción de tesis citada derivó la jurisprudencia, de rubro siguiente:

"Novena Época

"Registro: 163273

"Instancia: Segunda Sala

"Jurisprudencia

"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

"Tomo XXXII, diciembre de 2010

"Materia administrativa

"Tesis: 2a./J. 150/2010

"Página: 694

"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."

Posteriormente, la propia Segunda Sala del Alto Tribunal, en la contradicción de tesis 136/2011, definió que la citada jurisprudencia 150/2010 es aplicable a todos los supuestos materiales que consigna el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. Parte de esa ejecutoria es la siguiente:

"En ese sentido, dado que en la ejecutoria en cuestión, esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no se constriñó a resolver la problemática sometida a su consideración relativa a si procede o no el recurso

de revisión fiscal contra las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que sólo declaren la nulidad de una resolución dictada en materia de aportaciones de seguridad social por vicios formales, como lo es la indebida fundamentación y motivación, sino que el criterio que emitió abarcó a todos los casos en que se declare la nulidad de una resolución por vicios formales con independencia de su materia, es evidente que la jurisprudencia de que se trata no es aplicable únicamente en la materia de aportaciones de seguridad social, sino en todos los supuestos previstos en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en que se declare la nulidad de la resolución impugnada en un juicio contencioso administrativo por vicios formales, es decir, por razones que no entrañan un pronunciamiento de fondo, porque en esa hipótesis no se está ante un caso importante y trascendente."

De lo cual deriva que el Alto Tribunal reiteró la improcedencia del recurso de revisión fiscal, cuando se declare la nulidad del acto impugnado por vicios formales; esto es, por razones que no entrañan un pronunciamiento de fondo. Lo cual se observa de la jurisprudencia siguiente:

"Novena Época

"Registro: 161191

"Instancia: Segunda Sala

"Jurisprudencia

"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

"Tomo XXXIV, agosto de 2011

"Materia administrativa

"Tesis: 2a./J. 88/2011

"Página: 383

"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010)."

Este criterio fue reflejado, nuevamente, al resolver la contradicción de tesis 209/2012, en cuyo aspecto toral se expuso:

"En esa línea argumentativa resulta innegable que si se actualizó la figura de la caducidad en el procedimiento administrativo, que dio lugar a declarar

la nulidad lisa y llana de las resoluciones reclamadas; luego, el recurso de revisión fiscal previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no es procedente, pues no se colman los requisitos de importancia y trascendencia que se exigen, en virtud de que la actualización de la caducidad no implica la declaración de un derecho, ni la exigibilidad de una obligación, dado que como se explicó, al haber considerado la Sala Fiscal que operaba la caducidad, es indiscutible que no resolvió respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, esto es, no emitió una resolución de fondo, toda vez que sólo concluyó que las facultades de la autoridad demandada para imponer la responsabilidad impuesta, habían caducado al no haber dictado resolución dentro del plazo legal."

Así, dicha Segunda Sala, en la misma línea en que resolvió las otras dos contradicciones de tesis mencionadas, determinó que la actualización de la caducidad no implica la declaración de un derecho ni la exigibilidad de una obligación, dado que no se resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, esto es, no se emitió una resolución de fondo, por lo cual, el recurso de revisión fiscal deviene improcedente.

Esto se advierte de la jurisprudencia resultante, de rubro y texto siguientes:

"Décima Época

"Registro: 2002195

"Instancia: Segunda Sala

"Jurisprudencia

"Fuente: *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*

"Libro XIV, Tomo 2, noviembre de 2012

"Materia administrativa

"Tesis: 2a./J. 118/2012 (10a.)

"Página: 1487

"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR HABER OPERADO LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN.—La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2a./J. 150/2010 y 2a./J. 88/2011, sostuvo que el recurso de revisión fiscal es improcedente cuando se interpone contra sentencias que decreten la nulidad del acto administrativo impugnado por vicios formales y por no colmar los requisitos de importancia y trascendencia, pues en esos supuestos no se emite una resolución de fondo al no declararse un derecho

ni exigirse una obligación, al margen de la materia del asunto. En este sentido, los referidos criterios son aplicables cuando la sentencia que declara la nulidad lisa y llana obedece a que se actualizó la figura de la caducidad en el procedimiento administrativo de origen, en términos de lo previsto en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues en este supuesto no se resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso y no se emite un pronunciamiento de fondo en el que se declare un derecho o se exija el cumplimiento de una obligación; de manera que el requisito de excepcionalidad previsto en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no se satisface, lo que torna improcedente el medio de defensa intentado."

Ahora bien, en el caso no existe, por parte de la Sala, un pronunciamiento de fondo, sino de forma, que hace improcedente el presente recurso en términos de las jurisprudencias 2a./J. 150/2010, 2a./J. 88/2011 y 2a./J. 118/2012 (10a.).

En efecto, la Sala resolvió en su sentencia (después de desestimar la causa de improcedencia de extemporaneidad), como un primer vicio detectado, que en la orden de verificación ordinaria, dictada en el expediente ***** , de cuatro de febrero de dos mil catorce, emitida por el delegado de la Procuraduría Federal del Consumidor en Villahermosa, Tabasco, para efecto de fundar y motivar suficientemente su competencia material, se omitió citar el artículo 40, fracción IV, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y los puntos 9 y 14 de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-002-SCFI-2011, NOM-008-SCFI-2002, NOM008-SESH-2010 y NOM-011/1SEDG-1999, como se advierte del siguiente extracto de la sentencia:

"De los preceptos legales recién transcritos, si bien se desprende que la autoridad demandada trata de fundar y motivar suficientemente su competencia material para verificar el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, así como para, en su caso, imponer sanciones al respecto, también se evidencia que la autoridad omitió señalar el artículo 40, fracción IV, de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, y los puntos 9 y 14 de las Normas Oficiales Mexicanas NOM-002-SCFI-2011 Productos preenvasados –contenido neto– tolerancias y métodos de verificación; NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida; NOM-008-SESH-2010 Recipientes transportables para contener gas L.P. Especificaciones de fabricación, materiales y métodos de prueba, y NOM-011/1-SEDG-1999 Condiciones de seguridad de los recipientes portátiles para contener gas L.P. en uso, que a la letra disponen lo siguiente:

"...

"Por tanto, si dentro del objeto de la orden de verificación se estableció el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor y la comercialización del producto preenvasado, gas licuado de petróleo y los recipientes transportables, con base en lo previsto en las Normas Oficiales Mexicanas NOM-002-SCFI-2011 Productos preenvasados –contenido neto– tolerancias y métodos de verificación; NOM-008-SCFI-2002 Sistema General de Unidades de Medida; NOM-008-SESH-2010 Recipientes transportables para contener gas L.P. especificaciones de fabricación, materiales y métodos de prueba, y NOM-011/1-SEDG-1999 Condiciones de seguridad de los recipientes portátiles para contener gas L.P. en uso, publicadas en el Diario Oficial de la Federación los días 10 de agosto de 2012, 27 de noviembre de 2002, 21 de diciembre de 2010 y 30 de marzo de 2000; ante ello, la demandada debió citar el fundamento legal que le faculta para verificar el cumplimiento de dichas normas oficiales mexicanas."

En la sentencia recurrida también se determinó la existencia de un segundo vicio, consistente en la caducidad del procedimiento administrativo, en contravención al artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, en los siguientes términos:

"Con fecha 18 de febrero de 2014, emplazó a la actora, por tanto, el término de 10 días hábiles para que realizara sus manifestaciones por escrito y ofreciera las pruebas que considerara convenientes (de conformidad con lo dispuesto por el artículo 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor), transcurrieron (sic) dicho plazo del 19 de febrero al 4 de marzo de 2014; posteriormente, la actora, conforme a lo señalado en el acuerdo emitido el 7 de marzo de 2014, contaba con el término de 2 días hábiles para formular sus alegatos, transcurriendo dicho plazo del 10 al 11 de marzo de 2014; la autoridad, a partir de esa fecha, contaba con el término de 15 días para emitir la resolución correspondiente (artículo 123 de la Ley Federal de Protección al Consumidor), transcurrido el cual y pasados los treinta días contados a partir de la expiración de dicho plazo, caducaba el procedimiento y, por tanto, existía impedimento legal para emitir la sanción, por lo que si en el presente caso, el 27 de marzo de 2014 (fuera del plazo establecido por la ley), emitió la resolución correspondiente, y el día 18 de septiembre de 2014 la actora tuvo conocimiento de la misma (tal como quedó acreditado en el considerando tercero del presente fallo), es evidente que la autoridad violó lo previsto en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, pues emitió el acto después de la expiración del plazo con que contaba para dictar y notificar la resolución correspondiente en el procedimiento administrativo, con motivo de la orden de visita de verificación de fecha 4 de febrero de 2014.

"En efecto, la autoridad contaba con el plazo de 15 días contados a partir del día siguiente al 11 de marzo de 2014, fecha en que feneció el término para que la accionante formulara sus alegatos, plazo que concluyó el día 2 de abril de 2014, por lo que es a partir de esa fecha cuando empezaron a computarse los 30 días para considerar caduco el procedimiento, actualizando la imposibilidad para emitir y notificar su resolución, plazo que transcurrió del 3 de abril al 20 de mayo de 2014 (descontando los días inhábiles, como son los sábados y domingos, conforme lo establece el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; así como los días 17 y 18 de abril de 2014 y 1o. y 5 de mayo de 2014, al haber sido declarados inhábiles, según el artículo 1o. del Acuerdo por el que se suspenden las labores de la Procuraduría Federal del Consumidor los días 17 y 18 de abril de 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 14 de abril de 2014, y el artículo primero del Acuerdo por el que se suspenden las labores de la Procuraduría Federal del Consumidor en los días que se indican, para el año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 17 de febrero de 2014); por lo que, si la demandada, con fecha 27 de marzo de 2014, emitió la resolución sancionadora, y el 18 de septiembre de 2014 la demandante tuvo conocimiento de la misma, es evidente que a esta última fecha ya había transcurrido en exceso el plazo previsto en el artículo 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, para que la autoridad emitiera y notificara la resolución correspondiente."

De lo hasta aquí expuesto deriva que ninguno de los dos vicios detectados por la Sala son de fondo, sino formales, pues uno consiste en la insuficiente fundamentación y motivación de la competencia material de la autoridad emisora de la orden de verificación, al dejar de citar un artículo y varios puntos de normas oficiales mexicanas; el otro, en la caducidad del procedimiento administrativo, que se configuró en términos del numeral 60 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, ya que la autoridad administrativa excedió el plazo legal para emitir y notificar la resolución que puso fin a dicho procedimiento.

Luego, en función de que uno de los vicios puesto en evidencia por la Sala, se traduce en la insuficiente fundamentación y motivación en relación con la competencia material en la orden de verificación, es válido concluir que al caso es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 150/2010, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN."; en tanto, como el diverso vicio es la caducidad del procedimiento administrativo, surte aplicación el criterio obligatorio 2a./J. 118/2012 (10a.), intitulado: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE

CONTRA LAS SENTENCIAS QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR HABER OPERADO LA CADUCIDAD DEL PROCEDIMIENTO DE ORIGEN."

Entonces, en el presente caso el recurso es improcedente, porque en la sentencia no existe una decisión de fondo.

Es oportuno aclarar que al margen de que las tres multas anuladas asciendan a la cantidad total de ***** (lo que hace que pudiera ubicarse en el supuesto de la fracción I del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo), lo relevante es que la ausencia de un vicio de fondo hace, por sí misma, improcedente la revisión fiscal, según la jurisprudencia 2a./J. 88/2011, de rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010)."

No desconoce este órgano colegiado que la Sala del conocimiento precisó que la nulidad relativa al primer vicio se fundamentaba en los artículos 51, fracción II y 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y que, en cuanto al vicio de caducidad en el procedimiento, fundamentó la nulidad en el numeral 51, fracción IV, del propio ordenamiento.

No obstante, esto último no es óbice para la conclusión alcanzada, ya que, como se señaló, el pronunciamiento de la Sala Fiscal no resolvió el fondo de la pretensión planteada en el juicio de nulidad, en la medida en que no entrañó la declaración de un derecho ni la inexigibilidad de una obligación, sino que dicha declaratoria se limitó al análisis de dos vicios formales del procedimiento administrativo.

En tales circunstancias, al ser improcedente el recurso de revisión fiscal, debe quedar firme la sentencia recurrida.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.—Es improcedente el recurso de revisión fiscal interpuesto por el director general de lo Contencioso y de Recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor, en representación de las autoridades demandadas en el jui-

cio de origen; en consecuencia, queda firme la sentencia pronunciada por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el diecinueve de junio de dos mil quince, en el juicio de nulidad
*****.

Notifíquese por conducto de la Sala recurrida, en términos de lo establecido en los artículos 192, primer párrafo, de la Ley de Amparo y del diverso 63, último párrafo, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, respectivamente. Anótese en el libro de registro correspondiente y, con testimonio de esta ejecutoria, vuelvan los autos respectivos a su lugar de origen; en su oportunidad, archívese el expediente, el cual se clasifica como depurable en cumplimiento a lo previsto en la fracción II del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

Así, por unanimidad de votos, sin discusión, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Ariel Alberto Rojas Caballero, Enrique Villanueva Chávez y Víctor Manuel Estrada Jungo, siendo ponente el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como en el diverso 8, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR VICIOS FORMALES, AUN CUANDO SE SUSTENTEN EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 150/2010 Y 2a./J. 88/2011). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias citadas, determinó que el recurso de revisión fiscal es improcedente cuando la resolución recurrida se hubiere declarado nula por vicios meramente formales, debido a que, en este supuesto, no puede considerarse satisfecha la

presunción de importancia y trascendencia que justifique la procedencia de dicho medio de impugnación, al no declararse un derecho ni exigirse una obligación, ya que ese pronunciamiento no resuelve el fondo de la pretensión planteada en el juicio contencioso administrativo federal, sino que se limita a analizar la posible carencia de las formalidades elementales que debe satisfacer todo acto o procedimiento administrativo para ser legal. En ese sentido, el recurso mencionado es improcedente contra sentencias que declaren la nulidad de la resolución impugnada por vicios formales, aun cuando se sustenten en la fracción IV del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, conforme a la cual, la resolución administrativa se considera ilegal si los hechos que la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien, si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas, en cuanto al fondo del asunto, toda vez que debe atenderse al verdadero motivo de anulación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO
SEXTO CIRCUITO.

XVI.1o.A. J/24 (10a.)

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 90/2014. Administradora Local Jurídica de Celaya, en suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 26 de septiembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Misael Esteban López Sandoval.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 37/2015. Administradora Local Jurídica de Celaya, en suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 27 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Edgar Martín Gasca De la Peña.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 55/2015. Administradora Local Jurídica de Celaya, en suplencia por ausencia del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 10 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretaria: Esthela Guadalupe Arredondo González.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 52/2015. Administradora Local Jurídica de Celaya, por sí y como unidad administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario de Hacienda y Crédito Público y del Jefe del Servicio de Administración Tributaria. 1 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Ramón Lozano Bernal.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 87/2015. Director General de lo Contencioso y de Recursos de la Procuraduría Federal

del Consumidor. 22 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Ramón Lozano Bernal.

Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 150/2010 y 2a./J. 88/2011 citadas, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 694, con el rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." y Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 383, con el rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010).", respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de febrero de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, POR AUSENCIA O DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, AL OMITIR PRECISAR EL PERIODO O PERIODOS SUJETOS A REVISIÓN (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 150/2010 Y 2a./J. 88/2011).

REVISIÓN ADMINISTRATIVA (LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO) 73/2015. DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO DE CUENCA LERMA SANTIAGO PACÍFICO DE LA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA. 29 DE OCTUBRE DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: VÍCTOR MANUEL ESTRADA JUNGO. SECRETARIO: NELSON JACOBO MIRELES HERNÁNDEZ.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Improcedencia del recurso. Es innecesario analizar las consideraciones de la resolución recurrida, así como los conceptos de agravio expuestos por la recurrente, en razón de que este Tribunal Colegiado observa que el presente recurso de revisión fiscal es improcedente.

A manera de preámbulo, se destaca que al resolver la contradicción de tesis 256/2010, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

interpretó el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, a fin de determinar la procedencia del recurso de revisión fiscal, de cuya ejecutoria se desprenden las siguientes reflexiones:

a) La intención del legislador fue dotar al citado medio de impugnación de un carácter excepcional en cuanto a su procedencia, reservándolo únicamente a los casos en que, por su cuantía o debido a la importancia y trascendencia del tema a revisar, amerite la apertura de una instancia adicional;

b) Si el recurso de revisión fue creado por el legislador con la intención de que su procedencia operara sólo en casos excepcionales, debe tildarse de improcedente cuando la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa advierta la carencia de fundamentación y motivación del acto impugnado, debido a que, en ese supuesto, el pronunciamiento no implica la declaración de un derecho ni la inexigibilidad de una obligación, ya que no resuelve el fondo de la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino que la determinación se limita al análisis de la posible carencia de las formalidades elementales que debe satisfacer todo acto o procedimiento administrativo; y

c) El estudio de tales aspectos debe confiarse plenamente al citado órgano de jurisdicción ordinaria, sin necesidad de una revisión posterior, al ser previsible que sólo redundaría en lo ya resuelto.

La Segunda Sala del Alto Tribunal del País concluyó que se reserva a los tribunales federales el conocimiento de aquellos asuntos en que la importancia y trascendencia de lo ahí resuelto tengan un impacto en las materias que el legislador consideró importantes, conforme al catálogo detallado en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.

Además, precisó que si bien es cierto que el mencionado precepto, en relación con la procedencia del recurso de revisión, no distingue en cuanto a si la resolución recurrida debe consistir en un pronunciamiento de fondo del asunto, o si basta con que la resolución se hubiere declarado nula por carecer de fundamentación y motivación, también lo es que en este último supuesto no se puede considerar satisfecha la presunción de importancia y trascendencia que justifique la procedencia de dicho medio de impugnación.

Tales consideraciones dieron origen a la jurisprudencia 2a./J. 150/2010, publicada en la página 694 del Tomo XXXII, diciembre de 2010, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que dice:

"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.—Conforme al artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, dado el carácter excepcional de ese medio de defensa, en los casos en los que dichas sentencias decreten la nulidad del acto administrativo impugnado por falta de fundamentación y motivación, la revisión fiscal resulta improcedente por no colmarse presuntivamente los requisitos de importancia y trascendencia que deben caracterizar a ese tipo de resoluciones, pues la intención del legislador fue autorizar la apertura de una instancia adicional en aras de que el pronunciamiento que hiciese el revisor contuviera una decisión de fondo y siendo evidente que el examen de dichas causas de anulación no conduce a la declaración de un derecho ni a la inexigibilidad de una obligación, ya que no resuelve respecto del contenido material de la pretensión planteada en el juicio contencioso, sino que sólo se limita al análisis de la posible carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal, como son la fundamentación y la motivación, aspectos cuyo estudio corresponde plenamente al Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, sin necesidad de una revisión posterior, al ser previsible que sólo se redundaría en lo resuelto."

La misma postura argumentativa fue reiterada por la propia Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 136/2011, en la que sostuvo, además, que la ejecutoria de la que derivó el criterio interpretativo preinserto sustentó un precedente general de improcedencia del recurso de revisión fiscal, aplicable a todos los casos en que se recurra una sentencia de la Sala Fiscal que declare la nulidad del acto impugnado por vicios formales, como lo es la indebida o insuficiente fundamentación de la competencia material de la autoridad que la emitió, al margen de la materia de que trate la resolución controvertida.

La jurisprudencia 2a./J. 88/2011, que derivó de dicha contradicción, aparece publicada en la página 383 del Tomo XXXIV, agosto de 2011, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que literalmente establece:

"REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA

2a./J. 150/2010).—La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la indicada jurisprudencia, sostuvo que conforme al citado numeral, en los casos en los que las sentencias recurridas decreten la nulidad del acto administrativo impugnado por vicios formales, como es la falta o indebida fundamentación y motivación, la revisión fiscal resulta improcedente por no colmar los requisitos de importancia y trascendencia, pues en esos supuestos no se emite una resolución de fondo, al no declararse un derecho ni exigirse una obligación, sino sólo evidenciarse la carencia de determinadas formalidades elementales que debe revestir todo acto o procedimiento administrativo para ser legal. Ahora bien, como en la ejecutoria relativa a la contradicción de tesis 256/2010 de la que derivó la jurisprudencia 2a./J. 150/2010, la Segunda Sala, en uso de sus facultades legales, abarcó todos los casos en los que la anulación derive de vicios formales, al margen de la materia del asunto, es evidente que el referido criterio jurisprudencial es aplicable en todos los supuestos materiales previstos en el artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo en los que se declare la nulidad de una resolución impugnada por vicios meramente formales."

Bajo esas premisas, se concluye que resulta improcedente el recurso de revisión fiscal, cuando la nulidad se haya decretado por vicios de forma, pues ello no revela, en modo alguno, la excepcionalidad que debe imperar a fin de que los agravios sean estudiados por el órgano revisor.

En el caso, los antecedentes del juicio contencioso administrativo ***** , son los siguientes:

1. El veintiocho de febrero de dos mil trece, el director general del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, despachó el oficio número ***** (en adelante *****), dirigido al representante legal del Municipio de Irapuato, Guanajuato, mediante el cual le solicitó la presentación de diversa documentación (fojas 206 a 220 del expediente de origen).

Ello, en virtud de que "...de la información contenida en los registros de esta comisión se desprende que no ha dado debido cumplimiento a las obligaciones que tiene a su cargo, como contribuyente por el uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la Nación, como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, principalmente aquella que se refiere a la presentación de las declaraciones trimestrales provisionales, anuales y, en su caso, complementarias, relativas a los ejercicios 2011, 2010, 2009, 2008 y 2007, y con el objeto de comprobar el debido cumplimiento de sus obligaciones fiscales como contribuyente respecto al pago de derechos el uso o aprove-

chamamiento de bienes del dominio público de la Nación, como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales y, en su caso, determinar la(s) contribución(es) omitida(s), se le requiere para que exhiba en copia simple legible y en relación a dicho(s) ejercicio(s), la información y documentación que a continuación se indica..."

2. Posteriormente, el diecinueve de agosto de dos mil catorce, el referido funcionario público despachó el oficio número ***** (en adelante *****), dirigido al representante legal del Municipio de Irapuato, Guanajuato, mediante el cual le determinó un crédito fiscal en cantidad de \$***** (*****), por concepto de derechos omitidos, actualización, recargos y multas, derivado de la falta de pago de los derechos por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación, como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales, respecto de los cuatro trimestres del ejercicio fiscal dos mil siete. (fojas 133 a 201, ídem)

3. Inconforme con esa determinación, el representante legal del Municipio de Irapuato promovió juicio contencioso administrativo, el cual, sustanciado en todas sus etapas, fue resuelto el veintisiete de mayo de dos mil quince por el Pleno de la Sala Fiscal, en el sentido de declarar la nulidad de la resolución impugnada, por considerar que derivó de un acto viciado de origen —el requerimiento de información y documentación, contenido en el oficio número 7/13 de veintiocho de febrero de dos mil trece—, al no haberse precisado con exactitud la fecha en que iniciaría y terminaría el periodo sujeto a revisión, como se observa de la siguiente transcripción: (fojas 453 vuelta a 454 vuelta)

"De lo anterior se advierte que se incurrió en el vicio de que se duele la demandante, consistente en no indicar de una manera clara y precisa el periodo o periodos sujetos a revisión, conforme a lo establecido en los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación.

"Luego entonces, esta Sala Regional del Centro III concluye que con las manifestaciones puntualizadas con antelación, se crea confusión e inseguridad jurídica al contribuyente revisado, pues no se determina de manera por demás precisa, cuál será el periodo de la revisión, en tanto que no se puede determinar con certeza el mismo con el simple señalamiento de los ejercicios 2012 y 2011, que resultan ser aquellos por los que se solicita la documentación e información mediante los cuales se acredite el cumplimiento de las disposiciones y obligaciones contenidas en la Ley de Aguas Nacionales y en la Ley Federal de Derechos, concretamente respecto de los aprovechamien-

tos de aguas nacionales y ejercicios 2011, 2010, 2009, 2008 y 2007, respecto del pago de derechos por descargas de aguas residuales; lo que trae aparejada la falta de delimitación del objeto temporal de las facultades de comprobación a ejercer, mediante el procedimiento incoado por la autoridad.

"Lo anterior, en tanto que el requisito relativo a la precisión del objeto temporal de la revisión de escritorio, únicamente se encuentra satisfecho si en la propia orden se establecen y determinan, de manera clara y 'sin lugar a confusiones', los parámetros o las fechas respecto de las cuales se realizará la revisión, pues sólo con ello se permitiría al contribuyente conocer cabalmente las obligaciones a su cargo que se van a revisar y respecto de las cuales se encuentra obligado a presentar documentación e información y, además, para que la autoridad se ajuste estrictamente al periodo establecido en la orden respectiva, siendo que únicamente con estas precisiones se cumple cabalmente con el requisito establecido en el artículo 16 de la Constitución, relacionado con la revisión de escritorio; esto es, que el acto autoritario de molestia debe ser consecuencia de un mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

"Lo anterior, sin que sea obstáculo que dentro del requerimiento de información y documentación controvertido se haya solicitado a la actora la presentación de declaraciones trimestrales y anuales respecto de las obligaciones fiscales a revisar, pues ello en modo alguno subsana la omisión de delimitar el periodo sujeto a revisión por parte de la demandada.

"Por todo ello, lo procedente es declarar la nulidad de la resolución impugnada, con fundamento en lo establecido en el artículo 51, fracción II, en relación con el diverso 52, fracción II, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al provenir de un acto viciado de origen como es, en el caso, el requerimiento de información y documentación contenido en el oficio número *****, de fecha 28 de febrero de 2013, al no precisarse en el mismo, con exactitud, el día, mes y año en que inicia el periodo sujeto a revisión y en los que la misma termina, vulnerando con ello la garantía de seguridad jurídica que se tutela en los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación."

Pues bien, de lo expuesto se obtiene, como lo aduce la recurrente, que de conformidad con la fracción I del artículo 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el recurso, en principio, sería procedente por cuantía.

Ello, en tanto que se impugna la sentencia dictada por la Sala Regional que declaró la nulidad del oficio número *****, de diecinueve de agosto de dos mil catorce, emitido por el titular de la Dirección General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua, por medio del cual determinó un crédito fiscal a la accionante en cantidad total de \$***** (*****), por concepto de derechos omitidos, actualización, recargos y multas, derivado de la falta de pago de los derechos por uso o aprovechamiento de bienes del dominio público de la nación.

Ese monto, evidentemente, excede la cuantía señalada normativamente para la procedencia del presente medio de impugnación, pues supera los \$245,350.00 (Doscientos cuarenta y cinco mil trescientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), necesaria para justificar la procedencia del recurso conforme a la fracción I del artículo en comento, la cual se obtiene de multiplicar por tres mil quinientas veces el salario mínimo general diario en el Distrito Federal, que al diecinueve de mayo de dos mil quince, fecha de emisión de la sentencia recurrida, ascendía a \$70.10 (setenta pesos con diez centavos).

Sin embargo, en virtud de que la Sala Fiscal decretó la nulidad ante la existencia de un vicio de carácter formal, consistente en "...no indicar de una manera clara y precisa el periodo o periodos sujetos a revisión, conforme a lo establecido en los artículos 16, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 38, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación..."; entonces, ciertamente resulta improcedente el presente recurso de revisión fiscal, en virtud de que ese pronunciamiento constituye una cuestión meramente formal y ajena al fondo del asunto.

En efecto, la determinación de la Sala Fiscal en el sentido de que la resolución impugnada no cumple con los requisitos de fundamentación y motivación a que hace referencia la fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación ("Artículo 38. Los actos administrativos que se deban notificar deberán tener, por lo menos, los siguientes requisitos: ... IV. Estar fundado, motivado y expresar la resolución, objeto o propósito de que se trate."), hace patente la existencia de un vicio de índole formal y no de fondo, pues en el caso no se emitió una declaración en cuanto a la existencia de un derecho o la exigencia de una obligación.

Ello torna improcedente el medio de impugnación, puesto que se surten los criterios de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación referidos con antelación, cuya observancia es obligatoria para este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto en el párrafo primero del

artículo 217 de la Ley de Amparo, y que excluyen cualquier supuesto de procedencia, aun el de cuantía invocado por la inconforme, cuando el motivo de anulación sea la existencia de vicios de índole formal en la resolución controvertida.

Lo anterior, aunado a que de las causas de ilegalidad que establece el artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se encuentra la relativa a la omisión de requisitos formales, específicamente en su fracción II, que señala:

"Artículo 51. Se declarará que una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las siguientes causales:

"...

"II. Omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, siempre que afecte las defensas del particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la ausencia de fundamentación o motivación, en su caso."

Entonces, si como quedó demostrado, la Sala Fiscal declaró la nulidad lisa y llana de la resolución controvertida, al estimar que proviene de un acto viciado de origen, en el cual se requirió a la actora diversa información y documentación, sin precisar la fecha en que respectivamente iniciaría y terminaría el periodo sujeto a revisión; ello se traduce en omisión de los requisitos formales exigidos por la ley, en términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 51 invocado, lo cual, se insiste, no constituye un tema de fondo, en tanto que el analizado únicamente consistió en una violación formal.

En ese sentido, si lo relevante para el caso que se analiza es que la nulidad declarada no entraña un pronunciamiento de fondo, pues se consideró que la autoridad demandada en el juicio contencioso incurrió en una violación formal, lo que ocasionó que, por la ilegalidad destacada, se declarara la nulidad de la resolución controvertida, en términos de la fracción II del artículo 51 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; entonces, ello torna jurídicamente improcedente el presente recurso de revisión fiscal.

En similares consideraciones este Tribunal Colegiado resolvió los recursos de revisión fiscal 61/2015, 69/2015 y 72/2015, en sesiones de veinticuatro de septiembre y ocho de octubre de dos mil quince, respectivamente.

Por lo expuesto, fundado y con apoyo en lo dispuesto en los artículos 104, fracción III, de la Constitución Federal, 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo y 37, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO.—Es improcedente el recurso de revisión fiscal interpuesto por el director general del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua; en consecuencia, queda firme la sentencia pronunciada por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el veintisiete de mayo de dos mil quince, en el juicio contencioso administrativo número ******, promovido por el Municipio de Irapuato, Guanajuato.

Notifíquese por conducto de la Sala recurrida, en términos de lo establecido en los párrafos y artículos primero del 192 de la Ley de Amparo y último del diverso 63 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, respectivamente. Anótese en el libro de registro correspondiente y, con testimonio de esta ejecutoria, vuelvan los autos respectivos a su lugar de origen; en su oportunidad, archívese el expediente el cual se clasifica como destruible, en cumplimiento a lo previsto en la fracción IV del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.

Así, por unanimidad de votos y sin discusión, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Ariel Alberto Rojas Caballero, Víctor Manuel Estrada Jungo y Enrique Villanueva Chávez, siendo ponente el segundo de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 18, fracción II y 21 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como el diverso 8, párrafo tercero, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, POR AUSENCIA O DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE INFORMA-

CIÓN Y DOCUMENTACIÓN, AL OMITIR PRECISAR EL PERIODO O PERIODOS SUJETOS A REVISIÓN (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 150/2010 Y 2a./J. 88/2011).

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias citadas, determinó que el recurso de revisión fiscal es improcedente cuando la resolución recurrida se hubiere declarado nula por ausencia o deficiente fundamentación y motivación, debido a que, en este supuesto, no se puede considerar satisfecha la presunción de importancia y trascendencia que justifique la procedencia de dicho medio de impugnación, al no declararse un derecho ni exigirse una obligación, ya que ese pronunciamiento no resuelve el fondo de la pretensión planteada en el juicio contencioso administrativo federal, sino que se limita al análisis de la posible carencia de las formalidades elementales que debe satisfacer todo acto o procedimiento administrativo para ser legal. En ese sentido, el recurso mencionado es improcedente contra sentencias que declaren la nulidad de la resolución impugnada, por derivar de un requerimiento de información y documentación que no cumple con los requisitos de fundamentación y motivación a que se refiere la fracción IV del artículo 38 del Código Fiscal de la Federación –pues ello hace patente la existencia de un vicio formal y no de fondo de la pretensión planteada en el juicio contencioso–, debido a que la autoridad, al emitir ese requerimiento no precisa el día, mes y año en que respectivamente inicia y termina el periodo sujeto a revisión, esto es, omite indicar de manera clara y precisa el periodo o periodos sujetos a revisión, lo que crea confusión e inseguridad jurídica en el contribuyente fiscalizado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

XVI.1o.A. J/25 (10a.)

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 61/2015. Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua. 24 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 72/2015. Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua. 8 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretaria: Silvia Vidal Vidal.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 71/2015. Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la

Comisión Nacional del Agua. 15 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Ramón Lozano Bernal.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 62/2015. Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua. 22 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ariel Alberto Rojas Caballero. Secretario: Arturo Amaro Cázarez.

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 73/2015. Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua. 29 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Secretario: Nelson Jacobo Mireles Hernández.

Nota: Las tesis de jurisprudencia 2a./J. 150/2010 y 2a./J. 88/2011 citadas, aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXII, diciembre de 2010, página 694, con el rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN." y Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 383, con el rubro: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE SÓLO DECLAREN LA NULIDAD DEL ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO POR VICIOS FORMALES EN CUALQUIERA DE LOS SUPUESTOS MATERIALES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 63 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 150/2010).", respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de febrero de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO. PRIMA DE ANTIGÜEDAD. RECLAMACIÓN IMPROCEDENTE.

AMPARO DIRECTO 851/2014. 22 DE JULIO DE 2015. UNANIMIDAD DE VOTOS. PONENTE: JOSÉ DE JESÚS BAÑALES SÁNCHEZ. SECRETARIO: MARTÍN VILLEGAS GUTIÉRREZ.

CONSIDERANDO:

TERCERO.—El análisis de los conceptos de violación compaginado con las actuaciones que conforman el juicio laboral del que deriva el laudo reclamado, conlleva las siguientes consideraciones jurídicas.

Son infundados los conceptos de violación en los que se arguye que el laudo reclamado es contrario a derecho, porque el jurisdicente no estuvo en lo justo al absolver a la demandada del pago de la prima de antigüedad,

así como que debió haber mandado prevenir al actor para aclarar la demanda en términos del numeral 873 de la ley obrera, aplicado de manera supletoria a la ley burocrática jalisciense.

Se afirma lo anterior, porque finalmente la postura asumida al respecto por la responsable y al margen de las consideraciones vertidas sobre el particular, se tiene que la absolución decretada se encuentra apegada a derecho, si se tiene en cuenta que, en principio, la premisa fundamental para aplicar supletoriamente una legislación a otra, la constituye el hecho de que estando prevista la institución jurídica en la norma, tal previsión sea incompleta u oscura; es decir, la aplicación de las leyes supletorias sólo tiene lugar en aquellas cuestiones que, comprendidas en la ley que suplen, se encuentren carentes de reglamentación o deficientemente reglamentadas y, en el presente caso, la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, no prevé la figura jurídica de la prima de antigüedad; en esa tesitura, no es viable aplicar la supletoriedad de la ley al no cumplirse, como se destacó, una de las premisas, esto es, que esté prevista en la ley a suplir; luego, la determinación de la autoridad responsable de absolver de dicha prestación a fin de cuentas es correcta y, por ende, no lesiona los derechos fundamentales en perjuicio del quejoso.

Tiene aplicación sobre el particular, en lo que al caso importa, la tesis III.1o.T.88 L que sostiene este órgano colegiado, publicada en la Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Tomo XXV, mayo de 2007, página 2236, que a la letra dice:

"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO. PRIMA DE ANTIGÜEDAD Y VEINTE DÍAS POR AÑO TRABAJADO. RECLAMACIÓN IMPROCEDENTE.—Es correcta la absolución decretada en cuanto a los veinte días por año trabajado y prima de antigüedad, en virtud de que esas prestaciones no están previstas en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Jalisco."

Sin que obste a lo anterior, el hecho de que de la documental aportada por la parte actora, bajo el apartado séptimo de su escrito de pruebas, consistente en copia simple del acuerdo suscrito por el gobernador interior del Estado de Jalisco y el secretario general de Gobierno, con fecha veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y dos, documental de la cual se ofreció el cotejo con su original, misma que fue admitida por la responsable.

De la documental de que se trata, se aprecia que, a partir del uno de septiembre de mil novecientos noventa y dos, se agregó como nueva prestación económica en favor de los servidores públicos que se denominará

prima de antigüedad, que se pagará de manera quinquenal, es decir, se da el tratamiento como tipo quinquenio; luego, si la parte actora reclamó bajo el inciso f) del escrito inicial de demanda el pago de la prima de antigüedad correspondiente a doce días por cada año laborado; entonces, es claro que se trata de prestaciones totalmente distintas, de ahí que dicha probanza sea ineficaz para demostrar la procedencia de su pretensión; por ende, lo alegado al respecto es infundado.

En otro aspecto, es infundado el motivo de disenso a través del cual se cuestiona de ilegal la parte del laudo mediante el cual se absolvió a la empleadora con respecto al pago de cuotas al Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro.

Para arribar a dicha conclusión se tiene que de las constancias procesales inherentes se desprende que la parte actora exigió bajo el apartado d) del escrito inicial de demanda, el pago de cuotas al Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro, generada con base en el dos por ciento mensual del monto del sueldo percibido; al narrar los hechos en que sustentó su reclamo, adujo que ingresó a laborar al servicio de la demandada el uno de marzo de mil novecientos ochenta y uno y en mil novecientos ochenta y cuatro se le otorgó nombramiento como ejecutor fiscal y que fue pensionado por jubilación el uno de noviembre de dos mil diez, debido a haber acumulado al servicio de la empleadora treinta años; por su parte, la patronal alegó la improcedencia de dicha prestación, debido a la terminación de la relación laboral por jubilación, en términos de los artículos 10 y 25 del Reglamento para la Operación del Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco.

Luego, de la lectura de los preceptos legales 10 y 25 del Reglamento para la Operación del Sistema Estatal de Ahorro para el Retiro de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco, se desprende que son del tenor literal siguiente:

"Artículo 10. En caso de terminación de la relación laboral del servidor público con la entidad pública que corresponda, ésta deberá entregar a la fiduciaria en la fecha en que se deba efectuar el pago de las cuotas relativas a la última quincena transcurrida, la aportación correspondiente al servidor público por dicho periodo o, en su caso, la parte proporcional a la que tenga derecho." "Artículo 25. El cuentahabiente que adquiera el derecho a disfrutar de una pensión por jubilación, edad avanzada, o invalidez total permanente, en los términos de la Ley de Pensiones del Estado, tendrá derecho a que la fiduciaria

le haga entrega de los fondos de sus subcuentas de aportaciones obligatorias y complementarias de retiro, ya sea depositándoselos, en una sola exhibición, en la entidad financiera que él mismo designe, a fin de adquirir una pensión mensual vitalicia; o bien entregándoselos al propio cuentahabiente, a través de un plan de retiros mensuales programados de acuerdo a su esperanza de vida. Sin embargo, quienes se encuentren en los supuestos del párrafo anterior y que cuenten con menos de 20 años de aportaciones al SEDAR, podrán optar por retirar directamente en una sola exhibición el fondo acumulado en su cuenta individual, utilizando para este efecto el formulario SEDAR-04. Los recursos existentes en la subcuenta de aportaciones adicionales serán entregados de manera directa al cuentahabiente en una sola exhibición, a menos que el cuentahabiente elija y solicite disponer de ellos en la misma forma en que disponga de las otras dos subcuentas conforme a los párrafos anteriores. El cuentahabiente que disponga de los recursos de su cuenta individual mediante una pensión vitalicia o a través de un plan de retiros programados, conforme al presente artículo, tendrá derecho a continuar aportando voluntariamente a la subcuenta adicional y recibir los beneficios que de la misma se deriven, de conformidad con el presente reglamento."

Del contenido de los numerales de que se trata se desprende que en los casos, como en el caso acontece (sic), se observa que el actor fue pensionado por jubilación, y la empleadora a partir de ese momento ya no se encuentra obligada a cubrir aportaciones al fondo de ahorro para el retiro, más bien, a entregar el monto de la cuenta individual a través de la forma que el servidor público elija (pensión mensual o retiros mensuales programados); luego, tal y como con acierto se sostuvo en el laudo impugnado, es claro que no prospera la reclamación de que se trata; por ende, la decisión adoptada sobre el particular se encuentra ajustada a derecho y, por consecuencia, no resulta vulneratoria de los derechos fundamentales del quejoso.

En cambio, es sustancialmente fundado y suficiente para conducir a declarar la inconstitucionalidad del laudo combatido y, por ende, al otorgamiento de la protección constitucional solicitada el aspecto de la queja a través del cual se impugna de ilegal la parte del laudo en el que se determina absolver del pago de aguinaldo correspondiente al año dos mil diez, bajo el argumento de que se omite valorar la inspección ocular ofrecida por la parte actora bajo el apartado once de su escrito de ofrecimiento de pruebas.

A dicha convicción se arriba, si se tiene presente que la responsable, tal como se arguye, omite el análisis de la prueba de inspección ocular de que se trata, misma que fue ofrecida por la parte accionante bajo el apartado once de su escrito de pruebas, a efecto de acreditar ser falso que se le haya

liquidado el pago de aguinaldo correspondiente al año dos mil diez, en los meses de marzo y diciembre; la que dicho sea de paso fue admitida por el jurisdicente en acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil once y desahogada el doce de enero del mismo año (folios 53, 55, 56 y 57), donde consta que se hizo efectivo el apercibimiento decretado en autos consistente en tener por ciertos los hechos que con la misma pretendió acreditar el oferente.

Dicha omisión de la responsable, resulta trascendental puesto que le impide contar con mayores elementos de convicción, que le permitan encontrar la verdad histórica y resolver la controversia de manera congruente con lo alegado y probado oportunamente por los litigantes y contraviene lo ordenado en el artículo 136 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como el 840, fracción III y 841 y 842 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria, que obligan a la autoridad laboral a incluir en el laudo, entre otras cuestiones, la enumeración de las pruebas ofrecidas por las partes y la apreciación que de ellas haga; así mismo a resolver la contienda a verdad sabida y buena fe guardada y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero expresando los motivos y fundamentos legales en que apoyen sus resoluciones; y a emitir los laudos de manera clara, precisa y congruente con la demanda, contestación y demás pretensiones deducidas en el juicio oportunamente.

Al respecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia que bajo el número 475, aparece publicada en la página 388, Tomo V, materia laboral. Jurisprudencia. Volumen 1 del *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917-2000, cuyo tenor es:

"PRUEBAS, APRECIACIÓN DE LAS, POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.—Si bien el artículo 775 de la Ley Federal del Trabajo autoriza a las Juntas para apreciar las pruebas en conciencia, no las faculta para omitir el estudio de alguna o algunas de las aportadas por las partes, ya que están obligadas a estudiar, pormenorizadamente, las pruebas que se les rindan, haciendo el análisis de las mismas y expresando cuáles son las razones de carácter humano que han tenido en cuenta para llegar a tales o cuales conclusiones."

Así las cosas, es claro que la autoridad responsable dejó de apreciar las pruebas en conciencia, como se viene diciendo, pues al omitir la valoración de la susodicha inspección ofrecida por el accionante, sobre el aspecto discutido, tuvo por verdaderos hechos sin fundamento objetivo, ya que la

conciencia que debe formarse para decidirlos, ha de ser precisamente, en el caso, el resultado del estudio de ese elemento demostrativo, para justificar la conclusión obtenida, tocante a la procedencia o no de los reclamos inherentes al pago del aguinaldo correspondiente al año dos mil diez; esto es, el instructor se limitó a precisar que bajo el quinto punto considerativo del laudo cuestionado que procede absolver al pago de la susodicha prestación, en lo que atañe al periodo de aguinaldo del año dos mil diez, en razón de que de la documental dos aportada por la empleadora, consistente en el recibo finiquito, se desprende el pago de la referida prestación, sin realizar mayores consideraciones, esto es, sin apreciar la totalidad del material probatorio ofrecido al justiciable por la parte actora, como la inspección antes referida, lo que constituye una violación de sus derechos fundamentales y obliga a la potestad federal a otorgar la protección constitucional.

Visto así el asunto, lo que procede es conceder la protección constitucional que solicita, para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo combatido y en su lugar emita otro, en el que, respecto del pago de aguinaldo de dos mil diez, proceda a justipreciar la inspección judicial ofrecida por la parte actora bajo el apartado diez de su escrito de pruebas, expresando el valor conviccional que les corresponda y relacionándola con el resto del material probatorio aportado por los litigantes y fundando, razonando y motivando su determinación, resuelva congruentemente y con plenitud de jurisdicción la controversia suscitada sobre el pago de la reclamación antedicha, debiendo reiterar el resto de lo resuelto en el laudo reclamado.

CUARTO.—Conforme a lo dispuesto por los artículos 192, 193 y 258, en relación con el precepto 3o. transitorio de la vigente Ley de Amparo, requiérase a los integrantes del tribunal responsable para que dentro del término de veintidós días hábiles contados a partir del día siguiente al de la fecha de su notificación, den cumplimiento al fallo protector, apercibidos que, en caso de no hacerlo, se les impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en la fecha en que se determine el incumplimiento, de acuerdo a lo estatuido en el precepto 258 del cuerpo de leyes invocado; asimismo, hágaseles saber que en caso de incumplimiento, con independencia de la imposición de la multa de mérito, se remitirá el expediente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para seguir el trámite de inejecución, mismo que puede concluir con la separación de su puesto y su consignación en términos de lo previsto por el artículo 192 citado con anterioridad.

Por lo anteriormente expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a *****
contra el acto que reclamó del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, del cual se hizo relación en el proemio de la presente ejecutoria. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del tercer considerando de la presente ejecutoria.

SEGUNDO.—Requírase a los integrantes del tribunal responsable en los términos a que se refiere el considerando cuarto de esta ejecutoria.

Notifíquese; anótese en el registro, remítase testimonio de esta resolución a la autoridad responsable para los fines legales a que haya lugar y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido, en la inteligencia de que dado el sentido de la ejecutoria, este asunto se considera depurable, sin relevancia documental, conforme a los lineamientos establecidos en el Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos legales correspondientes.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que integran los Magistrados: José de Jesús Bañales Sánchez, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo y Arturo Cedillo Orozco y siendo ponente el primero de los nombrados.

En términos de lo previsto en los artículos 3, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información legalmente considerada como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO. PRIMA DE ANTIGÜEDAD. RECLAMACIÓN IMPROCEDENTE. Es correcta la absolución decretada en cuanto a la prima de antigüedad, en virtud de que esa prestación no está prevista en la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

III.1o.T. J/1 (10a.)

Amparo directo 34/87. María Prieto Cárdenas. 23 de septiembre de 1987. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Cruz Martínez. Secretario: Roberto Ruiz Martínez.

Amparo directo 304/2006. Jerónimo López Gómez. 22 de marzo de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Cruz Martínez. Secretario: Miguel Ángel Regalado Zamora.

Amparo directo 559/2006. Gabriel Alfaro Arana. 8 de agosto de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Cruz Martínez. Secretario: Miguel Ángel Regalado Zamora.

Amparo directo 1552/2011. Aracely Pintor Quiroz. 2 de mayo de 2012. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez. Secretario: Martín Villegas Gutiérrez.

Amparo directo 851/2014. 22 de julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José de Jesús Bañales Sánchez. Secretario: Martín Villegas Gutiérrez.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación* y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 22 de febrero de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.

SECCIÓN SEGUNDA
EJECUTORIAS Y TESIS
QUE NO INTEGRAN JURISPRUDENCIA

ABANDONO DE MENOR DE EDAD. LA SANCIÓN RELATIVA A LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD NO DEBE CONDICIONARSE A QUE SE COMPROMETA SU SALUD O SEGURIDAD (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 418, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN ABROGADO).

La medida que contempla ese precepto legal en el caso en que los deberes asociados a la institución de la patria potestad no son normalmente ejecutados o cumplidos por los ascendientes que la ejercen conforme a la ley y, por tanto, requiere que el Estado intervenga para modificar una situación que no va en beneficio de los menores, de ninguna manera justifica que la aplicación de esa sanción se condicione a que a consecuencia del abandono se comprometa la salud o seguridad del menor, pues al condicionar el legislador la aplicación de esa sanción a que previamente se actualice dicho compromiso, lejos de beneficiar al menor se le causa un perjuicio, pues la protección que se pretende dar a éste a través de esa sanción no es eficaz, porque cuando un ascendiente incumple con sus deberes, entre otros, alimentarios, es muy frecuente que alguien más se haga cargo de ellos; de manera que al establecerse esa condición, se genera que en los casos en donde alguien más asume la citada obligación, el progenitor contumaz en cumplir con sus deberes de protección al menor, no pueda válidamente sancionarse con la pérdida de la patria potestad, lo cual implica que en esos casos las obligaciones de protección derivadas de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que son acordes con los tratados internacionales y reiterados en la Ley Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes e, incluso, en el propio Código Familiar de Michoacán, se vean reducidas a meras recomendaciones desprovistas de consecuencias jurídicas. Además, esa condición legislativa tampoco puede considerarse oportuna, porque al exigirla para aplicar la sanción relativa, implícitamente se anulan los derechos que se pretenden proteger, en tanto que al condicionar que se comprometa la salud o seguridad del menor, se va en contra de éste que es a quien el legislador realmente pretende proteger. Por tanto, la interpretación que pre-

serva la dignidad del menor y el ejercicio pleno de sus derechos, debe ser en el sentido de que la exigencia contenida en el citado precepto es contraria al interés superior del menor, en tanto que el legislador no estableció una medida apropiada, eficaz y oportuna para que se respetaran adecuadamente los derechos del infante, pues la exigencia de que el incumplimiento de deberes comprometa la salud o seguridad de éste, va en contra de su desarrollo pleno e integral; entonces, basta con que el juzgador, en el caso concreto sometido a su consideración, verifique que efectivamente el progenitor ha incumplido con sus deberes alimenticios, sin causa justificada que respalde su incumplimiento, para que pueda decretarse la pérdida de la patria potestad sobre el menor, pues la interpretación del estado de abandono debe hacerse en la acepción amplia vinculada al incumplimiento de los deberes inherentes a la función del padre por la situación y las necesidades de su hijo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

XI.2o.C.10 C (10a.)

Amparo directo 43/2014. 12 de marzo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo Esparza Alfaro. Secretario: José Ramón Rocha González.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa aislada 1a. LXV/2013 (10a.), de rubro: "ABANDONO DE UN MENOR DE EDAD. SU INTERPRETACIÓN COMO CAUSAL DE PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD ATENDIENDO AL INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XVII, Tomo 1, febrero de 2013, página 793.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ACCIÓN PENAL. LAS PRUEBAS PARA PERFECCIONARLA, OFRECIDAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CASO DE QUE SE NIEGUE LA ORDEN DE APREHENSIÓN, REAPREHENSIÓN O COMPARECENCIA, A FIN DE QUE EL JUEZ ENTRE NUEVAMENTE AL ESTUDIO DE LA CAUSA Y SE PRONUNCIE RESPECTO DE DICHOS MANDATOS, DEBEN DESAHOGARSE POR LA REPRESENTACIÓN SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ) [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 75/2012 (10a.)]. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la citada jurisprudencia, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 911, de rubro: "ACCIÓN PENAL. SI PARA SU PERFECCIONAMIENTO CON MOTIVO DE UNA ORDEN DE APREHENSIÓN NEGADA O DE LA EMISIÓN DE UN AUTO DE LIBERTAD CON RESERVAS A FAVOR DEL INCUPLADO, SE REQUIERE DE LA APORTACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS

PROBATORIOS, ÉSTOS NECESARIAMENTE DEBEN DESAHOGARSE POR EL MINISTERIO PÚBLICO (LEGISLACIÓN PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO ABROGADA).", estableció que, de una interpretación sistemática y teleológica de los artículos 17 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que corresponde en exclusiva al Ministerio Público el ejercicio de la "función investigadora" de los delitos en sede de averiguación previa, por lo que si para perfeccionar la acción penal es necesario aportar al órgano jurisdiccional nuevos elementos de convicción, éstos necesariamente deberá desahogarlos el propio representante social y no así el Juez penal de instancia; criterio que es aplicable tratándose de la hipótesis prevista en el artículo 181, párrafo tercero, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de San Luis Potosí abrogado, que prevé que si el Juez negara la aprehensión, reaprehensión o comparecencia, en su caso, el Ministerio Público adscrito reiterará la petición cuantas veces sea necesario, para lo cual, dentro del plazo de seis meses contados a partir del día siguiente de aquel en que cause estado la resolución deberá rendir y ofrecer nuevas pruebas, respecto de las cuales el Juez entrará nuevamente al estudio de la causa y se pronunciará sobre el mandamiento solicitado por el Ministerio Público investigador, al resultar patente que dicha porción normativa contraviene dichos artículos constitucionales, pues conllevaría que el juzgador sustituyera las funciones de aquél en el ejercicio de su inherente función investigadora y que se trastocaran los principios constitucionales que rigen el proceso penal, convirtiéndolo en un sistema procesal penal inquisitivo, al permitirse la concentración de funciones en el resolutor, facultándolo para investigar, obtener pruebas y juzgar.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
IX.2o.3 P (10a.)

Amparo en revisión 323/2015. 26 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Alberto Durán Martínez. Secretario: Rodolfo Ocejo Lambert.

Nota: La denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ACTAS DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA. QUIÉNES DEBEN RATIFICARLAS ANTE EL TRIBUNAL, PARA QUE QUEDEN PERFECIONADAS. Para la validez del acta de investigación administrativa que los titulares de las dependencias públicas deben aportar para obtener la autorización de cese de los trabajadores a su servicio, necesariamente debe ser ratificada. Ahora bien, sus participantes son: 1. El titular o su representante

que investiga el caso y elabora el acta. 2. El trabajador afectado con la conducta imputada al investigado, de existir. 3. Los testigos de cargo. 4. El trabajador sujeto a investigación. 5. El representante sindical. 6. Los testigos de asistencia. Ahora bien, la participación del titular de la dependencia o del funcionario que levantó el acta es indispensable, toda vez que son quienes imputan la falta y por ello deben sostenerla en su presencia al trabajador y ante el tribunal, pues de no hacerlo la acusación perdería sus efectos y ya no habría lugar a imponer la sanción. La misma necesidad existe respecto del trabajador que se diga afectado por la conducta atribuida al investigado, ya que el hecho motivo de la investigación lo involucra; así como respecto de los testigos de cargo, por ser quienes presenciaron el desarrollo de los hechos de los que derivó la conducta que se pretende sancionar. En los casos anteriores el trabajador tiene derecho a escuchar de viva voz los motivos de la acusación y las razones de los testigos de cargo para justificar su conocimiento de los hechos y su presencia en el lugar, día y hora en que se cometieron. No sucede lo mismo con el representante sindical y con los testigos de asistencia, dado que no son quienes formulan la imputación materia de la investigación, y sólo podrían, en todo caso, referir la forma en que se levantó el acta relativa.

DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMERO CIRCUITO.

I.14o.T.2 L (10a.)

Amparo directo 1780/2014. Instituto Politécnico Nacional. 22 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Sergio Pallares y Lara. Secretaria: Copelia Frida Zamorano Marín.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LOS FORMULADOS POR EL QUEJOSO NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA RESOLVERLO.

La Ley de Amparo prevé que cuando se trate del juicio de amparo directo, la intervención del quejoso se agota con el otorgamiento de un plazo para el ejercicio de la acción de amparo y, en su caso, para la ampliación de la demanda, acorde con el artículo 17 de la mencionada ley. Asimismo, de ser el caso, con el desahogo de la vista que se le dé con una posible causa de improcedencia advertida por el Tribunal Colegiado de Circuito. Por ello, el plazo otorgado a las partes cuando se les notifica la admisión de la demanda, a fin de hacerles saber que cuentan con el término de quince días posteriores a su notificación, para que, de estimarlo prudente, presenten alegatos, conforme al artículo 181 de la propia ley, no está dirigido al quejoso, pues es innecesaria su intervención a través de alegatos, ya que conoce el conflicto, en tanto que es

la parte que inició el juicio y ha tenido la oportunidad y el plazo para formular sus argumentos a través de los conceptos de violación expuestos en la demanda y, en su caso, en su ampliación; de ahí que no tenga sentido concederle un plazo para imponerse de los autos y los formule, al ser él quien origina el juicio de amparo directo, con base en el conocimiento previo del tema debatido en la controversia. Por consiguiente, si el órgano jurisdiccional advierte que el quejoso los formuló, éste no debe tomarlos en cuenta para resolver, ya que de lo contrario se duplicaría su participación en el juicio, pues se permitiría formular alegatos a la parte que promovió el juicio para el efecto de manifestar lo que a su derecho convenga respecto de lo que ésta ha dicho, lo que resulta contrario a toda racionalidad práctica.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.95 K (10a.)

Amparo directo 127/2015. Norma Leticia Tehozol Palomo. 28 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Édgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ALEGATOS. SI DE SU CONTENIDO SE ADVIERTE QUE EN REALIDAD CONSTITUYEN UNA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, EL JUZGADOR DEBE SUPLIR EL ERROR EN LA DENOMINACIÓN EN QUE INCURRA EL QUEJOSO. Aun cuando la quejosa denomine a su escrito como "alegatos", si en realidad a través de las manifestaciones que exprese en tal ocurso pretende controvertir el acto reclamado al exponer la lesión o agravio que estima le provoca, así como los motivos que generan esa afectación y los razonamientos tendentes a demostrar sus apreciaciones; es evidente que lo expuesto en dicho escrito constituye una ampliación de los argumentos vertidos en la demanda de amparo, vía conceptos de violación. Por tanto, en ese caso, la autoridad de amparo debe suplir el error en la denominación en que incurra la quejosa, de conformidad con el artículo 76 de la Ley de Amparo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.94 K (10a.)

Amparo directo 52/2015. 21 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Édgar Bruno Castrezana Moro, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera

Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

AMPARO ADHESIVO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INTERPUESTO POR EL CODEMANDADO ABSUELTO, CUANDO NO EXISTE RIESGO DE QUE SE MODIFIQUE EL LAUDO QUE LE BENEFICIA, AUN CUANDO SE CONCEDA EL AMPARO PRINCIPAL. Conforme al artículo 182 de la Ley de Amparo, cuando los conceptos de violación en el amparo principal se consideran fundados, el Tribunal Colegiado de Circuito, por regla general, debe avocarse al conocimiento de la argumentación del quejoso adherente, cuando pretende abundar en las consideraciones del laudo reclamado que le favorecen. Sin embargo, esa obligación desaparece cuando el quejoso adherente resulta ser el codemandado en el juicio laboral que resultó absuelto por no acreditarse entre él y el actor la relación de trabajo y esa absolución quedó intocada, a pesar de los efectos del fallo protector que inciden en la condena de diverso codemandado. Por tanto, si bien el interés del quejoso adherente está sujeto a la suerte del amparo principal, ello no se surte cuando el sentido del laudo reclamado le favorece aun con el resultado de la sentencia amparadora, pues tal absolución decretada en su favor no conlleva ningún riesgo de ser modificada, por ende, el amparo adhesivo debe declararse sin materia.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

VII.1o.T.2 L (10a.)

Amparo directo 846/2014. Blanca Estela Pérez Domínguez. 26 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado. Secretario: Israel Palestina Mendoza.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS HETEROAPLICATIVAS. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL CONTRIBUYENTE PRETENDE RECLAMARLAS CON BASE EN EL INTERÉS LEGÍTIMO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que las controversias de que habla el artículo 103 de la propia Constitución, con exclusión de aquellas en materia electoral, se seguirán siempre a instancia de parte agraviada, teniendo ese carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por dicho ordenamiento

y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o indirecta o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la fracción I del artículo 107 de la Ley de Amparo establece que el amparo indirecto procede contra normas generales, que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de aplicación, causen perjuicio al quejoso. En este contexto, el interés legítimo es incompatible con la situación de quien, en el amparo contra leyes tributarias, como contribuyente y a propósito del primer acto concreto de aplicación las reclama, atribuyéndoles vicios de inconstitucionalidad, pues en esa circunstancia es indispensable que acredite fehacientemente el interés jurídico que le asiste, en tanto que, en esas condiciones, las normas reclamadas se proyectan sobre la esfera jurídica del gobernado de manera personal, directa y concreta, no así indirecta o abstractamente como el interés legítimo lo presupone y permite; de ahí que el amparo contra leyes fiscales heteroaplicativas es refractario del interés legítimo y, consecuentemente, improcedente el promovido con base en éste.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
XXII.1o.12 A (10a.)

Amparo en revisión 337/2015. José Miguel Hoyos Ayala. 3 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Barajas Villa. Secretario: Adolfo Giménez Miguel.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

AMPARO DIRECTO. EL PLAZO DE 15 DÍAS PARA PROMOVERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO Y EXACTO DEL LAUDO RECLAMADO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE CONTRA SU NOTIFICACIÓN HAYA PLANTEADO INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y ÉSTE SE HAYA DECLARADO FUNDADO. Los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo disponen que el plazo para presentar la demanda de amparo directo es de 15 días, contados, entre otras hipótesis, a partir del día siguiente a aquel en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado; asimismo, conforme a la jurisprudencia 1a./J. 42/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XVI, septiembre de 2002, página 5, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CONOCIDO DESDE EL MOMENTO EN QUE SE RECIBEN LAS COPIAS SOLICITADAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.", el acto reclamado debe tenerse por conocido desde el momento en que se reciban las copias de él, solicitadas a la autoridad responsable; por tanto, es a partir de esta fecha en que empezará a correr el término para la promoción del amparo directo contra el laudo dictado en el jui-

cio laboral, con independencia de que el quejoso haya planteado el incidente de nulidad de actuaciones contra su notificación y éste se haya declarado fundado, pues tal incidencia no destruye el hecho de que tuvo conocimiento del laudo reclamado y, por tanto, no constituye un obstáculo que interrumpa el cómputo del plazo para su promoción; en consecuencia, el juicio de amparo es improcedente si no se promovió en el término aludido, conforme al artículo 61, fracción XIV, de la ley de la materia.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.2o.T.8 L (10a.)

Amparo directo 115/2015. Marisol Bernal Pérez. 29 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Herlinda Villagómez Ordóñez. Secretaria: Gilda Herrera Salazar.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÁ OBLIGADO A OTORGAR AL QUEJOSO EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE DESAHOGUE LA PREVENCIÓN DE FORMULARLA, RESPECTO DE UN ACTO DIVERSO, VINCULADO CON EL RECLAMADO, ADVERTIDO DEL INFORME JUSTIFICADO, SI DE AUTOS SE APRECIA QUE AQUEL, CON ANTERIORIDAD A QUE SE RINDIERA, TUVO CONOCIMIENTO DE SU EXISTENCIA. El artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo establece que cuando el quejoso tenga conocimiento de otro acto de autoridad que guarde estrecha relación con el ya reclamado, la ampliación de la demanda respecto de aquél debe realizarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de dicha legislación, entre éstos, el genérico de quince días (el cual debe computarse conforme a las reglas del diverso normativo 18). Por tanto, el Juez de Distrito debe otorgar el plazo de quince días, para que el quejoso desahogue la prevención que se le haga, a fin de que manifieste si desea ampliar la demanda respecto de un acto diverso, vinculado con el reclamado, advertido del informe justificado de la autoridad responsable, siempre y cuando de las constancias con las que se cuente hasta ese momento, se advierta que, efectivamente, el justiciable tenga conocimiento de la existencia de ese acto con motivo de dicha rendición. En cambio, si de autos se aprecia que el quejoso ya tenía conocimiento del referido acto con anterioridad a dicha prevención, el juzgador no está obligado a otorgarle otro plazo de quince días, contados a partir de la notifi-

cación de tal proveído, pues de hacerlo, se estaría ampliando indebidamente el plazo que establece la ley de la materia para tal efecto.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.5o.P.10 K (10a.)

Queja 124/2015. 14 de enero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: Silvia Carrasco Corona. Secretaria: Mayra León Colín.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA CIVIL DENTRO DEL JUICIO. SE EQUIPARA A UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA Y REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FIANZA PARA RESPONDER POR LOS PROBABLES DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CON DICHO ACTO PUEDAN OCASIONARSE A LA CONTRAPARTE DEL SOLICITANTE DE LA MEDIDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

En el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, dentro del título quinto, denominado "Actos prejudiciales", se encuentra el capítulo V, intitulado "De las providencias precautorias", las cuales son instrumentos que tienen como fin conservar la materia del litigio, así como evitar un grave e irreparable daño a las mismas partes o a la sociedad que, por encontrarse dentro del título de actos prejudiciales, implica que pueden obtenerse mediante la tramitación de un procedimiento antes de iniciarse el juicio principal (acto prejudicial); empero, la inscripción de la demanda civil ante el Registro Público de la Propiedad, que se solicite dentro del juicio, también participa de esa naturaleza y, por tanto, válidamente puede equipararse a una providencia precautoria. En ese sentido, tomando en cuenta los efectos publicitarios que conlleva la anotación registral preventiva y su fin de que se conozca que el inmueble materia de la controversia está sujeto a litigio, debe considerarse que podría causar daños y perjuicios a la contraparte de la solicitante de la medida, en tanto que tal publicidad podría inhibir a los interesados para realizar alguna transacción respecto del inmueble de que se trate, lo que justifica el otorgamiento de la fianza, en términos del artículo 192 del ordenamiento en cita, tendente a cubrir los probables daños y perjuicios que se pudieran ocasionar con la citada anotación registral preventiva.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
VII.1o.C.27 C (10a.)

Amparo en revisión 208/2015. Octavio Lagunés López. 25 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Alfredo Sánchez Castelán. Secretario: Froylán de la Cruz Martínez.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

ANTECEDENTES PENALES. NO LOS CONSTITUYEN LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES DE CAUSAS PENALES QUE SE ACUMULARON, POR LO QUE DEBE CONSIDERARSE AL INculpADO COMO DELINCUENTE PRIMARIO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LOS MÉTODOS ALTERNOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO. Los registros de causas penales acumuladas y resueltas en una misma sentencia no constituyen antecedentes penales del inculcado, por lo que su existencia no impide que deba considerársele como delincuente primario para efectos de la procedencia de los métodos alternos contemplados en la Ley de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco, en términos de su artículo 5o. Ello es así, toda vez que aun cuando se advierta que al acusado se le instruyeron varios procesos penales por diversos delitos, los cuales se acumularon y resolvieron en un mismo fallo por estar relacionados, lo cierto es que no se dictó sentencia ejecutoriada previa en alguno de esos procesos, precisamente porque se ordenó su acumulación; de ahí que si dichos asuntos se resolvieron a través de una misma sentencia, no existe registro de antecedentes penales del inculcado que impida que deba tenersele con la calidad de delincuente primario, y pueda tener acceso a los métodos alternos de solución de conflictos que contempla la referida ley.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
III.2o.P92 P (10a.)

Amparo directo 169/2015. 15 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Vázquez Marín. Secretaria: Elsa Beatriz Navarro López.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. SI EL JUEZ DE CONTROL ADVIERTE QUE LOS HECHOS IMPUTADOS A LA PERSONA QUE COMPARECIÓ A LA AUDIENCIA INICIAL ACONTECIERON ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE, PERO NO DETERMINAR AQUEL POR ESE MOTIVO. Cuando una persona comparece a la audiencia inicial, la competencia del Juez de control es el presupuesto para que pueda pronunciarse sobre su vinculación a proceso, de otro modo ese pronunciamiento provendría de una autoridad que carece de atribuciones para ello, lo cual no es viable, salvo que se trate de un asunto urgente cuya resolución no admita demora. Luego, en aquellos casos en que el Juez de control advierta que los hechos imputados a la persona que atendió la citación acontecieron antes de la entrada en vigor del sistema penal acusatorio, debe declararse incompetente, pero no determinar auto de no vinculación a proceso por ese motivo pues, de lo contrario, emitiría una resolución sin estar facultado para ello.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
XXII.4o.1 P (10a.)

Amparo en revisión 183/2015. 3 de septiembre de 2015. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidente y Ponente: Carlos Hinostrosa Rojas. Secretario: Carlos Alberto Leal González.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA QUE EL JUEZ DE CONTROL PUEDA DETERMINAR SI EL HECHO IMPUTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACUSADO ES O NO CONSTITUTIVO DE DELITO, DEBE ANALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL ILÍCITO CORRESPONDIENTE, ESTO ES, SUS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS.

De la interpretación armónica de los artículos 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales, se colige que para el dictado de un auto de vinculación a proceso, es necesario que de los antecedentes de investigación expuestos por el Ministerio Público se adviertan datos de prueba (indicios razonables) que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Ahora bien, lo anterior no puede lograrse sin antes determinar el delito, es decir, la conducta típica, antijurídica y culpable prevista por el legislador como merecedora de una sanción penal. Esto es así, porque si no se establece con precisión el ilícito con todos los elementos normativos y subjetivos específicos que lo integran, esa circunstancia provoca que no se esté en aptitud de determinar si el hecho extraído de los datos de prueba encuadra como delito, pues es necesario que el Juez de control conozca cuál es el ilícito materia de la imputación, lo que implica –inmediata o intrínsecamente– que éste efectúe un análisis de los elementos de la descripción típica del delito correspondiente, esto es, sus elementos objetivos, normativos y subjetivos específicos previstos en la ley, que le permitan calificar si los hechos que el Ministerio Público imputa al acusado son o no constitutivos de delito y, posteriormente, determinar con base en aquéllos si se desprenden indicios razonables que permitan suponer que efectivamente se cometió, lo que no se logra, sin antes analizar los elementos mencionados; máxime que este estudio contribuye al respeto del derecho de defensa del inculcado y crea seguridad jurídica, incluso, conlleva que se prepare adecuadamente la defensa para desvanecer la imputación o la pena que pretenda imponerse en la etapa del juicio correspondiente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.20 P (10a.)

Amparo en revisión 175/2015. 7 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EL IMPUTADO SOLICITÓ LA PRÓRROGA A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL PARA QUE SE LE RESUELVAN SU SITUACIÓN JURÍDICA, EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ EN APTITUD DE REQUERIR QUE SE DECRETE AQUÉL, PREVIAMENTE A ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA CELEBRADA CON MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONSTITUCIONAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MORELOS). De la intelección de los artículos 272, 273, 275, 278 y 280 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Morelos abrogado, se advierte una regla básica de temporalidad para el efecto de que el Ministerio Público esté en aptitud de requerir y motivar la solicitud de vinculación a proceso, a saber, inmediatamente después de que el imputado haya rendido su declaración o manifestado su derecho a no declarar. Regla básica que cuenta con una excepción, la cual se materializa en caso de que el imputado solicite la prórroga a que alude el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para que le sea resuelta su situación jurídica, pues no debe perderse de vista que el nuevo sistema penal acusatorio se rige, entre otros, por el principio de igualdad, y que la representación social está obligada a obrar con absoluta lealtad con el imputado y su defensor; por tanto, al materializarse dicha excepción, el Ministerio Público está en aptitud de solicitar la vinculación a proceso previamente a ordenar la suspensión de la audiencia celebrada con motivo de la ampliación del plazo constitucional y, una vez que continúe ésta, en la cual la defensa podrá presentar medios de prueba, el representante social deberá relatar los antecedentes con los que a su consideración establezcan que se cometió un hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado participó en él.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
XVIII.5o.1 P (10a.)

Amparo en revisión 498/2014. 19 de marzo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Justino Gallegos Escobar. Secretario: Leonardo Sergio Vázquez Hernández.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

AYUDA SINDICAL POR DEFUNCIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL. CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DEL RECLAMO FORMULADO POR EL BENEFICIARIO DE UN TRABAJADOR FALLECIDO. La prestación de ayuda sindical por defunción de los trabajado-

res del seguro social, contenida en el Reglamento del Fondo de Ayuda Sindical por Defunción 2011, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, al ser de carácter extralegal, por regla general, debe acreditarse por quien la solicita; sin embargo, tratándose del reclamo formulado por el beneficiario de un trabajador finado, la carga de la prueba de acreditar que éste realizó por lo menos 120 aportaciones sindicales en términos del artículo 17 del mencionado reglamento, no puede ser atribuida al beneficiario, por no encontrarse en las mismas condiciones que el trabajador, sino que le corresponde al sindicato, quien tiene los medios para demostrar ese supuesto, ya que los descuentos se realizan por el Instituto Mexicano del Seguro Social, a petición del Comité Ejecutivo Nacional del referido sindicato.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL
OCTAVO CIRCUITO.

VIII.2o.C.T.1 L (10a.)

Amparo directo 550/2015. Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sección XII. 12 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Gabriel Olvera Corral. Secretaria: Luz Adriana Campos Acosta.

Amparo directo 598/2015. Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, Sección XVI, Durango. 10 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Gabriel Olvera Corral. Secretario: Luis Cristóbal Olvera Jiménez.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA FALTA DE RESPUESTA Y LA POSTERIOR CONTESTACIÓN DE UNA PETICIÓN FORMULADA EN EL CONTEXTO DEL PROCESO DE ELECCIÓN DEL RECTOR.

La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 19/2010, estableció que el juicio de amparo es improcedente contra el acto derivado del ejercicio de la autonomía de las universidades públicas, consistente en el nombramiento de rector. Partiendo de ello y de los razonamientos que llevaron a la emisión de dicho criterio, se colige que si la falta de respuesta a un escrito y la posterior contestación dada a tal solicitud se ubican en el contexto del proceso de elección del rector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, lo que implica que están inmersos en el ámbito de las competencias comprendidas en el principio de autogobierno de la universidad, el cual deriva de la garantía institucional de autonomía del cual aquélla debe gozar; entonces, tales actos no pueden estimarse de autoridad para efectos de la procedencia del juicio constitucional. Así, conforme a la terminología empleada por la Ley de Amparo vigente, tales actos no modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, atinentes a quien formuló la solicitud, ni pueden considerarse omisiones que, de realizarse creen, modifiquen o extingan dichas situaciones jurídicas, pues la petición se presenta en un ámbito trascendente exclusivamente al interior de la universidad, en que no resulta constitucional ni legalmente posible que reciba órdenes o instrucciones de ningún órgano exterior en la toma de sus decisiones y en el cual sus funcionarios actúan bajo un grado de discrecionalidad para la determinación de sus procesos de selección y calificación; de tal forma que el juicio de amparo promovido en su contra es improcedente.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.A.93 A (10a.)

Amparo en revisión 382/2015. 13 de enero de 2016. Unanimidad de votos. Ponente: José Eduardo Téllez Espinoza. Secretario: Álvaro Lara Juárez.

Nota: La tesis de jurisprudencia 1a./J. 19/2010 citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXI, marzo de 2010, página 918, con el rubro: "UNIVERSIDADES PÚBLICAS. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ACTO DERIVADO DEL EJERCICIO DE SU AUTONOMÍA, CONSISTENTE EN EL NOMBRAMIENTO DE RECTOR."

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

BONO DE PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL. AL TRATARSE DE UNA PRESTACIÓN EXTRALEGAL, SI DEMANDAN SU APLICACIÓN, DEBEN ACREDITAR LA EXISTENCIA DE LA CLÁUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO QUE LA PREVÉ, DEL REGLAMENTO QUE REGULA SU OTORGAMIENTO Y EL DERECHO A PERCIBIRLA.

Conforme a la cláusula 18a. transitoria del Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, sus trabajadores de base tendrán derecho a gozar de un bono de productividad, eficiencia y calidad, el cual estimule los resultados extraordinarios de cada trabajador en consideración a las funciones que desarrolle, de acuerdo con lo establecido en dicho contrato, y el otorgamiento de ese bono estará sujeto al reglamento que para tal efecto se establezca, conforme al estudio realizado por la Comisión Mixta que integran las partes; además, dicho bono no será parte integrante del salario, ni se computará para efectos de jubilación o pensión. En consecuencia, el trabajador que demande al Instituto Mexicano del Seguro Social la aplicación del bono de productividad, eficiencia y calidad, debe demostrar su existencia y el contenido de la norma que regula el beneficio que invoca, a saber, tanto de la cláusula del contrato colectivo de trabajo en la que funda su acción, como del reglamento que rige su otorgamiento, así como el derecho que le asiste a percibirlo, esto, por tratarse de una prestación extralegal, toda vez que no deriva de la Ley Federal del Trabajo, sino del pacto colectivo, y es exigible en los términos acordados por las partes, dado que las cláusulas que contienen prestaciones en favor de los trabajadores que exceden las establecidas en la legislación mencionada, son de interpretación estricta, conforme a la jurisprudencia 2a./J. 128/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXII, septiembre de 2010, página 190, de rubro: "CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO. LAS CLÁUSULAS QUE CONTIENEN PRESTACIONES EN FAVOR DE LOS TRABAJADORES, QUE EXCEDEN LAS ESTABLECIDAS EN LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, SON DE INTERPRETACIÓN ERICTA."

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.4o.T.2 L (10a.)

Amparo directo 785/2015. Luz María Moreno Galaviz y otros. 28 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Hernández Núñez. Secretario: Luis Alberto Sáenz Cárdenas.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA POR INACTIVIDAD PROCESAL. ES INAPLICABLE EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DEMANDAN ALIMENTOS A FAVOR DE MENORES, PERO SÍ OPERA CUANDO TENGA UN IMPACTO POSITIVO SOBRE ÉSTOS, ATENTO AL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ [LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS XIX.1o.A.C.51 C)].

Una nueva reflexión y análisis del tema abordado en el criterio sostenido por este Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis XIX.1o.A.C.51 C, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2697, de rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. OPERA CUANDO NO SE HAYA PRACTICADO EL EMPLAZAMIENTO Y SE TRATE DE JUICIOS DE ALIMENTOS PARA MENORES DE EDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).", en el que se estimó decretar la caducidad de la instancia por inactividad procesal en juicios donde se demandan alimentos a favor de menores lleva a abandonar dicho criterio. Lo anterior, debido a que de la interpretación armónica y sistemática del artículo 1 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, en relación con los numerales 4o. y 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (aun desde su redacción anterior a las reformas de octubre de dos mil once), atendiendo al interés superior del menor, deriva que el citado precepto legal impone el deber a los tribunales ordinarios de asumir una postura activa en los procesos de su conocimiento, a fin de proteger los derechos de menores, alejándose de la concepción tradicional del principio dispositivo para adoptar medidas que busquen la verdad de los hechos, así como el escenario que más les beneficie, atento a su especial situación de vulnerabilidad. En esa tesitura, la actualización de la sanción contenida en el artículo 103, fracción IV, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas (caducidad de la instancia por inactividad procesal), no es aplicable cuando se encuentra en disputa la pensión alimenticia solicitada a favor de un menor de edad quien, debido a su condición de persona en desarrollo, está

en evidente desventaja frente a personas con capacidad plena. En cambio, sí es de aplicación en aquellos asuntos en los que la caducidad de la instancia tenga un impacto positivo sobre los menores involucrados, ello en armonía con el principio de interés superior de la niñez.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y CIVIL DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

XIX.1o.A.C.10 C (10a.)

Amparo directo 668/2014. 27 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: María Inés Hernández Compeán, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Jesús Manuel Méndez Maldonado.

Nota: La presente tesis abandona el criterio sostenido en la diversa XIX.1o.A.C.51 C, de rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. OPERA CUANDO NO SE HAYA PRACTICADO EL EMPLAZAMIENTO Y SE TRATE DE JUICIOS DE ALIMENTOS PARA MENORES DE EDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).", que aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 2697.

En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 1a./J. 5/2011, de rubro: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DIRIMAN DERECHOS DE MENORES E INCAPACES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXXIII, marzo de 2011, página 159.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO DIRECTO. ES INNECESARIO DAR LA VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE ACTUALIZA ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CON MOTIVO DE LA DECISIÓN ADOPTADA POR EL PROPIO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN UN RECURSO DE REVISIÓN FISCAL RELACIONADO. El artículo 64, segundo párrafo, de la Ley de Amparo establece que si se advierte oficiosamente la actualización de una causal de improcedencia diversa a las propuestas por las partes, debe darse vista al quejoso por el término de tres días, para que manifieste lo que a su interés convenga. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P/J. 51/2014 (10a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24, de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATE-

RIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO.", estableció que dicha regla también resulta aplicable al juicio de amparo directo. Sin embargo, si la causal de improcedencia por cesación de efectos, regulada en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, se actualiza con motivo de la decisión adoptada por el propio Tribunal Colegiado de Circuito en un recurso de revisión fiscal relacionado, en el que se propuso un tema que, por técnica jurídica, se analizó en primer orden, derivado de la estrecha vinculación que existe entre ambos medios de impugnación, es innecesario dar al quejoso la vista mencionada, ya que sólo podría hacer valer aseveraciones vinculadas con el juicio de amparo directo del que es parte, mas no controvertir lo considerado en la revisión fiscal relacionada; estimar lo contrario daría lugar a trastocar lo expuesto en esta última, debido a que el motivo de improcedencia depende directamente de la decisión adoptada en el recurso de revisión fiscal, que se rige por sus propias consideraciones.

DÉCIMO SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

I.12o.A.3 A (10a.)

Amparo directo 270/2015. María Facunda Procopio Antonia. 15 de julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo César Morales Ramírez. Secretaria: Elizabeth Victoria Loperena.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. AL ACTUALIZARSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, NO ES OBLIGATORIO DAR VISTA DE OFICIO AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA PUES, DE HACERLO, SE AFECTARÍA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. Al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, respecto de la resolución impugnada, la cual se dejó insubsistente en una ejecutoria resuelta en la misma sesión, toda vez que, se concedió el amparo solicitado para efectos, en un asunto relacionado, procede sobreseer en el juicio constitucional, con fundamento en el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento. Sin que resulte necesario dar la vista que establece el párrafo segundo del

artículo 64 de la Ley de Amparo. Lo anterior debido a que, en la especie, resulta ociosa e inútil la aplicación tanto del citado precepto legal, como de las jurisprudencias P/J. 51/2014 (10a.) y P/J. 5/2015 (10a.), publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y del viernes 10 de abril de 2015 a las 9:30 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libros 12 y 17, Tomo I, noviembre de 2014 y abril de 2015, páginas 24 y 8, de títulos y subtítulos: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO." e "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. LA OBLIGACIÓN DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO, DE DAR VISTA AL QUEJOSO CUANDO ADVIERTA DE OFICIO UNA CAUSAL NO ALEGADA POR ALGUNA DE LAS PARTES NI ANALIZADA POR EL INFERIOR, PARA QUE EN EL PLAZO DE 3 DÍAS MANIFIESTE LO QUE A SU DERECHO CONVenga, SURGE CUANDO EL ASUNTO SE DISCUTE EN SESIÓN."; respectivamente, pues la resolución reclamada quedó insubsistente al concederse el amparo solicitado para efectos, al fallarse en la misma sesión el asunto relacionado; por ende, en la especie no existe la mínima posibilidad de que se supere el obstáculo relativo a la sobreveniencia de la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; de ahí que el cumplimiento de la obligación contenida en el numeral 64, párrafo segundo, de la citada ley, en este caso específico, provocaría la transgresión al derecho fundamental de justicia pronta y expedita previsto en el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues se retrasaría la resolución del juicio de amparo directo y, por ende, resulta ocioso e inútil el cumplimiento de la obligación de trato.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL OCTAVO CIRCUITO.

VIII.2o.C.T.6 K (10a.)

Amparo directo 794/2015. Aída Verónica Estrada González. 15 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de los Santos. Secretaria: María Elena Zamora Rentería.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

COMPETENCIA ECONÓMICA. CONCEPTO DE "PODER SUSTANCIAL" EN ESA MATERIA. Los artículos 13 de la abrogada Ley Federal de Competencia Económica y 11 a 13 de su reglamento, establecen un marco regulatorio que delimita los elementos integradores del concepto "poder sustancial", al señalar que, para evaluar el que un agente económico tiene en un mercado

relevante y, en su caso, el posible abuso de su posición dominante, deben tomarse en cuenta: a) su participación en el mercado; b) la capacidad que tiene para fijar precios unilateralmente o restringir el abasto; c) las barreras de entrada; d) la existencia y poder de sus competidores; e) el acceso a insumos por éstos y el agente; f) los hechos que hubieran sido calificados como comportamientos abusivos; y, g) otros elementos que establezca la normativa aplicable. De acuerdo con los elementos enunciados, la noción de "poder sustancial" en la materia señalada, consiste en la capacidad de un agente económico para incrementar los precios de un producto o servicio por encima de su costo marginal, pero también puede definirse como la capacidad para fijar precios por encima del de competencia, entendido éste como el que se cobraría en condiciones de competencia perfecta (costo marginal).

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.122 A (10a.)

Amparo en revisión 90/2015. Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y otros. 5 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez.

Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

COMPETENCIA ECONÓMICA. EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 34 BIS 2 DE LA ABROGADA LEY FEDERAL RELATIVA PARA QUE LA COMISIÓN FEDERAL EN LA MATERIA RECABE INFORMACIÓN DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PUEDE PRORROGARSE, SIEMPRE QUE SEA POR CAUSA JUSTIFICADA Y NO EXCEDA EL LAPSO PARA CONCLUIR LA INVESTIGACIÓN.

El artículo 34 bis 2, primer párrafo, de la abrogada Ley Federal de Competencia Económica dispone que cualquier persona que tenga conocimiento o relación con algún hecho investigado por la comisión federal relativa o con la materia de sus procedimientos en trámite, está obligada a proporcionar, en el plazo de diez días, la información, cosas o documentos que les sean requeridos. En estas condiciones, si bien es cierto que el numeral citado no prevé expresamente que el plazo aludido sea prorrogable, también lo es que dicha posibilidad se deduce de los artículos 60 y 61 del reglamento de la propia ley, los cuales disponen que el órgano de defensa de la competencia debe proveer lo conducente

te para lograr la conclusión eficaz de los procedimientos de su conocimiento pues, por mandato legal, deberá dictar todas las medidas necesarias para encausarlo, por lo cual, está facultado para allegarse, antes de emitir la resolución definitiva, de todos los elementos de convicción necesarios para conocer la verdad, sin que le sean aplicables las limitaciones y prohibiciones que rigen para los agentes económicos. Por tanto, el plazo referido puede prorrogarse, siempre que sea por causa justificada y no exceda el lapso para concluir la investigación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.118 A (10a.)

Amparo en revisión 90/2015. Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y otros. 5 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez.

Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

COMPETENCIA ECONÓMICA. LA EXIGENCIA DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN QUE PERMITA DETERMINAR EL MERCADO RELEVANTE Y EL PODER SUSTANCIAL DE UN DETERMINADO AGENTE ECONÓMICO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 33 BIS, FRACCIÓN I, DE LA ABROGADA LEY FEDERAL RELATIVA, NO IMPLICA QUE AMBOS ELEMENTOS SE DEFINIRÁN, EXCLUSIVAMENTE, CON LA INFORMACIÓN Y LAS PRUEBAS APORTADAS POR EL SOLICITANTE. El artículo 33 bis de la abrogada Ley Federal de Competencia Económica estatuye un modelo de procedimiento para resolver sobre las siguientes cuestiones: a) competencia efectiva; b) existencia de poder sustancial en un mercado relevante; y, c) otros términos análogos. Así, respecto del segundo inciso, conforme a la fracción I de ese numeral, el denunciante debe presentar la información que permita determinar el mercado relevante y el poder sustancial de un cierto agente económico, en términos de los diversos 12 y 13 del propio ordenamiento; sin embargo, esta disposición no debe entenderse en el sentido de que ambos elementos se definirán, exclusivamente, con la información y las pruebas aportadas por el solicitante, que se exigen como un referente que justifique la seriedad de su petición, pues no deben perderse de vista las dificultades que representan el acceso y la posibilidad de recabar

todos los elementos necesarios para el fin aludido. Sostener la interpretación contraria equivaldría a obligar al solicitante a contar con información que incluso puede estar clasificada como reservada o confidencial y que incumbe exclusivamente a los agentes económicos que intervienen en el proceso de competencia del mercado en el que se desarrolla la investigación. En consecuencia, la labor descrita corresponderá, en última instancia, a la autoridad de defensa de la competencia, quien decidirá con apoyo en la información obtenida durante la fase de investigación.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.117 A (10a.)

Amparo en revisión 90/2015. Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y otros. 5 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez.

Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CASO EN EL QUE EL ACTO RECLAMADO HA COMENZADO A EJECUTARSE EN UN DISTRITO Y SIGUE EJECUTÁNDOSE EN OTRO (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO). El segundo párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo establece la competencia del Juez de Distrito adscrito al lugar en el que se haya presentado la demanda, cuando se reclame un acto cuya ejecución ha comenzado en un distrito y continúa ejecutándose en otro. Sin embargo, ello no quiere decir que la referida competencia corresponda al juzgador que elija el quejoso al presentar su libelo inicial, pues el citado precepto debe interpretarse de manera sistemática con el párrafo primero del propio numeral y el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que dispone, como aspecto principal, el lugar donde se ejecute, se vaya a ejecutar o se haya ejecutado el acto impugnado, principio que ya se contenía en el artículo 36 de la Ley de Amparo abrogada. Así, la intelección de la hipótesis en cita indica que para efectos de fincar la competencia del Juez Federal, se tomará en cuenta como aspecto principal el lugar donde deban ejecutarse, traten de ejecutarse o se hayan ejecutado los actos reclamados y, de manera secundaria, aquel en donde el quejoso presentó su demanda, el

cual deberá ser necesariamente alguna de las circunscripciones en las que residan dichos órganos jurisdiccionales.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.2o.T.10 K (10a.)

Conflicto competencial 4/2015. Suscitado entre el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Puebla y el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Trabajo, con residencia en el Distrito Federal. 17 de abril de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Mendoza Montes. Secretario: Manuel María Morteo Reyes.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DE UN INCIDENTE NO ESPECIFICADO EN MATERIA PENAL. SI LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR ESTA RESOLUCIÓN, NO SE TRADUCEN EN UNA EJECUCIÓN MATERIAL DEL ACTO RECLAMADO, DEBIDO A QUE NINGUNA CONSECUENCIA INMEDIATA Y DIRECTA ORIGINAN EN EL DERECHO SUSTANTIVO ALEGADO (LIBERTAD), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA. Con el objeto de

determinar la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo, es necesario razonar si conforme a la naturaleza del acto reclamado requiere o no de ejecución material, y para poder establecerlo, deben considerarse los efectos que produce objetiva y jurídicamente en el derecho sustantivo alegado. De esta forma, los efectos producidos por la decisión reclamada que confirmó aquella que declaró improcedente el incidente no especificado —en el cual se pretendía el análisis de violaciones procesales cometidas en la averiguación previa, lo arbitrario de la detención, las omisiones en las formalidades esenciales del procedimiento, el quebranto al principio de presunción de inocencia, la existencia de tortura y la inexacta valoración de las pruebas—, no se traducen en una ejecución material, ya que ninguna consecuencia inmediata y directa producen en el derecho sustantivo alegado, en el caso, la libertad, debido a que la privación de ésta, no es resultado de esa determinación, sino de la sentencia condenatoria que existe en su contra. Luego, si la finalidad del incidente no especificado de donde emana el acto reclamado, tenía como objetivo que se analizaran aspectos propios del proceso penal, que ya es cosa juzgada, es dable determinar que éste sólo tiene un efecto mediato e indirecto en relación con el derecho subjetivo inmerso, pero no conlleva una ejecución material directa en relación con la libertad del quejoso. Lo anterior es así, pues de acuerdo con el marco normativo dentro del cual se pretende la procedencia de un incidente no especificado para replantear una causa penal de fondo y que es cosa juzgada, la determinación de improcedencia no acarrea ningún tipo de ejecución ma-

terial, pues no se trata del trámite de algún beneficio que incida directamente en la libertad; por tanto, no trasciende a la esfera material, al mundo fáctico, dado que su impacto es meramente declarativo, ya que únicamente determinó si, en su caso, fue correcta la decisión del juzgador de declarar improcedente el incidente no especificado de su índice. En consecuencia, aquél no puede reputarse como un hecho de ejecución material, por lo que se ubica dentro de la tercera regla de competencia prevista por el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.
II.2o.P.17 K (10a.)

Conflicto competencial 9/2015. Suscitado entre los Juzgados Séptimo de Distrito y Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales, ambos en el Estado de México. 10 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Pérez Lozano. Secretaria: Yasmín Rivera Cortés.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE CONTROVIERTEN LA NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE UN IMPUESTO POR PAGO DE LO INDEBIDO, CON BASE EN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, SI ÉSTA NO SE RECLAMÓ OPORTUNAMENTE EN LA VÍA INDIRECTA CON MOTIVO DEL ENTERO DEL TRIBUTO. Los efectos de la negativa de la solicitud de devolución de un impuesto por pago de lo indebido emitida en sede administrativa y de la sentencia del juicio contencioso administrativo que reconoció su validez, son una extensión o consecuencia de la afectación que, en su momento, ocasionó al contribuyente el entero del tributo, pues esa negativa no trae consigo un menoscabo en su esfera jurídica nuevo e independiente del producido por aquél y, por tanto, no constituye un segundo o ulterior acto de aplicación de la norma fiscal, sino uno vinculado con el pago indicado. En consecuencia, son inoperantes los conceptos de violación en el amparo directo que controvierten la negativa a la devolución solicitada, con base en la inconstitucionalidad de una ley, si ésta no se reclamó oportunamente en la vía indirecta con motivo del entero de la contribución, toda vez que, al no haber controvertido su regularidad constitucional en ese momento, precluyó el derecho del contribuyente para hacerlo en una instancia ulterior.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO
SEXTO CIRCUITO.
XVI.1o.A.73 A (10a.)

Amparo directo 143/2015. Dirección Corporativa de México, S.A. de C.V. 27 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE SOSTIENEN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA AUTOLIQUIDACIÓN DE CONTRIBUCIONES, SI EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ORIGEN SE IMPUGNARON LOS RECIBOS DE PAGO QUE LA CONSTITUYEN.

Cuando los actos impugnados en el juicio contencioso administrativo hayan sido los recibos de pago que constituyen la autoliquidación de una contribución, resultan inoperantes los conceptos de violación en el amparo directo contra la sentencia definitiva correspondiente, que sostengan la inconstitucionalidad de las normas que regulan aquélla, pues no se actualiza la condición de la existencia de un acto de autoridad que las aplique. Para sustentar lo anterior, se atiende a que conforme al artículo 61, fracción XIV, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, para la impugnación de una norma general con motivo de su primer acto de aplicación, resulta optativo para el quejoso agotar los recursos secundarios procedentes o impugnar, desde luego, la norma general en el juicio de amparo, y que conforme a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO.", la autoliquidación de un tributo no constituye un acto de autoridad para efectos del amparo contra leyes, aunque tratándose del amparo indirecto se considere un acto de aplicación, solamente para el cómputo del plazo de impugnación correspondiente. En ese contexto, el acto de aplicación de una norma contra el cual se agotó el procedimiento ordinario y que, por tanto, permite el cuestionamiento de su constitucionalidad mediante la expresión de conceptos de violación en el amparo directo, debe ser uno de autoridad, lo cual, incluso, es congruente con la naturaleza del juicio contencioso administrativo cuando se sigue para obtener la nulidad del acto o resolución administrativa, cuya materia de litis es precisamente la legalidad del acto de autoridad. Luego, con independencia de lo correcto o no de la admisión de la demanda en el juicio contencioso aludido contra la autoliquidación, y aunque finalmente la sentencia haya analizado los planteamientos de ilegalidad atribuidos a dichos recibos para concluir su validez, ello no hace procedente el estudio de los conceptos de violación indicados, pues si no existe el acto de una autoridad que haya aplicado la norma, ya sea en la sentencia definitiva, durante el procedimiento, en un acto procesal que no haya revestido ejecución irreparable o en la resolución o acto de origen;

entonces, los conceptos de violación mencionados son inoperantes, pues se desnaturalizaría la técnica de la impugnación de normas en el amparo directo, al inadvertir un impedimento técnico para abordar el aludido análisis, en virtud de que no podrían concretarse los efectos de una eventual concesión de amparo para que la responsable deje insubsistente la resolución reclamada e inaplique la disposición legal en el nuevo acto que emita en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en vista de que no se advierte que alguna autoridad hubiera aplicado las normas controvertidas, por la misma naturaleza de la autoliquidación.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
CUARTO CIRCUITO.

IV.2o.A.113 A (10a.)

Amparo directo 132/2015. Reynaldo Tafich Canavati. 12 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Mario Enrique Guerra Garza.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 153/2007 citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 367.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CONDENA CONDICIONAL Y SUSTITUTIVOS DE LA PENA. CUANDO UNA AUTORIDAD DEL FUERO COMÚN, EN EJERCICIO DE LA COMPETENCIA CONCURRENTE, CONOCE DE UN DELITO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE SALUD, DEBE RESOLVER RESPECTO DE DICHS BENEFICIOS, ATENTO A LOS ARTÍCULOS 70 Y 90 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y NO A LO QUE ESTABLEZCA LA LEY SUSTANTIVA LOCAL CORRESPONDIENTE. El artículo 73, fracción XXI, inciso b), último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone que corresponde al Congreso de la Unión establecer los delitos federales, las penas y las sanciones que por ellos deban imponerse, así como que en las leyes federales deben establecerse los supuestos en los que las autoridades del fuero común pueden conocer y resolver sobre esos delitos federales. Por su parte, en relación con los delitos establecidos en la Ley General de Salud, ésta, en sus artículos 474, párrafo primero y 480, prevé los casos en que las autoridades locales podrán conocer y resolver sobre aquéllos, o ejecutar las sanciones y medidas de seguridad, disponiendo que aquéllas deben observar el procedimiento penal y de ejecución señalado por la legislación local respectiva; es decir, la que regula el procedimiento, salvo los supuestos expresamente señalados, en los que se observarán las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Penales; de ahí que en los casos de competencia concurrente, cuando una autoridad del fuero común conoce de un delito previsto en la mencionada ley especial (delito contra la salud en su modalidad

de narcomenudeo), para la imposición de sanciones y medidas de seguridad, y para resolver cualquier otra cuestión de índole sustantiva, como sucede con el beneficio de la condena condicional y los sustitutivos de la pena, que están relacionados directamente con el ilícito, debe observar los artículos 70 y 90 del Código Penal Federal, y no lo que al respecto se establezca en la ley sustantiva local correspondiente, dado que la competencia concurrente sólo permite a la autoridad local aplicar el procedimiento previsto en la legislación estatal, no así el derecho sustantivo del Estado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL TRIGÉSIMO CIRCUITO.
XXX.2o.1 P (10a.)

Amparo directo 774/2015. 30 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Álvaro Ovalle Álvarez. Secretario: Víctor Cisneros Castillo.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CONFLICTO COMPETENCIAL. CORRESPONDE DIRIMIRLO A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO SE SUSCITA ENTRE UNA DE SUS SALAS REGIONALES Y UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN. Acorde con el artículo

701 de la Ley Federal del Trabajo, cuando una Junta de Conciliación y Arbitraje se declara incompetente, tiene la obligación de remitir el expediente a la Junta o tribunal que estime competente y, si éste o aquélla se declaran a su vez incompetentes, enviará el expediente a la autoridad que deba decidir la competencia. A su vez, del diverso numeral 705, fracción III, de la citada ley, se infiere que para que un conflicto competencial deba ser resuelto por las instancias del Poder Judicial de la Federación, se requiere que el mismo se suscite entre: a) Juntas Locales o Federales de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; b) Juntas Locales y Juntas Federales de Conciliación y Arbitraje; c) Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje de diversas entidades federativas; y, d) Juntas Locales o Federales y otro órgano jurisdiccional. En este sentido, los Tribunales Colegiados de Circuito, tratándose de la materia laboral, sólo tienen competencia legal para conocer y resolver un conflicto competencial en las hipótesis mencionadas. De ahí que, cuando el conflicto para conocer de una demanda laboral surja entre una Junta de Conciliación y Arbitraje y una Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, su resolución no incumbe a un Tribunal Colegiado de Circuito —al no encuadrar ese tipo de asuntos en ninguno de los referidos supuestos— sino a la Sala Superior de ese Tribunal Electoral, en términos del artículo 189, fracción XIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en concordancia con los diversos 94 y 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; ya que, de conformidad con esos preceptos,

el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por su naturaleza jurídica, se erige en un órgano público que goza de independencia y autonomía para garantizar la absoluta transparencia, imparcialidad y objetividad de sus funciones; máxime si se toma en consideración que el marco jurídico de sus ámbitos competenciales, apunta a establecer un régimen especial de independencia para las instituciones electorales y para resolver los citados conflictos laborales, al ubicársele como parte del Poder Judicial de la Federación, derivado de su naturaleza como órgano autónomo del poder público, teniendo facultad para decidir y actuar sin más limitaciones que las previstas en las leyes y sin estar subordinado a otros órganos o poderes públicos. De lo que se sigue que, por sus atribuciones, su Sala Superior se encuentra en un nivel jerárquico similar al de un Tribunal Colegiado de Circuito, al estar constitucional y legalmente facultada para conocer y resolver, entre otros asuntos, de "los conflictos de competencia que se susciten entre las Salas Regionales"; entendiéndose que, dentro de esos supuestos, cabe precisamente el suscitado entre una de sus Salas Regionales y una Junta de Conciliación y Arbitraje, al ser un órgano constitucionalmente autónomo, independiente, con patrimonio propio y que forma parte del Estado, lo cual conduce a determinar que ese tipo de conflictos laborales deben ser conocidos y resueltos por dicho órgano jurisdiccional, al aplicar la misma regla imperante para aquellos conflictos suscitados entre los poderes tradicionales y sus trabajadores, en atención al principio general que establece que donde se aplique la misma razón, debe existir igual disposición.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

XVI.1o.T.24 L (10a.)

Conflicto competencial 11/2015. Suscitado entre la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Guanajuato, Guanajuato y la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, correspondiente a la Segunda Circunscripción Plurinominal, con sede en Monterrey, Nuevo León. 6 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto Díaz Ortiz. Secretaria: Marisol Estrada Orantes.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca lo resuelto el 14 de enero de 2016 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la solicitud de ejercicio de la facultad prevista en el artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 3/2014, así como en las consultas a trámite 2/2013 y 2/2014.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CONFRONTACIÓN. PARA QUE LA DILIGENCIA RELATIVA PRACTICADA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA PUEDA TENER VALIDEZ DURANTE EL PROCESO, ES NECESARIO QUE EL DEFENSOR DEL

INCUPLADO ESTÉ PRESENTE DURANTE SU DESARROLLO, PARA SALVAGUARDAR SU DERECHO DE DEFENSA ADECUADA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

Para que la diligencia de confrontación a que se refieren los artículos 217 a 224 Bis del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, practicada ante el Ministerio Público en la etapa de averiguación previa, pueda tener validez durante el proceso, sin transgredir los derechos humanos del indiciado, de conformidad con los artículos 1o. y 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto vigente hasta la implementación del sistema penal acusatorio), con el fin de salvaguardar el derecho de defensa adecuada, al tratarse de una diligencia en la que el sujeto pasivo ignora los datos de su agresor, como son nombre, apellidos, domicilio y demás circunstancias, pero manifiesta poder reconocerlo si se lo presentaren a la vista, es necesario que el defensor del inculcado esté presente durante su desarrollo, pues sólo así podrá conocerse la eficacia del testimonio de la persona que realiza la imputación y la plena identificación de quien presuntivamente cometió el delito.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.P.43 P (10a.)

Amparo directo 171/2015. 3 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Arturo Valle Castro.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CONTINENCIA DE LA CAUSA. SI EN EL RECURSO DE REVISIÓN SE IMPUGNA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE DECIDE SOBRE EL DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA (EL CUAL PUEDE CONTROVERTIRSE EN QUEJA) Y EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, PARA NO DIVIDIR AQUÉLLA, DEBE ESTUDIARLOS EN SU CONJUNTO, SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LA TEMPORALIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO PARA SU INTERPOSICIÓN, RESPECTO DEL ACTO QUE FUERE MATERIA DEL RECURSO DE QUEJA (DESECHAMIENTO).

Si en el recurso de revisión se impugna la determinación del Juez de Distrito que decide sobre dos aspectos: el desechamiento de la ampliación de la demanda (el cual puede controvertirse a través del recurso de queja) y el sobreseimiento fuera de la audiencia, atento al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en función del derecho fundamental de justicia completa previsto en dicho dispositivo, el Tribunal Colegiado de Circuito, para no dividir la continencia de la causa, debe estudiar en su conjunto las resoluciones

mencionadas, ello ante la imposibilidad de dividir un fallo para su respectiva impugnación, pues la continencia de la causa opera en aquellos asuntos en los que las acciones o cuestiones jurídicas mixtas se encuentren vinculadas en el amparo, es decir, que tengan el mismo origen, ya que en estos casos, existe la posibilidad o el riesgo de que se arribe a pronunciamientos contradictorios, en la medida en que la determinación de un Juez de Distrito en el que desecha la ampliación de la demanda y sobresee el amparo fuera de la audiencia, están vinculadas entre sí. Lo anterior, siempre que el recurso de revisión se hubiese interpuesto dentro de la temporalidad que para el diverso de queja prevé el dispositivo 98, que es aplicable en los supuestos del inciso a) de la fracción I del artículo 97, ambos de la Ley de Amparo, para recurrir el desechamiento de la ampliación de la demanda, toda vez que no procedería el estudio en la revisión del acto vinculado materia de queja si no se cumple con tal requisito de procedencia, pues de hacerlo, se daría una oportunidad mayor a la prevista por la ley para controvertir una determinación de esa naturaleza.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.P.6 K (10a.)

Amparo en revisión 233/2015. 3 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secretario: Enrique Alejandro Santoyo Castro.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL EX OFFICIO. LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE JALISCO, NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DEL ARTÍCULO 173 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, AL TRATARSE DE UNA NORMA QUE RIGE EL JUICIO DE ORIGEN QUE NO LES CORRESPONDE APLICAR. No corresponde a los citados órganos de control constitucional examinar, de oficio, la inconstitucionalidad del mencionado precepto, el cual rige en el procedimiento penal, ya que tal asignación compete, en su caso, a las autoridades judiciales encargadas de su aplicación (Jueces y Salas de instancia), pues sostener lo contrario, es decir, que dichos juzgados federales están facultados para ejercer un control difuso de regularidad constitucional *ex officio*, y declarar en amparo indirecto, la inconstitucionalidad de dicha disposición contenida en la ley que rige el procedimiento de origen, generaría inseguridad jurídica para las partes, quienes parten de la base de que en el juicio han operado instituciones como la preclusión, por virtud de la cual han ejercido sus derechos procesales en torno a las decisiones emitidas

por el juzgador. Sin que lo anterior signifique que se impongan límites a los citados juzgados federales que por disposición constitucional tienen a su cargo el conocimiento de los mecanismos para la protección de la Norma Fundamental, para cumplir con el imperativo que ésta ordena ni que se desconozcan las obligaciones adquiridas en diversos tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano en el sentido de proteger en todo momento los derechos humanos de los justiciables, pues los órganos federales encargados de ejercer el control de regularidad constitucional concentrado cuentan con las herramientas necesarias para cumplir con ese mandato, en cuya labor deben observar las reglas que tradicionalmente han normado las instituciones que tienen a su cargo, de manera que en el ejercicio de este control concentrado, pueden emprender el análisis sobre la constitucionalidad de una norma a partir: (i) en respuesta a la pretensión formulada por el quejoso; (ii) por virtud de la causa de pedir advertida en el planteamiento de los conceptos de violación o en agravios; o bien, (iii) con motivo de la utilización de la institución de la suplencia de la queja deficiente, en términos de la Ley de Amparo que, en ciertas materias, permite ese análisis aun ante la ausencia total de conceptos de violación o de agravios. En las circunstancias apuntadas, no es que los citados Juzgados de Distrito estén exentos de ejercer un control difuso, sino que sólo pueden hacerlo en el ámbito de su competencia, es decir, respecto de las disposiciones que ellos mismos están facultados para aplicar, específicamente, las contenidas en los ordenamientos que rigen el procedimiento del juicio de amparo, esto es, la Ley de Amparo, la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio de aquélla; ello, acorde con las tesis P. IX/2015 (10a.) y P. X/2015 (10a.), del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 28 de agosto de 2015 a las 10:30 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 21, Tomo I, agosto de 2015, páginas 355 y 356, de títulos y subtítulos: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL *EX OFFICIO*. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO DEBEN EJERCERLO SÓLO EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA." y "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL *EX OFFICIO*. LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DE NORMAS QUE RIGEN EL JUICIO DE ORIGEN.", respectivamente.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
III.2o.P94 P (10a.)

Amparo en revisión 225/2015. 1 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Secretario: Mario Hazael Romero Mejía.

Amparo en revisión 213/2015. 8 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis González. Secretario: Enrique Espinoza Madrigal.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO.

El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso numeral 2o. de esa ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica a que se refiere la legislación procesal civil de referencia, se encuentra el denominado correo electrónico, que es un medio de transmisión de datos mediante redes informáticas (Internet), por el que es factible el envío de información que se recibe por el destinatario en forma de mensaje de texto o como dato adjunto; de ahí que la información generada o comunicada en mensajes de texto o archivos adjuntos que se transmite por medio del correo electrónico oficial, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si su recepción está certificada por el secretario de acuerdos del tribunal judicial al que se transmite, sobre la hora y fecha en que la recibió y la persona del órgano jurisdiccional federal que la remitió, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen del mensaje como el archivo adjunto que a través de éste se remita; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del mensaje de texto o dato adjunto recibido.

**TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.P41 P (10a.)**

Queja 119/2015. 11 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Medécigo Rodríguez. Secretario: Nicolás de Luna González.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE SU CONDENA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUN CUANDO HAYA PROCEDIDO LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA Y EL DEMANDADO OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE A PESAR DE NO APERSONARSE, AL REDUCIR EL JUEZ, EN EJERCICIO DEL CONTROL CONVENCIONAL *EX OFFICIO*, EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS POR SER USURARIOS.

Del citado artículo se advierte que siempre se hará condenación en costas al que fuese condenado en juicio ejecutivo y a quien lo intente si no obtiene sentencia favorable. Ahora bien, el término "condenado en juicio" alude a quien no obtuvo sentencia benéfica, ya sea el actor o el demandado; mientras que la expresión "no obtiene sentencia favorable" se refiere a la derrota o condena total. En ese sentido, en un juicio ejecutivo mercantil en el que el demandado no se apersonó a juicio y resultó procedente la acción cambiaria directa, pero el Juez, en ejercicio del control convencional *ex officio*, reduce el pago de los intereses moratorios por ser usurarios, no procede el pago de costas conforme al precepto legal en cita, pues la condena no fue total, al haber dejado de percibir el actor todo lo que pretendió en los montos que reclamó; ello, aun cuando no se contestó la demanda, ya que dicha actuación del Juez constituye una oposición oficiosa a las pretensiones del actor. Por tanto, debe considerarse que el demandado sí obtuvo una sentencia favorable a pesar de que no se apersonó, puesto que ello conlleva un beneficio económico, al no tener que erogar los intereses pretendidos en la acción.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.30 C (10a.)

Amparo directo 317/2015. Feliciano Balam Pool. 27 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

COSTAS EN LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES. NO PROCEDE SU CONDENA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO. El artículo 1084, fracción III, del Código de Comercio establece que la condena en costas siempre procederá cuando fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene sentencia favorable. Dichos juicios ejecutivos mercantiles son extraordinarios y sumarios, dirigidos a llevar a efecto los derechos que se hayan reconocido por actos o en títulos y basados en uno preconstituido con pleno valor probatorio, regulados en los artículos 1391 a 1414 del Código de Comercio. En ese sentido, las reglas de la

fracción III del citado artículo 1084, no son aplicables a los juicios orales mercantiles, debido a que éstos son de naturaleza diversa y se encuentran previstos en un título especial, que comprende del artículo 1390 Bis al 1390 Bis 50 del citado código.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.28 C (10a.)

Amparo directo 83/2015. Luis Roberto Berruco Ortiz y/o Luis Roberto Berrueco Ortiz. 8 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES OPTATIVO PARA LA PARTE ACTORA HACER VALER LA QUEJA REGULADA EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.

De acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el trámite para lograr el acatamiento de las resoluciones del tribunal puede ser sustanciado de oficio o a petición de parte, motivo por el cual, para el segundo supuesto, el artículo 58, fracción II, inciso a), subinciso 1, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo regula la queja por incumplimiento. Determinar si dicha queja es una opción para el particular o un medio de defensa que debe ser agotado previo al juicio de amparo, requiere tomar en cuenta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 17, tutela a favor de los gobernados un acceso completo a la jurisdicción, lo cual conlleva que la solución de las controversias sea efectiva e integral, desde un punto de vista material, y no únicamente formal. Ello justifica que las leyes deban asegurar la plena ejecución de las sentencias y que corresponda a los órganos de gobierno hacer que sean debidamente acatadas; además, si tales fallos son el resultado de un proceso que el justiciable se vio obligado a sustanciar por la existencia de una vulneración a sus derechos, se deben minimizar las ulteriores cargas que le sean trasladadas, como lo sería efectuar más trámites para tal efecto. Lo anterior también implica reconocer que las sentencias, como normas jurídicas individualizadas que constituyen derechos para sus beneficiarios, al causar ejecutoria generan un deber correlativo para el Estado; de ahí que sea un principio generalmente aceptado que su cumplimiento es de orden público. Sobre esa base, la interpretación del artículo 58 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, que resulta conforme con el dere-

cho de acceso a una completa solución de controversias, es en el sentido de que la queja por incumplimiento de sentencias no es forzosa para la parte actora, antes de acudir al juicio de amparo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.1o.A.32 K (10a.)

Amparo en revisión 364/2015. María del Socorro Hernández Batta. 8 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Rodolfo Alejandro Castro Rolón.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DAÑOS Y PERJUICIOS. LA AFIANZADORA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR LA DETERMINACIÓN QUE DECLARA FUNDADO EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN TRAMITADO EN UN JUICIO DE AMPARO BIINSTANCIAL.

De conformidad con el artículo 156 de la Ley de Amparo, el incidente de reclamación de daños y perjuicios constituye el procedimiento mediante el cual, entre otros supuestos, el tercero interesado solicita la entrega del monto de la garantía que exhibió el quejoso para que surtiera efectos la suspensión provisional o definitiva concedida, o ambas, una vez que la decisión del amparo fue adversa a los intereses de dicho quejoso, todo ello como una indemnización por haber paralizado la ejecución del acto reclamado. De tal manera que, por regla general, la decisión que se emite en dicho procedimiento incidental sólo afecta los intereses del quejoso o del tercero interesado, según sea su resultado, porque lo procedente o no de la reclamación de daños y perjuicios únicamente incide en la esfera jurídica y económica de ambas partes. Luego, si bien es cierto que la empresa afianzadora funge como garante del quejoso desde el momento en que emite la póliza de fianza, para que surta efectos la suspensión concedida en un juicio de amparo indirecto, no menos lo es que ello no la legitima para actuar en el incidente de reclamación de daños y perjuicios, y menos para impugnar las determinaciones respectivas, ya que su vínculo jurídico sólo existe entre ella como garante y el quejoso como garantizado, por lo que las consecuencias que surgen con motivo del cobro de la póliza deben ventilarse entre ambas partes, a la luz del contrato de póliza que las rige.

DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

I.14o.C.1 K (10a.)

Queja 270/2015. Afianzadora Sofimex, S.A. 14 de enero de 2016. Unanimidad de votos.
Ponente: Benito Alva Zenteno. Secretario: Óscar V. Martínez Mendoza.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS. AL TENER DICHA RESOLUCIÓN ÚNICAMENTE EFECTOS DECLARATIVOS Y CONSTITUIR UN ACTO FUERA DE JUICIO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.

En los procedimientos relativos a la declaración de beneficiarios, donde sólo se ventile esa cuestión, independientemente del modo en que se tramiten, esto es, por un riesgo de trabajo o en los demás supuestos previstos en los artículos 982 a 991 de la Ley Federal del Trabajo, al no estar en presencia de un conflicto entre partes sometido a decisión jurisdiccional, con independencia de que el litigio pueda estar latente pero nunca presente, y aun cuando existan diversas personas que puedan considerarse como tales, la decisión que se adopte tendrá efectos únicamente declarativos y, por esa razón, constituye un acto fuera de juicio, contra el cual procede el amparo indirecto en términos del artículo 107, fracción IV, párrafo primero, de la Ley de Amparo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

XXI.3o.C.T.1 L (10a.)

Amparo directo 667/2015. Ana María Villanueva Campechano. 29 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Luis Arroyo Alcántar. Secretario: José Noel Morales Chávez.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DEFENSOR DEL QUEJOSO PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. CUENTA CON LEGITIMACIÓN LEGAL PARA DESIGNAR AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA.

El juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objetivo se dirige a salvaguardar la supremacía del Ordenamiento Fundamental y garantía para la protección a los derechos humanos de los gobernados, con independencia del origen nacional o internacional de sus fuentes; este procedimiento se rige por principios, entre ellos, los de instancia de parte agraviada y agravio personal y directo, mismos que se encuentran vinculados intrínseca y sustancialmente; sin embargo, dichos principios tienen excepciones que se infieren de la interpretación sistemática de la Ley de Amparo, en materia penal, el artículo 6o., párrafo segundo, de dicha legislación, dispone que cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, el quejoso podrá promover el amparo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos que dicha normatividad lo permita. En ese sentido, cuando el acto reclamado deriva de un procedimiento de esa naturaleza, el defensor del quejoso, por disposición legal, cuenta con legitimación procesal activa para instar el juicio de amparo, entendiéndose por ésta la potestad legal para acu-

dir al órgano jurisdiccional con la petición de que se inicie la tramitación de juicio constitucional; de lo anterior, válidamente se colige que el defensor del quejoso cuenta con legitimación legal para autorizar a un tercero a continuar con los actos procesales inherentes a la adecuada defensa del directamente agraviado, pues resulta innegable que si la Ley de Amparo lo legitima para ejercer la acción de amparo, desde luego, es inherente a ello, la facultad de señalar autorizados en términos del artículo 12 del multicitado ordenamiento; lo contrario, implicaría ir en contra de la teleología de dicha disposición. Además, si bien este último precepto legal dispone que las facultades designadas por el quejoso o el tercero interesado en el juicio de amparo a favor de su autorizado, no son sustituibles ni delegables en un tercero, lo cierto es que la naturaleza jurídica de la figura del defensor en materia penal y del autorizado para los efectos del juicio de amparo, resulta distinta, pues mientras el primero se encuentra por disposición de la ley legitimado para accionar el juicio de amparo en nombre del quejoso, con todas las facultades que esto implica –lo que se corresponde con la facultad de autorizar a cualquier persona con capacidad legal, para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del agraviado–, el segundo actúa por virtud de la designación de la que fue objeto, mediante escrito presentado ante el juzgador por la persona legitimada o su representante; es decir, el defensor actúa en nombre y representación del quejoso, mientras el autorizado sólo tiene el carácter de representante procesal, quien, en efecto, no puede sustituir o delegar sus facultades en un tercero.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.P.42 P (10a.)

Queja 106/2015. 12 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Ángel Medécigo Rodríguez. Secretario: Fredy Emmanuel Ayala Torres.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN AGRAVADA DE NARCÓTICOS. ANTES DE REALIZAR EL CONTROL CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DEL SUPUESTO NORMATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 195, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEBE VERIFICARSE SI LA PRESUNCIÓN LEGAL RELACIONADA CON LA FINALIDAD DE LA DROGA, SE APLICÓ EN PERJUICIO DEL REO. De acuerdo con el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, antes de realizar el control concentrado del supuesto normativo previsto en el ar-

título 195, párrafo tercero, del Código Penal Federal, que regula el delito contra la salud en su modalidad de posesión agravada de narcóticos, a fin de establecer si la disposición mencionada es o no contraria a la Constitución y a los tratados internacionales en los que el Estado Mexicano es Parte, debe verificarse si la presunción legal relacionada con la finalidad de la droga se aplicó en perjuicio del reo. Por ende, si para tener por comprobada la finalidad de su posesión, el Juez de la causa toma en cuenta, no sólo la hipótesis contenida en el párrafo tercero del citado artículo, relativa a la cantidad del estupefaciente asegurado, sino diversos aspectos, verbigracia, que el sujeto activo no es adicto al enervante, el lugar en donde lo posee y la confección de sus envoltorios, entre otros, queda de manifiesto que no se aplicó en perjuicio del inculcado la presunción legal contenida en el citado artículo 195, párrafo tercero y, por ello, la aplicación del tipo penal contenido en dicho precepto no actualizó un agravio personal y directo en su perjuicio, en razón de la referida presunción, ya que su comprobación no se sustentó solamente en la cantidad del narcótico asegurado, aspecto al que se alude en el mencionado párrafo tercero del artículo 195, sino que se tuvo por justificada con base en diversas circunstancias que, justipreciadas en vía de indicios, evidencian que la posesión que detentó el reo respecto de la droga que le fue asegurada al momento de su captura, tenía cierta finalidad, motivo por el cual, en esta hipótesis, es improcedente que el Tribunal Colegiado de Circuito analice y determine la constitucionalidad o convencionalidad de la presunción legal prevista en el aludido artículo 195, párrafo tercero, del código en cita.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA
DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

XXI.1o.PA.9 P (10a.)

Amparo directo 93/2015. 25 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Dávila Gaona. Secretario: Tomás Flores Zaragoza.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SI SU DESECHAMIENTO DE PLANO OCURRIÓ PORQUE EN EL AUTO ADMISORIO EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIRTIÓ UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, ES INNECESARIO DAR VISTA PREVIAMENTE AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA. El artículo 179 de la Ley de Amparo dispone que el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, al recibir una demanda, en el plazo de tres días debe analizarla y resolver si la admite, previene al quejoso para su regularización, o la dese-

cha por encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Como se advierte, este precepto no autoriza a dar vista al quejoso con la causa de desechamiento como si fuera una "posible causa de improcedencia". Por tanto, si dicho Magistrado la desechó de plano porque en el auto admisorio advirtió un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, es innecesario otorgar al quejoso previamente la mencionada vista en términos del artículo 64, párrafo segundo, de dicha ley; sin que lo anterior lo deje inaudito, pues contra esa determinación puede interponer el recurso de reclamación previsto por el artículo 104 de la ley mencionada, en el cual podrá expresar lo que a su interés convenga en relación con la causa de improcedencia advertida en el auto que desechó su demanda. Lo que satisface su derecho de audiencia, atento al propósito subyacente en la sustanciación y resolución de la reclamación (revisión del acuerdo que desecha la demanda por un motivo manifiesto e indudable de improcedencia). Así, para el Tribunal Colegiado de Circuito, la vista a que refiere el artículo 64 citado, está prevista para el caso de que la demanda de amparo directo ya ha sido admitida y, en la sustanciación posterior a la admisión, el órgano colegiado advierte una posible causa de improcedencia, acorde con la jurisprudencia P/J. 51/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 14 de noviembre de 2014 a las 9:20 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 12, Tomo I, noviembre de 2014, página 24, de título y subtítulo: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO."

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.93 K (10a.)

Recurso de reclamación 12/2015. José Inés Sánchez Díaz. 25 de junio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Santiago Ermilo Aguilar Pavón, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO SOBRE LA BASE DE QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE ES ILEGAL, SI DEL AUTO RESPECTIVO

SE ADVIERTE QUE EL JUEZ FEDERAL CONSTRUYÓ SU DETERMINACIÓN A PARTIR DE UNA INEXACTA PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE REVELA SU OMISIÓN DE PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU OCURSO.

Conforme al artículo 112 de la Ley de Amparo, una vez recibida la demanda por el Juez de Distrito, éste deberá resolver en un plazo de veinticuatro horas si: a) la desecha, b) previene al promovente en caso de advertir alguna irregularidad en el curso, o c) la admite. Para poder asumir cualquiera de las tres determinaciones referidas, el juzgador está obligado a examinar en su integridad dicho curso a efecto de verificar no solamente si cumple con los requerimientos formales definidos por la ley, sino también que el promovente haya expuesto con claridad su pretensión, razón por la cual está autorizado, conforme al diverso 114, fracción IV, del propio ordenamiento, a requerirlo para que aclare su escrito inicial cuando de su lectura se advierte que no indicó con precisión los actos autoritarios cuya irregularidad constitucional reprocha, a efecto de estar en posibilidad de advertir con claridad cuáles son y, con ello, decidir qué curso darle. Por otro lado, si se toma en cuenta que, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez sólo puede desechar una demanda si advierte la configuración de una causa de improcedencia de forma manifiesta e indudable, esto es, que su actualización se aprecie de forma patente, absolutamente diáfana, que no pueda ponerse en duda, resulta entonces que sólo podrá estar en posibilidad de asumir una decisión en ese sentido si tiene presente, en primer lugar, y con igual nitidez, cuáles son los actos que el gobernado reclama. En este orden de ideas, si el auto mediante el cual se desecha una demanda de amparo refleja que el juzgador construyó su determinación a partir de una inexacta precisión de los actos reclamados, que revela su omisión de prevenir al agraviado, para que aclarara su escrito inicial respecto de éstos, se debe concluir que dicho proveído es ilegal simplemente porque no puede actualizarse de forma manifiesta e indudable alguna hipótesis de improcedencia ante la violación procedimental en que incurrió el juzgador.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.1o.A.30 K (10a.)

Queja 204/2015. Noé Dorantes Romero. 20 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Luis Felipe Hernández Becerril.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DEMANDA DE NULIDAD DE PAGARÉ O VOUCHER EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. PARA SU ADMISIÓN BASTA QUE EL PROMOVENTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ESTÁ IM-

POSIBILITADO PARA PRESENTARLO (DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN) AL ENCONTRARSE EN PODER DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMANDADA.

Si el actor demanda en el juicio oral mercantil la nulidad de los pagarés o *vouchers* elaborados y expedidos al amparo de su tarjeta de débito de su cuenta de cheques y el Juez natural desecha su pretensión bajo el argumento de que el accionante no anexó a su demanda natural los documentos base de la acción, pues si bien el legislador establece como única excepción para la admisión de los documentos, que el actor manifieste, bajo protesta de decir verdad, que no cuenta con ellos y demuestre que previamente los solicitó a la dependencia o lugar en que se encuentran los originales y, en el caso, no sucedió así, por lo cual con apoyo en el artículo 1390 bis 13, en relación con el diverso numeral 1061, fracción III, ambos del Código de Comercio, consideró que no procedía dar trámite a la demanda, sino desecharla, dicha actuación es ilegal, toda vez que en el caso se surtieron los requisitos necesarios para admitir la demanda del juicio oral mercantil, en cuanto a los documentos sustentantes de la pretensión, que deben acompañarse a la demanda. Lo anterior es así, ya que conforme a los artículos 1390 bis 11, fracción V y el citado 1390 bis 13, aplicable a los juicios orales en materia mercantil, en la demanda deben expresarse los hechos en que el actor funde su petición; así como precisarse y exhibirse los documentos públicos o privados que tengan relación con cada hecho, respecto de los cuales el actor debe señalar si los tiene en su poder o disposición, o bien, presentar el escrito sellado mediante el cual se haya solicitado el documento que no tuviere en su poder, en términos del mencionado artículo 1061, al cual remite expresamente el artículo 1390 bis 13; que dispone: "Artículo 1061. Al primer escrito se acompañarán precisamente: ...III. Los documentos en que el actor funde su acción y aquellos en que el demandado funde sus excepciones. Si se tratare del actor, y carezca de algún documento, deberá acreditar en su demanda haber solicitado su expedición con la copia simple sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar en que se encuentren los originales, para que, a su costa, se le expida certificación de ellos, en la forma que prevenga la ley. Si se tratare del demandado deberá acreditar la solicitud de expedición del documento de que carezca, para lo cual la copia simple sellada por el archivo, protocolo o dependencia, deberá exhibirla con la contestación o dentro de los tres días siguientes al del vencimiento del término para contestar la demanda.—Se entiende que las partes tienen a su disposición los documentos, siempre que legalmente puedan pedir copia autorizada de los originales y exista obligación de expedírselos. Si las partes no tuvieran a su disposición o por cualquier otra causa no pudiesen presentar los documentos en que funden sus acciones o excepciones, lo declararán al Juez, bajo protesta de decir verdad, el motivo por el que no pueden presentarlos. En vista a dicha manifestación, el Juez, ordenará al responsable de la expedición que el documento se expida a

costa del interesado, apercibiéndolo con la imposición de alguna de las medidas de apremio que autoriza la ley.—Salvo disposición legal en contrario o que se trate de pruebas supervenientes, de no cumplirse por las partes con alguno de los requisitos anteriores, no se le recibirán las pruebas documentales que no obren en su poder al presentar la demanda o contestación como tampoco si en esos escritos no se dejan de identificar las documentales, para el efecto de que oportunamente se exijan por el tribunal y sean recibidas.". De esta manera, el señalado artículo 1061, fracción III, impone una carga procesal al actor, de acompañar a su demanda los documentos en que funde su acción, en el entendido de que si no le resulta posible presentarlos, pero los tiene a su disposición, deberá demostrar que solicitó su expedición, con la copia simple sellada por el archivo, protocolo, dependencia o lugar donde se encuentren los originales, para que a su costa se les expida certificación de ellos, en la forma prevenida por la ley; y en caso contrario, cuando no los tenga a disposición, o por cualquiera otra razón no le sea posible presentarlos, deberá precisar el motivo al Juez, bajo protesta de decir verdad, a fin de que éste los recabe, incluso, mediante la imposición de alguna medida de apremio. Consecuentemente, las cargas a que alude dicho numeral, únicamente resultan aplicables a los archivos, protocolos o dependencias de carácter público, no así a los documentos en poder de otras personas o instituciones, como son las instituciones bancarias que no constituyen entidades públicas, sino instituciones de crédito, tal es el caso de *vouchers* y el contrato de depósito bancario de dinero con fines de retiro, respecto de los cuales, bastará que el accionante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que está imposibilitado para presentarlos, porque se encuentran en poder de su contraparte, el banco demandado, a efecto de que el juzgador admita la demanda y provea lo conducente.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL
OCTAVO CIRCUITO.
VIII.2o.C.T.2 C (10a.)

Amparo directo 580/2015. Francisco Rodríguez Torres. 12 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de los Santos. Secretario: Víctor Hugo Zamora Elizondo.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

**DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES.
SE VULNERA EN PERJUICIO DE LOS MENORES DE EDAD CON MOTIVO
DE LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES Y SENSIBLES
EN EL PORTAL DE INTERNET DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE
JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A TRAVÉS DE SU DEPARTAMENTO
DE LOCATEL, A PROPÓSITO DE LA PETICIÓN DE UN PAR-**

TICULAR, QUE NO SE UBIQUE EN ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO INMINENTE DE SUFRIR DAÑO GRAVE EN SU INTEGRIDAD PERSONAL. El artículo

1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone a todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, entre otras obligaciones, las de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, así como los deberes, entre otros, a la no discriminación por razón de edad, así como de prevenir y reparar las violaciones a dichos derechos fundamentales. Por otra parte, el principio del interés superior de la niñez se encuentra previsto en el numeral 4o. de la Carta Magna, el cual establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con aquél, para garantizar plenamente los derechos de ese sector de la población. De igual forma, los artículos 6o., apartado A, fracción II y 16, segundo párrafo, constitucionales, reconocen el derecho fundamental a la protección de datos personales, con el propósito de garantizar la privacidad y la prerrogativa a la autodeterminación informativa de las personas. En ese sentido, el artículo 8 de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Querétaro (abrogada), dispone que corresponde a las autoridades estatales y municipales, en el ámbito de sus atribuciones, garantizar a niñas, niños y adolescentes la protección y el ejercicio de sus derechos y la aplicación de medidas necesarias para su bienestar. En consecuencia, cuando se publicitan los datos personales y sensibles de los menores de edad en el Portal de Internet de la Procuraduría General de Justicia de la entidad federativa mencionada, a través de su Departamento de Locatel—el cual es un servicio que se presta a la ciudadanía para la localización de personas—, a propósito de la petición de un particular, que no se ubique en alguna de las hipótesis para considerar que aquéllos se encuentran en riesgo inminente de sufrir daño grave en su integridad personal, esto es, por motivo de ausencia, desaparición, extravío, privación ilegal de la libertad, no localización o cualquier circunstancia donde se presuma la comisión de algún ilícito, como podría ser que se trata de un conflicto de índole familiar sobre custodia, convivencia, patria potestad, etcétera y, además, haya evidencia de su paradero real con alguno de sus padres, dicha publicación es inconstitucional, al violar el derecho humano referido, ya que ésta los expone a riesgos innecesarios y los coloca en una eventual situación de discriminación en menoscabo de su dignidad e interés superior.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SEGUNDO CIRCUITO.
XXII.1o.1 CS (10a.)

Amparo en revisión 271/2015. María Virginia Mondragón Soto. 6 de noviembre de 2015.
Unanimidad de votos. Ponente: Mauricio Barajas Villa. Secretaria: Elsa Aguilera Araiza.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DESAHOGO DE PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL. SI EN EL TÉRMINO DE LA VISTA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 885 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO SE HACEN VALER LAS VIOLACIONES RELATIVAS A LOS MEDIOS PROBATORIOS ADMITIDOS (DESISTIMIENTO DEL COTEJO Y CERTIFICACIÓN), PRECLUYE EL DERECHO PARA PLANTEARLAS.

El artículo 885, primer y segundo párrafos, de la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del 1o. de diciembre de 2012, establece que al concluir el desahogo de las pruebas, formulados los alegatos de las partes y previa certificación del secretario de que ya no quedan pruebas por desahogar, debe darse vista a las partes por el término de 3 días para que expresen su conformidad con dicha certificación, bajo el apercibimiento de que si transcurrido el término señalado no lo hicieron y hubiere pruebas por desahogar, se les tendrá por desistidos de las mismas para todos los efectos legales; el auxiliar, de oficio, declarará cerrada la instrucción y, dentro de los 10 días siguientes, formulará por escrito el proyecto de laudo. De lo anterior se concluye, que cuando alguna de las partes ofrece una documental en original, y a su vez solicita se coteje con la copia fotostática que acompaña para que se certifique, y se admite dicho medio de perfeccionamiento pero no lo lleva a cabo devolviendo el original, y en el momento procesal oportuno se da al oferente la vista contenida en el referido numeral 885, sin que haga manifestación alguna, teniéndole por desistido de dicho cotejo y certificación, implica que con posterioridad no puede alegarse esa situación como violación procesal, porque precluyó el derecho para plantearlo.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.

I.13o.T.142 L (10a.)

Amparo directo 532/2015. Jorge Ochoa Puerto. 17 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretaria: Damiana Susana Díaz Oliva.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DETENCIÓN DEL AUTOR INTELECTUAL DEL DELITO. NO PUEDE CONFIGURARSE BAJO LA HIPÓTESIS DE FLAGRANCIA PORQUE, DE LO CONTRARIO, ES ILEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

De los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 139 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Veracruz abrogado, se advierte que el legislador, al prever la figura de la flagrancia, fundó su decisión en la necesidad de facultar a cualquier persona en su calidad de ciudadano mexicano (incluyendo a los cuerpos de policía), a

fin de poder detener a otra u otras personas cuando: a) se le sorprenda durante la comisión misma del delito; y, b) se le detenga en el momento inmediato posterior a la ejecución del ilícito, con la condición de ponerlo sin demora a disposición de la autoridad más cercana, quien con la misma celeridad deberá realizar lo propio ante la autoridad ministerial; ello, a fin de privilegiar y procurar el castigo correspondiente a quienes perpetren actos delictivos que afecten la tranquilidad de la sociedad; por lo que esa facultad del ciudadano o de las autoridades policiacas de seguridad pública federal, estatal o municipal de efectuar una detención, se supedita al hecho de que los transgresores de la ley sean sorprendidos al momento de estar cometiendo materialmente el hecho delictivo, o cuando inmediatamente después de que lo ejecutan son perseguidos y se les alcanza. De lo anterior se aprecia que el elemento esencial de la figura en análisis consiste en la materialización del delito, esto es, que al sujeto activo se le encuentre ejecutando la acción criminosa o sea detenido inmediatamente después de haber cometido materialmente la conducta ilícita; de ahí que tal hipótesis no contempla –ni en el dispositivo constitucional, ni en la norma procesal en comento–, la posibilidad de efectuar la detención inmediata de una persona que pueda tener la calidad de "autor intelectual" del delito de que se trate, pues se entiende que dicho sujeto no es quien comete o ejecuta materialmente el hecho delictivo, dado que su conducta se circunscribe en concebir y determinar cometer un ilícito, es decir, que si bien lo prepara, lo ejecuta por medio de otro u otros, a quienes induce a delinquir, como "autor material" del delito; por tanto, es ilegal su detención, argumentando que se actualiza la figura de la flagrancia, en tanto que ésta implica que el hecho delictuoso se esté cometiendo materialmente en ese momento o inmediatamente después, pues la detención en flagrancia sólo tendría lugar sobre el o los autores materiales del delito, mas no sobre el que concibe y lo prepara, porque no participa en su ejecución fáctica, sino sólo en su ideación.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

VII.2o.T.5 P (10a.)

Amparo directo 31/2014. 1 de octubre de 2015. Mayoría de votos; unanimidad en relación con el criterio contenido en esta tesis. Disidente: Jorge Toss Capistrán. Ponente: Lucía del Socorro Huerdo Alvarado, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Enoch Cancino Pérez.

Nota: En términos del considerando sexto y transitorio tercero del Acuerdo General 49/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de denominación y especialización de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y de Tra-

bajo del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río y Xalapa, Veracruz, así como la creación de la Oficina de Correspondencia Común en Xalapa y cambio de denominación de la actual Oficina de Correspondencia Común de Boca del Río, en el mismo Estado, los Tribunales Colegiados que cambiaron de denominación y especialización en el Séptimo Circuito, a partir del uno de diciembre de dos mil catorce, de modo enunciativo mas no limitativo, conservarán los asuntos turnados, radicados, en trámite, pendientes de resolución y en archivo, de su anterior denominación, evitando el traslado de expedientes y el retraso en la impartición de justicia.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO INDEBIDO. ES IMPROCEDENTE LA SOLICITUD RELATIVA SUSTENTADA EN QUE LA LEY QUE ESTABLECE LA CONTRIBUCIÓN NO ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA POR UN VICIO EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, SI NO SE RECLAMÓ OPORTUNAMENTE EN EL AMPARO INDIRECTO CON MOTIVO DEL ENTERO CORRESPONDIENTE.

Todas las normas jurídicas se presumen constitucionales y, por tanto, obligatorias, hasta en tanto los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación declaren que no lo son, entre otros medios de control constitucional, en el juicio de amparo indirecto. En ese sentido, la solicitud de devolución de un impuesto por pago de lo indebido, sustentada en que la ley que establece la contribución contiene un vicio en el procedimiento legislativo que genera que no sea de observancia obligatoria, es improcedente si no se reclamó oportunamente en el amparo indirecto con motivo del entero correspondiente, toda vez que esa omisión produce que subsista la presunción de validez del ordenamiento que prevé la obligación de pagar el tributo, ya que no existe una declaratoria judicial que lo invalide y, por vía de consecuencia, que genere el derecho a la devolución pretendida.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

XVI.1o.A.74 A (10a.)

Amparo directo 143/2015. Dirección Corporativa de México, S.A. de C.V. 27 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Juan Carlos Nava Garnica.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRA-RIA. LA FALTA DE LLAMAMIENTO A UNA PERSONA CUANDO HAN CONCLUIDO CON EL RECONOCIMIENTO DEL SUCESOR DE DERECHOS AGRARIOS SIN QUE SE HAYA DEJADO LISTA DE SUCESORES, NO TRANSGREDE SUS DERECHOS HUMANOS.

La falta de llamamiento

de una persona a las diligencias de jurisdicción voluntaria que han concluido con el reconocimiento del sucesor de derechos agrarios, sin que se haya dejado lista de sucesores, no transgrede los derechos humanos de aquélla, toda vez que lo ahí resuelto no tiene el carácter de cosa juzgada y, por ende, es susceptible de impugnarse, a fin de lograr su modificación mediante la promoción del juicio sucesorio previsto en el artículo 163 de la Ley Agraria, en relación con el diverso 18, fracción VII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, toda vez que la tramitación de dicho juicio tiene como finalidad establecer a quién deberán pertenecer los derechos agrarios, en atención al artículo 18 de la Ley Agraria, que señala con precisión los sujetos que tienen derecho a suceder y los requisitos que deben acreditarse para ese efecto cuando no se dejó inscrita una lista de sucesores ante el Registro Agrario Nacional ni se formalizó alguna ante notario público; de suerte que, a través del juicio sucesorio se resolverían las situaciones jurídicas existentes, con audiencia de quien tenga derecho a oponerse, estableciéndose la eficacia o ineficacia y las consecuencias de lo determinado en las diligencias de jurisdicción voluntaria.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.
IX.2o.8 A (10a.)

Amparo en revisión 234/2015. Jesús Segura Rosas. 28 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Alberto Durán Martínez. Secretario: Rodolfo Ocejo Lambert.

Nota: La denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Noveno Circuito.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

DIVORCIO. ES IMPROCEDENTE EL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD EN LA APELACIÓN, CON BASE EN EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, SI EN PRIMERA INSTANCIA SE DECLARÓ LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN). De acuerdo con las facultades que el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León concede al tribunal de apelación, si bien es posible que éste recobre plenitud de jurisdicción y se encuentre en algunos casos en la misma posición del Juez de primera instancia y, por ello, pueda pronunciarse abarcando la totalidad de los temas de que aquél se ocupó o debió ocuparse, y sin perjuicio de su obligación de ajustarse a los postulados constitucionales y a los convenios internacionales en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cuando esto sea necesario; cabe establecer que solamente

le es válido realizar un control difuso de constitucionalidad o convencionalidad, cuando se encuentren vulnerados los derechos humanos de alguna persona, pero no cuando, como en la especie, no obstante que pudiera decirse que los artículos de la ley sustantiva civil para el Estado de Nuevo León resultan atentatorios del libre derecho al desarrollo de la personalidad, al restringir el divorcio al mutuo consentimiento o a la prueba de causales, ningún efecto producen, al haber obtenido ya los posibles afectados, el respeto a dicho derecho, conforme a la propia normatividad local, es decir, al haberse decretado desde primera instancia la disolución del vínculo matrimonial pues, en ese caso, la plenitud de la jurisdicción y las facultades de control difuso, respectivamente, no pueden ser aplicadas, y la actividad del tribunal de apelación se ve restringida al estudio de los agravios, pues éste no puede pronunciarse, sino sobre lo que es la materia del recurso, conforme al aforismo *tantum devolutum quantum appellatum*, es decir, que los poderes del tribunal se hallan limitados por la extensión del recurso, sin perjuicio de la suplencia de queja en los casos que proceda.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.
IV.2o.C.7 C (10a.)

Amparo directo 405/2015. 30 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Martín Alejandro Cañizales Esparza. Secretario: Jesús Alfonso Valencia Orozco.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*..

EMANACIONES RADIATIVAS. PARA QUE EL MONTO DE DICHO CONCEPTO INTEGRE EL SALARIO PARA EL PAGO DE LA JUBILACIÓN O PENSIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL, DEBEN DEMOSTRAR QUE LO PERCIBIERON Y APORTARON AL FONDO RESPECTIVO DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.

De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 5 del Régimen de Jubilaciones y Pensiones y 11 del Reglamento de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas, ambos insertos en el contrato colectivo de trabajo que rige las relaciones laborales entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus trabajadores, se advierte que dicho instituto cubrirá un porcentaje extraordinario a su personal por estar expuestos en forma constante y permanente al riesgo de emanaciones radiactivas, siempre y cuando se trate de trabajadores que estén en las categorías listadas en el segundo de los citados numerales; asimismo, establecen que dicho concepto formará parte del salario base para el pago de su jubilación o pensión, cuando se hubiese percibido y aportado sobre el fondo de jubilaciones y pensiones durante los últimos 5 años y lo perciba a la fecha del otorgamiento de éstas. En ese contexto, si en el juicio correspondiente el trabajador no acredita este último presupuesto con los recibos de nómina respectivos, esto es, que percibió dicho concepto de manera constante al menos desde el inicio y hasta el final de los 5 años referidos, con independencia de que no exhiba diversos recibos intermedios dentro de ese lapso, no es dable incluirlo en el pago de su pensión o jubilación, precisamente porque las partes contratantes establecieron que se cumpliera con el aludido requisito. Lo anterior, no contraría la jurisprudencia 2a./J. 52/2014 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 30 de mayo de 2014 a las 10:40 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 6, Tomo II, mayo de 2014, página 1056, de título y subtítulo: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. LOS ESTÍMULOS DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD ESTABLECIDOS EN LOS ARTÍCULOS 91 Y 93 DE SU REGLAMENTO INTERIOR

DE TRABAJO, INTEGRAN EL SALARIO PARA EFECTOS DEL PAGO DE LA PRIMA DE ANTIGÜEDAD CON MOTIVO DE LA SEPARACIÓN PREVISTA EN LA CLÁUSULA 59 BIS DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.", dado que dicho criterio se refiere a los estímulos de asistencia y puntualidad, y no se exige como presupuesto la acreditación de temporalidad alguna –como ocurre para el concepto de emanaciones radiactivas–, sino que se demuestre que se hayan percibido con regularidad durante la vida laboral del trabajador; por tanto, el Alto Tribunal concluyó que debían considerarse para calcular el salario integrado siempre y cuando los hubiere obtenido por lo menos en 18 de las 24 quincenas de que se compone el último año de servicios previo a su jubilación; y en el supuesto del concepto de emanaciones radiactivas, debe demostrarse que se percibió de manera constante al menos durante el mencionado periodo de 5 años.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

III.3o.T.33 L (10a.)

Amparo directo 890/2015. 26 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Castro León. Secretario: Humberto Moreno Martínez.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE DEJAR CÉDULA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 751 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES INSUFICIENTE LA MENCIÓN "ANOTO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN" EN EL ACTA CORRESPONDIENTE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 22/2011 (10a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro III, Tomo 4, diciembre de 2011, página 2901, de rubro: "NOTIFICACIONES PERSONALES (PRIMERA O ULTERIOR) EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBE DEJARSE LA CÉDULA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 751 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.", sostuvo que de la interpretación literal, armónica, histórica y teleológica de los artículos 742 a 744 y 751 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, derivaba que, sin importar que se tratara de la primera o ulterior notificación personal, debía dejarse la cédula a que se refiere el último de los artículos citados, junto con la resolución cuya notificación se ordenó de manera personal, por ser la forma de dar certeza respecto de la diligencia relativa. En tal sentido, el notificador que realiza el emplazamiento debe satisfacer los requisitos contenidos en el aludido artículo 751, como es entregar la cédula respectiva, porque cuando el interesado tenga en su poder la docu-

mentación, podría tener noticia con la respectiva cédula tanto del lugar, día y hora en que se practicó la notificación (cuándo acudió el actuario), como del número de expediente, nombre de las partes, así como el nombre y domicilio de la persona o personas buscadas; mientras que con la copia autorizada de la determinación a notificar, conocería el acto a comunicar; por tanto, es insuficiente que para colmar esa exigencia sólo indique "anoto cédula de notificación", porque "entregar" y "anotar" tienen significados distintos, puesto que para la validez de la diligencia, no basta que exista constancia en autos de que se efectuó la anotación a que alude el funcionario de la Junta, y que con ello se estime que existe presunción legal de que fueron cumplidos todos y cada uno de los requisitos previstos en la legislación laboral, en razón de que es necesario que de las diligencias desahogadas se deje constancia en el expediente, como lo establece el artículo 721 de dicha ley; sin que ello signifique hacer nugatoria la fe judicial de que éste se encuentra investido o se agreguen nuevos requisitos no previstos en la ley de la materia, pues de lo que se trata, es de tener certeza jurídica de que el acto procesal se llevó a cabo en los términos establecidos, es decir, que obra constancia de que la persona buscada tuvo conocimiento de la diligencia, porque así lo asentó el funcionario, al precisar que entregó o dejó la cédula con el interesado o con la persona que lo atendió. De acuerdo a lo expuesto, el requisito de entregar la cédula correspondiente, no se cumple con la simple mención del actuario de que "anoto cédula de notificación", sino que debe obrar constancia en autos de que se entregó.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

III.3o.T34 L (10a.)

Amparo en revisión 129/2015. 30 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Castro León. Secretaria: Martha Leticia Bustos Villarruel.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

HOGAR CONYUGAL. EL INMUEBLE EN QUE SE ENCUENTRE ESTABLECIDO Y QUE NO CONSTITUYA EL PATRIMONIO DE FAMILIA AL IGUAL QUE SU MENAJE SON INEMBARGABLES, SIEMPRE Y CUANDO SU VALOR SEGÚN AVALÚO CATASTRAL NO EXCEDA EL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 290 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SIN NECESIDAD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO.

De los artículos 714, 715, 724, 727 y 728 del Código Civil para el Estado de Coahuila de Zaragoza, se advierte que el patrimonio de familia, que comprende todos los bienes muebles e inmuebles constituidos para la satisfacción de las necesidades mínimas de subsistencia y desarrollo de los miembros de ésta, una vez desahogado el previo trámite ante la autoridad judicial, entre algunas otras condiciones, para su constitución requiere que sea oportunamente inscrito ante en el Registro Público de la Propiedad del Estado, inscripción que debe contener la relación precisa de los bienes afectos a dicho patrimonio, pues una vez registrado el patrimonio de la familia es inembargable, en términos de lo establecido en el artículo 942, fracción I, del Código Procesal Civil para esa entidad. Por su parte, de relacionar los numerales 285, 286 y 290 del citado Código Civil, se colige que el inmueble en que se establezca el hogar conyugal y que no constituya patrimonio de familia, al igual que los muebles que integran su menaje, son inembargables, siempre y cuando su valor, según avalúo catastral, no exceda de la cantidad consistente en el equivalente a veinticinco veces el salario mínimo general diario vigente en el lugar de su residencia, elevado al año (esto es, el salario mínimo diario multiplicado por veinticinco, y la cantidad que resulte, a su vez, por trescientos sesenta y cinco), además de que el crédito que origine el embargo, no tenga su origen en la adquisición de la casa, en el objetivo de hacerle mejoras o remodelaciones, ni tampoco que se haya generado por la adquisición de muebles o para solventar gastos en caso de enfermedad o accidentes graves de un miembro de la familia. Por tanto, además de prever a la constitución del patrimonio de la familia, el señalado Código Civil prevé la hipótesis del hogar con-

yugal relativa al valor menor del inmueble en términos del citado artículo 290, que además de constituir una hipótesis de inembargabilidad distinta a la primera, para su constitución, no requiere del trámite judicial ni del requisito formal de la inscripción previa ante el Registro Público de la Propiedad, sino simplemente de que se colmen los requisitos de procedencia a que se refiere dicho precepto legal.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL
OCTAVO CIRCUITO.

VIII.2o.C.T.4 C (10a.)

Amparo en revisión 144/2015. Pablo Alatorre López. 10 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de los Santos. Secretario: Víctor Hugo Zamora Elizondo.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.



IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. CARACTERÍSTICAS DEL ESCRUTINIO A QUE DEBEN SUJETARSE EN EL AMPARO LOS AJUSTES RAZONABLES, COMO GARANTÍA SECUNDARIA DE LOS DERECHOS RELATIVOS, CUANDO SEAN REFERENTES DE UNA DE LAS DENOMINADAS CATEGORÍAS SOSPECHOSAS.

Los derechos humanos pueden o no ejercitarse por una persona, en función de si enfrenta o no alguna discapacidad y, en caso de que la sufra, requiere para el pleno disfrute de aquéllos en condiciones de igualdad respecto del resto de las personas, la existencia de un entorno accesible y adecuado que lo facilite; de ahí que la ausencia de éste es causa de discriminación y desigualdad. Así, a fin de evitar esta circunstancia, se reconoce la existencia de ciertos principios, como el de accesibilidad universal, que es una garantía primaria o reforzada que se instrumenta estrechamente relacionada con el principio de diseño para todas las personas, y conlleva que los ambientes serán accesibles si se conciben y materializan asegurando su uso y empleo por el mayor número de personas y, desde luego, por las que tengan diversidades funcionales; sin embargo, cuando la accesibilidad universal y el diseño para todos fallan y el individuo se encuentra ante un hábitat que no cumple con los parámetros aludidos, surgen los ajustes razonables, como garantía secundaria de los derechos a la igualdad y a la no discriminación, que se materializan mediante la adecuación del entorno a la necesidad de la persona que enfrenta discapacidad; no obstante, el acto o decisión relativa lleva implícito el riesgo de que permanezca o se acentúe la discriminación o la desigualdad, por lo que para establecer si esto ocurre, debe analizarse si los ajustes razonables son referentes de una de las denominadas categorías sospechosas, descritas en el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos –aun cuando la distinción basada en éstas no esté contenida en una norma general–, pues de ser así, en el amparo que se promueva en su contra debe efectuarse un escrutinio estricto para examinar la regularidad y eficacia de esos actos a la luz del principio de igualdad, a efecto de determinar si conforme a los principios del

modelo de entendimiento social de la discapacidad actualmente adoptado, las medidas solicitadas u ordenadas son idóneas para la consecución de las metas buscadas, en cada caso concreto.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.2o.A.5 CS (10a.)

Queja 209/2015. Bertha Alicia San Miguel del Ángel. 3 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 1a./J. 66/2015 (10a.), de título y subtítulo: "IGUALDAD. CUANDO UNA LEY CONTENGA UNA DISTINCIÓN BASADA EN UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA, EL JUZGADOR DEBE REALIZAR UN ESCRUTINIO ESCRITO A LA LUZ DE AQUEL PRINCIPIO.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 30 de octubre de 2015 a las 11:30 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 23, Tomo II, octubre de 2015, página 1462.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA OBLIGACIÓN A CARGO DE LAS PERSONAS MORALES DE RETENER EL TRIBUTO QUE SE LES TRASLADA POR LA ADQUISICIÓN DE DESPERDICIOS PARA SER UTILIZADOS COMO INSUMO DE SU ACTIVIDAD INDUSTRIAL O PARA SU COMERCIALIZACIÓN, ES EXIGIBLE TRATÁNDOSE DE METALES PUESTOS EN CONDICIONES DE REUTILIZACIÓN. El artículo 1o.-A, fracción II, inciso b), de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, impone a las personas morales que adquieran desperdicios para ser empleados como insumos de su actividad industrial o para su comercialización, la obligación de retener el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado por dicha adquisición. Si bien el legislador no estableció una definición, para efectos de la carga de retener el tributo trasladado al adquirente, del término "desperdicios", en el artículo 2 del reglamento de la ley mencionada se detalló que dicha carga debe efectuarse sin importar la forma en que se presenten los desperdicios ni la posibilidad de que sean reutilizados o reciclados por haber sido objeto de un proceso de selección, limpieza, compactación o trituración. Es decir, en términos de la normatividad invocada, el punto medular a considerar para establecer si por la adquisición de desperdicios existe obligación de retener el impuesto al valor agregado que sea trasladado al adquirente es que, con independencia de la forma en que se presenten o hayan sido puestos en condiciones de reutilización, sean comprados para usarlos como insumos o para comercializarlos, sin que la circunstancia de que ese tipo de

bienes hayan sido puestos en condición de ser usados nuevamente los convertida en productos distintos, ya que su composición continúa siendo la misma que al haberse desechado de los hogares y de la industria, sino que, se reitera, son bienes puestos en aptitud de servir una vez más como insumos para quienes se dediquen a la fabricación de mercancías, o bien, para comercializarlos, con la salvedad de que se presentan en forma diversa a la en que fueron recopilados después de su desechamiento.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.1o.A.123 A (10a.)

Amparo directo 37/2014. Distribuidora de Metales Xalostoc, S.A. de C.V. 6 de marzo de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González de la Torre.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMAS. ES INTRASCENDENTE Y NO AMERITA CONCEDER EL AMPARO SOLICITADO, EL HECHO DE QUE LA JUNTA LABORAL LO ADMITA Y SUSTANCIE CON UNA DENOMINACIÓN DIVERSA, SI FINALMENTE RESUELVE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES.

Si la Junta laboral admite el incidente de falsedad de firmas con una denominación distinta a como se promovió, por ejemplo, de falta de personalidad por falsedad de firma, dicha irregularidad no vicia el procedimiento, por tratarse de una simple equivocación intrascendente en su denominación que no amerita la concesión del amparo para efecto de reponer el procedimiento, ya que al ser clara la pretensión del promovente de la incidencia, al indicar que la firma estampada en la actuación impugnada no corresponde a su autor, ello trae consigo que sea irrelevante la denominación con la que sea admitida la incidencia planteada, pues es inconcuso que la objeción gira en torno a la autenticidad de la firma, máxime si se atiende a que en el juicio laboral, conforme al artículo 685 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, la Junta laboral debe tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso, evitando poner obstáculos innecesarios o sujetarse a formulismos; de ahí que proceda que la autoridad laboral dilucide la cuestión efectivamente planteada, con el fin de que tengan acceso efectivo a la justicia.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

III.1o.T.27 L (10a.)

Amparo directo 791/2014. Alfonso Aguilar Razura. 19 de noviembre de 2015. Mayoría de votos. Disidente: Arturo Cedillo Orozco. Ponente: José de Jesús Bañales Sánchez. Secretario: Martín Villegas Gutiérrez.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMAS. PUEDE PLANTEARSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO LABORAL, INCLUSO ANTES DE LA CONCILIATORIA.

De la interpretación armónica de los artículos 761 a 765 de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, no se advierte que se prevea término alguno para promover el incidente de la naturaleza apuntada; luego, debe estarse a lo que al efecto se dispone en el numeral 735 del aludido ordenamiento, es decir, de tres días contados a partir de que se tenga conocimiento fehaciente de la existencia de la firma que se objeta de falsa; de ahí que el objetante está en aptitud de hacerlo valer en cualquier etapa del procedimiento, incluso antes de la conciliatoria; por lo demás, tampoco se dispone que la manifestación acerca del conocimiento de la firma que se tacha de falsa, deba hacerse bajo protesta de decir verdad, pues para ello resulta suficiente que se diga la fecha en que se tiene conocimiento de dicho aspecto, o bien, que se ostente sabedor de ésta, salvo prueba en contrario, a efecto de que se dé el trámite respectivo a la incidencia planteada.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

III.1o.T.26 L (10a.)

Amparo directo 791/2014. Alfonso Aguilar Razura. 19 de noviembre de 2015. Mayoría de votos. Disidente: Arturo Cedillo Orozco. Ponente: José de Jesús Bañales Sánchez. Secretario: Martín Villegas Gutiérrez.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. PROCEDE EN CUALQUIER ESTADO DEL PROCESO, INCLUSO, DESPUÉS DEL CIERRE DE INSTRUCCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 546 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL).

De la interpretación del artículo 546 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, se concluye que el incidente de libertad por desvanecimiento de datos puede promoverse en cualquier estado del proceso, incluso, después del cierre de instrucción, pues si el legislador local no estableció alguna limitante para su procedencia, es ilegal que el juzgador la realice, ya que hacerlo, implicaría transgredir en perjuicio del inculgado el derecho humano de defensa adecuada, previsto en el artículo 20 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tomando como base principal que el proceso inicia desde el auto de formal procesamiento y culmina cuando causa ejecutoria la sentencia de primer grado, o bien, con el dictado de la sentencia de segunda instancia.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.P.46 P (10a.)

Amparo en revisión 129/2015. 26 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Arturo Valle Castro.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES. NO ES EXIGIBLE QUE SE HAGA VALER CONTRA LA PRACTICADA A QUIEN DEJÓ DE SER APODERADO DE LA PARTE QUE SE PRETENDIÓ NOTIFICAR Y EN LUGAR DISTINTO DEL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIRLAS, POR TANTO, NO ES APTA PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La notificación del laudo que puso fin al juicio laboral realizada a una persona ajena a la controversia, por habersele revocado previamente la representación otorgada por alguna de las partes, y en las instalaciones de la autoridad responsable, debe ser considerada ineficaz, porque carece en lo absoluto de idoneidad para su fin; de ahí que no pueda imponerse a aquel a quien el actuario pretendió notificar impugnarla en la vía incidental, pues no se trata de una notificación viciada, sino legalmente inexistente. Por ende, no es apta para el cómputo del plazo establecido en el artículo 17 de la Ley de Amparo para promover el juicio constitucional.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
XVI.1o.T.22 L (10a.)

Amparo directo 647/2015. Centro de Estudios de Celaya, A.C. 6 de noviembre de 2015. Mayoría de votos. Disidente: Gilberto Díaz Ortiz. Ponente: Francisco González Chávez. Secretaria: Beatriz Flores Núñez.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INCOMPETENCIA, EXCEPCIÓN DE. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACUERDO DEL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESERVA SU RESOLUCIÓN PARA EMITIRLA DE FORMA CONJUNTA CON LA SENTENCIA. De conformidad con el artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que deter-

minen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, debiendo entenderse como tales, aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declinó la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (tratándose de la competencia por inhibitoria), pues es hasta ese momento cuando se produce la afectación personal y directa a los derechos sustantivos de la parte interesada; y, asimismo, contra resoluciones definitivas que desechan o desestiman un incidente y/o excepción de incompetencia, ya sea por declinatoria o inhibitoria, ya que ello se traduce en que la autoridad que conoce del asunto, al estimarse competente, siga conociendo de él y lo tramite hasta su resolución; aspecto que torna a dichas determinaciones como aquellas que podrían traer como resultado que un procedimiento o juicio se siga no sólo por una autoridad incompetente, sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente podrían corresponder, acarreando consecuencias no reparables, ni siquiera con la obtención de una sentencia favorable; ello, sin soslayar los principios rectores de este juicio extraordinario de defensa, entre ellos, el de definitividad, porque de proceder un recurso o medio de defensa ordinario en su contra, resulta necesario agotarlo, previo a la promoción del juicio de amparo. Ahora bien, estas mismas razones justifican que el juicio de amparo indirecto proceda contra la determinación del Tribunal Unitario Agrario de reservar la resolución de una excepción de incompetencia por declinatoria planteada por alguna de las partes, hasta el dictado de la resolución definitiva, toda vez que esta circunstancia se traduce en que la autoridad que está resolviendo el asunto, siga conociendo de él y lo tramite hasta la emisión de la sentencia, y si bien en el pronunciamiento de ésta, en principio, tendría que resolverse lo relativo a la apuntada excepción de incompetencia, ello sujetaría a las partes a continuar con un procedimiento, juicio o instancia, seguido por una autoridad cuya competencia se controvierte, con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente podría corresponderle; irreparables e, incluso, se vedaría la posibilidad de su reclamo en amparo indirecto, pues al resolverse la excepción de incompetencia con el principal, se impediría su reclamo en tal vía, por tenerse que impugnar la sentencia en amparo directo, y si en la demanda de amparo se hacen valer conceptos de violación respecto de la cuestión en comento, podrían calificarse de inoperantes, por no ser esa vía la procedente contra dicho reclamo; incluso, de resolverse ambas cuestiones de forma separada, pero al mismo tiempo (excepción de competencia y sentencia), podría originarse la improcedencia del amparo indirecto, con motivo del pronunciamiento de la sentencia definitiva.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL
VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

XXI.1o.P.A.33 A (10a.)

Amparo en revisión 325/2015. Agente del Ministerio Público de la Federación en representación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 8 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Dávila Gaona. Secretario: Ricardo Genel Ayala.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INFONAVIT. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El artículo 5o., fracción II, párrafo primero, de la Ley de Amparo dispone que autoridad responsable es aquella que, con independencia de su naturaleza formal, dicta ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, de suerte que debe considerarse que asiste dicho carácter al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores cuando en el juicio de amparo se le reclama la resolución por la que se aprueban las Reglas para el otorgamiento de créditos a los trabajadores derechohabientes del mencionado instituto, ya que: a) la emisión de dichas reglas obedece a lo dispuesto por el artículo 47, párrafos primero a tercero, de la ley que lo rige; b) su aplicación es obligatoria en los procedimientos que versen sobre el otorgamiento de créditos para adquisición de vivienda; y, c) a través de dichas reglas se crea unilateral y obligatoriamente una situación jurídica concreta respecto del trabajador acreditado, referente a la obtención de un crédito y a los términos y modalidades en que deberá pagarlo.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.1o.A.29 K (10a.)

Amparo en revisión 176/2015. Jefe de Gobierno del Distrito Federal y otros. 25 de junio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Olga María Arellano Estrada.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INFONAVIT. LA REGLA DÉCIMA PRIMERA DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DEL CITADO INSTITUTO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA TUTELADO POR EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. La mencionada regla infringe el principio de jerarquía normativa contenido en el artículo 89, fracción I, de la Constitución, en virtud de que va más allá de lo dispuesto por el artículo 42, párrafo antepenúltimo, de la ley que rige a dicho instituto, partiendo de que impone a

los trabajadores acreditados la obligación de pagar los gastos que se generen por concepto de impuestos (distintos al impuesto predial) y derechos (distintos a los que se refieren al consumo de agua), a pesar de que la norma legal expresamente prevé una exención que es aplicable a tales erogaciones.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.1o.A.7 CS (10a.)

Amparo en revisión 176/2015. Jefe de Gobierno del Distrito Federal y otros. 25 de junio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Olga María Arellano Estrada.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS QUE EL PATRÓN DEBE CONSERVAR Y EXHIBIR EN JUICIO. LA PARTE QUE LA OFREZCA DEBE PARTICULARIZAR LO QUE SE HA DE CONSTATAR CON ESA PRUEBA.

Cuando alguna de las partes en el juicio laboral ofrece la prueba de inspección de documentos que el patrón debe conservar y exhibir en juicio, es necesario que particularice qué hecho o hechos pretende demostrar con ella, puesto que la autoridad que la practique sólo puede verificar la existencia o no de datos específicos observables en los documentos que se le pongan a la vista, tales como fechas, nombres, números o la relación de periodos que comprenden. Si se indica que lo que se busca probar son los hechos narrados en la demanda, las condiciones de trabajo, adeudos pendientes u otros aspectos semejantes, la prueba debe desecharse, pues no es propio de la función del fedatario declarar qué hechos de la litis deben tenerse o no por demostrados y menos aún pronunciarse sobre lo que una de las partes pueda adeudar a la otra.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

XVI.1o.T.28 L (10a.)

Amparo directo 632/2015. José Ramón Sánchez Carreño. 24 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco González Chávez. Secretario: Joaquín Fernando Hernández Martínez.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS. ESCRUTINIO DE LAS RELACIONES QUE ENTABLAN CON SUS USUARIOS DESDE UNA

PERSPECTIVA DE CONTROL CONSTITUCIONAL Y DE DERECHOS HUMANOS.

Una aplicación analógica del criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. CXX/2015 (10a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 27 de marzo de 2015 a las 9:30 horas y en la página 1118 del Libro 16, Tomo II, marzo de 2015, Décima Época de la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, permite considerar que, dada su estrecha relación con la efectividad de un derecho de interés público, como lo es la educación, las relaciones existentes entre las instituciones educativas privadas y los usuarios de los servicios que prestan, a diferencia de otro tipo de establecimientos mercantiles, pueden considerarse también de interés social y deben ser objeto de una especial protección constitucional, pues pueden originar diversas responsabilidades, atendiendo a la participación y al tipo de afectación que pueda causar su desempeño y proceder tanto de acciones como de omisiones, generando una afectación directa o indirecta de derechos humanos como resultado de los convenios suscritos con los usuarios, de los actos ajenos a éstos, o de los propios de la interacción en el servicio. Más aún, los usuarios de esos servicios educativos también pueden llegar a considerarse un grupo vulnerable en función de su edad o discapacidad, por la posición de disparidad frente a quienes manejan, desarrollan y controlan los establecimientos relativos, y es posible que se vean vulnerados sus derechos fundamentales, ante la asimetría de poder entre los directivos y los usuarios, por la propia naturaleza de los servicios y por la complejidad de la interacción en un entorno pluralizado. Lo anterior, además, en el entendido de que actualmente se reconoce que los derechos fundamentales gozan de plena eficacia, incluso en las relaciones jurídico-privadas, la cual tiene como efecto que en los asuntos de su conocimiento, los órganos de control constitucional atiendan a la influencia de los valores que subyacen en esos derechos, fungiendo como vínculo entre la Constitución y los particulares, al resolver un caso concreto.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.2o.A.7 CS (10a.)

Queja 209/2015. Bertha Alicia San Miguel del Ángel. 3 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

Nota: La tesis 1a. CXX/2015 (10a.) citada, aparece publicada con el título y subtítulo: "SERVICIOS DE SALUD PRESTADOS POR HOSPITALES PRIVADOS. SUS USUARIOS CONSTITUYEN UN GRUPO EN CONDICIÓN ASIMÉTRICA, AUN CUANDO NO SE IDENTIFIQUE CON UNA CATEGORÍA SOSPECHOSA O UN ESTEREOTIPO."

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INTERÉS DEL 2% MENSUAL. LA BASE DE SU CÁLCULO HA DE OBTENERSE CONSIDERANDO EL SALARIO INTEGRADO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012).

En lo conducente, el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del 1o. de diciembre de 2012, establece: a) si en el juicio el patrón no comprueba la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho a la indemnización constitucional o a la reinstalación, así como al pago de los salarios vencidos computados desde la fecha del despido "hasta" por un periodo máximo de 12 meses; y, b) si al término de ese lapso no ha concluido el procedimiento o no se ha cumplido el laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2% mensual, capitalizable al momento del pago. En relación con esto, de la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo, que culminó con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, se advierte que la finalidad de los intereses es la de sustituir la generación de los salarios vencidos por un lapso prolongado, para evitar la práctica de extender indebidamente la duración de los procedimientos laborales. De lo anterior, se infiere que el referido interés mensual tiene la misma naturaleza que los salarios caídos, pues al igual que éstos, constituye una responsabilidad ineludible para el patrón que despidió injustificadamente al trabajador, así como una consecuencia directa e inmediata de la acción principal; por lo que la base de su cálculo, es decir, el importe de 15 meses de salario, ha de obtenerse, al igual que los salarios caídos, considerando el salario integrado; siendo ésta la interpretación más favorable al trabajador, en apego al principio *in dubio pro operario*.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.25 L (10a.)

Amparo directo 252/2015. Cathy Trujillo López. 7 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Santiago Ermilo Aguilar Pavón, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Juan Carlos Corona Torres.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO. EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SE REFIERE A AMBOS, COMO CONDICIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD.

De la porción normativa referida, por sí misma, no es posible advertir que el interés al que alude sea exclusivamente el jurídico o el legítimo; de ahí que no sea dable hacer esa distinción al interpretarla. Por tanto, se afirma que la expresión "intereses del actor",

contenida en la fracción III citada, tiene como campo de referencia semántica tanto el interés legítimo como el jurídico, en su connotación estrictamente procesal, que condiciona la procedencia del juicio de nulidad, pues se refiere a la legitimación del actor para ejercer su acción, ya sea porque cuente con un interés jurídico, en tanto aduzca la afectación a un derecho subjetivo, o con uno legítimo, si únicamente arguye la afectación de un interés en su esfera jurídica, derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. Esto es, el interés que debe acreditar el actor al presentar su demanda de nulidad, estará en función del que asegura afectado por el acto impugnado. Empero, esta carga procesal está limitada a la procedencia del juicio, ya que para obtener una sentencia favorable es menester que la pretensión sea fundada, lo que significa que el actor habrá demostrado fehacientemente que cuenta con el derecho que adujo y que se le vulneró.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.22 A (10a.)

Amparo directo 187/2015. Plaza Caracol Dos, S.A. de C.V. 11 de junio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Santiago Ermilo Aguilar Pavón, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INTERÉS PREVISTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. AL TENER LA MISMA NATURALEZA DE LOS SALARIOS CAÍDOS, PARA SU CONDENA NO SE REQUIERE RECLAMARLO EXPRESAMENTE EN LA DEMANDA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012). En lo conducente, el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del 1o. de diciembre de 2012, establece: a) si en el juicio el patrón no comprueba la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho a la indemnización constitucional o a la reinstalación, así como al pago de los salarios vencidos computados desde la fecha del despido "hasta" por un periodo máximo de 12 meses; y, b) si al término de ese lapso no ha concluido el procedimiento o no se ha cumplido el laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2% mensual, capitalizable al momento del pago. En relación con esto, de la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo, que culminó con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, se advierte que la finalidad de los intereses es la de sustituir la generación de los salarios vencidos por un lapso

prolongado, para enfrentar la práctica de extender indebidamente la duración de los procedimientos laborales. De lo anterior, se infiere que, como prestación, el referido interés mensual tiene la misma naturaleza que los salarios caídos, pues al igual que éstos, constituye una responsabilidad ineludible para el patrón que despidió injustificadamente al trabajador, así como una consecuencia directa e inmediata de la acción principal y, por ello, para su condena, la Junta de Conciliación y Arbitraje no precisa de exigencia de pago expresa en la demanda, es decir, no requiere plantearse como prestación, sino únicamente que se demuestre el hecho del despido y que se declare procedente alguna de las acciones fundadas en él, para que la Junta fije la condena respectiva y los términos en los cuales deberá pagarse.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.24 L (10a.)

Amparo directo 252/2015. Cathy Trujillo López. 7 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Santiago Ermilo Aguilar Pavón, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Juan Carlos Corona Torres.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INTERÉS PREVISTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. FORMA DE CUMPLIR SU CONDENA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012).

En lo conducente, el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del 1o. de diciembre de 2012, establece: a) si en el juicio correspondiente el patrón no comprueba la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho a la indemnización constitucional o a la reinstalación, así como al pago de los salarios vencidos computados desde la fecha del despido "hasta" por un periodo máximo de 12 meses; y, b) si a ese término no ha concluido el procedimiento o no se ha cumplido el laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2% mensual, capitalizable al momento del pago. En este sentido, de la iniciativa de reformas a la Ley Federal del Trabajo que culminó con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012, se advierte que la finalidad de los intereses es la de sustituir la generación de los salarios vencidos por un lapso prolongado, para erradicar la práctica de extender indebidamente la duración de los procedimientos laborales. En relación con lo anterior, el artículo 843 de la citada ley, preceptúa que en el laudo se cuantificará el importe de la prestación y se señalarán las medidas con arreglo a las cuales deberá cumplirse con la resolución; de lo que se sigue

que de ser procedente el pago de los intereses, respecto de éstos se deberán expresar las siguientes medidas mínimas con arreglo a las cuales ha de cumplirse su condena: 1. Cuando el laudo se dicte antes de 12 meses computados a partir de la fecha del despido, se deberán cuantificar los salarios caídos generados y se fijará el día en el cual se cumplen los 12 meses; asimismo, deberá precisarse que de darse el cumplimiento de dicha resolución dentro de ese lapso, no surgirá derecho del actor al pago de los intereses, de lo contrario, esto es, de no cumplirse antes de que concluya tal temporalidad, serán procedentes su exigencia y su pago, en el entendido de que los salarios caídos se generarán hasta llegar a los 12 meses, y que con posteridad a ello el tiempo que transcurra fundamentará el derecho al pago de los intereses sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2% mensual, capitalizable al momento del pago; y, 2. Cuando el laudo se dicte después de 12 meses, se deberá expresar: a) que es procedente el pago de salarios caídos hasta por ese límite, para lo cual deberá precisarse el lapso en el que se verificaron y su monto; y, b) que es procedente el pago de intereses sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del aludido porcentaje mensual, capitalizable a su pago, para lo que deberá señalarse que la temporalidad en la que operarán inició a partir del día siguiente a aquel en el que se cumplieron los 12 meses de salarios caídos. Respecto de esto último, por justicia pronta y en un plazo razonable, conforme a los artículos 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, si la finalidad del interés del 2% mensual es sustituir a los salarios caídos después de 12 meses, entonces no hay impedimento para que cuando sean susceptibles de su cálculo al dictarse el laudo, así lo haga la Junta, de manera que, al fijar los términos y las medidas de cumplimiento del laudo, también deberá determinar, sin menoscabo del interés que se siga generando, la cantidad a la que ascienda al dictarse dicha resolución, sin que el interés se capitalice, porque conforme al artículo 48, la capitalización se hará al pagarse. Todo lo anterior, en el entendido de que el artículo 945 de la referida ley establece que los laudos deben cumplirse dentro de los 15 días siguientes al en que surta efectos la notificación, y que las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.31 L (10a.)

Amparo directo 252/2015. Cathy Trujillo López. 7 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Santiago Ermilo Aguilar Pavón, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Juan Carlos Corona Torres.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

INTERÉS PREVISTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. HIPÓTESIS EN LAS QUE PROCEDE SU CONDENA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012).

En lo conducente, el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, vigente a partir del 1o. de diciembre de 2012, establece: a) si en el juicio el patrón no comprueba la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho a la indemnización constitucional o a la reinstalación, así como al pago de los salarios vencidos computados desde la fecha del despido "hasta" por un periodo máximo de 12 meses; y, b) si al término de ese lapso no ha concluido el procedimiento o no se ha dado cumplimiento al laudo, se pagarán también al trabajador los intereses que se generen sobre el importe de 15 meses de salario, a razón del 2% mensual, capitalizable al momento del pago. De ello se sigue que la procedencia de la condena al pago del interés mensual está sujeta a las hipótesis generales siguientes: 1. Cuando el laudo se dicta antes de 12 meses y antes de ese lapso se hace el pago de la condena, entonces no será procedente su pago; 2. Cuando el laudo se dicta antes de 12 meses, pero su cumplimiento se verifica con posterioridad, los salarios caídos podrán cuantificarse hasta por esos 12 meses, pero después de ese plazo ya no se generarán, sino que será procedente, entonces, el pago del interés; y, 3. Si el laudo se dicta después de 12 meses, los salarios caídos sólo podrán computarse por 12 meses, y por el lapso restante –sea que abarque parte del procedimiento y con posterioridad a la emisión del laudo– será procedente el pago del aludido 2% de interés. De esta forma, será cada supuesto que se presente a la Junta –por regla general identificable por el momento en el que dicte el laudo– el que le permitirá determinar si es procedente la condena de pago de los intereses que refiere el tercer párrafo del citado artículo 48, así como los términos en los que se ha de fijar su pago. Lo anterior, considerándose también, que el artículo 945 de la referida ley establece que los laudos deben cumplirse dentro de los 15 días siguientes al en que surta efectos la notificación; y que las partes pueden convenir en las modalidades de su cumplimiento.

**TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.26 L (10a.)**

Amparo directo 252/2015. Cathy Trujillo López. 7 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Santiago Ermilo Aguilar Pavón, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Juan Carlos Corona Torres.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE MORELOS DESIGNADOS TEMPORAL E INTERINAMENTE. PARÁMETROS PARA SU REMOCIÓN, CONFORME AL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL.

El principio mencionado, contenido en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como garantía de estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, no sólo es aplicable a los Magistrados del Poder Judicial del Estado de Morelos, sino también a los Jueces de primera instancia, pues éstos son titulares de los juzgados que integran, como depositarios del propio Poder Judicial, y gozan de plena autonomía para dictar y ejecutar sus resoluciones. Conforme a esas bases constitucionales, para la remoción de los Jueces de primera instancia designados de manera temporal e interina, válidamente pueden advertirse los parámetros siguientes: a) Al igual que aquellos que cuentan con nombramientos definitivos, son sujetos del principio referido y ameritan determinada estabilidad y permanencia en el cargo, pues la provisionalidad no equivale a su libre remoción; b) Su destitución antes de la expiración del mandato para el que fueron nombrados, sin que se les dé una razón concreta y sin que dispongan de una protección judicial efectiva para impugnarla, es incompatible con la independencia judicial; c) La provisionalidad no debe significar alteración alguna del régimen de garantías para el buen desempeño del juzgador y la salvaguarda de los propios justiciables. Además, no puede extenderse indefinidamente y debe estar sujeta a una condición resolutoria, como el cumplimiento de un plazo predeterminado o la celebración y conclusión de un concurso público de oposición y antecedentes que nombren al remplazante del Juez provisorio con carácter permanente; d) Los nombramientos provisionales deben constituir una situación de excepción, no la regla; e) La extensión en el tiempo de la provisionalidad de los Jueces o el hecho de que la mayoría de éstos se encuentre en dicha situación, genera importantes obstáculos para la independencia judicial; y, f) Esta situación de vulnerabilidad del Poder Judicial se acentúa si tampoco existen procesos de destitución

respetuosos de las obligaciones internacionales contraídas por el Estado Mexicano.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
XVIII.5o.1 CS (10a.)

Amparo en revisión 121/2015. 30 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Domínguez Carrillo. Secretario: Carlos Alberto Ávila Muñoz.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE MORELOS DESIGNADOS TEMPORAL E INTERINAMENTE. TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ESTATAL QUE DA POR CONCLUIDO SU ENCARGO PARA NOMBRAR OTRO JUZGADOR CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS.

Conforme a los artículos 116, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 92 de la Constitución Política y 117 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas del Estado de Morelos, esta entidad está obligada a asegurar la independencia de los Jueces de primera instancia, aunque se les haya designado en forma temporal e interina y, por ello, debe otorgarles cierto tipo de estabilidad y permanencia en el cargo. Por su parte, en términos del artículo 177 de la citada ley orgánica, las ausencias absolutas de los Jueces serán cubiertas por nombramientos del Consejo de la Judicatura Estatal, pero este dispositivo no le faculta para nombrar y remover libremente a los Jueces que haya designado, aun en el caso de nombramientos temporales e interinos, porque desde que inician el cargo debe estar protegida su independencia judicial y, por ende, su estabilidad y permanencia en el cargo; facultad que no debe desvincularse del artículo 117 referido, en sus fracciones III, IV y V, conforme al cual, corresponde al consejo aludido convocar a concursos de méritos y exámenes de oposición a los aspirantes al cargo de Juez de primera instancia o menor, practicar y calificar los concursos y exámenes indicados y designarlos como resultado de aquéllos. En consecuencia, si la designación de un Juez nombrado temporal e interinamente obedece a una falta absoluta del titular de un juzgado y la conclusión de su encargo no se debe a la designación de un titular, con vista a los resultados de un concurso de méritos o examen de oposición sino que, en su lugar se nombra otro juzgador, también en forma temporal e interina; entonces, el Juez afectado tiene interés jurídico para promover juicio de amparo indirecto contra la resolución del Consejo de la Judicatura Estatal que da por concluido su encargo.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.
XVIII.5o.4 K (10a.)

Amparo en revisión 121/2015. 30 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Domínguez Carrillo. Secretario: Carlos Alberto Ávila Muñoz.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE CONTRA LAS MULTAS IMPUESTAS COMO MEDIDA DE APREMIO POR LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE.

Contra las multas impuestas como medida de apremio por la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente procede el juicio contencioso administrativo, en términos del artículo 14, fracción III, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, porque su emisión se fundamenta en una norma administrativa federal, esto es, en la ley orgánica del propio organismo, sin que sea obstáculo a lo anterior que el artículo 25 de este último ordenamiento señale que contra las recomendaciones, acuerdos o resoluciones definitivas de la procuraduría mencionada no procede ningún recurso, porque dicho precepto se refiere a la improcedencia de los recursos, en sentido estricto, pero no hace referencia a algún otro medio de defensa, como lo es el juicio contencioso administrativo federal; interpretación que resulta más favorable para el particular, en términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, dichas multas son un acto definitivo e independiente del procedimiento del que emanan, ya que, por su naturaleza, su validez no depende de lo que se resuelva en aquél.

DÉCIMO SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.16o.A.16 A (10a.)

Amparo directo 413/2015. Scotiabank Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Scotiabank Inverlat. 26 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Ernesto Martínez Andreu. Secretaria: Miguelina Joaquín Amar.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca la diversa jurisprudencial 2a./J. 153/2013 (10a.), de título y subtítulo: "MULTA IMPUESTA COMO MEDIDA DE APREMIO CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 25, FRACCIÓN II, DE LA LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR. ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 10 de enero de 2014 a las 14:17 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 2, Tomo II, enero de 2014, página 1534.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

JURISPRUDENCIA ESTABLECIDA POR UN PLENO DE CIRCUITO. ES OBLIGATORIA TANTO PARA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS

QUE SE UBIQUEN DENTRO DE ESE CIRCUITO COMO PARA LOS AUXILIARES QUE LOS APOYEN EN EL DICTADO DE SUS RESOLUCIONES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA REGIÓN A LA QUE ÉSTOS PERTENEZCAN.

Conforme al segundo párrafo del artículo 217 de la Ley de Amparo la jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria, entre otros, para los Tribunales Colegiados que se ubiquen dentro del Circuito correspondiente. En esa tesitura, si bien es verdad que un Tribunal Colegiado de Circuito de un Centro Auxiliar, aunque pertenece a una determinada Región, cuenta con competencia mixta y con jurisdicción en toda la República Mexicana (en puridad, no forma parte de un determinado Circuito); también lo es que, al brindar apoyo a algún órgano jurisdiccional para el dictado de la sentencia, se mimetiza o sustituye en el tribunal auxiliado, por lo que su competencia y jurisdicción están limitadas a la que corresponda al órgano jurisdiccional al que está prestando apoyo en el dictado de la sentencia. Por ende, si la jurisprudencia que emite el Pleno de un determinado Circuito es obligatoria para el órgano jurisdiccional auxiliado, lo es, por vía de consecuencia, para el auxiliar, con independencia de la Región a la que éste pertenezca; tan es así, que cuando el Constituyente, el legislador ordinario y el Consejo de la Judicatura Federal establecieron una regla de competencia para decidir las contradicciones de tesis en las que participen Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, se considera que éstos pertenecen al Circuito del Tribunal Colegiado auxiliado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.

(IV Región)2o.8 K (10a.)

Amparo directo 462/2015 (cuaderno auxiliar 681/2015) del índice del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. 4 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: Adrián Domínguez Torres.

Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis publicada el viernes 29 de enero de 2016 a las 11:00 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*, así como en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 26, Tomo IV, enero de 2016, página 3356, se publica nuevamente con la cita correcta del número de identificación y de la materia.

Esta tesis se republicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.



LAUDOS DICTADOS POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO. PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO PUEDE IMPONER DIVERSAS SANCIONES, ENTRE ELLAS, LA SUSPENSIÓN DE LA AUTORIDAD EN EL CARGO POR UN PLAZO DE 15 DÍAS SIN GOCE DE SUELDO.

Los artículos 140 a 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios establecen que las autoridades están obligadas a prestar auxilio al Tribunal de Arbitraje y Escalafón para hacer cumplir y respetar sus resoluciones, cuando fueren requeridas para ello; que dicho órgano tiene la obligación de proveer la eficaz e inmediata ejecución de los laudos y, a ese efecto, dictará todas las medidas necesarias en la forma y términos que, a su juicio, sean procedentes; de donde se advierte que, para lograr la ejecución y el cumplimiento de sus laudos, el referido tribunal tiene la facultad de imponer sanciones que pueden ser desde 10 hasta 100 veces el salario mínimo general vigente de la zona económica, así como la suspensión de la autoridad en el cargo por un plazo de 15 días sin goce de sueldo de los funcionarios que debieron darle cumplimiento, y cuando se trate de servidores públicos de otros poderes, niveles de gobierno o Municipios, se remitirán las constancias de las actuaciones que se hubieren efectuado al servidor o servidores públicos encargados de aplicar la sanción correspondiente que, en el caso concreto, corresponde al Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, previo procedimiento.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

III.3o.T.36 L (10a.)

Amparo en revisión 246/2014. 20 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Castro León. Secretaria: Valeria Marien Lobato Zepeda.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

LINEAMIENTOS SOBRE *MUST CARRY* Y *MUST OFFER* EMITIDOS POR EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. EL CONCEPTO "MISMA ZONA DE COBERTURA GEOGRÁFICA", PREVISTO EN SU ARTÍCULO 3, RESPETA LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN QUE RIGEN EL SERVICIO DE CADA TELEVISORA. El artículo octavo transitorio, fracción I, del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013, señala: i) Los concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida están obligados a permitir a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de su señal, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde; y, ii) Los concesionarios que presten servicios de televisión restringida están obligados a retransmitir la señal de televisión radiodifundida, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde, e incluirla sin costo adicional en los servicios contratados por los suscriptores y usuarios. En correspondencia con ello, el artículo 3 de los lineamientos generales en relación con dicho precepto (sobre *must carry* y *must offer*), emitidos por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y publicados en el señalado medio de difusión el 27 de febrero de 2014, define el concepto "misma zona de cobertura geográfica", como "el área geográfica en que coinciden las áreas donde tienen autorizado prestar, en términos de las disposiciones normativas y administrativas aplicables, sus respectivos servicios el concesionario de televisión radiodifundida y el concesionario de televisión restringida de que se trate"; luego, es evidente que esta última porción normativa respeta los títulos de concesión que rigen el servicio de cada televisora, pues la "misma zona de cobertura geográfica" es aquella en que coinciden, precisamente, las áreas en las que están autorizados para prestar sus respectivos servicios los concesionarios. A lo anterior cabe agregar que la propia Constitución ordena transmitir la señal, lo cual implica e incluye los contenidos asociados a ella, pues no tendría sentido y devendría irracional buscar dar cobertura a las audiencias, sin allegarse de la programación televisiva en su integridad.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.128 A (10a.)

Amparo en revisión 1/2015. Cablemás Telecomunicaciones, S.A. de C.V. y otras. 12 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Rodolfo Meza Esparza.

Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

LINEAMIENTOS SOBRE *MUST CARRY* Y *MUST OFFER* EMITIDOS POR EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. LOS CONCESIONARIOS DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA TERRENAL CARECEN DE INTERÉS PARA RECLAMAR EN AMPARO LA RESTRICCIÓN QUE, ADUCEN, AQUÉLLOS IMPONEN A LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE AUTOR, CONSISTENTE EN ENTREGAR GRATUITAMENTE EL CONTENIDO QUE LES PERTENECE.

Del artículo octavo transitorio, fracción I, del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2013 se advierte, entre otras cosas, que los concesionarios que presten servicios de televisión radiodifundida están obligados a permitir a los concesionarios de televisión restringida la retransmisión de la señal, de manera gratuita y no discriminatoria, dentro de la misma zona de cobertura geográfica, en forma íntegra, simultánea y sin modificaciones, incluyendo la publicidad y con la misma calidad de la señal que se radiodifunde. En consecuencia, los concesionarios de televisión restringida terrenal carecen de interés para reclamar en amparo la restricción que, aducen, imponen los lineamientos generales en relación con dicho precepto (sobre *must carry* y *must offer*), emitidos por el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y publicados en el señalado medio de difusión el 27 de febrero de 2014, a los titulares de los derechos de autor, consistente en la obligación de entregar gratuitamente el contenido que les pertenece, por ser un reflejo de lo ordenado en la Constitución, en aras de favorecer el interés de la sociedad, lo cual debe operar en esa medida, acorde con el elemento reglamentario de las concesiones. Además, los derechos patrimoniales y de autor conexos son de naturaleza patrimonial y la propiedad privada es un derecho constitucional limitado o acotado; en el caso, la propia Norma Suprema determina cómo debe usarse la señal y los contenidos a ella asociados, previendo gratuidad absoluta en ciertos supuestos, y

eso constituye un conjunto de restricciones o límites al derecho patrimonial de propiedad, que es preferente a los intereses privados, meramente patrimoniales y con fines especulativos, en tanto que deben prevalecer, priorizar y satisfacerse los intereses públicos y sociales de un colectivo preferente, que son las audiencias, lo cual se traduce en una obligación del Estado y de los concesionarios.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.127 A (10a.)

Amparo en revisión 1/2015. Cablemás Telecomunicaciones, S.A. de C.V. y otras. 12 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason. Secretario: Rodolfo Meza Esparza.

Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. SE ACTUALIZA SU RATIFICACIÓN TÁCITA SI AL CONCLUIR EL PERIODO CONSTITUCIONAL DE DURACIÓN DE SU CARGO NO SE HA EMITIDO EL DICTAMEN EN EL QUE SE DETERMINE SI DEBEN SER REELECTOS.

La Constitución Política y el Código de Organización del Poder Judicial, ambos del Estado de Chiapas, establecen el procedimiento para la evaluación y eventual ratificación de los Magistrados del Poder Judicial, pero no prevén la ratificación tácita, sino que establecen el derecho a que se califique la actuación de esos funcionarios durante el desempeño del cargo, así como la obligación, tanto del titular del Poder Ejecutivo de emitir un dictamen de evaluación en torno a dicha función, como del Congreso estatal de dar el trámite legal a las restantes etapas del procedimiento administrativo de ratificación, hasta emitir el decreto correspondiente. Por su parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P/J. 112/2000, estableció como presupuestos para que opere la ratificación tácita en cualquiera de los Estados de la República Mexicana los siguientes: 1) Que se haya ejercido el cargo por el término previsto en la Constitución local respectiva; y, 2) Que al término del periodo no se haya emitido dictamen de evaluación por el órgano u órganos encargados de proponer y aprobar la ratificación, que concluya en la negativa de la ratificación. Por tanto, si un Magistrado de la entidad federativa indicada ejerció su investidura por el término de seis años, de conformidad con el artículo 57 de la Constitución del Estado y a la conclusión de ese lapso no se ha emitido el dictamen en el que se determine si debe ser reelecto, aun cuando ya haya transcurrido el plazo para ello, se actualiza en su favor la ratificación tácita en el cargo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.
XX.2o.4 A (10a.)

Amparo en revisión 319/2015. 6 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Arteaga Álvarez. Secretaria: María Mayela Burguete Brindis.

Nota: La denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito.

La tesis de jurisprudencia P/J. 112/2000 citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XII, octubre de 2000, página 17, de rubro: "MAGISTRADOS DE LOS TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA DE LOS ESTADOS. PRESUPUESTOS PARA QUE OPERE SU RATIFICACIÓN TÁCITA."

En relación con el alcance de la presente tesis, destacan las diversas aislada P. CLXIV/2000 y jurisprudencial P/J. 22/2006, de rubros: "MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ. SU RATIFICACIÓN TÁCITA OPERA SI AL TÉRMINO DEL PERIODO DE SEIS AÑOS PREVISTO PARA LA DURACIÓN DEL CARGO, NO SE HA EMITIDO DICTAMEN DE EVALUACIÓN QUE CONCLUYA CON LA DETERMINACIÓN DE QUE NO DEBAN SER REELECTOS." y "RATIFICACIÓN O REELECCIÓN DE FUNCIONARIOS JUDICIALES (MAGISTRADOS DE TRIBUNALES SUPERIORES DE JUSTICIA LOCALES, ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL). CARACTERÍSTICAS Y NOTAS BÁSICAS.", publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XII, octubre de 2000, página 42 y Tomo XXIII, febrero de 2006, página 1535, respectivamente.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

MARCA. SU REGISTRO AMPARA ÚNICAMENTE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DE FORMA EXPRESA Y ESPECÍFICA REFIERE SU TÍTULO.

Uno de los principios fundamentales que rigen al derecho marcario es el de especialidad, que se encuentra previsto en el artículo 93 de la Ley de la Propiedad Industrial, e implica que un signo distintivo debe inscribirse, invariablemente, con relación a uno o varios bienes o servicios específicos, de acuerdo con la clasificación que defina el reglamento de la ley. Dicho principio no sólo encuentra su racionalidad en el hecho de que una marca es un instrumento concreto a través del cual un empresario busca diferenciar en el mercado uno o varios productos o servicios determinados que fabrica o provee, respecto de aquellos iguales o similares que ofertan sus competidores, sino que, además, hace funcional el propio sistema como mecanismo garante de la competencia leal, pues permite el otorgamiento de registros sobre signos idénticos o semejantes que, en razón de emplearse en bienes o servicios disímiles, pueden coexistir en el comercio sin generar confusión en el consumidor. Por otro lado, la Clasificación internacional de productos y servicios para el registro de las marcas se constituye, conforme al Arreglo de Niza, tanto por un listado de cuarenta y cinco clases, que refieren de forma enunciativa algunos de los productos o servicios que en cada una de ellas se catalogan, como por un exhaustivo listado alfabético de bienes y servicios que indica a qué clase pertenece cada uno de ellos, lo que evidencia que su única función es catalogar, para efectos administrativos, los signos cuya inscripción se solicita y otorga. Por tanto, si se toma en cuenta que, conforme al artículo 113,

fracción IV, del ordenamiento citado, corresponde exclusivamente al solicitante de un registro marcario especificar en la petición respectiva cuáles son los bienes y servicios que desea vincular a su signo distintivo, se debe concluir que el registro de una marca solamente ampara aquellos productos o servicios que expresa y específicamente se indiquen en el título respectivo, quedando fuera cualquier otro que no se refiera explícitamente en él. En ese contexto, el hecho de que una marca se haya registrado para amparar todos aquellos bienes o servicios que se enuncian en el encabezado de una clase en particular, no es razón para estimar que también protege los demás bienes o servicios que en ella se catalogan, a pesar de no estar señalados específicamente en el título respectivo, pues ello implicaría no sólo inobservar el principio de especialidad, ya que tales inscripciones ampararían productos determinables y no determinados, sino que también atentaría contra la propia funcionalidad y seguridad jurídica que debe proveer cualquier sistema registral marcario.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.1o.A.120 A (10a.)

Amparo directo 434/2015. Sistemas de Perfeccionamiento Educativo, S.A. de C.V. 24 de septiembre de 2015. Unanimitad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Luis Felipe Hernández Becerril.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

MERCADO RELEVANTE. CARACTERÍSTICAS Y UTILIDAD DE LA PRUEBA DE ELASTICIDAD CRUZADA DE LA DEMANDA Y DE LA OFERTA PARA DETERMINARLO. La prueba de elasticidad sobre el producto o servicio ofertado por un agente económico (también denominada "de incrementos de precios no transitorios, pequeños pero significativos" o "del monopolista hipotético") se define como el cambio porcentual de la demanda de un producto o servicio, que resulta del aumento porcentual en su precio; de ahí que, si al aplicar dicha prueba se advierte que la elasticidad de la demanda sobre un producto o servicio ofertado por un agente económico es lo suficientemente alta (disminución considerable del volumen de la demanda en respuesta a cualquier incremento en el precio) como para considerar que el aumento reducido pero significativo de sus precios no es rentable, entonces habrá de aplicarse el examen de elasticidad cruzada para identificar los productos o servicios que ejercen presión competitiva sobre los ofertados por aquél, esto es, los que resultan sustitutos viables. Así, la prueba de elasticidad cruzada entre productos o servicios consiste en la variación porcentual en la demanda de un producto o servicio "B" cuando existe un aumento del uno por ciento en el precio del producto o servicio "A". Si se desarrolla de manera adecuada, dicha prueba ayudará a entender la presión competitiva que la oferta

de otros productos o servicios distintos (B) de los que son materia de estudio (A) genera sobre éstos. Asimismo, permitirá clasificar los sustitutos más cercanos, los cuales conformarán junto con los productos o servicios analizados, el mercado relevante, bajo la premisa de que un factor bajo de elasticidad entre los productos o servicios comparados es indicativo de que los consumidores no los perciben como sustitutos, lo que a su vez sugiere que ambos conforman mercados independientes o separados.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.121 A (10a.)

Amparo en revisión 90/2015. Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y otros. 5 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez.

Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

MERCADO RELEVANTE. SU DETERMINACIÓN A PARTIR DE LA PRUEBA DE INTERCAMBIABILIDAD RAZONABLE, CON BASE EN EL EXAMEN DE ELASTICIDAD DE LA DEMANDA Y DE LA OFERTA (LEGISLACIÓN ABROGADA). El artículo 12 de la abrogada Ley Federal de Competencia Económica señala que para determinar el mercado relevante en los procedimientos dirigidos a verificar la actividad de los diversos agentes económicos, deben considerarse las siguientes condiciones básicas: a) la posibilidad de sustituir un bien o servicio por otro, lo que requiere una prueba de sustituibilidad ante la oferta y la demanda; b) los costos de provisión del servicio o de distribución del bien y de sus insumos; c) la posibilidad de los consumidores de obtener el bien o servicio en otro mercado; y, d) las restricciones normativas que limitan el acceso del consumidor a otras fuentes de abasto alternativas. Así, la prueba de intercambiabilidad razonable consiste en determinar si los adquirentes de un producto o servicio pueden satisfacer su demanda a través de otro similar en precio, funcionalidad, uso o características, que no sea ofertado por el agente económico investigado; de ahí que para determinar los productos o servicios susceptibles de ejercer presión competitiva sobre los que son materia de análisis, es común acudir, en primera instancia, a aquellos que sean percibidos por los consumidores como sus-

titutos naturales (sustituibilidad por el lado de la demanda). En este supuesto, la presión competitiva proviene del cambio en el volumen total de la demanda hacia productos o servicios competidores cuando exista un aumento en el precio correspondiente a los que son materia de análisis. En cambio, la sustituibilidad por el lado de la oferta ocurre cuando los ofertantes de otros productos o servicios distintos del investigado, poseen las condiciones técnicas y los activos necesarios para modificar sus líneas de producción o mecanismos de suministro de servicios en un periodo corto de tiempo, y así producir o suministrar el mismo bien o servicio analizado. En este segundo supuesto, la presión competitiva no proviene de la posibilidad de que parte del volumen total de la demanda cambie a productos o servicios competidores, cuando exista un aumento en el precio de los que son materia de análisis, sino del hecho de que el aumento de precios atraiga al mercado de que se trate a otros proveedores que habitualmente ofertaban productos o servicios distintos. A partir de las anteriores premisas, puede realizarse el examen de elasticidad de la demanda y de la oferta, como una herramienta metodológica respecto de la sustituibilidad de productos o servicios, con base en el análisis de las variaciones en su precio, en relación con la sensibilidad de los adquirentes a dichos cambios, con la conducta de consumo que en consecuencia adopten y con el comportamiento de mercado desplegado por otros agentes económicos.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.120 A (10a.)

Amparo en revisión 90/2015. Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y otros. 5 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez.

Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU MONTO POR IMPEDIR EL INICIO O DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, AL NO PRESENTAR DE INMEDIATO LOS LIBROS Y REGISTROS QUE FORMEN

PARTE DE LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE, ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, POR REMISIÓN EXPRESA DEL LEGISLADOR.

De la interpretación armónica y sistemática de los artículos 40, fracción II, 53, segundo párrafo, inciso a), 85, fracción I y 86, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se colige que la multa aplicable como medida de apremio cuando los sujetos obligados impidan el inicio o desarrollo del ejercicio de las facultades de las autoridades fiscales, al no presentar de inmediato los libros y registros que formen parte de la contabilidad del contribuyente, es la establecida en la última disposición citada, pues el marco normativo que integran contiene una administración coherente, razonada y clara para identificar dicha medida pecuniaria. Lo anterior, porque en el artículo 53 aludido se encuentra la obligación de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, de presentar los informes o documentos que les soliciten las autoridades fiscales en el ejercicio de sus facultades de comprobación, entre los cuales se consideran los libros y registros indicados, los que deberán presentarse de inmediato, y en el diverso 40, fracción II, se precisa que en caso de oposición de los obligados a ello, dichas autoridades podrán imponer como medida de apremio la multa que corresponda en los términos del Código Fiscal de la Federación, el cual prevé en su artículo 86, fracción I, en relación con el diverso 85, fracción I, el monto de dicha multa. No se opone a esta conclusión que estos últimos preceptos consideren la multa como sanción a una conducta infractora, pues su aplicación, como medida de apremio, procede por la remisión expresa del legislador, a quien jurídicamente nada impide que, para identificar el monto de las multas impuestas como medio de apremio previstas en alguna disposición del propio código tributario, se remita a otra del mismo ordenamiento, a fin de evitar ser repetitivo o redundante, pues dicha técnica legislativa encuentra justificación en la estructuración sistemática del ordenamiento jurídico.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.2o.A.114 A (10a.)

Amparo directo 221/2015. Centro Empresarial, S.A. de C.V. 26 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Secretario: Edmundo Raúl González Villaumé.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

NOTARIOS PÚBLICOS. SU FALLECIMIENTO TRAE COMO CONSECUENCIA NECESARIA, INMEDIATA Y DIRECTA LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL CON LOS TRABAJADORES QUE UTILIZABAN PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA NOTARIAL, SIN QUE PUEDA CONSIDERARSE QUE DEBA CONTINUAR CON LA SUCESIÓN DEL *DE CUJUS*, O CON EL NOTARIO QUE SE DESIGNE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).

El artículo 434, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo establece que es causa de terminación de las relaciones de trabajo la muerte del patrón, siempre y cuando ésta produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa, la terminación de los trabajos. Por otro lado, el artículo 11 de la Ley del Notariado para el Estado de Tabasco dispone que la calidad de notario es única e indelegable, por lo que los notarios tienen que ejercer sus funciones en forma personal. Bajo ese contexto, la muerte de un titular de dicha función notarial traerá como consecuencia la pérdida de tal calidad, así como el fin de los trabajos inherentes a tal función. Asimismo, este suceso implica también la terminación de las relaciones de trabajo que en su momento unían al notario con los trabajadores que utilizaba para el ejercicio de la función pública que desarrollaba, porque ésta era única e indelegable, así como de ejercicio personal; de ahí que no es posible considerar que la relación laboral deba continuarse, por ejemplo, con la sucesión a bienes del *de cujus*, o con el posterior notario que se designe.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA CUARTA REGIÓN.

(IV Región)2o.12 L (10a.)

Amparo directo 274/2015 (cuaderno auxiliar 817/2015) del índice del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Circuito, con apoyo del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Xalapa, Veracruz. Martha del Carmen García Montejo. 8 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Adrián Avendaño Constantino. Secretario: José de Jesús Gómez Hernández.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.



OFRECIMIENTO DE TRABAJO. EL REALIZADO EN OTRO JUICIO LABORAL EN EL QUE SE RECLAMÓ EL DESPIDO INJUSTIFICADO, POR SÍ SOLO, ES INSUFICIENTE PARA ESTIMAR QUE EL TRABAJADOR GENERÓ DERECHOS PARA EL PAGO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO, YA QUE SON NECESARIAS LA ACEPTACIÓN DE ESA OFERTA Y LA MATERIALIZACIÓN DE LA REINSTALACIÓN.

El ofrecimiento de trabajo, como figura sui géneris creada jurisprudencialmente, tiene como finalidad revertir la carga probatoria al trabajador sobre la existencia del despido que alega, si se acredita que se realiza de buena fe; por tanto, el hecho de que en un diverso juicio laboral se hubiera demandado a la misma persona moral que en el de origen y que, con motivo de ello, el patrón le haya hecho una oferta de trabajo, no implica que la relación laboral se reanude en automático con esa sola propuesta y menos que se generen los derechos inherentes al nexo laboral, consistentes en vacaciones, prima vacacional y aguinaldo, ya que es necesario que el trabajador acepte ser reinstalado en su empleo y que, previa fijación de fecha y hora por la Junta laboral, la reinstalación se materialice, por lo que no será sino hasta ese momento en que la relación laboral se reanude cuando se comiencen a generar los derechos inherentes a ella. En este sentido, si en un juicio laboral se demandan prestaciones que se generan con motivo de la existencia del nexo de trabajo, bajo la premisa de que dicha relación existe por el hecho de que en un juicio distinto en el que se demandó el despido injustificado se hizo un ofrecimiento de trabajo por la parte patronal, por sí solo, es insuficiente para que sean procedentes tales prestaciones, sino que debe acreditarse que se materializó la reinstalación derivada del ofrecimiento de trabajo y que se laboró en los periodos por los cuales se reclaman, pues al encontrarse separado de su empleo, el trabajador no genera el derecho a obtenerlas.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.4o.T.3 L (10a.)

Amparo directo 673/2015. Guillermo Gonzalo Salazar Flores. 19 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Víctor Pedro Navarro Zárate. Secretario: Edgar Humberto Muñoz Castillo.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL. LA INCOMPATIBILIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN IV, DE LA LEY RELATIVA IMPLICA RESPONSABILIDAD SÓLO PARA EL REPRESENTANTE CIUDADANO Y NO PARA EL SERVIDOR PÚBLICO.

La norma prevé la incompatibilidad del ejercicio del cargo de integrante del comité ciudadano, órgano de representación ciudadana, con alguno otro en la administración pública delegacional, local o federal, y sanciona su incumplimiento con la separación o remoción del primero, esto es, no implica responsabilidad administrativa del ciudadano en su calidad de servidor público, de modo que no impide ejercer el cargo público, sino el de representación ciudadana. Esa interpretación es conforme con el artículo 5o., párrafo primero, de la Constitución, en la medida en que no impide al gobernado que desempeña un cargo honorario como representante ciudadano, incorporarse a la administración pública local o federal mediante el desempeño de un cargo público remunerado que garantice su subsistencia y la de su familia.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.1o.A.118 A (10a.)

Amparo directo 420/2015. Nora Erika Guevara Rosas. 20 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Ronzon Sevilla. Secretaria: Ana Margarita Mejía García

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PATENTE. LA DESTRUCCIÓN RETROACTIVA DE SUS EFECTOS, EN RAZÓN DE SU ANULACIÓN, SE LIMITA RESPECTO DEL DERECHO DE EXCLUSIÓN QUE OTORGA Y, POR TANTO, NO ELIMINA LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE SU EXPLOTACIÓN COMERCIAL MIENTRAS ESTUVO VIGENTE. Una patente es el reconocimiento oficial que

hace el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en el sentido de que una determinada invención satisfizo las condiciones tanto formales como sustantivas (novedad, actividad inventiva y aplicación industrial) para que, como contrapartida de su divulgación, se otorgue a su titular el derecho exclusivo de explotarla comercialmente durante veinte años, a partir de la fecha en que se presentó la solicitud respectiva, esto es, la prerrogativa de impedir a sus competidores a emplearla sin su autorización. Sin embargo, ésta no es la única consecuencia que genera su otorgamiento, ya que, a través de él, se constituye también en favor de su propietario una presunción de que la invención protegida no invade, en principio, derechos previos de terceros, si se toma en cuenta que el estado de la técnica se compone, entre otros elementos, por las patentes concedidas por el organismo descentralizado citado y por las solicitudes en trámite formuladas con anterioridad, presunción que, hasta en tanto no se invalide dicho acto administrativo (patente), legítimamente provee a su titular la certeza de que la producción industrial de su creación es legal y, por tanto, que no le generará alguna responsabilidad frente a un competidor cuya patente previa estime invadida. Por tanto, la destrucción retroactiva de los efectos de una patente por su anulación, establecida en el artículo 79 de la Ley de la Propiedad Industrial, debe limitarse al derecho de exclusión que su otorgamiento provee, quedando, por ende, intocada la presunción de legalidad en cuanto a su explotación comercial frente a derechos previos, ya que de razonar en sentido contrario no sólo se desconocería, sin justificación, la presunción referida, sino que, además, generaría un estado de incertidumbre excesivo y arbitrario no sólo para quien, después de obtener una patente, pretenda invertir en su explotación comercial, sino también para aquellos que participen en ese proceso, situación que lejos de incentivar el desarrollo tecnológico que busca la legislación de la materia, lo desalentaría.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.1o.A.121 A (10a.)

Amparo directo 216/2015. Punto Verde de Cuautla, S.A. de C.V. 3 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Secretario: Luis Felipe Hernández Becerril.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. SI SU MONTO SE CALCULA CON BASE EN EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO, ES IMPROCEDENTE INCLUIR EL CONCEPTO DE AYUDAS ASISTENCIALES, AL ENCONTRARSE COMPRENDIDO EN AQUÉL

(ARTÍCULO 168 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997).

Conforme al artículo 167 de la Ley del Seguro Social, vigente hasta el 30 de junio de 1997, las pensiones anuales de invalidez y de vejez —debiendo incluirse las de cesantía en edad avanzada, acorde con el numeral 147 de la legislación en cita—, se compondrán de una cuantía básica y de incrementos anuales, computados de acuerdo con el número de cotizaciones semanales reconocidas con posterioridad a las primeras 500 semanas de cotización, y éstos serán calculados conforme a la tabla especificada en ese precepto; asimismo, para determinar la cuantía básica anual de la pensión y sus incrementos, se considerará como salario diario el promedio correspondiente a las últimas 250 semanas de cotización; y el que resulte, se expresará en veces el salario mínimo general para el Distrito Federal, vigente en la fecha en que el asegurado se pensione, a fin de determinar el grupo de la tabla de trato en que se encuentra; de esa manera, los porcentajes para calcular la cuantía básica, así como los incrementos anuales, se aplicarán al salario diario promedio mencionado (este método constituye la regla general para la cuantificación de las pensiones). Por su parte, el numeral 168 de la propia legislación dispone que la pensión de invalidez, vejez o de cesantía en edad avanzada, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales, que en su caso correspondan, no podrá ser inferior al 100% del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal, es decir, la percepción diaria de la pensión, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales, no puede ser menor al salario mínimo general vigente (en la fecha del otorgamiento) en el Distrito Federal, pues, de ser así, la pensión debe cuantificarse con base en dicho salario mínimo general (esta mecánica constituye una excepción a la regla general para el cálculo de las pensiones y solamente aplica en el supuesto en que el monto de la pensión, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales, sea inferior al 100% del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal). En consecuencia, siempre que se efectúe el cálculo de la pensión de cesantía en edad avanzada con base en el referido numeral 168, esto es, igualando el importe diario de la cuantía básica de la pensión al mencionado salario mínimo, en el supuesto en el que el asegurado, además, tenga derecho al pago del concepto de ayudas asistenciales, es jurídicamente improcedente la cuantificación independiente sobre esa última prestación, porque al calcularse la pensión en los términos indicados, este concepto ya se encuentra incluido en ese importe, ya que la regla contenida en el citado precepto únicamente sirve como parámetro cuando el ingreso diario determinado del pensionado, incluyendo las asignaciones familiares y ayudas asistenciales sea inferior al citado porcentaje del salario mínimo general que rija para el Distrito Federal y, de ser así, debe fijarse la pensión con base en ese 100% del salario mínimo general, esto es, cuando en conjunto esos conceptos sean menores al mínimo general, no así que, después de efectuar esa cuantificación, deba incluir-

se y calcularse sobre ese monto el pago de la ayuda asistencial; lo que incluso depara mayor beneficio para el pensionado, en atención a que la cuantía final de la pensión será superior; sostener lo contrario, implicaría que se efectuara un doble pago por la ayuda de mérito, cuando ya está comprendida al igualar la sumatoria de las percepciones al salario mínimo general que rija en el Distrito Federal en la fecha del otorgamiento de la pensión.

CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.4o.T.1 L (10a.)

Amparo directo 712/2015. Instituto Mexicano del Seguro Social. 22 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Hernández Núñez. Secretario: Luis Alberto Sáenz Cárdenas.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PENSIONES DEL ISSSTE. EL INCREMENTO DE LAS QUE FUERON OTORGADAS AL AMPARO DE LA LEY DE 1959 DEBE ATENDER, PRIMERAMENTE, A LA MECÁNICA DE AUMENTO SEXENAL Y, A PARTIR DE LA REFORMA A SU ARTÍCULO 136, A LA VARIACIÓN DE LOS SUELDOS DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO. El artículo 136 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 1959, preveía que cada seis años se haría revisión de la cuantía de las jubilaciones y pensiones para mejorarlas conforme al aumento en el costo de la vida y de acuerdo con los índices elaborados por el Banco de México; disposición que fue modificada el 2 de enero de 1981, entrando en vigor al día siguiente, con lo que fue variada la mecánica y temporalidad con que habrían de ser actualizadas las cuotas pensionarias, pues de estar sujetas a incrementos cada seis años, se previó que aumentarían en igual tiempo y proporción que los sueldos de los trabajadores en activo. En la exposición de motivos de dicha reforma se sostuvo que su propósito fue que el instituto revisara cada año el monto de las pensiones a efecto de que, dentro de lo posible, mantuvieran un nivel necesario para satisfacer, cuando menos, las necesidades más imperiosas de los trabajadores del servicio civil que, por el transcurso del tiempo, edad y estado físico, se encontraban jubilados o pensionados, es decir, atendió a una finalidad proteccionista a favor de éstos; de ahí que la reforma al artículo 136 comprendió tanto a quienes ya tenían esa calidad previamente, como a los que la adquirieron con posterioridad –pero dentro de la vigencia de la ley–, dado que, al tener ambos idéntica condición frente al ordenamiento legal, deben participar por igual de la medida protectora a efecto de que sea garantizada su subsistencia, la cual se vería comprometida si la cuota pensionaria de los primeros fuera incrementada conforme al régimen de aumento sexenal.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.1o.A.125 A (10a.)

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 392/2015. Director Jurídico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. 19 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González de la Torre.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PERSONAS CON DIVERSIDADES FUNCIONALES. CONSIDERAR QUE DEBEN AGOTAR LAS POSIBILIDADES DE ADECUARSE A SU ENTORNO PARA EJERCER PLENAMENTE SUS DERECHOS HUMANOS EN CONDICIONES DE IGUALDAD, ANTES DE PRETENDER LA REALIZACIÓN DE AJUSTES RAZONABLES, ACENTÚA LA DISCRIMINACIÓN DE QUE SON OBJETO Y NO CORRESPONDE AL MODELO DE ENTENDIMIENTO SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD ACTUALMENTE ADOPTADO.

A la luz del modelo de entendimiento social de la discapacidad actualmente adoptado, ésta es considerada como una desventaja causada por las barreras que la organización social genera, al no atenderse adecuadamente las necesidades de las personas con diversidades funcionales, lo que provoca que se encuentren impedidas para ejercer plenamente sus derechos humanos en condiciones de igualdad. Desde esta perspectiva, es incorrecto considerar que para remover esas barreras, lo más conveniente sea que deban agotar las posibilidades de adecuarse a su entorno, antes de pretender la realización de ajustes razonables que lo permitan, pues aunque en eso vaya un esfuerzo por mostrar alternativas para evitar seguir siendo objeto de los actos que les afectan, una postura así sólo fortalece su segregación o exclusión de la que las personas con discapacidad deben ser libradas para procurar su integración en condiciones de igualdad, además de que parte de un entendimiento incorrecto de la discapacidad, conforme al cual es el individuo que la resiente y no los demás, quien está obligado a agotar todas las alternativas posibles y razonables para eliminar la afectación causada por su condición, lo que acentúa la discriminación de que es objeto, con una consecuencia totalmente opuesta a la que se busca mediante la solicitud de ajustes razonables.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.2o.A.6 CS (10a.)

Queja 209/2015. Bertha Alicia San Miguel del Ángel. 3 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PODER SUSTANCIAL EN EL MERCADO DE LOS DISTINTOS SERVICIOS DESAGREGADOS DE INTERCONEXIÓN. EL PRINCIPIO DE LIBERTAD TARIFARIA NO EXIME AUTOMÁTICAMENTE A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA IMPUTACIÓN DE CONTAR CON AQUEL.

La noción de "poder sustancial", entendida como la capacidad para fijar precios por encima de la competencia, presupone una posición de dominancia que permite a los agentes económicos incrementar los precios unilateralmente. Por otra parte, de acuerdo con el principio de libertad tarifaria, previsto en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, los concesionarios de redes públicas en la primera de esas materias, pueden convenir voluntariamente las tarifas correspondientes a los servicios desagregados de interconexión, con la posibilidad de que el órgano regulador intervenga, ante el eventual desacuerdo entre las partes. No obstante, dicho principio no necesariamente lleva a considerar la inexistencia del poder sustancial en el mercado atribuido a un concesionario, pues es insuficiente, por sí solo, para superar una realidad que opera en los mercados, en condiciones reales de poder y autonomía de agentes con capacidad para imponer sus intereses y elecciones convenientes. Por tanto, el principio referido no exime automáticamente a los agentes económicos de la imputación de contar con poder sustancial en el mercado de los distintos servicios desagregados de interconexión, ni de que algunos puedan imponer condiciones que les favorezcan, dado que la posición económica, jurídica y de hecho que uno pudiera guardar frente al otro es susceptible de ocasionar que, en los acuerdos relativos, prevalezca un poder de negociación inequitativo por el ofertante.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.125 A (10a.)

Amparo en revisión 90/2015. Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y otros. 5 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez.

Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PODER SUSTANCIAL EN UN MERCADO RELEVANTE. VARIABLES QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA DETERMINARLO. El análisis del

poder sustancial en un mercado relevante no puede realizarse en términos abstractos, bajo una perspectiva de competencia perfecta, como refiere el modelo de Jean Louis Francois Bertrand ("modelo de Bertrand"), pues en condiciones reales en las que los productos y servicios existentes en los distintos mercados no son percibidos por los consumidores como sustitutos perfectos, los diversos agentes económicos tienen cierto grado de poder. Esta circunstancia obliga a determinar tanto la medida como el umbral de poder de mercado con que cuentan los agentes económicos; de ahí la dificultad que representa la utilización de modelos econométricos –como el análisis de elasticidad inversa de la demanda residual–, dado el amplio volumen de datos que requieren (usualmente difíciles de recabar), lo que hace necesario acudir a un enfoque tradicional basado en métodos indirectos, que si bien es cierto que atienden preferentemente a la participación de mercado que ostenta el agente económico investigado, como el elemento central y más importante, también lo es que no se trata de la única variable que debe considerarse, pues la posición que los demás competidores guardan en el mercado relevante, la existencia de potenciales entrantes al mercado, así como el contrapeso que pueden ejercer los compradores, son aspectos que pueden resultar indicativos del poder sustancial que efectivamente se tiene en un mercado relevante, como acontece, por ejemplo, en ciertas industrias en que la producción se encuentra limitada por un insumo esencial.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.123 A (10a.)

Amparo en revisión 90/2015. Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y otros. 5 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez.

Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA. LAS CAUSAS QUE LA INTERRUMPEN OPERAN TANTO PARA EL AVALISTA COMO PARA EL AVALADO. De conformidad con las consideraciones de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 505/2011, cuya parte conducente se publicó en el *Semana-*

rio Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIV, Tomo 1, noviembre de 2012, página 768 y que dieron origen a la jurisprudencia 1a./J. 98/2012 (10a.), publicada en el mismo medio de difusión y Época, página 793, de rubro: "PAGARÉ. LA FALSEDAD DE LA FIRMA DEL AVALADO ELIMINA SU OBLIGACIÓN CAMBIARIA Y CESA LA DEL AVALISTA.", se obtienen las siguientes conclusiones: a) cuando el documento no ha circulado sólo contiene un acto jurídico; por ende, no puede afirmarse que el obligado principal y el aval participan en dos actos jurídicos diferentes; b) el aval expresa siempre una relación de garantía, esto es, garantiza el pago del documento cambiario, pues con su intervención evoca la preexistencia del título y se solidariza con su avalado en su pago; de ahí que se considere valorizador de la firma del deudor; asimismo, la obligación del aval representa una garantía de carácter objetivo, es decir, esa responsabilidad es solidaria con la del avalado, en ese sentido, no adquiere una obligación propia e independiente de todas las que constan en el documento –salvo cuando el documento ha circulado pues, en este caso, pueden converger en él varios actos jurídicos–; y, c) la acción contra el avalista está sujeta a los mismos términos y condiciones a los de la acción contra el avalado. Por consiguiente, como la obligación es solidaria, sólo ante la existencia de la obligación asumida por el avalado subsiste la del aval. En ese sentido, la excepción de prescripción de la acción cambiaria opuesta por el avalista demandado opera tanto para éste, como para el avalado; y, bajo esas mismas premisas, las causas que interrumpen aquella –prescripción– en relación con el obligado principal, son útiles para obstaculizarla por lo que ve al aval.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CUARTO CIRCUITO. XXIV.2o.1 C (10a.)

Amparo directo 275/2015. Caja Solidaria Rosamorada, S.C. de A. y P. de R.L. de C.V. 3 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: David Pérez Chávez. Secretario: Armando Manuel Pérez Trujillo.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PRIMA VACACIONAL. ES UNA PRESTACIÓN LEGAL Y CORRESPONDE AL PATRÓN DEMOSTRAR SU MONTO Y PAGO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD RECLAMADA. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 31/2011 (10a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro V, Tomo 2, febrero de 2012, página 779, de rubro: "AGUINALDO. ES UNA PRESTACIÓN LEGAL Y CORRESPONDE AL PATRÓN DEMOSTRAR SU MONTO Y PAGO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD RECLAMADA.", estableció que corresponde al patrón probar su dicho cuando exista controversia sobre el monto y pago del salario, por lo que si el aguinaldo es parte integrante de aquél, a él correspondía acreditar esos extremos, con independen-

cia de que se reclamara en una cantidad mayor a la prevista por la ley. Ahora bien, las mismas razones deben prevalecer respecto de la prima vacacional, pues al igual que el aguinaldo, ésta se constituye como un ingreso adicional y extraordinario que debe ser considerado como parte integrante del salario en términos del artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo; por tanto, en todos los casos corresponde al patrón probar su monto y pago cuando exista controversia al respecto, no obstante que se haya reclamado en términos superiores al de 25% del salario que prevé el artículo 80 de la referida ley.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.27 L (10a.)

Amparo directo 475/2014. Banco Azteca, S.A., Institución de Banca Múltiple. 18 de diciembre de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

Amparo directo 172/2015. Javier Medina Fierros. 5 de junio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PRINCIPIO DE IDENTIDAD. EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN EL FUERO MILITAR, POR LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, AQUEL IMPERA ENTRE EL JUEZ QUE DESAHOGÓ LA AUDIENCIA DE DERECHO Y EL QUE RESOLVERÁ EN DEFINITIVA. No obstante que el Código de Justicia Militar carece de disposiciones que regulen de manera detallada el procedimiento y las formalidades a observar para otorgar validez y eficacia a las actuaciones, diligencias o audiencias que se practiquen, además de que sean motivadas y fundadas en leyes expedidas con anterioridad al hecho, ni prevé la aplicación supletoria de otra normatividad que comprenda esos aspectos, a fin de garantizar al gobernado que será a través de un procedimiento en el que se cumpla con las formalidades en el cual se decida sobre la pretensión o la defensa y, en su caso, se ejecute esa decisión, deben respetarse los principios de legalidad y seguridad jurídica en todo acto de autoridad a que se refieren los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, mediante los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, definidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 192/2007, de rubro: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES.". De ahí que si el Juez de la causa es quien se formará un criterio

sobre lo que se va a resolver, con base en todas las constancias que integran el proceso e, incluso, en las alegaciones que hagan las partes en la audiencia de derecho, es indiscutible que, por razones de legalidad y seguridad jurídica, en el dictado de la sentencia de primera instancia, impera el principio de identidad entre el juzgador que desahogó la audiencia de derecho y el que resolverá en definitiva, lo que resulta justificable y cuya ratio se sustenta en que el resolutor que habrá de resolver en última instancia, debe ser el mismo que haya estado a cargo de la audiencia en la que propiamente las partes realizaron sus alegaciones, manifestaciones y defensa finales; de lo contrario, tendrá que ordenarse la reposición del procedimiento.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.5o.P.44 P (10a.)

Amparo directo 232/2015. 3 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Armando Hernández Orozco. Secretaria: Liliana Elizabeth Segura Esquivel.

Nota: La tesis de jurisprudencia 2a./J. 192/2007 citada, aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVI, octubre de 2007, página 209.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PRINCIPIO *NON REFORMATIO IN PEIUS*. NO ENCUENTRA APLICACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA CONCESIÓN DE AMPARO AL QUEJOSO, ANTE DISPOSICIÓN EXPRESA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 93, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO. De conformidad con el criterio sustentado por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 418 del Tomo CXIX, Núm. 2, de la Quinta Época del *Semanario Judicial de la Federación*, de rubro: "PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO, APLICACIÓN DE.", los principios generales del derecho no son aplicables cuando existe texto legal expreso sobre determinada situación jurídica. En ese orden de ideas, el artículo 93, fracción VI, de la Ley de Amparo establece que si quien recurre es el tercero interesado y resulta fundado un agravio de fondo, el Tribunal Colegiado de Circuito analizará los conceptos de violación no estudiados por el Juez de Distrito y concederá o negará el amparo, lo que significa que podría resultar beneficiada la peticionaria de la tutela federal, puesto que puede favorecerle la conclusión a la que arribe el órgano superior. Por tanto, aun cuando en la solución de los recursos deben observarse ciertas reglas o principios, uno de ellos el conocido como *non reformatio in peius*, que predica que un tribunal de alzada no podrá agravar la situación impuesta por el Juez de primer grado (salvo que existan

motivos de inconformidad procedentes, al respecto), es decir, se impide al juzgador negar o reducir al recurrente lo que obtuvo, lo cierto es que tal directriz no encuentra aplicación en el recurso de revisión interpuesto por el tercero interesado contra la concesión de amparo al quejoso, al existir disposición expresa.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL
DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XVII.1o.C.T.37 K (10a.)

Amparo en revisión 90/2015. Corporación Técnica de Urbanismo, S.A. de C.V. 3 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Gerardo Torres García. Secretaria: Consuelo Alejandra Morales Lorenzini.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN FORMA DE LAUDO Y ACTA DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN. SU AUSENCIA SIMULTÁNEA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL ORDINARIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO, AL NO HABER PARÁMETRO PARA ADVERTIR LA EXISTENCIA DE MODIFICACIONES Y ADICIONES DERIVADAS DE LA DISCUSIÓN, QUE DEBEN SER ATENDIDAS PARA LA VALIDEZ DEL LAUDO. En las jurisprudencias 2a./J. 116/2009, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXX, septiembre de 2009, página 674, de rubro: "PROYECTO EN FORMA DE LAUDO. LA FALTA DE FIRMA DEL AUXILIAR QUE LO FORMULÓ NO CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO." y 2a./J. 86/2011, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 732, de rubro: "PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN FORMA DE LAUDO. NO CONSTITUYE VIOLACIÓN A LAS REGLAS DEL PROCEDIMIENTO EL QUE NO SE ENCUENTRE AGREGADO AL EXPEDIENTE LABORAL.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que el proyecto de laudo es un documento de trabajo no vinculante, que constituye sólo una propuesta de solución, para que los integrantes de la Junta estén en posibilidad de discutirlo, y el hecho de que no se encuentre agregado al expediente no afecta las reglas del procedimiento, ni que no sea firmado por el auxiliar que lo formuló; de la misma manera, si el proyecto de laudo es aprobado sin modificaciones ni adiciones, se convierte, al firmarse por los integrantes de la Junta, en el laudo definitivo; en cambio, si se hacen modificaciones o adiciones, el secretario debe redactar el laudo acorde con lo aprobado y recabar las firmas de los integrantes de la Junta, pues únicamente se exige que el laudo se redacte y que el resultado se haga constar en acta. Asimismo, en la jurisprudencia 4a./J. 48/93, publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Octava

Época, Número 72, diciembre de 1993, página 55, de rubro: "LAUDO, ACTA DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN DEL PROYECTO DEL. DEBE LEVANTARSE Y FIRMARSE POR EL SECRETARIO CUANDO EL PROYECTO SE MODIFICA O ADICIONA Y LA CONSECUENCIA JURÍDICA DE LA OMISIÓN ES LA INVALIDEZ DE LA ACTUACIÓN.", la extinta Cuarta Sala del Alto Tribunal estableció que debe levantarse el acta de discusión y votación cuando el proyecto se modifica o adiciona pues, en esos casos, la omisión de formular el acta produce la invalidez del laudo, porque esa formalidad busca dar certeza de lo resuelto; que en cambio, la elaboración del acta es innecesaria cuando no existieron modificaciones o adiciones. En ese orden de ideas, si en un juicio laboral ordinario no obran el proyecto de laudo y el acta de discusión y votación, sino sólo el laudo firmado por los integrantes de la Junta, no se actualizan los supuestos de las aludidas jurisprudencias sobre que no es una violación procesal que trascienda, porque no existe forma de corroborar que el fallo que consta en autos, corresponde al proyecto de laudo que se hubiera presentado a los integrantes de la Junta y si fue o no motivo de adiciones y reformas, dado que los elementos omitidos constituyen un parámetro de comparación entre el proyecto discutido y el laudo aprobado, o entre éste y el acta de discusión y votación, más aún si el laudo fue aprobado por mayoría, lo que refuerza la necesidad de saber con certeza si existieron o no modificaciones al proyecto de laudo, en función de la audiencia de discusión y votación. Así, tales omisiones impiden que lo resuelto constituya un laudo definitivo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

III.3o.T.35 L (10a.)

Amparo directo 782/2015. 9 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Alejandro López Bravo. Secretario: Ignacio Beruben Villavicencio.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PRUEBA PERICIAL EN EL INCIDENTE INNOMINADO TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. EN SU DESAHOGO SON INAPLICABLES LAS REGLAS DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. Conforme al artículo 196 de la Ley de Amparo, el juzgador de esa materia tiene la obligación de asegurarse que los fallos protectores estén debidamente cumplidos, esto es, sin excesos ni defectos, para lo cual tiene las más amplias facultades para recabar los medios de convicción que considere pertinentes; de ahí que el incidente innominado tramitado en la etapa de ejecución de una sentencia, a efecto de precisar las obligaciones de las autoridades responsables vinculadas al referido

acatamiento, está permeado por las mismas características. En consecuencia, en el desahogo de la prueba pericial en dicho incidente, son inaplicables las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, pues su contenido evidencia que existen cuando menos dos elementos que no resultan acordes con el esquema de ejecución de los fallos en amparo, como: a) deben ser las partes las que ofrezcan la prueba y el consecuente cuestionario; y, b) su desahogo, obligatoriamente, es colegiado. Lo anterior es así, porque esas reglas impedirían que el Juez de Distrito, oficiosamente, ordene el desahogo de la pericial, además de que la obligación de que éste sea colegiado, constituiría un obstáculo al momento de establecer si la ejecutoria se cumplió o no.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

III.1o.A.7 K (10a.)

Queja 242/2015. Jesús Porfirio Mayorga González. 18 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretaria: Norma Alicia Naveja Macías.

Nota: En relación con el alcance de la presente tesis, destaca lo resuelto el 6 y el 19 de enero de 2015 por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los incidentes de inejecución de sentencia 1873/2013 y 579/2014, así como en el incidente de cumplimiento sustituto 10/2014.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. PARA SU ADMISIÓN ES INNECESARIO QUE EL OFERENTE SEÑALE EL NOMBRE DEL PERITO Y SU IDENTIDAD. De la interpretación armónica de los artículos 780, 821, 823, 824 y 825 de la Ley Federal del Trabajo, se advierte que para la admisión de la prueba pericial basta con que su oferente indique la materia sobre la que versará y exhiba el cuestionario correspondiente con copia para cada una de las partes; en ese sentido, para su admisión no es un requisito precisar el nombre del experto que desahogará la prueba; ni tampoco es necesario para su desahogo señalar su identidad, pues el oferente es quien tiene la carga de presentar al perito el día de la audiencia, salvo que haya sido la propia Junta quien lo designó, por lo que tal dato no es imprescindible para que sea presentado, proteste el desempeño del cargo y rinda su dictamen, pues el momento oportuno para identificarse y demostrar tener los conocimientos en el arte o ciencia, así como estar facultado por la ley para ello, es en la audiencia de desahogo a que se refiere el aludido artículo 825, pues en ésta la contraparte del oferente o la Junta puede formular preguntas al experto, ya que éstas van dirigidas al conocimiento técnico derivado del dictamen que rinda; es decir, su identidad no incide en la oportunidad de preparar la prueba y las

preguntas tienen que ver no con un acontecimiento único presenciado, sino con un arte, ciencia o técnica derivado de un dictamen.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.28 L (10a.)

Amparo directo 297/2015. Operadora San Francisco de Asís, S.A de C.V. 27 de agosto de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Juan Ramón Rodríguez Minaya. Secretario: José Luis Orduña Aguilera.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. SI NO SE IMPUGNÓ SU ADMISIÓN Y NO SE COMBATIÓ POR VICIOS PROPIOS, EL AUTO QUE ORDENA SU DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO. Aun cuando es posible que en los distintos momentos de la etapa probatoria (ofrecimiento, admisión, preparación, desahogo y valoración) se afecten derechos sustantivos, ello no implica, por sí mismo, que cada momento pueda impugnarse en forma autónoma, sino que se requiere que la afectación alegada no sea una consecuencia necesaria del momento anterior y que se ataque por vicios propios. Ello, porque si bien es cierto que en la mayoría de las ocasiones la afectación a derechos sustantivos tiene su origen en la falta o indebida aplicación de la ley en relación con los requisitos de admisibilidad de la prueba pericial (momento de la admisión), también lo es que eso no excluye la posibilidad de que en momentos posteriores de la etapa probatoria (preparación, desahogo y valoración) pueda presentarse una afectación a derechos sustantivos. Así sucedería, por ejemplo, si la pericial se admitió respecto de ciertos temas y al ordenarse su preparación se modificara el alcance de esos temas, ya sea por incluir más o menos aspectos o, incluso, distintos a los admitidos. Similar caso se presentaría en el supuesto de que el especialista realizara los estudios de su ciencia respecto de temas o aspectos que no le fueron planteados. En tales supuestos, si se alega una violación a derechos sustantivos en la preparación de una prueba por vicios propios de esa preparación, en tanto no serían una consecuencia de la admisión, su origen no sería el acto de la admisión, por lo que el amparo sería procedente contra el auto que ordenara la preparación, aun cuando no se hubiera impugnado por los medios legales el proveído por el que se admitió esa prueba; en este caso, tal acto no sería derivado de otro consentido, pues, para ello deben actualizarse dos supuestos: a) Ser una consecuencia natural y legal del acto antecedente; y, b) Que no se ataque por vicios propios, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad se haga derivar de los actos consentidos previamente.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.29 L (10a.)

Queja 74/2015. Jaime Jaramillo Ocampo. 11 de junio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Santiago Ermilo Aguilar Pavón, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL. ES VÁLIDO SU DESAHOGO A TRAVÉS DEL USO DE AVANCES TECNOLÓGICOS (VIDEOCONFERENCIA). Si bien es cierto que el artículo 825, fracción IV, de la Ley Federal del Trabajo, vigente hasta el 30 de noviembre de 2012, establece genéricamente que durante el desahogo de la prueba pericial las partes deben estar presentes, al igual que los peritos designados; ello no debe interpretarse de manera gramatical, sino sistemática, en conjunto con otros preceptos, como los numerales 685 y 776 de la citada legislación, en los que se establecen los principios que rigen el proceso laboral, como son la inmediación, oralidad, instancia de parte, economía, concentración, sencillez y celeridad, lo que faculta a las Juntas laborales para hacer uso de herramientas tecnológicas o de medios aportados por los descubrimientos de la ciencia y, por ende, de los diversos medios de convicción que tienen al alcance las partes en el procedimiento laboral a efecto de acreditar sus pretensiones jurídicas, entre los que se encuentran las grabaciones de audio y video, las distintas tecnologías de la información y comunicación y, en general, los medios probatorios aportados por los descubrimientos de la ciencia. De manera que si las partes y, por ende, las Juntas están facultadas para hacer uso de los avances tecnológicos, es factible que se utilicen dichos medios para el desahogo de la prueba pericial; luego, si para la práctica de ésta, a través del uso de la videoconferencia asiste el trabajador actor e, incluso, tiene la oportunidad de interrogar al perito sobre el dictamen emitido, con dicha actividad se respeta el derecho de audiencia de los involucrados y se cumple con la exigencia establecida en el referido numeral 825.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

III.1o.T.28 L (10a.)

Amparo directo 791/2014. Alfonso Aguilar Razura. 19 de noviembre de 2015. Mayoría de votos. Disidente: Arturo Cedillo Orozco. Ponente: José de Jesús Bañales Sánchez. Secretario: Martín Villegas Gutiérrez.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE OFRECERLAS, CONFORME A LA EXCEPCIÓN

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA.

Del análisis del artículo 75 de la Ley de Amparo, se advierte que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante aquélla. Por otra parte, en su segundo párrafo se establece una excepción, a saber, que tratándose del amparo indirecto, el quejoso podrá ofrecer pruebas cuando no hubiere tenido la oportunidad de hacerlo ante la autoridad responsable. Ahora bien, los supuestos en que opera la señalada excepción prevista en el segundo párrafo son: a) cuando indebidamente no se permita al quejoso participar en el procedimiento del cual derivó el acto reclamado; y, b) cuando habiendo participado en el procedimiento que le dio origen, injustificadamente no se le permitiera ofrecer pruebas.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA
DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

XXI.2o.P.A.12 K (10a.)

Queja 111/2015. Jorge Enrique Guzmán González. 27 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Marco Antonio Guzmán González. Secretario: César Alberto Santana Saldaña.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RECONVENCIÓN. SU PROCEDENCIA EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

De la interpretación armónica de las disposiciones contenidas en el Código Civil para el Distrito Federal, que regulan el juicio de divorcio sin causa, y de los artículos 260, 261, 272 y 272 A del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, que establecen los requisitos que debe contener el escrito de contestación de demanda, se obtiene que procede la reconvención en el proceso de divorcio sin causa, pues el primero de los ordenamientos citados no la contempla pero tampoco la prohíbe, y el segundo prevé dicha figura en toda contienda judicial. Así, el hecho de que el código sustantivo, en el apartado relativo, no establezca expresamente la procedencia de la reconvención, no significa que no resulte válido promoverla, pues es aplicable a dicho juicio el código adjetivo en cuanto al trámite procesal, y éste contempla en los mencionados artículos la figura jurídica de la reconvención para toda contienda judicial, entonces la voluntad del legislador no fue limitarla a los juicios ordinarios y excluirla del juicio de divorcio incausado, pues hubiera realizado una salvedad en ese sentido, y no la hizo. Lo anterior es acorde con la tesis 1a. CCXLIX/2012 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Libro XVII, Tomo 1, febrero de 2013, página 813, de rubro: "DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA. REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO DE CONTESTACIÓN DE DEMANDA Y LAS PRUEBAS QUE DEBE ANEXAR EL DEMANDADO (LEGISLACIÓN PARA EL DISTRITO FEDERAL).", en la que contempla como uno de los requisitos que puede contener el escrito de contestación de demanda, la reconvención. Además, guarda congruencia con la naturaleza de los juicios de divorcio incausado, pues tienen por objeto resolver todos los puntos de controversia entre los cónyuges, mediante la declaración o constitución de derechos, en atención, a los principios de unidad, concentración, celeridad y economía procesal que rigen el procedimiento de divorcio sin expresión de causa. Incluso, para decidir las

cuestiones inherentes a la disolución del matrimonio en la vía incidental es menester que hayan formado parte de los escritos que fijaron la litis pues, de lo contrario, no podrían dilucidarse con posterioridad, dado que carecería de congruencia la sentencia respectiva, al decidir cuestiones no propuestas por las partes, en contravención al artículo 81 del citado código adjetivo.

NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.9o.C.30 C (10a.)

Amparo en revisión 287/2015. 10 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Gonzalo Hernández Cervantes. Secretaria: Erika Cardona Sánchez.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA PENAL. AUN CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA HAYA SUSTENTADO SU DECISIÓN HACIENDO SUYOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, DEBIDO A QUE NO ENCONTRÓ MOTIVO PARA SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, CON BASE EN LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 40/97, ESA CIRCUNSTANCIA NO LO AUTORIZA A INCUMPLIR CON SU DEBER DE FUNDARLA Y MOTIVARLA (ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRIBUNALES DE ALZADA DE COMPLETITUD DE SUS DECISIONES, SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS). Aun cuando en el recurso de apelación el tribunal de alzada haya sustentado su decisión haciendo suyos los argumentos de la sentencia de primer grado, debido a que no encontró motivo para suplir la deficiencia de la queja, con base en la jurisprudencia 1a./J. 40/97, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, página 224, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN LA APELACIÓN EN MATERIA PENAL.", esa circunstancia no lo autoriza a incumplir con su deber de fundarla y motivarla, porque la autoridad de apelación, a fin de atender los deberes de salvaguardar los derechos humanos, desde la averiguación previa hasta la sentencia de condena, así como la posibilidad de realizar controles de convencionalidad, debe ejercer su deber de completitud, plasmando en su sentencia todas sus consideraciones para sustentar, por qué en su opinión, se respetaron o no los derechos humanos del procesado, lo que repercute en el acatamiento de la obligación de cumplir con el derecho humano a la fundamentación y motivación, al plasmar el hecho penalmente relevante, las pruebas, su valoración, las consideraciones para determinar que se acreditan el delito y la responsabilidad penal, que es apegado a derecho que se estableciera determinado grado de culpabilidad y que no se infringieron los derechos del condenado en

la individualización de la pena; sin que la referida jurisprudencia exima a esa autoridad de fundar y motivar sus resoluciones, como tampoco de analizar si en la sentencia de primera instancia se aplicó la ley correspondiente o si se hizo inexactamente; si se violaron los principios reguladores de la valoración de la prueba; si se alteraron los hechos; si se falló en contra de constancias, o no se fundó y motivó correctamente la sentencia apelada, porque no puede autorizarse al tribunal de alzada incumplir con el indicado derecho humano de fundamentación y motivación o el de completitud del acceso a la justicia. Además, no debe soslayarse que en la materia penal opera la suplencia de la deficiencia de la queja, la cual permite que la autoridad que revisa una sentencia de condena debe realizar un estudio oficioso del fallo sometido a su jurisdicción, pues sólo de ese modo puede materializarse la completitud de las decisiones que exige el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al plasmar en la sentencia el estudio completo de todo fallo que se revise en instancia o en el proceso constitucional, pues no debe hacerse un estudio oficioso sólo cuando favorezca a quien se le suple, porque implicaría un contrasentido, toda vez que para determinar si procede la suplencia de la deficiencia de la queja tendría que examinarse la cuestión relativa, lo que implica necesariamente haber realizado un estudio completo del caso y plasmarlo en el documento que contenga la decisión (sentencia). Lo que tiene congruencia con las exigencias a las autoridades de apelación de hacer respetar los derechos humanos, que no se constriñen únicamente a la verificación de la sentencia sometida a su jurisdicción, pues alcanza al desarrollo del proceso y de la averiguación previa, ya que impera su deber de salvaguardar los derechos humanos, evitando sentencias de condena sustentadas en pruebas ilícitas o la permisón de actos de tortura, función que es acorde con el deber establecido en el artículo 1o. constitucional, de proteger los derechos humanos y la facultad de control de convencionalidad que tienen todas las autoridades jurisdiccionales del país.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA
EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO.

II.1o.32 P (10a.)

Amparo directo 141/2015. 28 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Enrique Sánchez Frías. Secretaria: Erika Yazmín Zárate Villa.

Amparo directo 289/2015. 30 de julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Froylán Borges Aranda. Secretario: Isidro Jaramillo Olivares.

Amparo directo 346/2015. 30 de julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Sánchez Jiménez. Secretaria: Carmen Yadira Reyes Muñoz.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA PENAL. PARA QUE LA AUTORIDAD DE ALZADA CUMPLA SU DEBER DE FUNDARLO Y MOTIVARLO Y OTORQUE AL RECURRENTE LA OPORTUNIDAD DE IMPUGNAR LAS CONSIDERACIONES EN LAS QUE AQUÉL SE FUNDA, DEBE PLASMAR EN SU SENTENCIA LAS RAZONES Y EL SENTIDO DE SU FALLO. Todos los órganos jurisdiccionales del país deben cumplir su deber de fundar y motivar sus decisiones, sin importar su sentido, al constituir un derecho humano a favor de los justiciables, porque a ese derecho subyace el de impugnar del procesado, que implica el respeto a la seguridad jurídica. En estas condiciones, el tribunal de apelación, al revisar el fallo de primera instancia, debe plasmar la fundamentación y motivación de su decisión de confirmarlo, modificarlo o revocarlo, porque el recurrente debe conocer las consideraciones en las que ésta se funda para poder combatirlas, lo que sólo puede lograr si la autoridad de alzada plasma en su sentencia las razones y el sentido de su fallo, es decir, el hecho penalmente relevante, la valoración de pruebas para demostrar el delito y la responsabilidad penal, así como la fundamentación y motivación del grado de culpabilidad y la individualización de la pena correspondientes, pues sólo así cumple con el deber de completitud de las sentencias y la aplicación de la suplencia de la queja deficiente como parámetro de control, ya que fundar y motivar no sólo es obligación de la autoridad frente al justiciable, sino a todos los miembros de la sociedad, porque ésta se interesa en saber que los actos de aquélla respetan los derechos humanos, así como que los miembros del único Poder de la Unión que no son elegidos directamente por ella se legitiman en cada una de sus resoluciones, haciendo respetar los derechos humanos y argumentando el sentido de sus determinaciones.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA
EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO.

II.1o.31 P (10a.)

Amparo directo 141/2015. 28 de mayo de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Miguel Enrique Sánchez Frías. Secretaria: Erika Yazmín Zárate Villa.

Amparo directo 289/2015. 30 de julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Froylán Borges Aranda. Secretario: Isidro Jaramillo Olivares.

Amparo directo 346/2015. 30 de julio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jorge Arturo Sánchez Jiménez. Secretaria: Carmen Yadira Reyes Muñoz.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RECURSO DE QUEJA. CONTRA EL AUTO EMITIDO POR EL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DISTRITAL QUE LO DESECHA PROCEDE EL DE RECONSIDERACIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO

DE AMPARO, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA).

De conformidad con el sistema de recursos que prevé el Código Procesal Civil para el Estado de Coahuila, las partes de un procedimiento pueden impugnar las resoluciones judiciales mediante la interposición de tres recursos, a saber: reconsideración, apelación y queja, acorde con los supuestos de procedencia establecidos en los artículos 861, 866 y 886 de ese ordenamiento legal, respectivamente, que son del tenor siguiente: "Artículo 861. Procedencia del recurso de reconsideración.—Las sentencias no pueden ser reconsideradas por el juzgador que las dicte.—Los autos que no fueren apelables y los decretos, pueden ser reconsiderados por el Juez de primera instancia que los dicte, o por el que lo sustituya en el conocimiento del negocio, salvo que la ley disponga expresamente que no son recurribles.—Los autos y decretos que se dicten en el trámite de segunda instancia, aun aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, pueden ser reconsiderados por el Magistrado del Tribunal Unitario o por el presidente del Pleno o de la Sala del Tribunal Superior de Justicia, según corresponda.", "Artículo 866. Resoluciones apelables.—Sólo podrán ser objeto de apelación las siguientes resoluciones de primera instancia: I. Las sentencias definitivas e interlocutorias en toda clase de juicios, excepto cuando la ley declare señaladamente que no son apelables.—II. Los autos, cuando expresamente lo disponga este código.—III. Las resoluciones que dicten los Jueces para resolver las reclamaciones que se hagan valer contra las medidas cautelares, conforme al artículo 359.—No serán apelables las sentencias y demás resoluciones que se dicten en los juicios de la competencia de los Juzgados de Conciliación." y "Artículo 886. Procedencia de la queja contra actos del juzgador.—El recurso de queja contra actos del juzgador es procedente: I. Contra la resolución en que niegue la admisión de una demanda o desconozca de oficio la personalidad del actor antes del emplazamiento.—II. Contra la resolución en que declare o niegue que una sentencia ha adquirido autoridad de cosa juzgada.—III. Contra la resolución en que deseche el recurso de apelación o lo tenga por no interpuesto.—IV. Por exceso o por defecto en la ejecución de las sentencias dictadas en segunda instancia.—V. Respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencia.—VI. Contra la resolución que desestime la oposición del tercero opositor a la ejecución de una sentencia o resolución proveniente de un tribunal de otra entidad federativa, en los términos previstos en el artículo 1001.—VII. En los demás casos fijados por la ley.—La queja prevista en la fracción I procede aun cuando se trate de juicios en que por su cuantía no se admite el recurso de apelación.—Es de la competencia de la Sala Civil y Familiar o del Pleno del Tribunal Superior de Justicia, según corresponda, el conocimiento del recurso de queja interpuesto en los casos a que se refieren las fracciones II, III y IV, siempre que el conocimiento de la apelación en relación con la que la

queja se hace valer, sea de su competencia. En los demás casos, el conocimiento corresponderá a un Tribunal Unitario de Distrito.". De esta manera, el auto emitido en el trámite de la segunda instancia, por el que el Magistrado del Tribunal Distrital desecha el recurso de queja interpuesto contra la resolución interlocutoria que declara prescrito el derecho a pedir la ejecución de la sentencia, no encuadra en ninguno de los supuestos contra los que proceden los recursos de apelación, ni el de queja, aunado a que en la legislación aplicable, no se contiene la previsión de que dicho auto sea irrecurrible, de lo que se sigue entonces, que éste es impugnabile mediante el recurso de reconsideración, pues el citado artículo 861, en relación con la primera instancia, dispone que los autos que no fueren apelables, pueden ser reconsiderados por el Juez que los dicte, salvo que la ley disponga expresamente que no son recurribles, y tratándose de la segunda instancia, los autos y decretos que se dicten en su trámite, aun aquellos que dictados en la primera serían apelables, pueden ser reconsiderados por el Magistrado del Tribunal Unitario o por el presidente del Pleno o de la Sala del Tribunal Superior de Justicia, según corresponda. En este tenor, si previo a la promoción del juicio de amparo, el quejoso no interpuso el citado recurso de reconsideración, con ello inobservó el principio de definitividad, lo cual actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL
OCTAVO CIRCUITO.
VIII.2o.C.T.3 C (10a.)

Amparo en revisión 136/2015. Instituto Mexicano del Seguro Social. 26 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: René Silva de los Santos. Secretario: Víctor Hugo Zamora Elizondo.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RECURSO DE QUEJA CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. QUEDA SIN MATERIA SI SE DICTA SENTENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO DE ORIGEN. De conformidad con la jurisprudencia 2a./J. 88/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XVI, agosto de 2002, página 291, de rubro: "QUEJA CONTRA EL ACUERDO QUE DESECHA PRUEBAS EN AMPARO. QUEDA SIN MATERIA CUANDO SE DICTA LA SENTENCIA, SIN PERJUICIO DE QUE CONTRA ÉSTA SE INTERPONGA REVISIÓN Y EN LOS AGRAVIOS, POR EXCEPCIÓN, SE CUESTIONE DICHO AUTO, Y DE QUE EL TRIBUNAL QUE CONOZCA DE ELLA REPONGA EL PROCEDIMIENTO, INCLUSIVE DE OFICIO, SI ELLO RESULTA PROCEDENTE.", y con lo previsto en los artículos 97, fracción I, inciso a),

111, 112 y 113 de la Ley de Amparo, es de considerarse que el recurso de queja a que se refiere la fracción I del primer numeral citado, no se advierte que tenga comprendidos como efectos, revocar o dejar insubsistente la sentencia dictada en el juicio de amparo y ordenar la reposición del procedimiento en ese juicio; por lo tanto, si el Juez Federal dictó sentencia en el juicio de amparo indirecto, en la que negó el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados; y si el acto reclamado se hizo consistir en el desechamiento de la ampliación de la demanda, es inconcuso que no existe materia sobre la cual resolver, pues el referido recurso de queja no puede tener el alcance de anular la nueva situación creada con motivo de la sentencia pronunciada, además de que en el supuesto de persistir el agravio que le ocasionó el desechamiento de la ampliación de la demanda, tiene a su alcance el recurso de revisión contra la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto, en el cual podría, de considerarlo conveniente a sus intereses, expresar como agravio lo relativo al desechamiento aludido, máxime que, con independencia de lo fundado o no del agravio propuesto en la queja, como ya se dijo, este recurso no puede tener como efecto revocar la sentencia dictada en el juicio de amparo de origen.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.
XV.5o.7 K (10a.)

Queja 139/2015. Guadalupe Ceja Pacheco. 3 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos.
Ponente: Inosencio del Prado Morales. Secretaria: Lorenia Molina Zavala.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RECURSO DE QUEJA. CUANDO SE CONTROVIERTA ALGUNO DE LOS ASPECTOS QUE EL JUZGADOR DEBE RESOLVER EN FORMA INTEGRAL AL CONCEDER LA MEDIDA SUSPENSIVA PROVISIONAL, DEBE INTERPONERSE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. Acorde con el inciso b) de la fracción I del artículo 97 de la Ley de Amparo, la queja procede, entre otros casos, contra los acuerdos en los que se conceda o niegue la suspensión provisional. Esto implica que al concederla el juzgador debe fijar la situación en que habrán de quedar las cosas, y especificar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo, es decir, debe fijar en forma clara y precisa los efectos de la suspensión y describir cuáles son las acciones u omisiones que se esperan de la autoridad responsable. Asimismo, de ser el caso, debe indicarse cuáles son los requisitos para que continúen sus efectos (garantía) y, por último, especificarse los casos en que éstas no surtirán. De ahí que cuando a través del recurso de queja pretenda controvertirse alguno de los aspectos que el juzgador debe resolver en forma integral al conceder la medida suspensiva provisional, tales como los requisitos de pro-

cedencia, los efectos de la suspensión, la garantía que se fije o las previsiones para que no se abuse de ella; el fundamento para la interposición del señalado recurso debe ser el referido inciso b) de la fracción I del artículo 97, ello porque el pronunciamiento acerca de la concesión de la suspensión incluye esos aspectos.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.96 K (10a.)

Queja 71/2015, Jairo Hernández Limón, 24 de abril de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Santiago Ermilo Aguilar Pavón, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 26, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RECURSO DE QUEJA. CUANDO SE INTERPONE POR UNA PERSONA FÍSICA POR PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN DE UNA MORAL Y SÓLO SE EXPRESAN ARGUMENTOS TENDENTES A CONTROVERTIR EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS POR LA PRIMERA, EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTO POR LA SEGUNDA ES IMPROCEDENTE. Del análisis de los artículos 99 y 100 de la Ley de Amparo, se deduce la existencia de un requisito de admisibilidad del recurso de queja, esto es, que se cumplan las formalidades que la propia ley señala, consistentes en que el recurso debe: 1) Presentarse por escrito ante el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo, o cuando se trate de actos de la autoridad responsable, deberá plantearse ante el órgano jurisdiccional; 2) Expresar los agravios que a su consideración cause la resolución recurrida; y, 3) Acompañarse de las copias para el expediente y otras para las partes. La falta de uno de esos requisitos hace improcedente el recurso. Ahora, tratándose de materias de estricto derecho (civil), cuando una persona física interpone recurso de queja, por propio derecho y en representación de una persona moral, en contra de un auto en el que el Juez de Distrito desechó la demanda de amparo promovida en contra de los actos reclamados por ambas personas; y en el recurso únicamente se expresan argumentos tendentes a controvertir el desechamiento de la demanda de amparo respecto de los actos reclamados por la física, el medio de impugnación interpuesto por la persona moral resulta improcedente, al no cumplir con uno de los requisitos de admisibilidad, esto es, la formulación de los agravios contra el acto recurrido.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.
XXI.3o.C.T.1 K (10a.)

Queja 142/2015. Ulises Lozano Arellano y otra. 5 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Aquino Bautista Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretaria: Atenas Jaramillo Galán.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, SI ÉSTE SE ACORDÓ EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y ENSEGUIDA SE DICTÓ SENTENCIA.

El artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo dispone que el recurso de queja en amparo indirecto procede contra los acuerdos que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación; sin embargo, cuando el desechamiento de la ampliación de la demanda que formuló el quejoso se acordó en la audiencia constitucional y enseguida se dictó sentencia, dicho medio de impugnación es improcedente, pues se actualiza el supuesto normativo en el que procede el recurso de revisión, previsto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la propia ley, dado que a través de él no sólo se analizará la sentencia, sino también las determinaciones que se tomaron en ella, como en el caso, el desechamiento de la ampliación de demanda, ya que el dictado de una sentencia en la audiencia constitucional se rige por los principios de unidad, continuidad y concentración; por tanto, no procede el recurso genérico de queja, al prevalecer el recurso específico como lo es el de revisión.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
III.2o.P.13 K (10a.)

Queja 133/2015. 12 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Óscar Vázquez Marín. Secretaria: Elsa Beatriz Navarro López.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. DEBE DECLARASE SIN MATERIA CUANDO EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO DEL QUE DERIVA AQUÉL SE REMITE POR INCOMPETENCIA A UN JUZGADO DE DISTRITO O TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO, SEGÚN CORRESPONDA, PARA QUE SE SUSTANCIE COMO AMPARO BIINSTANCIAL, Y EL JUZGADOR DECLARADO COMPETENTE INICIA EL TRÁMITE DEL ASUNTO. De la exégesis al artículo 97, fracción II, inciso b), de la Ley de

Amparo, se colige que en el amparo directo, el recurso de queja procede contra las determinaciones de las autoridades responsables que concedan o nieguen la suspensión del acto reclamado, rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes. Conforme a ese supuesto, las autoridades responsables actúan como auxiliares de la Justicia Federal, en tratándose de la suspensión del acto reclamado en amparo directo, por ser en éstas en quienes recae la obligación de proveer lo concerniente. Por ello, cuando el Tribunal Colegiado de Circuito se declara incompetente para conocer del asunto, por estimar que debe tramitarse en la vía biinstancial y remite los autos al Juzgado de Distrito o Tribunal Unitario de Circuito, según corresponda, esto genera que el recurso de queja interpuesto conforme a la hipótesis normativa en mención, quede sin materia a partir de que el juzgador declarado competente recibe el asunto e inicia su trámite al tenor de las reglas que norman el juicio de amparo indirecto, ya que bajo ese contexto, es inconcuso que cuando el Tribunal Colegiado de Circuito se declara incompetente, las autoridades responsables pierden la calidad de auxiliares de la Justicia Federal, para conservar únicamente la de responsables en la emisión del acto reclamado y, a su vez, dejan de tener capacidad legal para resolver sobre la suspensión, lo que provoca que desaparezca la materia total del recurso de queja.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
VII.1o.C.12 K (10a.)

Queja 183/2015. Clank, S.A. de C.V. 27 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Clemente Gerardo Ochoa Cantú. Secretario: Andrés Alberto Cobos Zamudio.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RECURSO DE QUEJA. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO AUXILIAR EN LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, POR LA QUE NIEGA PROVEER DE CONFORMIDAD LA SOLICITUD DEL TERCERO INTERESADO, DE DECRETAR QUE HA DEJADO DE SURTIR EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que conforme a los supuestos normativos previstos en la fracción II del artículo 97 de la Ley de Amparo, no se establece literalmente la hipótesis de procedencia del recurso de queja contra la resolución dictada por la autoridad responsable, como auxiliar en la tramitación del juicio de amparo directo, mediante la cual no provee de conformidad la solicitud del tercero interesado, de decretar que ha dejado de surtir efectos la suspensión del acto reclamado, también lo es que, de una interpretación a dicho precepto, conforme al artículo 17 de la

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 8, numeral 1 y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y procurando favorecer en todo tiempo a la persona, con la protección más amplia, en acatamiento al artículo 1o. constitucional, debe estimarse que esta determinación constituye un caso análogo a los establecidos en el inciso b) de la fracción II del invocado artículo 97, que conduce a estimar procedente el recurso de queja; considerar lo contrario, implicaría limitar a los gobernados el acceso a una justicia completa, por restringir la procedencia de un recurso sencillo y efectivo que tienda a resolver sobre la legalidad de dicha resolución, lo que resulta adverso al espíritu de lo dispuesto por la Norma Constitucional e internacional invocadas.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.2o.C.7 K (10a.)

Queja 229/2015. Fernando Fernández Farina. 4 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Jaime Aurelio Serret Álvarez. Secretario: Jorge Elías Alfaro Rescala.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RECURSO PREVISTO EN LAS NORMAS INTERNAS DE UN ENTE PATRONAL EN FAVOR DE SUS TRABAJADORES QUE SE CONSIDEREN AGRAVIADOS EN SUS DERECHOS LABORALES. SI SE HACE VALER PARA EL EXAMEN DE ALGUNA PRETENSIÓN, LA LITIS QUE SE PLANTEE ANTE LA JUNTA DEBE CENTRARSE EN LO DECIDIDO EN AQUÉL. En los casos en que las normas internas de una entidad patronal establezcan la procedencia de un recurso para que el trabajador que se considere agraviado en sus derechos laborales obtenga un examen de su pretensión y lo hace valer, lo decidido al resolver ese recurso será lo que determine la suerte definitiva del asunto entre las partes, lo que impone que ante la Junta el conflicto deba centrarse en lo decidido en última instancia, sin que pueda, por consiguiente, ocuparse de la legalidad o no de lo resuelto en un primer momento. En este supuesto, la Junta deberá conducirse como un tribunal de nulidad, examinando la legalidad de las consideraciones externadas por el órgano patronal revisor, pudiendo también, desde luego, ocuparse de posibles infracciones cometidas en el curso del procedimiento de que se trate. Proceder de esta manera garantizará el reconocimiento del efecto del recurso; evitará confusión en cuanto a lo que debe reclamarse y erraticidad en la litis que se plantee ante la Junta; además, facilitará determinar a quién o a quiénes habrá de tenerse como demandados.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.
XVI.1o.T.26 L (10a.)

Amparo directo 559/2015. Fabiola Avelina Gómez Ortiz. 6 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco González Chávez. Secretario: Joaquín Fernando Hernández Martínez.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

RECURSOS EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, AL SER PARTE PERMANENTE EN TODOS LOS JUICIOS, ESTÁ FACULTADO PARA INTERPONERLOS, CUANDO SE RECLAMAN RESOLUCIONES EMITIDAS TANTO POR TRIBUNALES FEDERALES COMO POR LOCALES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN IV, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE LA MATERIA).

Del análisis interpretativo del primer párrafo de la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de Amparo, se obtiene que tratándose del juicio de amparo indirecto en materia penal, el Ministerio Público de la Federación, al ser parte permanente en todos los juicios, está facultado para interponer los recursos que la propia ley de la materia prevea, cuando se reclaman resoluciones emitidas tanto por tribunales federales como por locales. Esto es así, pues la conjunción copulativa "y", empleada en la redacción del referido dispositivo, vincula dos supuestos: el primero, que tal potestad la puede ejercer el representante social al hacer valer los medios de impugnación en relación con todos los juicios de amparo (incluidos aquellos en los que el acto reclamado lo constituya una determinación emitida por un tribunal del ámbito federal); y, en un segundo, al interponer los existentes en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales. En ese contexto, tratándose de una sentencia que concedió el amparo solicitado en relación con una determinación emitida por un Juez de Distrito dentro de un proceso penal federal, se justifica la intervención del Ministerio Público, de conformidad con el primer párrafo de la fracción y precepto citados, por lo que dicha representación social está legitimada para interponer el recurso de revisión contra el fallo protector.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO. II.2o.P.18 K (10a.)

Queja 95/2015. 21 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Pérez Lozano. Secretario: Óscar Jesús Segundo Suárez.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

REDUCCIÓN DE SANCIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 33 BIS 3 DE LA ABROGADA LEY FEDERAL DE COM-

PETENCIA ECONÓMICA. ES NOTORIA LA IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RELATIVA, INTERPUESTA POR PERSONA DISTINTA DEL BENEFICIADO.

De conformidad con los artículos 9o., 30 y 33 bis 3 de la abrogada Ley Federal de Competencia Económica, en el procedimiento relativo a la investigación a cargo de la extinta Comisión Federal de Competencia –actualmente Comisión Federal de Competencia Económica–, sobre la realización de prácticas monopólicas absolutas, cualquier agente económico que tuviere o hubiere tenido participación en ellas podía comparecer ante ese órgano regulador a reconocerla y acogerse al beneficio de reducción de sanciones, lo que resultaría procedente siempre que cumpliera con la oportunidad y utilidad de la información que proporcionara, de las pruebas que aportara, de la calidad de su colaboración y de su participación hasta concluir con la práctica anti-competitiva. Así, el beneficio de reducción de sanciones previsto en el último de los preceptos mencionados exige el cuidado de la confidencialidad en torno a la identidad de los agentes económicos que solicitaron acogerse a él, porque tiene como propósito dar mayor eficacia a la función de defensa de la competencia, en lo que se refiere a la investigación y sanción de las prácticas monopólicas absolutas, prohibidas por el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como a la conclusión de éstas para regularizar el adecuado funcionamiento de los mercados. Por esa razón, la resolución que se dicte sobre el beneficio indicado, sólo puede controvertirla el solicitante, en tanto le genere una afectación directa en su esfera de derechos, o en la de sus directivos y empleados, porque no se les otorgue o no lo obtengan en el nivel pretendido. En consecuencia, al no ser susceptible de producir un efecto favorable para otros sujetos, la resolución de reducción de sanciones no puede controvertirse en el amparo por un agente económico diverso del solicitante, pues daría lugar a que a través del juicio relativo la autoridad pudiera revelar información confidencial, al tener que rendir su informe con justificación con el compromiso legal de conducirse con veracidad, pues aun actuando con sigilo para preservar la reserva de la información, como sujeto obligado a cumplir con el mandato que deriva además de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la información confidencial, podría inferirse quién fue el agente económico que intervino en primer lugar en forma útil, lo que implicaría utilizar un procedimiento legal con un fin no permitido. Por tanto, es notoria la improcedencia de la demanda de amparo indirecto interpuesta por persona distinta del beneficiado con la resolución de reducción de sanciones en el procedimiento indicado, por carecer de interés legítimo o jurídico.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELE-
COMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURIS-
DICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.112 A (10a.)

Queja 90/2015. Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica y otro. 15 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Carlos Luis Guillén Núñez.

Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

REDUCCIÓN DE SANCIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 33 BIS 3 DE LA ABROGADA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. RELEVANCIA DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA IDENTIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS QUE SOLICITEN ACOGERSE A ESE BENEFICIO. En el artículo citado se prevé que la

extinta Comisión Federal de Competencia –actualmente Comisión Federal de Competencia Económica– mantendrá con carácter confidencial la identidad del agente económico que pretenda acogerse al beneficio de la reducción de sanciones en el procedimiento de investigación de prácticas monopólicas absolutas. Además, se establece la forma de proceder cuando sean varios los agentes involucrados en la investigación, de manera que al primero en acudir y que cumpla con los requisitos y condiciones para alcanzar el beneficio, corresponderá una multa mínima, y a los que acudan con posterioridad se les podrán otorgar reducciones hasta del cincuenta por ciento de la multa que llegara a imponerse en la resolución respectiva, en atención al orden en que hubieran comparecido y a la utilidad de las pruebas aportadas. Por su parte, en los preceptos 43 y 44 del reglamento del ordenamiento indicado se consigna que la solicitud debe formularse antes de concluir la investigación por la vía telefónica o mediante correo electrónico y, una vez recibida y verificada la información, en un plazo prorrogable de quince días, si es suficiente para acreditar la comisión de la práctica monopólica, debe comunicarse al interesado si la información es suficiente, el orden cronológico de su petición y, en su caso, el porcentaje de reducción que se le otorgará. Lo expuesto muestra que, a través de los preceptos legales y reglamentarios mencionados, se implementó un procedimiento en donde la información debe manejarse confidencialmente, lo cual obliga a la autoridad a no revelar la identidad de la fuente de información, porque de eso depende la eficacia de ese medio para combatir las prácticas anticompetitivas absolutas y explica que sólo pueda tener acceso a las actuaciones el solicitante del beneficio, porque el propósito de esta medida es dar mayor eficacia a la función regulatoria en lo que se refiere a la investigación y sanción de las prácticas monopólicas absolutas, prohibidas por el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, así como a la conclusión de éstas para regularizar el adecuado funcionamiento de los mercados. Por esa razón, se considera que la sociedad está interesada en preservar la eficacia de la figura jurídica consistente en el reconocimiento de la participación de la comisión de una práctica monopólica absoluta y la colaboración en la investigación y cesación de ésta, lo que exige el cuidado de la confidencialidad de la identidad de los agentes económicos que soliciten acogerse al beneficio de reducción de las sanciones.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.113 A (10a.)

Queja 90/2015. Pleno de la Comisión Federal de Competencia Económica y otro. 15 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Carlos Luis Guillén Núñez.

Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

"REGLAS QUE CONFIEREN PODERES". SU CONCEPTO DESDE LOS ENFOQUES ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL Y SU DISTINCIÓN CON LAS "NORMAS DE MANDATO".

Las "reglas que confieren poderes" ("normas de competencia" en su terminología tradicional) establecen la permisión de realizar ciertos actos en circunstancias específicas; esto es, son prescripciones en las cuales se postula que determinadas personas pueden (son competentes para) conocer de casos definidos y emitir cierta clase de resoluciones, observando formalidades concretas. Así, desde una perspectiva estructural, los enunciados que conforman esas reglas no se expresan bajo el esquema condicional propio de los enunciados deónticos (un antecedente que consta de estados de cosas en los que están presentes hechos naturales o institucionales y un consecuente, formado por una acción o un estado de cosas natural o institucional y un operador deóntico), sino que presentan la estructura siguiente: a) el antecedente se conforma con un estado de cosas en el que aparecen hechos naturales o institucionales y una acción natural o institucional, y b) el consecuente no consiste en una acción modalizada por un operador deóntico (una solución), sino en un tipo de hecho institucional denominado "resultado institucional o normativo". Ahora, desde un enfoque funcional, en las reglas mencionadas la motivación de la conducta tiene

verificativo de manera indirecta (indeterminada), pues éstas no prescriben directamente el comportamiento que debe desplegarse en determinadas circunstancias, sino que únicamente señalan cómo puede obtenerse un resultado normativo determinado; además, de manera similar a como acontece con las reglas técnicas o procedimentales, las que confieren poderes son doblemente condicionales, dado que prescriben el comportamiento que debe desplegarse bajo ciertas condiciones, con la finalidad de obtener un resultado determinado. Por su parte, las "normas de mandato" se formulan a partir de un esquema deóntico en el que se expresa una premisa que enuncia una norma que obliga o prohíbe una determinada acción y que, en caso de actualizarse, genera como conclusión un imperativo categórico. En cambio, las "reglas que confieren poderes" no se formulan bajo un enunciado deóntico en el que se establece que determinada conducta es obligatoria, permitida o prohibida, dado que el empleo de vocablos de significación análoga a potestad, como "atribución", "facultad", "poder" u otros semejantes, indica tanto capacidad para alterar estados de cosas normativos, como que el ejercicio de ese poder es facultativo, es decir, que el uso del poder está regulado por una norma deóntica (regulativa) que modaliza de esa manera la acción.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.114 A (10a.)

Amparo en revisión 90/2015, Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y otros. 5 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez.

Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA EN EL FUERO MILITAR. DEBE ORDENARSE SI EL JUEZ QUE DICTÓ LA SENTENCIA DEFINITIVA NO FUE EL MISMO QUE CELEBRÓ LA AUDIENCIA DE DERECHO EN LA QUE SE DECLARÓ VISTO EL ASUNTO. Si bien por razones de legalidad y seguridad jurídica, en el dictado de la sentencia de primera instancia impera el principio de identidad entre el juz-

gador que desahogó la audiencia de derecho y el que dicta la sentencia, lo que resulta justificable y cuya ratio se sustenta en que el resolutor que habrá de resolver en última instancia debe ser el mismo que haya estado a cargo de la audiencia en la que las partes realizaron sus alegaciones, manifestaciones y defensa finales, de lo contrario tendrá que ordenarse la reposición del procedimiento; no obstante, dicho principio no es absoluto, pues ante la eventual readscripción del titular del juzgado, es posible que, previo conocimiento a las partes, sea otro Juez quien resuelva en definitiva. Ante esta circunstancia, el cambio de titular debe notificarse a las partes cuando no tenga que dictarse resolución alguna anterior a la sentencia, ya que de esa manera, aquéllas conocerán a la persona que resolverá e, incluso, podrán plantear el impedimento correspondiente, en términos de los preceptos 788 y 789 del Código de Justicia Militar. Por consiguiente, el juzgador que emita la sentencia definitiva de primer grado, debe ser el mismo que previamente celebró la audiencia de derecho en la que se declaró visto el asunto, pues de llevarse a cabo ésta sin la participación de quien debe fallar el expediente, se actualiza una violación al procedimiento análoga a la prevista en la fracción I, en concordancia con la diversa XXII, ambas del artículo 173 de la Ley de Amparo, que amerita la reposición del procedimiento, por afectarse las defensas del imputado, con trascendencia en el resultado del fallo.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.5o.P.45 P (10a.)

Amparo directo 232/2015. 3 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Armando Hernández Orozco. Secretaria: Liliana Elizabeth Segura Esquivel.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SALARIO BRUTO. LAS CONDENAS EN LOS LAUDOS DEBEN EFECTUARSE CON BASE EN AQUÉL.

De conformidad con el artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo el salario se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquiera otra cantidad o prestación que se entregue al trabajador por su trabajo, por lo que no debe confundirse la suma de las percepciones con el remanente de éstas, luego de las retenciones efectuadas con motivo de aportaciones de seguridad social o la obligación del trabajador de contribuir al gasto público, por medio del pago de impuestos, habida cuenta que la circunstancia de que los patrones se encuentren obligados a realizar la retención de contribuciones y autorizados para efectuar ciertos descuentos de otra índole, generalmente en forma simultánea al pago, no es obstáculo para dejar de considerar como salario integrado la suma de lo que el trabajador percibió, previas deducciones, ya que esa cantidad es la que entró en su esfera patrimonial, tan es así, que es sobre las percepciones totales que el patrón determina la base gravable, a fin de calcular y materializar la retención; también es sobre ese ingreso que se realizan otros descuentos o retenciones, como el pago de préstamos (artículo 97, fracción III, de la referida ley) o de pensiones alimenticias judicialmente ordenadas (fracción I del mismo precepto); en consecuencia, no debe considerarse como salario integrado el neto, en tanto que es el salario bruto sobre el que se aplican las deducciones contributivas o de cualquier otra naturaleza, atendiendo a circunstancias que pueden ser variables y estar fuera del conocimiento de la Junta. Obviamente no existirá obstáculo para que, al cumplir el laudo, el patrón efectúe las retenciones o descuentos que la ley lo obligue a hacer.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

XVI.1o.T.23 L (10a.)

Amparo directo 567/2015. Gabriel Rivera Cantero. 12 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco González Chávez. Secretaria: María Guadalupe Mendiola Ruiz.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SALARIOS CAÍDOS. FORMA DE COMPUTARLOS CONFORME AL PLAZO FIJADO PARA EL PAGO DEL SUELDO.

AMPARO DIRECTO 360/2015. CAMINOS Y PUENTES FEDERALES DE INGRESOS Y SERVICIOS CONEXOS. 8 DE OCTUBRE DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: MARÍA DEL ROSARIO MOTA CIENFUEGOS. PONENTE: JOSÉ MANUEL HERNÁNDEZ SALDAÑA. SECRETARIO: OMAR DAVID UREÑA CALIXTO.

CONSIDERANDO:

CUARTO.—Por razón de método, el estudio de algunos motivos de inconformidad se hará en distinto orden al en que fueron planteados; asimismo, con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo, otros serán analizados en forma conjunta por encontrarse íntimamente relacionados.

En una parte de los conceptos de violación, el impetrante manifiesta que la instructora estaba obligada a ordenar la ratificación del acta administrativa respecto a *****, ***** y *****, toda vez que así se ofreció en el escrito de pruebas y fue aceptada en audiencia de veintisiete (27) de marzo de dos mil siete (2007), pues si bien el primero de ellos no fue notificado y la segunda persona sí tuvo conocimiento, lo cierto es que la Junta tenía obligación de lograr su comparecencia por conducto de la policía, al equipararse a un testigo, o bien, dar vista al oferente para que señalara un nuevo domicilio.

El motivo de inconformidad sintetizado, es inatendible. Para evidenciar esta afirmación, es menester establecer que el artículo 182 de la Ley de Amparo prevé lo siguiente:

"Artículo 182. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente y se resolverán en una sola sentencia. La presentación y trámite del amparo adhesivo se registrará, en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo principal, y seguirá la misma suerte procesal de éste.

"El amparo adhesivo únicamente procederá en los casos siguientes:

"I. Cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo, a fin de no quedar indefenso; y

"II. Cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo.

"Los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminados, por tanto, a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente, o a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. Se deberán hacer valer todas las violaciones procesales que se hayan cometido, siempre que pudieran trascender al resultado del fallo y que respecto de ellas, el adherente hubiese agotado los medios ordinarios de defensa, a menos que se trate de menores, incapaces, ejidatarios, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, y en materia penal tratándose del inculpado.

"Con la demanda de amparo adhesivo se correrá traslado a la parte contraria para que exprese lo que a su interés convenga.

"La falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluya el derecho de quien obtuvo sentencia favorable para alegar posteriormente las violaciones procesales que se hayan cometido en su contra, siempre que haya estado en posibilidad de hacerlas valer.

"El Tribunal Colegiado de Circuito, respetando la lógica y las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de amparo, procurará resolver integralmente el asunto para evitar, en lo posible, la prolongación de la controversia."

De la disposición transcrita se desprende que aun cuando el laudo haya sido favorable a una de las partes, está obligada a promover el amparo adhesivo si a su parecer:

a) Debe seguir subsistiendo el laudo impugnado, por lo que hace valer los argumentos necesarios para fortalecer las consideraciones del mismo;

b) Estima que existió alguna infracción a las reglas del procedimiento; y,

c) Advierte una conclusión en un punto decisorio que le causaría algún perjuicio.

La falta de promoción del amparo adhesivo, trae como consecuencia que precluya el derecho para alegar posteriormente dichas violaciones procesales, pues si las mismas existían desde la emisión del primer laudo que impugnó su contraparte, ese resultaba el momento jurídico oportuno para hacerlas valer, tal como lo establece el ordinal transcrito.

En el caso concreto, ***** demandó de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, la reinstalación como cajero receptor y el pago de los salarios caídos, entre otras prestaciones de naturaleza laboral, a consecuencia del despido injustificado que adujo.

Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, negó derecho al accionante y precisó que éste cometió actos de violencia en contra de su superior jerárquico, por lo que se levantó un acta administrativa el veinticinco (25) de noviembre de dos mil tres (2003), donde se determinó que incurrió en la causal de rescisión prevista por el artículo 47, fracciones I y II, de la Ley Federal del Trabajo.

La demandada ofreció como pruebas, entre otras, el original del acta administrativa de mérito, así como su medio de perfeccionamiento consistente en la ratificación de contenido y firma a cargo de los que en ella intervinieron, incluyendo al actor.

*****, por escrito de veintisiete (27) de marzo de dos mil siete (2007), agregado a los autos por audiencia de la misma data, refutó el acta administrativa en cuanto a su autenticidad de contenido y firma, ofreciendo la pericial caligráfica, grafoscópica, grafométrica y dactiloscópica, para acreditar su objeción, de la cual, la instructora omitió pronunciarse.

En diligencia de diecinueve (19) de octubre de dos mil diez (2010-folio 644), se hizo constar que los testigos de cargo ***** y *****, no comparecieron a la ratificación de la documental en mención.

La Junta dictó laudo (primero en su orden), donde determinó absolver de la reinstalación bajo el argumento de que el acta administrativa de veinticinco (25) de noviembre de dos mil tres (2003), había sido perfeccionada por las personas que en ella intervinieron (sic) y, por lo cual, el demandado había cumplido con los requisitos establecidos por el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo, para rescindir la relación laboral.

Inconforme con esa resolución, el diez (10) de octubre de dos mil trece (2013), ***** promovió juicio de amparo directo, del que conoció este Tribunal Colegiado bajo el DT. *****, donde se otorgó el amparo para que la Junta:

"...b) Se pronuncie sobre el ofrecimiento de la pericial caligráfica, grafoscópica, grafométrica y dactiloscópica, que precisó el actor para acreditar su objeción con respecto a las pruebas del demandado consistentes en: II. El acta administrativa levantada el veinticinco de noviembre de dos mil tres; y, III. Citatorio dirigido al actor de trece de noviembre de dos mil tres (sic)." (folios 765 y reverso, expediente laboral)

La Junta repuso el procedimiento y admitió la pericial caligráfica, grafoscópica, grafométrica y dactiloscópica que ofreció el actor para acreditar su objeción con respecto al acta administrativa de veinticinco (25) de noviembre de dos mil tres (2003).

Mediante acuerdo de doce (12) de agosto de dos mil catorce (2014), la instructora señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia pericial y precisó que la misma se llevaría a cabo sólo con el experto de la parte actora, ya que la demandada no presentó a su perito a pesar de habérselo solicitado en proveídos de nueve (09), veintisiete (27) y treinta (30) de junio del mismo año.

En la fecha señalada, se tuvo al perito del actor rindiendo su dictamen y, dado que no quedaban pruebas por desahogar, se ordenó turnar los autos a proyecto de resolución.

La Junta dictó el laudo que ahora se impugna, en el cual, una vez que fijó la litis y analizó el caudal probatorio, determinó que:

– El acta administrativa de veinticinco (25) de noviembre de dos mil tres (2003), sólo merecía valor indiciario al no haber sido ratificada por la totalidad de los comparecientes que intervinieron en su elaboración.

– El dictamen del perito nombrado por el actor, concluyó que la firma estampada sobre el nombre del actor, no pertenecía a *****.

– De las manifestaciones que obran en el acta, se advertía que ambos trabajadores se culpaban de los hechos ocurridos en su centro de trabajo y sus versiones resultaban disímiles, aunado que a ninguno de los testigos de cargo les constó quién inició la riña.

– Por lo anterior, el acta administrativa de mérito no acreditaba la causal que invocó Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para rescindir la relación de trabajo, por lo que la misma carecía de validez y resultaba procedente condenar al demandado a la reinstalación y al pago de salarios caídos.

Como se observa de la cronología de constancias que precede, desde el primer laudo quedó concluido y expuesto el procedimiento a la luz del que se ventiló el expediente laboral *****, incluyendo, en su caso, las violaciones procesales que ahora intenta hacer valer Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, relativas a la ratificación del acta administrativa por parte de los testigos de cargo (***** y *****), así como el hecho de si los mismos fueron o no notificados, si debía lograrse su comparecencia por conducto de la policía o dar vista al oferente para que señalara un nuevo domicilio; cuyos tópicos procesales no fueron trastocados con los efectos de la protección constitucional otorgada en el DT. *****, de donde se sigue que la instrucción en esa parte quedó definida.

En consecuencia, si el aquí quejoso tuvo conocimiento de que *****, promovió juicio uni-instancial DT. *****, en contra del primer laudo de cinco de julio de dos mil doce, es evidente que estuvo obligado a agotar la vía constitucional adhesiva, prevista por el artículo 182 de la Ley de Amparo, atendiendo a la intención del legislador de que un asunto se resuelva íntegramente mediante la impetración del amparo y su adhesivo para evitar la prolongación de la controversia; de ahí lo inatendible del motivo de disenso.

Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P/J. 9/2015, (10a.) emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 18, Tomo I, mayo de 2015, página 37, "y en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 22 de mayo de 2015 a las 9:30 horas", que establece:

"AMPARO ADHESIVO. PROCEDE CONTRA VIOLACIONES PROCESALES QUE PUDIERAN AFECTAR LAS DEFENSAS DEL ADHERENTE, TRASCENDIENDO AL RESULTADO DEL FALLO, ASÍ COMO CONTRA LAS COMETIDAS EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA QUE LE PUDIERAN PERJUDICAR, PERO NO LAS QUE YA LO PERJUDICAN AL DICTARSE LA SENTENCIA RECLAMADA. Conforme a los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 182 de la Ley de Amparo, el amparo adhesivo tiene una naturaleza accesoria y excepcional, por lo que no es válido hacer valer cuestiones ajenas a lo expresamente previsto en este último precepto legal, pues aun cuando el órgano colegiado debe resolver integralmente el asunto para evitar la prolongación de la controversia, ello debe hacerse respetando la lógica y las reglas fundamentales que norman el procedimiento. En razón de ello, el amparo adhesivo sólo puede encaminarse a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente, o puede dirigirse a impugnar las consideraciones que concluyan en un punto decisorio que le perjudica, exclusivamente en relación con violaciones proce-

sales o con violaciones en el dictado de la sentencia que le pudieran perjudicar al declararse fundado un concepto de violación planteado en el amparo principal, por ser éstos los supuestos de su procedencia. En esas condiciones, a través del amparo adhesivo sólo es factible alegar dichas cuestiones, sin que se permita combatir otras consideraciones de la sentencia reclamada en las que se alegue una violación cometida por la responsable que ya perjudique al quejoso adherente al dictarse la resolución reclamada, pues el amparo adhesivo es una acción con una finalidad específica y claramente delimitada por el legislador, en virtud de que se configura como una acción excepcional que se activa exclusivamente para permitir ejercer su defensa a quien resultó favorecido con la sentencia reclamada y con la intención de concentrar en la medida de lo posible las afectaciones procesales que se ocasionaron o se pudieron ocasionar, para evitar retrasos injustificados y dar celeridad al procedimiento."

En otra parte de los conceptos de violación, el quejoso señala que la responsable violentó sus derechos al admitir la pericial ofrecida por el actor para acreditar su objeción sobre el acta administrativa y citatorio, pues sólo se otorgó el amparo en el DT. *****, para que se pronunciara al respecto, pero no para que necesariamente la admitiera, por lo que se debió desahogar la ratificación y después verificar si se ameritaba la pericial.

El motivo de inconformidad sintetizado es inoperante. Como se observa de la cronología de constancias que precede, en el juicio uni-instancial ***** se otorgó el amparo a ***** para que la Junta se pronunciara sobre la pericial que ofreció el actor para acreditar su objeción con respecto al citatorio y acta administrativa de trece (13) y veinticinco (25) de noviembre de dos mil tres (2003), respectivamente.

En consecuencia, los argumentos que eleva el impetrante en el sentido de que sólo debía pronunciarse al respecto y desahogar la ratificación de las documentales en mención, pero no necesariamente admitir la pericial de mérito, revisten la característica de inoperantes, toda vez que si el inconforme estima que la responsable incumplió con la anterior ejecutoria emitida por este órgano colegiado, es inconcuso que la vía uni-instancial no resulta ser el medio de impugnación idóneo para combatir dicho aspecto, pues para tal efecto la Ley de Amparo otorga a los gobernados diversos medios de defensa.

Lo referido con anterioridad es así, dado que sus argumentos se encuentran orientados a impugnar aspectos que, asevera, fueron establecidos en aquella ejecutoria ***** y que no fueron cumplidos por la responsable, lo cual no puede ser materia de estudio en la presente vía; de ahí su inoperancia.

Apoya lo anterior, en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, así como por el principio de analogía jurídica sustancial y sólo en lo conducente, la tesis emitida por la anterior Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, Volúmenes 121-126, Quinta Parte, página 17, de rubro y texto:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES POR IMPUGNARSE EN AMPARO DEFECTOS DE EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DE ANTERIOR JUICIO DE GARANTÍAS COMETIDOS EN EL NUEVO LAUDO.—No es un nuevo juicio de amparo el técnicamente destinado a conocer de las violaciones que pudieran cometer las autoridades responsables en sus laudos, por defecto o exceso de ejecución de una ejecutoria dictada en anterior juicio de amparo directo, atento a lo dispuesto por el artículo 95, fracción IX, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, si los conceptos de violación se reducen a impugnar el laudo por defectos de ejecución en el cumplimiento de una ejecutoria anterior, deben desestimarse ante la imposibilidad jurídica de ser estudiados dentro de un nuevo juicio de garantías."

En un apartado más de los conceptos de violación, el impetrante refiere que la Junta omitió establecer qué precepto legal le sirvió de apoyo para dictar el laudo y tampoco precisó porqué el mismo, en su caso, se ajustaba a las prevenciones trazadas por el legislador, ni a su interpretación.

El motivo de inconformidad sintetizado es infundado, toda vez que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con el principio de fundamentación y motivación conforme al análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, a la luz del material probatorio que obra en autos, apoyándose, además, en los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan las hipótesis que sean base de su resolución, así como la exposición de las circunstancias, razones o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto y, junto con ello, la adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso concreto.

Encuentra sustento lo anterior en la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXII, diciembre de 2005, página 162, que establece:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE.—Entre las diversas garantías contenidas en el segundo

párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso."

Contrario a lo manifestado por el impetrante, la Junta no apartó su actuación de lo ordenado en los artículos 14 y 16 constitucionales, ya que —en general— se ajustó a las constancias procesales existentes y efectuó adecuada valoración de las pruebas aportadas en el sumario de origen; además, sí cumplió con el derecho de legalidad, en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de su determinación, porque en ella expresó los razonamientos que la llevaron a concluir cómo lo hizo; y aun cuando la resolutoria no hubiere citado ciertos preceptos legales para cada hipótesis, lo cierto es que en tratándose de resoluciones jurisdiccionales, no es indispensable que la autoridad invoque algún artículo en concreto, pues la fundamentación se colma con la expresión de los razonamientos en que se sustenta cada determina-

ción, lo que sí se efectuó en el caso a estudio; de ahí lo infundado de esa parte de los motivos de disenso.

Es aplicable al caso, la tesis P. CXVI/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 143, cuyo tenor es el siguiente:

"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. EL CUMPLIMIENTO A DICHA GARANTÍA TRATÁNDOSE DE RESOLUCIONES JURISDICCIONALES SE VERIFICA SIN QUE SE INVOQUEN DE MANERA EXPRESA SUS FUNDAMENTOS, CUANDO LOS RAZONAMIENTOS DE ÉSTAS CONDUZCAN A LAS NORMAS APLICADAS.—La garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal consiste en la obligación que tiene la autoridad de fundar y motivar todo acto de molestia que se dirija a los particulares, pero su cumplimiento se verifica de manera distinta tratándose de actos administrativos y de resoluciones jurisdiccionales. Lo anterior es así, porque en el acto administrativo que afecta de manera unilateral los intereses del gobernado, se debe cumplir con la formalidad de invocar de manera precisa los fundamentos del mismo, a efecto de que esté en posibilidad de conocer el sustento jurídico del acto que le afecta, mientras que la resolución jurisdiccional presupone el debido proceso legal en que se plantea un conflicto o una litis entre las partes, en el cual el actor establece sus pretensiones apoyándose en un derecho y el demandado lo objeta mediante defensas y excepciones, constituyendo la fundamentación de la resolución el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, el estudio de las acciones y excepciones del debate, sin que se requiera de la formalidad que debe prevalecer en los actos administrativos, toda vez que dentro del citado análisis se dan razonamientos que involucran las disposiciones en que se funda la resolución, aun sin citarlas de forma expresa. En consecuencia, aun cuando por regla general la autoridad emisora de una resolución jurisdiccional está obligada a fundar tal acto citando los preceptos con los que se cumpla esa exigencia, excepcionalmente, si los razonamientos de la resolución conducen a la norma aplicada, la falta de formalidad puede dispensarse, de ahí que las resoluciones jurisdiccionales cumplen con la garantía constitucional de referencia sin necesidad de invocar de manera expresa el o los preceptos que las fundan, cuando de la resolución se advierte con claridad el artículo en que se basa."

En otra parte de los conceptos de violación, el quejoso manifiesta que la Junta dictó un laudo incongruente, toda vez que:

— Otorgó pleno valor al dictamen del perito nombrado por el actor, quien concluyó que las firmas asentadas en el acta administrativa y citatorio no co-

rrespondían a su puño y letra; sin embargo, el trabajador nunca negó la signatura y no acudió a ratificar las firmas; por ende, nunca las desconoció.

– El que no se objete un dictamen pericial, tampoco implica que necesariamente tenga valor pleno, pues conforme al principio de valoración de las pruebas se debe analizar para establecer si contiene los razonamientos en los cuales el perito basó su opinión, así como operaciones, estudios o experimentos que lo hubieren llevado a emitir su dictamen, apreciándolo conjuntamente con los diversos medios de convicción y exponiendo los fundamentos de su valoración.

– El dictamen pericial de autos carece de valor, pues el mismo se encuentra desvirtuado con el acta administrativa que se tuvo por perfeccionada en acuerdo de siete (7) de marzo de dos mil doce (2012), donde el actor sí estuvo presente, ya que los ratificantes lo vieron participar en dicha diligencia y obviamente recibió el citatorio.

– Tuvo por no perfeccionada el acta administrativa de veinticinco (25) de noviembre de dos mil tres (2003), aun cuando ya la había tenido por perfeccionada mediante acuerdo de siete (7) de marzo de dos mil doce (2012), al haber sido ratificada por la mayoría de sus suscriptores, pues sólo faltaron dos de los cuatro testigos de cargo.

– Al tener por perfeccionada el acta de mérito en el proceso, no así en el laudo, modificó el sentido de su determinación a pesar de no estar facultada para ello y aquella determinación no fue impugnada.

– Determinó que con el acta administrativa no se acreditó haber rescindido justificadamente la relación individual de trabajo con *****; sin embargo, de las declaraciones de ***** , se desprenden sus actos de violencia en contra de *****.

– Si bien cada testigo narró con palabras distintas la forma en que ocurrieron los hechos, lo cierto es que todas coinciden en afirmar que el actor incurrió en la causal de rescisión prevista por el artículo 47, fracciones II y III, de la Ley Federal del Trabajo, al incidir en actos de violencia y malos tratos en contra de ***** , alterando la disciplina en el centro de trabajo, ya que empezó a discutir y pasó a la agresión verbal en contra de su jefe inmediato, para posteriormente entablar una riña y liarse a golpes con él.

– No tenía que constarles a los testigos de cargo quién inició la riña, ni invalidar el acta administrativa por el hecho de que existan versiones diversas

de los hechos, sino únicamente estar cierto sobre una pelea en el centro de trabajo.

Los motivos de inconformidad sintetizados son infundados. Para evidenciar esta afirmación, es menester retomar los siguientes antecedentes.

***** demandó de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, la reinstalación; éste aseveró que el actor cometió actos de violencia en contra de su superior jerárquico, por lo que se levantó un acta administrativa (25 de noviembre de 2003), donde se determinó que incurrió en la causal de rescisión prevista por el artículo 47, fracciones I y II, de la Ley Federal del Trabajo.

La demandada ofreció como pruebas, entre otras, el citatorio y acta administrativa de trece (13) y veinticinco (25) de noviembre de dos mil tres (2003), respectivamente, así como su medio de perfeccionamiento consistente en la ratificación de contenido y firma a cargo de los que en ella intervinieron, incluyendo al actor.

*****, por escrito de veintisiete (27) de marzo de dos mil siete (2007), agregado a los autos por audiencia de la misma data, objetó tanto el citatorio como el acta administrativa de mérito en cuanto a su autenticidad de contenido y firma, ofreciendo la pericial caligráfica, grafoscópica, grafométrica y dactiloscópica, para acreditar su réplica.

Cabe señalar que el acta administrativa no fue ratificada por todos los que en ella intervinieron, ya que faltaron a ese efecto dos testigos de cargo llamados ***** y *****, tal como se desprende de la diligencia de diecinueve de octubre de dos mil diez (folio 644).

También es menester precisar que conforme a la declaración que supuestamente rindió el actor en dicha documental (acta administrativa), se advierte la admisión de los hechos violentos en que incurrió con su jefe inmediato, de donde derivaba que en el proceso la Junta debía pronunciarse sobre la pericial ofrecida para acreditar su objeción, tal como se ordenó en el DT. *****, a efecto de saber si la firma estampada efectivamente pertenecía a *****, pues de ser así, dicha prueba alcanzaba pleno valor aun sin la ratificación de los testigos de cargo.

A la luz de la protección constitucional otorgada en el *****, la Junta repuso el procedimiento y admitió la pericial caligráfica, grafoscópica, grafométrica y dactiloscópica que ofreció el actor para acreditar su objeción

con respecto al acta administrativa de veinticinco (25) de noviembre de dos mil tres (2003).

Mediante acuerdo de doce (12) de agosto de dos mil catorce (2014), la instructora señaló fecha para que tuviera verificativo la audiencia pericial y precisó que la misma se llevaría a cabo sólo con el experto de la parte actora, ya que la demandada no presentó a su perito a pesar de habérselo solicitado en proveídos de nueve (09), veintisiete (27) y treinta (30) de junio del mismo año.

En la fecha señalada se tuvo al perito del actor rindiendo su dictamen y, dado que no quedaban pruebas por desahogar, se ordenó turnar los autos a proyecto de resolución.

En el laudo impugnado, la responsable consideró:

"...Tal y como se desprende del dictamen pericial de 25 de agosto de 2014, emitido por el profesionista ******, perito nombrado por la parte actora (fojas 742 a 803), que fue presentado y ratificado en audiencia de la misma fecha, como consecuencia del cumplimiento dado a la ejecutoria dictada dentro del amparo directo DT. ******, en el que se concluyó que la firma que se encuentra sobre el nombre de ****** al final del acta administrativa que se analiza, no pertenece al actor y por medio del cual se desahogó la prueba pericial en materia caligráfica, grafoscópica, grafométrica y dactiloscópica que ofreció la parte actora para demostrar la objeción que opuso respecto del acta administrativa de 25 de noviembre de 2003 y del oficio ******, fechado el 13 de noviembre de 2003, en relación a la autenticidad de contenido y firma de las mismas.—Peritaje al que se le concede pleno valor probatorio, en términos del artículo 822 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que el perito designado demostró en autos tener conocimientos bastantes y suficientes en la ciencia sobre la cual versa su dictamen, como consta en autos bajo los folios 782 y 783, además describió el método, las técnicas y las herramientas que utilizó para su elaboración y detalló su aplicación en el estudio que realizó sobre las firmas que calzan en los documentos cuestionados para arribar a sus conclusiones, y puesto que, de la objeción señalada sólo se produjo el peritaje que nos ocupa, al no haber nombrado perito alguno de su parte el organismo demandado, no obstante de encontrarse debidamente notificado del acuerdo en el que se fijó la fecha y hora de su desahogo y no haber acreditado su objeción sobre éste con el interrogatorio que le formuló en audiencia de 25 de agosto de 2014 (foja 804); en el asunto que nos ocupa se debe atender lo que establece la jurisprudencia siguiente: 'ACTAS ADMINISTRATIVAS LEVANTADAS CON MOTIVO DE FALTAS COMETIDAS POR TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. SÓLO ALCANZAN PLENO VA-

LOR PROBATORIO CUANDO SU CONTENIDO ES RATIFICADO POR SUS FIRMANTES.'..."

Como se observa de la cronología de constancias que precede, y opuesto a lo manifestado por Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, el actor sí negó la signatura que calzaba el acta administrativa de veinticinco (25) de noviembre de dos mil tres (2003), ya que mediante escrito de veintisiete (27) de marzo de dos mil siete (2007), agregado a los autos por audiencia de la misma data, la objetó en cuanto a su autenticidad de contenido y firma, dando lugar al desahogo de la prueba pericial en materia caligráfica, grafoscópica, grafométrica y dactiloscópica.

La Junta, a la luz del principio de valoración de las pruebas, analizó el dictamen rendido por el perito del actor y le concedió eficacia demostrativa a la luz de lo siguiente:

- El experto tenía conocimientos bastantes y suficientes en la ciencia sobre la cual versaba dicho dictamen.

- Describió el método, las técnicas y herramientas que utilizó para su elaboración.

- Detalló su aplicación en el estudio que efectuó sobre las firmas que calzaba el acta de referencia.

- No se nombró experto por parte de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, a pesar de encontrarse debidamente notificado del acuerdo en que se había fijado fecha y hora para el desahogo del peritaje, aunado a que tampoco acreditó su objeción al dictamen con el interrogatorio que le formuló verbalmente en audiencia de veinticinco (25) de agosto de dos mil catorce (2014).

En consecuencia, contrario a lo señalado en los disensos, conforme a lo establecido por el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, la responsable consideró otorgar valor al dictamen rendido por el perito del actor, asentando las razones por las que así lo estimó y, conforme al cual, determinó que la firma estampada en el acta administrativa de veinticinco (25) de noviembre de dos mil tres (2003), no pertenecía a *****.

Sirve de apoyo a lo anterior, sólo en lo conducente, la jurisprudencia 477, emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Apéndice al Semanario Judicial de la Federación* 1917-2000, Tomo V, Volumen 1, página 382, que establece:

"PRUEBA PERICIAL. SU ESTIMACIÓN POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEBE HACERSE ANALIZANDO TODOS LOS DICTÁMENES RENDIDOS EN EL JUICIO, EXPRESANDO LAS RAZONES POR LAS CUALES LES OTORGAN O NIEGAN VALOR PROBATORIO.—Esta Suprema Corte ha sostenido con fundamento en lo dispuesto por el artículo 841 de la Ley Federal del Trabajo, que tratándose de la apreciación de la prueba pericial, las Juntas de Conciliación y Arbitraje deben expresar en el laudo las razones o motivos que las conduzcan a conceder o negar eficacia probatoria a los dictámenes periciales rendidos por las partes o, en su caso, por el tercero en discordia, para cumplir de esa manera con la garantía de fundamentación y motivación consagrada en el artículo 16 constitucional, según aparece en la tesis jurisprudencial publicada con el número mil cuatrocientos ochenta y tres de la Compilación de mil novecientos ochenta y ocho, Segunda Parte, bajo el rubro de 'PRUEBA PERICIAL. VALOR DE LA.', con la cual quedó superada la diversa tesis jurisprudencial que aparece publicada con el número mil cuatrocientos setenta y seis de la citada compilación, Segunda Parte, con el título de 'PRUEBA PERICIAL, APRECIACIÓN DE LA, POR LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.', en la que se establecía que las Juntas gozaban de una facultad soberana para apreciar la prueba pericial; el criterio sostenido en esta última tesis fue abandonado luego de que una nueva reflexión sobre el tema condujo a esta Sala a estimar que la facultad de aquéllas para apreciar en conciencia dicha probanza no las libera del deber de expresar las razones por las cuales conceden o niegan eficacia probatoria a los dictámenes rendidos durante el juicio, a fin de que el particular afectado por el laudo esté en posibilidad tanto de conocer los motivos y fundamentos del laudo, como de cuestionarlos ante el órgano de control constitucional, pues aunque las Juntas carecen de los conocimientos técnicos propios de la materia sobre la cual versa la pericial, les corresponde examinar si las conclusiones alcanzadas por los peritos resultan de un estudio profundo, acucioso, lógico y objetivo del problema planteado, por cuanto de ello depende que la prueba les merezca confiabilidad y credibilidad."

En los restantes motivos de inconformidad el impetrante refiere, en síntesis, que el acta administrativa se tuvo por perfeccionada en acuerdo de siete (7) de marzo de dos mil doce (2012) y, no obstante, en el laudo no la tuvo por perfeccionada revocando sus determinaciones; que el actor sí estuvo presente en dicha acta, pues los ratificantes lo vieron participar; que de las declaraciones de los testigos de cargo se desprenden los actos de violencia del accionante e indisciplina, aun cuando hubieren narrado los hechos con palabras distintas.

Como se tiene dicho, estos disensos también son infundados, ya que, en primer orden, de la lectura íntegra del acuerdo de siete (7) de marzo de dos

mil doce (2012-folio 652), que refiere el quejoso, de ninguna manera se desprende que se hubiere tenido por perfeccionada el acta administrativa de veinticinco (25) de noviembre de dos mil tres (2003), ya que la instructora únicamente hizo una relatoría del exhorto enviado por la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número 59 con residencia en Tijuana, Baja California, en que recibió diversas diligencias que efectuó con relación a la ratificación de la citada documental, tal como la diligencia de diecinueve (19) de octubre de dos mil diez (2010-folio 644), en que se hizo constar que los testigos de cargo ***** y ***** , no comparecieron a dicha validación, de donde deriva que la Junta en ningún momento revocó alguna de sus determinaciones; máxime cuando el alcance demostrativo de dicha documental es un aspecto de valoración verificable en el laudo.

Por otra parte, debe decirse que un acta administrativa se trata de un documento privado de investigación que se elabora para establecer si un trabajador incurrió en alguna de las causales rescisorias que contempla el artículo 47 de la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, la misma no prueba, necesariamente, la verdad de lo declarado por las personas que en ella intervinieron.

Tampoco puede perderse de vista que un acta administrativa se elabora por orden del patrón y la misma contiene declaraciones de terceros, de donde deriva que amerite la presentación de quienes intervinieron ante la autoridad jurisdiccional, tanto para que ratifiquen su dicho como para que el trabajador afectado tenga oportunidad de repreguntar ante el juzgador y no ante su contraparte.

Entonces, si un acta no tiene por sí la prueba plena de su contenido, tal fuerza puede alcanzarse mediante su perfeccionamiento, es decir, a través de la ratificación de su contenido por quienes en ella intervinieron o, en su caso, por confesión expresa del trabajador.

La ratificación del acta administrativa por parte de los firmantes procede aun cuando no sea objetada por el trabajador, pues lo contrario implicaría otorgar al patrón el poder de formular pruebas indubitables ante sí o por su orden, sin carga alguna de perfeccionamiento y a fin de lograr un acto que, como cierto tipo de terminación de las relaciones laborales, sólo puede válidamente obtener mediante el ejercicio de una acción y la demostración ante un tribunal competente.

En consecuencia, si el acta administrativa de veinticinco (25) de noviembre de dos mil tres (2003), que se instrumentó a ***** , no fue ratificada por todos los que en ella intervinieron, porque faltaron a ese efecto dos testigos de cargo llamados ***** y ***** , tal como se desprende

de la diligencia de diecinueve de octubre de dos mil diez (folio 644), entonces la misma carece de valor probatorio y, por ende, opuesto a lo señalado por el impetrante, dicha documental de ninguna manera podría tener el alcance de acreditar que el actor estuvo presente en esa diligencia, así como tampoco los actos de violencia e indisciplina en que supuestamente incurrió y que fueron base de la rescisión que invocó el demandado.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, Volúmenes 181-186, Quinta Parte, página 67, que establece:

"ACTAS ADMINISTRATIVAS, EN INVESTIGACIÓN DE FALTAS DE LOS TRABAJADORES. DEBEN SER RATIFICADAS.—Las actas administrativas levantadas en la investigación de las faltas cometidas por los trabajadores, para que no den lugar a que se invaliden, deben de ser ratificadas por quienes las suscriben, para dar oportunidad a la contraparte de repreguntar a los firmantes del documento, con el objeto de que no se presente la correspondiente indefensión. Por lo tanto, cuando existe la ratificación del acta por parte de las personas que intervinieron en su formación y se da oportunidad a la contraparte para repreguntar a los firmantes del documento y no se desvirtúan, con las preguntas que se formulen, los hechos que se imputan, la prueba alcanza su pleno valor probatorio."

Este Tribunal Colegiado de Circuito no soslaya que, como se tiene dicho, si bien de la declaración que supuestamente rindió el actor en el acta administrativa de veinticinco (25) de noviembre de dos mil tres (2003), se advierte la admisión de los hechos violentos en que incurrió con su jefe inmediato, lo cierto es que tal documento tampoco alcanza valor probatorio a la luz de esa circunstancia, ya que de acuerdo al dictamen rendido por el perito del actor, cuya valoración quedó definida en párrafos que preceden, la firma estampada en esa documental no pertenece a *****.

En consecuencia, si el acta administrativa de veinticinco (25) de noviembre de dos mil tres (2003), carece de valor probatorio y en ésta se basó la causa de rescisión que invocó Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, ello se traduce en un despido injustificado y, por ende, la determinación a que arribó la responsable en cuanto al tópico, debe continuar rigiendo en sus términos; de ahí lo infundado de los motivos de disenso dilucidados.

En otra parte de los conceptos de violación, el impetrante manifiesta que la Junta dictó un laudo incongruente, así como carente de fundamentación y motivación, toda vez que:

– Se condenó al pago de la ayuda de transporte equivalente a un mes de sueldo tabular, así como a la compensación anual extraordinaria por un monto equivalente a sesenta días de sueldo vigente y a los vales de fin de año (del 1 de febrero de 2003 a la reinstalación), lo cual es incorrecto, al haber rescindido la relación laboral de forma legal.

– Se rescindió la relación laboral de forma justificada, por lo que fue ilegal condenar al pago del aguinaldo de dos mil tres (2003) a dos mil trece (2013) a razón de un salario integrado, debiendo ser con el tabulado.

– Condenó a la prima vacacional (del 1 de enero de 2004 al 3 de noviembre de 2014), con el salario integrado, debiendo ser el que ordinariamente se percibe por día laborado.

Los motivos de inconformidad sintetizados son infundados en parte, así como inoperantes por insuficientes en otra.

Revisten la característica de infundados, los referidos a la condena sobre el pago de la ayuda de transporte, compensación anual extraordinaria y vales de fin de año, pues la ilegalidad aducida por el quejoso la hace derivar de que la rescisión laboral de ***** fue justificada sin su responsabilidad.

Como se advierte de los párrafos que preceden, dado que el acta administrativa instrumentada al actor el veinticinco (25) de noviembre de dos mil tres (2003), carece de valor probatorio, su rescisión se tradujo en un despido injustificado y, por ende, a la luz de lo manifestado en los disensos que nos ocupan, es que debe subsistir la condena al pago de la ayuda de transporte, compensación anual extraordinaria y vales de fin de año.

En los restantes motivos de inconformidad, Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos sólo eleva argumentos generalizados sin contener manifestaciones que revelen o demuestren alguna violación a sus derechos, dado que se limita a referir que se condenó al pago de aguinaldo y prima vacacional con el salario integrado, debiendo ser con el tabulado y ordinario, respectivamente.

Empero, el quejoso omite precisar cuál es el salario en específico que sirvió de base para la condena al pago del aguinaldo y prima vacacional, ni el porqué considera que ése se trata del integrado, ya que el mismo sólo se constituyó con los conceptos relativos a sueldo, previsión social múltiple, ayuda para despensa, ayuda por servicios y compensación para desarrollo.

El impetrante tampoco establece cuál es el monto del estipendio en específico con el que se debió cuantificar el aguinaldo y la prima vacacional, ni con qué pruebas, en su caso, podría advertirse el mismo, aunado a que no refiere los fundamentos legales o jurisprudenciales que determinen su pago en los términos que aduce.

En consecuencia, si los argumentos son insuficientes para poner de manifiesto la ilegalidad de la resolución impugnada y son escuetos en cuanto a lo que pretenden impugnar, entonces dichos motivos de disenso son inoperantes.

Es aplicable al respecto, por el principio de analogía jurídica sustancial y en lo conducente, la tesis sustentada por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, tomo 79, Quinta Parte, página 15, que establece:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. AMPARO PROMOVIDO POR EL PATRÓN.—Si los conceptos de violación formulados por el patrón quejoso no atacan las consideraciones esenciales en las que la Junta funda los puntos resolutivos de un laudo, deben estimarse como insuficientes e inoperantes, pues aun cuando pudiera resultar fundados, no basta para el otorgamiento del amparo."

Finalmente, en un apartado más de los conceptos de violación, el quejoso señala que la responsable dictó un laudo incongruente, toda vez que si bien condenó al pago de salarios caídos (del 16 de diciembre de 2003 al 3 de noviembre de 2014), lo cierto es que fue indebido el cómputo de los días transcurridos, pues en ese periodo pasaron 10 años (360 días cada uno), 10 meses (30 días cada uno) y 17 días, es decir, 3600 días por diez años, más 180 días por seis meses (sic), más 17 días, dando un total de 3797 días, pero no los 3975 del laudo.

— Lo anterior, dado que las quincenas son de quince (15) días y los meses de treinta (30) días invariablemente, máxime cuando la Secretaría de Hacienda y Crédito Público fija un salario tabular mensual de treinta (30) días, que se divide entre dos para ser pagadero en forma quincenal, pero no en días calendario.

Los motivos de inconformidad sintetizados son esencialmente fundados. Para evidenciar esta afirmación, es menester precisar que la Junta estableció en el laudo:

"...resulta procedente condenar al demandado... al pago de los salarios caídos... se cuantifican en esta resolución por el periodo comprendido

del 16 de diciembre de 2003 al 3 de noviembre de 2014, tomando como base el salario quincenal integrado de \$*****, debidamente acreditado en autos con los recibos de pago expedidos por el organismo demandado a nombre del actor, correspondientes al lapso que va del 1 de enero al 15 de diciembre de 2003, documentales privadas a las que se les otorga pleno valor probatorio, por tratarse de una prueba común ofrecida en copia simple por el actor (fojas 135 a 153) y en original por el demandado (fojas 231 a 253), que se conforma por las siguientes sumas y conceptos: \$***** por sueldo, \$***** por previsión social múltiple, \$***** por ayuda para despena, \$***** por ayuda por servicios y \$***** por compensación para desarrollo; salario quincenal integrado que dividido entre 15 días resulta un salario diario integrado de \$*****, que multiplicado por los 3975 días transcurridos durante el periodo indicado, asciende a la cantidad de \$***** por concepto de salarios caídos, salvo error u omisión de carácter aritmético..."

La determinación a que arribó la Junta en torno a la cuantificación de los días para el pago de los salarios caídos, es jurídicamente incorrecta por lo que enseguida se expone.

Los artículos 82, 83, 88 y 89 de la Ley Federal del Trabajo regulan el salario y los plazos para su pago, ya que prevé la posibilidad, entre otros supuestos, de que el mismo se fije por día, por semana o por mes, así como que los plazos para su pago no podrán ser mayores a una semana cuando se desempeña un trabajo material y de quince días para los demás trabajadores.

En los casos en que el salario es fijado por la unidad de tiempo mes, debe ser cubierto con la misma cantidad de dinero en cada uno de los meses del año, con independencia de que tengan veintiocho, veintinueve, treinta o treinta y un días, pues sólo cuando tenga que obtenerse el salario diario para el pago, por ejemplo, de algunas prestaciones que para ser cubiertas deben tener como base el salario diario, es cuando el sueldo mensual debe dividirse entre treinta, lo que no significa que el sueldo mensual abarque, invariablemente, el importe exacto de treinta días.

Cuando los meses cuenten con treinta y un días, el salario mensual no debe verse incrementado en su cuantía, como tampoco disminuido en el mes de febrero que nunca alcanza los treinta días.

En los casos en que el salario del trabajador se fija en forma mensual, no existe razón para aumentar a este sueldo, el correspondiente al día treinta

y uno, pues debe considerarse incluido en el estipendio mensual con independencia de la forma en que se pague, es decir, por semana o por quincena, ya que su erogación no se hace en atención al número de días trabajados, sino a la unidad de tiempo "mes", cuyo sueldo que es el mismo en los doce meses del año, no obstante la diferencia en el número de días de los mismos.

En el caso concreto se condenó al pago de salarios caídos por el periodo comprendido del dieciséis (16) de diciembre de dos mil tres (2003) al tres (3) de noviembre de dos mil catorce (2014), a razón de \$***** quincenales, que divididos entre quince (15) resultó un estipendio diario de \$*****.

La responsable estimó que dicho periodo abarcaba tres mil novecientos setenta y cinco días (3975), mismos que corresponden a una cuantificación en razón de las datas consecutivas del calendario; sin embargo, no debe confundirse el monto del salario que se fija por día, semana o mes, con el plazo para su pago que no puede ser mayor a quince días, es decir, un mes que se divide en dos, aun cuando las quincenas no sean exactamente iguales, pues la segunda podrá variar dependiendo del número de días que contenga el mes correspondiente, sin que por esa razón pueda estimarse que no comprende el pago de todos los días del mes.

En consecuencia, asiste razón al impetrante cuando refiere que si un mes de pago contiene treinta (30) días, entonces un año de doce (12) meses tiene trescientos sesenta (360) días, que es la forma como se debió calcular el periodo que abarca la condena de los salarios caídos, es decir, cada año equivale a trescientos sesenta (360) días, cada mes a treinta (30) días y cada semana a siete (7) días.

Es sustento de lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 156/2007, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVI, agosto de 2007, página 618, que dice:

"SALARIO MENSUAL. FORMA DE COMPUTARLO.—Los artículos 82, 83, 88 y 89 de la Ley Federal del Trabajo regulan el salario, los plazos y la determinación del monto de las indemnizaciones para su pago, sin que deba confundirse su monto, que puede fijarse por día, por semana, por mes o, inclusive, tener alguna otra modalidad, con el plazo para su pago, que no podrá ser mayor a una semana cuando se desempeña un trabajo material o a quince días para los demás trabajadores, entendiéndose por este último aquel en que el mes se divide en dos, aun cuando estas partes no sean exactamente

iguales, pues la segunda quincena de cada mes podrá variar dependiendo del número de días que lo conformen, sin que por esa razón pueda estimarse que no comprende el pago de todos los días del mes. Por tanto, en los casos en que el salario del trabajador se fija en forma mensual, no existe razón para aumentar el correspondiente al día treinta y uno, que debe considerarse incluido en la remuneración mensual, con independencia de la forma en que ésta se pague, es decir, por semana o por quincena, ya que dicho pago no se hace en atención al número de días trabajados, sino a la unidad de tiempo 'mes', salario que es el mismo en los doce meses del año, no obstante la diferencia en el número de días de cada uno de ellos."

Como corolario de lo anterior, debe decirse que los artículos 82, 83, primer párrafo, 88 y 89 de la Ley Federal del Trabajo, anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 30 de noviembre de 2012 y vigente (por ser de contenido similar), regulan el salario y los plazos para su pago, ya que prevé la posibilidad de que el mismo se fije por día, por semana, por quincena o por mes, aunado a que cuando se determine por semana o por mes, se dividirá entre siete y treinta, respectivamente, para establecer el estipendio diario. Sobre estas premisas, cuando en un conflicto laboral se deba obtener el sueldo diario para computar los salarios caídos, no se debe efectuar una sumatoria de las cincuenta y dos semanas, veinticuatro quincenas o doce meses del año para luego dividir el resultado entre trescientos sesenta y cinco, sino que debe atenderse a las siguientes hipótesis para no obtener una diferencia económica injustificada en el pago de salarios caídos: a) Cuando la litis se haya fijado sólo con la enunciación del estipendio diario, entonces su pago deberá calcularse por día calendario; b) Si la litis se fijó con la enunciación del estipendio por unidad de tiempo "semana", se dividirá entre siete para obtener el salario diario; c) Cuando la litis se haya fijado con la enunciación del estipendio por unidad de tiempo "quincena", se dividirá entre quince para obtener el salario diario; y, d) Finalmente, cuando la litis se fijó con la enunciación del estipendio por unidad de tiempo "mes", se dividirá entre treinta para obtener el salario diario. Lo anterior se justifica, dado que en estos casos la erogación del sueldo no se hace en atención al número de días trabajados, sino a la unidad de tiempo "semana", "quincena" o "mes", cuyo estipendio es el mismo, por ejemplo, en cada uno de los doce meses del año, no obstante la diferencia en el número de días que existe en algunos, el sueldo en ningún momento se ve disminuido en febrero por tener veintiocho o veintinueve días, sino que se pagan doce mensualidades al año.

Al no considerarlo así, la responsable violó el principio de congruencia que impera en el dictado de los laudos y, por ende, conculcó los derechos del que-

joso consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de ahí lo fundado de los motivos de disenso.

Consecuentemente, procede conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, para el efecto de que:

I. La Junta deje insubsistente el laudo.

II. Dicte otro en el cual estime que para calcular el periodo que abarca la condena a los salarios caídos, cada año equivale a trescientos sesenta (360) días, cada mes a treinta (30) días y cada semana a siete (7) días.

III. Hecho lo anterior, resuelva lo que proceda sin perjuicio de reiterar los aspectos definidos y los que no fueron materia de esta ejecutoria.

Con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje, por conducto de su presidente, para que en el término de tres días posteriores a la fecha de notificación, dé cumplimiento a la ejecutoria, con el apercibimiento que, de no hacerlo así, sin causa justificada, se le impondrá una multa de \$*****, que es el equivalente a cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, que a la fecha es de \$***** diarios y se multiplica por cien, multa mínima que se considera procede, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 238 y 258 de la ley invocada.

Por lo expuesto y fundado y, con apoyo, además, en los artículos 73, 74, 76, 77, 184 y 188 de la Ley de Amparo, se resuelve:

ÚNICO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, contra el acto de la Junta Especial Número Once de la Federal de Conciliación y Arbitraje, consistente en el laudo de doce de noviembre de dos mil catorce, pronunciado en el expediente laboral *****, seguido por *****, contra la quejosa y otro. El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del último considerando de esta ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este tribunal y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, en sesión pública, por mayoría de votos de los Magistrados José Manuel Hernández Saldaña y Héctor Landa Razo, lo resolvió el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Fue ponente el primero de los nombrados. La Magistrada María del Rosario Mota Cienfuegos emitió voto particular que se plasma al final de esta ejecutoria.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto particular de la Magistrada María del Rosario Mota Cienfuegos: Disiento de la opinión de la mayoría, en lo tocante a conceder la protección de la Justicia Federal a Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos, bajo la óptica de que la Junta incorrectamente calculó el pago de los salarios caídos por día transcurrido, ya que debió ser a razón de treinta (30) días por mes, pues contrario a esa determinación, estimo que la conclusión de la responsable resultó ajustada a derecho y debió prevalecer.—Lo anterior es así, por las razones que se informan a continuación.—De conformidad con el artículo 48 de la Ley Federal del Trabajo, cuando el patrón no compruebe la causa de la rescisión, el trabajador tendrá derecho a que se le paguen los salarios caídos desde la fecha del despido hasta que se cumplimente el laudo.—Esto es, se trata de una reparación legal pecuniaria de un daño o perjuicio originado al trabajador por causas imputables al patrón, en concreto, por el despido injustificado y que empiezan a generarse a partir del día en que ocurrió el despido y hasta aquel en que el laudo sea cumplido.—En ese sentido, para el cómputo de los salarios caídos deben tomarse en cuenta todos los días que transcurran desde el injustificado despido y hasta que el demandado haga el pago de la condena correspondiente.—De manera que, si en el caso concreto, la Junta consideró procedente la condena de salarios caídos por la cantidad de \$*****, que resultaba de multiplicar el salario diario integrado de \$***** que obtuvo de dividir el salario quincenal de \$***** entre quince (15), por tres mil novecientos setenta y cinco (3975) días, que comprendían el periodo del dieciséis (16) de diciembre de dos mil tres (2003) al tres (3) de noviembre de dos mil catorce (2014), su determinación se ajustó a derecho.—Es así, en virtud de que con independencia de la forma en que se pacte el pago de salarios que percibirá el trabajador, es decir, por día, semana, quincena o por mes, ello no tiene alcance jurídico para el pago de los salarios caídos, pues éstos se computan día a día a partir del despido y, por tanto, se cuantifican por trescientos sesenta y cinco (365) días o trescientos sesenta y seis (366) según contenga cada año, por lo que no es aplicable la manera de computar por unidad de tiempo de semanas, quincenas, meses y años que se propone en el análisis de mayoría, ya que esa forma de cálculo corresponde únicamente a los pagos de los trabajadores que se encuentren activos y no así respecto de aquellos que fueron separados injustificadamente y a quienes se les está resarciendo el daño o perjuicio causado con motivo de dicha separación.—Consecuentemente, el concepto de violación propuesto por el quejoso en ese sentido era infundado y lo procedente era negar el amparo y protección de la Justicia Federal.

En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Este voto se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SALARIOS CAÍDOS. FORMA DE COMPUTARLOS CONFORME AL PLAZO FIJADO PARA EL PAGO DEL SUELDO.

Los artículos 82, 83, primer párrafo, 88 y 89 de la Ley Federal del Trabajo, regulan el salario y los plazos para su pago, ya que prevén la posibilidad de que aquél se fije por día, semana, quincena o mes, aunado a que cuando se determine por semana o mes, se dividirá entre 7 y 30 respectivamente, para establecer el estipendio diario. Sobre estas premisas, cuando en un conflicto laboral deba obtenerse el sueldo diario para computar los salarios caídos, no debe efectuarse una sumatoria de las 52 semanas, 24 quincenas o 12 meses del año, para luego dividir el resultado entre 365, sino que debe atenderse a las siguientes hipótesis para no obtener una diferencia económica injustificada en el pago de salarios caídos: a) Cuando la litis se haya fijado sólo con la enunciación del estipendio diario, entonces su pago deberá calcularse por día calendario; b) Si la litis se fijó con la enunciación del estipendio por unidad de tiempo "semana", se dividirá entre 7 para obtener el salario diario; c) Cuando la litis se haya fijado con la enunciación del estipendio por unidad de tiempo "quincena", se dividirá entre 15 para obtener el salario diario; y, d) Finalmente, cuando la litis se fijó con la enunciación del estipendio por unidad de tiempo "mes", se dividirá entre 30 para obtener el salario diario. Lo anterior se justifica, dado que en estos casos la erogación del sueldo no se hace en atención al número de días trabajados, sino a la unidad de tiempo "semana", "quincena" o "mes", cuyo estipendio es el mismo, por ejemplo, en cada uno de los 12 meses del año, no obstante la diferencia en el número de días que existe en algunos, el sueldo no se ve disminuido en febrero por tener 28 o 29 días, sino que se pagan 12 mensualidades al año.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMERO CIRCUITO.

I.13o.T.139 L (10a.)

Amparo directo 360/2015. Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. 8 de octubre de 2015. Mayoría de votos. Disidente: María del Rosario Mota Cienfuegos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretario: Omar David Ureña Calixto.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN. LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA REQUERIR AL CONTRIBUYENTE QUE EXHIBA DOCUMENTOS O APORTE INFORMACIÓN ADICIONAL A LA ORIGINALMENTE PRESENTADA, DEBE EJERCERSE BAJO UN CRITERIO DE NECESIDAD Y UN ESTÁNDAR DE RACIONALIDAD.

AMPARO DIRECTO 427/2015. 27 DE AGOSTO DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE: JULIO HUMBERTO HERNÁNDEZ FONSECA. PONENTE: JOEL CARRANCO ZÚÑIGA. SECRETARIO: URIEL AUGUSTO ISIDORO TORRES PERALTA.

CONSIDERANDO:

QUINTO.—Para dar el tratamiento que corresponde a los conceptos de violación propuestos, es conveniente dar noticia, en síntesis, de los antecedentes relevantes del asunto, que se desprenden de las constancias que integran el juicio anulatorio.

1. El veintinueve de noviembre de dos mil trece ***** , presentó, vía electrónica, una solicitud de devolución de saldo a favor por concepto de prevalidación electrónica de datos de los pedimentos al amparo de los cuales realizó operaciones de comercio exterior en el ejercicio fiscal de 2012, por la cantidad de \$***** (***** pesos 00/100 M.N.).

2. En alcance, mediante escrito de cinco de diciembre del propio año, exhibió ante la autoridad un disco compacto que contiene un documento en el cual se glosa la información relativa a esas operaciones de comercio exterior.

3. Por oficio ***** , de nueve de diciembre de dos mil trece, la subadministradora de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente "1" de la Administración General de Grandes Contribuyentes del Servicio de Administración Tributaria, a fin de contar con los elementos necesarios para resolver dicha petición, requirió a la contribuyente información y documentación diversas.

4. Luego de la presentación de cierta documentación relacionada con el requerimiento de cuenta, por oficio ***** , de veintiuno de febrero de dos mil catorce, que constituye la resolución administrativa impugnada, la mencionada autoridad tuvo por desistida la solicitud de devolución de referencia, toda vez que, en su opinión, la promovente no allegó los elementos suficientes para efectuar el pronunciamiento correspondiente.

5. Inconforme con tal acto, *****, demandó su nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, lo que originó la tramitación del expediente *****.

6. La Primera Sala Auxiliar del referido órgano jurisdiccional, a quien correspondió resolver el asunto, por sentencia de trece de marzo de dos mil quince, reconoció la validez de la resolución administrativa impugnada, con base en las siguientes consideraciones:

Luego de desestimar la causal de improcedencia invocada por la autoridad, en el considerando cuarto examinó los dos primeros conceptos de impugnación de la demanda, en donde la empresa actora adujo, medularmente, que la resolución controvertida es ilegal, al tener a la causante por desistida de su solicitud de devolución de contribuciones, aun cuando la autoridad tenía en su poder los documentos relacionados con el pago de la prevalidación fiscal, y los declaró infundados.

Para llegar a esa decisión, la juzgadora analizó el acto y el requerimiento contenidos en el oficio *****, y determinó que fue correcto que la demandada tuviera por desistida de tal petición a la enjuiciante, sobre la base de que ésta no allegó los medios de convicción solicitados.

Indicó que, pese a que el nueve de diciembre de dos mil trece se requirió a la actora para que en el plazo de veinte días presentara diversa documentación que justificara su petición, lo cierto es que no proporcionó la totalidad de las operaciones por concepto de importación efectuadas, ni el registro contable de la compra o venta de importación durante el periodo solicitado, así como las cuentas, subcuentas y valores relacionados con las operaciones que sustentan la devolución.

Estimó que, contrario a lo alegado por la enjuiciante, la información solicitada por la autoridad sí guarda relación con la petición de devolución de origen y, además, que es obligación de la contribuyente llevar sus registros contables en los términos que disponen las leyes fiscales; por tanto, se encontraba constreñida a desahogar en su totalidad el requerimiento formulado.

Consideró infundado el alegato de la actora relativo a que, con anuencia de la Administración Central de Fiscalización a Empresas que Consolidan Fiscalmente, se encontraba autorizada para desahogar el requerimiento de información sólo respecto de una muestra aleatoria de cuarenta y ocho operaciones de comercio exterior efectuadas en dos mil doce.

Puntualizó que no es válido asumir que esos documentos se encuentren en los archivos del ente fiscal, dado que, conforme el artículo 22 del código federal tributario, deben allegarse los medios de convicción aptos para que la autoridad resuelva la solicitud de devolución correspondiente.

Asimismo, estableció que como la autoridad no contó con la documentación necesaria para resolver la petición de la demandante, resulta evidente que no contravino lo dispuesto por el artículo 2, fracción VI, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.

Sostuvo que es irrelevante que la empresa actora alegue que, conforme a la regla 1.8.3. de las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, vigentes en 2012, así como a su anexo, para acreditar el pago por concepto de prevalidación electrónica sea suficiente que dicha contraprestación quede asentada en el pedimento relativo, puesto que no está en tela de juicio si efectivamente esa información se encuentra ahí consignada, sino que la actora no proporcionó la documentación que solicitó la demandada.

Señaló que para efectuar la devolución, la autoridad no se encontraba sujeta a revisar en sus archivos los pedimentos de importación y, posteriormente, efectuar el pago correspondiente, sino a allegarse de los documentos necesarios y aptos que respalden una decisión de tal naturaleza; de ahí que resulte justificada la documentación requerida en los términos indicados por la demandada.

Asimismo, indicó que si la promovente aduce que presentó ante el ente fiscal una base de datos en forma electrónica, relacionada con las operaciones que sustentan la devolución solicitada, denominada "glosa", lo cierto es que la actora no dio cumplimiento a la exhibición de la contabilidad que le fue requerida y con la que amparara la totalidad de los trámites aduaneros.

Por otra parte, la Sala resolvió el concepto de anulación en que la promovente adujo que la autoridad demandada aplicó de forma indebida lo dispuesto en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, en tanto que no debió tenerla por desistida de la solicitud de devolución, sino emitir un segundo requerimiento ante la insuficiencia de la documentación proporcionada.

Al respecto, la resolutora sostuvo que el requerimiento a que hace referencia el precepto anterior, constituye una facultad discrecional, toda vez que al emplear el legislador la palabra "estará en aptitud de emitir un nuevo pro-

nunciamiento", ello otorga posibilidad a la autoridad para que, de estimarlo conveniente, emita un requerimiento de documentos e informes a la contribuyente, y está en posibilidad de atender la solicitud de devolución.

Explica que de la redacción del artículo en comento no se desprende que el legislador hubiera empleado la palabra "deberá emitir un nuevo requerimiento", caso en el cual se estaría frente a una actividad reglada en la que la autoridad estuviera obligada a emitir el segundo requerimiento; de ahí que la actora apreció equivocadamente la connotación gramatical de la redacción de ese artículo.

Finalmente, en el considerando quinto del fallo, la responsable calificó como infundados los argumentos de la actora, encaminados a demostrar que tiene derecho a la devolución, puesto que, al no acreditar haber dado cumplimiento al requerimiento que le formuló la autoridad para atender su solicitud de devolución, estaba impedida para emitir un razonamiento en cuanto al fondo de la petición.

Expuesto lo anterior, se da noticia de que la quejosa propone conceptos de violación en que plantea la inconstitucionalidad del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, así como de legalidad.

Ello se destaca porque si bien, por regla general, son de examen preferente los planteamientos en que se cuestiona la regularidad de una norma general, los órganos de amparo están facultados para analizar los argumentos de la parte quejosa a la luz del principio de mayor beneficio, de conformidad con el artículo 189 de la Ley de Amparo.

Con base en tal principio, este tribunal se hará cargo, en primer lugar, de los temas de legalidad, en tanto que, de prosperar, se llegaría a la conclusión de que la autoridad enjuiciada debe atender la solicitud de devolución y emitir un pronunciamiento de fondo, mientras que, según la forma en que están propuestos los aspectos de constitucionalidad, la única consecuencia de que fueran favorablemente acogidos sería que, en lugar de que se tuviera por desistida a la accionante de dicha solicitud, le fuera negada.

Precisado lo anterior, es pertinente informar que en el asunto, en principio, no está a debate la procedencia de la devolución de las cantidades que pretende la persona moral, sino que la litis se centra en determinar si es apegado a derecho que la Sala haya reconocido la validez de la resolución por la que la autoridad demandada la tuvo por desistida de la instancia de devolu-

ción ante el incumplimiento de aportar, completamente, la información y documentos que le requirió.

Partiendo de esta premisa, se da noticia de que la lectura a la demanda de amparo, en los aspectos de legalidad, pone de relieve que la quejosa propone cuatro conceptos de violación en los que plantea, con base en diversos argumentos, los siguientes tópicos fundamentales:

1. La facultad de solicitar la exhibición de la información, prevista en el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, se encuentra condicionada a que esta última sea idónea para demostrar el origen de las cantidades cuya devolución se pide;

2. No era necesario presentar la totalidad de la documentación que precisó la autoridad en el oficio de requerimiento, porque resulta irrelevante, a efecto de acreditar el derecho a la devolución de los montos pagados por el servicio de prevalidación de datos de los pedimentos correspondientes a las operaciones de comercio exterior que realizó durante dos mil doce;

3. Los elementos suficientes para probar que ese servicio fue sufragado y que no fue disminuido del derecho de trámite aduanero son, precisamente, los pedimentos de importación, puesto que en ellos se hacen constar los pagos efectuados por tales rubros, en tanto que ahí se asienta la certificación bancaria, de conformidad con las disposiciones de la Ley Aduanera;

4. Los originales de los pedimentos de importación de las operaciones que realizó en dos mil doce obran en poder de la autoridad hacendaria, por lo que, en términos del artículo 2, fracción VI, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, bastaba con informar los datos de identificación correspondientes a efecto de no tener que exhibirlos;

5. Que la Sala no examinó correctamente la comunicación efectuada mediante correo electrónico del Servicio de Administración Tributaria, por la que le fue autorizado presentar, únicamente, los documentos relativos a una "muestra representativa" de todas las operaciones de comercio exterior de dos mil doce; y,

6. Que la autoridad fiscal, ante el supuesto incumplimiento parcial del requerimiento que le formuló, debió solicitar nuevamente la aclaración de los datos y documentos faltantes.

Por razón de método, serán abordados, en primer lugar, los planteamientos en que la quejosa cuestiona la decisión de la Sala, en el sentido de que la información que le fue solicitada era idónea para resolver sobre la petición de devolución y que, por tanto, la autoridad no se excedió en sus facultades.

Lo anterior, puesto que, de concluir que tal información era pertinente y su requerimiento, por parte de la autoridad, estaba legalmente justificado, resultaría innecesario examinar los restantes planteamientos en cuanto a que los originales de los pedimentos de importación obran en poder de la autoridad, precisamente porque cualquiera que fuera la conclusión al respecto, subsistiría la razón en que descansa el sentido de la resolución administrativa impugnada, consistente en que la parte quejosa no cumplió, en los términos que fue decretado, el requerimiento contenido en el oficio *****, de nueve de diciembre de dos mil trece.

De modo que es necesario conocer el contenido del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, que regula el trámite y resolución de las solicitudes de devolución:

"Artículo 22. Las autoridades fiscales devolverán las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan conforme a las leyes fiscales. En el caso de contribuciones que se hubieran retenido, la devolución se efectuará a los contribuyentes a quienes se les hubiera retenido la contribución de que se trate. Tratándose de los impuestos indirectos, la devolución por pago de lo indebido se efectuará a las personas que hubieran pagado el impuesto trasladado a quien lo causó, siempre que no lo hayan acreditado; por lo tanto, quien trasladó el impuesto, ya sea en forma expresa y por separado o incluido en el precio, no tendrá derecho a solicitar su devolución. Tratándose de los impuestos indirectos pagados en la importación, procederá la devolución al contribuyente siempre y cuando la cantidad pagada no se hubiere acreditado.

"Lo dispuesto en el párrafo anterior, se aplicará sin perjuicio del acreditamiento de los impuestos indirectos a que tengan derecho los contribuyentes, de conformidad con lo dispuesto en las leyes que los establezcan.

"Cuando la contribución se calcule por ejercicios, únicamente se podrá solicitar la devolución del saldo a favor cuando se haya presentado la declaración del ejercicio, salvo que se trate del cumplimiento de una resolución o sentencia firmes, de autoridad competente, en cuyo caso, podrá solicitarse la devolución independientemente de la presentación de la declaración.

"Si el pago de lo indebido se hubiera efectuado en cumplimiento de acto de autoridad, el derecho a la devolución en los términos de este artículo, nace cuando dicho acto se anule. Lo dispuesto en este párrafo no es aplicable a la determinación de diferencias por errores aritméticos, las que darán lugar a la devolución siempre que no haya prescrito la obligación en los términos del penúltimo párrafo de este artículo.

"Cuando en una solicitud de devolución existan errores en los datos contenidos en la misma, la autoridad requerirá al contribuyente para que mediante escrito y en un plazo de 10 días aclare dichos datos, apercibiéndolo que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. En este supuesto no será necesario presentar una nueva solicitud cuando los datos erróneos sólo se hayan consignado en la solicitud o en los anexos. Dicho requerimiento suspenderá el plazo previsto para efectuar la devolución, durante el periodo que transcurra entre el día hábil siguiente en que surta efectos la notificación del requerimiento y la fecha en que se atienda el requerimiento.

"Cuando se solicite la devolución, ésta deberá efectuarse dentro del plazo de cuarenta días siguientes a la fecha en que se presentó la solicitud ante la autoridad fiscal competente con todos los datos, incluyendo para el caso de depósito en cuenta, los datos de la institución integrante del sistema financiero y el número de cuenta para transferencias electrónicas del contribuyente en dicha institución financiera debidamente integrado de conformidad con las disposiciones del Banco de México, así como los demás informes y documentos que señale el reglamento de este código; tratándose de contribuyentes que dictaminen sus estados financieros por contador público autorizado en los términos del artículo 32-A de este código, el plazo para que las autoridades fiscales efectúen la devolución será de veinticinco días; cuando el contribuyente emita sus comprobantes fiscales digitales a través de la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria, el plazo para que las autoridades fiscales realicen la devolución será de veinte días. Las autoridades fiscales, para verificar la procedencia de la devolución, podrán requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la presentación de la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que considere necesarios y que estén relacionados con la misma. Para tal efecto, las autoridades fiscales requerirán al promovente a fin de que en un plazo máximo de veinte días cumpla con lo solicitado, apercibido que de no hacerlo dentro de dicho plazo, se le tendrá por desistido de la solicitud de devolución correspondiente. Las autoridades fiscales sólo podrán efectuar un nuevo requerimiento, dentro de los diez días siguientes a la fecha en la que se

haya cumplido el primer requerimiento, cuando se refiera a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento. Para el cumplimiento del segundo requerimiento, el contribuyente contará con un plazo de diez días y le será aplicable el apercibimiento a que se refiere este párrafo. Cuando la autoridad requiera al contribuyente los datos, informes o documentos, antes señalados, el periodo transcurrido entre la fecha en que se hubiera notificado el requerimiento de los mismos y la fecha en que éstos sean proporcionados en su totalidad por el contribuyente, no se computará en la determinación de los plazos para la devolución antes mencionados.

"...

"Cuando con motivo de la solicitud de devolución la autoridad inicie facultades de comprobación con el objeto de comprobar la procedencia de la misma, los plazos a que hace referencia el párrafo sexto del presente artículo se suspenderán hasta que se emita la resolución en la que se resuelva la procedencia o no de la solicitud de devolución. El citado ejercicio de las facultades de comprobación concluirá dentro de un plazo máximo de noventa días contados a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades. En el caso en el que la autoridad, para verificar la procedencia de la devolución, deba requerir información a terceros relacionados con el contribuyente, así como en el de los contribuyentes a que se refiere el apartado B del artículo 46-A de este código, el plazo para concluir el ejercicio de facultades de comprobación será de ciento ochenta días contados a partir de la fecha en la que se notifique a los contribuyentes el inicio de dichas facultades. Estos plazos se suspenderán en los mismos supuestos establecidos en el artículo 46-A de este código."

Del precepto transcrito se desprende que las autoridades fiscales están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes tributarias, para lo cual están facultadas, a efecto de verificar la existencia de los saldos, para requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios y que estén relacionados con la materia de la petición, bajo el apercibimiento de que, de no subsanar la prevención en el lapso indicado o en forma completa, se tendrá por desistido al interesado.

Asimismo, dispone que la autoridad puede efectuar un nuevo requerimiento dentro de los diez días siguientes al desahogo del primero, cuando se

refiera a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento.

Este órgano judicial estima que la circunstancia de que el legislador haya autorizado a la autoridad actuante a efectuar hasta dos requerimientos tiene una doble finalidad, por un lado, garantizar la efectividad del derecho que asiste a los contribuyentes para obtener una devolución fiscal y, por otro, dotar de una herramienta a aquélla para que, ante alguna duda en cuanto al origen del saldo cuya devolución se pretende, obtenga del interesado la información pertinente para disiparla.

Es decir, el hecho de que la autoridad fiscal pueda emitir requerimientos en casos en los que necesite de mayores elementos para resolver acerca de la procedencia de la devolución o para establecer su monto, debe entenderse como una medida tendente a regular o limitar los supuestos en los cuales, de manera excepcional, puede dar respuesta a la solicitud de devolución fuera del plazo establecido.

De modo que la facultad en estudio no puede emplearse como una limitante al ejercicio de ese derecho por parte del particular, sino que su uso debe modularse en atención a un criterio de necesidad y bajo un estándar de racionalidad, pues precisamente lo que el legislador pretendió acotar, al establecer directrices para la operatividad de tal facultad es, por una parte, que la autoridad no eluda pronunciarse sobre la devolución que pretende el interesado con base en requerimientos de documentos o información irrelevante y, por otra, garantizar la efectividad del derecho que asiste a los contribuyentes para obtener una devolución fiscal.

En otras palabras, la pertinencia de efectuar requerimientos debe examinarse atendiendo a las características del caso, pero sin dejar de observar el criterio de que los datos o información sean estrictamente necesarios, pues el contribuyente, a priori, no está en condiciones de conocer los parámetros que habrán de aplicarse en el análisis de la solicitud de devolución.

La interpretación anterior es congruente con lo que el propio precepto prevé, en el sentido de que, con motivo de una solicitud de devolución, la autoridad fiscal puede desplegar facultades de comprobación, supuesto en el cual es jurídicamente factible solicitar la exhibición de mayores elementos de la contabilidad del contribuyente bajo las formalidades exigidas por la legislación, de modo que sólo en este supuesto estará autorizado para reca-

bar información que, en principio, pudiera exceder de la materia de la devolución.

Por cuanto hace a la posibilidad de que la autoridad emita un segundo requerimiento, este órgano estima que su propósito no puede desvincularse de la finalidad fundamental por la que el legislador reguló las instancias de devolución, que no es otra que garantizar la efectividad del derecho que asiste a los contribuyentes para que les sean reintegradas las cantidades que hubieran pagado indebidamente.

De modo que la facultad de efectuar un segundo requerimiento, si bien es de carácter discrecional, debe ser ejercida por la autoridad bajo un criterio de necesidad, pero fundamentalmente de racionalidad, pues de lo contrario tendría un sesgo de arbitrariedad.

Lo anterior se traduce en que tal potestad comprende no sólo los casos en que sean necesarios más datos o documentos de los que fueron solicitados al contribuyente, con motivo del primer requerimiento, sino ante el eventual cumplimiento parcial de este último, pues la consecuencia relativa al desistimiento sólo puede ser compatible con la absoluta falta de observancia del requerimiento, pero no, se reitera, con aquellos supuestos en que el interesado exhibe los documentos que consideró suficientes para satisfacer el primer requerimiento y así acreditar el derecho que pretende.

De ahí que la justificación para que la autoridad hacendaria no dé solución a una solicitud de devolución, bajo la actualización del desistimiento, deba limitarse a aquellos casos en que, ante la existencia del primer requerimiento, no exista por parte del contribuyente un principio de cumplimiento y, por tanto, que revele un absoluto desinterés por continuar con la instancia.

Explicado lo anterior, procede verificar si la documentación y datos solicitados por la autoridad hacendaria a la quejosa, mediante oficio *****, de nueve de diciembre de dos mil trece, bajo un parámetro de necesidad, son indispensables para constatar la existencia del saldo cuya devolución pidió.

Desde luego, para ese fin, antes debe tenerse presente el origen de los montos que pretende le sean reintegrados, pues de ello dependerá qué documentación debe aportarse; a manera de ejemplo: si la devolución se solicita respecto de un pago efectuado por el contribuyente en cumplimiento a una resolución de la autoridad hacendaria que a la postre es declarada nula en sede

jurisdiccional, los medios de convicción indispensables no podrán ser otros más que la ejecutoria relativa y el recibo en que conste el entero.

De la solicitud presentada electrónicamente por la quejosa se advierte que pidió, en lo que respecta al ejercicio fiscal de dos mil doce, la devolución de las cantidades pagadas por concepto del servicio de prevalidación electrónica de datos a que se refiere el artículo 16-A de la Ley Aduanera, por las operaciones de importación que efectuó en ese año, a razón de \$***** (***** 00/100 M.N.). (fojas 115 a 127 de los autos del juicio de nulidad)

Lo anterior, pues, en su opinión, dicho servicio forma parte de los actos que integran el despacho aduanero, por lo que los montos erogados son susceptibles de disminución del derecho de trámite aduanero, a cuyo pago están sujetos los importadores de bienes y servicios, en términos del artículo 49 de la Ley Federal de Derechos.

De manera que la suma cuya devolución solicitó la quejosa tiene origen en ciertos pagos de carácter obligatorio que afirma haber realizado como parte del trámite para introducir mercancías al territorio nacional, los que, aun cuando sostiene que tiene derecho a disminuir del pago de trámite aduanero, no lo hizo.

Partiendo de lo anterior, este órgano judicial estima que la verificación de la existencia del saldo antes mencionado está condicionada a dos aspectos: uno de derecho y otro de hecho.

El primero, que no es materia de debate en este juicio, estriba en determinar, de conformidad con la legislación fiscal aplicable, si los importadores están jurídicamente autorizados para disminuir del derecho de trámite aduanero, las cantidades pagadas por el servicio de prevalidación y, en cuanto a los aspectos fácticos, que con motivo de las operaciones de comercio exterior, el contribuyente haya pagado dichos conceptos sin efectuar la disminución mencionada.

En el oficio de requerimiento la autoridad solicitó la exhibición de la siguiente documentación e información: (fojas 132 a 133 de los autos del juicio de nulidad)

"1. Impreso y en dispositivo electrónico, proporcione papel de trabajo con formato .xls, en el cual relacione el total de las operaciones relativas a la im-

portación y exportación de bienes y servicios efectuada por su representada en el ejercicio dos mil doce.

"La información anterior se requiere, se proporcione debidamente relacionada con los siguientes elementos:

- "• Número de pedimento.
 - "• Tipo de pedimento (importación o exportación).
 - "• Patente del agente aduanal.
 - "• Clave aduanal.
 - "• Clave de documento.
 - "• Fecha de pedimento.
 - "• Derecho de trámite aduanero.
 - "• Costo de prevalidación.
 - "• Suma total.
 - "• Número de cheque o de transferencia bancaria.
 - "• Forma de pago.
 - "• Fecha de pago.
 - "• En caso de que los importes pagados por los pedimentos no correspondan con los manifestados en los mismos, indicar el motivo y aportar la documentación soporte.
- "2. Proporcione registro contable, señalando cuentas, subcuentas y valores, relacionados con los pedimentos que relacione en el punto anterior.
- "Asimismo, deberá aportar copia de la documentación que ampare la totalidad de las operaciones por concepto de importación y exportación llevadas a cabo por su representada en el periodo solicitado en devolución y que se

encuentren relacionados en el papel de trabajo (pedimento, facturas, póliza, cheque y estado de cuenta)."

De lo anterior se advierte que la autoridad requirió información relativa a la totalidad de operaciones de comercio exterior, por cuya realización solicitó la devolución, la cual debía presentar mediante dispositivo electrónico en formato ".xls", en que precisaran diversos datos que se vinculan con la identificación de los pedimentos de importación en que sustentó la devolución pretendida (fechas, claves y agente aduanal, entre otros), los montos pagados por el servicio de prevalidación de datos y el derecho de trámite aduanero, así como la forma en que éstos se sufragaron.

Además, requirió la exhibición del "registro contable, señalando cuentas, subcuentas y valores relacionados con los pedimentos que relacione en el punto anterior" y copia de la documentación que ampare las operaciones de comercio exterior, como son: pedimentos, facturas, pólizas, cheques y estados de cuenta.

El primer elemento requerido –salvo por los montos pagados por servicio de prevalidación y derecho de trámite aduanero–, en opinión de este tribunal, se satisfizo con la información que presentó la contribuyente como "anexo 4" mediante escrito en alcance a la solicitud original, en que, en un dispositivo electrónico (disco compacto), mediante el uso de diversos archivos de hojas de cálculo (*Microsoft Excel*), enlistó los números de patente del agente aduanal y del pedimento, clave de sección aduanera de despacho y fechas de operaciones.

Por cuanto hace al segundo aspecto del requerimiento (numeral "2"), se considera que esa documentación, con excepción de los pedimentos de importación, no es estrictamente necesaria para resolver sobre la solicitud de devolución de las cantidades por servicio de prevalidación de datos y, por ende, es prescindible.

Así se afirma, porque el saldo cuya devolución pretende la quejosa es resultado de disminuir, del derecho de trámite aduanero causado por las operaciones de comercio exterior, las sumas pagadas por el servicio de prevalidación de datos durante el despacho aduanero.

Por ello es que la constatación de la existencia del monto que refiere la promovente, es factible advertirla del contenido de los pedimentos de importación, al tratarse de los formatos en que, para efectos del comercio exterior, se

deben declarar todos los conceptos pagados con motivo de la operación, sus montos y el medio por el cual se sufragaron.

Es decir, en la medida en que los pedimentos constituyen las declaraciones de pago de todos los rubros que debió enterar el importador para que fuera factible realizar y concluir el despacho aduanero, son los documentos idóneos para advertir el origen y monto del saldo cuya devolución pretende la quejosa, máxime que se trata de formatos oficiales autorizados por la propia autoridad hacendaria.

La conclusión que precede se corrobora con la circunstancia de que los pedimentos deben ser requisitados bajo ciertos criterios normativos establecidos por la propia autoridad fiscal, concretamente, las Reglas de Carácter General en Materia de Comercio Exterior, las cuales prevén que en ellos se debe asentar o imprimir una certificación bancaria del pago efectuado por la operación relativa, por el total de rubros a enterar, como pudieran ser la prevalidación de datos, el impuesto general de importación, las cuotas compensatorias y el derecho de trámite aduanero.

Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 62/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo VIII, septiembre de 1998, página 365, que establece:

"PEDIMENTO. ES UNA ESPECIE DE DECLARACIÓN FISCAL, RELATIVA A OBLIGACIONES TRIBUTARIAS EN MATERIA DE COMERCIO EXTERIOR.— El término declaración fiscal constituye cualquier expresión escrita relativa al cumplimiento de una obligación tributaria que realiza el sujeto pasivo ante la autoridad hacendaria, mientras que el pedimento es una especie de declaración fiscal relativa al cumplimiento de obligaciones tributarias en materia de comercio exterior, por medio del cual sea el importador o el exportador manifiestan a la autoridad aduanera, en forma escrita, la mercancía a introducir o a enviar fuera del territorio nacional, la clasificación arancelaria, el valor normal o comercial, los impuestos a pagar, y el régimen aduanero al que se destinarán las mercancías. Por consiguiente, debe aceptarse que dentro del contexto de declaraciones en materia de impuestos federales, se encuentran los pedimentos."

Para mayor claridad, resulta conveniente, a manera de ejemplo, conocer el contenido de un pedimento de importación y la forma en que se requisita

Datos generales de identificación del
pedimento de importación (número,
agente, operación y clave de
aduana).

Certificación bancaria de pago electrónico y datos del acuse relativo.

[illegible]

Como se adelantó, del contenido de los pedimentos de importación es posible advertir los elementos fácticos necesarios para determinar la existencia del saldo cuya devolución solicitó la quejosa, sin prejuzgar sobre el aspecto de derecho, pues además de que se desprende la certificación bancaria electrónica de pago de los distintos rubros causados por la operación de comercio exterior que condicionan el saldo y a razón de cuánto cada uno, se observa en forma impresa la firma electrónica avanzada de quien presentó el propio documento ante la autoridad, lo cual dota al pedimento de fiabilidad.

En este punto es pertinente precisar que, contrario a lo sostenido por la Sala, si bien la circunstancia de que la autoridad disponga de la contabilidad de la contribuyente, en lo que se refiere a las operaciones de comercio exterior de que se trata, pudiera servir para advertir que se efectuaron los asientos correspondientes, lo cierto es que no sería un elemento de prueba determinante respecto de la existencia del saldo cuya devolución solicitó la demandante.

De conformidad con lo expuesto, asiste razón a la quejosa en cuanto afirma que la documentación necesaria para resolver la solicitud de devolución son los pedimentos de importación de las operaciones que realizó en dos mil doce y, por ende, se concluye que la autoridad hacendaria, en principio, no debió requerir los elementos descritos en el numeral "2" del oficio relativo y, ante su falta de exhibición, tener por actualizado el desistimiento, pues, según se expuso líneas arriba, la facultad para solicitar la exhibición de documentos adicionales, en términos del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, está acotada por un criterio de necesidad, a la luz del cual no es factible concluir que "el registro contable, cuentas, subcuentas y valores relacionados con los pedimentos" sean estrictamente indispensables para resolver sobre la devolución.

Además, en todo caso, correspondía a la propia autoridad actuante justificar en qué medida la falta de exhibición de dicha información trasciende a la imposibilidad para emitir un pronunciamiento, pero este extremo no se advierte de la resolución administrativa impugnada.

Definido lo anterior, procede verificar si la autoridad, ante el cumplimiento parcial del primer requerimiento, debió efectuar un segundo, o bien, si pese a que la contribuyente aportó, en los papeles de trabajo, la mayoría de los datos que le fueron solicitados y algunos pedimentos de importación, resultaba procedente tenerla por desistida.

Para ese fin, conviene recapitular, como fue expuesto líneas arriba, que el propósito de que la autoridad emita un segundo requerimiento debe enten-

derse en consonancia con la finalidad fundamental de que el legislador haya regulado las instancias de devolución, que no es otra que garantizar la efectividad del derecho que asiste a los contribuyentes para que les sean reintegradas las cantidades que hubieran pagado indebidamente.

De modo que la facultad de efectuar un segundo requerimiento debe ser ejercida por la autoridad, en aquellos casos en que sean necesarios no sólo más datos o documentos de los que fueron solicitados al contribuyente con motivo del primer requerimiento, sino ante el eventual cumplimiento parcial de este último, pues la consecuencia relativa al desistimiento sólo debe entenderse compatible con la absoluta falta de observancia del requerimiento.

Lo anterior, como se dijo, porque la justificación para que la autoridad hacendaria no dé solución a una solicitud de devolución, bajo la actualización del desistimiento, debe limitarse a aquellos casos en que, ante la emisión del primer requerimiento, no exista por parte del contribuyente un principio de cumplimiento y, por tanto, se revele un absoluto desinterés de su parte por continuar con la instancia.

Trasladado lo anterior al caso en estudio, se tiene que la autoridad enjuiciada estaba obligada a ejercer la facultad a que se refiere el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, en el sentido de requerir a la causante por segunda ocasión, en un plazo de diez días, la exhibición de los restantes pedimentos de importación atinentes para complementar los datos aportados en acatamiento al primer requerimiento.

Lo anterior, se reitera, pues sólo si la quejosa hubiese actuado con absoluto desinterés en atenderlo, correspondía tenerla por desistida; pero no en la especie, en que, si bien no aportó la totalidad de las copias de los pedimentos de importación, sino sólo cuarenta y ocho, previamente ya había informado a la autoridad sus datos de identificación, fechas y demás elementos que reflejaban indiciariamente que las operaciones de comercio exterior que amparan son existentes.

De manera que si la información y documentación allegadas por la demandante no le fueron suficientes a la autoridad, en lugar de decretar el desistimiento, debió requerirla por segunda ocasión, de tal forma que le diera oportunidad para evidenciar la procedencia de la devolución.

Luego, si la autoridad hacendaria no procedió en esos términos, es claro que transgredió el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, con el consecuente agravio para la contribuyente.

Resta destacar que, ante esta decisión, no es factible examinar si, de conformidad con el artículo 2, fracción VI, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, debe considerarse que los pedimentos de importación en que la quejosa sustenta su solicitud de devolución, obran en poder de la autoridad actuante, puesto que, primeramente, la enjuiciada deberá emitir un segundo requerimiento, en que, según lo considere jurídica y materialmente viable, podrá prescindir de exigir su exhibición si es que efectivamente cuenta con tales documentos, o bien, solicitar que los aporte en el formato que corresponda.

En estas condiciones, lo que se impone es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, cuyo efecto inmediato y directo es la ineficacia jurídica de la sentencia reclamada, debiendo la Sala responsable emitir otra en la que, con base en las consideraciones expuestas en este fallo, califique como fundados los planteamientos de la demanda y declare la nulidad de la resolución administrativa impugnada, para el efecto de que la autoridad demandada, partiendo de que los pedimentos de importación son elementos suficientes para resolver sobre la solicitud de devolución, emita un segundo requerimiento en términos del artículo 22, sexto párrafo, del Código Fiscal de la Federación para que la contribuyente esté en posibilidad de presentar la documentación necesaria para definir sobre su petición.

Lo anterior, en el entendido de que corresponderá a la enjuiciada informar expresamente en tal requerimiento si es que, a partir de los datos originalmente aportados por la actora, obran o no en su poder los pedimentos de importación necesarios y si, por tanto, es necesario que esta última los exhiba en el formato que corresponda y, hecho lo cual, con libertad de jurisdicción, dicte la resolución que en derecho proceda.

La impresión de efectos a la nulidad se justifica en que, aun cuando en el juicio anulatorio opera la litis abierta y, por ello, en principio las Salas del tribunal responsable pueden abordar el fondo del asunto, en el caso es conveniente que se desarrolle el trámite de la solicitud de devolución en los términos descritos, a efecto de disipar cualquier duda en cuanto a los documentos aportados por la contribuyente.

En similares términos este Tribunal Colegiado resolvió, por mayoría, el juicio de amparo DA-304/2015, en sesión de nueve de julio de dos mil quince.

En atención a la decisión que precede, es innecesario examinar los restantes planteamientos, incluso los de constitucionalidad, pues su resultado no generaría mayor beneficio.

Cobra aplicación la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, Volúmenes 175-180, Cuarta Parte, página 72, que establece:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.—Si al examinar los conceptos de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la protección y el amparo de la justicia federal, resulta innecesario el estudio de los demás motivos de queja."

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

ÚNICO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a *****, contra la sentencia de trece de marzo de dos mil quince, pronunciada por la Primera Sala Auxiliar del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el expediente relativo al juicio de nulidad *****.

Notifíquese personalmente; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a la Sala de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.

Así, por mayoría de votos de los Magistrados Carlos Ronzon Sevilla y Joel Carranco Zúñiga, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, siendo relator el último de los nombrados. El Magistrado Julio Humberto Hernández Fonseca (presidente) votó en contra del proyecto y formuló voto particular.

En términos de lo previsto en los artículos 73, fracción II, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Voto particular del Magistrado Julio Humberto Hernández Fonseca: Con el respeto que debo a mis compañeros Magistrados, expongo las ideas que me hacen apartar de la decisión de mayoría.—La razón fundamental por la cual no comparto el sentido del fallo, es por la interpretación efectuada respecto del artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, en cuanto a las condiciones que regulan la posibilidad de que la autoridad hacendaria realice un segundo requerimiento de documentación o información, en el contexto de una solicitud de devolución, me explico: Si bien coincido en cuanto a que la demostración del derecho a que sean reintegradas las sumas pagadas indebidamente corre exclusivamente a cargo del causante que pretende la devolución, considero que la razón por la cual la autoridad hacendaria está facultada para realizar un primer requerimiento, en términos del dispositivo citado, es otorgarle una herramienta para que, ante alguna duda en cuanto al origen del saldo cuya

devolución se pretende, obtenga del interesado la información pertinente para disiparla.—De manera que el pronunciamiento, en cuanto a la existencia o no del derecho a la devolución, está necesariamente condicionado a que el causante, que es el interesado en obtener el reintegro, aporte la documentación indispensable para ese fin; calificación que no está a disposición de éste, sino que corresponde a la autoridad hacendaria determinar qué elementos estima necesarios.—Adoptar una postura contraria, considero, conduciría a sujetar a la autoridad a emitir un pronunciamiento de fondo sobre la devolución en todos los casos, bastando para ello que el causante haya presentado la documentación que, según su parecer, fuera suficiente, lo cual es inadmisibile.—Desde luego, también coincido en cuanto a que dicha facultad debe constreñirse a la documentación que se relacione con los actos o hechos en que el contribuyente sustenta su petición, pero de tal manera que la información que sea requerida esté orientada a acreditar, entre otros aspectos, las causas del pago indebido o en exceso, los montos enterados, su reflejo en la contabilidad y los eventuales efectos fiscales que el causante le dio.—Entonces, si como ocurrió en el caso, con motivo de un primer requerimiento la autoridad precisa al contribuyente la documentación que debe presentar para que sea factible resolver su solicitud de devolución, no está a disposición de este último calificar los elementos que exhibe y cuáles no, pues fue la autoridad quien, a través del requerimiento, definió los medios de convicción que estima conducentes para poder resolver.—Por consiguiente, de conformidad con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, la consecuencia para el caso de que el interesado no cumpla el requerimiento que le fue formulado en el plazo de veinte días, es que se le tendrá por desistido de la solicitud, disposición que es acorde con la finalidad de la facultad de requerir información, en la medida en que si el contribuyente no atiende en sus términos lo que le fue solicitado por la autoridad, ésta no tendrá los elementos indispensables para resolver de fondo su petición.—En cambio, la posibilidad de efectuar un nuevo requerimiento, en términos del propio precepto, constituye una facultad reglada, es decir, está sujeta para su ejercicio a dos condiciones: una objetiva y otra subjetiva, a saber: 1) Que el contribuyente satisfaga el primer requerimiento que le fue formulado; y, 2) Que del contenido de los documentos exhibidos con motivo de tal requerimiento, la autoridad advierta aspectos que ameriten ser clarificados para poder definir lo que proceda sobre la devolución.—Lo anterior, en mi opinión, es evidencia de que la razón que justifica efectuar un segundo requerimiento al contribuyente no es otorgarle una oportunidad ante la deficiente satisfacción del primero, pues precisamente la condición para formular uno nuevo es haber cumplido el primero en los términos en que fue decretado, sino que, ante los elementos novedosos, sea indispensable disipar alguna duda que su contenido genere y se vincule con la devolución, de tal modo que el pronunciamiento que emita la autoridad hacendaria en cuanto a la existencia del saldo cuya devolución se pretende esté respaldado en la mayor información disponible.—De ahí que no comparta la decisión de mayoría, pues la parte quejosa no satisfizo el primer requerimiento que le fue formulado, en tanto que no sólo dejó de presentar la totalidad de los pedimentos de importación que le fueron solicitados, sino que ni siquiera exhibió los restantes elementos contables materia del requerimiento.—De esta manera, al no haber satisfecho los extremos precisados por la autoridad hacendaria, no resulta jurídicamente factible que, con base en la facultad de formular un segundo requerimiento, se dé oportunidad a la contribuyente de subsanar la deficiente atención del primero.—Por ello, considero que los argumentos planteados debieron ser calificados como infundados y, en consecuencia, negarse la protección de la Justicia Federal.

SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN. LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA REQUERIR AL CONTRIBUYENTE QUE EXHIBA DOCUMENTOS O APORTE INFORMACIÓN ADICIONAL A LA ORIGINALMENTE PRESENTADA, DEBE EJERCERSE BAJO UN CRITERIO DE NECESIDAD Y UN ESTÁNDAR DE RACIONALIDAD.

De conformidad con el artículo 22 del Código Fiscal de la Federación, las autoridades están obligadas a devolver las cantidades pagadas indebidamente y las que procedan de conformidad con las leyes tributarias, para lo cual están facultadas, a efecto de verificar la existencia de los saldos, para requerir al contribuyente, en un plazo no mayor de veinte días posteriores a la solicitud de devolución, los datos, informes o documentos adicionales que consideren necesarios y que estén relacionados con la materia de la petición, bajo apercibimiento que, de no subsanar la prevención en el término indicado, se tendrá por desistido al interesado. Asimismo, dispone que la autoridad puede efectuar un nuevo requerimiento, con las mismas consecuencias, dentro de los diez días siguientes al desahogo del primero, cuando se refiera a datos, informes o documentos que hayan sido aportados por el contribuyente al atender dicho requerimiento. La circunstancia de que el legislador haya autorizado a la autoridad actuante para realizar hasta dos requerimientos tiene una doble finalidad, por un lado, garantizar la efectividad del derecho que asiste a los contribuyentes para obtener una devolución fiscal y, por otro, dotar de una herramienta a la autoridad para que, ante alguna duda en cuanto al origen del saldo cuya devolución se pretende, obtenga del interesado la información pertinente para disiparla. Es decir, el hecho de que la autoridad pueda emitir requerimientos en casos en los que necesite mayores elementos para resolver acerca de la procedencia de la devolución o para establecer su monto, debe entenderse como una medida tendente a regular o limitar los supuestos en los cuales, de manera excepcional, puede dar respuesta a la solicitud de devolución fuera del plazo establecido. De modo que dicha facultad no puede emplearse como una limitante al ejercicio del derecho del particular, sino que su uso debe modularse en atención a un criterio de necesidad y bajo un estándar de racionalidad, pues precisamente lo que el legislador pretendió acotar, al establecer directrices para la operatividad de esa potestad hasta dos veces, es que la autoridad no se eluda del pronunciamiento sobre la devolución que pretende el particular con base en requerimientos de documentos o información irrelevante, así como que no actúe con arbitrariedad. En otras palabras, la pertinencia de efectuar requerimientos debe examinarse atendiendo a las características del caso, pero sin dejar de observar el criterio de que los datos o información sean estrictamente necesarios, pues el particular, a priori,

no está en condiciones de conocer los parámetros que habrán de aplicarse en el análisis de la solicitud de devolución.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.1o.A.119 A (10a.)

Amparo directo 304/2015. Cargill de México, S.A. de C.V. 9 de julio de 2015. Mayoría de votos. Disidente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Paúl Francisco González de la Torre.

Amparo directo 427/2015. 27 de agosto de 2015. Mayoría de votos. Disidente: Julio Humberto Hernández Fonseca. Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Secretario: Uriel Augusto Isidoro Torres Peralta.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. SUPUESTO EN EL QUE NO EXISTE VIOLACIÓN A DICHA MEDIDA CAUTELAR, NI EXCESO O DEFECTO EN SU CUMPLIMIENTO, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS QUE INVOLUCRAN A MENORES DE EDAD.

Quando en el juicio de amparo se concede la suspensión de plano para que el Ministerio Público responsable coloque a las menores de edad (hijas del quejoso) en un lugar adecuado para salvaguardar su integridad, dándole la posibilidad de que sean entregadas al padre o madre que ejerza legalmente la patria potestad sobre aquéllas, siempre y cuando no se ponga en peligro su integridad física o psicológica, y en cumplimiento de ello, dicha autoridad las entrega bajo el cuidado de la madre, no puede alegarse violación a dicha medida cautelar y menos exceso o defecto en su cumplimiento, si para determinar la entrega, dicha autoridad ponderó la voluntad de las menores de quedar al cuidado de su progenitora, pues con ello observó el artículo 12 de la Convención sobre los Derechos del Niño, que dispone que los menores de edad tienen derecho a expresar libremente su opinión en todos los asuntos que los afectan directamente; de ahí que su participación en un procedimiento, sea cual sea su naturaleza, no puede estar predeterminada por una regla fija en razón de su edad, ni aun cuando esté prevista en la ley; máxime que, en el caso, existía el antecedente de que la guarda y custodia provisional fueron otorgadas a favor de su progenitora, es decir, que el quejoso no las tenía, y si bien es cierto que éste refirió que inició el incidente de cambio de guarda y custodia, no menos lo es que, al otorgarse la suspensión referida, no había sido resuelta la aludida incidencia; en tales circunstancias, es manifiesto que si la autoridad responsable no advirtió motivo alguno que pusiera en peligro la integridad física o psicológica de las menores, y las entregó en custodia a su madre, con ello salvaguardó el interés superior del menor.

QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.5o.P.9 K (10a.)

Queja 87/2015. 1 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Horacio Armando Hernández Orozco. Secretaria: Sandra Gabriela Mora Huerta.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REDUCE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. SI PROCEDE OTORGARLA CON GARANTÍA, ÉSTA DEBE FIJARSE DISCRECIONALMENTE SI NO EXISTEN DATOS QUE PERMITAN ESTABLECER SU MONTO, SIN PERJUICIO DE CONSIDERAR EL TIEMPO PROBABLE DE RESOLUCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL Y LA CANTIDAD QUE SE OBTENGA DE RESTAR AL MONTO DE LA PROVISIONAL CON LA CANTIDAD QUE FIJÓ AL RESOLVER LA RECLAMACIÓN Y EL RESULTADO DEBERÁ MULTIPLICARSE POR EL LAPSO EN QUE DURE.

De conformidad con la jurisprudencia 1a./J. 53/2005, de la Primera Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXII, julio de 2005, página 354, de rubro: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA DE LA REDUCCIÓN DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. EL JUEZ DEBE VALORAR EN CADA CASO SI PROCEDE OTORGAR LA GARANTÍA CORRESPONDIENTE, A FIN DE SALVAGUARDAR LA SUBSISTENCIA TANTO DEL ACREEDOR COMO DEL DEUDOR ALIMENTARIO.", cuando en el juicio de amparo el acto reclamado consiste en la resolución en la que se determinó reducir la pensión alimentaria provisional, al ser un derecho fundamental reconocido y tutelado en la ley a favor de aquellas personas a quienes la propia legislación les otorga el carácter de acreedores alimentarios, debe valorarse cada caso en particular para determinar si procede el otorgamiento de alguna garantía, por lo que el juzgador debe verificar que con su resolución no se ponga en riesgo la subsistencia del acreedor, de acuerdo a sus necesidades; ni tampoco la del deudor alimentario, según sus posibilidades reales. En ese contexto, tratándose de asuntos en los que contra la resolución que reduce una pensión alimenticia provisional sea dable otorgar la medida suspensiva definitiva, con garantía, y de las constancias integrantes del incidente de suspensión no se adviertan datos objetivos que permitan patentizar a cuánto debe ascender su monto, debe fijarse discrecionalmente, en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo; sin perjuicio de considerar como parámetros para establecerla, el tiempo probable de resolución del juicio constitucional, y la cantidad que se obtenga de restar al monto que como pensión alimenticia provisional otorgó el juzgador en el auto de inicio, con la cantidad que fijó al resolver la reclamación, y el resultado deberá multiplicarse por el lapso en que dure.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.
VII.1o.C.26 C (10a.)

Incidente de suspensión (revisión) 206/2015. 25 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Clemente Gerardo Ochoa Cantú. Secretario: Irving Iván Verdeja Higareda.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA TRAMITAR LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PROCEDER EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 154 DE LA LEY DE AMPARO. El

artículo 154 de la Ley de Amparo establece la posibilidad de revocar o modificar la resolución que conceda o niegue la medida suspensiva definitiva cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, en tanto no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, conforme al trámite correspondiente a un incidente de suspensión, al disponer que debe "tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión", lo cual implica que se realiza mediante una incidencia que debe seguir las reglas previstas en los artículos 125 a 147 de la invocada ley; por lo que debe abrirse una dilación procesal a través de la cual se dé vista a las partes a efecto de ofrecer las pruebas que a su interés convenga y, que por su naturaleza, se trata de una audiencia y resolución, lo cual incumbe al a quo, quien debe proveer lo conducente para constatar la actualización del hecho superveniente y, una vez agotado el procedimiento, resolver lo que en derecho proceda respecto a si modifica o revoca los términos en que concedió la suspensión provisional. En este tenor, cuando en un incidente de suspensión derivado de un amparo indirecto, el Juez de Distrito fija una postura en cuanto a la suspensión definitiva y una de las partes solicita su modificación o revocación por alguna causa posterior a esa determinación, es ilegal que se niegue a tramitar esa petición bajo el argumento de que procede el recurso de queja establecido en el artículo 97, fracción I, inciso c), de la ley mencionada, pues ésta no es la vía para revocar o modificar la determinación adoptada en la resolución de suspensión definitiva. Lo anterior, porque en esos casos la decisión no se constriñe a negar lisa y llanamente la modificación o revocación solicitada, sino a sustanciar el trámite correspondiente, a efecto de que una vez agotado se resuelva si se concede o niega la petición.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
I.13o.T.19 K (10a.)

Queja 67/2015. Carlos Javier Suárez Pineda. 8 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor Landa Razo. Secretario: Eudón Ortiz Bolaños.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SUSPENSIÓN DEFINITIVA. SI LA QUEJA PROMOVIDA CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ DE DISTRITO DE SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN RELATIVO SE DECLARA FUNDADA, DEBE REMITIRSE EL EXPEDIENTE PARA QUE REASUMA SU JURISDICCIÓN.

Conforme al artículo 103 de la Ley de Amparo, la regla general para el supuesto de que se declare fundado un recurso de queja, es la de hacer el pronunciamiento que proceda, asumiendo la jurisdicción del Juez de Distrito; sin embargo, existen excepciones a esta regla. En ese contexto, cuando mediante dicho recurso se impugna la determinación en la que el a quo se negó a tramitar la petición de modificar o revocar los términos en que se negó o concedió la suspensión definitiva derivado de un hecho posterior o superveniente, la posibilidad de hacerlo se encuentra prevista en el artículo 154 de la ley de la materia, por lo que se actualiza un caso de excepción al mencionado numeral 103 y, por ende, compete al Juez de Distrito tramitarlo, pues el Tribunal Colegiado de Circuito no puede asumir jurisdicción y proveer sobre el particular, ya que la litis recursiva sometida a su conocimiento se limita a pronunciarse si fue correcta o no la negativa a gestionar la petición, la cual, de ser revocada, provocará que se lleve a cabo el trámite correspondiente para analizar si existe o no un hecho superveniente y, en su momento, resolver si procede o no la modificación o revocación de la suspensión definitiva.

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMERO CIRCUITO.

I.13o.T.20 K (10a.)

Queja 67/2015. Carlos Javier Suárez Pineda. 8 de octubre de 2015. Unanimidad de votos.
Ponente: Héctor Landa Razo. Secretario: Eudón Ortiz Bolaños.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PRESTEN ASISTENCIA HUMANA PERMANENTE PARA DESPLAZARSE A QUIEN ENFRENTA UNA DISCAPACIDAD FÍSICA, SI SE ADVIERTE QUE PUEDE HACERLO CON CIERTA INDEPENDENCIA.

A la luz del modelo de entendimiento social de la discapacidad actualmente adoptado, ésta es considerada como una desventaja causada por las barreras que la organización social genera, al no atenderse adecuadamente las necesidades de las personas con diversidades funcionales, lo que provoca que se encuentren impedidas para ejercer plenamente sus derechos humanos en condiciones de igualdad, por lo que las medidas que se adopten para superar esa desven-

taja y lograr su inclusión social, deben dirigirse a aminorar las barreras que la ocasionan, pero con respeto de la dignidad de quien las enfrenta, de su libertad personal y del propósito de vida independiente que le es consustancial. En ese entendido, si se advierte que la persona que propugna por que se realicen los ajustes razonables que faciliten el ejercicio de sus derechos, dada su discapacidad física, puede desplazarse con cierta independencia, por ejemplo, con el apoyo de un andador, es improcedente conceder la suspensión en el amparo para que las autoridades responsables le presten asistencia humana permanente para esa finalidad, en lugar de propugnar por un entorno libre de obstáculos físicos y peligros que facilite ese desplazamiento en circunstancias lo más autónomas posibles, pues promover ese auxilio va contra la inclusión con respeto al propósito de vida independiente y acentúa la discapacidad, además de que si ese acompañamiento es excesivo o innecesario, puede constituir, en sí mismo, una barrera social y atentar contra la dignidad humana.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.2o.A.86 K (10a.)

Queja 209/2015. Bertha Alicia San Miguel del Ángel. 3 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: José Carlos Rodríguez Navarro. Secretario: Eucario Adame Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SUSPENSIÓN EN EL CARGO DE UNA AUTORIDAD (MUNÍCIPE DE UN AYUNTAMIENTO) POR INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO. CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO INICIAR EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.

Para imponer la sanción consistente en la suspensión en el cargo de munícipe, en términos del artículo 143 de la Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, para el caso de incumplimiento de un laudo, se estableció un procedimiento especial que no prevé la referida ley, y cuya aplicación no corresponde al Tribunal de Arbitraje y Escalafón de esa entidad, sino al Congreso del Estado, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, conforme a los artículos 224 a 232 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Jalisco, en los que se prevé dicho procedimiento especial para la suspensión o revocación del mandato de los miembros de un Ayuntamiento, con lo cual se colma el derecho de audiencia, previo a la emisión de la resolución respectiva, sin que esté a discusión por el Congreso del Estado la procedencia o no de la suspensión del servidor público, toda vez que se haría nugatorio lo pre-

visto en la ley burocrática, en el apartado relativo al cumplimiento de los laudos dictados por el tribunal laboral. Por consiguiente, el Congreso no puede analizar la decisión del tribunal laboral para verificar si la conducta de la autoridad es grave o no; esto es así, porque la decisión de suspender a la autoridad en cuestión ya fue tomada por el aludido tribunal, el cual tiene facultades para ello; por tanto, el Congreso únicamente tiene que acatar la orden de suspensión, es decir, debe llevar el trámite correspondiente para ejecutar la suspensión en el cargo por un plazo de 15 días sin goce de sueldo al funcionario en cuestión, sin que pueda deliberar sobre la causa de la suspensión, toda vez que, como lo prevé el artículo 115, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a través de la existencia de causas graves que las leyes estatales establezcan, el Congreso Local podrá revocar o suspender a alguno de los miembros de los Ayuntamientos y, en el presente caso, la ley burocrática local, en el referido artículo 143, prevé la suspensión del cargo del funcionario por no cumplir con el laudo dentro de los 30 días siguientes a su dictado; por tanto, lo único que el Congreso debe hacer es llevar el procedimiento para cumplir la medida impuesta por el órgano jurisdiccional.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

III.3o.T.37 L (10a.)

Amparo en revisión 246/2014. 20 de febrero de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Rodolfo Castro León. Secretaria: Valeria Marien Lobato Zepeda.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA PENAL. SI EL QUEJOSO ES LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, ES IMPROCEDENTE FIJARLE, DISCRECIONALMENTE, LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 125, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA, PARA QUE AQUÉLLA CONTINÚE SURTIENDO EFECTOS. Del principio de equilibrio procesal entre las partes en materia penal –con vista al reconocimiento constitucional y convencional de la calidad de parte activa de la víctima– se obtiene que cuando se concede la suspensión provisional o definitiva para el efecto de que no se continúe con el procedimiento, al correrse el riesgo de que se deje irreparablemente consumado el acto reclamado, no se producen daños ni perjuicios estimables en dinero al tercero interesado –inculpado–, cuando surge del derecho subjetivo del ofendido a ejercer sus prerrogativas

fundamentales de impugnación, no sólo de la eventual ilegalidad del apartado concreto de reparación del daño, los pronunciamientos judiciales relacionados con los presupuestos de acreditación del delito, la demostración de la plena responsabilidad penal y la individualización de sanciones, sino también aquellos que se refieren al reconocimiento de parte activa dentro del proceso penal; de ahí que si el quejoso es la víctima u ofendido del delito, es improcedente fijarle, discrecionalmente, la garantía prevista en el párrafo segundo del artículo 125 de la abrogada ley de la materia, para que la suspensión provisional que le fue concedida contra la continuación del procedimiento continúe surtiendo efectos, toda vez que el nexo de causa-efecto entre el derecho a solicitar la suspensión y la dilación del procedimiento materia de la medida cautelar, obedece a la consecuencia inmediata y directa de la instrucción del proceso penal en que se debe resguardar el equilibrio entre los derechos del inculpado y la víctima; por lo que, ante la posible transgresión de las prerrogativas fundamentales del ofendido al proveer sobre la suspensión, justifica que no se le impongan mayores requisitos que los que pudiera exigírsele al inculpado –principio de igualdad de defensa–, cuando provoque dilación en el procedimiento penal no cuantificable en dinero. Sobre todo, porque tal armonización de derechos de la víctima u ofendido, como los de los justiciables, tiene un fin relevante en la sociedad, esto es, descubrir la verdad material de los hechos investigados.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
I.3o.P.45 P (10a.)

Amparo en revisión 297/2015. 10 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Humberto Manuel Román Franco. Secretario: Enrique Alejandro Santoyo Castro.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO, POR UNA PARTE LA NIEGUE Y, POR OTRA, LA CONCEDA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PUEDE ANALIZAR, DE OFICIO, EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA SÓLO CONTRA LA NEGATIVA, SI EL OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA AFECTA EL INTERÉS SOCIAL O CONTRAVIENE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.

QUEJA 309/2015. 2 DE DICIEMBRE DE 2015. MAYORÍA DE VOTOS. DISIDENTE Y PONENTE: FILEMÓN HARO SOLÍS. ENCARGADO DEL ENGROSE: TOMÁS GÓMEZ VERÓNICA. SECRETARIO: GUILLERMO GARCÍA TAPIA.

Zapopan, Jalisco, acuerdo del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente al dos de diciembre de dos mil quince.

Vistos, para resolver el recurso de queja 309/2015, interpuesto por ***** , en contra del auto de veintiséis de noviembre de dos mil quince (fojas 30 a 34 del toca), relativo al incidente de suspensión derivado del juicio de amparo indirecto ***** del índice del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco; y,

RESULTANDO:

I. ***** , por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos siguientes:

"III. Autoridad responsable: Con tal carácter se señalan a: 1. H. Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara. Quien tiene su domicilio ubicado en la avenida Hidalgo 400, colonia Centro, en Guadalajara, Jalisco.—2. Presidente Municipal del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara. Quien tiene su domicilio ubicado en la Avenida Hidalgo 400, colonia Centro, en Guadalajara, Jalisco.—3. Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara (por conducto de su titular). Quien tiene su domicilio ubicado en calle Chilardi esquina Miraflores, colonia Mezquitán Country, en Guadalajara, Jalisco.—4. Dirección de Inspección y Vigilancia del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara (por conducto de su titular). Quien tiene su domicilio ubicado en calle Colón, número 324, colonia Centro, en Guadalajara, Jalisco.—5. Secretaría de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara (por conducto de su titular). Periférico Norte, Manuel Gómez Morín 3229, colonia Jardines de la Barranca, Guadalajara, Jalisco.—IV. Actos que de cada autoridad se reclaman: 1. Por parte del presidente municipal y del Ayuntamiento Constitucional, ambos del Municipio de Guadalajara, la ilegal e inconstitucional 'modificación del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, así como el Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Guadalajara'; con tal determinación y su aprobación es evidente que se violentarán garantías individuales de los ciudadanos mexicanos, y que a todas luces es evidente y de forma notoria y recalcada que existe una contraposición con nuestra Carta Magna en sus numerales 1o. y 5o., además de que nada ni nadie puede estar por encima de la Constitución Política mexicana, tal y como lo marca el siguiente criterio jurisprudencial que a la letra dice: 'SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITU-

CIONAL.—A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las Leyes del Congreso de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de «supremacía constitucional» implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución General de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la «Ley Suprema de la Unión», esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales.'.—Con lo que es evidente a todas luces, que las autoridades hoy demandadas violentan incluso tratados internacionales al prohibirme la libertad de comero (sic) ambulante, tal y como lo marca el siguiente criterio jurisprudencial, mismo que a la letra estipula: 'TRATADOS INTERNACIONALES. SU APLICACIÓN CUANDO AMPLÍAN Y REGLAMENTAN DERECHOS FUNDAMENTALES.—Conforme al artículo 133 constitucional, la propia Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Ahora bien, cuando los tratados internacionales reglamentan y amplían los derechos fundamentales tutelados por la Carta Magna, deben aplicarse sobre las leyes federales que no lo hacen, máxime cuando otras leyes también federales, los complementan.'.—Con lo que se da a notar de una manera clara y precisa la violación a mis derechos individuales como ciudadano mexicano, por tal razón, el Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, así como el Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Guadalajara y las disposiciones o determinaciones de las autoridades demandadas, deberán quedar nulos y aplicarse lo más benéfico para el gobernado tal y como lo estipula el principio *pro homine* o *pro persona*, mismo que a la letra dice: 'PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL.—Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional —principio *pro persona* o *pro homine*—, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que

venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales –legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada–, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.’.—2. Por parte del presidente municipal, la orden verbal acatada por la Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos Espacios (sic) ambos del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, siendo ésta el impedir la realización del trámite administrativo para renovar, refrendar y/o revalidar mi permiso para ejercer la actividad mercantil de comercio ambulante, como lo he venido realizando por varios años anteriores; con tal determinación se violenta a todas luces mi derecho adquirido, mismo que he tenido el goce y disfrute por varios años, para el efecto de que yo, ciudadano mexicano, pueda ejercer la actividad mercantil mencionada con antelación; acredito tal prerrogativa con las copias certificadas, mi permiso provisional (uso de suelo), además del último pago con folio ***** , a favor del suscrito, en el domicilio ubicado en la calle ***** a 10 mts. de ***** , siendo el giro la venta de calzado, ropa y accesorios; tal permiso me permite ejercer la actividad mercantil de comercio ambulante, que por varios años anteriores se me ha venido otorgando de manera ininterrumpida por parte de las autoridades responsables, tal beneficio y prerrogativa se han venido explotando por ser una actividad lícita, ajustada a derecho, por no contravenir la moral y las buenas costumbres; aunado a ello, las autoridades no están respetando un derecho adquirido por el suscrito, mismo que he obtenido por el transcurso del tiempo, además del consentimiento tácito y expreso por parte de la autoridad al renovar tales permisos provisionales (uso de suelo) con folio *****.—3. Por parte del presidente municipal y de la Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos Espacios (sic) ambos del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, el no querer recibir mi trámite administrativo para renovar, refrendar y/o revalidar mi permiso para ejercer la actividad mercantil de comercio ambulante, como lo he venido realizando por varios años anteriores; con tal determinación se violenta a todas luces mi derecho adquirido, mismo que he tenido el goce y disfrute por varios años, para el efecto de que yo, ciudadano mexicano, pueda ejercer la actividad mercantil mencionada con antelación; acredito tal prerrogativa con las copias certificadas, mi permiso provisional (uso de suelo), además del último pago con folio ***** , a favor del suscrito en el domicilio ubicado en la calle ***** a 10 mts. de ***** , siendo el giro la venta de calzado, ropa y accesorios; tal permiso me permite ejercer la acti-

vidad mercantil de comercio ambulante, que por varios años anteriores se me ha venido otorgando de manera ininterrumpida por parte de las autoridades responsables, tal beneficio y prerrogativa se han venido explotando por ser una actividad lícita, ajustada a derecho, por no contravenir a la moral y las buenas costumbres; aunado a ello, las autoridades no están respetando un derecho adquirido por el suscrito, mismo que he obtenido por el transcurso del tiempo, además del consentimiento tácito y expreso por parte de la autoridad al renovar tales permisos provisionales (uso de suelo) con folio *****.—4. Por parte del presidente municipal y la Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos Espacios (sic) ambos del Ayuntamiento Constitucional de Guadalajara, y demás autoridades responsables, el no permitirme ejercer la actividad mercantil de comercio ambulante violenta en mi perjuicio un derecho adquirido por el correr de los años; con tal determinación se violenta a todas luces mi derecho adquirido, mismo que he tenido el goce y disfrute por varios años, para el efecto de que yo, ciudadano mexicano, pueda ejercer la actividad mercantil mencionada con antelación; acredito tal prerrogativa con las copias certificadas, mi permiso provisional (uso de suelo), además del último pago con folio *****, a favor del suscrito, en el domicilio ubicado en la calle *****, a 10 mts. de *****, siendo el giro la venta de calzado, ropa y accesorios; tal permiso me permite ejercer la actividad mercantil de comercio ambulante, que por varios años anteriores se me ha venido otorgando de manera ininterrumpida por parte de las autoridades responsables, tal beneficio y prerrogativa se han venido explotando por ser una actividad lícita, ajustada a derecho, por no contravenir a la moral y las buenas costumbres; aunado a ello, las autoridades no están respetando un derecho adquirido por el suscrito, mismo que he obtenido por el transcurso del tiempo, además del consentimiento tácito y expreso por parte de la autoridad al renovar tales permisos provisionales (uso de suelo) con folio *****.—5. Por parte del presidente municipal y la Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos Espacios (sic) del Ayuntamiento de Guadalajara y demás autoridades responsables, tendientes a impedir y obstaculizar el que el suscrito pueda ejercer la actividad mercantil de comercio ambulante, tal determinación repercute en contra del suscrito a un derecho adquirido por el consentimiento de la propia autoridad, con tal determinación violenta a todas luces mi derecho adquirido, mismo que he tenido el goce y disfrute por varios años, para el efecto de que yo, ciudadano mexicano, pueda ejercer la actividad mercantil mencionada con antelación; acredito tal prerrogativa con las copias certificadas, mi permiso provisional (uso de suelo), además del último pago con folio *****, a favor del suscrito en el domicilio ubicado en la calle *****, a 10 mts. de Av. *****, siendo el giro la venta de calzado, ropa y accesorios; tal permiso me permite ejercer la actividad mercantil de comercio ambulante, que por varios años anteriores se me ha

venido otorgando de manera ininterrumpida por parte de las autoridades responsables, tal beneficio y prerrogativa se han venido explotando por ser una actividad lícita, ajustada a derecho, por no contravenir la moral y las buenas costumbres; aunado a ello, las autoridades no están respetando un derecho adquirido por el suscrito, mismo que he obtenido por el transcurso del tiempo, además del consentimiento tácito y expreso por parte de la autoridad al renovar tales permisos provisionales (uso de suelo) con folio *****.—6. Por parte del presidente municipal y de la Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos Espacios (sic) ambos del Ayuntamiento de Guadalajara, y demás autoridades responsables, (sic) tendientes a removerme, reubicarme e, incluso, suspender mis derechos para ejercer la actividad mercantil de comercio ambulante como lo he venido realizando por varios años anteriores; con tal determinación se violenta a todas luces mi derecho adquirido, mismo que he tenido el goce y disfrute por varios años, para el efecto de que yo, ciudadano mexicano, pueda ejercer la actividad mercantil mencionada con antelación; acredito tal prerrogativa con las copias certificadas, mi permiso provisional (uso de suelo), además del último pago con folio *****, a favor del suscrito, en el domicilio ubicado en la calle *****, a 10 mts. de *****, siendo el giro la venta de calzado, ropa y accesorios; tal permiso me permite ejercer la actividad mercantil de comercio ambulante, que por varios años anteriores se me ha venido otorgando de manera ininterrumpida por parte de las autoridades responsables, tal beneficio y prerrogativa se han venido explotando por ser una actividad lícita, ajustada a derecho, por no contravenir la moral y las buenas costumbres; aunado a ello, las autoridades no están respetando un derecho adquirido por el suscrito, mismo que he obtenido por el transcurso del tiempo, además del consentimiento tácito y expreso por parte de la autoridad al renovar tales permisos provisionales (uso de suelo) con folio *****.—7. Por parte del presidente municipal de la Dirección de Tianguis y Comercio en Espacios Abiertos Espacios (sic) del Ayuntamiento de Guadalajara, Secretaría de Seguridad Ciudadana y demás autoridades responsables (sic) tendientes a obstaculizar e impedir la utilización de los espacios públicos que me habían sido designados en mi permiso provisional para ejercer la actividad mercantil de comercio ambulante, con ello ocasionando un perjuicio en contra del suscrito para ejercer la actividad mercantil de comercio ambulante; con tal determinación violenta a todas luces mi derecho adquirido, mismo que he tenido el goce y disfrute por varios años, para el efecto de que yo, ciudadano mexicano, pueda ejercer la actividad mercantil mencionada con antelación; acredito tal prerrogativa con las copias certificadas, mi permiso provisional (uso de suelo), además del último pago con folio *****, a favor del suscrito, en el domicilio ubicado en la calle *****, a 10 mts. de *****, siendo el giro la venta de calzado, ropa y accesorios; tal permiso me permite ejercer la actividad mercantil de

comercio ambulante, que por varios años anteriores se me ha venido otorgando de manera ininterrumpida por parte de las autoridades responsables; tal beneficio y prerrogativa se han venido explotando por ser una actividad lícita, ajustada a derecho, por no contravenir la moral y las buenas costumbres; aunado a ello, las autoridades no están respetando un derecho adquirido por el suscrito, mismo que he obtenido por el transcurso del tiempo, además del consentimiento tácito y expreso por parte de la autoridad al renovar tales permisos provisionales (uso de suelo) con folio *****." (fojas 15 y 16 del toca)

Asimismo, el impetrante de amparo pidió la suspensión de los actos, para el efecto de permitirle la continuación en sus labores de comercio ambulante, evitar actos tendentes a impedirlo, no afectar su derecho a trabajar ni ser removido y dejar sin efectos los reglamentos en litis. (fojas 24 reverso y 25 del toca)

II. El Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, en auto de veintiséis de noviembre de dos mil quince (fojas 30 a 34 del toca), determinó, por una parte, negar la suspensión provisional en relación a dejar sin efectos el Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, así como el diverso Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Guadalajara, por no acatarse el numeral 128, fracción II, de la Ley de Amparo, dado el interés de la sociedad en que se cumplan las leyes y reglamentos; por eso, de otorgar la medida se seguiría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público.

Por otro lado, se otorgó la suspensión provisional para el efecto de no impedir u obstaculizar, remover o reubicar el puesto semifijo del quejoso donde realiza su actividad comercial, en los términos de la licencia otorgada y en tanto esté vigente, por vencer el treinta de noviembre de dos mil quince, lo cual prevalecería mientras se resolviese en definitiva la medida de mérito.

III. Inconforme con lo conducente del auto aludido, donde se negó la suspensión provisional, el quejoso interpuso recurso de queja ante el juzgador referido. (foja 3 del toca)

Así, el resolutor, mediante oficio (foja 2 del toca), remitió en vía de informe justificado el escrito del recurso de queja, así como las constancias pertinentes para su resolución, el cual se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el uno de diciembre de dos mil quince.

IV. Por razón de turno correspondió conocer del recurso a este órgano jurisdiccional, el cual se recepcionó el uno de diciembre de dos mil quince (foja 2 reverso del toca), por lo cual se procede a dictar resolución de plano.

CONSIDERANDO:

PRIMERO.—Este Tribunal Colegiado es legalmente competente para conocer del presente recurso de queja, conforme a lo dispuesto por los artículos 97, fracción I, inciso b), 98, fracción I, 99 y 101 de la nueva Ley de Amparo; 37, fracción III, 38, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y los numerales 37, fracción V, 38 y quinto transitorio de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que se interpuso en contra de un proveído dictado por un Juez de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo, en el que negó y otorgó la suspensión provisional.

SEGUNDO.—El auto recurrido se notificó a la recurrente el veintisiete de noviembre de dos mil quince (foja 34 reverso del toca), el cual surtió sus efectos el treinta siguiente, de conformidad con los artículos 22 y 31, fracción II, de la Ley de Amparo; así, el término de dos días previsto en el numeral 98, fracción I, de dicha legislación, transcurrió del uno al dos de diciembre de dos mil quince; por ende, si el recurso se presentó el uno de diciembre de dos mil quince, ante la Oficialía de Partes Común del Juzgado Primero de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo (foja 3 del toca), entonces, su presentación fue oportuna.

TERCERO.—El acuerdo impugnado es del tenor literal siguiente:

"Zapopan, Jalisco, veintiséis de noviembre de dos mil quince.—Vistas las copias simples de la demanda de amparo y anexos, como está ordenado en auto de esta fecha, emitido en el juicio de amparo *****, del que derivan los presentes cuadernos incidentales, trámitese por duplicado y en cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo promovido por *****.—Con fundamento en los artículos 125, 128, 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberán rendir por duplicado dentro del término de cuarenta y ocho horas. Para tal efecto, se les envía copia simple de la demanda de garantías.—Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión provisional de los actos reclamados, para el efecto de que se le permita ejercer la actividad de comercio ambulante que refiere tener como es la venta de calzado, ropa y accesorios, y no se realice acto tendiente a impedir u obs-

taculizar la utilización del espacio asignado en administraciones anteriores, además para no ser removido o reubicado, ya que cuenta con la autorización vigente de la autoridad municipal correspondiente; asimismo, se deje sin efectos el Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, así como el Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Guadalajara. En ese contexto, toda vez que la suspensión se solicita para los efectos precisados en el párrafo que antecede, este juzgador federal se pronunciará únicamente respecto de ellos.—Tiene apoyo lo anterior, por analogía, en la jurisprudencia 2a./J. 111/2003, aplicada por las razones que la informan, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XVIII, diciembre de 2003, visible en la página 98 del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, la cual señala lo siguiente: 'SUSPENSIÓN DEFINITIVA. CUANDO EL QUEJOSO ÚNICAMENTE SOLICITE LA MEDIDA CAUTELAR SOBRE LAS CONSECUENCIAS DE LOS ACTOS RECLAMADOS, EL JUEZ DE DISTRITO SOLAMENTE DEBE CONCEDER O NEGAR DICHA MEDIDA RESPECTO DE AQUÉLLAS.—De la interpretación armónica de la fracción I del artículo 124, en relación con el artículo 131, ambos de la Ley de Amparo, se advierte que para que el Juez de Distrito pueda pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión definitiva del acto reclamado, es requisito que el agraviado la haya solicitado expresamente. Ahora bien, cuando el quejoso solamente solicita la suspensión respecto de las consecuencias del acto reclamado, el Juez Federal debe resolver si concede o niega la suspensión definitiva, única y exclusivamente respecto de ellas, y cerciorarse previamente de la existencia de los actos reclamados a los que se les atribuyen, a fin de que el pronunciamiento que realice sobre la medida cautelar se sustente sobre actos ciertos.'—Al respecto, por lo que ve a dejar sin efectos el Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, así como el Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Guadalajara, no ha lugar a otorgar la suspensión provisional solicitada por el quejoso, ello en virtud de que no se cumple con lo dispuesto en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, que dice: 'Artículo 128. (se transcribe).'—La disposición legal transcrita limita el otorgamiento de la suspensión en aquellos casos en que se transgredan las normas de orden público o se lesione el interés social. En principio, cabe señalar que el interés social son las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con el otorgamiento de la suspensión se causen perjuicios mayores de los que se pretenden evitar, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto descansa en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad.—Esto es así, puesto que todo procedimiento es de orden público, y al otorgar la medida

cautelar para el efecto solicitado se contravendrían disposiciones de orden público, en razón de que la sociedad y el Estado están interesados en que los procedimientos se sigan conforme a lo establecido en las disposiciones legales aplicables, pues de lo contrario se estarían entorpeciendo las funciones de la autoridad responsable; de ahí que no procede conceder la suspensión provisional solicitada, en atención a las siguientes razones: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Segunda Sala, en su conformación anterior, al definir el 'orden público' y el 'interés social', estableció que, en principio, esa función de hacerlos respetar corresponde al legislador al dictar una ley, pero que la misma no es ajena a la función del juzgador, ya que éste deberá apreciar la existencia de ese orden público e interés social, y su salvaguarda, en los casos concretos que se sometan a su consideración; sin embargo, el examen de la ejemplificación que se contiene en el artículo 129 de la Ley de Amparo, para indicar cuándo, entre otros casos, se sigue ese perjuicio o se realizan esas contravenciones, así como de los que a su vez señala la Suprema Corte de Justicia de la Nación en su jurisprudencia, revela que, en términos generales, se producen esas situaciones cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría.—Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia I.3o.A. J/16, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, página 383 del Tomo V, enero de 1997, que a la letra dice: 'SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA.—De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en

elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad.'.—Bajo lo expuesto, debe decirse que, en la especie, no se encuentran reunidos los extremos que señala el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, que establece como requisitos para decretar el beneficio suspensivo, entre otros, los siguientes: que no se cause perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. En efecto, el promovente solicita la suspensión del acto reclamado para dejar sin efecto el Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, así como el Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Guadalajara; sin embargo, se estima que no satisfizo dicho requerimiento, en razón de que la sociedad está interesada en el cumplimiento de las leyes o reglamentos, por lo que debe prevalecer el interés general sobre el particular, al tratarse de un beneficio para la colectividad.—Por otra parte, y tomando en consideración que la suspensión es una providencia de carácter cautelar, cuyo objetivo es el de paralizar el acto emanado de alguna autoridad, con la finalidad precisamente de conservar la materia del juicio de garantías y, en su caso, evitar que a la quejosa se le cause perjuicio alguno que sea de difícil reparación. Su contenido asegura el cumplimiento y la ejecución de la providencia principal que pudiere ordenar la anulación de la conducta, positiva o negativa, reprochada a la autoridad pública, haciendo cesar temporalmente sus efectos obligatorios mientras se resuelve la litis constitucional.—En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 125, 128 y 139 de la Ley de Amparo, y toda vez que se satisfacen los requisitos que establece el segundo de los preceptos legales invocados, esto es, que la solicitó el quejoso, tan es así que ello motiva la sustanciación de este incidente; con lo solicitado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, que tienen que ver con los mayores beneficios que aseguren el desarrollo armónico de la comunidad, ya que se solicita que no se desaloje o desposea, por parte de las autoridades responsables, del puesto semifijo en donde realiza la actividad comercial de venta de calzado, ropa y accesorios, que se encuentra ubicado en la calle ******, en Guadalajara, Jalisco, lo que implica que la colectividad no se verá disminuida en los satisfactores mínimos que aseguran su convivencia social. Y en caso de ejecutarse dicho acto reprochado, serían de difícil reparación los daños y perjuicios que se le ocasionarían al impetrante de amparo, porque de consumarse el desalojo y desposesión del puesto semifijo en comento, aunque llegare a obtener un fallo a su favor, sería fácticamente imposible restituir las cosas al estado en que se encontraban cuando se solicitó el amparo, ello ponderando la apariencia del buen derecho.—Además, a efecto de acreditar su interés suspensivo, la parte quejosa, al presentar su demanda de garantías, anexó las documentales consistentes en copia certificada del permiso provisional con número de folio ******, expedido el diez de septiembre de dos mil

quince, correspondiente al periodo del veintidós de julio al treinta de noviembre de dos mil quince, a nombre de ******, del cual se advierte el pago realizado por los derechos del citado permiso provisional, el cual fue el treinta y uno de agosto de dos mil quince, por lo que a la fecha en que hoy se tramita el presente incidente se encuentra vigente el término establecido en el permiso provisional citado. En ese tenor, con fundamento en los artículos 125, 128 y 139 de la Ley de Amparo, se concede al quejoso ***** la suspensión provisional que solicita, para el efecto de que no se le impida u obstaculice, remueva o reubique del puesto semifijo respecto a la actividad comercial de venta de calzado, ropa y accesorios que se encuentra ubicado en la calle ******, en Guadalajara, Jalisco, en los términos que le fue otorgada la licencia municipal correspondiente, esto es, hasta su fecha de vencimiento de treinta de noviembre de dos mil quince; situación que prevalecerá hasta en tanto se resuelva en definitiva la presente incidencia.—Resulta aplicable la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, que dice lo siguiente: 'SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN CONTRA DE UNA CLAUSURA TEMPORAL. PARA SU CONCESIÓN DEBE VERIFICARSE EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO Y DEMOSTRARSE LOS PRESUPUESTOS JURÍDICOS Y FÁCTICOS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA.—Tratándose de una clausura temporal y su ejecución, dada la trascendencia y consecuencias que conlleva en vinculación con el bien jurídico tutelado precautoriamente, es dable que para el ejercicio de un correcto arbitrio en materia de suspensión, después de verificarse el debido cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 124 de la Ley de Amparo, observar los presupuestos contenidos en la jurisprudencia P/J. 15/96, emitida por el Pleno del Máximo Tribunal de la Nación, que se titula: «SUSPENSIÓN. PARA RESOLVER SOBRE ELLA ES FACTIBLE, SIN DEJAR DE OBSERVAR LOS REQUISITOS CONTENIDOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO, HACER UNA APRECIACIÓN DE CARÁCTER PROVISIONAL DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO.», como son, la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora. Ello si se toma en cuenta, como principio de prueba, además de las manifestaciones hechas por el quejoso bajo protesta de decir verdad y los conceptos de violación, una apreciación preventiva de tales argumentaciones jurídicas con vista en la documental exhibida, en la que consta la orden y ejecución de la clausura temporal, pero se omite destacar los datos que revelen la instauración de procedimiento administrativo alguno que precediera al dictado de la propia resolución y a las supuestas visitas de inspección que, según aquélla, constituyen el motivo del acto de autoridad, y que presupuestarían el otorgamiento de la garantía de audiencia. Así, resulta necesario el asomo anticipado a la constitucionalidad del acto, sólo para efectos de la suspensión, puesto que

de permitirse la consecución de la clausura, podría dejarse sin materia la litis constitucional y permitirse la actuación arbitraria de las autoridades fuera de procedimiento legal, aspecto en el que, evidentemente, está interesada la sociedad a fin de preservar el estado de derecho en el país.'.—Es preciso enfatizar que la presente medida cautelar que se otorga no tiene efectos restitutorios, motivo por el cual, en caso de que los actos reclamados obedezcan a antecedentes diversos a los narrados en la demanda de garantías, o si provienen de autoridades distintas a las señaladas como responsables, la consecuencia será que la suspensión otorgada no surtirá sus efectos legales.—En ese sentido, se hace del conocimiento tanto de la parte quejosa como de las autoridades responsables, que la presente medida cautelar surtirá sus efectos siempre y cuando el quejoso respete los lineamientos y condiciones en que el (sic) permiso provisional otorgado a favor del incidentista, respecto de los cuales fueron otorgados, de no ser así, la presente suspensión provisional no surtirá efectos, quedando, en consecuencia, expedita la facultad de las autoridades competentes a fin de que procedan a llevar a cabo la aplicación de las medidas pertinentes, para hacer cumplir los ordenamientos que regulan su actividad.—En el entendido de que la medida cautelar de mérito no le concede a la parte quejosa un derecho para emplear el permiso provisional con fines distintos a su naturaleza, ni infringir las disposiciones federales, estatales o municipales que regulan la autorización para explotar la actividad que le fue autorizada, como serían los reglamentos que para tal efecto se encuentra legalmente obligada a cumplir, menos surtirá efectos en caso de violación a alguna norma o que transgreda algún ordenamiento federal, estatal o municipal, o bien, que se encuentre en peligro la integridad de alguna persona, en cuyo caso la suspensión concedida no surtirá efecto legal alguno y las autoridades están en aptitud legal de cumplir con lo ordenado por la ley que se encuentre violentada.—Cabe denotar que cuenta con permiso para desarrollar la actividad comercial citada, sólo hasta el treinta de noviembre de dos mil quince, lo cual tampoco impide ni limita a las autoridades competentes para que éstas realicen sus funciones de verificación correspondiente e impongan las sanciones que en su caso se originen con motivo de la violación a los ordenamientos relativos.—Sin que sea el caso de fijar garantía, ya que con los datos proporcionados por el solicitante de la medida cautelar en su demanda de amparo, no se desprende que se pueda causar perjuicio a persona alguna con su otorgamiento.—Con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo vigente, notifíquese al agente del Ministerio Público de la Federación el trámite del presente asunto, por medio de oficio.—Se señalan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del tres de diciembre de dos mil quince, para que tenga verificativo la audiencia incidental.—Asimismo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas, dada su propia

naturaleza, las documentales que exhibe la parte quejosa, así como la instrumental de actuaciones y presuncional legal y humana, las que se tomarán en consideración en el momento procesal oportuno.—En otro contexto, se le tiene señalando como domicilio procesal el que indica en el proemio de su demanda, y se tienen como autorizados de su parte a las personas que señala, quienes estarán con las limitaciones a que alude el segundo párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que no cuentan con registro de su cédula profesional ante el sistema computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, vigente a partir del uno de septiembre de dos mil cinco y, por tanto, no acreditan estar facultados para ejercer la profesión de abogado o licenciado en derecho. Empero, dígaselos que en este órgano jurisdiccional está a su disposición el formato de registro para tal efecto.—Para evitar dilaciones innecesarias respecto de la imposibilidad que pudiese tener el actuario judicial de adscripción al llevar a cabo las notificaciones personales que se ordenen en el presente procedimiento, con fundamento en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se le habilitan días y/u horas inhábiles para que realice las mismas, sin necesidad de acuerdo respectivo.—Notifíquese." (fojas 30 a 34 del toca)

CUARTO.—La parte recurrente, en contra de dicho acuerdo, formula los agravios siguientes:

"1. Si esta autoridad permite que las responsables apliquen el Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, así como el Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Guadalajara, tales reglamentos, bajo protesta de decir verdad, entrarán en vigor el 1 de diciembre de 2015, además de que las responsables iniciaron a (sic) privarnos de nuestros derechos constitucionales para ejercer la actividad mercantil de comercio ambulante, tal como lo manifiesta el numeral 5o. de nuestra Constitución en cuanto a que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, el ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial y las autoridades responsables violentan en todos los extremos este numeral mencionado, además de lo manifestado en el numeral 1o. de nuestra Carta Magna, con tal determinación, así que la aprobación y aplicación del Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, así como el Reglamento de Imagen Urbana ambos (sic) del Municipio de Guadalajara, vulneran mis garantías individuales para ejercer la actividad mercantil de comercio ambulante, además de que las autoridades responsables han impedido y obstaculizado el refrendar y/o renovar mi

permiso provisional y se violan con la aplicación del reglamento y las determinaciones de las autoridades responsables mis garantías individuales consagradas en nuestra Carta Magna en sus numerales 1o. y 5o., mismos que a la letra dicen: 'Artículo 1o. constitucional (se transcribe).'.—'Artículo 5o. constitucional (se transcribe).'.—Por tal razón, las autoridades responsables violentan mis garantías individuales con la determinación de coartar mis derechos constitucionales para ejercer la actividad mercantil de comercio ambulante, tal como lo manifiesta el numeral 5o. de nuestra Constitución en cuanto a que a ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos, y que el ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial; y las autoridades responsables violentan en todos los extremos este numeral (sic) mencionado con antelación y, por ello, nada ni nadie puede estar por encima de la Constitución Política Mexicana, tal y como lo marca el siguiente criterio jurisprudencial, que a la letra dice: 'SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.—A partir de la interpretación del precepto citado, si aceptamos que las Leyes del Congreso de la Unión a las que aquél se refiere corresponden, no a las leyes federales sino a aquellas que inciden en todos los órdenes jurídicos parciales que integran al Estado Mexicano y cuya emisión deriva de cláusulas constitucionales que constriñen al legislador para dictarlas, el principio de «supremacía constitucional» implícito en el texto del artículo en cita claramente se traduce en que la Constitución General de la República, las leyes generales del Congreso de la Unión y los tratados internacionales que estén de acuerdo con ella, constituyen la «Ley Suprema de la Unión», esto es, conforman un orden jurídico superior, de carácter nacional, en el cual la Constitución se ubica en la cúspide y, por debajo de ella los tratados internacionales y las leyes generales.'.—Por tal razón, las autoridades, con su forma de conducirse y de actuar, violentan todas y cada una de las garantías consagradas en nuestra Carta Magna en sus numerales 1o., 5o., 14, 16, 17 y 133, con lo que es evidente a todas luces que las autoridades hoy demandadas violentan incluso tratados internacionales, al prohibirme la libertad de comero (sic) ambulante, tal y como lo marca el siguiente criterio jurisprudencial, mismo que a la letra estipula: 'TRATADOS INTERNACIONALES. SU APLICACIÓN CUANDO AMPLÍAN Y REGLAMENTAN DERECHOS FUNDAMENTALES.—Conforme al artículo 133 constitucional, la propia Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la ley suprema de toda la Unión. Ahora bien, cuando los tratados internacionales reglamentan y amplían los derechos fundamentales tutelados por la Carta Magna, deben aplicarse sobre las leyes federales que no lo hacen, máxime cuando otras leyes también federales, los

complementan.'.—Con lo que se da a notar de una manera clara y precisa la violación a mis derechos individuales como ciudadano mexicano, por tal razón, el Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, así como el Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Guadalajara y, las disposiciones o determinaciones de las autoridades demandadas deberán quedar nulos y aplicarse lo más benéfico para el gobernado, tal y como lo estipula el principio *pro homine* o pro persona, mismo que a la letra dice: 'PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL.—Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, implicó el cambio en el sistema jurídico mexicano en relación con los tratados de derechos humanos, así como con la interpretación más favorable a la persona al orden constitucional —principio pro persona o *pro homine*—, ello no implica que los órganos jurisdiccionales nacionales dejen de ejercer sus atribuciones y facultades de impartir justicia en la forma en que venían desempeñándolas antes de la citada reforma, sino que dicho cambio sólo conlleva a que si en los instrumentos internacionales existe una protección más benéfica para la persona respecto de la institución jurídica analizada, ésta se aplique, sin que tal circunstancia signifique que, al ejercer tal función jurisdiccional, dejen de observarse los diversos principios constitucionales y legales —legalidad, igualdad, seguridad jurídica, debido proceso, acceso efectivo a la justicia, cosa juzgada—, o las restricciones que prevé la norma fundamental, ya que de hacerlo, se provocaría un estado de incertidumbre en los destinatarios de tal función.'.—Por tal razón, las autoridades responsables me privan de mi derecho para ejercer la actividad mercantil de comercio ambulante, la cual he venido realizando y explotando en años anteriores y las autoridades responsables o la nueva administración, me priva de derechos adquiridos, mismos que se me otorgaron de manera ininterrumpida, por lo cual las autoridades responsables, al otorgarme un permiso provisional, y hoy la nueva administración, al quererme privar de mis derechos adquiridos, reconocen y confiesan tácita y expresamente mis derechos adquiridos al establecer la renovación o revalidación de los permisos y/o autorizaciones de funcionamiento para la actividad de comercio ambulante, entendiéndose por derecho adquirido las ventajas o bienes jurídicos o materiales de que es poseedor un titular del derecho, y que figuran en su patrimonio, y que no pueden ser desconocidos por el causahabiente o por el hecho de un tercero o por la ley, cuanto por lo que atañe a todos sus efectos pasados, presentes o futuros en el tiempo, ya que ese derecho quedó jurídicamente realizado, salvo que el nuevo Reglamento para el Funcionamiento de

Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, así como el Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Guadalajara, quieran excluir en mayor o menor medida la eficacia del antiguo ordenamiento jurídico, con el cual nace y reconoce un derecho subjetivo a favor del gobernado, por lo que este privilegio o derecho se rige con base en un ordenamiento jurídico anterior en el cual se generaron éstos que se relacionan (sic) y acompaña los hechos que nacieron bajo su imperio, sin que otro ordenamiento (o su modificación) pretenda imponer un nuevo régimen jurídico. Refuerzan lo argumentado, los criterios siguientes: 'DERECHOS ADQUIRIDOS O CREADOS.—Es derecho adquirido o creado el que se estima perfecto, y debe considerarse como tal, el nacido por el ejercicio integralmente realizado, de todas las circunstancias del acto idóneo, según la ley en vigor, atributiva de dicho derecho.'.—'DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES.—El derecho adquirido se puede definir como el acto realizado que introduce un bien, una facultad o un provecho al patrimonio de una persona, y ese hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de quienes intervinieron en el acto, ni por disposición legal en contrario; la expectativa del derecho es una pretensión de que se realice una situación jurídica concreta, conforme a la legislación vigente en un momento determinado.'.—'INTERÉS JURÍDICO. ACREDITACIÓN DEL, CON LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO MERCANTIL.—Si la autoridad emite una orden de inspección respecto de un inmueble, y contra dicha orden la quejosa comparece al juicio de garantías, exhibiendo para tal efecto la licencia de funcionamiento de un negocio ubicado en dicho inmueble, esto es suficiente para acreditar el interés jurídico del peticionario para comparecer a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, pues con dicha licencia se demuestra que la orden en cuestión puede afectar derechos adquiridos por el particular.'.—Por lo que, en acatamiento a lo manifestado con antelación, se debe autorizar y ordenar a las autoridades demandadas la expedición, renovación o revalidación de los permisos provisionales (usos de suelo), en virtud de que existe un derecho adquirido y con estricto respeto a este derecho se debe respetar, ya que se cuenta con permisos de años anteriores, renovándose en las mismas condiciones y de manera ininterrumpida.—2. Por lo que respecta y de forma subsecuente el impedir, obstaculizar por parte de las autoridades demandadas la renovación, revalidación y reexpedición de mi permiso provisional, me deja en un total estado de indefensión, vulnerando mis garantías consagradas en los numerales 1o., 5o., 14, 16, 17 y 133 de nuestra Carta Magna, además de que las autoridades responsables, bajo la más solemne protesta de decir verdad, tomaron determinaciones e impiden y obstaculizan la realización del trámite administrativo para renovar, refrendar y/o revalidar mi permiso para ejercer la actividad mercantil de comercio ambulante, desde el mes de octubre de

2015, como lo he venido realizando por varios años anteriores; con tal determinación se violenta a todas luces mi derecho adquirido, mismo que he tenido el goce y disfrute por varios años, para el efecto de que yo, ciudadano mexicano, pueda ejercer la actividad mercantil mencionada con antelación; acredito tal prerrogativa con las copias certificadas de mi permiso provisional.—Por tal motivo, al negárseme el refrendo, revalidación y/o renovación de mi permiso, se violenta mi derecho constitucional al libre trabajo, profesión y comercio, por lo cual me presento ante este Juzgado de Distrito en Materias Administrativa y del Trabajo a promover juicio de garantías solicitando el amparo y protección de la justicia por considerar que el actuar de las autoridades administrativas municipales, ahora autoridades responsables, está fuera de todo contexto legal y es violatorio de los artículos 1o., 5o., 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por consiguiente violentan los principios de legalidad, seguridad jurídica y de libertad de profesión, trabajo y comercio, de los cuales goza todo gobernado, los que no pueden ser restringidos y disminuidos por autoridad administrativa, que funde y motive su actuar.—Por tal razón, este órgano jurisdiccional deberá de tomar en consideración lo manifestado con antelación, ya que de aprobarse tales modificaciones al Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, así como el Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Guadalajara, surgirían de manera alevosa y flagrante la suspensión de mis derechos; aunado a ello, el hecho de la no expedición, refrendo y renovación de mi permiso por parte de las autoridades responsables, es un acto inminente violatorio de garantías, y es evidente que el que no se me otorgue y se respete mi derecho al refrendo, por ser consecuencia legalmente lógica de la razón aducida para no contestar la instancia del suscrito, (sic) y en estas condiciones, por tal razón deberá de declararse la nulidad lisa y llana de tales modificaciones a los ordenamientos mencionados con antelación, además de que procede conceder al suscrito la protección de la Justicia Federal, a fin de que no se efectúe (sic) sus derechos subjetivos, pues en el caso la falta de licencia o permiso para ejercer el comercio en los términos y condiciones en que se venían dando, para el funcionamiento del negocio, no le es imputable a dicho quejoso, mientras las autoridades no le nieguen ésta en términos legales, por escrito y en forma fundada y motivada, ya que no es contrario al interés público el proteger al afectado por la conducta omisa de las autoridades, de la situación ambigua en que dicha omisión lo coloca desde el punto de vista legal.—

‘CLAUSURAS. SUSPENSIÓN. FALTA DE CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE LICENCIA.—Cuando algún gobernado desea dedicarse a una actividad comercial, y solicita su licencia de funcionamiento a las autoridades, éstas deben en breve término resolverle al respecto. Pero si omiten dar contestación, con lo que se tiene la impresión de que se trata de vedar, restringir o regular, me-

diante actos administrativos formalmente, el ejercicio de ciertas actividades comerciales, y que se obstaculiza su ejercicio a los gobernados mediante el sistema de no darles respuesta oportuna, debidamente fundada y motivada en términos del artículo 16 constitucional, no podría decirse que el concederles la suspensión para evitar la clausura implique se les concede carta de impunidad para violar todas las disposiciones legales que rijan el tipo de negociación de que se trate, pues las autoridades tienen en su mano el evitar tal situación con el solo expediente legal de cumplir con sus obligaciones constitucionales y dar respuesta solicitada dentro de un término breve y fundándola y motivándola en las disposiciones legales del Congreso que rijan esas negociaciones. Y sólo así se dará a la institución de la suspensión en el amparo una verdadera función tutelar de los intereses constitucionales debatidos en el fondo del asunto, a fin de evitar indebidos perjuicios a esos intereses, que resulten de difícil o imposible reparación en caso de que se conceda el amparo.'.—'COMERCIO, LIBERTAD DE. PROHIBICIÓN DE SU EJERCICIO.—La posible obligación legal que las autoridades puedan tener para impedir a la parte quejosa el ejercicio del comercio, de ninguna manera les permite actuar violando las garantías constitucionales de dicha quejosa, pues sobre la ley secundaria están los derechos constitucionales, y el artículo 5o. limita los casos en que las autoridades administrativas pueden impedir el ejercicio de comercio y señala los requisitos que han de llenar para hacerlo. Y es de notarse que la Constitución está por encima de las leyes secundarias y que, aunque éstas no lo dispongan, las autoridades, antes de afectar los derechos y posesiones de los gobernados y de imponerles cualquier clase de sanción, deben oírlos previamente en defensa (artículo 14 constitucional), es decir, darles a conocer plenamente los elementos de cargo, y darles oportunidad plena de probar y alegar lo que a su derecho corresponda. Derecho de previa audiencia que sólo podrá ser cumplido a posteriori cuando haya razones claras y manifiestas de que se seguiría un daño grave, real e inminente al orden o a la salud pública, lo que deberá justificarse a satisfacción de los tribunales, pues en esto no bastaría la apreciación subjetiva o arbitraria de la autoridad administrativa.'.—'COMERCIO, DERECHO AL. VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL DIRECTA.—Cuando se plantea en amparo la violación al derecho constitucional consagrado en el artículo 5o. de dedicarse a una actividad comercial que en sí misma sea ilícita, en atención a que el quejoso estima que autoridades del Poder Ejecutivo están estorbando esa libertad, en cualquier forma que ello suceda, esta es una cuestión constitucional directa, y no sólo una cuestión de legalidad, relativa si se satisficieron o no requisitos exigidos reglamentariamente por el Poder Ejecutivo o mediante acuerdos, pues es claro que el derecho que la Constitución otorga a los ciudadanos de dedicarse al comercio no puede ser limitado, entorpecido, o sujeto a modalidades que no emanen directamente del Poder Legislativo, en los términos señalados en el

mencionado artículo 5o. Y esa cuestión directa de constitucionalidad siempre podrá plantearse directamente en amparo, si el quejoso opta por no agotar recursos ordinarios o medios ordinarios de defensa, ya que es precisamente el juicio de amparo el que nuestra Constitución ha creado para hacer respetar los derechos de los ciudadanos, garantizados mediante su inclusión en la propia Constitución.'.—'LIBERTAD DE COMERCIO. ALCANCES DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—De la interpretación que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido sobre el artículo 5o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que, por un lado, la garantía de libre comercio no es absoluta, irrestricta e ilimitada, sino que requiere que la actividad que realice el gobernado sea lícita, es decir, que esté permitida por la ley; y, por el otro, que el propio precepto establece que su ejercicio sólo puede limitarse en dos supuestos: por determinación judicial, cuando se lesionen los derechos de tercero, o bien, por resolución gubernativa en los casos específicos que marque la ley, siempre y cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Lo anterior implica que la garantía en cuestión será exigible en aquellos casos en que la actividad, aunque lícita, no afecte el interés público, entendido éste como el imperativo que subyace frente al derecho de los gobernados en lo individual que se traduce en la convivencia y bienestar social. En ese sentido, cuando a través de una resolución gubernativa se limite el ejercicio de la citada garantía, se requiere, necesariamente, que el ordenamiento que la restringe contenga un principio de razón legítima que sustente el interés de la sociedad y que tienda a proteger sus derechos.'.—'SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍA DE LAS ÓRDENES VERBALES DE AUTORIDAD SON VIOLATORIAS EN SÍ MISMAS DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.—El artículo 16 constitucional contiene una garantía de seguridad jurídica, que se traduce en la forma del acto autoritario de molestia, el cual debe derivarse siempre de un mandamiento por escrito, pues solamente de esta manera puede observarse la fundamentación del acto de autoridad, por lo que cualquier mandamiento u orden verbal que originen una molestia en los bienes jurídicos, son contrarios a dicho precepto constitucional.'.—Se considera que las autoridades responsables violentan las garantías constitucionales descritas con antelación, y de forma directa el artículo 5o. constitucional, en el cual se sostiene que ningún acto de autoridad administrativa o legislativa, como lo son el Reglamento para el Funcionamiento de Giros Comerciales, Industriales y de Prestación de Servicios en el Municipio de Guadalajara, así como el Reglamento de Imagen Urbana para el Municipio de Guadalajara, le puede impedir que una persona se dedique a la profesión, comercio y trabajo que más le acomode, mucho menos, que se le prive de la oportunidad de obtener y acceder a percepciones legalmente obtenidas, producto de su trabajo lícito, como en el caso del suscrito, quien se desempeña como comerciante ambulante, actividad lícita que no afecta derechos de terceros, ajustada a derecho, a la

moral y las buenas costumbres, refrendo, renovación y/o revalidación, y con estos reglamentos se me niegan los permisos que nunca se me habían negado, ni tampoco privado de tal beneficio, por lo que al alterar situaciones jurídicas nacidas bajo el amparo y la figura de 'derechos adquiridos' se pretende lesionar nuestras garantías individuales, ya que cualquier mandamiento de reubicación y/o traslado de un establecimiento comercial del quejoso, debe hacerse saber en forma escrita, previa audiencia del promovente del juicio a fin de no dejarlo en estado de indefensión, debiendo reunir dicho mandamiento los requisitos de fundamentación y motivación necesarios en todo acto de autoridad, por tanto, si cualquier decisión, mandato y orden de traslado del comercio de ambulante en espacio libres (sic). Toda vez que el derecho de las personas particulares a dedicarse a actos de comercio y, entre ellos, el comercio ambulante en espacios abiertos, son actividades comerciales en sí mismas lícitas, al ser un derecho o prerrogativa que les reconoce el artículo 5o. constitucional, y no un obsequio de las autoridades administrativas.—Por lo que conforme al precepto en cita, las autoridades sólo pueden vedar o restringir el ejercicio de esas actividades comerciales cuando se apoyen para ello en el interés público, en la forma que lo determine y reglamente una ley formalmente emanada del Congreso de la Unión; sobre esa premisa, se puede afirmar que ningún reglamento administrativo, circular, acuerdo ni decreto emitido por funcionarios a nivel municipal, pueden plasmar en sus determinaciones que restrinjan, limiten o vedan las actividades constitucionalmente protegidas, ya que la actuación y/o intervención de la autoridad en el otorgamiento de permisos o licencias para realizar una actividad comercial sólo tiene el alcance que (sic) un requisito de control administrativo, y que está obligada necesariamente a conceder la licencia y/o permiso, siempre que se cumplan las condiciones establecidas para ello por una ley." (fojas 3 a 8 del toca)

QUINTO.—Los agravios son jurídicamente ineficaces, además, en aplicación analógica de la fracción III del artículo 93 de la Ley de Amparo en vigor, este Tribunal Colegiado advierte, de oficio, que no procede la suspensión provisional solicitada.

En efecto, carece de base legal que justifique conceder la suspensión provisional solicitada, toda vez que, en la especie, no se surte la hipótesis prevista en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo y, por ende, no resulta legalmente dable validar una suspensión improcedente, lo que iría en contra del interés público.

En relación con la consideración de que la procedencia de la suspensión es dable analizarla de oficio por este órgano revisor de amparo, se comparte la jurisprudencia, que dice:

"ORDEN PÚBLICO. DISCRECIONALIDAD DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, PARA EXAMINAR EN EL RECURSO DE REVISIÓN LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO.—De la misma forma que los Jueces de amparo pueden legalmente analizar en los juicios de garantías tramitados ante ellos, las causas de improcedencia que estimen actualizadas, sin que sea necesario que las partes las hagan valer, por ser una cuestión de orden público y, además bajo su absoluta responsabilidad, tienen facultades para valorar los requisitos para la concesión de la suspensión definitiva, debe estimarse que, en lo que toca a los incidentes de suspensión en revisión, también es legal que los Magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito puedan actuar discrecionalmente y, en forma oficiosa, analizar la procedencia de la medida cautelar, cuando se advierta de las constancias de autos que, de concederla, podría afectarse el interés social o contravenirse disposiciones de orden público, a fin de cumplir con lo dispuesto en el artículo 124, de la Ley de Amparo, que establece los requisitos que deben satisfacerse para la concesión de la suspensión definitiva, salvaguardando los intereses de la comunidad que, en todo caso, deben prevalecer sobre los intereses de un particular.—Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito."

Así, corresponde a este tribunal verificar el cumplimiento del requisito establecido en la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo en vigor, conforme a la jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO."; la cual establece la obligación de verificar la procedencia de la suspensión a la luz de la afectación que se pudiera causar a la sociedad o al orden público.

En el caso concreto, de las constancias de autos se advierte que la pretensión esencial del quejoso es que se suspenda la acción de la autoridad municipal, para que se le permita continuar con el ejercicio de la actividad del comercio.

Sin embargo, resulta incuestionable —por la propia manifestación del quejoso y de las constancias de autos— que a la fecha en que se resuelve el presente recurso de queja, el impetrante no cuenta con licencia vigente para ejercer la actividad que pretende, puesto que la autorización para tal fin feneció el pasado treinta de noviembre de dos mil quince; esto es, no cuenta con un derecho legítimamente tutelado que dé base para conceder la suspensión provisional que pretende.

Así, de permitir que subsista la concesión de la medida cautelar —en los términos expuestos en el auto recurrido—, se soslayaría que, a la fecha, en realidad el quejoso ya no cuenta con una licencia vigente, así como que se podría prestar a confusiones que corresponde a este Tribunal Colegiado evitar.

Máxime que, conforme al estado actual que guardan las cosas, lo importante es que no resulta procedente la suspensión solicitada para continuar con el ejercicio de la actividad de comercio, por no contar con licencia vigente, lo cual constituye un requisito esencial y necesario en términos de la jurisprudencia de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN. ACTIVIDADES REGLAMENTADAS. NO PROCEDE CONCEDERLA SI EL QUEJOSO NO CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE IMPUGNE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE APOYA EL ACTO MATERIA DE LA SUSPENSIÓN."

También apoya lo descrito, por identidad de razón, la tesis III.2o.A.157 A, registro digital: 170148, de este tribunal, apreciable en el Tomo XXVII, febrero de 2008, página 2463, de la Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que establece:

"VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO RESPECTO DE SU DESPOSEIMIENTO, NO IMPLICA AUTORIZAR SU CIRCULACIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL AL EXPIRAR LA VIGENCIA DEL PERMISO DE IMPORTACIÓN TEMPORAL.—La concesión de la suspensión provisional en el amparo contra el desposeimiento de un vehículo de procedencia extranjera, no implica autorizar que circulen en el territorio nacional al expirar la vigencia del permiso de importación temporal, al estar sujeta esa circunstancia al cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia aduanera, además de que ello conllevaría que el Juez de Distrito se sustituya en las facultades de la autoridad administrativa, y traería como consecuencia que el mencionado permiso tuviera un plazo ilimitado, condicionado a que se resuelva el juicio de amparo correspondiente, lo que constituiría un derecho que el quejoso no tiene y que, se reitera, el juzgador no puede otorgar."

De ahí que proceda, de oficio, revocar la suspensión provisional decretada en el auto impugnado.

Por otra parte, resulta ineficaz lo esgrimido por el recurrente, acerca de que "...se me priva de derechos adquiridos de los cuales he gozado de forma ininterrumpida..."

La advertida ineficacia deriva del hecho de que, en el caso, no hay afectación a los derechos adquiridos en medidas regulatorias en términos de lo

expuesto por este propio Tribunal Colegiado, en la tesis visible en el Libro IV, Tomo 5, enero de 2012, página 4705, de la Décima Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que dice:

"SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS EN EL ESTADO DE JALISCO. LA MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES REGULATORIAS PARA SU PRESTACIÓN NO AFECTA DERECHOS ADQUIRIDOS DE LOS SUBROGATARIOS EN LA MATERIA.—La Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, su reglamento y las normas generales de carácter técnico en la materia expedidas por el gobernador de la entidad, componen el marco regulatorio del servicio público de transporte de pasajeros, cuyo fin es que se garantice a la sociedad el acceso y aprovechamiento a éste en condiciones de higiene, seguridad, comodidad, continuidad, calidad y eficiencia. Ahora bien, conforme al artículo 149 bis de la citada ley, los contratos de subrogación para la operación de dicho servicio contienen condiciones de naturaleza regulatoria, que en términos del artículo 5 de su reglamento, son susceptibles de modificarse según lo exija la dinámica de la vida diaria. Consecuentemente, la modificación de las condiciones regulatorias para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros no afecta derechos adquiridos de los subrogatarios en la materia, dado que no puede estimarse que éstos se generen cuando está de por medio el interés social, máxime que el derecho a la subrogación no se otorga absoluta e ilimitadamente, sino que se encuentra sujeto a la expedición de las mencionadas normas, en pro del bien común."

Finalmente, en cuanto a las tesis que invoca el recurrente —transcritas en el considerando precedente— no determinan que en el caso a estudio se cumpla con los extremos del precepto 128, fracción II, de la Ley de Amparo.

En consecuencia, dado lo ineficaz de los agravios y, además, en aplicación analógica de la fracción III del artículo 93 de la Ley de Amparo en vigor, este Tribunal Colegiado advierte, de oficio, que no resulta procedente la suspensión provisional solicitada, por lo que se declara infundada la queja.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO.—Se declara infundada la queja.

SEGUNDO.—Se revoca el auto impugnado.

TERCERO.—Se niega la suspensión provisional solicitada por el quejoso ***** , por las razones expuestas en el considerando último de la presente resolución.

Notifíquese; háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno, remítase copia de esta resolución al órgano jurisdiccional correspondiente y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.

Así, por mayoría de votos, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, que integran los Magistrados Tomás Gómez Verónica, como encargado del engrose, y Enrique Rodríguez Olmedo, en contra del voto emitido por el Magistrado Filemón Haro Solís, presidente.

En términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo relativo de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos.

Esta ejecutoria se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

Nota: Las tesis de rubros: "ORDEN PÚBLICO. DISCRECIONALIDAD DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO, PARA EXAMINAR EN EL RECURSO DE REVISIÓN LA PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONFORME AL ARTÍCULO 124 DE LA LEY DE AMPARO.", "SUSPENSIÓN. PARA DECIDIR SOBRE SU OTORGAMIENTO EL JUZGADOR DEBE PONDERAR SIMULTÁNEAMENTE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO CON EL PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL O AL ORDEN PÚBLICO." y "SUSPENSIÓN. ACTIVIDADES REGLAMENTADAS. NO PROCEDE CONCEDERLA SI EL QUEJOSO NO CUENTA CON LA AUTORIZACIÓN CORRESPONDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE IMPUGNE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE APOYA EL ACTO MATERIA DE LA SUSPENSIÓN.", citadas en esta ejecutoria, aparecen publicadas, la primera, en el *Semanario Judicial de la Federación*, Séptima Época, Volúmenes 151-156, julio-diciembre de 1981, Sexta Parte, página 127; la segunda, en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXX, diciembre de 2009, página 315, con la clave de publicación 2a./J. 204/2009; y, la tercera, en el *Semanario Judicial de la Federación*, Octava Época, Tomo I, Segunda Parte-2, enero-junio de 1988, página 697, respectivamente.

Voto particular del Magistrado Filemón Haro Solís: Disiento de forma parcial del criterio mayoritario, por las razones a exponer.—Así es, con el debido respeto, considero sostener la propuesta en el sentido de dejar intocado lo relativo a la concesión de la medida cautelar, en los términos siguientes: Una vez analizadas las razones legales dadas en el auto recurrido y los agravios, se considera dejar intocado lo conducente donde se concluyó otorgar la medida suspensiva para el efecto de no impedir u obstaculizar, remover o reubicar el puesto semifijo del quejoso donde realiza su actividad comercial, en los términos de la licencia otorgada y en tanto esté vigente por vencer el treinta de noviembre de dos mil quince, lo cual prevalecería mientras se resolviese en definitiva la medida de mérito.—Lo anterior, porque tales razones no afectan al recurrente y tampoco se contrvirtieron por el ente a quien pudiesen perjudicar (responsable), pues la autoridad no se inconformó con éstas a pesar de haberse otorgado la medida cautelar.—Es aplicable, por identidad de razón, la jurisprudencia 3a./J. 20/91, registro digital: 207016, de la Tercera Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo VII, abril de 1991,

página 26, Octava Época del *Semanario Judicial de la Federación*, que dispone: "REVISIÓN. NO ES MATERIA DE ESTE RECURSO EL RESOLUTIVO QUE NO AFECTA A LA RECURRENTE Y NO SE IMPUGNA POR LA PARTE A QUIEN PUDO PERJUDICAR.— Si en una sentencia existe diverso resolutive sustentado en las respectivas consideraciones que no afectan a la parte recurrente y no son combatidas por quien le pudo afectar, debe precisarse que no son materia de la revisión dichas consideraciones y resolutive."—Tal como se aprecia de la propuesta rechazada por la mayoría, se debe dejar intocado lo relativo a la concesión de la medida cautelar, porque no se impugnó por la autoridad responsable, en tanto es a quien pudiese perjudicar tal determinación; de ahí el motivo por el cual no es ajustado a derecho revocar ese aspecto del auto recurrido de manera oficiosa por este órgano jurisdiccional, so pena de hacer suya la causa y desatender el criterio transcrito, mismo que si bien se refiere al recurso de revisión, de igual forma es aplicable para la queja, cuya diferencia sustancial se advierte por el tema de impugnación, empero, subsiste la razón total en cuanto a que lo decidido por una autoridad y no impugnado por la parte respectiva, en modo alguno resulta materia de análisis.—Lo anterior, con independencia de que a la fecha había fenecido la vigencia del permiso allegado por el quejoso y con base en el cual se otorgó la suspensión, pues si bien concluyó el treinta de noviembre de dos mil quince, también lo es que por el simple transcurso del tiempo tal medida carecería de efecto práctico; de ahí otro motivo por el cual no es apegado a derecho pronunciarse de oficio sobre un aspecto acotado en el propio auto recurrido.—En cambio, en la materia del recurso, esto es, en cuanto a que se negó la suspensión provisional, ésta se debe confirmar bajo el estudio siguiente: Así, el inconforme adujo (agravio primero) que con la aplicación de los reglamentos y el inicio de las responsables para privarlo de sus derechos a dedicarse al comercio se genera la afectación a sus prerrogativas, además por impedir, y obstaculizar el refrendo o renovación del permiso, con transgresión del numeral 5o. de la Carta Magna y de los tratados internacionales, por lo cual los reglamentos deben quedar nulos y aplicarse lo más benéfico, cita las tesis: "SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.", "TRATADOS INTERNACIONALES. SU APLICACIÓN CUANDO AMPLÍAN Y REGLAMENTAN DERECHOS FUNDAMENTALES." y "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVÉ LA NORMA FUNDAMENTAL."; así, se priva de derechos adquiridos de los cuales ha gozado de forma ininterrumpida, pues los nuevos reglamentos pretenden excluir la eficacia del antiguo orden jurídico al tenor del cual se reconoció ese derecho, cita las tesis: "DERECHOS ADQUIRIDOS O CREADOS.", "DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES." e "INTERÉS JURÍDICO. ACREDITACIÓN DEL, CON LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO MERCANTIL.".—Asevera el recurrente (agravio segundo) que al impedir u obstaculizar la renovación, revalidación y reexpedición del permiso, la responsable lo deja en estado de indefensión, pues entorpece el trámite desde octubre de dos mil quince, de ahí la violación a sus derechos; además, destacó que es inminente no otorgar ni respetar su derecho al refrendo, cita las tesis: "CLAUSURAS. SUSPENSIÓN. FALTA DE CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE LICENCIA.", "COMERCIO, LIBERTAD DE. PROHIBICIÓN DE SU EJERCICIO.", "COMERCIO, DERECHO AL. VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL DIRECTA.", "LIBERTAD DE COMERCIO. ALCANCES DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." y "SEGURIDAD JURÍDICA,

GARANTÍA DE LAS ÓRDENES VERBALES DE AUTORIDAD SON VIOLATORIAS EN SÍ MISMAS DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.", pues con esos reglamentos se niegan permisos que antes no se negaban, a pesar de no afectar derechos de terceros con la actividad comercial; además, todo mandato de reubicación o traslado deberá ser escrito, con audiencia previa, fundado y motivado, pues ningún reglamento puede restringir, limitar o vedar actividades protegidas por la Carta Magna, en tanto la intervención del ente administrativo para otorgar licencias sólo tiene el alcance de un requisito de control, pues las debe otorgar cuando se cumplan las condiciones de ley.—Bajo esa tesitura, una vez confrontadas las razones legales expuestas en el auto recurrido y los citados agravios, éstos devienen inoperantes, en virtud de no tender a combatir aquellas por las cuales el juzgador de primer grado concluyó negar la suspensión; esto es, el recurrente debió explicar por qué sí se satisfizo la exigencia del numeral 128, fracción II, de la Ley de Amparo y, así, con otorgar la suspensión provisional no se seguía perjuicio al interés social ni se contravenían disposiciones de orden público.—En concomitancia a ello, debió señalar por qué sí era factible, en vía de suspensión, dejar sin efectos los reglamentos materia de sus reclamos, a fin de patentizar el desinterés de la sociedad en ser cumplidos.—Además, de los agravios a estudio se advierte la intención del recurrente de exponer razones por las cuales considera que se transgreden sus derechos fundamentales, es decir, alude a temas del fondo del asunto cuyo estudio corresponde al expediente principal.—Pese a lo anterior, el recurrente se concretó a exponer argumentos desvinculados de las consideraciones en las cuales se sustentó el auto impugnado.—Así las cosas, la inoperancia se justifica si en cuenta se tiene que, al estar ante un asunto donde opera el principio de estricto derecho, al inconforme correspondía exponer razones legales bajo las cuales evidenciara por qué las consideraciones del juzgador de primer grado devenían incorrectas; empero, no lo hizo.—Lo anterior resulta comprensible, si en cuenta se tiene que los argumentos del quejoso se circunscriben a exponer sólo aseveraciones sin soporte de razones legales al tenor de las cuales se evidencie confrontación alguna con las consideraciones en las que se sustenta el auto recurrido, sin mayor exposición de la cual se advierta por qué consideran incorrectos los motivos legales antes descritos.—De tal suerte que las consideraciones del resolutor, correctas o no, deben quedar incólumes y regir el auto recurrido para todos los efectos legales subsecuentes.—Es aplicable, cuyo criterio se comparte, la jurisprudencia (V Región)2o. J/1 (10a.), registro digital: 2010038, del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, publicada en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 22, Tomo III, septiembre de 2015, página 1683 «y en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas», que establece: "CONCEPTOS O AGRAVIOS INOPERANTES. QUÉ DEBE ENTENDERSE POR 'RAZONAMIENTO' COMO COMPONENTE DE LA CAUSA DE PEDIR PARA QUE PROCEDA SU ESTUDIO. De acuerdo con la conceptualización que han desarrollado diversos juristas de la doctrina moderna respecto de los elementos de la *causa petendi*, se colige que ésta se compone de un hecho y un razonamiento con el que se explique la ilegalidad aducida. Lo que es acorde con la jurisprudencia 1a./J. 81/2002, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la causa de pedir no implica que los quejosos o recurrentes pueden limitarse a realizar meras afirmaciones sin sustento o fundamento, pues a ellos corresponde (salvo en los supuestos de suplencia de la deficiencia de la queja) exponer, razonadamente, por qué estiman inconstitucionales o ilegales los actos que reclaman o recurren; sin embargo, no ha quedado completamente definido qué debe entenderse por razonamiento. Así, conforme a lo que autores destacados han expuesto sobre este último, se establece que un razonamiento

jurídico presupone algún problema o cuestión al cual, mediante las distintas formas interpretativas o argumentativas que proporciona la lógica formal, material o pragmática, se alcanza una respuesta a partir de inferencias obtenidas de las premisas o juicios dados (hechos y fundamento). Lo que, trasladado al campo judicial, en específico, a los motivos de inconformidad, un verdadero razonamiento (independientemente del modelo argumentativo que se utilice), se traduce a la mínima necesidad de explicar por qué o cómo el acto reclamado, o la resolución recurrida se aparta del derecho, a través de la confrontación de las situaciones fácticas concretas frente a la norma aplicable (de modo tal que evidencie la violación), y la propuesta de solución o conclusión sacada de la conexión entre aquellas premisas (hecho y fundamento). Por consiguiente, en los asuntos que se rigen por el principio de estricto derecho, una alegación que se limita a realizar afirmaciones sin sustento alguno o conclusiones no demostradas, no puede considerarse un verdadero razonamiento y, por ende, debe calificarse como inoperante; sin que sea dable entrar a su estudio so pretexto de la causa de pedir, ya que ésta se conforma de la expresión de un hecho concreto y un razonamiento, entendido por éste, cualquiera que sea el método argumentativo, la exposición en la que el quejoso o recurrente realice la comparación del hecho frente al fundamento correspondiente y su conclusión, deducida del enlace entre uno y otro, de modo que evidencie que el acto reclamado o la resolución que recurre resulta ilegal; pues de lo contrario, de analizar alguna aseveración que no satisfaga esas exigencias, se estaría resolviendo a partir de argumentos no esbozados, lo que se traduciría en una verdadera suplencia de la queja en asuntos en los que dicha figura está vedada."—También es aplicable, cuyo criterio se comparte, la tesis aislada XXI.2o.P.A.3 K (10a.), registro digital: 2002954, del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, visible en el Libro XVIII, Tomo 3, marzo de 2013, página 1905, de la Décima Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que establece: "AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE QUEJA INTERPUESTO CONTRA EL AUTO QUE CONCEDE O NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. LO SON AQUELLOS QUE ADUCEN CUESTIONES QUE VERSAN SOBRE EL FONDO DEL ASUNTO.—El objeto del recurso de queja interpuesto contra el auto en el que se resuelve sobre la suspensión provisional, se limita a la decisión adoptada en relación con la medida cautelar. De modo que en él no pueden hacerse valer cuestiones relativas al expediente principal, puesto que al llevarse por cuerda separada, sus determinaciones deben impugnarse a través del respectivo medio de defensa. De esta manera, si se interpone contra el auto que concede o niega la suspensión provisional y en los agravios se aducen cuestiones de incompetencia de la autoridad responsable o la indebida aplicación de un ordenamiento legal, tales argumentos resultan inoperantes por tratarse de aspectos que versan sobre el fondo del asunto."—De igual forma es aplicable, cuyo criterio se comparte, la jurisprudencia IV.3o.A. J/3, registro digital: 178556, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, apreciable en el Tomo XXI, mayo de 2005, página 1217, de la Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que establece: "AGRAVIOS EN EL RECURSO DE QUEJA. SON INOPERANTES LOS QUE NO CONTROVIERTEN TODOS LOS ARGUMENTOS EN LOS QUE SE APOYA LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA.—Si la resolución del Juez de Distrito, relativa a la suspensión provisional se sustenta en dos o más razonamientos y el recurrente no combate todos y cada uno de ellos, los agravios expresados en el recurso de queja devienen inoperantes, porque al no atacarse todos los argumentos en los que se apoya la resolución impugnada, tales razonamientos siguen rigiendo el sentido de ésta."—Además, cabe destacar, si bien al órgano jurisdiccional corresponde explicar la razón por la cual resulta o no aplicable un criterio, tesis o jurisprudencia, en

concomitancia a ello, el inconforme también debe, en casos como en el presente, donde opera el principio de estricto derecho y en privilegio del principio de igualdad procesal, asentar y confrontar la inaplicabilidad de los criterios, tesis o jurisprudencias en las que se funda el auto, en tanto forman parte del soporte legal de las consideraciones del resolutor.—Así, en el caso concreto, el inconforme tampoco expuso argumento alguno tendente a señalar por qué razón legal el criterio citado en el auto recurrido devenía inaplicable en la especie, a pesar de formar parte del mismo y de ahí la necesidad de controvertir su aplicación o no, cuyo rubro es: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PÚBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA".— Apoya lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 130/2008, registro digital: 168754, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXVIII, septiembre de 2008, página 262, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que dispone: "TESIS AISLADA O DE JURISPRUDENCIA INVOCADA EN LA DEMANDA DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO JURISDICCIONAL PRONUNCIARSE EN TORNO A SU APLICABILIDAD O INAPLICABILIDAD AL CASO CONCRETO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE LA QUEJOSA ESGRIMA O NO ALGÚN RAZONAMIENTO AL RESPECTO.—El artículo 196 de la Ley de Amparo establece que cuando las partes invoquen la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de los Tribunales Colegiados de Circuito lo harán por escrito, expresando el número y órgano jurisdiccional que la integró, y el rubro y tesis de aquélla. De este modo, cuando la quejosa transcribe en su demanda de garantías una tesis aislada o jurisprudencial, implícitamente puede considerarse que pretende que el órgano jurisdiccional la aplique al caso concreto, por lo que éste deberá verificar su existencia y, si es jurisprudencia, determinar si es aplicable, supuesto en el cual deberá resolver el asunto sometido a su jurisdicción conforme a ella, y si se trata de una tesis aislada o alguna que no le resulte obligatoria, precisar si se acoge al referido criterio o externalizar las razones por las cuales se separa de él; lo anterior, independientemente de que la quejosa hubiere razonado o justificado su aplicabilidad al caso concreto. Sostener lo contrario podría llevar al extremo de que un órgano jurisdiccional dejara de observar la jurisprudencia que le resulte obligatoria en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, bajo el argumento de que la quejosa no justificó su aplicabilidad al caso concreto, lo que evidentemente va en contra del sistema jurisprudencial previsto en dicha ley, cuyo propósito fundamental es brindar seguridad jurídica a los gobernados".—En cuanto a las tesis de rubros: "SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y LEY SUPREMA DE LA UNIÓN. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133 CONSTITUCIONAL.", "TRATADOS INTERNACIONALES. SU APLICACIÓN CUANDO AMPLÍAN Y REGLAMENTAN DERECHOS FUNDAMENTALES.", "PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU CUMPLIMIENTO NO IMPLICA QUE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NACIONALES, AL EJERCER SU FUNCIÓN, DEJEN DE OBSERVAR LOS DIVERSOS PRINCIPIOS Y RESTRICCIONES QUE PREVE LA NORMA FUNDAMENTAL.", "DERECHOS ADQUIRIDOS O CREADOS.", "DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE RETROACTIVIDAD DE LEYES.", "INTERÉS JURÍDICO. ACREDITACIÓN DEL, CON LA LICENCIA DE FUNCIONAMIENTO DE UN ESTABLECIMIENTO MERCANTIL.", "CLAUSURAS. SUSPENSIÓN. FALTA DE CONTESTACIÓN A LA SOLICITUD DE LICENCIA.", "COMERCIO, LIBERTAD DE. PROHIBICIÓN DE SU EJERCICIO.", "COMERCIO, DERECHO AL. VIOLACIÓN CONSTITUCIONAL DIRECTA.", "LIBERTAD DE COMERCIO. ALCANCES DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5o. DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL." y "SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍA DE. LAS ÓRDENES VERBALES DE AUTORIDAD SON VIOLATORIAS EN SÍ MISMAS DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL.", no benefician al inconforme, en virtud de no relevarlo de con-

trovertir las consideraciones del auto recurrido y, además, en momento alguno precisan cómo se acreditaron, en el caso a estudio, los extremos del precepto 128, fracción II, de la Ley de Amparo.—A su vez, es conveniente puntualizar que los agravios tampoco generan beneficio alguno aun cuando se aprecien bajo la causa de pedir, en virtud de no advertirse cuál es la razón legal por la que el inconforme considera que le causa agravio el auto recurrido.—Apoya lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 8/2007, registro digital: 173403, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apreciable en el Tomo XXV, febrero de 2007, página 718, de la Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que establece: "AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE GARANTÍAS. EL QUE SE ABORDE SU ESTUDIO EN ATENCIÓN A LA CAUSA DE PEDIR, NO IMPLICA SUPLENIR SU DEFICIENCIA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 76 BIS DE LA LEY DE AMPARO.—La circunstancia de que al conocer de un recurso dentro de un juicio de amparo la Suprema Corte de Justicia de la Nación o el Tribunal Colegiado de Circuito atiendan a la causa de pedir expresada, conforme a la jurisprudencia P/J. 69/2000, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 5, con el rubro: 'AGRAVIOS EN RECURSOS INTERPUESTOS DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. PARA QUE SE ESTUDIEN BASTA CON EXPRESAR EN EL ESCRITO RELATIVO, RESPECTO DE LAS CONSIDERACIONES QUE SE CONTROVIERTEN DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, LA CAUSA DE PEDIR.', no equivale a suplir su deficiencia en términos del artículo 76 Bis de la Ley de Amparo, ya que para abordar los agravios con base en la causa de pedir expresada en el libelo respectivo resulta necesario que el recurrente haya precisado con claridad cuál es el agravio que le provocan las respectivas consideraciones, así como los motivos que generan esa afectación, a diferencia de lo que sucede cuando se suple la deficiencia de los agravios, pues esta prerrogativa procesal tiene aplicación cuando en el escrito relativo no se señala qué consideraciones del fallo recurrido se controvierten, o bien, realizado esto último, no se mencionan los motivos que generan la respectiva afectación. Además, la institución de la suplencia de los agravios, según el grado en que ésta se autorice por la Ley de Amparo y su interpretación jurisprudencial, se traduce en examinar consideraciones no controvertidas por el recurrente, o bien, en abordar el estudio de aquellas respecto de las cuales éste se limitó a señalar en sus agravios que las estima incorrectas, sin precisar los motivos que sustentan su afirmación."—De igual forma, tampoco se advierte materia para suplir la queja deficiente en favor del recurrente, al no apreciarse motivo legal que así lo justifique.—Es ilustrativo a lo anterior la jurisprudencia P/J. 5/2006, registro digital: 175750, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Tomo XXIII, febrero de 2006, página 9, Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que establece: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. SE SURTE AUN ANTE LA AUSENCIA DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS.—La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diferencias tratándose de la suplencia de la queja, advirtiendo que puede ser total ante la ausencia de conceptos de violación o de agravios, o relativa, cuando son insuficientes, esto es, cuando solamente hay una deficiente argumentación jurídica. Ahora bien, el artículo 76 Bis, fracción I, de la Ley de Amparo dispone que las autoridades que conozcan del juicio de garantías deben suplir la queja deficiente, entre otros supuestos, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de esta Suprema Corte, sin precisar si opera de forma relativa o total, pero el estudio del proceso legislativo de reforma de 1951 a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del entonces 76 de la ley citada, pone de manifiesto que dicha

suplencia debe ser total, ya que se surte aun ante la ausencia de conceptos de violación o agravios, como acontece en las materias penal tratándose del inculcado, laboral atinente al trabajador, o respecto de menores e incapaces, porque en todos estos supuestos se pretendió atemperar los tecnicismos del juicio de garantías, para dar relevancia a la verdad jurídica.—Por último, no pasan inadvertidos para este órgano jurisdiccional los argumentos en los cuales el recurrente adujo, en esencia, que con los "reglamentos se niegan permisos que antes no se negaban, a pesar de no afectar derechos de terceros con la actividad comercial" y, debido a ello, según destacó "se me priva de derechos adquiridos de los cuales he gozado de forma ininterrumpida, pues los nuevos reglamentos pretenden excluir la eficacia del antiguo orden jurídico al tenor del cual se reconoció ese derecho".—Pues bien, aun cuando con esos agravios no se tiende a evidenciar cómo se satisficieron los requisitos del numeral 128, fracción II, de la Ley de Amparo, conviene puntualizar que, tal como lo destacó el juzgador, el permiso allegado con la demanda de amparo tuvo vigencia hasta el treinta de noviembre de dos mil quince, motivo por el cual su derecho se adquirió con un límite temporal a esa fecha.—Aunado a ello, el cambio de la normativa reglamentaria bajo la cual se expidió el permiso no conlleva, por sí mismo, la afectación a un derecho adquirido, pues tal aspecto podría ocurrir si con motivo de sus disposiciones se llevare a cabo la modificación de sus condiciones de comercio sobre las cuales ya contaba con un permiso con vigencia específica y éste se modificare bajo su vigencia; es decir, la transgresión se podría configurar si con las nuevas disposiciones se variarían las condiciones bajo las cuales se emitió dicho permiso, tales como implementar nuevos requisitos para poder concluir el tiempo ya otorgado en el permiso de mérito.—Sin embargo, si tal como lo destaca el impetrante del amparo, los reglamentos entraron en vigor el uno de diciembre de dos mil quince y su permiso venció el treinta de noviembre de dos mil quince, entonces, no se advierte transgresión alguna a sus derechos adquiridos.—De igual forma, tampoco hay afectación a los derechos adquiridos aun cuando antes se hubiesen otorgado los permisos conducentes, incluso, sin haberse advertido violación de derechos de terceros, pues la entrada en vigor de esos reglamentos y de acuerdo con la litis de la presente queja, su entrada en vigor se dio al día siguiente a cuando venció el permiso otorgado al quejoso, es decir, no se advierte violación alguna a sus prerrogativas, en tanto las nuevas condiciones para ejercer el comercio ambulante operan a partir de su entrada en vigor y no antes.—Asimismo, la renovación o refrendo del permiso para ejercer el comercio ambulante tiene un límite temporal, motivo por el cual desde su expedición y hasta su conclusión, se contará con la prerrogativa de llevar a cabo la actividad comercial bajo las condiciones autorizadas, empero, los nuevos permisos se deben sujetar a la normatividad vigente a partir de cuando se pida la renovación en comento, toda vez que los permisos anteriores no generan derechos absolutos e ilimitados, sino condicionados a una temporalidad y sin perjuicio de cumplir con las nuevas condiciones implementadas por actos legislativos desde la perspectiva material, cuya finalidad es atender las cambiantes necesidades de la sociedad.—Por ende, si la sociedad está interesada en que se cumplan las disposiciones reglamentarias, cuyo fin es normar y disciplinar diversas actividades en aras de lograr la sana convivencia, entonces, resulta apegada a derecho la negativa a otorgar la suspensión de los actos reclamados sobre la aplicación de los reglamentos en litis, sin poder otorgarse la medida cautelar para el efecto de evitar la subsunción a la nueva normatividad, pues con tal proceder el órgano jurisdiccional se sustituiría en atribuciones propias de las autoridades responsables, lo cual no es correcto ante la falta de preceptos donde así se prevea.—Lo expuesto, sin perjuicio de la posibilidad del quejoso de solicitar la renovación del permiso respectivo bajo las condiciones

exigidas por la norma reglamentaria.—Es ilustrativo, por identidad de razón y en lo conducente, la tesis III.2o.A.10 A (10a.), registro digital: 2000169, de este Tribunal Colegiado, visible en el Libro IV, Tomo 5, enero de 2012, página 4705, de la Décima Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que dispone: "SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS EN EL ESTADO DE JALISCO. LA MODIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES REGULATORIAS PARA SU PRESTACIÓN NO AFECTA DERECHOS ADQUIRIDOS DE LOS SUBROGATARIOS EN LA MATERIA.—La Ley de los Servicios de Vialidad, Tránsito y Transporte del Estado de Jalisco, su reglamento y las normas generales de carácter técnico en la materia expedidas por el gobernador de la entidad, componen el marco regulatorio del servicio público de transporte de pasajeros, cuyo fin es que se garantice a la sociedad el acceso y aprovechamiento a éste en condiciones de higiene, seguridad, comodidad, continuidad, calidad y eficiencia. Ahora bien, conforme al artículo 149 bis de la citada ley, los contratos de subrogación para la operación de dicho servicio contienen condiciones de naturaleza regulatoria, que en términos del artículo 5 de su reglamento, son susceptibles de modificarse según lo exija la dinámica de la vida diaria. Consecuentemente, la modificación de las condiciones regulatorias para la prestación del servicio de transporte público de pasajeros no afecta derechos adquiridos de los subrogatarios en la materia, dado que no puede estimarse que éstos se generen cuando está de por medio el interés social, máxime que el derecho a la subrogación no se otorga absoluta e ilimitadamente, sino que se encuentra sujeto a la expedición de las mencionadas normas, en pro del bien común."—También apoya lo descrito, por identidad de razón, la tesis III.2o.A.157 A, registro digital: 170148, de este tribunal, apreciable en el Tomo XXVII, febrero de 2008, página 2463, de la Novena Época del *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, que establece: "VEHÍCULOS DE PROCEDENCIA EXTRANJERA. LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO RESPECTO DE SU DESPOSEIMIENTO, NO IMPLICA AUTORIZAR SU CIRCULACIÓN EN EL TERRITORIO NACIONAL AL EXPIRAR LA VIGENCIA DEL PERMISO DE IMPORTACIÓN TEMPORAL.—La concesión de la suspensión provisional en el amparo contra el desposeimiento de un vehículo de procedencia extranjera, no implica autorizar que circulen en el territorio nacional al expirar la vigencia del permiso de importación temporal, al estar sujeta esa circunstancia al cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia aduanera, además de que ello conllevaría que el Juez de Distrito se sustituya en las facultades de la autoridad administrativa, y traería como consecuencia que el mencionado permiso tuviera un plazo ilimitado, condicionado a que se resolviera el juicio de amparo correspondiente, lo que constituiría un derecho que el quejoso no tiene y que, se reitera, el juzgador no puede otorgar."—En consecuencia, dado lo ineficaz de los agravios, y al no proceder la suplencia de la queja deficiente, en la materia de estudio, se declara infundada la queja.—Con base en ese estudio propuesto, lo correcto es dejar intocadas las razones legales por las cuales se otorgó la suspensión provisional; en la materia del recurso, declarar infundada la queja; y, confirmar el auto recurrido en cuanto se negó dicha medida cautelar.

Este voto se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO, POR UNA PARTE LA NIEGUE Y, POR OTRA, LA CONCEDA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PUEDE ANALIZAR, DE OFICIO, EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE

INTERPONGA SÓLO CONTRA LA NEGATIVA, SI EL OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA AFECTA EL INTERÉS SOCIAL O CONTRAVIENE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.

En caso de que el Juez de Distrito, por una parte, niegue la suspensión provisional y, por la otra, la conceda y el quejoso impugne en queja sólo la negativa, el Tribunal Colegiado de Circuito revisor está facultado para analizar, de oficio, conforme al artículo 93, fracción III, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, si el otorgamiento de la medida afecta el interés social o contraviene disposiciones de orden público, acorde con el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues por encima del interés particular, se encuentra el de la colectividad; considerar lo contrario traería como consecuencia validar el otorgamiento de una suspensión provisional improcedente, lo que iría contra el interés público.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

III.2o.A.7 K (10a.)

Queja 309/2015. 2 de diciembre de 2015. Mayoría de votos. Disidente y Ponente: Filemón Haro Solís. Encargado del engrose: Tomás Gómez Verónica. Secretario: Guillermo García Tapia.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA EJECUCIÓN DE LA CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL NOMBRAMIENTO DE UN CONSEJERO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE GUERRERO Y SU SUSTITUCIÓN EN ESE CARGO.

El artículo 83 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, en su texto anterior a la reforma publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 29 de abril de 2014, establece que los consejeros de la Judicatura de ese Estado durarán cinco años en su cargo y sólo podrán ser removidos por haber incurrido en las causas de responsabilidad que la propia Constitución estatal señala. En ese contexto, si el quejoso acredita contar con un nombramiento vigente que lo avala como consejero de la Judicatura del Estado, y solicita la suspensión provisional contra la ejecución de la conclusión anticipada de su nombramiento y su sustitución en ese cargo, procede conceder la medida por satisfacerse los requisitos previstos en el artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, habida cuenta que no existen elementos que justifiquen, en ese momento procesal, que con ello se cause perjuicio al interés social ni que se contravengan disposiciones de orden público. Lo anterior, porque, por un lado, la sociedad está interesada en que los consejeros que

ejerzan ese cargo sigan cumpliendo debida y oportunamente con la función que se les ha encomendado (administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial local) y, por otro, porque de paralizarse la actuación reclamada, se iría en contra del orden público, toda vez que dicho acto contraviene directamente una prohibición establecida en la Constitución Local, relativa a que los consejeros mencionados no sean removidos de su puesto, por la temporalidad en que fueron designados, a menos de que exista una causa de responsabilidad que lo amerite. Por tanto, la medida cautelar solicitada, en términos del artículo 147 de la ley de la materia, debe otorgarse con efectos restitutorios, lo cual implica que, si al momento en que se concede ya se hubiera materializado la remoción de dicho servidor público, deberá restablecerse en el puesto que tiene como consejero de la Judicatura de la entidad, toda vez que es de interés público que se salvaguarden los postulados de la Norma Fundamental del Estado.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA
DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

XXI.1o.P.A.32 A (10a.)

Queja 140/2015. Francisco Espinoza Grado. 17 de septiembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Moisés Alejandro Vázquez Escalera, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado. Secretario: Gustavo Salvador Parra Saucedo.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TELECOMUNICACIONES. LA EMISIÓN DE UNA DECLARATORIA DE PODER SUSTANCIAL EN EL MERCADO CONTRA UN AGENTE ECONÓMICO NO IMPLICA, NECESARIAMENTE, LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE PREVÉN LA FACULTAD DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE LA EXTINTA COMISIÓN FEDERAL RELATIVA PARA IMPONER OBLIGACIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON TARIFAS, CALIDAD DEL SERVICIO E INFORMACIÓN A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE LA MATERIA.

El hecho de que la previsión normativa referida a la atribución de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y de la extinta Comisión Federal de Telecomunicaciones para imponer obligaciones específicas relacionadas con tarifas, calidad del servicio e información a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones declarados con poder sustancial en algún mercado relevante, corresponda a una regla que confiere poderes, implica que, para que se individualicen sus efectos o consecuencias, se requiere que la dependencia y el órgano regulador mencionados ejerzan materialmente la capacidad otorgada, a través de la imposición de dichas obligaciones. Por tanto, la emisión de una declaratoria de poder sustancial en el mercado contra un agente económico no implica, necesariamente, la aplicación de las disposiciones normativas que prevén la facultad mencionada, dado que se requiere del ejercicio efectivo de dicha atribución, a través del acto correspondiente.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.116 A (10a.)

Amparo en revisión 90/2015. Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y otros. 5 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez.

Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TELECOMUNICACIONES. LAS DISPOSICIONES QUE PREVEN LA FACULTAD DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE LA EXTINTA COMISIÓN FEDERAL RELATIVA PARA IMPONER OBLIGACIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON TARIFAS, CALIDAD DEL SERVICIO E INFORMACIÓN A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE LA MATERIA QUE TENGAN PODER SUSTANCIAL EN ALGÚN MERCADO RELEVANTE, CORRESPONDEN A UNA "REGLA QUE CONFIERE PODERES". Los artículos 9-A, fracción XI y 63 de la abrogada Ley Federal de Telecomunicaciones; segundo, fracción XI, del Decreto por el que se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones (actualmente extinta), publicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 1996; 9o., fracción X y 23, apartado B, fracción VIII y último párrafo, del reglamento interno de dicha comisión; y la regla trigesimaprimera de las Reglas del Servicio Local, difundidas en el medio oficial señalado el 23 de octubre de 1997, contienen disposiciones análogas respecto de la previsión de la facultad o atribución de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y del órgano regulador mencionado, para establecer obligaciones específicas relacionadas con tarifas, calidad del servicio e información a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones que tengan poder sustancial en algún mercado relevante y no una obligación ni una prohibición para efectuar una determinada acción, sino que indican una capacidad otorgada a los agentes de defensa de la competencia para alterar estados de cosas normativos, cuyo ejercicio es potestativo o facultativo. Por tanto, la hipótesis contenida en los preceptos mencionados no se ubica en el esquema de razonamiento práctico de las "normas de mandato", sino que corresponde a una "regla que confiere poderes", que atribuye competencias.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.115 A (10a.)

Amparo en revisión 90/2015. Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y otros. 5 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez.

Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por

Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TELECOMUNICACIONES. LOS COSTOS HUNDIDOS CONSTITUYEN UNA BARRERA A LA ENTRADA DE NUEVOS OPERADORES EN EL MERCADO DE LAS REDES PÚBLICAS DE LA MATERIA.

La entrada de nuevos competidores al mercado de las telecomunicaciones es uno de los elementos que pueden reducir la capacidad de los agentes económicos para incrementar unilateralmente sus precios; de ahí que la menor posibilidad de acceso rápido, fácil y económico de nuevos operadores constituye las denominadas "barreras a la entrada". Por su parte, dada su naturaleza, las redes públicas de telecomunicaciones presentan economías de escala significativas, lo que implica que quienes pretendan obtener una participación en el mercado se ven obligados a realizar grandes inversiones en infraestructura que les permitan fortalecer su posición frente a aquellos que están establecidos, dentro de las cuales destacan los costos hundidos, los cuales requieren recuperar conjuntamente con los costos de producción. En consecuencia, dichos costos hundidos constituyen una barrera a la entrada de nuevos operadores en el mercado de las redes públicas de telecomunicaciones, en la medida en que las bajas tasas de recuperabilidad actuarán como fuertes disuasores para acceder al mercado, pues aquéllos se encontrarán en desventaja frente a los agentes económicos establecidos que ya han amortizado sus inversiones en red y que, por tanto, pueden continuar su operación mientras recuperan los costos de producción.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.124 A (10a.)

Amparo en revisión 90/2015. Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y otros. 5 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez.

Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TELECOMUNICACIONES. PARA ANALIZAR LA COMPETENCIA ECONÓMICA EN ESE SECTOR, LOS SERVICIOS DESAGREGADOS DE INTERCONEXIÓN (ENTRE ELLOS, LA ORIGINACIÓN DE TRÁFICO PÚBLICO CONMUTADO) PUEDEN CONSIDERARSE MERCADOS ESPECÍFICOS DE INSUMOS.

La Unión Internacional de Telecomunicaciones ha sostenido que, con la finalidad de ayudar a nuevos operadores a acceder al mercado de las telecomunicaciones y a enfrentar tanto los altos costos que implica el despliegue de nuevas redes, como el acceso restringido a recursos esenciales y la falta de incentivos a la inversión o su insuficiencia, resulta necesaria la implementación de esquemas de compartición de infraestructura, como instrumentos para fomentar la competencia en el sector mencionado. Así, la compartición de infraestructura activa –componentes electrónicos activos (inteligencia de la red), centrales, estaciones base, conmutadores de nodos de acceso, fibra iluminada, sistemas de gestión, *software* para funciones básicas del sistema, servidores para el acceso a banda ancha, entre otros– permite a las distintas redes de telecomunicaciones operar como un sistema único, para que la comunicación entre usuarios sea fluida e ininterrumpida. Bajo este esquema, aplicado a los servicios que se prestan a través de redes de telecomunicaciones, para los nuevos operadores es indispensable interconectarse con el concesionario que cuente con la mayor cantidad de accesos, pues en términos estadísticos, la mayor cantidad de tráfico tendrá como origen o destino a la red más grande. En estas condiciones, con la finalidad de asegurar que los concesionarios entrantes no se encuentren en desventaja competitiva por falta de interconexión con la red del concesionario que opere el mayor número de accesos a usuarios en las áreas de cobertura de sus respectivas concesiones y que la calidad de las redes interconectadas no se vea deteriorada por la falta de capacidades en la interconexión, se ha dispuesto que este último debe permitir el acceso de manera desagregada a, por lo menos, los siguientes servicios de interconexión: a) conducción de tráfico; b) enlaces de transmisión; c) puertos de acceso; d) señalización; e) tránsito; f) ubicación; g) compartición de infraestructura; h) servicios auxiliares conexos; e, i) acceso a servicios. Entonces, al ser el acceso a la originación de tráfico público conmutado y a los demás elementos que conforman el régimen de desagregación, un requisito indispensable para la promoción de la competencia en el sector, en la legislación de la materia se ha otorgado un tratamiento regulatorio diferenciado –basado en su distinción funcional–, a los servicios de interconexión desagregados (entendidos como insumos ofertados a los demás concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones) y al servicio final de telecomunicaciones (entendido como producto integrado ofertado a los usuarios finales). Por tanto, para el análisis de la competencia económica en el sector de las telecomunicaciones, los servicios desagregados de interconexión (entre ellos, la originación de tráfico público conmutado) pueden considerarse mercados específicos de insumos, cuyas relaciones de intercambio se entablan entre operadores y no entre éstos y los usuarios finales, pues estos últimos no guardan interés en su adquisición de manera segmentada.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA.

I.1o.A.E.119 A (10a.)

Amparo en revisión 90/2015. Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones y otros. 5 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Patricio González-Loyola Pérez. Secretario: Mario Jiménez Jiménez.

Nota: Con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, la denominación actual del órgano emisor es la de Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. NO ES UN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, SINO UN JUICIO AUTÓNOMO.

El artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo prevé que el juicio será improcedente contra resoluciones jurisdiccionales dictadas dentro del procedimiento y en relación con las cuales la ley ordinaria conceda algún recurso o medio de defensa, dentro del mismo procedimiento, que pueda tener por resultado modificarlas, revocarlas o nulificarlas (principio de definitividad de las resoluciones jurisdiccionales). Si esto es así, la tercería excluyente de dominio no reviste en absoluto el carácter de recurso o medio de defensa previsto en la ley ordinaria como parte de la instancia impugnativa del mismo procedimiento, porque los recursos o medios de defensa fungen como remedios jurisdiccionales de las resoluciones emitidas por el juzgador del conocimiento, para regularizar el juicio o anular los vicios del procedimiento, ya sean de forma o de fondo; mientras que la tercería excluyente de dominio tiene los atributos propios de un juicio y no de un recurso o medio de defensa que pueda interponerse dentro del mismo procedimiento. En efecto, en la tercería excluyente de dominio se ejerce una acción distinta a la que se debate en el juicio principal, por lo que la controversia que se discute y decide está relacionada con un problema sustantivo que es diferente al que se controvierte en el procedimiento del que deriva. Además, el actor tercerista es ajeno al debate que se presenta en el juicio del que surge y al ejercer la nueva acción debe acreditar un interés propio y distinto al de quienes son parte en aquél. Tampoco suspende el curso del negocio en que se interpone; se tramita en la vía ordinaria, a través de un procedimiento propio en el que se oye a las partes y se cumplen las formalidades esenciales, lo que materialmente le da la calidad de un juicio con sustantividad propia. En consecuencia, la tercería excluyente de dominio no es un recurso o medio de defensa dentro del procedimiento, en los términos previstos por la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.
XXVII.3o.97 K (10a.)

Amparo en revisión 68/2015. Aurora Marlene Solís Galán. 11 de junio de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Santiago Ermilo Aguilar Pavón, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, con fundamento en el artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Gustavo Valdovinos Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TRABAJADORES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA. TRATÁNDOSE DE APORTACIONES DE VIVIENDA, LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE PUEBLA Y LA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DE DICHA ENTIDAD, PREVEN LA FORMA Y EL ORGANISMO ANTE EL QUE DEBERÁN REALIZARSE, POR LO QUE SON INAPLICABLES, SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.

Conforme al artículo 277 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Puebla, las relaciones entre los Municipios y sus trabajadores (con excepción de los del Municipio de Puebla, el cual tiene una legislación laboral propia) se regulan por la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla. En materia de aportaciones de vivienda, esta última legislación establece que únicamente podrán hacerse retenciones, descuentos o deducciones al sueldo de los trabajadores, entre otros, cuando se trate de cubrir obligaciones a cargo del trabajador, previo su consentimiento, con motivo de la adquisición o del uso de habitaciones de interés social, siempre que esa afectación se haga mediante fideicomiso en alguna institución nacional de crédito autorizada –artículo 34, fracción VI–; asimismo, los Municipios pueden incorporar a sus trabajadores, mediante convenio, al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado de Puebla –artículo 5 de la ley que rige a dicho organismo– encargado de administrar el fondo de vivienda de los trabajadores, el cual funciona mediante el otorgamiento de créditos a largo plazo, que incluyen un sistema de financiamiento para su obtención mediante una garantía hipotecaria –artículos 12, fracción II, numeral 4 y 143–. Así, al existir en la legislación estatal las normas que regulan la forma en que se realizarán las aportaciones de vivienda, así como el organismo descentralizado ante el que se efectuarán, en tal materia son inaplicables supletoriamente la Ley Federal del Trabajo y la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, por no colmarse los requisitos previstos en la

jurisprudencia 2a./J. 34/2013 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XVIII, Tomo 2, marzo de 2013, página 1065, de rubro: "SUPLETORIEDAD DE LAS LEYES. REQUISITOS PARA QUE OPERE."

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.2o.T.9 L (10a.)

Amparo directo 381/2015. Romana Márquez Silva y otros. 23 de octubre de 2015. Unanimidad de votos, con voto concurrente del Magistrado Miguel Mendoza Montes. Ponente: Francisco Esteban González Chávez. Secretario: Samuel Vargas Aldana.

Esta tesis se publicó el viernes 26 de febrero de 2016 a las 10:30 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, AL EXIGIR LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE TRABAJO [ABANDONO DE LA TESIS IV.2o.A.80 A (10a.)]. Este Tribunal Colegiado de Circuito abandona el criterio sostenido en la tesis IV.2o.A.80 A (10a.), publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 7, Tomo II, junio de 2014, página 1938, de título y subtítulo: "TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, QUE EXIGE LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO.", toda vez que una nueva reflexión sobre el tema, originada en esta diversa integración, lleva a considerar que el artículo 86, fracción I, inciso e), de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León, al establecer como requisito para la obtención de la licencia especial para la conducción de los vehículos afectos a los diferentes sistemas y modalidades del servicio estatal de transporte, la presentación de la carta de no antecedentes penales, transgrede el derecho fundamental a la libertad de trabajo, previsto en el artículo 5o., párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Para justificar lo anterior, debe partirse de

la jurisprudencia P./J. 28/99, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo IX, abril de 1999, página 260, de rubro: "LIBERTAD DE TRABAJO. NO ES ABSOLUTA DE ACUERDO CON LOS PRINCIPIOS FUNDAMENTALES QUE LA RIGEN (ARTÍCULO 5o., PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).", de la cual se advierte que para determinar si la norma transgrede el derecho a la libertad de trabajo, ha de verificarse si le impide al particular el ejercicio de una actividad que: a) sea lícita; b) no afecte derechos de terceros; y, c) no afecte derechos de la sociedad en general, pues son los límites constitucionalmente válidos a ese derecho. En estas condiciones, la conducción de los vehículos referidos es una actividad lícita, regulada incluso por una ley estatal. Por otra parte, si bien es cierto que el aludido precepto 86, fracción I, inciso e), tiene como finalidad la seguridad de los usuarios del servicio público de transporte de personas, en lo que éstos y la sociedad están interesados, también lo es que la medida que prevé no es adecuada, razonable ni proporcional, en tanto que no guarda una vinculación directa y realmente útil para lograr el fin perseguido por la norma, es decir, no patentiza con algún grado de certeza, que al negar la licencia a quienes cometieron una conducta sancionada penalmente, se hará más seguro dicho servicio público y, más bien, provoca la estigmatización de quienes han sido sentenciados por cualquier conducta y cumplido su castigo, al considerarlos por ese solo hecho como "peligrosos", convirtiendo incluso la pena en inusitada, por lo que esa medida ocasiona discriminación, al excluir a aquellos que cuenten con antecedentes penales, en condiciones de igualdad respecto de quienes no los tienen, de obtener la licencia especial para conducir vehículos afectos a la prestación del servicio público de transporte de personas, lo que produce una afectación innecesaria y desmedida a derechos humanos constitucionalmente protegidos, que vulnera los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación, tutelados por el artículo 1o. constitucional. En consecuencia, el dispositivo legal mencionado, al excluir a quien cuenta con antecedentes penales de la posibilidad de tener la licencia especial para conducir vehículos afectos a los sistemas y modalidades del servicio estatal de transporte en el Estado de Nuevo León, contraviene el derecho fundamental a la libertad de trabajo.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.2o.A.4 CS (10a.)

Amparo en revisión 131/2015. Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nuevo León y otro. 8 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Secretaria: Ana Mitzi Hernández Rivera.

Nota: La presente tesis abandona el criterio sostenido en la diversa IV.2o.A.80 A (10a.), de título y subtítulo: "TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, QUE EXIGE LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, NO TRANSGREDE EL DERECHO A LA LIBERTAD DE TRABAJO.", publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 7, Tomo II, junio de 2014, página 1938.

La presente tesis aborda el mismo tema que la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 322/2014, que es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 7/2015, pendiente de resolverse por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, AL EXIGIR LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL [ABANDONO DE LAS TESIS IV.2o.A.78 A (10a.) Y IV.2o.A.81 A (10a.)]. Este Tribunal Colegiado de Circuito abandona los criterios sostenidos en las tesis IV.2o.A.78 A (10a.) y IV.2o.A.81 A (10a.), publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación* de los viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 horas y 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas, y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 3, Tomo III, febrero de 2014, página 2647 y Libro 7, Tomo II, junio de 2014, página 1937, de títulos y subtítulos: "TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, QUE EXIGE LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, NO TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO A LA NO DISCRIMINACIÓN." y "TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, QUE EXIGE LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS

QUE SE ENCUENTRAN AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL.", respectivamente. Lo anterior, toda vez que una nueva reflexión sobre el tema, originada en esta diversa integración, lleva a considerar que el artículo 86, fracción I, inciso e), de la Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable del Estado de Nuevo León, al establecer como requisito la presentación de la carta de no antecedentes penales para la obtención de la licencia especial para la conducción de los vehículos afectos a los diferentes sistemas y modalidades del servicio estatal de transporte, transgrede los derechos fundamentales a la igualdad y a la no discriminación, tutelados por el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto, a partir del test a que se refiere la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 55/2006, publicada en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXIV, septiembre de 2006, página 75, de rubro: "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL.", conforme al cual, para determinar si la distinción contenida en la norma descansa sobre una base objetiva y razonable o si, por el contrario, constituye una discriminación constitucionalmente vedada, se debe: 1) analizar si la distinción legislativa obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida; 2) examinar la racionalidad o adecuación de la distinción, esto es, si existe instrumentalidad entre la medida clasificatoria y el fin pretendido; y, 3) verificar que se cumpla con el requisito de la proporcionalidad, dado que el legislador no puede tratar de alcanzar objetivos constitucionalmente legítimos de un modo abiertamente desproporcional. En ese contexto, el requisito previsto en el aludido artículo 86, fracción I, inciso e), si bien es cierto que constituye una medida normativa que obedece a una finalidad objetiva y constitucionalmente válida, en razón de que el legislador busca la seguridad de los usuarios del servicio público de transporte de personas, entre otros, los que utilizan los vehículos denominados "taxis", también lo es que no es racional o adecuada, pues no es un medio apto para alcanzar la finalidad constitucional perseguida por el legislador, dado que la distinción que provoca excluir del otorgamiento de licencias especiales a las personas que cuenten con cualquier antecedente penal, no guarda una vinculación directa y realmente útil para lograr, con algún grado de certeza, que al negar la licencia a quienes cometieron una conducta sancionada penalmente, se hará más seguro dicho servicio público y, más bien, provoca la estigmatización de quienes han sido sentenciados por cualquier conducta y cumplido su castigo, al considerarlos por ese solo hecho como "peligrosos", convirtiendo incluso la pena en inusitada, lo que contraviene también el artículo 22 constitucional, máxime que el legislador, dentro de su potestad configurativa de la ley, puede prever medidas que evidencien una exclusión razonable y adecuada, con el objeto de lograr que una persona tenga las calificaciones y cualidades necesarias para conducir vehículos que presten el servicio público de transporte, por ejemplo, dar facultades a la autoridad admi-

nistrativa para que pondere en cada caso, las razones por las que algunas conductas previas del solicitante, por su relación directa, pueden incidir con cierto grado de certeza en la seguridad de los usuarios del servicio. En consecuencia, la medida analizada ocasiona discriminación, al excluir a las personas con antecedentes penales, en condiciones de igualdad respecto de quienes no los tienen, de obtener la licencia especial para dedicarse a conducir vehículos afectos a la prestación del servicio público de transporte, en ejercicio de su libertad de trabajo, lo que produce una afectación innecesaria y desmedida a derechos humanos constitucionalmente protegidos y vuelve desproporcional la medida.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.2o.A.3 CS (10a.)

Amparo en revisión 131/2015. Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nuevo León y otro. 8 de octubre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Hugo Alejandro Bermúdez Manrique. Secretaria: Ana Mitzi Hernández Rivera.

Nota: La presente tesis abandona el criterio sostenido en las diversas IV.2o.A.78 A (10a.) y IV.2o.A.81 A (10a.), de títulos y subtítulos: "TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, QUE EXIGE LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, NO TRANSGREDE EL DERECHO HUMANO A LA NO DISCRIMINACIÓN." y "TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, QUE EXIGE LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS QUE SE ENCUENTRAN AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 22 CONSTITUCIONAL.", publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación* de los viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 horas y 6 de junio de 2014 a las 12:30 horas, y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 3, Tomo III, febrero de 2014, página 2647 y Libro 7, Tomo II, junio de 2014, página 1937, respectivamente.

La presente tesis aborda el mismo tema que la sentencia dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, al resolver el amparo en revisión 322/2014, que es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 7/2015, pendiente de resolverse por el Pleno en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS EN LOS QUE LA LITIS SE CENTRE EN

RESOLVER EL MEJOR DERECHO A SUCEDER LOS BIENES AGRARIOS DE UN EJIDATARIO, AUN CUANDO LA ACCIÓN O RECONVENCIÓN SE BASE EN UN TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO OTORGADO POR EL *DE CUJUS* EN FAVOR DE UNA DE LAS PARTES.

El artículo 163 de la Ley Agraria establece que los Tribunales Unitarios Agrarios son competentes para dirimir las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las disposiciones contenidas en el propio ordenamiento; de ahí que tienen facultades para conocer de los juicios en los que la litis se centre en resolver el mejor derecho a suceder los bienes agrarios de un ejidatario, de acuerdo con el artículo 18, fracción VII, de la Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, aun cuando la acción o reconvencción se base en un testamento público abierto otorgado por el *de cujus* en favor de una de las partes pues, de lo contrario, no sería posible resolver la materia del juicio, lo cual contraveniría el derecho a la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, máxime si la otra reclama su derecho a suceder con sustento en la lista correspondiente depositada ante el Registro Agrario Nacional.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

III.1o.A.26 A (10a.)

Amparo directo 389/2015. José Juan Ibarra Amezcua. 8 de diciembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Rogelio Camarena Cortés. Secretario: José Guadalupe Castañeda Ramos.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO. LA CONTROVERSI A SUSCITADA POR EL NOMBRAMIENTO DE MAESTRO EMÉRITO, AL SER DE NATURALEZA ACADÉMICA, DEBE RESOLVERSE POR SUS ÓRGANOS INTERNOS Y NO POR LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

Conforme al artículo 3o., fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las universidades gozan de autonomía, así como de facultades y responsabilidad de autogobernarse. En ese sentido, se fijan los términos de ingreso, promoción y permanencia de su personal académico; por ello, en términos de la cláusula 134 del Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Universidad Autónoma de Guerrero y su Sindicato de Trabajadores Académicos, en relación con los preceptos 12, 13 y 14 del Reglamento de Maestro Emérito de la referida universidad, cuando se suscite controversia para el otorgamiento de nombramiento de maestro emérito a algún trabajador, previo dictamen de la Comisión Mixta Paritaria de Academia, corresponderá a la Comisión de Asuntos Académicos del Honorable Congreso Universitario resolver dicha cuestión y no a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, en virtud de que, en esos casos, no existen conflictos de naturaleza laboral, sino académica.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

XXI.3o.C.T.2 L (10a.)

Amparo directo 735/2015. Universidad Autónoma de Guerrero. 5 de noviembre de 2015. Unanimidad de votos. Ponente: Aquino Bautista Cruz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: José Antonio Flores Pérez.

Esta tesis se publicó el viernes 19 de febrero de 2016 a las 10:15 horas en el *Semanario Judicial de la Federación*.

SEXTA PARTE

NORMATIVA Y ACUERDOS RELEVANTES

SECCIÓN PRIMERA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Subsección 1.

PLENO

ACUERDO GENERAL NÚMERO 1/2016, DE QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE LEVANTA EL APLAZAMIENTO DEL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN EN LOS AMPAROS EN REVISIÓN EN LOS QUE SUBSISTA EL PROBLEMA DE PROCEDENCIA DE DEMANDAS DE AMPARO EN LAS QUE SE CONTROVIERTA LA CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO NÚMERO 536, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DIVERSO NÚMERO 534.- "DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA A CONTRATAR EMPRÉSTITOS PARA SER DESTINADOS AL REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL A SU CARGO QUE SE INDICA, Y A CELEBRAR LAS DEMÁS OPERACIONES FINANCIERAS Y ACTOS JURÍDICOS QUE SE SEÑALAN", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE O BIEN, EL

PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DEL CITADO DECRETO; RELACIONADO CON EL DIVERSO 5/2012, DE VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DOCE.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. Conforme a lo previsto en los artículos 94, párrafo octavo, de la Constitución General, así como 11, fracciones VI y XXI, y 37, fracción IX, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió el Acuerdo General Plenario 5/2012, de veintiséis de marzo de dos mil doce, en el cual se determinó:

"PRIMERO. Los Juzgados de Distrito enviarán directamente a los Tribunales Colegiados de Circuito los amparos en revisión en los que subsista el problema del desechamiento de demandas de amparo en las que se haya impugnado la constitucionalidad del Decreto número 536, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del diverso número 534.- "Decreto por el que se autoriza al Estado de Coahuila de Zaragoza a contratar empréstitos para ser destinados al refinanciamiento de la deuda pública estatal a su cargo que se indica, y a celebrar las demás operaciones financieras y actos jurídicos que se señalan", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila del veintinueve de septiembre de dos mil once o bien en los que subsista el problema de constitucionalidad del citado Decreto, derivados de los juicios de amparo en los que se haya dictado o se dicte el proveído o la sentencia correspondiente.

SEGUNDO. En los amparos en revisión a que se refiere el punto anterior, radicados y que se radiquen en los Tribunales Colegiados de Circuito, se deberá continuar el trámite hasta el estado de resolución y aplazar el dictado de ésta, hasta en tanto la Segunda Sala de este Alto Tribunal establezca el o los criterios respectivos, y se emita el Acuerdo General Plenario que corresponda.";

SEGUNDO. En sesiones celebradas los días veinticuatro de junio y doce de agosto, ambos de dos mil quince, la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió, respectivamente, los amparos en revisión 464/2015, 465/2015, 467/2015, 468/2015, 469/2015 y 470/2015, en el sentido de confirmar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de amparo respectivo, al considerar, en esencia, que: "(...) Al respecto, si bien al quejoso le incumbe, como residente y contribuyente en el Estado de Coahuila, la buena administración del erario o su correcto manejo en forma transparente, efi-

ciente y eficaz, a la luz de lo previsto por el artículo 134 constitucional, así como que los recursos económicos que dispongan los Estados se administren con tales características y satisfacer los objetivos a los que están destinados; lo cierto es que esa preocupación o incumbencia, en sí misma, no constituye el interés legítimo que jurisprudencialmente se requiere para la procedencia del juicio de amparo indirecto, sino que se traduce en un interés simple, que en términos generales tiene todo individuo en el legal manejo de los recursos económicos de que disponga el Estado, empero no refleja que el peticionario se encuentre en una especial situación de suerte que el decreto y la contratación de empréstitos impugnados, produzcan una situación cuyo efecto perjudique su esfera jurídica en sentido cualitativo, real y actual, que indique su relevancia a fin de ser tutelado. En efecto, el interés que ostenta el quejoso no es sino el común que cualquier miembro de la sociedad tiene de que se cumpla el marco constitucional y legal respecto del empleo de los recursos públicos, máxime que el destinatario del gasto público lo es toda la población y no únicamente los contribuyentes de la entidad federativa. Así es, la contratación de empréstitos para deuda pública, redundante en una afectación societaria, por ello, general y abstracta; que si bien es existente, no es reducible al interés legítimo necesario para la procedencia del juicio de amparo indirecto en tanto no se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, pues el pretendido perjuicio no pasa de ser una simple posibilidad, de suerte que no existe la lógica que debe guardar el vínculo entre el quejoso y la afectación aducida. Además, de la situación del peticionario en el orden jurídico no deriva el posible beneficio que la eventual anulación de los actos reclamados pudiera producirle en su esfera jurídica, dado que la argüida circunstancia de que la contratación de los empréstitos de mérito provoca el incremento del cobro de las contribuciones, constituye una situación hipotética desde la perspectiva del propio quejoso que finalmente es insuficiente para conceder legitimación a un ciudadano para reclamar actos como los que aquí pretende combatir mediante el juicio de amparo indirecto. Lo que se afirma, en virtud de que, como se dijo antes, los actos reclamados tienen por objeto la contratación de empréstitos para refinanciar la deuda pública del Estado de Coahuila, que se dirigen específicamente a las autoridades correspondientes y de cuyo texto no se desprende una relación ni efecto que de manera refleja o colateral pudiera perjudicar la esfera jurídica del peticionario, no se percibe una lesión objetiva o material de ella derivada de una peculiar situación que tuviera en el orden jurídico. Tampoco que en una eventual concesión del amparo se viera beneficiado. (...) De lo expuesto, lo procedente es confirmar la determinación del Juez de Distrito en el sentido de que se actualizó la causal de improcedencia previstas (sic) en el artículo 73, fracciones XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción I, de la Constitución, por lo cual se decretó el sobreseimiento en el juicio, con apoyo en el artículo 74,

fracción III, del mismo ordenamiento, respecto del Decreto 536 que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones del diverso 534, relativo al pago de empréstitos que contraiga el Estado de Coahuila de Zaragoza. (...);

TERCERO. Si bien el párrafo último del artículo 217 de la Ley de Amparo prevé que la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, debe tomarse en cuenta que la aplicación del criterio jurisprudencial referido en el Considerando Segundo que antecede a los amparos promovidos antes de su integración, no da lugar a desconocer la situación jurídica en la que previamente se encontraban las partes en esos juicios, y

CUARTO. Por tanto, se estima que ha dejado de existir la razón que motivó el aplazamiento decretado en el Acuerdo General Plenario 5/2012 citado en el Considerando Primero de este instrumento normativo, por lo que deben resolverse los amparos en revisión en los que subsista el problema de procedencia de demandas de amparo en las que se haya impugnado la constitucionalidad del Decreto número 536, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del diverso número 534.- "Decreto por el que se autoriza al Estado de Coahuila de Zaragoza a contratar empréstitos para ser destinados al refinanciamiento de la deuda pública estatal a su cargo que se indica, y a celebrar las demás operaciones financieras y actos jurídicos que se señalan", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila del veintinueve de septiembre de dos mil once o bien en los que subsista el problema de constitucionalidad del citado Decreto.

En consecuencia, con fundamento en lo antes señalado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expide el siguiente:

ACUERDO:

PRIMERO. Se levanta el aplazamiento dispuesto en el Acuerdo General Plenario 5/2012, de veintiséis de marzo de dos mil doce, del dictado de la resolución en los amparos en revisión en los que subsista el problema de procedencia de demandas de amparo en las que se haya impugnado la constitucionalidad del Decreto número 536, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del diverso número 534.- "Decreto por el que se autoriza al Estado de Coahuila de Zaragoza a contratar empréstitos para ser destinados al refinanciamiento de la deuda pública estatal a su cargo que se indica, y a celebrar las demás operaciones financieras y actos jurídicos que se señalan", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila

del veintinueve de septiembre de dos mil once o bien en los que subsista el problema de constitucionalidad del citado Decreto.

SEGUNDO. Los asuntos a que se refiere el Punto inmediato anterior pendientes de resolución en los Tribunales Colegiados de Circuito, deberán ser resueltos por éstos tomando en consideración el criterio jurisprudencial derivado de lo resuelto por la Segunda Sala de este Alto Tribunal en los asuntos señalados en el Considerando Segundo de este instrumento normativo.

TRANSITORIOS:

PRIMERO. Este Acuerdo General entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Publíquese el presente Acuerdo General en el Diario Oficial de la Federación, en el *Semanario Judicial de la Federación* y, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción XIV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, en su momento, en el diverso 70, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en medios electrónicos de consulta pública; y hágase del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal y, para su cumplimiento, de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Colegiados de Circuito.

EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

LIC. RAFAEL COELLO CETINA

El licenciado Rafael Coello Cetina, Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

CERTIFICA:

Este ACUERDO GENERAL NÚMERO 1/2016, DE QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE LEVANTA EL APLAZAMIENTO DEL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN EN LOS AMPAROS EN REVISIÓN EN LOS QUE SUBSISTA EL PROBLEMA DE PROCEDEN-

CIA DE DEMANDAS DE AMPARO EN LAS QUE SE CONTROVIERTA LA CONSTITUCIONALIDAD DEL DECRETO NÚMERO 536, MEDIANTE EL CUAL SE REFORMARON, ADICIONARON Y DEROGARON DIVERSAS DISPOSICIONES DEL DIVERSO NÚMERO 534.- "DECRETO POR EL QUE SE AUTORIZA AL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA A CONTRATAR EMPRÉSTITOS PARA SER DESTINADOS AL REFINANCIAMIENTO DE LA DEUDA PÚBLICA ESTATAL A SU CARGO QUE SE INDICA, Y A CELEBRAR LAS DEMÁS OPERACIONES FINANCIERAS Y ACTOS JURÍDICOS QUE SE SEÑALAN", PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL ONCE O BIEN, EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD DEL CITADO DECRETO; RELACIONADO CON EL DIVERSO 5/2012, DE VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL DOCE, fue emitido por el Tribunal Pleno en sesión privada celebrada el día de hoy, por unanimidad de diez votos de los señores Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y presidente Luis María Aguilar Morales. El señor Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, estuvo ausente por comisión.—Ciudad de México, a quince de febrero de dos mil dieciséis (D.O.F. DE 22 DE FEBRERO DE 2016).

Nota: El Acuerdo General Número 5/2012, de veintiséis de marzo de dos mil doce, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se ordena a los Juzgados de Distrito el envío directo a los Tribunales Colegiados de Circuito de los amparos en revisión en los que subsista el problema del desechamiento de demandas de amparo en las que se controvierta la constitucionalidad del Decreto número 536, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del diverso número 534.- "Decreto por el que se autoriza al Estado de Coahuila de Zaragoza a contratar empréstitos para ser destinados al refinanciamiento de la deuda pública estatal a su cargo que se indica, y a celebrar las demás operaciones financieras y actos jurídicos que se señalan", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila del veintinueve de septiembre de dos mil once o bien el problema de constitucionalidad del citado Decreto; y se dispone el aplazamiento en el dictado de la resolución de los radicados y que se radiquen en los referidos órganos colegiados federales citado, aparece publicado en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro VII, Tomo 2, abril de 2012, página 1993.

INSTRUMENTO NORMATIVO APROBADO POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL

DIECISÉIS, POR EL QUE SE MODIFICAN EL TÍTULO Y EL PUNTO TERCERO, PÁRRAFO PRIMERO, DEL ACUERDO GENERAL NÚMERO 10/2015, DE DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE ORDENA A LOS JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, LA SUSPENSIÓN DEL ENVÍO A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PRIMERO Y CUARTO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, TAMBIÉN CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, Y EN CONSECUENCIA LA REMISIÓN DIRECTA A ESTE ALTO TRIBUNAL DE AMPAROS EN REVISIÓN EN LOS QUE SUBSISTA EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD, INDISTINTAMENTE, DE LOS ARTÍCULOS 17-K, 18, 28, FRACCIONES III Y IV, 29, Y SEGUNDO TRANSITORIO, FRACCIONES III, IV Y VIII, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, DEL DIVERSO 22, FRACCIONES IV Y VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015, ASÍ COMO DE LAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL QUE REGULAN LO PREVISTO EN LOS REFERIDOS PRECEPTOS EN RELACIÓN CON EL BUZÓN TRIBUTARIO Y LA CONTABILIDAD EN

MEDIOS ELECTRÓNICOS; Y SE DISPONE EL APLAZAMIENTO EN EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS DE ESA NATURALEZA QUE SE RADIQUEN EN LOS CITADOS TRIBUNALES COLEGIADOS.

CONSIDERANDO:

PRIMERO. El diez de agosto de dos mil quince el Tribunal Pleno emitió el Acuerdo General Número 10/2015, en el cual se determinó:

"PRIMERO. Los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, deberán suspender por el momento el envío a los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región, también con residencia en el Distrito Federal, de los amparos en revisión en los que subsista el problema de constitucionalidad, indistintamente, de los artículos 17-K, 18, 28, fracciones III y IV, 29, y segundo transitorio, fracciones III, IV y VII, del Código Fiscal de la Federación, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del nueve de diciembre de dos mil trece, del diverso 22, fracciones IV y VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, así como de las diversas disposiciones de observancia general que regulan lo previsto en los referidos preceptos en relación con el buzón tributario y la contabilidad en medios electrónicos.

SEGUNDO. Los titulares de los referidos Juzgados de Distrito deberán remitir directamente a este Alto Tribunal, respectivamente, diez amparos en revisión de los señalados en el punto primero del presente Acuerdo General, en los que se aborden la mayor cantidad de temas de procedencia de los juicios respectivos y de la constitucionalidad de las disposiciones mencionadas.

TERCERO. En tanto el Pleno de este Alto Tribunal emite el Acuerdo General Plenario que corresponda, en los amparos en revisión del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, se deberá continuar el trámite hasta el estado de resolución y aplazar el dictado de ésta.

Cuando la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelva el suficiente número de asuntos de los señalados en el punto segundo que antecede, su Secretaría de Acuerdos lo comunicará a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con resi-

dencia en el Distrito Federal, con el objeto de que éstos remitan a los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región, también con residencia en el Distrito Federal, los amparos mencionados en el párrafo anterior.”;

SEGUNDO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 37 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede aplazar mediante acuerdos generales la resolución de juicios de amparo pendientes de resolver, por lo que resulta aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de lo señalado en el párrafo segundo de su artículo 2o., lo previsto en el diverso 366 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en cuanto a la atribución para decretar la suspensión del proceso cuando la decisión no pueda pronunciarse hasta que se dicte resolución en otro negocio, supuesto que se actualiza cuando existen juicios de amparo directo o recursos de revisión de los previstos en la fracción III del artículo 104 constitucional pendientes de resolver en los tribunales del Poder Judicial de la Federación en los que se han suscitado cuestiones que serán definidas por aquélla, en la inteligencia de que en la legislación aplicable a los referidos recursos se ha establecido que para su tramitación se aplicará lo previsto en la legislación de amparo, y

TERCERO. Con el fin de tutelar el derecho a la seguridad jurídica reconocido en el artículo 16 constitucional, y en virtud de que la institución del aplazamiento o suspensión del dictado de la resolución está prevista en el artículo 366 antes invocado, por aplicación supletoria de éste, se estima conveniente acordar el aplazamiento de las resoluciones de juicios de amparo directo y de los recursos de revisión promovidos contra sentencias emitidas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en los que subsista el problema de constitucionalidad, indistintamente, de los artículos 17-K, 18, 28, fracciones III y IV, 29, y segundo transitorio, fracciones III, IV y VII, del Código Fiscal de la Federación, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del nueve de diciembre de dos mil trece, del diverso 22, fracciones IV y VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, así como de las diversas disposiciones de observancia general que regulan lo previsto en los referidos preceptos en relación con el buzón tributario y la contabilidad en medios electrónicos.

En consecuencia, con fundamento en los preceptos legales mencionados, así como en la fracción XXI del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación expide el presente Instrumento Normativo en virtud del cual:

ÚNICO. Se modifican el título y el punto tercero, párrafo primero, del Acuerdo General Plenario 10/2015, de diez de agosto de dos mil quince, para quedar como sigue:

"ACUERDO GENERAL NÚMERO 10/2015, DE DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE ORDENA A LOS JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, LA SUSPENSIÓN DEL ENVÍO A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PRIMERO Y CUARTO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, TAMBIÉN CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, Y EN CONSECUENCIA LA REMISIÓN DIRECTA A ESTE ALTO TRIBUNAL DE AMPAROS EN REVISIÓN EN LOS QUE SUBSISTA EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD, INDISTINTAMENTE, DE LOS ARTÍCULOS 17-K, 18, 28, FRACCIONES III Y IV, 29, Y SEGUNDO TRANSITORIO, FRACCIONES III, IV Y VIII, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, DEL DIVERSO 22, FRACCIONES IV Y VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015, ASÍ COMO DE LAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL QUE REGULAN LO PREVISTO EN LOS REFERIDOS PRECEPTOS EN RELACIÓN CON EL BUZÓN TRIBUTARIO Y LA CONTABILIDAD EN MEDIOS ELECTRÓNICOS; Y SE DISPONE EL APLAZAMIENTO EN EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS DE ESA NATURALEZA QUE SE RADIQUE EN LOS CITADOS TRIBUNALES COLEGIADOS, ASÍ COMO DE AMPAROS DIRECTOS Y DE RECURSOS DE REVISIÓN PROMOVIDOS CONTRA SENTENCIAS EMITIDAS POR LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA EN LOS QUE SUBSISTA EL REFERIDO PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD.

...

TERCERO. En tanto el Pleno de este Alto Tribunal emite el Acuerdo General Plenario que corresponda, en los amparos en revisión, en los amparos directos y en los recursos de revisión administrativa promovidos contra sentencias emitidas por las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa del conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, en los que subsista el problema de constitucionalidad, indistintamente, de los artículos 17-K, 18, 28, fracciones III y IV, 29, y segundo transitorio, fracciones III, IV y VII, del Código Fiscal de la Federación, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del nueve de diciembre de dos mil trece, del diverso 22, fracciones IV y VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, así como de las diversas disposiciones de observancia

general que regulan lo previsto en los referidos preceptos en relación con el buzón tributario y la contabilidad en medios electrónicos, se deberá continuar el trámite hasta el estado de resolución y aplazar el dictado de ésta.

...".

TRANSITORIOS:

PRIMERO. El presente Instrumento Normativo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Publíquese el presente Instrumento Normativo en el Diario Oficial de la Federación, en el *Semanario Judicial de la Federación* y, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción XIV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y, en su momento, en el diverso 70, fracción I, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en medios electrónicos de consulta pública, y hágase del conocimiento del Consejo de la Judicatura Federal y, para su cumplimiento, de los Tribunales Colegiados de Circuito, sin menoscabo de que la Secretaría General de Acuerdos difunda el texto íntegro del Acuerdo General Plenario 10/2015 en dichos medios electrónicos.

**EL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

MINISTRO LUIS MARÍA AGUILAR MORALES

EL SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS

LIC. RAFAEL COELLO CETINA

El licenciado Rafael Coello Cetina, Secretario General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,

CERTIFICA:

Este INSTRUMENTO NORMATIVO APROBADO POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS, POR EL QUE SE MODIFICAN EL TÍTULO Y EL PUNTO TERCERO, PÁRRAFO PRIMERO, DEL ACUERDO GENERAL NÚMERO 10/2015, DE DIEZ DE AGOSTO DE DOS MIL QUINCE, DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, POR EL QUE SE ORDENA A LOS JUZ-

GADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, LA SUSPENSIÓN DEL ENVÍO A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PRIMERO Y CUARTO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, TAMBIÉN CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, Y EN CONSECUENCIA LA REMISIÓN DIRECTA A ESTE ALTO TRIBUNAL DE AMPAROS EN REVISIÓN EN LOS QUE SUBSISTA EL PROBLEMA DE CONSTITUCIONALIDAD, INDISTINTAMENTE, DE LOS ARTÍCULOS 17-K, 18, 28, FRACCIONES III Y IV, 29, Y SEGUNDO TRANSITORIO, FRACCIONES III, IV Y VIII, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, REFORMADOS MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL NUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL TRECE, DEL DIVERSO 22, FRACCIONES IV Y VI, DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2015, ASÍ COMO DE LAS DIVERSAS DISPOSICIONES DE OBSERVANCIA GENERAL QUE REGULAN LO PREVISTO EN LOS REFERIDOS PRECEPTOS EN RELACIÓN CON EL BUZÓN TRIBUTARIO Y LA CONTABILIDAD EN MEDIOS ELECTRÓNICOS; Y SE DISPONE EL APLAZAMIENTO EN EL DICTADO DE LA RESOLUCIÓN DE LOS ASUNTOS DE ESA NATURALEZA QUE SE RADIQUEN EN LOS CITADOS TRIBUNALES COLEGIADOS, fue emitido por el Tribunal Pleno en sesión privada celebrada el día de hoy, por unanimidad de diez votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Presidente Luis María Aguilar Morales. El Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo, estuvo ausente por comisión.—Ciudad de México, a quince de febrero de dos mil dieciséis (D.O.F. DE 22 DE FEBRERO DE 2016).

Nota: El Acuerdo General Número 10/2015, de diez de agosto de dos mil quince, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se ordena a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, la suspensión del envío a los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región, también con residencia en el Distrito Federal, y en consecuencia la remisión directa a este Alto Tribunal de amparos en revisión en los que subsista el problema de constitucionalidad, indistintamente, de los artículos 17-K, 18, 28, fracciones III y IV, 29, y segundo transitorio, fracciones III, IV y VIII, del Código Fiscal de la Federación, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del nueve de diciembre de dos mil trece, del diverso 22, fracciones IV y VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, así como de las diversas disposiciones de observancia general que regulan lo previsto en los referidos preceptos en relación con el buzón tributario y la contabilidad en medios electrónicos; y se dispone el aplazamiento en el dictado de la resolución de los asuntos de esa naturaleza que se radiquen en los citados Tribunales Colegiados citado, aparece publicado en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 21, Tomo III, agosto de 2015, página 2653.

SECCIÓN SEGUNDA
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL POR EL QUE SE CAMBIA LA DENOMINA- CIÓN DE DISTRITO FEDERAL POR CIU- DAD DE MÉXICO EN TODO SU CUERPO NORMATIVO

CONSIDERANDO

PRIMERO. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 94, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 100, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones;

TERCERO. Es facultad del Consejo de la Judicatura Federal expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

CUARTO. De conformidad con el artículo 81, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Consejo de la Ju-

dicatura Federal establecer la normatividad y los criterios para modernizar los sistemas y procedimientos administrativos internos;

QUINTO. Con fecha 29 de enero del año en curso se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma política de la Ciudad de México;

SEXTO. Con la publicación de ese decreto el Distrito Federal pasa a denominarse Ciudad de México y se eleva a rango de entidad federativa que goza de autonomía en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, con todos los derechos y obligaciones que a ello conlleva, por lo que en su artículo transitorio décimo cuarto establece que a partir de la entrada en vigor del mismo todas las referencias que en la Constitución y demás ordenamientos jurídicos se hagan del Distrito Federal deberán entenderse hechas a la Ciudad de México;

SÉPTIMO. En consecuencia y tomando en consideración que en nuestro marco normativo interno en los distintos acuerdos generales que regulan las distintas materias del Consejo de la Judicatura Federal y de los órganos jurisdiccionales se hace mención al Distrito Federal, resulta conveniente hacer la referencia a la Ciudad de México, para armonizar nuestra normativa interna con la reforma constitucional.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

ARTÍCULO ÚNICO. En todos los acuerdos generales y normativa expedidos por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en los que se haga referencia al Distrito Federal se deberá entender como hecha a la Ciudad de México.

Por lo anterior, los nombres de los órganos jurisdiccionales con residencia en la Ciudad de México deberán sustituir el nombre Distrito Federal por la denominación Ciudad de México.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Se instruye a todos los órganos y áreas del Consejo de la Judicatura Federal para que a partir de la entrada en vigor del presente acuerdo general se haga referencia a la Ciudad de México.

Asimismo, se les instruye para que la papelería impresa se siga utilizando hasta su agotamiento y, por lo que respecta a los sellos oficiales, hasta que se efectúe su sustitución.

TERCERO. Publíquese el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el Portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

CUARTO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente acuerdo.

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos de los señores consejeros: Presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—Ciudad de México, a tres de febrero de dos mil dieciséis (D.O.F. DE 5 DE FEBRERO DE 2016).

**ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,
QUE REFORMA EL SIMILAR 36/2014 QUE
REGULA LOS CENTROS DE JUSTICIA
PENAL FEDERAL, ASÍ COMO LOS DIVER-
SOS ACUERDOS GENERALES QUE
CREAN LOS CENTROS DE JUSTICIA
PENAL FEDERAL EN LOS ESTADOS DE**

PUEBLA, DURANGO, YUCATÁN, ZACATECAS, GUANAJUATO, BAJA CALIFORNIA SUR, QUERÉTARO, SAN LUIS POTOSÍ, COAHUILA DE ZARAGOZA, SINALOA, OAXACA, CHIHUAHUA, CHIAPAS, NAYARIT Y TLAXCALA, PARA PRECISAR LA TEMPORALIDAD EN EL CARGO DE ADMINISTRADOR.

CONSIDERANDO

PRIMERO. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 94, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 100, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones;

TERCERO. Es facultad del Consejo de la Judicatura Federal expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

CUARTO. De conformidad con el artículo 81, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal establecer la normatividad y los criterios para modernizar los sistemas y procedimientos administrativos internos; y

QUINTO. Mediante Acuerdo General 10/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se reformó el similar 36/2014, que regula los Centros de Justicia Penal Federal para establecer, entre otros aspectos, que los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio fungirán como Administradores del Centro de su adscripción, por un año y de forma rotativa en el orden de su denominación.

Sin embargo, las variaciones en las cargas de trabajo que se presentan en los diversos centros, la conveniencia de aprovechar la experiencia adquirida por los administradores en el ejercicio de sus funciones, así como las necesidades del servicio que se plantean en cada residencia, llevan a la consideración de no establecer, por el momento, plazos determinados al ejercicio del cargo de Administrador de los Centros de Justicia Penal Federal, cuya duración será fijada por el Consejo de la Judicatura Federal conforme las necesidades del servicio lo requieran.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

ARTÍCULO 1. Se reforma el artículo 7 del Acuerdo General 36/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos acuerdos generales, para quedar como sigue:

"Artículo 7. Los Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio fungirán como Administradores del Centro de su adscripción, hasta en tanto lo determine el Consejo de la Judicatura Federal, a propuesta de la Comisión de Adscripción."

ARTÍCULO 2. Se adiciona el artículo 2 con un nuevo inciso I y se recorre su numeración respetando su contenido, asimismo se reforma el artículo 4, último párrafo, ambos del Acuerdo General 51/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla, para quedar como sigue:

"Artículo 2. Para efectos del presente acuerdo se entenderá por:

I. Administrador: Juez de Distrito encargado de la administración del Centro de Justicia Penal Federal;

II. Centro: ...

III. a VII. ...

Artículo 4. El Centro se integra por un Administrador y, además, por:

I. a VI. ...

...

El Centro contará con la plantilla laboral autorizada, y la administración del Centro se registrará conforme a las disposiciones del Acuerdo General 36/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal. El turno como Administrador corresponderá al Juez de Distrito del Centro que sea designado por el Consejo, cuya duración en el cargo será determinada conforme lo dispuesto por el ordenamiento antes citado."

ARTÍCULO 3. Se adiciona el artículo 2 con un nuevo inciso I y se recorre su numeración respetando su contenido, asimismo se reforma el artículo 4, último párrafo, ambos del Acuerdo General 52/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Durango, para quedar como sigue:

"Artículo 2. Para efectos del presente acuerdo se entenderá por:

I. Administrador: Juez de Distrito encargado de la administración del Centro de Justicia Penal Federal;

II. Centro: ...

III. a VII. ...

Artículo 4. El Centro se integra por un Administrador y, además, por:

I. a VI. ...

...

El Centro contará con la plantilla laboral autorizada, y la administración del Centro se registrará conforme a las disposiciones del Acuerdo General 36/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal. El turno como Administrador corresponderá al Juez de Distrito del Centro que sea designado por el Consejo, cuya duración en el cargo será determinada conforme lo dispuesto por el ordenamiento antes citado."

ARTÍCULO 4. Se adiciona el artículo 2 con un nuevo inciso I y se recorre su numeración respetando su contenido, asimismo se reforma el artículo 4, último párrafo, ambos del Acuerdo General 1/2015 del Pleno del Consejo de

la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, para quedar como sigue:

"Artículo 2. Para efectos del presente acuerdo se entenderá por:

I. Administrador: Juez de Distrito encargado de la administración del Centro de Justicia Penal Federal;

II. Centro: ...

III. a VII. ...

Artículo 4. El Centro se integra por un Administrador y, además, por:

I. a V. ...

...

El Centro contará con la plantilla laboral autorizada, y la administración del Centro se regirá conforme a las disposiciones del Acuerdo General 36/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal. El turno como Administrador corresponderá al Juez de Distrito del Centro que sea designado por el Consejo, cuya duración en el cargo será determinada conforme lo dispuesto por el ordenamiento antes citado."

ARTÍCULO 5. Se adiciona el artículo 2 con un nuevo inciso I y se recorre su numeración respetando su contenido, asimismo se reforma el artículo 4, último párrafo, ambos del Acuerdo General 2/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas, para quedar como sigue:

"Artículo 2. Para efectos del presente acuerdo se entenderá por:

I. Administrador: Juez de Distrito encargado de la administración del Centro de Justicia Penal Federal;

II. Centro: ...

III. a VII. ...

Artículo 4. El Centro se integra por un Administrador y, además, por:

I. a V. ...

...

El Centro contará con la plantilla laboral autorizada, y la administración del Centro se regirá conforme a las disposiciones del Acuerdo General 36/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal. El turno como Administrador corresponderá al Juez de Distrito del Centro que sea designado por el Consejo, cuya duración en el cargo será determinada conforme lo dispuesto por el ordenamiento antes citado."

ARTÍCULO 6. Se reforma el **artículo transitorio segundo** del Acuerdo General 31/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato, para quedar como sigue:

"SEGUNDO. El turno como Administrador corresponderá al Juez de Distrito del Centro que sea designado por el Consejo, cuya duración en el cargo será determinada conforme lo dispuesto por el Acuerdo General 36/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal."

ARTÍCULO 7. Se reforma el **artículo transitorio segundo** del Acuerdo General 32/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California Sur, para quedar como sigue:

"SEGUNDO. El turno como Administrador corresponderá al Juez de Distrito del Centro que sea designado por el Consejo, cuya duración en el cargo será determinada conforme lo dispuesto por el Acuerdo General 36/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal."

ARTÍCULO 8. Se reforma el **artículo transitorio segundo** del Acuerdo General 33/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro, para quedar como sigue:

"SEGUNDO. El turno como Administrador corresponderá al Juez de Distrito del Centro que sea designado por el Consejo, cuya duración en el cargo será determinada conforme lo dispuesto por el Acuerdo General 36/2014, del

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal."

ARTÍCULO 9. Se reforma el **artículo transitorio segundo** del Acuerdo General 34/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:

"SEGUNDO. El turno como Administrador corresponderá al Juez de Distrito del Centro que sea designado por el Consejo, cuya duración en el cargo será determinada conforme lo dispuesto por el Acuerdo General 36/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal."

ARTÍCULO 10. Se reforma el **artículo transitorio segundo** del Acuerdo General 44/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Torreón, para quedar como sigue:

"SEGUNDO. El turno como Administrador corresponderá al Juez de Distrito del Centro que sea designado por el Consejo, cuya duración en el cargo será determinada conforme lo dispuesto por el Acuerdo General 36/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal."

ARTÍCULO 11. Se reforma el **artículo transitorio segundo** del Acuerdo General 45/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán, para quedar como sigue:

"SEGUNDO. El turno como Administrador corresponderá al Juez de Distrito del Centro que sea designado por el Consejo, cuya duración en el cargo será determinada conforme lo dispuesto por el Acuerdo General 36/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal."

ARTÍCULO 12. Se reforma el **artículo transitorio segundo** del Acuerdo General 46/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec, para quedar como sigue:

"SEGUNDO. El turno como Administrador corresponderá al Juez de Distrito del Centro que sea designado por el Consejo, cuya duración en el cargo

será determinada conforme lo dispuesto por el Acuerdo General 36/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal."

ARTÍCULO 13. Se reforma el **artículo transitorio segundo** del Acuerdo General 47/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre, para quedar como sigue:

"SEGUNDO. El turno como Administrador corresponderá al Juez de Distrito del Centro que sea designado por el Consejo, cuya duración en el cargo será determinada conforme lo dispuesto por el Acuerdo General 36/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal."

ARTÍCULO 14. Se reforma el **artículo transitorio segundo** del Acuerdo General 48/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa, para quedar como sigue:

"SEGUNDO. El turno como Administrador corresponderá al Juez de Distrito del Centro que sea designado por el Consejo, cuya duración en el cargo será determinada conforme lo dispuesto por el Acuerdo General 36/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal."

ARTÍCULO 15. Se reforma el **artículo transitorio segundo** del Acuerdo General 49/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, para quedar como sigue:

"SEGUNDO. El turno como Administrador corresponderá al Juez de Distrito del Centro que sea designado por el Consejo, cuya duración en el cargo será determinada conforme lo dispuesto por el Acuerdo General 36/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal."

ARTÍCULO 16. Se reforma el **artículo transitorio segundo** del Acuerdo General 50/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco, para quedar como sigue:

"SEGUNDO. El turno como Administrador corresponderá al Juez de Distrito del Centro que sea designado por el Consejo, cuya duración en el cargo será determinada conforme lo dispuesto por el Acuerdo General 36/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal."

ARTÍCULO 17. El Pleno y las Comisiones del Consejo, en el ámbito de sus competencias, interpretarán y resolverán todas las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día de su aprobación.

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente acuerdo.

TERCERO. Publíquese el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el Portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 36/2014 que regula los Centros de Justicia Penal Federal, así como los diversos acuerdos generales que crean los Centros de Justicia Penal Federal en los Estados de Puebla, Durango, Yucatán, Zacatecas, Guanajuato, Baja California Sur, Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila de Zaragoza, Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Nayarit y Tlaxcala, para precisar la temporalidad en el cargo de administrador, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de seis de enero de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos de los consejeros: Presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—Ciudad de México, a once de febrero de dos mil dieciséis (D.O.F. DE 22 DE FEBRERO DE 2016).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 10/2015, que reforma, adiciona y deroga disposiciones del similar 36/2014, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; 36/2014, que regula los Centros de Justicia Penal Federal;

y que reforma y adiciona disposiciones de diversos acuerdos generales; 51/2014, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla; 52/2014, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Durango; 1/2015, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán; 2/2015, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas; 31/2015, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato; 32/2015, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California Sur; 33/2015, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro; 34/2015, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí; 44/2015, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza, con residencia en Torreón; 45/2015, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa, con residencia en Culiacán; 46/2015, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca, con residencia en San Bartolo Coyotepec; 47/2015, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua, con residencia en la ciudad del mismo nombre; 48/2015, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas, con residencia en Cintalapa de Figueroa; 49/2015, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, y 50/2015, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala, con residencia en Apizaco citados, aparecen publicados en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 16, Tomo III, marzo de 2015, página 2613; Libro 12, Tomo IV, noviembre de 2014, páginas 3073, 3142 y 3151; Libro 15, Tomo III, febrero de 2015, páginas 2935 y 2944; Libro 21, Tomo III, agosto de 2015, páginas 2730, 2739, 2748 y 2756; y Libro 24, Tomo IV, noviembre de 2015, páginas 3777, 3786, 3795, 3804, 3814, 3823 y 3832, respectivamente.

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REFORMA Y ADICIONA EL SIMILAR 48/2013, QUE CONSTITUYE EL FIDEICO- MISO PARA EL DESARROLLO DE IN- FRAESTRUCTURA QUE IMPLEMENTA LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA PENAL.

CONSIDERANDO

PRIMERO. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal, con fundamento en los artículos 94, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 100, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la

Judicatura Federal es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones;

TERCERO. Es facultad del Consejo de la Judicatura Federal expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

CUARTO. De conformidad con el artículo 81, fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, corresponde al Consejo de la Judicatura Federal establecer la normatividad y los criterios para modernizar los sistemas y procedimientos administrativos internos;

QUINTO. Con fecha seis de diciembre del dos mil trece se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Acuerdo General 48/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de hacer frente al reto que representa la implementación de la Reforma Constitucional en Materia Penal, consistente en superar el cambio cultural que implica pasar de un sistema penal mixto, con rasgos del inquisitorio, a un sistema acusatorio y oral, en el que los operadores jurídicos tendrán un rol más participativo y con pleno respeto a los derechos fundamentales del imputado y de la víctima; y

SEXTO. Que ante la necesidad de brindar mayor dinamismo a la operación de los recursos del Fideicomiso, se ha diseñado un esquema de operación que le permita una distribución con mayor oportunidad a efecto de cumplir con los compromisos de crecimiento de los Centros de Justicia Penal y Salas de oralidad en toda la República que demanda la implementación de la Reforma Constitucional en Materia Penal.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforman los artículos 7, cuarto párrafo, 8, fracción III, 11, 14 y 19; de igual manera se adiciona el artículo 18 Bis del Acuerdo General 48/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que constituye el Fideicomiso para el desarrollo de infraestructura que implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal, para quedar como sigue:

"Artículo 7. ...

...

...

El Fiduciario podrá asistir por conducto del representante previamente designado a las sesiones del Comité Técnico, quien tendrá voz pero no voto. El representante del Fiduciario podrá designar un suplente.

...

Artículo 8. ...

I a II. ...

III. Tomar conocimiento de la información contenida en los estados financieros del Fideicomiso que el Fiduciario le presente por conducto de la Secretaría Ejecutiva de Administración, aprobados previamente por la Dirección General de Programación y Presupuesto y, en su caso, realizar las observaciones a las que haya lugar;

IV. a V. ...

Artículo 11. Las sesiones del Comité Técnico, serán ordinarias o extraordinarias, las decisiones se tomarán por mayoría calificada de cinco votos.

Las sesiones ordinarias se realizarán al menos una vez al mes.

Con independencia de los demás asuntos que integren el orden del día correspondiente, el secretario de Actas presentará un informe mensual con el seguimiento de los acuerdos previamente adoptados.

El Comité Técnico podrá sesionar válidamente en términos de lo dispuesto por el artículo 74 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando así se requiera, sin sujetarse a la periodicidad establecida para las sesiones ordinarias.

Artículo 14. El Fiduciario deberá presentar al Comité Técnico informes detallados del destino del patrimonio fideicomitado, así como, por conducto de la Secretaría Ejecutiva de Administración, los estados financieros del Fideicomiso previamente aprobados por la Dirección General de Programación y Presupuesto.

Artículo 18 bis. El director general de Programación y Presupuesto, podrá llevar a cabo ampliaciones de recursos a los proyectos autorizados para financiarse con el Fideicomiso, sin contar con la autorización previa del Comité Técnico, siempre que se verifique la suficiencia presupuestal y que en su conjunto, no se rebase el 20% del presupuesto autorizado para cada proyecto, ni se trate de incrementos superiores a \$1'000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.).

El director general de Programación y Presupuesto, podrá también llevar a cabo reducciones de recursos a los proyectos autorizados para financiarse con el Fideicomiso, sin contar con la autorización del Comité Técnico.

Las ampliaciones o reducciones de recursos se realizarán a petición expresa y justificada por parte de las áreas administrativas respecto de los proyectos que les hayan autorizado, lo cual se informará al Fiduciario para su actualización y, al Comité Técnico en su siguiente sesión, a través del secretario.

Artículo 19. La Secretaría Ejecutiva de Administración será la responsable de presentar ante el Comité Técnico para su conocimiento la información y documentos a que se refiere el artículo 772 del Acuerdo General en materia administrativa; previa publicación en el Diario Oficial de la Federación. Adicionalmente deberá difundirlo a través de la página de Internet del Consejo.

La Dirección General de Programación y Presupuesto en auxilio del Comité Técnico, recibirá los estados financieros que presente la Fiduciaria, analizará su información, y en su caso, los aprobará para su presentación al Comité Técnico.

En caso de que no sean aprobados los regresará a la Fiduciaria con las observaciones para que vuelvan a ser formulados."

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el Portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente acuerdo.

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar 48/2013, que constituye el Fideicomiso para el desarrollo de infraestructura que implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—Ciudad de México, a veinticinco de febrero de dos mil dieciséis (D.O.F. DE 29 DE FEBRERO DE 2016).

Nota: El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 48/2013, que constituye el Fideicomiso para el Desarrollo de Infraestructura que Implementa la Reforma Constitucional en Materia Penal citado, aparece publicado en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 1, Tomo II, diciembre de 2013, página 1400.

ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE REFORMA Y ADICIONA EL SIMILAR QUE ESTABLECE LAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO, RELATIVO AL PROGRAMA DE VIVIENDA PARA MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

CONSIDERANDO

PRIMERO. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, corresponde al Consejo de la Judicatura

Federal, con fundamento en los artículos 94, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

SEGUNDO. De conformidad con el artículo 100, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Consejo de la Judicatura Federal es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones;

TERCERO. Es facultad del Consejo de la Judicatura Federal expedir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo previsto en los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;

CUARTO. El artículo 81, fracción XXXIV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación dispone que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial de la Federación, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento.

Con excepción de las atribuciones previstas en las fracciones I a XXI del artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal puede establecer, mediante acuerdos generales, cuáles de las atribuciones previstas en el artículo antes citado podrán ejercitarse por las comisiones creadas por el Pleno; y éstas tendrán facultades para el correcto funcionamiento del Programa de Vivienda para Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito;

QUINTO. Corresponde al Poder Judicial de la Federación, a través de Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, garantizar el derecho fundamental de acceso a una justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, conforme a lo dispuesto por los artículos 17, 94, 100, 103, 104, 105, 106 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

SEXTO. Para contar con Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito suficientes para garantizar el acceso a la justicia y que cada tribunal y juzgado cuente con sus titulares, el Consejo de la Judicatura Federal se encuentra facultado conforme a lo dispuesto por los artículos 81, fracciones V, VI y VII, 118, 119 y 120 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para determinar el número, los límites territoriales y, en su caso, la especialización de estos órganos, así como nombrar a Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito y resolver sobre su adscripción de acuerdo con las necesidades del servicio;

SÉPTIMO. El artículo 127, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determina que los servidores públicos podrán recibir apoyos que sean propios para el desarrollo del trabajo, los cuales no forman parte de sus remuneraciones.

En este sentido, los apoyos que deben otorgarse a Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito tienen como finalidad que el servicio público de impartición de justicia se realice salvaguardando los principios de autonomía e independencia, por lo que cuando el Consejo de la Judicatura Federal adscribe a Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito a órganos jurisdiccionales con distinta residencia a la de su domicilio actual por necesidades del servicio, en la medida de lo posible, debe proveer de habitación con lo que se evita que dichos funcionarios judiciales establezcan relaciones de tipo comercial para contar con una vivienda con personas que, a la postre podrían ser parte en juicios federales;

OCTAVO. Ante la problemática de la obtención de vivienda para Magistrados y Jueces en los lugares en que se encontraban los órganos jurisdiccionales a los que eran adscritos se constituyó, en principio, un fideicomiso para la adquisición de inmuebles para ser utilizados conforme a lo dispuesto por la Ley General de Bienes Nacionales, y con ello contar con los medios necesarios para garantizar los principios de independencia y objetividad de los juzgadores previstos en el artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

NOVENO. Para la eficaz atención del programa de vivienda el Consejo de la Judicatura Federal, y con la finalidad de establecer un mecanismo de control, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracciones I, III y V, de la Ley General de Bienes Nacionales, se establece que el Poder Judicial de la Federación, podrá adquirir inmuebles con cargo al presupuesto de egresos que tuviere autorizado o recibirlos en donación, asignarlos al servicio de sus órganos y administrarlos; emitir la normatividad y los lineamientos correspondientes para la construcción, reconstrucción, adaptación, conservación, mantenimiento y aprovechamiento de dichos inmuebles; y

DÉCIMO. El otorgamiento del apoyo a Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito que permite a éstos el uso de inmuebles de dominio público de la Federación se debe formalizar a través de un contrato de naturaleza administrativa que establezca por una parte los derechos y obligaciones del servidor público que hará uso de los bienes del Estado, y que salvaguarde la facultad del Consejo de la Judicatura Federal en un plano de autoridad frente al servidor público usuario para disponer en todo momento de estos bienes para el

cumplimiento del programa de vivienda que garantice la prestación y continuidad del servicio público de impartición de justicia.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 1, fracción I, incisos j) y k); y se adicionan el inciso l) a la fracción I del artículo 1; el Capítulo Cuarto Bis, del Título Segundo, del Libro Segundo con los artículos 227 Bis a 227 Novodecies; del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, para quedar como sigue:

"Artículo 1. ...

I. ...

a) a i) ...

j) La regulación de la prestación de los servicios de custodia, alimentación, medicina preventiva y educación que proporciona el Consejo a los hijos de servidores públicos que laboran en el Poder Judicial de la Federación;

k) Aspectos relativos a licencias; y

l) La regulación del Programa de vivienda para Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación;

II. a VIII. ...

CAPÍTULO CUARTO BIS PROGRAMA DE VIVIENDA PARA MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO

Artículo 227 Bis. El programa de vivienda tiene como finalidad otorgar a Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito el apoyo de vivienda mediante el uso y disfrute de una casa habitación en el lugar de residencia del órgano jurisdiccional al que se encuentre adscrito en el interior de la República Mexicana, con motivo de su primera adscripción o de las subsecuentes a otro órgano jurisdiccional con distinta residencia, que les permita contar con el

medio necesario de residencia para el desarrollo y salvaguarda de los principios de autonomía e independencia en el ejercicio de su encargo en el órgano de su adscripción.

La administración y ejecución del programa de vivienda para Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, se llevará a cabo de conformidad con los lineamientos de operación, asignación y entrega, así como de desocupación del programa de vivienda para Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, en adelante, los lineamientos.

Artículo 227 Ter. Las casas habitación destinadas al programa de vivienda de Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito son bienes de dominio público de la Federación conforme a las disposiciones en materia de bienes nacionales.

El Consejo podrá en todo momento conforme a las disposiciones jurídicas en materia de bienes nacionales y de conformidad con la disponibilidad de recursos presupuestales, incorporar o desincorporar del dominio público de la Federación, aquellas casas habitación que adquiriera por vía de derecho público o privado para el programa de vivienda de Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito o cuando dejen de ser útiles para este programa.

Todos los actos que ejerza el Consejo para la administración, uso, destino, recuperación, conservación y mantenimiento de las casas habitación por tratarse de bienes de dominio público de la Federación, inalienables e imprescriptibles, los ejercerá como autoridad, por lo que se consideran de naturaleza administrativa.

Artículo 227 Quater. El otorgamiento del apoyo de vivienda dependerá de la disponibilidad de casas habitación en el lugar de residencia del órgano jurisdiccional en que se adscriba al Magistrado de Circuito o Juez de Distrito.

En caso de no existir disponibilidad de casa habitación del patrimonio inmobiliario del Consejo en el lugar de residencia del órgano de adscripción, o existiendo no sean suficientes, el Magistrado de Circuito o Juez de Distrito podrá acceder a dicho apoyo mediante el pago de ayuda de renta, conforme a los lineamientos. Dicho apoyo estará sujeto a suficiencia presupuestaria en cada ejercicio presupuestal.

No se otorgará el apoyo de vivienda a aquellos Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito que, conforme a su declaración patrimonial cuenten con inmueble de su propiedad que pueda ser utilizado como casa habitación en

el lugar de residencia del órgano jurisdiccional al que se le adscriba, en términos de los lineamientos.

Artículo 227 Quinquies. El Magistrado de Circuito o Juez de Distrito una vez adscrito a un órgano jurisdiccional, solicitará por escrito a la Administración Regional o Delegación Administrativa del lugar de residencia del órgano de su adscripción el otorgamiento del apoyo de vivienda, quien le dará el trámite correspondiente con base en los lineamientos.

Artículo 227 Sexies. El otorgamiento del apoyo se formalizará mediante contrato administrativo de asignación previo dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos.

La Dirección General de Asuntos Jurídicos elaborará el modelo de contrato y lo someterá a la consideración de la Comisión de Administración, al igual que sus modificaciones.

El apoyo de vivienda se otorgará sólo para una casa habitación del programa de vivienda de Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito, salvo cuando, por disponibilidad de casas habitación en una nueva adscripción, se le puede asignar otra casa en el lugar de residencia del nuevo órgano de adscripción, en tanto desocupa la casa habitación otorgada como apoyo de vivienda en su anterior adscripción.

En todos los casos, en los contratos de asignación se establecerá el monto de la aportación económica que se obligarán a cubrir los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito.

Artículo 227 Septies. El apoyo de vivienda sólo otorga el uso y disfrute de la casa habitación al Magistrado de Circuito o Juez de Distrito en lo individual o conjuntamente con sus beneficiarios directos como su cónyuge, concubina o pareja legalmente reconocida por la ley, con sus parientes consanguíneos o por afinidad en línea directa en primer grado, así como sus dependientes económicos reconocidos por la ley y señalados en su declaración patrimonial.

El apoyo de vivienda para el uso y disfrute de la casa habitación en términos del párrafo anterior, tendrá vigencia sólo durante el tiempo en el cual el Magistrado de Circuito o Juez de Distrito se encuentre adscrito al órgano jurisdiccional con residencia en el mismo lugar en que se encuentra la casa habitación, o que se ubique dentro de la jurisdicción territorial del órgano de su adscripción.

Cuando el Magistrado de Circuito o Juez de Distrito sea adscrito a otro órgano jurisdiccional con residencia en otra ciudad o población, o cuando cause baja por jubilación, retiro anticipado o renuncia en términos de las disposiciones aplicables, tendrá treinta días naturales a partir de la fecha de la notificación de los supuestos anteriores para desocupar la casa habitación y devolverla a la Administración Regional o Delegación Administrativa correspondiente, conforme a los lineamientos.

Artículo 227 Octies. Los Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito que sean destituidos de su cargo por sanción administrativa impuesta en un procedimiento de responsabilidad administrativa, dejarán de recibir el apoyo de vivienda y estarán obligados a devolver la casa habitación otorgada, dentro de los siguientes treinta días naturales a partir de la fecha en que sean notificados de la sanción.

Si dentro del plazo señalado en el párrafo anterior no se realiza la devolución, el Consejo a través de las áreas administrativas competentes conforme a las atribuciones señaladas en los acuerdos generales y en los procedimientos respectivos realizarán la recuperación administrativa de la vivienda.

Artículo 227 Nonies. El Consejo dejará de otorgar el apoyo de vivienda a los Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito que sean suspendidos por más de tres meses de su cargo, como sanción definitiva determinada en el procedimiento de responsabilidad administrativa.

Los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito que sean sancionados con suspensión y que reciban el apoyo, deberán devolver al Consejo la casa habitación otorgada dentro de los siguientes treinta días naturales a partir de la fecha en que sean notificados de la sanción.

Si dentro del plazo señalado en el párrafo anterior no se realiza la devolución, el Consejo a través de las áreas administrativas competentes, conforme a las atribuciones señaladas en los acuerdos generales y en los procedimientos respectivos realizarán la recuperación administrativa de la vivienda.

Cumplida la sanción, los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito podrán acceder nuevamente al apoyo conforme a la disponibilidad de viviendas en el lugar de residencia del órgano jurisdiccional de su adscripción, previa solicitud por escrito formulada a la Administración Regional o Delegación Administrativa a partir de la fecha de su reincorporación a la función.

Artículo 227 Decies. Cuando los Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito gocen de licencia en términos de las disposiciones aplicables de la Ley Orgánica podrán seguir recibiendo el apoyo de vivienda.

Los Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito que gocen del apoyo de vivienda y sean comisionados para realizar alguna función en el Consejo o en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán continuar contando con el apoyo con aprobación del Pleno, en los términos que éste determine.

Artículo 227 Undecies. El apoyo de vivienda no otorga derecho alguno que permita a los Magistrados de Circuito o Jueces de Distrito, transferir mediante instrumento legal el uso o disfrute de la casa habitación que les fue entregada como apoyo de vivienda o garantizar el cumplimiento de obligaciones a su cargo de carácter familiar, mercantil, civil o laboral previstas en las leyes, a ninguna otra persona, incluyendo a sus beneficiarios directos señalados en el artículo 227 Septies.

En el caso de que el Magistrado de Circuito o Juez de Distrito que goce del apoyo de vivienda sea adscrito a otro órgano jurisdiccional con residencia en un lugar distinto al de ubicación de la casa habitación del programa y sus descendientes en línea recta de primer grado se encuentren cursando estudios de educación básica, media, media superior o licenciatura podrán solicitar a la Comisión de Administración autorización para continuar gozando del apoyo de vivienda de la casa habitación asignada por el tiempo exclusivamente necesario para la terminación del ciclo escolar correspondiente a ese año o en aquellos casos que por cuestiones médicas o de seguridad de sus beneficiarios directos previstos en el artículo 227 Septies así se requiera, previa opinión de la Dirección General de Servicios Médicos o de la Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación, según corresponda.

En el supuesto del párrafo anterior, el Magistrado de Circuito o Juez de Distrito no podrá recibir el apoyo de vivienda respecto de otra casa habitación del programa, en el lugar de su nueva adscripción, hasta en tanto siga gozando del apoyo en la residencia anterior.

La Comisión de Administración resolverá las peticiones previstas en el segundo párrafo, atendiendo a las solicitudes de apoyo de vivienda y a la disponibilidad de casas habitación.

Artículo 227 Duodecies. El mantenimiento y conservación de las casas habitación del programa de vivienda para Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, se financiará con los recursos del fondo constituido para tal fin y administrados por un fideicomiso contratado por el Consejo.

El fondo se integrará con las aportaciones económicas que realicen los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito que gocen del apoyo, mediante descuentos quincenales convenidos.

Los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito que gocen del apoyo de vivienda, serán responsables directos por los daños y perjuicios causados intencionalmente o por negligencia a la casa habitación, por él o por sus beneficiarios directos o personas que se encuentren en la vivienda del programa, así como a propiedades colindantes o a instalaciones de servicios públicos conectados a la casa habitación.

En caso de que la casa habitación asignada como apoyo de vivienda sufra algún daño o menoscabo ocasionado por personas ajenas a quienes la usen y disfruten, o por fenómenos de la naturaleza, los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito darán aviso por escrito de inmediato, una vez que las circunstancias lo permitan, a la Administración Regional o Delegación Administrativa, para que ésta proceda a la atención inmediata conforme a sus atribuciones.

De manera excepcional el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal podrá autorizar que el mantenimiento, conservación o reparación de los inmuebles se realice con recursos presupuestales.

Artículo 227 Terdecies. Los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito a los que se les otorgue el apoyo de vivienda, cubrirán los gastos por los servicios de uso personal que se presten a la casa habitación como son, de manera enunciativa más no limitativa, los correspondientes a energía eléctrica, agua y alcantarillado, telefonía fija, Internet, televisión de paga, gas o cualquier otro combustible o energético que sea utilizado en la casa habitación.

Los adeudos generados por estos servicios que no sean cubiertos por el Magistrado de Circuito o Juez de Distrito, dentro de los sesenta días siguientes a la desocupación de la casa habitación otorgada como apoyo de vivienda, le serán descontados vía nómina conforme a los lineamientos.

Artículo 227 Quaterdecies. Los Magistrados de circuito y Jueces de Distrito que gocen del apoyo de vivienda que dejen de utilizar o de necesitar o le den un uso distinto a la casa habitación asignada, la pondrán de inmediato a disposición del Consejo conforme a los lineamientos.

Artículo 227 Quincecies. El Consejo a través de las áreas administrativas competentes, llevará a cabo la recuperación administrativa de la casa habitación otorgada como apoyo de vivienda, independientemente de las acciones en la vía judicial que correspondan, cuando algún Magistrado de Circuito y Juez de Distrito al que se le haya otorgado el apoyo dé un uso o aprovechamiento distinto al previsto en este capítulo, sin haber obtenido previa-

mente el permiso o autorización correspondiente; o no devolviera el bien al concluir el plazo establecido o no cumpla cualquier otra obligación consignada en el contrato con el que se le otorgó el apoyo de vivienda.

Artículo 227 Sexdecies. El incumplimiento a las disposiciones de este capítulo, dará lugar al inicio del procedimiento administrativo disciplinario previsto en las disposiciones aplicables en la materia de responsabilidad administrativa de los servidores públicos; con independencia de las acciones penales o civiles que procedan.

Artículo 227 Septdecies. La administración de las casas habitación del patrimonio inmobiliario del Consejo y la ejecución del programa de vivienda para Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, corresponderá a la Comisión de Administración por conducto de la Coordinación de Administración Regional, bajo la supervisión de la Secretaría Ejecutiva de Administración.

Artículo 227 Octodecies. La interpretación administrativa de este capítulo y resolución de lo no previsto en él, corresponderá a la Comisión de Administración.

Artículo 227 Novodecies. El Pleno conocerá de aquellos casos relacionados con el cumplimiento de este capítulo, cuando la Comisión de Administración por la relevancia del caso así lo determine, o cuando no exista mayoría en la Comisión para emitir una resolución en términos de las disposiciones aplicables respecto al funcionamiento de las Comisiones."

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor a los tres días siguientes de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el Portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

TERCERO. Las asignaciones de casa habitación vigentes continuarán hasta su conclusión de conformidad con los contratos respectivos y las demás disposiciones con las que dieron inicio.

CUARTO. La Secretaría Ejecutiva de Administración, por conducto de las unidades administrativas competentes que le estén adscritas, adoptará las acciones necesarias para la implementación del presente Acuerdo.

QUINTO. La regulación relacionada con el programa de vivienda para Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación expedida o pactada con anterioridad a la entrada en vigor de este Acuerdo continuará vigente en lo que no se oponga a éste.

SEXTO. La Secretaría Ejecutiva de Administración llevará a cabo las acciones necesarias para la revisión y, en su caso, actualización de las disposiciones secundarias, contractuales y convencionales que sean necesarias para la implementación de este Acuerdo.

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, relativo al programa de vivienda para Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de trece de enero de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos de los señores consejeros: Presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández. Ciudad de México a once de febrero de dos mil dieciséis (D.O.F. DE 22 DE FEBRERO 2016).

Nota: El Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo citado, aparece publicado en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 2256.

ACUERDO GENERAL 1/2016, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA SEMIESPECIALIZACIÓN Y CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO CON SEDE EN CUERNAVACA, MORELOS; A LAS

REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS MENCIONADOS ÓRGANOS COLEGIADOS, ASÍ COMO AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA ACTUAL OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS REFERIDOS Y A LA CREACIÓN DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS EN MATERIA DE TRABAJO DEL CITADO CIRCUITO.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo, 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracciones IV, V y XXIV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia de los Tribunales de Circuito, así como dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de su competencia, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos, atribución esta última, que ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 42, fracciones II y III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales;

TERCERO. El artículo 17 constitucional, segundo párrafo, establece que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y tér-

minos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; contribuyendo la especialización de los órganos jurisdiccionales a la eficiencia en el trámite de los asuntos y en la calidad de las resoluciones que se emiten, al agrupar el estudio de los diversos temas jurídicos en las ramas específicas del derecho;

CUARTO. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintisiete de mayo de dos mil quince, aprobó la especialización de los Tribunales Colegiados del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos.

Asimismo, el referido Pleno aprobó en sesión de veinticinco de noviembre de dos mil quince, el Dictamen del Grupo de Trabajo de Plantillas Justificadas, respecto de la plantilla de los Tribunales Colegiados del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, derivados de la especialización y semiespecialización de los mismos, lo cual hace necesario determinar los aspectos inherentes a la misma.

En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales citadas, así como en las consideraciones vertidas, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide el siguiente

ACUERDO

Artículo 1. A partir del uno de marzo de dos mil dieciséis, los Tribunales Colegiados del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, serán especializados: dos en materia de trabajo, dos en materias penal y administrativa y uno en materia civil.

En consecuencia, los cinco Tribunales Colegiados del Decimoctavo Circuito cambiarán su denominación y competencia, conservando su residencia y la jurisdicción territorial que tienen asignadas. Sus nuevas nomenclaturas serán las siguientes:

ACTUAL DENOMINACIÓN	NUEVA DENOMINACIÓN
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS	PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS	SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS	PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS	SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y ADMINISTRATIVA DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS	TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS

Artículo 2. Los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, conocerán de los asuntos a que se refiere el artículo 37, fracciones I, inciso d); y II al IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la materia de su especialidad, conforme a lo dispuesto por el artículo 38 del ordenamiento legal citado.

Los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, conocerán de los asuntos a que se refiere el artículo 37, fracciones I, incisos a) y b); y II al IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en las materias de su especialidad, conforme a lo dispuesto por el artículo 38 del ordenamiento legal citado.

El Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, conocerá de los asuntos a que se refiere el artículo 37, fracciones I, inciso c); y II al IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la materia de su especialidad, conforme a lo dispuesto por el artículo 38 del ordenamiento legal citado.

Artículo 3. Desde la fecha señalada en el artículo 1 de este acuerdo, los órganos colegiados procederán de la siguiente manera:

I. El Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Decimoctavo Circuito, que cambian su denominación a Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del propio Circuito, deberán:

a) Conservar hasta su conclusión y archivo definitivo todos los asuntos de su conocimiento de la materia de trabajo, así como los de las materias civil, penal y administrativa que ya hubiesen sido listados (aplazados o retirados), los relacionados, los turnados a ponencia, los pendientes de cumplimiento y aquellos que la ley, la jurisprudencia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación establezcan;

b) Remitir, dentro de los diez días hábiles siguientes, los asuntos que correspondan a las materias penal y administrativa que se encuentren turnados por la oficina de correspondencia común, distintos de los previstos en el inciso a) anterior, radicados y en trámite a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa en la misma sede para que ésta los reparta en forma equitativa entre los órganos de dicha especialidad y se equilibren las cargas de trabajo.

Asimismo, remitirán dentro de los diez días hábiles siguientes los asuntos que correspondan de la materia civil que se encuentren turnados por la oficina de correspondencia común, radicados y en trámite, distintos a los previstos en el inciso a) anterior, enviándolos directamente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito;

c) Conservar los expedientes en archivo definitivo, manteniendo su competencia mixta originaria para tramitar las actuaciones que con posterioridad sean necesarias, independientemente del cambio de denominación y competencia.

Si al momento de efectuarse el reparto de los asuntos a que se ha hecho mención en los incisos precedentes, está pendiente el dictado de una resolución de carácter urgente, el Tribunal Colegiado del conocimiento de origen deberá proveer lo que en derecho proceda, hecho lo cual enviará el asunto a la Oficina de Correspondencia en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito en la misma sede o al Tribunal Colegiado en Materia Civil, según la materia de especialidad que corresponda.

II. El Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados del Decimoctavo Circuito, que cambian de denominación a Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del mismo Circuito, respectivamente, deberán:

a) Conservar hasta su conclusión y archivo definitivo todos los asuntos de su conocimiento de las materias penal y administrativa, así como los de las materias civil y de trabajo que ya hubiesen sido listados (aplazados o retirados), los relacionados, los turnados a ponencia, los pendientes de cumplimiento, aquellos que la ley, la jurisprudencia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación establezcan;

b) Remitir, dentro de los diez días hábiles siguientes, los asuntos que correspondan a la materia de trabajo que se encuentren turnados por la oficina de correspondencia común, radicados y en trámite, distintos a los previstos en el inciso a) anterior, a la Oficina de Correspondencia Común que prestará servicio a los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo en la misma sede, para que ésta los reparta a los órganos de dicha especialidad en forma equitativa y se equilibren las cargas de trabajo.

Asimismo, remitirán dentro de los diez días hábiles siguientes los asuntos que correspondan de la materia civil que se encuentren turnados por la oficina de correspondencia común, distintos a los previstos en el inciso a) anterior, radicados y en trámite, enviándolos directamente al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito;

c) Conservar los expedientes en archivo definitivo, manteniendo su competencia mixta originaria para tramitar las actuaciones que con posterioridad sean necesarias, independientemente del cambio de denominación y competencia.

Si al momento de efectuarse el reparto de los asuntos a que se ha hecho mención en los incisos precedentes, está pendiente el dictado de una resolución de carácter urgente, el Tribunal Colegiado del conocimiento de origen deberá proveer lo que en derecho proceda, hecho lo cual enviará el asunto a la Oficina de Correspondencia en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito en la misma sede o al Tribunal Colegiado en Materia Civil, según la materia de especialidad que corresponda.

III. El Quinto Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito, que cambia de denominación a Tribunal Colegiado en Materia Civil del mismo Circuito, deberá:

a) Conservar hasta su conclusión y archivo definitivo todos los asuntos de su conocimiento de la materia civil, así como los de las materias penal, administrativa y de trabajo que ya hubiesen sido listados (aplazados o retira-

dos), los relacionados, los turnados a ponencia, los pendientes de cumplimentación, aquellos que la ley, la jurisprudencia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación establezcan;

b) Remitir, dentro de los diez días hábiles siguientes, los asuntos que correspondan a las materias penal, administrativa y de trabajo que se encuentren turnados por la oficina de correspondencia común, radicados y en trámite, distintos a los previstos en el inciso a) anterior, a las Oficinas de Correspondencia Común que prestarán servicio a los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa y a los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo, ambas en la misma sede, para que éstas los repartan en forma equitativa entre los órganos según su especialidad y se equilibren las cargas de trabajo;

c) Conservar todos los expedientes en archivo definitivo, manteniendo su competencia mixta originaria para tramitar las actuaciones que con posterioridad sean necesarias, independientemente del cambio de denominación y competencia.

Si al momento de efectuarse el reparto de los asuntos a que se ha hecho mención en los incisos precedentes, está pendiente el dictado de una resolución de carácter urgente, el Tribunal Colegiado del conocimiento de origen deberá proveer lo que en derecho proceda, hecho lo cual enviará el asunto a la oficina de correspondencia común que según la materia de especialidad corresponda.

Todos los órganos jurisdiccionales deberán enviar a la Dirección General de Estadística Judicial, una relación de los expedientes que remiten.

Artículo 4. Desde la fecha señalada en el artículo 1 del presente acuerdo inicia funciones la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, unidad que prestará servicio a los órganos colegiados especializados en dicha materia del propio Circuito.

En esa misma fecha cambia de denominación la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, para llamarse en adelante Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, unidad que prestará servicio a los órganos colegiados especializados en las materias referidas en el propio Circuito.

Las citadas oficinas funcionarán de conformidad con lo previsto en el Título Segundo, Capítulo Quinto, denominado "Oficinas de Correspondencia Común" del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, así como demás disposiciones que resulten aplicables.

Las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y de Estadística Judicial del Consejo de la Judicatura Federal instalarán el sistema computarizado para la recepción y distribución de asuntos en las oficinas de correspondencia común de que se trata, realizando las modificaciones necesarias en su configuración. Para el caso de las Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Penal y Administrativa, y de Trabajo, la búsqueda de antecedentes en estas materias deberá ampliarse a los registros previos a la especialización que aparezcan en el Sistema Integral de Correspondencia Común (SICCOM), para efectos de mayor eficiencia y certeza jurídica del turno de los asuntos.

El Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito recibirá los asuntos por medio de su propia oficialía de partes, al tratarse de órgano colegiado único con dicha competencia material. Lo anterior, sin perjuicio del apoyo que para la atención de promociones fuera del horario laboral deberá prestarle la ahora denominada Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, en cumplimiento al artículo 21 de la Ley de Amparo en vigor y en atención a lo dispuesto por el artículo 29 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.

Artículo 5. Los Tribunales Colegiados continuarán empleando los libros de control que actualmente se encuentran en uso, determinándose un nuevo orden secuencial conforme a lo siguiente:

I. En los registros de los asuntos ya radicados en cada tribunal que deban conservarse, se anotará únicamente una certificación en la columna de observaciones, en la que se precisará el nuevo orden secuencial de expedientes derivado del cambio de denominación del tribunal, el cual iniciará con la numeración 1/2016. En los registros de aquellos expedientes que sean remitidos a otros tribunales con motivo del reparto ordenado, se hará una certificación en la columna de observaciones para justificar su baja; y,

II. Enseguida se registrarán, continuando el nuevo orden numérico secuencial, los asuntos que se reciban, ya sean de otros Tribunales Colegiados con motivo del reparto ordenado en el artículo 3 de este acuerdo, anotando en la columna de observaciones el número de expediente de origen y tribunal remitente; o bien, los asuntos de reciente ingreso que reciban a partir del inicio de la especialización, turnados por las nuevas oficinas de correspondencia común, según su especialidad, o recibidos en la oficialía de partes, esto último tratándose del órgano colegiado civil.

Los Tribunales Colegiados deberán proveer lo necesario a fin de que se notifique a las partes sobre la nueva radicación de los asuntos.

La Dirección General de Estadística Judicial determinará e informará a los órganos jurisdiccionales los lineamientos y demás precisiones que correspondan para el registro en el libro electrónico y su congruencia con el libro físico.

Artículo 6. Los presidentes de los órganos colegiados, asistidos del secretario de Acuerdos, deberán levantar por duplicado un acta administrativa con motivo del inicio de su especialización, remitiendo un ejemplar para su archivo a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos.

Dicha unidad administrativa proporcionará a los órganos jurisdiccionales el formato del acta respectivo.

Artículo 7. El Pleno; y las Comisiones de Creación de Nuevos Órganos; de Carrera Judicial; de Adscripción; y de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, estarán facultados para interpretar y resolver todas las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente acuerdo, en el ámbito de sus respectivas competencias.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, así como en el portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

TERCERO. Dése vista a la Comisión de Adscripción para efecto de la integración de los órganos colegiados conforme a las materias de la semiespecialización y especialización que se ordena.

CUARTO. La Coordinación de Administración Regional del Consejo de la Judicatura Federal, deberá proveer a los Tribunales Colegiados que cambian de denominación y competencia, a los nuevos Plenos de Circuito Especializados, así como a las oficinas de correspondencia común, de los espacios, de los recursos materiales necesarios (entre otros, letreros de identificación, actualización de placas de directorios de edificios, sellos oficiales, papelería), conforme a su nueva denominación, para que a la brevedad posible cuenten con ellos.

QUINTO. A partir del uno de marzo de dos mil dieciséis, se establecen dos Plenos Especializados del Decimoctavo Circuito: uno en Materia de Trabajo y otro en Materia Penal y Administrativa, los cuales funcionarán de marzo a diciembre de la referida anualidad. Lo anterior, en términos de lo previsto en el Acuerdo General 8/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito.

SEXTO. Se modifica el numeral **SEGUNDO**, apartado **XVIII. DECIMOCTAVO CIRCUITO**, número **1**, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, para quedar como sigue:

"SEGUNDO. ...

XVIII. DECIMOCTAVO CIRCUITO:

1. Cinco Tribunales Colegiados especializados: dos en materia de trabajo, dos en materias penal y administrativa y uno en materia civil, todos con residencia en Cuernavaca, Morelos.

2. ...

3. ..."

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 1/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la semiespecialización y cambio de denominación de los Tribunales Colegiados del Decimoctavo Circuito con sede en Cuernavaca, Morelos; a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los mencionados órganos colegiados, así como al cambio de denominación de la actual Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados referidos y a la creación de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del citado Circuito, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de seis de enero de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—Ciudad de México a once de febrero de dos mil dieciséis (D.O.F. DE 23 DE FEBRERO DE 2016).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; 8/2015, relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito; y, 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647; *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 2127; Libro 15, Tomo III, febrero de 2015, página 2982; y, *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, página 1559, respectivamente.

ACUERDO GENERAL 2/2016, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DEL NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, CON RESIDENCIA EN CUERNAVACA, MORELOS Y SU TRANSFORMACIÓN EN SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO DEL DECIMOCTAVO CIRCUITO, ASÍ COMO A SU COM-

PETENCIA, JURISDICCIÓN TERRITORIAL, DOMICILIO, Y FECHA DE INICIO DE FUNCIONES Y RESIDENCIA. AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO DEL MISMO CIRCUITO Y RESIDENCIA. ASÍ COMO A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DEL CIRCUITO Y RESIDENCIA INDICADOS; Y A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN EN CUERNAVACA, MORELOS Y SU TRANSFORMACIÓN EN OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS TRIBUNALES UNITARIOS DEL DECIMOCUARTO CIRCUITO EN CUERNAVACA, MORELOS.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracciones II y V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 81, fracciones IV, V y XXIV, así como 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número, límites territoriales y, en su caso, la especialización por materia de los Tribunales Colegiados, en cada uno de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, así como dictar las disposiciones necesarias para regular el

turno de los asuntos de la competencia de los Tribunales de Circuito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; atribución, esta última, que ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 42, fracción III, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo;

TERCERO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes;

CUARTO. El incremento en el número de ingresos y la complejidad en el trámite de los mismos, ha ocasionado el aumento en las cargas de trabajo del Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, lo que hace necesario establecer un nuevo órgano jurisdiccional en el referido Circuito;

QUINTO. La instalación e inicio de funciones de nuevos órganos jurisdiccionales tiene como limitante la escasez de recursos presupuestales en proporción a los requerimientos para todo el país;

SEXTO. A fin de dar cumplimiento al artículo 17 de la Constitución General de la República, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de diecisiete de junio de dos mil quince, aprobó el Dictamen relativo a la transformación del Noveno Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos, en Segundo Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito, con residencia en la misma ciudad y Estado.

Los órganos jurisdiccionales auxiliares existentes en los Centros Regionales del país, tienen como uno de los atributos esenciales la versatilidad con que fueron dotados, para que en caso de resultar necesario, puedan transformarse y, en su caso, trasladarse a otra sede.

En atención a ello, resulta viable que para la instalación e inicio de funciones de un segundo Tribunal Unitario en el Decimoctavo Circuito, se favorezca la transformación de un Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con sede en Cuernavaca, Morelos, al estar ubicado en la misma ciudad;

SÉPTIMO. Para la aplicación de la medida descrita en el considerando anterior, es necesario que concluya funciones el Noveno Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con sede en Cuernavaca, Morelos, para que pueda ser transformado en Segundo Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito, en la misma sede y entidad federativa; y

OCTAVO. De conformidad con la información proporcionada por la Coordinación de Administración Regional, en la actualidad se cuenta con la infraestructura para la transformación indicada, por lo que resulta necesario determinar los aspectos inherentes al inicio de funcionamiento del nuevo órgano unitario, entre otras cuestiones, las relativas a su nueva denominación, competencia, jurisdicción territorial, residencia, fecha de inicio de funciones, así como las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos, como también la creación de la oficina de correspondencia común respectiva.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

Artículo 1. A las veinticuatro horas del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, concluye funciones el Noveno Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en Cuernavaca, Morelos.

El presidente del órgano colegiado auxiliar referido deberá levantar, por duplicado, un acta administrativa con motivo de la conclusión de funciones, cuyo formato le será proporcionado por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, remitiendo a esta última un ejemplar para su archivo.

Los Libros de Gobierno Electrónicos y reportes estadísticos contenidos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del órgano jurisdiccional auxiliar, deberán darse por concluidos, asentando la certificación correspondiente, y ponerse en resguardo de la Dirección General de Estadística Judicial.

Por lo que hace al archivo físico, actas de visita y demás documentos relacionados con la función jurisdiccional del órgano de que se trata, serán resguardados por el coordinador de la Administración Regional de la sede, elaborándose el acta de entrega-recepción correspondiente.

Artículo 2. A partir del uno de marzo de dos mil dieciséis, el Noveno Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con sede en Cuernavaca, Morelos, se transforma e inicia funciones como Segundo Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito con la misma residencia y con la plantilla autorizada a ese órgano jurisdiccional.

El órgano referido se denominará Segundo Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos y su domicilio estará en General Amado Salazar, número 22, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos, código postal 62000.

El Segundo Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito, tendrá igual competencia y jurisdicción territorial que la que corresponde al otro Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito que actualmente está en funciones en el referido Circuito.

Toda la correspondencia y trámites relacionados con los asuntos de la competencia del Segundo Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito, deberán dirigirse a éste y realizarse en el referido domicilio.

Artículo 3. Al inicio de funciones del órgano jurisdiccional a que se refiere el artículo anterior, el actual Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito, cambia su denominación, conservando su competencia, jurisdicción territorial y domicilio. Por lo tanto, a partir del uno de marzo de dos mil dieciséis, el referido Tribunal Unitario se denominará Primer Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito.

Artículo 4. Desde la fecha señalada en el artículo 1 del presente acuerdo, concluye sus funciones la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, con sede en Cuernavaca, Morelos, para iniciar funciones como Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Decimoctavo Circuito, con la misma residencia y entidad federativa, denominación como será conocida la oficina en cita, unidad que prestará servicios a los órganos unitarios referidos.

La citada oficina funcionará de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, así como demás disposiciones que resulten aplicables.

Las Direcciones Generales de Tecnologías de la Información y de Estadística Judicial realizarán las modificaciones necesarias a la configuración

del sistema computarizado para la recepción y distribución de asuntos en la oficina de correspondencia común de que se trata.

El Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos, recibirá los asuntos por medio de su propia oficialía de partes.

Artículo 5. Durante el periodo que comprenderá del uno de marzo al treinta de abril de dos mil dieciséis, los nuevos asuntos que se presenten en la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Decimoctavo Circuito, en días y horas hábiles, se remitirán al Segundo Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, a través del sistema computarizado que se utiliza para esos efectos. Los asuntos relacionados serán turnados al órgano jurisdiccional que tenga los antecedentes, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.

El uno de marzo de dos mil dieciséis, el ahora Primer Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito remitirá al Segundo Tribunal Unitario del mismo Circuito para su resolución, treinta asuntos del rubro de apelaciones, en los cuales no haya dictado sentencia y tengan audiencia de vista celebrada con fecha más cercana a la mencionada en primer término, los cuales pasarán a formar parte del índice del nuevo Tribunal Unitario, que deberá conservarlos hasta su resolución y archivo definitivo.

Transcurrido el plazo señalado en el primer párrafo de este artículo, los asuntos nuevos se distribuirán entre los dos Tribunales Unitarios del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, a través del sistema computarizado, conforme a lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.

La Comisión de Creación de Nuevos Órganos, con base en los estudios respectivos que someta a su consideración la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, estará facultada para concluir de manera anticipada o prorrogar, en su caso, el plazo de exclusión de turno de nuevos asuntos previsto en este artículo.

Artículo 6. Al finalizar el periodo de exclusión de turno previsto en el artículo anterior y dentro de los cinco días hábiles siguientes, los titulares de los Tribunales Unitarios del Decimoctavo Circuito, con sede en Cuernavaca, Morelos, deberán informar a la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y

Creación de Nuevos Órganos, sobre la productividad obtenida, conforme a la siguiente tabla:

MOVIMIENTO TOTAL DE ASUNTOS.
PERIODO DEL ____ AL ____ DE 20 ____

ÓRGANO	EXISTENCIA INICIAL	INGRESO	EGRESO	EXISTENCIA FINAL

Artículo 7. El titular del Segundo Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito, con asistencia de un secretario, deberá autorizar el uso de libros de gobierno nuevos, en los que se asentará la certificación correspondiente, en los cuales se registrarán los asuntos que reciban con motivo de su inicio de funciones; conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales.

Asimismo, deberá levantar por duplicado un acta administrativa del inicio de funciones del órgano jurisdiccional, cuyo formato le será proporcionado por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, debiendo remitir un ejemplar a la propia secretaría.

Artículo 8. El titular del Segundo Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito, deberá enviar, dentro de los primeros cinco días naturales de cada mes su reporte estadístico a la Dirección General de Estadística Judicial.

Artículo 9. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y las Comisiones de Creación de Nuevos Órganos, de Carrera Judicial y de Administración, en su ámbito de competencia, están facultados para interpretar y resolver todas las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

SEGUNDO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en la página de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

TERCERO. La conclusión de funciones del Noveno Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región y su transformación en Segundo Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos, implica que los Magistrados integrantes de dicho órgano jurisdiccional sean readscritos por la Comisión de Adscripción.

CUARTO. La Dirección General de Recursos Humanos, respetando los derechos laborales del personal de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región en Cuernavaca, Morelos, que concluye funciones, atenderá la situación laboral y adoptará las medidas que correspondan, de conformidad a lo acordado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como en las demás disposiciones aplicables.

QUINTO. Para que los movimientos del personal se realicen eficientemente, la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, coordinará que en una misma fecha inicien funciones el nuevo Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito, con residencia en Cuernavaca, Morelos con los Tribunales Colegiados Especializados del Decimoctavo Circuito, con residencia en la misma ciudad y Estado.

SEXTO. Se reforman los numerales **SEGUNDO**, fracción **XVIII**, número **2**; y **QUINTO**, número **1** del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, para quedar como sigue:

"SEGUNDO. ...

I. a XVII. ...

XVIII. DECIMOCTAVO CIRCUITO:

1. ...

2. Dos Tribunales Unitarios con sede en Cuernavaca.

3. ...

XIX. a XXXII. ...

QUINTO. ...

1. El Centro Auxiliar de la Primera Región se integrará por cinco Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, dos con residencia en el Distrito Federal, uno con sede en Cuernavaca, Morelos, y dos con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y cuatro Juzgados de Distrito auxiliares, tres con sede en el Distrito Federal, de los cuales, uno está especializado además en materia de extinción de dominio; y uno en Cuernavaca, Morelos.

2. a 11. ...

..."

SÉPTIMO. Se reforman los numerales **PRIMERO** y **CUARTO** del Acuerdo General 20/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro Auxiliar de la Primera Región, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán, para quedar como sigue:

"PRIMERO. CONFORMACIÓN, COMPETENCIA Y DENOMINACIÓN. El Centro Auxiliar de la Primera Región, está conformado por cinco Tribunales Colegiados de Circuito Auxiliares, dos con residencia en el Distrito Federal, uno con sede en Cuernavaca, Morelos, y dos con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, y cuatro Juzgados de Distrito auxiliares, tres con sede en el Distrito Federal y uno en Cuernavaca, Morelos.

Los órganos jurisdiccionales antes mencionados, tendrán jurisdicción en toda la República y competencia mixta para apoyar en el dictado de sentencias, y su denominación será la siguiente:

I. Tribunales Colegiados:

a) Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal.

b) Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal.

c) Sexto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos.

d) Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

e) Octavo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México.

II. Juzgados de Distrito:

a) Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal.

b) Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal.

c) Juzgado Tercero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal.

d) Juzgado Sexto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos.

CUARTO. OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN. El Centro Auxiliar de la Primera Región cuenta con las Oficinas de Correspondencia Común siguientes: Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal; y Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México; éstas se integrarán con las plazas que fije la Dirección General de Estadística Judicial."

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 2/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones del Noveno Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos y su transformación en Segundo Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito, así como a su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, y fecha de inicio de funciones y residencia. Al cambio de denominación del Tribunal Unitario del mismo Circuito y residencia. Así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Unitarios del Circuito y residencia indicados; y a la conclusión de funciones de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región en Cuernavaca, Morelos y su transformación en Oficina de

Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Decimoctavo Circuito en Cuernavaca, Morelos, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de seis de enero de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—México, Distrito Federal, a veintiocho de enero de dos mil dieciséis (D.O.F. DE 8 DE FEBRERO DE 2016).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales; 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, 20/2009, que crea el Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, así como los órganos jurisdiccionales que lo integrarán citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647; *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 2127; *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, página 1559 y Novena Época, Tomo XXIX, junio de 2009, página 1145, respectivamente.

ACUERDO GENERAL 3/2016, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE CREA LOS CENTROS DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO, CON SEDE EN LOS RECLUSORIOS ORIENTE, SUR Y NORTE.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del mismo, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus atribuciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracciones IV, V, VI y XXIV; y 144, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número y límites territoriales y, en su caso, la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, en cada uno de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, así como proponer al Pleno para su aprobación, los acuerdos generales de creación de los Centros de Justicia Penal Federal, esta última, que ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 42, fracción II Bis, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado el veintidós de noviembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación;

TERCERO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; por lo que para cumplir con el mandato constitucional es necesaria la creación de órganos jurisdiccionales, a fin de garantizar que la impartición de justicia sea pronta, completa, imparcial y gratuita;

CUARTO. El dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de modificación de diversos artículos constitucionales, para establecer en nuestro país el modelo de justicia procesal penal acusatorio y oral, que se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Como resultado de lo anterior, el Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de sus atribuciones debe dictar, en su ámbito de competencia, las disposiciones administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de la Norma Constitucional, de manera tal que antes del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, todo el territorio nacional opere bajo el nuevo modelo procesal penal;

QUINTO. En sesión de ocho de mayo de dos mil trece, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Plan Maestro de Implementación de la Reforma Penal, en el cual se incluyó la instalación de tres Centros de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en los Reclusorios Oriente, Sur y Norte.

SEXTO. En ese contexto, el cinco de marzo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su artículo 2 precisa que el objeto del mismo es establecer las normas para la investigación, el procesamiento y la sanción de los

delitos, esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y se repare el daño, señalando como ámbito de aplicación en la persecución de ilícitos, la competencia de los órganos jurisdiccionales federales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

SÉPTIMO. El artículo segundo transitorio, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que la entrada en vigor del mismo, a nivel federal será gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión, sin que pueda exceder del dieciocho de junio de dos mil dieciséis;

OCTAVO. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 36/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos Acuerdos Generales;

NOVENO. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cuatro de febrero de dos mil quince, aprobó la propuesta del proyecto arquitectónico de edificación de los Centros de Justicia Penal Federal Provisionales, así como de la propuesta de la plantilla de personal de los mismos, en términos del modelo de 2 Jueces de Distrito y 1 Sala de Audiencias;

DÉCIMO. En sesión de cuatro de marzo de dos mil quince el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto de acuerdo presentado por el grupo de trabajo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, relativo a la habilitación provisional como tribunales de alzada del nuevo Sistema de Justicia Penal a los Tribunales Unitarios de Circuito; y

DÉCIMO PRIMERO. El veinticinco de septiembre de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Congreso de la Unión de la Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, en los Estados de Aguascalientes, Colima, México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como en el Distrito Federal, ahora Ciudad de México.

Actualmente se cuenta con la infraestructura física para la instalación de los tres Centros de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en los Reclusorios Oriente, Sur y Norte.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto regular la organización, funcionamiento e inicio de funciones de los Centros de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en los Reclusorios Oriente, Sur y Norte.

Artículo 2. Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por:

Administrador: Juez de Distrito encargado de la administración del Centro de Justicia Penal Federal;

Centros: Centros de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en los Reclusorios Oriente, Sur y Norte.

Consejo: Consejo de la Judicatura Federal;

Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento: Jueces de Distrito;

Jueces de Distrito: Jueces de Distrito especializados en el sistema penal acusatorio;

Juzgadores: Jueces de Control, así como Tribunales de Enjuiciamiento y de Alzada;

Pleno: Pleno del Consejo; y

Tribunal de Alzada: Tribunal Unitario de Circuito con competencia especializada en el sistema penal acusatorio.

Artículo 3. Los Centros iniciarán funciones a partir de las cero horas del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.

Artículo 4. Los Centros se integrarán por tres Jueces de Distrito y un Tribunal de Alzada, y los demás Juzgadores que sean adscritos por el Pleno, atendiendo a las necesidades para la impartición de justicia.

Los Jueces de Distrito a que se refiere este artículo tendrán competencia para actuar indistintamente como; Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Acuerdo

General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal, debiendo especificar el carácter de su actuación en las constancias respectivas, sin embargo, aquellos que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio, no podrán fungir como Tribunal de Enjuiciamiento, de conformidad con el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Uno de los Jueces de Distrito fungirá como Administrador.

El turno como Administrador corresponderá a un Juez de Distrito de cada uno de los tres Centros, quienes serán designados por el Consejo, cuya duración en el cargo será conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

Los Centros contarán con la plantilla laboral autorizada, y la administración del Centro se regirá conforme a las disposiciones del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

Artículo 5. Los Juzgadores de los Centros conocerán y tendrán competencia en los procedimientos que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.

Artículo 6. La jurisdicción territorial de los Juzgadores de los Centros comprenderá la Ciudad de México.

Artículo 7. El domicilio de cada uno de los Centros será el ubicado en:

Reclusorio Norte: Jaime Nunó No. 175, colonia Chalma de Guadalupe (Cuautepec Barrio Bajo), delegación Gustavo A. Madero, C.P. 07210, en la Ciudad de México;

Reclusorio Sur: avenida Antonio Martínez de Castro esquina calle Javier Piña Palacios, colonia San Mateo Xalpa, delegación Xochimilco, C.P. 16800, en la Ciudad de México; y

Reclusorio Oriente: avenida Reforma No. 80, colonia Lomas de San Lorenzo Tezonco, delegación Iztapalapa, C.P. 09780, en la Ciudad de México.

Durante los primeros cuarenta y cinco días naturales de su inicio de funciones, los Centros, laborarán mediante un sistema diario de turno por reclusorio, en el orden expuesto en los tres párrafos que anteceden, para las

horas hábiles e inhábiles, así como para los asuntos urgentes y no urgentes, con los lineamientos que desarrollarán las direcciones generales que enseguida se indicarán.

De forma inmediata posterior a esos cuarenta y cinco días naturales, se iniciará un sistema quincenal de turno por cada reclusorio, para las horas hábiles e inhábiles, así como para los asuntos urgentes y no urgentes; en el mismo orden referido en el párrafo que antecede, y en este caso, también con los lineamientos que establecerán las direcciones generales ahí indicadas.

Toda la correspondencia relacionada con los asuntos de competencia de cada uno de los Centros deberá dirigirse a su domicilio.

Artículo 8. Cada uno de los tres Centros contarán con una Oficialía de Partes Común, que dará servicio a los Juzgadores que lo integran, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El sistema de turno y distribución de asuntos será automatizado y aleatorio, con excepción de lo siguiente:

- I. Los asuntos urgentes que se reciban durante las guardias, cuya atención corresponderá al Juez de Distrito que deba cubrirla; y
- II. Los asuntos relacionados durante las etapas procesales de investigación, e intermedia o de preparación del juicio.

Corresponde a las direcciones generales de Estadística Judicial y de Tecnologías de la Información el diseño operativo del sistema automatizado de turno y distribución de asuntos; y la elaboración de sus lineamientos, los cuales serán sometidos directamente por éstas a consideración y, en su caso, aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos.

En el diseño del sistema se deberá tomar en consideración las guardias, las vacaciones, las licencias, los impedimentos y las sustituciones de Juzgadores.

En aquellas situaciones en que por caso fortuito o fuerza mayor no pueda utilizarse el sistema automatizado, el oficial de partes con la anuencia y supervisión del Administrador turnará los asuntos nuevos en el estricto orden secuencial en que se presenten; y los relacionados a que se refiere la fracción II de este artículo al juzgador correspondiente, sin embargo, deberá observarse que aquellos Jueces de Distrito que hayan intervenido en alguna etapa del

procedimiento anterior a la audiencia de juicio no podrán fungir como Tribunal de Enjuiciamiento, de conformidad con el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 9. A partir de las cero horas del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, cada Oficialía de Partes de los Centros, funcionará las veinticuatro horas, todos los días del año, para la recepción, registro, turno y envío de los asuntos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, de lunes a viernes durante el horario de las dieciocho a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos del día siguiente, así como los días inhábiles, la Oficialía de Partes sólo recibirá las promociones de término que se presenten.

Artículo 10. Los Juzgadores, así como el personal adscrito a los mismos, laborarán de lunes a viernes de las nueve a las quince horas y de las dieciséis a las dieciocho horas, con una hora para la ingesta de alimentos, fuera de las instalaciones de los Centros, de las quince a las dieciséis horas, sin perjuicio de las medidas de organización interna que adopten sus titulares atendiendo a las necesidades del servicio.

Artículo 11. Las guardias de turno para la atención de asuntos en días y horas inhábiles de los Jueces de Distrito en su función de control se realizarán de forma semanal, de conformidad con los registros y programación que realice el Administrador.

La guardia de turno en días y horas inhábiles, finaliza el día lunes de cada semana a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos e inicia el mismo día a las nueve horas.

Los Administradores de los Centros adoptarán las medidas administrativas necesarias, a fin de que los Tribunales de Alzada de los Centros estén en posibilidad de resolver las apelaciones de término previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 12. Los Juzgadores que integran los Centros llevarán libros de gobierno electrónicos, que se integrarán con la información que se registre en el sistema informático respectivo.

Artículo 13. Los reportes estadísticos deberán remitirse a la Dirección General de Estadística Judicial, en la forma y tiempos que ésta determine.

Artículo 14. Los Juzgadores de los Centros, deberán levantar de manera individual un acta administrativa, por duplicado, del inicio de sus funciones, cuyo formato les será proporcionado por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, debiendo remitir un ejemplar a la propia Secretaría Ejecutiva.

Artículo 15. Los Centros contarán con el número suficiente de defensores públicos y oficiales de apoyo, en razón de la cantidad de los Juzgadores que lo integran.

Artículo 16. Los Jueces de Control contarán con un sistema de acceso electrónico, mediante mecanismos tecnológicos que aseguren la confidencialidad de la información, para favorecer la comunicación con el Ministerio Público de la Federación y demás autoridades, así como con las personas autorizadas por éstas, que por razón de su función deban ingresar solicitudes de providencias precautorias o relacionadas con medidas de protección, así como actos de investigación que requieren autorización judicial, solicitudes de órdenes de aprehensión o comparecencia, entre otras.

Artículo 17. En caso de que sea necesario sustituir a alguno de los Jueces de Distrito de los Centros se estará a lo siguiente:

La sustitución recaerá en otro Juez de Distrito del mismo Centro, con exclusión de aquel que funja como Administrador;

En caso de no ser posible lo previsto en la fracción anterior, la sustitución recaerá en el Administrador, en términos del artículo 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y

Si tampoco fuera posible, la sustitución recaerá en los Jueces de Distrito del Centro de Justicia Penal más cercano.

Tratándose de la sustitución del Tribunal de Alzada de los Centros, se habilita a los Tribunales Unitarios en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, para conocer, con ese carácter y en el orden numérico de su denominación, de los asuntos que se tramitan en los Centros, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás disposiciones aplicables.

Artículo 18. El personal de los Centros junto con sus Juzgadores disfrutarán de los periodos vacacionales de quince días a que se refiere el ar-

título 160 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el primero durante julio y agosto y, el segundo, en diciembre y enero, en términos del artículo 100 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, en el orden que los Juzgadores consensen. En caso de que no se logre el consenso será la Comisión de Carrera Judicial o la Comisión de Receso, quien lo determine. En todo caso deberán de permanecer dos Jueces de Distrito en cada Centro, para lo cual deberá contabilizarse al que funja como Administrador, supuesto en el cual se deberá observar lo previsto en el artículo 8, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

El personal de los Tribunales de Alzada del Centro disfrutará de los periodos vacacionales en los términos precisados. Lo mismo sucederá con el personal de la administración del Centro, sin embargo, en este caso el Administrador deberá tomar las medidas necesarias para que haya servidores públicos de guardia en el mismo, durante dicho periodo vacacional, a fin de que el Centro no detenga su actividad.

La propia Comisión de Carrera Judicial, previo análisis de las solicitudes presentadas, podrá autorizar el disfrute de las vacaciones fuera de los meses de julio y agosto y, diciembre y enero, siempre y cuando existan causas excepcionales y justificadas para ello.

Artículo 19. El Pleno y las Comisiones del Consejo, en el ámbito de su competencia, interpretarán y resolverán todas las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, con excepción de lo dispuesto en los párrafos siguientes:

Para las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, entrará en vigor el día de su aprobación, para adoptar con la debida anticipación las medidas necesarias para que los Centros de Justicia Penal a que se refiere este Acuerdo, entre en operación en la fecha señalada en este artículo.

Los Administradores de los Centros llevarán a cabo las acciones de coordinación que sean necesarias para garantizar el funcionamiento del mismo en dicha fecha.

SEGUNDO. Hasta en tanto se crea el Tribunal de Alzada a que se refiere el artículo 4 de este Acuerdo, se habilita a los Tribunales Unitarios en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, para conocer, en el orden numérico de su denominación, de los procedimientos que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.

Los Tribunales Unitarios indicados precisarán en los actos procesales que celebren la denominación con la que actúen, dependiendo si lo hacen conforme al citado código o al Código Federal de Procedimientos Penales.

Estos Tribunales Unitarios quedan exceptuados de la obligación a que se refiere el artículo 14 de este Acuerdo, y para efectos del artículo 18 del mismo instrumento normativo se regirá por las disposiciones aplicables como Tribunal Unitario de Circuito.

TERCERO. Las direcciones generales de Estadística Judicial y de Tecnologías de la Información implementarán los mecanismos de coordinación entre el sistema automatizado de turno y distribución de asuntos de la Oficialía de Partes de los Centros y la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios de Circuito habilitados, para en su caso compensar entre ellos la carga de trabajo en su doble función, prevista en los artículos 17, último párrafo y segundo transitorio del presente Acuerdo.

CUARTO. En materia de ejecución de sanciones penales se deberá observar lo dispuesto en el Acuerdo General 28/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual se habilita a los Jueces de Distrito de los Centros de Justicia Penal Federal para que ejerzan funciones de ejecución de sanciones penales.

QUINTO. En tanto se ordena la utilización de los libros de control electrónicos, los Administradores de los Centros con el apoyo de su personal deberán realizar los registros de los asuntos que ingresen en libretas auxiliares.

SEXTO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el Portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 3/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea los Centros de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en los Reclusorios Oriente, Sur y Norte de esa ciudad, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos de los señores consejeros: Presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.— Ciudad de México, a dieciocho de febrero de dos mil dieciséis (D.O.F. DE 26 DE FEBRERO DE 2016).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; 36/2014 que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos acuerdos generales; que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales; y, 28/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual se habilita a los Jueces de Distrito de los Centros de Justicia Penal Federal para que ejerzan funciones de ejecución de sanciones penales citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647; *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 12, Tomo IV, noviembre de 2014, página 3073; *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 2025; y, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 19, Tomo III, junio de 2015, página 2513, respectivamente.

**ACUERDO GENERAL 4/2016, DEL PLENO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDE-
RAL, QUE CREA EL CENTRO DE JUS-
TICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO
DE MÉXICO, CON RESIDENCIA EN
NEZAHUALCÓYOTL.**

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de

la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del mismo, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus atribuciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracciones IV, V, VI y XXIV; y 144, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número y límites territoriales y, en su caso, la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, en cada uno de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, así como proponer al Pleno para su aprobación, los acuerdos generales de creación de los Centros de Justicia Penal Federal, esta última, que ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 42, fracción II Bis, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado el veintidós de noviembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación;

TERCERO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; por lo que para cumplir con el mandato constitucional es necesaria la creación de órganos jurisdiccionales, a fin de garantizar que la impartición de justicia sea pronta, completa, imparcial y gratuita;

CUARTO. El dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de modificación de diversos artículos constitucionales, para establecer en nuestro país el modelo de justicia procesal penal acusatorio y oral, que se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Como resultado de lo anterior, el Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de sus atribuciones debe dictar, en su ámbito de competencia, las disposiciones administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de la norma constitucional, de manera tal que antes del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, todo el territorio nacional opere bajo el nuevo modelo procesal penal;

QUINTO. En sesión de ocho de mayo de dos mil trece, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Plan Maestro de Implementación de la Reforma Penal, en el cual se incluyó la instalación de dos Centros de Justicia Penal Federal en el Estado de México;

SEXTO. En ese contexto, el cinco de marzo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su artículo 2 precisa que el objeto del mismo es establecer las normas para la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y se repare el daño, señalando como ámbito de aplicación en la persecución de ilícitos, la competencia de los órganos jurisdiccionales federales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

SÉPTIMO. El artículo segundo transitorio, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que la entrada en vigor del mismo, a nivel federal será gradualmente en los términos previstos en la declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión, sin que pueda exceder del dieciocho de junio de dos mil dieciséis;

OCTAVO. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 36/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos Acuerdos Generales;

NOVENO. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cuatro de febrero de dos mil quince, aprobó la propuesta del proyecto arquitectónico de edificación de los Centros de Justicia Penal Federal Provisionales, así como de la propuesta de la plantilla de personal de los mismos, en términos del modelo de 2 Jueces de Distrito y 1 Sala de Audiencias;

DÉCIMO. En sesión de cuatro de marzo de dos mil quince el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto de acuerdo presentado por el grupo de trabajo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, relativo a la habilitación provisional como tribunales de alzada del nuevo Sistema de Justicia Penal a los Tribunales Unitarios de Circuito; y

DÉCIMO PRIMERO. El veinticinco de septiembre de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Congreso de la Unión de la Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, en los Estados de Aguascalientes, Colima, México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como en la Ciudad de México.

Actualmente se cuenta con la infraestructura física para la instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto regular la organización, funcionamiento e inicio de funciones del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl.

Artículo 2. Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por:

I. Administrador: Juez de Distrito encargado de la administración del Centro de Justicia Penal Federal;

II. Centro: Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl;

III. Consejo: Consejo de la Judicatura Federal;

IV. Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento: Jueces de Distrito;

V. Jueces de Distrito: Jueces de Distrito especializados en el sistema penal acusatorio;

VI. Juzgadores: Jueces de Control, así como Tribunales de Enjuiciamiento y de Alzada;

VII. Pleno: Pleno del Consejo; y

VIII. Tribunal de Alzada: Tribunal Unitario de Circuito con competencia especializada en el sistema penal acusatorio.

Artículo 3. El Centro iniciará funciones a partir de las cero horas del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.

Artículo 4. El Centro se integrará por tres Jueces de Distrito y un Tribunal de Alzada, y los demás Juzgadores que sean adscritos por el Pleno, atendiendo a las necesidades para la impartición de justicia.

Los Jueces de Distrito a que se refiere este artículo tendrán competencia para actuar indistintamente como; Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal, debiendo especificar el carácter de su actuación en las constancias respectivas, sin embargo, aquellos que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio, no podrán fungir como Tribunal de Enjuiciamiento, de conformidad con el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Uno de los Jueces de Distrito fungirá como Administrador.

El turno como Administrador corresponderá al Juez de Distrito del Centro que sea designado por el Consejo, cuya duración en el cargo será conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

El Centro contará con la plantilla laboral autorizada, y la administración del Centro se regirá conforme a las disposiciones del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

Artículo 5. Los Juzgadores del Centro conocerán y tendrán competencia en los procedimientos que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.

Artículo 6. La jurisdicción territorial de los Juzgadores del Centro comprenderá el Estado de México, con la totalidad de sus Municipios.

Artículo 7. El domicilio del Centro será el ubicado en Caballo Bayo número 146, colonia Benito Juárez (La Aurora), C.P. 57000, en Nezahualcóyotl, Estado de México.

Toda la correspondencia relacionada con los asuntos de competencia del Centro deberá dirigirse al domicilio indicado.

Artículo 8. El Centro contará con una Oficialía de Partes Común, que dará servicio a los Juzgadores que lo integran, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El sistema de turno y distribución de asuntos será automatizado y aleatorio, con excepción de lo siguiente:

I. Los asuntos urgentes que se reciban durante las guardias, cuya atención corresponderá al Juez de Distrito que deba cubrirla; y

II. Los asuntos relacionados durante las etapas procesales de investigación, e intermedia o de preparación del juicio.

Corresponde a las Direcciones Generales de Estadística Judicial y de Tecnologías de la Información el diseño operativo del sistema automatizado de turno y distribución de asuntos; y la elaboración de sus lineamientos, los cuales serán sometidos directamente por éstas a consideración y, en su caso, aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos.

En el diseño del sistema se deberá tomar en consideración las guardias, las vacaciones, las licencias, los impedimentos y las sustituciones de Juzgadores.

En aquellas situaciones en que por caso fortuito o fuerza mayor no pueda utilizarse el sistema automatizado, el oficial de partes con la anuencia y supervisión del Administrador turnará los asuntos nuevos en el estricto orden secuencial en que se presenten; y los relacionados a que se refiere la fracción II de este artículo al juzgador correspondiente, sin embargo, deberá observarse que aquellos Jueces de Distrito que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio no podrán fungir como Tribunal de Enjuiciamiento, de conformidad con el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 9. A partir de las cero horas del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, la Oficialía de Partes del Centro, funcionará las veinticuatro horas, todos los días del año, para la recepción, registro, turno y envío de los asuntos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, de lunes a viernes durante el horario de las dieciocho a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos del día siguiente, así como los días inhábiles, la Oficialía de Partes sólo recibirá las promociones de término que se presenten.

Artículo 10. Los Juzgadores, así como el personal adscrito a los mismos, laborarán de lunes a viernes de las nueve a las quince horas y de las dieciséis a las dieciocho horas, con una hora para la ingesta de alimentos, fuera de las instalaciones del Centro, de las quince a las dieciséis horas, sin perjuicio de las medidas de organización interna que adopten sus titulares atendiendo a las necesidades del servicio.

Artículo 11. Las guardias de turno para la atención de asuntos en días y horas inhábiles de los Jueces de Distrito en su función de control se realizarán de forma semanal, de conformidad con los registros y programación que realice el Administrador.

La guardia de turno en días y horas inhábiles, finaliza el día lunes de cada semana a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos e inicia el mismo día a las nueve horas.

El Administrador del Centro adoptará las medidas administrativas necesarias, a fin de que el Tribunal de Alzada del Centro esté en posibilidad de resolver las apelaciones de término previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 12. Los Juzgadores que integran el Centro llevarán Libros de Gobierno Electrónicos, que se integrarán con la información que se registre en el sistema informático respectivo.

Artículo 13. Los reportes estadísticos deberán remitirse a la Dirección General de Estadística Judicial, en la forma y tiempos que ésta determine.

Artículo 14. Los Juzgadores del Centro, deberán levantar de manera individual un acta administrativa, por duplicado, del inicio de sus funciones, cuyo formato les será proporcionado por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, debiendo remitir un ejemplar a la propia Secretaría Ejecutiva.

Artículo 15. El Centro contará con el número suficiente de defensores públicos y oficiales de apoyo, en razón de la cantidad de los Juzgadores que lo integran.

Artículo 16. Los Jueces de Control contarán con un sistema de acceso electrónico, mediante mecanismos tecnológicos que aseguren la confidencialidad de la información, para favorecer la comunicación con el Ministerio Público de la Federación y demás autoridades, así como con las personas autorizadas por éstas, que por razón de su función deban ingresar solicitudes de providencias precautorias o relacionadas con medidas de protección, así como actos de investigación que requieren autorización judicial, solicitudes de órdenes de aprehensión o comparecencia, entre otras.

Artículo 17. En caso de que sea necesario sustituir a alguno de los Jueces de Distrito del Centro se estará a lo siguiente:

I. La sustitución recaerá en otro Juez de Distrito del mismo Centro, con exclusión de aquel que funja como Administrador;

II. En caso de no ser posible lo previsto en la fracción anterior, la sustitución recaerá en el Administrador, en términos del artículo 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y

III. Si tampoco fuera posible, la sustitución recaerá en los Jueces de Distrito del Centro de Justicia Penal más cercano.

Tratándose de la sustitución del Tribunal de Alzada del Centro, se habilita a los Tribunales Unitarios del Segundo Circuito con residencia en Toluca, Estado de México, para conocer, con ese carácter y en el orden numérico de su denominación de los asuntos que se tramitan en el Centro, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás disposiciones aplicables.

Artículo 18. El personal del Centro junto con sus Juzgadores disfrutará de los periodos vacacionales de quince días a que se refiere el artículo 160 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el primero durante julio y agosto y, el segundo, en diciembre y enero, en términos del artículo 100 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, en el orden que los Juzgadores consensen. En caso de que no se logre el consenso será la Comisión de Carrera Judicial o la Comisión de Receso, quien lo determine. En todo caso deberán de permanecer dos Jueces de Distrito en el Centro, para lo cual deberá contabilizarse al que funja como Administrador, supuesto en el cual se deberá observar lo previsto en el artículo 8, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

El personal del Tribunal de Alzada del Centro disfrutará de los periodos vacacionales en los términos precisados. Lo mismo sucederá con el personal de la administración del Centro, sin embargo, en este caso el Administrador deberá tomar las medidas necesarias para que haya servidores públicos de guardia en el mismo, durante dicho periodo vacacional, a fin de que el Centro no detenga su actividad.

La propia Comisión de Carrera Judicial, previo análisis de las solicitudes presentadas, podrá autorizar el disfrute de las vacaciones fuera de los meses de julio y agosto y, diciembre y enero, siempre y cuando existan causas excepcionales y justificadas para ello.

Artículo 19. El Pleno y las Comisiones del Consejo, en el ámbito de su competencia, interpretarán y resolverán todas las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, con excepción de lo dispuesto en los párrafos siguientes:

Para las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, entrará en vigor el día de su aprobación, para adoptar con la debida anticipación las medidas necesarias para que el Centro de Justicia Penal a que se refiere este Acuerdo, entre en operación en la fecha señalada en este artículo.

El Administrador del Centro llevará a cabo las acciones de coordinación que sean necesarias para garantizar el funcionamiento del mismo en dicha fecha.

SEGUNDO. Hasta en tanto se crea el Tribunal de Alzada a que se refiere el artículo 4 de este Acuerdo, se habilita al Tercer Tribunal Unitario del Segundo Circuito con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México, para conocer de los procedimientos que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.

El Tribunal Unitario precisará en los actos procesales que celebre la denominación con la que actúa, dependiendo si lo hace conforme al citado código o al Código Federal de Procedimientos Penales.

Este Tribunal Unitario queda exceptuado de la obligación a que se refiere el artículo 14 de este Acuerdo, y para efectos del artículo 18 del mismo instrumento normativo se regirá por las disposiciones aplicables como Tribunal Unitario de Circuito.

TERCERO. Las Direcciones Generales de Estadística Judicial y de Tecnologías de la Información implementarán los mecanismos de coordinación entre el sistema automatizado de turno y distribución de asuntos de la Oficialía de Partes del Centro y la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios de Circuito habilitados, para en su caso compensar entre ellos la carga de trabajo en su doble función, prevista en los artículos 17 último párrafo y segundo transitorio del presente Acuerdo.

CUARTO. En materia de ejecución de sanciones penales se deberá observar lo dispuesto en el Acuerdo General 28/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual se habilita a los Jueces de Distrito de los Centros de Justicia Penal Federal para que ejerzan funciones de ejecución de sanciones penales.

QUINTO. En tanto se ordena la utilización de los libros de control electrónicos, el Administrador del Centro con el apoyo de su personal deberá realizar los registros de los asuntos que ingresen en libretas auxiliares.

SEXTO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el Portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 4/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos de los señores consejeros: Presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández. Ciudad de México, a dieciocho de febrero de dos mil dieciséis (D.O.F. DE 26 DE FEBRERO DE 2016).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; 36/2014 que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos acuerdos generales; que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales; y, 28/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual se habilita a los Jueces de Distrito de los Centros de Justicia Penal Federal para que ejerzan funciones de ejecución de sanciones penales citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647; *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 12, Tomo IV, noviembre de 2014, página 3073; *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 2025; y, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 19, Tomo III, junio de 2015, página 2513, respectivamente.

**ACUERDO GENERAL 5/2016, DEL PLENO
DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDE-
RAL, QUE CREA EL CENTRO DE JUSTICIA
PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE
MORELOS, CON RESIDENCIA EN LA CIU-
DAD DE CUERNAVACA.**

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del mismo, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus atribuciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracciones IV, V, VI y XXIV; y 144, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número y límites territoriales y, en su caso, la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, en cada uno de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, así como proponer al Pleno para su aprobación, los acuerdos generales de creación de los Centros de Justicia Penal Federal, esta última, que ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 42, fracción II Bis, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado el veintidós de noviembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación;

TERCERO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; por lo que para cumplir con el mandato constitucional es necesaria la creación de órganos jurisdiccionales, a fin de garantizar que la impartición de justicia sea pronta, completa, imparcial y gratuita;

CUARTO. El dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de modificación de diversos artículos

constitucionales, para establecer en nuestro país el modelo de justicia procesal penal acusatorio y oral, que se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Como resultado de lo anterior, el Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de sus atribuciones debe dictar, en su ámbito de competencia, las disposiciones administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de la norma constitucional, de manera tal que antes del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, todo el territorio nacional opere bajo el nuevo modelo procesal penal;

QUINTO. En sesión de ocho de mayo de dos mil trece, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Plan Maestro de Implementación de la Reforma Penal, en el cual se incluyó la instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos;

SEXTO. En ese contexto, el cinco de marzo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su artículo 2 precisa que el objeto del mismo es establecer las normas para la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y se repare el daño, señalando como ámbito de aplicación en la persecución de ilícitos, la competencia de los órganos jurisdiccionales federales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

SÉPTIMO. El artículo segundo transitorio, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que la entrada en vigor del mismo, a nivel federal será gradualmente en los términos previstos en la declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión, sin que pueda exceder del dieciocho de junio de dos mil dieciséis;

OCTAVO. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 36/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos Acuerdos Generales;

NOVENO. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cuatro de febrero de dos mil quince, aprobó la propuesta del proyecto arquitectónico de edificación de los Centros de Justicia Penal Federal Provisionales, así como de la propuesta de la plantilla de personal de los mismos, en términos del modelo de 2 Jueces de Distrito y 1 Sala de Audiencias;

DÉCIMO. En sesión de cuatro de marzo de dos mil quince el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto de acuerdo presentado por el grupo de trabajo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, relativo a la habilitación provisional como tribunales de alzada del nuevo Sistema de Justicia Penal a los Tribunales Unitarios de Circuito; y

DÉCIMO PRIMERO. El veinticinco de septiembre de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Congreso de la Unión de la Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, en los Estados de Aguascalientes, Colima, México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como en la Ciudad de México.

Actualmente se cuenta con la infraestructura física para la instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

Artículo 1. El presente Acuerdo tiene por objeto regular la organización, funcionamiento e inicio de funciones del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca.

Artículo 2. Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por:

I. Administrador: Juez de Distrito encargado de la administración del Centro de Justicia Penal Federal;

II. Centro: Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca;

III. Consejo: Consejo de la Judicatura Federal;

IV. Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento: Jueces de Distrito;

V. Jueces de Distrito: Jueces de Distrito especializados en el sistema penal acusatorio;

VI. Juzgadores: Jueces de Control, así como Tribunales de Enjuiciamiento y de Alzada;

VII. Pleno: Pleno del Consejo; y

VIII. Tribunal de Alzada: Tribunal Unitario de Circuito con competencia especializada en el sistema penal acusatorio.

Artículo 3. El Centro iniciará funciones a partir de las cero horas del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.

Artículo 4. El Centro se integrará por tres Jueces de Distrito y un Tribunal de Alzada, y los demás Juzgadores que sean adscritos por el Pleno, atendiendo a las necesidades para la impartición de justicia.

Los Jueces de Distrito a que se refiere este artículo tendrán competencia para actuar indistintamente como; Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal, debiendo especificar el carácter de su actuación en las constancias respectivas, sin embargo, aquellos que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio, no podrán fungir como Tribunal de Enjuiciamiento, de conformidad con el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Uno de los Jueces de Distrito fungirá como Administrador.

El turno como Administrador corresponderá al Juez de Distrito del Centro que sea designado por el Consejo, cuya duración en el cargo será conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

El Centro contará con la plantilla laboral autorizada, y la administración del Centro se regirá conforme a las disposiciones del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

Artículo 5. Los Juzgadores del Centro conocerán y tendrán competencia en los procedimientos que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.

Artículo 6. La jurisdicción territorial de los Juzgadores del Centro comprenderá el Estado de Morelos, con la totalidad de sus Municipios.

Artículo 7. El domicilio del Centro será el ubicado en Boulevard del Lago No. 103, colonia Villas Deportivas, delegación Miguel Hidalgo, C.P. 62370, Cuernavaca, Morelos.

Toda la correspondencia relacionada con los asuntos de competencia del Centro deberá dirigirse al domicilio indicado.

Artículo 8. El Centro contará con una Oficialía de Partes Común, que dará servicio a los Juzgadores que lo integran, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El sistema de turno y distribución de asuntos será automatizado y aleatorio, con excepción de lo siguiente:

I. Los asuntos urgentes que se reciban durante las guardias, cuya atención corresponderá al Juez de Distrito que deba cubrirla; y

II. Los asuntos relacionados durante las etapas procesales de investigación, e intermedia o de preparación del juicio.

Corresponde a las Direcciones Generales de Estadística Judicial y de Tecnologías de la Información el diseño operativo del sistema automatizado de turno y distribución de asuntos; y la elaboración de sus lineamientos, los cuales serán sometidos directamente por éstas a consideración y, en su caso, aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos.

En el diseño del sistema se deberá tomar en consideración las guardias, las vacaciones, las licencias, los impedimentos y las sustituciones de Juzgadores.

En aquellas situaciones en que por caso fortuito o fuerza mayor no pueda utilizarse el sistema automatizado, el oficial de partes con la anuencia y supervisión del Administrador turnará los asuntos nuevos en el estricto orden secuencial en que se presenten; y los relacionados a que se refiere la fracción II de este artículo al juzgador correspondiente, sin embargo, deberá observarse que aquellos Jueces de Distrito que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio no podrán fungir como Tribunal de Enjuiciamiento, de conformidad con el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 9. A partir de las cero horas del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, la Oficialía de Partes del Centro, funcionará las veinticuatro horas, todos los días del año, para la recepción, registro, turno y envío de los asuntos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, de lunes a viernes durante el horario de las dieciocho a las ocho horas con cincuenta y nueve

minutos del día siguiente, así como los días inhábiles, la Oficialía de Partes sólo recibirá las promociones de término que se presenten.

Artículo 10. Los Juzgadores, así como el personal adscrito a los mismos, laborarán de lunes a viernes de las nueve a las quince horas y de las dieciséis a las dieciocho horas, con una hora para la ingesta de alimentos, fuera de las instalaciones del Centro, de las quince a las dieciséis horas, sin perjuicio de las medidas de organización interna que adopten sus titulares atendiendo a las necesidades del servicio.

Artículo 11. Las guardias de turno para la atención de asuntos en días y horas inhábiles de los Jueces de Distrito en su función de control se realizarán de forma semanal, de conformidad con los registros y programación que realice el Administrador.

La guardia de turno en días y horas inhábiles, finaliza el día lunes de cada semana a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos e inicia el mismo día a las nueve horas.

El Administrador del Centro adoptará las medidas administrativas necesarias, a fin de que el Tribunal de Alzada del Centro esté en posibilidad de resolver las apelaciones de término previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 12. Los Juzgadores que integran el Centro llevarán libros de gobierno electrónicos, que se integrarán con la información que se registre en el sistema informático respectivo.

Artículo 13. Los reportes estadísticos deberán remitirse a la Dirección General de Estadística Judicial, en la forma y tiempos que ésta determine.

Artículo 14. Los Juzgadores del Centro, deberán levantar de manera individual un acta administrativa, por duplicado, del inicio de sus funciones, cuyo formato les será proporcionado por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, debiendo remitir un ejemplar a la propia Secretaría Ejecutiva.

Artículo 15. El Centro contará con el número suficiente de defensores públicos y oficiales de apoyo, en razón de la cantidad de los Juzgadores que lo integran.

Artículo 16. Los Jueces de control contarán con un sistema de acceso electrónico, mediante mecanismos tecnológicos que aseguren la confiden-

cialidad de la información, para favorecer la comunicación con el Ministerio Público de la Federación y demás autoridades, así como con las personas autorizadas por éstas, que por razón de su función deban ingresar solicitudes de providencias precautorias o relacionadas con medidas de protección, así como actos de investigación que requieren autorización judicial, solicitudes de órdenes de aprehensión o comparecencia, entre otras.

Artículo 17. En caso de que sea necesario sustituir a alguno de los Jueces de Distrito del Centro se estará a lo siguiente:

I. La sustitución recaerá en otro Juez de Distrito del mismo Centro, con exclusión de aquel que funja como Administrador;

II. En caso de no ser posible lo previsto en la fracción anterior, la sustitución recaerá en el Administrador, en términos del artículo 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y

III. Si tampoco fuera posible, la sustitución recaerá en los Jueces de Distrito del Centro de Justicia Penal más cercano.

Tratándose de la sustitución del Tribunal de Alzada del Centro, se habilita únicamente para el día veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, a los Tribunales Unitarios del Sexto Circuito, con residencia en San Andrés Cholula, Puebla, para conocer, con ese carácter y en el orden numérico de su denominación, de los asuntos que se tramitan en el Centro, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás disposiciones aplicables. Y a partir del uno de marzo de dos mil dieciséis, para los mismos efectos, al Segundo Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito con residencia en Cuernavaca, Morelos, que iniciará funciones en esa fecha, de conformidad con el Acuerdo General 2/2016.

Artículo 18. El personal del Centro junto con sus Juzgadores disfrutarán de los periodos vacacionales de quince días a que se refiere el artículo 160 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el primero durante julio y agosto y, el segundo, en diciembre y enero, en términos del artículo 100 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, en el orden que los Juzgadores consensen. En caso de que no se logre el consenso será la Comisión de Carrera Judicial o la Comisión de Receso, quien lo determine. En todo caso deberán de permanecer dos Jueces de

Distrito en el Centro, para lo cual deberá contabilizarse al que funja como Administrador, supuesto en el cual se deberá observar lo previsto en el artículo 8, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

El personal del Tribunal de Alzada del Centro disfrutará de los periodos vacacionales en los términos precisados. Lo mismo sucederá con el personal de la administración del Centro, sin embargo, en este caso el Administrador deberá tomar las medidas necesarias para que haya servidores públicos de guardia en el mismo, durante dicho periodo vacacional, a fin de que el Centro no detenga su actividad.

La propia Comisión de Carrera Judicial, previo análisis de las solicitudes presentadas, podrá autorizar el disfrute de las vacaciones fuera de los meses de julio y agosto y, diciembre y enero, siempre y cuando existan causas excepcionales y justificadas para ello.

Artículo 19. El Pleno y las Comisiones del Consejo, en el ámbito de su competencia, interpretarán y resolverán todas las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, con excepción de lo dispuesto en los párrafos siguientes:

Para las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, entrará en vigor el día de su aprobación, para adoptar con la debida anticipación las medidas necesarias para que el Centro de Justicia Penal a que se refiere este Acuerdo, entre en operación en la fecha señalada en este artículo.

El Administrador del Centro llevará a cabo las acciones de coordinación que sean necesarias para garantizar el funcionamiento del mismo en dicha fecha.

El último párrafo del artículo 17 de este Acuerdo entrará en vigor el uno de marzo de dos mil dieciséis.

SEGUNDO. Hasta en tanto se crea el Tribunal de Alzada a que se refiere el artículo 4 de este Acuerdo, se habilita al Tribunal Unitario del

Decimoctavo Circuito con residencia en Cuernavaca, Morelos –mismo que cambia de denominación a partir del uno de marzo de dos mil dieciséis, por Primer Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito– para conocer de los procedimientos que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables; así como para conocer como Tribunal de Alzada, en términos del artículo 17, último párrafo, de este Acuerdo hasta en tanto entra en funciones el Segundo Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito con residencia en Cuernavaca, Morelos.

El Tribunal Unitario precisará en los actos procesales que celebre la denominación con la que actúa, dependiendo si lo hace conforme al citado código o al Código Federal de Procedimientos Penales.

Este Tribunal Unitario queda exceptuado de la obligación a que se refiere el artículo 14 de este Acuerdo, y para efectos del artículo 18 del mismo instrumento normativo se regirá por las disposiciones aplicables como Tribunal Unitario de Circuito.

TERCERO. Las Direcciones Generales de Estadística Judicial y de Tecnologías de la Información implementarán los mecanismos de coordinación entre el sistema automatizado de turno y distribución de asuntos de la Oficialía de Partes del Centro y la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios de Circuito habilitados, para en su caso compensar entre ellos la carga de trabajo en su doble función, prevista en los artículos 17 último párrafo y segundo transitorio del presente Acuerdo.

CUARTO. En materia de ejecución de sanciones penales se deberá observar lo dispuesto en el Acuerdo General 28/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual se habilita a los Jueces de Distrito de los Centros de Justicia Penal Federal para que ejerzan funciones de ejecución de sanciones penales.

QUINTO. En tanto se ordena la utilización de los libros de control electrónicos, el Administrador del Centro con el apoyo de su personal deberá realizar los registros de los asuntos que ingresen en libretas auxiliares.

SEXTO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el Portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

EL LICENCIADO GONZALO MCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,**CERTIFICA:**

Que este Acuerdo General 5/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos de los señores consejeros: Presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—Ciudad de México, a dieciocho de febrero de dos mil dieciséis (D.O.F. DE 26 DE FEBRERO DE 2016).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; 36/2014 que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos acuerdos generales; que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales; 2/2016 relativo a la conclusión de funciones del Noveno Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos y su transformación en Segundo Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito, así como a su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, y fecha de inicio de funciones y residencia. Al cambio de denominación del Tribunal Unitario del mismo circuito y residencia. Así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Unitarios del Circuito y residencia indicados; y a la conclusión de funciones de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región en Cuernavaca, Morelos y su transformación en Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Decimoctavo Circuito en Cuernavaca, Morelos; y, 28/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual se habilita a los Jueces de Distrito de los Centros de Justicia Penal Federal para que ejerzan funciones de ejecución de sanciones penales citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647; *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 12, Tomo IV, noviembre de 2014, página 3073; Décima Época, Libro 27, Tomo III, febrero de 2016, página 2292; *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Novena Época Tomo XXVII, marzo de 2008, página 2025; y *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 19, Tomo III, junio de 2015, página 2513, respectivamente.

ACUERDO GENERAL 6/2016, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE CREA EL CENTRO DE JUSTICIA

PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE HIDALGO, CON RESIDENCIA EN PACHUCA.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del mismo, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus atribuciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracciones IV, V, VI y XXIV; y 144, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número y límites territoriales y, en su caso, la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, en cada uno de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, así como proponer al Pleno para su aprobación, los acuerdos generales de creación de los Centros de Justicia Penal Federal, esta última, que ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 42, fracción II Bis, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado el veintidós de noviembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación;

TERCERO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; por lo que para cumplir con el mandato constitucional es necesaria la creación de órganos jurisdiccionales, a fin de garantizar que la impartición de justicia sea pronta, completa, imparcial y gratuita;

CUARTO. El dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de modificación de diversos artículos constitucionales, para establecer en nuestro país el modelo de justicia procesal penal acusatorio y oral, que se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Como resultado de lo anterior,

el Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de sus atribuciones debe dictar, en su ámbito de competencia, las disposiciones administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de la norma constitucional, de manera tal que antes del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, todo el territorio nacional opere bajo el nuevo modelo procesal penal;

QUINTO. En sesión de ocho de mayo de dos mil trece, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Plan Maestro de Implementación de la Reforma Penal, en el cual se incluyó la instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo;

SEXTO. En ese contexto, el cinco de marzo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su artículo 2 precisa que el objeto del mismo, es establecer las normas para la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y se repare el daño, señalando como ámbito de aplicación en la persecución de ilícitos, la competencia de los órganos jurisdiccionales federales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;

SÉPTIMO. El artículo segundo transitorio, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que la entrada en vigor del mismo, a nivel federal será gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión, sin que pueda exceder del dieciocho de junio de dos mil dieciséis;

OCTAVO. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 36/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos Acuerdos Generales;

NOVENO. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cuatro de febrero de dos mil quince, aprobó la propuesta del proyecto arquitectónico de edificación de los Centros de Justicia Penal Federal Provisionales, así como de la propuesta de la plantilla de personal de los mismos, en términos del modelo de 2 Jueces de Distrito y 1 Sala de Audiencias;

DÉCIMO. En sesión de cuatro de marzo de dos mil quince el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto de acuerdo presentado por el grupo de trabajo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal,

relativo a la habilitación provisional como tribunales de alzada del nuevo Sistema de Justicia Penal a los Tribunales Unitarios de Circuito; y

DÉCIMO PRIMERO. El veinticinco de septiembre de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Congreso de la Unión de la Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, en los Estados de Aguascalientes, Colima, de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como en la Ciudad de México.

Actualmente se cuenta con la infraestructura física para la instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

Artículo 1. El presente acuerdo tiene por objeto regular la organización, funcionamiento e inicio de funciones del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca.

Artículo 2. Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por:

I. Administrador: Juez de Distrito encargado de la administración del Centro de Justicia Penal Federal;

II. Centro: Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca;

III. Consejo: Consejo de la Judicatura Federal;

IV. Jueces de Control y tribunales de Enjuiciamiento: Jueces de Distrito;

V. Jueces de Distrito: Jueces de Distrito especializados en el sistema penal acusatorio;

VI. Juzgadores: Jueces de Control, así como tribunales de Enjuiciamiento y de Alzada;

VII. Pleno: Pleno del Consejo; y

VIII. Tribunal de Alzada: Tribunal Unitario de Circuito con competencia especializada en el sistema penal acusatorio.

Artículo 3. El Centro iniciará funciones a partir de las cero horas del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.

Artículo 4. El Centro se integra por tres Jueces de Distrito y un Tribunal de Alzada, y los demás juzgadores que sean adscritos por el Pleno, atendiendo a las necesidades para la impartición de justicia.

Los Jueces de Distrito a que se refiere este artículo tendrán competencia para actuar indistintamente como; Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal, debiendo especificar el carácter de su actuación en las constancias respectivas, sin embargo, aquellos que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio, no podrán fungir como Tribunal de Enjuiciamiento, de conformidad con el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Uno de los Jueces de Distrito fungirá como Administrador.

El turno como Administrador corresponderá al Juez de Distrito del Centro que sea designado por el Consejo, cuya duración en el cargo será conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

El Centro contará con la plantilla laboral autorizada, y la Administración del Centro se regirá conforme a las disposiciones del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

Artículo 5. Los juzgadores del Centro conocerán y tendrán competencia en los procedimientos que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.

Artículo 6. La jurisdicción territorial de los juzgadores del Centro comprenderá el Estado de Hidalgo, con la totalidad de sus Municipios.

Artículo 7. El domicilio del Centro será el ubicado en calle San Luis No. 1007, colonia San Bartolo, C.P. 42039, Pachuca, Hidalgo.

Toda la correspondencia relacionada con los asuntos de competencia del Centro deberá dirigirse al domicilio indicado.

Artículo 8. El Centro contará con una Oficialía de Partes Común, que dará servicio a los juzgadores que lo integran, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El sistema de turno y distribución de asuntos será automatizado y aleatorio, con excepción de lo siguiente:

I. Los asuntos urgentes que se reciban durante las guardias, cuya atención corresponderá al Juez de Distrito que deba cubrirla; y

II. Los asuntos relacionados durante las etapas procesales de investigación, e intermedia o de preparación del juicio.

Corresponde a las Direcciones Generales de Estadística Judicial y de Tecnologías de la Información el diseño operativo del sistema automatizado de turno y distribución de asuntos; y la elaboración de sus lineamientos, los cuales serán sometidos directamente por éstas a consideración y, en su caso, aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos.

En el diseño del sistema se deberá tomar en consideración las guardias, las vacaciones, las licencias, los impedimentos y las sustituciones de juzgadores.

En aquellas situaciones en que por caso fortuito o fuerza mayor no pueda utilizarse el sistema automatizado, el Oficial de Partes con la anuencia y supervisión del Administrador turnará los asuntos nuevos en el estricto orden secuencial en que se presenten; y los relacionados a que se refiere la fracción II de este artículo al juzgador correspondiente, sin embargo, deberá observarse que aquellos Jueces de Distrito que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio no podrán fungir como Tribunal de Enjuiciamiento, de conformidad con el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 9. A partir de las cero horas del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, la Oficialía de Partes del Centro, funcionará las veinticuatro horas, todos los días del año, para la recepción, registro, turno y envío de los asuntos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, de lunes a viernes durante el horario de las dieciocho a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos del día siguiente, así como los días inhábiles, la Oficialía de Partes sólo recibirá las promociones de término que se presenten.

Artículo 10. Los juzgadores, así como el personal adscrito a los mismos, laborarán de lunes a viernes de las nueve a las quince horas y de las dieciséis a las dieciocho horas, con una hora para la ingesta de alimentos, fuera de las instalaciones del Centro, de las quince a las dieciséis horas, sin perjuicio de las medidas de organización interna que adopten sus titulares atendiendo a las necesidades del servicio.

Artículo 11. Las guardias de turno para la atención de asuntos en días y horas inhábiles de los Jueces de Distrito en su función de control se realizarán de forma semanal, de conformidad con los registros y programación que realice el Administrador.

La guardia de turno en días y horas inhábiles, finaliza el día lunes de cada semana a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos e inicia el mismo día a las nueve horas.

El Administrador del Centro adoptará las medidas administrativas necesarias, a fin de que el Tribunal de Alzada del Centro esté en posibilidad de resolver las apelaciones de término previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 12. Los juzgadores que integran el Centro llevarán Libros de Gobierno Electrónicos, que se integrarán con la información que se registre en el sistema informático respectivo.

Artículo 13. Los reportes estadísticos deberán remitirse a la Dirección General de Estadística Judicial, en la forma y tiempos que ésta determine.

Artículo 14. Los juzgadores del Centro, deberán levantar de manera individual un acta administrativa, por duplicado, del inicio de sus funciones, cuyo formato les será proporcionado por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, debiendo remitir un ejemplar a la propia Secretaría Ejecutiva.

Artículo 15. El Centro contará con el número suficiente de defensores públicos y oficiales de apoyo, en razón de la cantidad de los juzgadores que lo integran.

Artículo 16. Los Jueces de Control contarán con un sistema de acceso electrónico, mediante mecanismos tecnológicos que aseguren la confidencialidad de la información, para favorecer la comunicación con el Ministerio Público de la Federación y demás autoridades, así como con las personas autorizadas

por éstas, que por razón de su función deban ingresar solicitudes de providencias precautorias o relacionadas con medidas de protección, así como actos de investigación que requieren autorización judicial, solicitudes de órdenes de aprehensión o comparecencia, entre otras.

Artículo 17. En caso de que sea necesario sustituir a alguno de los Jueces de Distrito del Centro se estará a lo siguiente:

I. La sustitución recaerá en otro Juez de Distrito del mismo Centro, con exclusión de aquel que funja como Administrador;

II. En caso de no ser posible lo previsto en la fracción anterior, la sustitución recaerá en el Administrador, en términos del artículo 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y

III. Si tampoco fuera posible, la sustitución recaerá en los Jueces de Distrito del Centro de Justicia Penal más cercano.

Tratándose de la sustitución del Tribunal de Alzada del Centro, se habilita al Primer Tribunal Unitario del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca, Hidalgo, para conocer con ese carácter, de los asuntos que se tramiten en el Centro, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás disposiciones aplicables.

Artículo 18. El personal del Centro junto con sus juzgadores disfrutará de los periodos vacacionales de quince días a que se refiere el artículo 160 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el primero durante julio y agosto y, el segundo, en diciembre y enero, en términos del artículo 100 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, en el orden que los juzgadores consensen. En caso de que no se logre el consenso será la Comisión de Carrera Judicial o la Comisión de Receso, quien lo determine. En todo caso deberán de permanecer dos Jueces de Distrito en el Centro, para lo cual deberá contabilizarse al que funja como Administrador, supuesto en el cual se deberá observar lo previsto en el artículo 8, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

El personal del Tribunal de Alzada del Centro disfrutará de los periodos vacacionales en los términos precisados. Lo mismo sucederá con el personal de la Administración del Centro, sin embargo, en este caso el Administra-

dor deberá tomar las medidas necesarias para que haya servidores públicos de guardia en el mismo, durante dicho periodo vacacional, a fin de que el Centro no detenga su actividad.

La propia Comisión de Carrera Judicial, previo análisis de las solicitudes presentadas, podrá autorizar el disfrute de las vacaciones fuera de los meses de julio y agosto y, diciembre y enero, siempre y cuando existan causas excepcionales y justificadas para ello.

Artículo 19. El Pleno y las Comisiones del Consejo, en el ámbito de su competencia, interpretarán y resolverán todas las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, con excepción de lo dispuesto en los párrafos siguientes:

Para las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, entrará en vigor el día de su aprobación, para adoptar con la debida anticipación las medidas necesarias para que el Centro de Justicia Penal a que se refiere este Acuerdo, entre en operación en la fecha señalada en este artículo.

El Administrador del Centro llevará a cabo las acciones de coordinación que sean necesarias para garantizar el funcionamiento del mismo en dicha fecha.

SEGUNDO. Hasta en tanto se crea el Tribunal de Alzada a que se refiere el artículo 4 de este Acuerdo, se habilita al Segundo Tribunal Unitario del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en Pachuca, Hidalgo, para conocer de los procedimientos que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.

El Tribunal Unitario precisará en los actos procesales que celebre la denominación con la que actúa, dependiendo si lo hace conforme al citado Código o al Código Federal de Procedimientos Penales.

Este Tribunal Unitario queda exceptuado de la obligación a que se refiere el artículo 14 de este Acuerdo, y para efectos del artículo 18 del mismo instrumento normativo se registrá por las disposiciones aplicables como Tribunal Unitario de Circuito.

TERCERO. Las Direcciones Generales de Estadística Judicial y de Tecnologías de la Información, implementarán los mecanismos de coordinación entre el sistema automatizado de turno y distribución de asuntos de la Oficialía de Partes del Centro y la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios habilitados para, en su caso, compensar la carga de trabajo, en su doble función, prevista en el artículo 17, último párrafo y segundo transitorio del presente Acuerdo.

CUARTO. En materia de ejecución de sanciones penales se deberá observar lo dispuesto en el Acuerdo General 28/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual se habilita a los Jueces de Distrito de los Centros de Justicia Penal Federal para que ejerzan funciones de ejecución de sanciones penales.

QUINTO. En tanto se ordena la utilización de los libros de control electrónicos, el Administrador del Centro con el apoyo de su personal deberá realizar los registros de los asuntos que ingresen en libretas auxiliares.

SEXTO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el Portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 6/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—Ciudad de México, a dieciocho de febrero de dos mil dieciséis (D.O.F. DE 26 DE FEBRERO DE 2016).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; 36/2014, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos acuerdos generales; y, 28/2015, mediante el cual se habilita

a los Jueces de Distrito de los Centros de Justicia Penal Federal para que ejerzan funciones de ejecución de sanciones penales citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647; *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 12, Tomo IV, noviembre de 2014, página 3073; y, Libro 19, Tomo III, junio de 2015, página 2513, respectivamente.

ACUERDO GENERAL 7/2016, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE CREA EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE COLIMA, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DEL MISMO NOMBRE.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del mismo, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus atribuciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracciones IV, V, VI y XXIV; y 144, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número y límites territoriales y, en su caso, la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, en cada uno de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, así como proponer al Pleno para su aprobación, los acuerdos generales de creación de los Centros de Justicia Penal Federal, esta última, que ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 42, fracción II Bis, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado el veintidós de noviembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación;

TERCERO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le admi-

nistre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; por lo que para cumplir con el mandato constitucional es necesaria la creación de órganos jurisdiccionales, a fin de garantizar que la impartición de justicia sea pronta, completa, imparcial y gratuita;

CUARTO. El dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de modificación de diversos artículos constitucionales, para establecer en nuestro país el modelo de justicia procesal penal acusatorio y oral, que se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e intermediación. Como resultado de lo anterior, el Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de sus atribuciones debe dictar, en su ámbito de competencia, las disposiciones administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de la norma constitucional, de manera tal que antes del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, todo el territorio nacional opere bajo el nuevo modelo procesal penal;

QUINTO. En sesión de ocho de mayo de dos mil trece, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Plan Maestro de Implementación de la Reforma Penal, en el cual se incluyó la instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima;

SEXTO. En ese contexto, el cinco de marzo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su artículo 2 precisa que el objeto del mismo, es establecer las normas para la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y se repare el daño, señalando como ámbito de aplicación en la persecución de ilícitos, la competencia de los órganos jurisdiccionales federales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;

SÉPTIMO. El artículo segundo transitorio, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que la entrada en vigor del mismo, a nivel federal será gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión, sin que pueda exceder del dieciocho de junio de dos mil dieciséis;

OCTAVO. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 36/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos Acuerdos Generales;

NOVENO. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cuatro de febrero de dos mil quince, aprobó la propuesta del proyecto arquitectónico de edificación de los Centros de Justicia Penal Federal Provisionales, así como de la propuesta de la plantilla de personal de los mismos, en términos del modelo de 2 Jueces de Distrito y 1 Sala de Audiencias;

DÉCIMO. En sesión de cuatro de marzo de dos mil quince el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto de acuerdo presentado por el grupo de trabajo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, relativo a la habilitación provisional como tribunales de alzada del nuevo Sistema de Justicia Penal a los Tribunales Unitarios de Circuito; y

DÉCIMO PRIMERO. El veinticinco de septiembre de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Congreso de la Unión de la Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, en los Estados de Aguascalientes, Colima, de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como en la Ciudad de México.

Actualmente se cuenta con la infraestructura física para la instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, con residencia en la ciudad del mismo nombre.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

Artículo 1. El presente acuerdo tiene por objeto regular la organización, funcionamiento e inicio de funciones del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, con residencia en la ciudad del mismo nombre.

Artículo 2. Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por:

I. Administrador: Juez de Distrito encargado de la administración del Centro de Justicia Penal Federal;

II. Centro: Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, con residencia en la ciudad del mismo nombre;

III. Consejo: Consejo de la Judicatura Federal;

IV. Jueces de Control y tribunales de Enjuiciamiento: Jueces de Distrito;

V. Jueces de Distrito: Jueces de Distrito especializados en el sistema penal acusatorio;

VI. Juzgadores: Jueces de Control, así como tribunales de Enjuiciamiento y de Alzada;

VII. Pleno: Pleno del Consejo; y

VIII. Tribunal de Alzada: Tribunal Unitario de Circuito con competencia especializada en el sistema penal acusatorio.

Artículo 3. El Centro iniciará funciones a partir de las cero horas del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.

Artículo 4. El Centro se integra por tres Jueces de Distrito y un Tribunal de Alzada, y los demás juzgadores que sean adscritos por el Pleno, atendiendo a las necesidades para la impartición de justicia.

Los Jueces de Distrito a que se refiere este artículo tendrán competencia para actuar indistintamente como; Jueces de Control y tribunales de Enjuiciamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal, debiendo especificar el carácter de su actuación en las constancias respectivas, sin embargo, aquellos que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio, no podrán fungir como Tribunal de Enjuiciamiento, de conformidad con el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Uno de los Jueces de Distrito fungirá como Administrador.

El turno como Administrador corresponderá al Juez de Distrito del Centro que sea designado por el Consejo, cuya duración en el cargo será conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

El Centro contará con la plantilla laboral autorizada, y la Administración del Centro se registrará conforme a las disposiciones del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

Artículo 5. Los juzgadores del Centro conocerán y tendrán competencia en los procedimientos que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.

Artículo 6. La jurisdicción territorial de los juzgadores del Centro comprenderá el Estado de Colima, con la totalidad de sus Municipios.

Artículo 7. El domicilio del Centro será el ubicado en Boulevard Camino Real No. 1052, colonia Hospital General y Complejo Administrativo, C.P. 28019, Colima, Colima.

Toda la correspondencia relacionada con los asuntos de competencia del Centro deberá dirigirse al domicilio indicado.

Artículo 8. El Centro contará con una Oficialía de Partes Común, que dará servicio a los juzgadores que lo integran, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El sistema de turno y distribución de asuntos será automatizado y aleatorio, con excepción de lo siguiente:

I. Los asuntos urgentes que se reciban durante las guardias, cuya atención corresponderá al Juez de Distrito que deba cubrirla; y

II. Los asuntos relacionados durante las etapas procesales de investigación, e intermedia o de preparación del juicio.

Corresponde a las Direcciones Generales de Estadística Judicial y de Tecnologías de la Información el diseño operativo del sistema automatizado de turno y distribución de asuntos; y la elaboración de sus lineamientos, los cuales serán sometidos directamente por éstas a consideración y, en su caso, aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos.

En el diseño del sistema se deberá tomar en consideración las guardias, las vacaciones, las licencias, los impedimentos y las sustituciones de juzgadores.

En aquellas situaciones en que por caso fortuito o fuerza mayor no pueda utilizarse el sistema automatizado, el Oficial de Partes con la anuencia y supervisión del Administrador turnará los asuntos nuevos en el estricto orden secuencial en que se presenten; y los relacionados a que se refiere la fracción II de este artículo al juzgador correspondiente, sin embargo, deberá observarse que aquellos Jueces de Distrito que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio no podrán fungir como Tribunal de Enjuiciamiento, de conformidad con el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 9. A partir de las cero horas del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, la Oficialía de Partes del Centro, funcionará las veinticuatro horas, todos los días del año, para la recepción, registro, turno y envío de los asuntos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, de lunes a viernes durante el horario de las dieciocho a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos del día siguiente, así como los días inhábiles, la Oficialía de Partes sólo recibirá las promociones de término que se presenten.

Artículo 10. Los juzgadores, así como el personal adscrito a los mismos, laborarán de lunes a viernes de las nueve a las quince horas y de las dieciséis a las dieciocho horas, con una hora para la ingesta de alimentos, fuera de las instalaciones del Centro, de las quince a las dieciséis horas, sin perjuicio de las medidas de organización interna que adopten sus titulares atendiendo a las necesidades del servicio.

Artículo 11. Las guardias de turno para la atención de asuntos en días y horas inhábiles de los Jueces de Distrito en su función de control se realizarán de forma semanal, de conformidad con los registros y programación que realice el Administrador.

La guardia de turno en días y horas inhábiles, finaliza el día lunes de cada semana a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos e inicia el mismo día a las nueve horas.

El Administrador del Centro adoptará las medidas administrativas necesarias, a fin de que el Tribunal de Alzada del Centro esté en posibilidad de resolver las apelaciones de término previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 12. Los juzgadores que integran el Centro llevarán Libros de Gobierno Electrónicos, que se integrarán con la información que se registre en el sistema informático respectivo.

Artículo 13. Los reportes estadísticos deberán remitirse a la Dirección General de Estadística Judicial, en la forma y tiempos que ésta determine.

Artículo 14. Los juzgadores del Centro, deberán levantar de manera individual un acta administrativa, por duplicado, del inicio de sus funciones, cuyo formato les será proporcionado por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, debiendo remitir un ejemplar a la propia Secretaría Ejecutiva.

Artículo 15. El Centro contará con el número suficiente de defensores públicos y oficiales de apoyo, en razón de la cantidad de los juzgadores que lo integran.

Artículo 16. Los Jueces de Control contarán con un sistema de acceso electrónico, mediante mecanismos tecnológicos que aseguren la confidencialidad de la información, para favorecer la comunicación con el Ministerio Público de la Federación y demás autoridades, así como con las personas autorizadas por éstas, que por razón de su función deban ingresar solicitudes de providencias precautorias o relacionadas con medidas de protección, así como actos de investigación que requieren autorización judicial, solicitudes de órdenes de aprehensión o comparecencia, entre otras.

Artículo 17. En caso de que sea necesario sustituir a alguno de los Jueces de Distrito del Centro se estará a lo siguiente:

I. La sustitución recaerá en otro Juez de Distrito del mismo Centro, con exclusión de aquel que funja como Administrador;

II. En caso de no ser posible lo previsto en la fracción anterior, la sustitución recaerá en el Administrador, en términos del artículo 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y

III. Si tampoco fuera posible, la sustitución recaerá en los Jueces de Distrito del Centro de Justicia Penal más cercano.

Tratándose de la sustitución del Tribunal de Alzada del Centro, se habilita a los Tribunales Unitarios del Tercer Circuito, con residencia en Zapopan, Jalisco, para conocer con ese carácter y en el orden numérico de su denominación, de los asuntos que se tramiten en el Centro, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás disposiciones aplicables.

Artículo 18. El personal del Centro junto con sus juzgadores disfrutarán de los periodos vacacionales de quince días a que se refiere el artículo 160 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el primero durante julio y agosto y, el segundo, en diciembre y enero, en términos del artículo 100 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, en el orden que los juzgadores consensen. En caso de que no se logre el consenso será la Comisión de Carrera Judicial o la Comisión de Receso, quien lo

determine. En todo caso deberán de permanecer dos Jueces de Distrito en el Centro, para lo cual deberá contabilizarse al que funja como Administrador, supuesto en el cual se deberá observar lo previsto en el artículo 8, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

El personal del Tribunal de Alzada del Centro disfrutará de los periodos vacacionales en los términos precisados. Lo mismo sucederá con el personal de la Administración del Centro, sin embargo, en este caso el Administrador deberá tomar las medidas necesarias para que haya servidores públicos de guardia en el mismo, durante dicho periodo vacacional, a fin de que el Centro no detenga su actividad.

La propia Comisión de Carrera Judicial, previo análisis de las solicitudes presentadas, podrá autorizar el disfrute de las vacaciones fuera de los meses de julio y agosto y, diciembre y enero, siempre y cuando existan causas excepcionales y justificadas para ello.

Artículo 19. El Pleno y las Comisiones del Consejo, en el ámbito de su competencia, interpretarán y resolverán todas las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, con excepción de lo dispuesto en los párrafos siguientes:

Para las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, entrará en vigor el día de su aprobación, para adoptar con la debida anticipación las medidas necesarias para que el Centro de Justicia Penal a que se refiere este Acuerdo, entre en operación en la fecha señalada en este artículo.

El Administrador del Centro llevará a cabo las acciones de coordinación que sean necesarias para garantizar el funcionamiento del mismo en dicha fecha.

SEGUNDO. Hasta en tanto se crea el Tribunal de Alzada a que se refiere el artículo 4 de este Acuerdo, se habilita al Tribunal Unitario del Trigésimo Segundo Circuito, con residencia en Colima, Colima, para conocer de los procedimientos que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.

El Tribunal Unitario precisará en los actos procesales que celebre la denominación con la que actúa, dependiendo si lo hace conforme al citado Código o al Código Federal de Procedimientos Penales.

Este Tribunal Unitario queda exceptuado de la obligación a que se refiere el artículo 14 de este Acuerdo, y para efectos del artículo 18 del mismo instrumento normativo se regirá por las disposiciones aplicables como Tribunal Unitario de Circuito.

TERCERO. Las Direcciones Generales de Estadística Judicial y de Tecnologías de la Información, implementarán los mecanismos de coordinación entre el sistema automatizado de turno y distribución de asuntos de la Oficialía de Partes del Centro y la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios habilitados para, en su caso, compensar la carga de trabajo, en su doble función, prevista en el artículo 17, último párrafo y segundo transitorio del presente Acuerdo.

CUARTO. En materia de ejecución de sanciones penales se deberá observar lo dispuesto en el Acuerdo General 28/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual se habilita a los Jueces de Distrito de los Centros de Justicia Penal Federal para que ejerzan funciones de ejecución de sanciones penales.

QUINTO. En tanto se ordena la utilización de los libros de control electrónicos, el Administrador del Centro con el apoyo de su personal deberá realizar los registros de los asuntos que ingresen en libretas auxiliares.

SEXTO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el Portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 7/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, con residencia en la ciudad del mismo nombre, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: presidente

Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—Ciudad de México, a dieciocho de febrero de dos mil dieciséis (D.O.F. DE 26 DE FEBRERO DE 2016).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; 36/2014, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos acuerdos generales; y, 28/2015, mediante el cual se habilita a los Jueces de Distrito de los Centros de Justicia Penal Federal para que ejerzan funciones de ejecución de sanciones penales citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647; *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 12, Tomo IV, noviembre de 2014, página 3073; y, Libro 19, Tomo III, junio de 2015, página 2513, respectivamente.

ACUERDO GENERAL 8/2016, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE CREA EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES, CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DEL MISMO NOMBRE.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del mismo, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus atribuciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracciones IV, V, VI y XXIV; y 144, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número y límites territoriales y, en su caso, la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, en cada uno de los Circuitos en que

se divide el territorio de la República Mexicana, así como proponer al Pleno para su aprobación, los acuerdos generales de creación de los Centros de Justicia Penal Federal, esta última, que ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 42, fracción II Bis, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado el veintidós de noviembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación;

TERCERO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; por lo que para cumplir con el mandato constitucional es necesaria la creación de órganos jurisdiccionales, a fin de garantizar que la impartición de justicia sea pronta, completa, imparcial y gratuita;

CUARTO. El dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de modificación de diversos artículos constitucionales, para establecer en nuestro país el modelo de justicia procesal penal acusatorio y oral, que se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Como resultado de lo anterior, el Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de sus atribuciones debe dictar, en su ámbito de competencia, las disposiciones administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de la norma constitucional, de manera tal que antes del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, todo el territorio nacional opere bajo el nuevo modelo procesal penal;

QUINTO. En sesión de ocho de mayo de dos mil trece, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Plan Maestro de Implementación de la Reforma Penal, en el cual se incluyó la instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Aguascalientes;

SEXTO. En ese contexto, el cinco de marzo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su artículo 2 precisa que el objeto del mismo, es establecer las normas para la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y se repare el daño, señalando como ámbito de aplicación en la persecución de ilícitos, la competencia de los órganos jurisdiccionales federales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte;

SÉPTIMO. El artículo segundo transitorio, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que la entrada en vigor del mismo, a nivel federal será gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión, sin que pueda exceder del dieciocho de junio de dos mil dieciséis;

OCTAVO. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 36/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos Acuerdos Generales;

NOVENO. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cuatro de febrero de dos mil quince, aprobó la propuesta del proyecto arquitectónico de edificación de los Centros de Justicia Penal Federal Provisionales, así como de la propuesta de la plantilla de personal de los mismos, en términos del modelo de 2 Jueces de Distrito y 1 Sala de Audiencias;

DÉCIMO. En sesión de cuatro de marzo de dos mil quince el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto de acuerdo presentado por el grupo de trabajo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, relativo a la habilitación provisional como tribunales de alzada del nuevo Sistema de Justicia Penal a los Tribunales Unitarios de Circuito; y

DÉCIMO PRIMERO. El veinticinco de septiembre de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Congreso de la Unión de la Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, en los Estados de Aguascalientes, Colima, de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como en la Ciudad de México.

Actualmente se cuenta con la infraestructura física para la instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

Artículo 1. El presente acuerdo tiene por objeto regular la organización, funcionamiento e inicio de funciones del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre.

Artículo 2. Para efectos del presente Acuerdo se entenderá por:

I. Administrador: Juez de Distrito encargado de la administración del Centro de Justicia Penal Federal;

II. Centro: Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre;

III. Consejo: Consejo de la Judicatura Federal;

IV. Jueces de Control y tribunales de Enjuiciamiento: Jueces de Distrito;

V. Jueces de Distrito: Jueces de Distrito especializados en el sistema penal acusatorio;

VI. Juzgadores: Jueces de Control, así como tribunales de Enjuiciamiento y de Alzada;

VII. Pleno: Pleno del Consejo; y

VIII. Tribunal de Alzada: Tribunal Unitario de Circuito con competencia especializada en el sistema penal acusatorio.

Artículo 3. El Centro iniciará funciones a partir de las cero horas del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.

Artículo 4. El Centro se integra por tres Jueces de Distrito y un Tribunal de Alzada, y los demás juzgadores que sean adscritos por el Pleno, atendiendo a las necesidades para la impartición de justicia.

Los Jueces de Distrito a que se refiere este artículo tendrán competencia para actuar indistintamente como; Jueces de Control y tribunales de Enjuiciamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal, debiendo especificar el carácter de su actuación en las constancias respectivas, sin embargo, aquellos que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio, no podrán fungir como Tribunal de Enjuiciamiento, de conformidad con el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Uno de los Jueces de Distrito fungirá como Administrador.

El turno como Administrador corresponderá al Juez de Distrito del Centro que sea designado por el Consejo, cuya duración en el cargo será conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

El Centro contará con la plantilla laboral autorizada, y la Administración del Centro se registrará conforme a las disposiciones del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

Artículo 5. Los juzgadores del Centro conocerán y tendrán competencia en los procedimientos que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.

Artículo 6. La jurisdicción territorial de los juzgadores del Centro comprenderá el Estado de Aguascalientes, con la totalidad de sus Municipios.

Artículo 7. El domicilio del Centro será el ubicado en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 2311, fracción 2, predio rústico "El Ranchito", camino a Calvillo Km 5, C.P. 20310, Aguascalientes, Aguascalientes.

Toda la correspondencia relacionada con los asuntos de competencia del Centro deberá dirigirse al domicilio indicado.

Artículo 8. El Centro contará con una Oficialía de Partes Común, que dará servicio a los juzgadores que lo integran, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El sistema de turno y distribución de asuntos será automatizado y aleatorio, con excepción de lo siguiente:

I. Los asuntos urgentes que se reciban durante las guardias, cuya atención corresponderá al Juez de Distrito que deba cubrirla; y

II. Los asuntos relacionados durante las etapas procesales de investigación, e intermedia o de preparación del juicio.

Corresponde a las Direcciones Generales de Estadística Judicial y de Tecnologías de la Información el diseño operativo del sistema automatizado de turno y distribución de asuntos; y la elaboración de sus lineamientos, los cuales serán sometidos directamente por éstas a consideración y, en su caso, aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos.

En el diseño del sistema se deberá tomar en consideración las guardias, las vacaciones, las licencias, los impedimentos y las sustituciones de juzgadores.

En aquellas situaciones en que por caso fortuito o fuerza mayor no pueda utilizarse el sistema automatizado, el Oficial de Partes con la anuencia y supervisión del Administrador turnará los asuntos nuevos en el estricto orden secuencial en que se presenten; y los relacionados a que se refiere la fracción II de este artículo al juzgador correspondiente, sin embargo, deberá observarse que aquellos Jueces de Distrito que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio no podrán fungir como Tribunal de Enjuiciamiento, de conformidad con el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 9. A partir de las cero horas del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, la Oficialía de Partes del Centro, funcionará las veinticuatro horas, todos los días del año, para la recepción, registro, turno y envío de los asuntos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, de lunes a viernes durante el horario de las dieciocho a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos del día siguiente, así como los días inhábiles, la Oficialía de Partes sólo recibirá las promociones de término que se presenten.

Artículo 10. Los juzgadores, así como el personal adscrito a los mismos, laborarán de lunes a viernes de las nueve a las quince horas y de las dieciséis a las dieciocho horas, con una hora para la ingesta de alimentos, fuera de las instalaciones del Centro, de las quince a las dieciséis horas, sin perjuicio de las medidas de organización interna que adopten sus titulares atendiendo a las necesidades del servicio.

Artículo 11. Las guardias de turno para la atención de asuntos en días y horas inhábiles de los Jueces de Distrito en su función de control se realizarán de forma semanal, de conformidad con los registros y programación que realice el Administrador.

La guardia de turno en días y horas inhábiles, finaliza el día lunes de cada semana a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos e inicia el mismo día a las nueve horas.

El Administrador del Centro adoptará las medidas administrativas necesarias, a fin de que el Tribunal de Alzada del Centro esté en posibilidad de resolver las apelaciones de término previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 12. Los juzgadores que integran el Centro llevarán Libros de Gobierno Electrónicos, que se integrarán con la información que se registre en el sistema informático respectivo.

Artículo 13. Los reportes estadísticos deberán remitirse a la Dirección General de Estadística Judicial, en la forma y tiempos que ésta determine.

Artículo 14. Los juzgadores del Centro, deberán levantar de manera individual un acta administrativa, por duplicado, del inicio de sus funciones, cuyo formato les será proporcionado por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, debiendo remitir un ejemplar a la propia Secretaría Ejecutiva.

Artículo 15. El Centro contará con el número suficiente de defensores públicos y oficiales de apoyo, en razón de la cantidad de los juzgadores que lo integran.

Artículo 16. Los Jueces de Control contarán con un sistema de acceso electrónico, mediante mecanismos tecnológicos que aseguren la confidencialidad de la información, para favorecer la comunicación con el Ministerio Público de la Federación y demás autoridades, así como con las personas autorizadas por éstas, que por razón de su función deban ingresar solicitudes de providencias precautorias o relacionadas con medidas de protección, así como actos de investigación que requieren autorización judicial, solicitudes de órdenes de aprehensión o comparecencia, entre otras.

Artículo 17. En caso de que sea necesario sustituir a alguno de los Jueces de Distrito del Centro se estará a lo siguiente:

I. La sustitución recaerá en otro Juez de Distrito del mismo Centro, con exclusión de aquel que funja como Administrador;

II. En caso de no ser posible lo previsto en la fracción anterior, la sustitución recaerá en el Administrador, en términos del artículo 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y

III. Si tampoco fuera posible, la sustitución recaerá en los Jueces de Distrito del Centro de Justicia Penal más cercano.

Tratándose de la sustitución del Tribunal de Alzada del Centro, se habilita a los Tribunales Unitarios del Vigésimo Tercer Circuito, con residencia en

Zacatecas, Zacatecas, para conocer con ese carácter y en el orden numérico de su denominación, de los asuntos que se tramiten en el Centro, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás disposiciones aplicables.

Artículo 18. El personal del Centro junto con sus juzgadores disfrutará de los periodos vacacionales de quince días a que se refiere el artículo 160 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el primero durante julio y agosto y, el segundo, en diciembre y enero, en términos del artículo 100 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, en el orden que los juzgadores consensen. En caso de que no se logre el consenso será la Comisión de Carrera Judicial o la Comisión de Receso, quien lo determine. En todo caso deberán de permanecer dos Jueces de Distrito en el Centro, para lo cual deberá contabilizarse al que funja como Administrador, supuesto en el cual se deberá observar lo previsto en el artículo 8, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

El personal del Tribunal de Alzada del Centro disfrutará de los periodos vacacionales en los términos precisados. Lo mismo sucederá con el personal de la Administración del Centro, sin embargo, en este caso el Administrador deberá tomar las medidas necesarias para que haya servidores públicos de guardia en el mismo, durante dicho periodo vacacional, a fin de que el Centro no detenga su actividad.

La propia Comisión de Carrera Judicial, previo análisis de las solicitudes presentadas, podrá autorizar el disfrute de las vacaciones fuera de los meses de julio y agosto y, diciembre y enero, siempre y cuando existan causas excepcionales y justificadas para ello.

Artículo 19. El Pleno y las Comisiones del Consejo, en el ámbito de su competencia, interpretarán y resolverán todas las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, con excepción de lo dispuesto en los párrafos siguientes:

Para las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, entrará en vigor el día de su aprobación, para adoptar con la debida anticipación

las medidas necesarias para que el Centro de Justicia Penal a que se refiere este Acuerdo, entre en operación en la fecha señalada en este artículo.

El Administrador del Centro llevará a cabo las acciones de coordinación que sean necesarias para garantizar el funcionamiento del mismo en dicha fecha.

SEGUNDO. Hasta en tanto se crea el Tribunal de Alzada a que se refiere el artículo 4 de este Acuerdo, se habilita al Tribunal Unitario del Trigésimo Circuito, con residencia en Aguascalientes, Aguascalientes, para conocer de los procedimientos que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.

El Tribunal Unitario precisará en los actos procesales que celebre la denominación con la que actúa, dependiendo si lo hace conforme al citado Código o al Código Federal de Procedimientos Penales.

Este Tribunal Unitario queda exceptuado de la obligación a que se refiere el artículo 14 de este Acuerdo, y para efectos del artículo 18 del mismo instrumento normativo se regirá por las disposiciones aplicables como Tribunal Unitario de Circuito.

TERCERO. Las Direcciones Generales de Estadística Judicial y de Tecnologías de la Información, implementarán los mecanismos de coordinación entre el sistema automatizado de turno y distribución de asuntos de la Oficialía de Partes del Centro y la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios habilitados para, en su caso, compensar la carga de trabajo en su doble función, prevista en el artículo 17, último párrafo y segundo transitorio del presente Acuerdo.

CUARTO. En materia de ejecución de sanciones penales se deberá observar lo dispuesto en el Acuerdo General 28/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual se habilita a los Jueces de Distrito de los Centros de Justicia Penal Federal para que ejerzan funciones de ejecución de sanciones penales.

QUINTO. En tanto se ordena la utilización de los libros de control electrónicos, el Administrador del Centro con el apoyo de su personal deberá realizar los registros de los asuntos que ingresen en libretas auxiliares.

SEXTO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el Portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 8/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—Ciudad de México, a dieciocho de febrero de dos mil dieciséis (D.O.F. DE 26 DE FEBRERO DE 2016).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; 36/2014, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos acuerdos generales; y, 28/2015, mediante el cual se habilita a los Jueces de Distrito de los Centros de Justicia Penal Federal para que ejerzan funciones de ejecución de sanciones penales citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647; *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 12, Tomo IV, noviembre de 2014, página 3073; y, Libro 19, Tomo III, junio de 2015, página 2513, respectivamente.

ACUERDO GENERAL 9/2016, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE CREA EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE TABASCO, CON RESIDENCIA EN VILLAHERMOSA.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano

encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del mismo, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus atribuciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracciones IV, V, VI y XXIV; y 144, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número y límites territoriales y, en su caso, la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, en cada uno de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, así como proponer al Pleno para su aprobación, los acuerdos generales de creación de los Centros de Justicia Penal Federal, esta última, que ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 42, fracción II Bis, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado el veintidós de noviembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación;

TERCERO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; por lo que para cumplir con el mandato constitucional es necesaria la creación de órganos jurisdiccionales, a fin de garantizar que la impartición de justicia sea pronta, completa, imparcial y gratuita;

CUARTO. El dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de modificación de diversos artículos constitucionales, para establecer en nuestro país el modelo de justicia procesal penal acusatorio y oral, que se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Como resultado de lo anterior, el Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de sus atribuciones debe dictar, en su ámbito de competencia, las disposiciones administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de la norma constitucional, de manera tal que antes del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, todo el territorio nacional opere bajo el nuevo modelo procesal penal;

QUINTO. En sesión de ocho de mayo de dos mil trece, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Plan Maestro de Implementación de la Reforma Penal, en el cual se incluyó la instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tabasco;

SEXTO. En ese contexto, el cinco de marzo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su artículo 2 precisa que el objeto del mismo, es establecer las normas para la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y se repare el daño, señalando como ámbito de aplicación en la persecución de ilícitos, la competencia de los órganos jurisdiccionales federales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

SÉPTIMO. El artículo segundo transitorio, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que la entrada en vigor del mismo, a nivel federal será gradualmente en los términos previstos en la declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión, sin que pueda exceder del dieciocho de junio de dos mil dieciséis;

OCTAVO. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 36/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos acuerdos generales;

NOVENO. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cuatro de febrero de dos mil quince, aprobó la propuesta del proyecto arquitectónico de edificación de los Centros de Justicia Penal Federal Provisionales, así como de la propuesta de la plantilla de personal de los mismos, en términos del modelo de 2 Jueces de Distrito y 1 Sala de Audiencias;

DÉCIMO. En sesión de cuatro de marzo de dos mil quince el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto de acuerdo presentado por el grupo de trabajo para la implementación del Sistema de Justicia Penal, relativo a la habilitación provisional como Tribunales de Alzada del nuevo Sistema de Justicia Penal a los Tribunales Unitarios de Circuito; y

DÉCIMO PRIMERO. El veinticinco de septiembre de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto del Congreso de la Unión de la Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, en los Estados de Aguascalientes, Colima, de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y **Tabasco**, así como en la Ciudad de México.

Actualmente se cuenta con la infraestructura física para la instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

Artículo 1. El presente acuerdo tiene por objeto regular la organización, funcionamiento e inicio de funciones del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa.

Artículo 2. Para efectos del presente acuerdo se entenderá por:

I. Administrador: Juez de Distrito encargado de la administración del Centro de Justicia Penal Federal;

II. Centro: Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa;

III. Consejo: Consejo de la Judicatura Federal;

IV. Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento: Jueces de Distrito;

V. Jueces de Distrito: Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio;

VI. Juzgadores: Jueces de Control, así como Tribunales de Enjuiciamiento y de Alzada;

VII. Pleno: Pleno del Consejo; y

VIII. Tribunal de Alzada: Tribunal Unitario de Circuito con competencia especializada en el sistema penal acusatorio.

Artículo 3. El Centro iniciará funciones a partir de las cero horas del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.

Artículo 4. El Centro se integra por tres Jueces de Distrito y un Tribunal de Alzada, y los demás juzgadores que sean adscritos por el Pleno, atendiendo a las necesidades para la impartición de justicia.

Los Jueces de Distrito a que se refiere este artículo tendrán competencia para actuar indistintamente como; Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal, debiendo especificar el carácter de su actuación en las constancias respectivas, sin embargo, aquellos que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio, no podrán fungir como Tribunal de Enjuiciamiento, de conformidad con el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Uno de los Jueces de Distrito fungirá como Administrador.

El turno como Administrador corresponderá al Juez de Distrito del Centro que sea designado por el Consejo, cuya duración en el cargo será conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

El Centro contará con la plantilla laboral autorizada, y la Administración del Centro se regirá conforme a las disposiciones del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

Artículo 5. Los juzgadores del Centro conocerán y tendrán competencia en los procedimientos que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.

Artículo 6. La jurisdicción territorial de los juzgadores del Centro comprenderá el Estado de Tabasco, con la totalidad de sus Municipios.

Artículo 7. El domicilio del Centro será el ubicado en Av. Gregorio Méndez Magaña No. 2637, colonia Atasta de Serra, C.P. 86100, Villahermosa, Tabasco.

Toda la correspondencia relacionada con los asuntos de competencia del Centro deberá dirigirse al domicilio indicado.

Artículo 8. El Centro contará con una oficialía de partes común, que dará servicio a los juzgadores que lo integran, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El sistema de turno y distribución de asuntos será automatizado y aleatorio, con excepción de lo siguiente:

I. Los asuntos urgentes que se reciban durante las guardias, cuya atención corresponderá al Juez de Distrito que deba cubrirla; y

II. Los asuntos relacionados durante las etapas procesales de investigación, e intermedia o de preparación del juicio.

Corresponde a las Direcciones Generales de Estadística Judicial y de Tecnologías de la Información el diseño operativo del sistema automatizado de turno y distribución de asuntos; y la elaboración de sus lineamientos, los cuales serán sometidos directamente por éstas a consideración y, en su caso, aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos.

En el diseño del sistema se deberá tomar en consideración las guardias, las vacaciones, las licencias, los impedimentos y las sustituciones de juzgadores.

En aquellas situaciones en que por caso fortuito o fuerza mayor no pueda utilizarse el sistema automatizado, el oficial de partes con la anuencia y supervisión del Administrador turnará los asuntos nuevos en el estricto orden secuencial en que se presenten; y los relacionados a que se refiere la fracción II de este artículo al juzgador correspondiente, sin embargo, deberá observarse que aquellos Jueces de Distrito que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio no podrán fungir como Tribunal de Enjuiciamiento, de conformidad con el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 9. A partir de las cero horas del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, la Oficialía de Partes del Centro, funcionará las veinticuatro horas, todos los días del año, para la recepción, registro, turno y envío de los asuntos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, de lunes a viernes durante el horario de las dieciocho a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos del día siguiente, así como los días inhábiles, la oficialía de partes sólo recibirá las promociones de término que se presenten.

Artículo 10. Los juzgadores, así como el personal adscrito a los mismos, laborarán de lunes a viernes de las nueve a las quince horas y de las dieciséis a las dieciocho horas, con una hora para la ingesta de alimentos, fuera de las instalaciones del Centro, de las quince a las dieciséis horas, sin perjuicio de las medidas de organización interna que adopten sus titulares atendiendo a las necesidades del servicio.

Artículo 11. Las guardias de turno para la atención de asuntos en días y horas inhábiles de los Jueces de Distrito en su función de control se realizarán de forma semanal, de conformidad con los registros y programación que realice el Administrador.

La guardia de turno en días y horas inhábiles, finaliza el día lunes de cada semana a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos e inicia el mismo día a las nueve horas.

El Administrador del Centro adoptará las medidas administrativas necesarias, a fin de que el Tribunal de Alzada del Centro esté en posibilidad de resolver las apelaciones de término previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 12. Los juzgadores que integran el Centro llevarán libros de gobierno electrónicos, que se integrarán con la información que se registre en el sistema informático respectivo.

Artículo 13. Los reportes estadísticos deberán remitirse a la Dirección General de Estadística Judicial, en la forma y tiempos que ésta determine.

Artículo 14. Los juzgadores del Centro, deberán levantar de manera individual un acta administrativa, por duplicado, del inicio de sus funciones, cuyo formato les será proporcionado por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, debiendo remitir un ejemplar a la propia Secretaría Ejecutiva.

Artículo 15. El Centro contará con el número suficiente de defensores públicos y oficiales de apoyo, en razón de la cantidad de los juzgadores que lo integran.

Artículo 16. Los Jueces de control contarán con un sistema de acceso electrónico, mediante mecanismos tecnológicos que aseguren la confidencialidad de la información, para favorecer la comunicación con el Ministerio Público de la Federación y demás autoridades, así como con las personas autorizadas por éstas, que por razón de su función deban ingresar solicitudes de providencias precautorias o relacionadas con medidas de protección, así como actos de investigación que requieren autorización judicial, solicitudes de órdenes de aprehensión o comparecencia, entre otras.

Artículo 17. En caso de que sea necesario sustituir a alguno de los jueces de Distrito del Centro se estará a lo siguiente:

I. La sustitución recaerá en otro Juez de Distrito del mismo Centro, con exclusión de aquel que funja como Administrador;

II. En caso de no ser posible lo previsto en la fracción anterior, la sustitución recaerá en el Administrador, en términos del artículo 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y

III. Si tampoco fuera posible, la sustitución recaerá en los Jueces de Distrito del Centro de Justicia Penal más cercano.

Tratándose de la sustitución del Tribunal de Alzada del Centro, se habilita al Primer Tribunal Unitario del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, para conocer con ese carácter, de los asuntos que se tramiten en el Centro, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás disposiciones aplicables.

Artículo 18. El personal del Centro junto con sus juzgadores disfrutarán de los periodos vacacionales de quince días a que se refiere el artículo 160 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el primero durante julio y agosto y, el segundo, en diciembre y enero, en términos del artículo 100 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, en el orden que los juzgadores consensen. En caso de que no se logre el consenso será la Comisión de Carrera Judicial o la Comisión de Receso, quien lo determine. En todo caso deberán de permanecer dos Jueces de Distrito en el Centro, para lo cual deberá contabilizarse al que funja como Administrador, supuesto en el cual se deberá observar lo previsto en el artículo 8, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

El personal del Tribunal de Alzada del Centro disfrutará de los periodos vacacionales en los términos precisados. Lo mismo sucederá con el personal de la Administración del Centro, sin embargo, en este caso el Administrador deberá tomar las medidas necesarias para que haya servidores públicos de guardia en el mismo, durante dicho periodo vacacional, a fin de que el Centro no detenga su actividad.

La propia Comisión de Carrera Judicial, previo análisis de las solicitudes presentadas, podrá autorizar el disfrute de las vacaciones fuera de los meses de julio y agosto y, diciembre y enero, siempre y cuando existan causas excepcionales y justificadas para ello.

Artículo 19. El Pleno y las Comisiones del Consejo, en el ámbito de su competencia, interpretarán y resolverán todas las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, con excepción de lo dispuesto en los párrafos siguientes:

Para las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, entrará en vigor el día de su aprobación, para adoptar con la debida anticipación las medidas necesarias para que el Centro de Justicia Penal a que se refiere este acuerdo, entre en operación en la fecha señalada en este artículo.

El Administrador del Centro llevará a cabo las acciones de coordinación que sean necesarias para garantizar el funcionamiento del mismo en dicha fecha.

SEGUNDO. Hasta en tanto se crea el Tribunal de Alzada a que se refiere el artículo 4 de este acuerdo, se habilita al Segundo Tribunal Unitario del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, para conocer de los procedimientos que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.

El Tribunal Unitario precisará en los actos procesales que celebre la denominación con la que actúa, dependiendo si lo hace conforme al citado código o al Código Federal de Procedimientos Penales.

Este Tribunal Unitario queda exceptuado de la obligación a que se refiere el artículo 14 de este acuerdo, y para efectos del artículo 18 del mismo instrumento normativo se registrará por las disposiciones aplicables como Tribunal Unitario de Circuito.

TERCERO. Las Direcciones Generales de Estadística Judicial y de Tecnologías de la Información, implementarán los mecanismos de coordinación entre el sistema automatizado de turno y distribución de asuntos de la Oficialía de Partes del Centro y la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios habilitados, para, en su caso, compensar la carga de trabajo, en su doble función, prevista en el artículo 17, último párrafo y segundo transitorio del presente acuerdo.

CUARTO. En materia de ejecución de sanciones penales se deberá observar lo dispuesto en el Acuerdo General 28/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual se habilita a los Jueces de Distrito de los Centros de Justicia Penal Federal para que ejerzan funciones de ejecución de sanciones penales.

QUINTO. En tanto se ordena la utilización de los libros de control electrónicos, el Administrador del Centro con el apoyo de su personal deberá realizar los registros de los asuntos que ingresen en libretas auxiliares.

SEXTO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el Portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 9/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos de los Consejeros: Presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—Ciudad de México, a dieciocho de febrero de dos mil dieciséis (D.O.F. DE 26 DE FEBRERO DE 2016).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; 36/2014, que regula los Centros de Justicia Penal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos acuerdos generales; que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales (reforma su artículo 100), y 28/2015, mediante el cual se habilita a los Jueces de Distrito de los Centros de Justicia Penal Federal para que ejerzan funciones de ejecución de sanciones penales citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647; *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 12, Tomo IV, noviembre de 2014, página 3073; Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 2664, y Libro 19, Tomo III, junio de 2015, página 2513, respectivamente.

ACUERDO GENERAL 10/2016, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE CREA EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE NUEVO LEÓN, CON RESIDENCIA EN CADEREYTA.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del mismo, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus atribuciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracciones IV, V, VI y XXIV; y 144, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número y límites territoriales y, en su caso, la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, en cada uno de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, así como proponer al Pleno para su aprobación, los acuerdos generales de creación de los Centros de Justicia Penal Federal, esta última, que ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 42, fracción II Bis, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado el veintidós de noviembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación;

TERCERO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; por lo que para cumplir con el mandato constitucional es necesaria la creación de órganos jurisdiccionales, a fin de garantizar que la impartición de justicia sea pronta, completa, imparcial y gratuita;

CUARTO. El dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto de modificación de diversos artículos cons-

titucionales, para establecer en nuestro país el modelo de justicia procesal penal acusatorio y oral, que se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Como resultado de lo anterior, el Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de sus atribuciones debe dictar, en su ámbito de competencia, las disposiciones administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de la norma constitucional, de manera tal que antes del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, todo el territorio nacional opere bajo el nuevo modelo procesal penal;

QUINTO. En sesión de ocho de mayo de dos mil trece, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Plan Maestro de Implementación de la Reforma Penal, en el cual se incluyó la instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León;

SEXTO. En ese contexto, el cinco de marzo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su artículo 2 precisa que el objeto del mismo es establecer las normas para la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y se repare el daño, señalando como ámbito de aplicación en la persecución de ilícitos, la competencia de los órganos jurisdiccionales federales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

SÉPTIMO. El artículo segundo transitorio, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que la entrada en vigor del mismo, a nivel federal será gradualmente en los términos previstos en la declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión, sin que pueda exceder del dieciocho de junio de dos mil dieciséis;

OCTAVO. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 36/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos acuerdos generales;

NOVENO. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cuatro de febrero de dos mil quince, aprobó la propuesta del proyecto arquitectónico de edificación de los Centros de Justicia Penal Federal Provisionales, así como de la propuesta de la plantilla de personal de los mismos, en términos del modelo de 2 Jueces de Distrito y 1 Sala de Audiencias;

DÉCIMO. En sesión de cuatro de marzo de dos mil quince el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto de acuerdo presentado por el grupo de trabajo para la implementación del Sistema de Justicia Penal, relativo a la habilitación provisional como tribunales de alzada del nuevo Sistema de Justicia Penal a los Tribunales Unitarios de Circuito; y

DÉCIMO PRIMERO. El veinticinco de septiembre de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto del Congreso de la Unión de la Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, en los Estados de Aguascalientes, Colima, México, Hidalgo, Morelos, **Nuevo León**, Quintana Roo y Tabasco, así como en la Ciudad de México.

Actualmente se cuenta con la infraestructura física para la instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Cadereyta.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

Artículo 1. El presente acuerdo tiene por objeto regular la organización, funcionamiento e inicio de funciones del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Cadereyta.

Artículo 2. Para efectos del presente acuerdo se entenderá por:

I. Administrador: Juez de Distrito encargado de la administración del Centro de Justicia Penal Federal;

II. Centro: Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Cadereyta;

III. Consejo: Consejo de la Judicatura Federal;

IV. Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento: Jueces de Distrito;

V. Jueces de Distrito: Jueces de Distrito Especializados en el Sistema Penal Acusatorio;

VI. Juzgadores: Jueces de Control, así como Tribunales de Enjuiciamiento y de Alzada;

VII. Pleno: Pleno del Consejo; y

VIII. Tribunal de Alzada: Tribunal Unitario de Circuito con competencia especializada en el sistema penal acusatorio.

Artículo 3. El Centro iniciará funciones a partir de las cero horas del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.

Artículo 4. El Centro se integrará por tres jueces de Distrito y un Tribunal de Alzada, y los demás juzgadores que sean adscritos por el Pleno, atendiendo a las necesidades para la impartición de justicia.

Los Jueces de Distrito a que se refiere este artículo tendrán competencia para actuar indistintamente como; Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal, debiendo especificar el carácter de su actuación en las constancias respectivas, sin embargo, aquellos que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio, no podrán fungir como Tribunal de Enjuiciamiento, de conformidad con el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Uno de los Jueces de Distrito fungirá como Administrador.

El turno como Administrador corresponderá al Juez de Distrito del Centro que sea designado por el Consejo, cuya duración en el cargo será conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

El Centro contará con la plantilla laboral autorizada, y la Administración del Centro se regirá conforme a las disposiciones del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

Artículo 5. Los juzgadores del Centro conocerán y tendrán competencia en los procedimientos que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.

Artículo 6. La jurisdicción territorial de los juzgadores del Centro comprenderá el Estado de Nuevo León, con la totalidad de sus Municipios.

Artículo 7. El domicilio del Centro será el ubicado en Carretera Cadereyta-Dr. González S/N Km. 15, colonia San Bartolo, C.P. 67456, Cadereyta Jiménez, Nuevo León (a 1.4 km al norponiente de la Autopista Monterrey-Reynosa).

Toda la correspondencia relacionada con los asuntos de competencia del Centro deberá dirigirse al domicilio indicado.

Artículo 8. El Centro contará con una oficialía de partes común, que dará servicio a los juzgadores que lo integran, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El sistema de turno y distribución de asuntos será automatizado y aleatorio, con excepción de lo siguiente:

I. Los asuntos urgentes que se reciban durante las guardias, cuya atención corresponderá al Juez de Distrito que deba cubrirla; y

II. Los asuntos relacionados durante las etapas procesales de investigación, e intermedia o de preparación del juicio.

Corresponde a las Direcciones Generales de Estadística Judicial y de Tecnologías de la Información el diseño operativo del sistema automatizado de turno y distribución de asuntos; y la elaboración de sus lineamientos, los cuales serán sometidos directamente por éstas a consideración y, en su caso, aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos.

En el diseño del sistema se deberá tomar en consideración las guardias, las vacaciones, las licencias, los impedimentos y las sustituciones de juzgadores.

En aquellas situaciones en que por caso fortuito o fuerza mayor no pueda utilizarse el sistema automatizado, el oficial de partes con la anuencia y supervisión del Administrador turnará los asuntos nuevos en el estricto orden secuencial en que se presenten; y los relacionados a que se refiere la fracción II de este artículo al juzgador correspondiente, sin embargo, deberá observarse que aquellos Jueces de Distrito que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio no podrán fungir como Tribunal de Enjuiciamiento, de conformidad con el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 9. A partir de las cero horas del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, la Oficialía de Partes del Centro, funcionará las veinticuatro horas, todos los días del año, para la recepción, registro, turno y envío de los asuntos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, de lunes a viernes durante el horario de las dieciocho a las ocho horas con cincuenta y nueve

minutos del día siguiente, así como los días inhábiles, la oficialía de partes sólo recibirá las promociones de término que se presenten.

Artículo 10. Los juzgadores, así como el personal adscrito a los mismos, laborarán de lunes a viernes de las nueve a las quince horas y de las dieciséis a las dieciocho horas, con una hora para la ingesta de alimentos, fuera de las instalaciones del Centro, de las quince a las dieciséis horas, sin perjuicio de las medidas de organización interna que adopten sus titulares atendiendo a las necesidades del servicio.

Artículo 11. Las guardias de turno para la atención de asuntos en días y horas inhábiles de los Jueces de Distrito en su función de control se realizarán de forma semanal, de conformidad con los registros y programación que realice el Administrador.

La guardia de turno en días y horas inhábiles, finaliza el día lunes de cada semana a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos e inicia el mismo día a las nueve horas.

El Administrador del Centro adoptará las medidas administrativas necesarias, a fin de que el Tribunal de Alzada del Centro esté en posibilidad de resolver las apelaciones de término previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 12. Los juzgadores que integran el Centro llevarán libros de gobierno electrónicos, que se integrarán con la información que se registre en el sistema informático respectivo.

Artículo 13. Los reportes estadísticos deberán remitirse a la Dirección General de Estadística Judicial, en la forma y tiempos que ésta determine.

Artículo 14. Los juzgadores del Centro, deberán levantar de manera individual un acta administrativa, por duplicado, del inicio de sus funciones, cuyo formato les será proporcionado por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, debiendo remitir un ejemplar a la propia Secretaría Ejecutiva.

Artículo 15. El Centro contará con el número suficiente de defensores públicos y oficiales de apoyo, en razón de la cantidad de los juzgadores que lo integran.

Artículo 16. Los Jueces de Control contarán con un sistema de acceso electrónico, mediante mecanismos tecnológicos que aseguren la confidencia-

lidad de la información, para favorecer la comunicación con el Ministerio Público de la Federación y demás autoridades, así como con las personas autorizadas por éstas, que por razón de su función deban ingresar solicitudes de providencias precautorias o relacionadas con medidas de protección, así como actos de investigación que requieren autorización judicial, solicitudes de órdenes de aprehensión o comparecencia, entre otras.

Artículo 17. En caso de que sea necesario sustituir a alguno de los Jueces de Distrito del Centro se estará a lo siguiente:

I. La sustitución recaerá en otro Juez de Distrito del mismo Centro, con exclusión de aquel que funja como Administrador;

II. En caso de no ser posible lo previsto en la fracción anterior, la sustitución recaerá en el Administrador, en términos del artículo 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y

III. Si tampoco fuera posible, la sustitución recaerá en los Jueces de Distrito del Centro de Justicia Penal más cercano.

Tratándose de la sustitución del Tribunal de Alzada del Centro, se habilita al Primer Tribunal Unitario del Cuarto Circuito con residencia en Monterrey, Nuevo León, para conocer, con ese carácter, de los asuntos que se tramitan en el Centro, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás disposiciones aplicables.

Artículo 18. El personal del Centro junto con sus juzgadores disfrutarán de los periodos vacacionales de quince días a que se refiere el artículo 160 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el primero durante julio y agosto y, el segundo, en diciembre y enero, en términos del artículo 100 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, en el orden que los juzgadores consensen. En caso de que no se logre el consenso será la Comisión de Carrera Judicial o la Comisión de Receso, quien lo determine. En todo caso deberán de permanecer dos Jueces de Distrito en el Centro, para lo cual deberá contabilizarse al que funja como Administrador, supuesto en el cual se deberá observar lo previsto en el artículo 8, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

El personal del tribunal de alzada del Centro disfrutará de los periodos vacacionales en los términos precisados. Lo mismo sucederá con el perso-

nal de la Administración del Centro, sin embargo, en este caso el Administrador deberá tomar las medidas necesarias para que haya servidores públicos de guardia en el mismo, durante dicho periodo vacacional, a fin de que el Centro no detenga su actividad.

La propia Comisión de Carrera Judicial, previo análisis de las solicitudes presentadas, podrá autorizar el disfrute de las vacaciones fuera de los meses de julio y agosto y, diciembre y enero, siempre y cuando existan causas excepcionales y justificadas para ello.

Artículo 19. El Pleno y las Comisiones del Consejo, en el ámbito de su competencia, interpretarán y resolverán todas las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, con excepción de lo dispuesto en los párrafos siguientes:

Para las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, entrará en vigor el día de su aprobación, para adoptar con la debida anticipación las medidas necesarias para que el Centro de Justicia Penal a que se refiere este acuerdo, entre en operación en la fecha señalada en este artículo.

El Administrador del Centro llevará a cabo las acciones de coordinación que sean necesarias para garantizar el funcionamiento del mismo en dicha fecha.

SEGUNDO. Hasta en tanto se crea el tribunal de alzada a que se refiere el artículo 4 de este acuerdo, se habilita al Segundo Tribunal Unitario del Cuarto Circuito con residencia en Monterrey, Nuevo León, para conocer de los procedimientos que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.

El Tribunal Unitario precisará en los actos procesales que celebre la denominación con la que actúa, dependiendo si lo hace conforme al citado código o al Código Federal de Procedimientos Penales.

Este Tribunal Unitario queda exceptuado de la obligación a que se refiere el artículo 14 de este acuerdo, y para efectos del artículo 18 del mismo instrumento normativo se regirá por las disposiciones aplicables como Tribunal Unitario de Circuito.

TERCERO. Las Direcciones Generales de Estadística Judicial y de Tecnologías de la Información implementarán los mecanismos de coordinación entre el sistema automatizado de turno y distribución de asuntos de la Oficialía de Partes del Centro y la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios de Circuito habilitados, para en su caso compensar entre ellos la carga de trabajo en su doble función, prevista en los artículos 17, último párrafo y segundo transitorio del presente acuerdo.

CUARTO. En materia de ejecución de sanciones penales se deberá observar lo dispuesto en el Acuerdo General 28/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual se habilita a los Jueces de Distrito de los Centros de Justicia Penal Federal para que ejerzan funciones de ejecución de sanciones penales.

QUINTO. En tanto se ordena la utilización de los libros de control electrónicos, el Administrador del Centro con el apoyo de su personal deberá realizar los registros de los asuntos que ingresen en libretas auxiliares.

SEXTO. Publíquese el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el Portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 10/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Cadereyta, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos de los Consejeros: Presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—Ciudad de México, a dieciocho de febrero de dos mil dieciséis (D.O.F. DE 26 DE FEBRERO DE 2016).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; 36/2014, que regula los Centros de Justicia Penal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos acuerdos generales; que reglamenta la carrera judicial y las

condiciones de los funcionarios judiciales (reforma su artículo 100), y 28/2015, mediante el cual se habilita a los Jueces de Distrito de los Centros de Justicia Penal Federal para que ejerzan funciones de ejecución de sanciones penales citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647; *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 12, Tomo IV, noviembre de 2014, página 3073; Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 2664, y Libro 19, Tomo III, junio de 2015, página 2513, respectivamente.

ACUERDO GENERAL 11/2016, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE CREA EL CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN EL ESTADO DE QUINTANARO, CON RESIDENCIA EN CANCÚN.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del mismo, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus atribuciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracciones IV, V, VI y XXIV; y 144, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número y límites territoriales y, en su caso, la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, en cada uno de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, así como proponer al Pleno para su aprobación, los acuerdos generales de creación de los Centros de Justicia Penal Federal, esta última, que ejerce a través de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, en términos del artículo 42, fracción II Bis, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, publicado el veintidós de noviembre de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación;

TERCERO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; por lo que para cumplir con el mandato constitucional es necesaria la creación de órganos jurisdiccionales, a fin de garantizar que la impartición de justicia sea pronta, completa, imparcial y gratuita;

CUARTO. El dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de modificación de diversos artículos constitucionales, para establecer en nuestro país el modelo de justicia procesal penal acusatorio y oral, que se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Como resultado de lo anterior, el Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de sus atribuciones debe dictar, en su ámbito de competencia, las disposiciones administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de la norma constitucional, de manera tal que antes del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, todo el territorio nacional opere bajo el nuevo modelo procesal penal;

QUINTO. En sesión de ocho de mayo de dos mil trece, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Plan Maestro de Implementación de la Reforma Penal, en el cual se incluyó la instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo;

SEXTO. En ese contexto, el cinco de marzo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en su artículo 2 precisa que el objeto del mismo es establecer las normas para la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y se repare el daño, señalando como ámbito de aplicación en la persecución de ilícitos, la competencia de los órganos jurisdiccionales federales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

SÉPTIMO. El artículo segundo transitorio, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que la entrada en vigor del mismo, a nivel federal será gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión, sin que pueda exceder del dieciocho de junio de dos mil dieciséis;

OCTAVO. El diecinueve de noviembre de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 36/2014 del Pleno del

Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos Acuerdos Generales;

NOVENO. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de cuatro de febrero de dos mil quince, aprobó la propuesta del proyecto arquitectónico de edificación de los Centros de Justicia Penal Federal Provisionales, así como de la propuesta de la plantilla de personal de los mismos, en términos del modelo de 2 Jueces de Distrito y 1 Sala de Audiencias;

DÉCIMO. En sesión de cuatro de marzo de dos mil quince el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el punto de acuerdo presentado por el Grupo de Trabajo para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, relativo a la habilitación provisional como tribunales de alzada del nuevo Sistema de Justicia Penal a los Tribunales Unitarios de Circuito; y

DÉCIMO PRIMERO. El veinticinco de septiembre de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Congreso de la Unión de la Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, en los Estados de Aguascalientes, Colima, México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como en la Ciudad de México.

Actualmente se cuenta con la infraestructura física para la instalación de un Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

Artículo 1. El presente acuerdo tiene por objeto regular la organización, funcionamiento e inicio de funciones del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún.

Artículo 2. Para efectos del presente acuerdo se entenderá por:

I. Administrador: Juez de Distrito encargado de la administración del Centro de Justicia Penal Federal;

II. Centro: Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún;

III. Consejo: Consejo de la Judicatura Federal;

IV. Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento: Jueces de Distrito;

V. Jueces de Distrito: Jueces de Distrito especializados en el sistema penal acusatorio;

VI. Juzgadores: Jueces de Control, así como tribunales de Enjuiciamiento y de Alzada;

VII. Pleno: Pleno del Consejo; y

VIII. Tribunal de Alzada: Tribunal Unitario de Circuito con competencia especializada en el sistema penal acusatorio.

Artículo 3. El Centro iniciará funciones a partir de las cero horas del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.

Artículo 4. El Centro se integrará por tres Jueces de Distrito y un Tribunal de Alzada, y los demás juzgadores que sean adscritos por el Pleno, atendiendo a las necesidades para la impartición de justicia.

Los Jueces de Distrito a que se refiere este artículo tendrán competencia para actuar indistintamente como Jueces de Control y Tribunales de Enjuiciamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 7 y 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal, debiendo especificar el carácter de su actuación en las constancias respectivas, sin embargo, aquellos que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio, no podrán fungir como Tribunal de Enjuiciamiento, de conformidad con el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Uno de los Jueces de Distrito fungirá como Administrador.

El turno como Administrador corresponderá al Juez de Distrito del Centro que sea designado por el Consejo, cuya duración en el cargo será conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

El Centro contará con la plantilla laboral autorizada, y la Administración del Centro se regirá conforme a las disposiciones del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

Artículo 5. Los juzgadores del Centro conocerán y tendrán competencia en los procedimientos que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.

Artículo 6. La jurisdicción territorial de los juzgadores del Centro comprenderá el Estado de Quintana Roo, con la totalidad de sus Municipios.

Artículo 7. El domicilio del Centro será el ubicado en Av. Andrés Quintana Roo No. 245, supermanzana 50, manzana 57, lote 1, C.P. 77533, en Cancún, Quintana Roo.

Toda la correspondencia relacionada con los asuntos de competencia del Centro deberá dirigirse al domicilio indicado.

Artículo 8. El Centro contará con una Oficialía de Partes Común, que dará servicio a los juzgadores que lo integran, de conformidad con las disposiciones aplicables.

El sistema de turno y distribución de asuntos será automatizado y aleatorio, con excepción de lo siguiente:

I. Los asuntos urgentes que se reciban durante las guardias, cuya atención corresponderá al Juez de Distrito que deba cubrirla; y

II. Los asuntos relacionados durante las etapas procesales de investigación, e intermedia o de preparación del juicio.

Corresponde a las Direcciones Generales de Estadística Judicial y de Tecnologías de la Información el diseño operativo del sistema automatizado de turno y distribución de asuntos; y la elaboración de sus lineamientos, los cuales serán sometidos directamente por éstas a consideración y, en su caso, aprobación de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos.

En el diseño del sistema se deberá tomar en consideración las guardias, las vacaciones, las licencias, los impedimentos y las sustituciones de juzgadores.

En aquellas situaciones en que por caso fortuito o fuerza mayor no pueda utilizarse el sistema automatizado, el oficial de partes con la anuencia y supervisión del Administrador turnará los asuntos nuevos en el estricto

orden secuencial en que se presenten; y los relacionados a que se refiere la fracción II de este artículo al juzgador correspondiente, sin embargo, deberá observarse que aquellos Jueces de Distrito que hayan intervenido en alguna etapa del procedimiento anterior a la audiencia de juicio no podrán fungir como Tribunal de Enjuiciamiento, de conformidad con el artículo 350 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 9. A partir de las cero horas del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, la Oficialía de Partes del Centro, funcionará las veinticuatro horas, todos los días del año, para la recepción, registro, turno y envío de los asuntos.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, de lunes a viernes durante el horario de las dieciocho a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos del día siguiente, así como los días inhábiles, la Oficialía de Partes sólo recibirá las promociones de término que se presenten.

Artículo 10. Los juzgadores, así como el personal adscrito a los mismos, laborarán de lunes a viernes de las nueve a las quince horas y de las dieciséis a las dieciocho horas, con una hora para la ingesta de alimentos, fuera de las instalaciones del Centro, de las quince a las dieciséis horas, sin perjuicio de las medidas de organización interna que adopten sus titulares atendiendo a las necesidades del servicio.

Artículo 11. Las guardias de turno para la atención de asuntos en días y horas inhábiles de los Jueces de Distrito en su función de control se realizarán de forma semanal, de conformidad con los registros y programación que realice el Administrador.

La guardia de turno en días y horas inhábiles, finaliza el día lunes de cada semana a las ocho horas con cincuenta y nueve minutos e inicia el mismo día a las nueve horas.

El Administrador del Centro adoptará las medidas administrativas necesarias, a fin de que el Tribunal de Alzada del Centro esté en posibilidad de resolver las apelaciones de término previstas en el Código Nacional de Procedimientos Penales.

Artículo 12. Los juzgadores que integran el Centro llevarán Libros de Gobierno Electrónicos, que se integrarán con la información que se registre en el sistema informático respectivo.

Artículo 13. Los reportes estadísticos deberán remitirse a la Dirección General de Estadística Judicial, en la forma y tiempos que ésta determine.

Artículo 14. Los juzgadores del Centro, deberán levantar de manera individual un acta administrativa, por duplicado, del inicio de sus funciones, cuyo formato les será proporcionado por la Secretaría Ejecutiva de Carrera Judicial y Creación de Nuevos Órganos, debiendo remitir un ejemplar a la propia Secretaría Ejecutiva.

Artículo 15. El Centro contará con el número suficiente de defensores públicos y oficiales de apoyo, en razón de la cantidad de los juzgadores que lo integran.

Artículo 16. Los Jueces de control contarán con un sistema de acceso electrónico, mediante mecanismos tecnológicos que aseguren la confidencialidad de la información, para favorecer la comunicación con el Ministerio Público de la Federación y demás autoridades, así como con las personas autorizadas por éstas, que por razón de su función deban ingresar solicitudes de providencias precautorias o relacionadas con medidas de protección, así como actos de investigación que requieren autorización judicial, solicitudes de órdenes de aprehensión o comparecencia, entre otras.

Artículo 17. En caso de que sea necesario sustituir a alguno de los Jueces de Distrito del Centro se estará a lo siguiente:

I. La sustitución recaerá en otro Juez de Distrito del mismo Centro, con exclusión de aquel que funja como Administrador;

II. En caso de no ser posible lo previsto en la fracción anterior, la sustitución recaerá en el Administrador, en términos del artículo 8 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y

III. Si tampoco fuera posible, la sustitución recaerá en los Jueces de Distrito del Centro de Justicia Penal más cercano.

Tratándose de la sustitución del Tribunal de Alzada del Centro, se habilita al Tribunal Unitario del Decimocuarto Circuito con residencia en Mérida, Yucatán, para conocer, con ese carácter, de los asuntos que se tramitan en el Centro, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales, y demás disposiciones aplicables.

Artículo 18. El personal del Centro junto con sus juzgadores disfrutarán de los periodos vacacionales de quince días a que se refiere el artículo 160 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el primero durante julio y agosto y, el segundo, en diciembre y enero, en términos del artículo 100 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, en el orden que los juzgadores consensen. En caso de que no se logre el consenso será la Comisión de Carrera Judicial o la Comisión de Receso, quien lo determine. En todo caso deberán de permanecer dos Jueces de Distrito en el Centro, para lo cual deberá contabilizarse al que funja como Administrador, supuesto en el cual se deberá observar lo previsto en el artículo 8, fracción I, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Centros de Justicia Penal Federal.

El personal del Tribunal de Alzada del Centro disfrutará de los periodos vacacionales en los términos precisados. Lo mismo sucederá con el personal de la Administración del Centro, sin embargo, en este caso el Administrador deberá tomar las medidas necesarias para que haya servidores públicos de guardia en el mismo, durante dicho periodo vacacional, a fin de que el Centro no detenga su actividad.

La propia Comisión de Carrera Judicial, previo análisis de las solicitudes presentadas, podrá autorizar el disfrute de las vacaciones fuera de los meses de julio y agosto y, diciembre y enero, siempre y cuando existan causas excepcionales y justificadas para ello.

Artículo 19. El Pleno y las Comisiones del Consejo, en el ámbito de su competencia, interpretarán y resolverán todas las cuestiones administrativas que se susciten con motivo de la aplicación del presente acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, con excepción de lo dispuesto en los párrafos siguientes:

Para las áreas administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, entrará en vigor el día de su aprobación, para adoptar con la debida anticipación las medidas necesarias para que el Centro de Justicia Penal a que se refiere este acuerdo, entre en operación en la fecha señalada en este artículo.

El Administrador del Centro llevará a cabo las acciones de coordinación que sean necesarias para garantizar el funcionamiento del mismo en dicha fecha.

SEGUNDO. Hasta en tanto se crea el Tribunal de Alzada a que se refiere el artículo 4 de este acuerdo, se habilita al Tribunal Unitario del Vigésimo Séptimo Circuito con residencia en Cancún, Quintana Roo, para conocer de los procedimientos que se tramiten conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones aplicables.

El Tribunal Unitario precisará en los actos procesales que celebre la denominación con la que actúa, dependiendo si lo hace conforme al citado código o al Código Federal de Procedimientos Penales.

Este Tribunal Unitario queda exceptuado de la obligación a que se refiere el artículo 14 de este acuerdo, y para efectos del artículo 18 del mismo instrumento normativo se regirá por las disposiciones aplicables como Tribunal Unitario de Circuito.

TERCERO. Las Direcciones Generales de Estadística Judicial y de Tecnologías de la Información implementarán los mecanismos de coordinación entre el sistema automatizado de turno y distribución de asuntos de la Oficialía de Partes del Centro y la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios de Circuito habilitados, para en su caso compensar entre ellos la carga de trabajo en su doble función, prevista en los artículos 17, último párrafo y segundo transitorio del presente acuerdo.

CUARTO. En materia de ejecución de sanciones penales se deberá observar lo dispuesto en el Acuerdo General 28/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual se habilita a los Jueces de Distrito de los Centros de Justicia Penal Federal para que ejerzan funciones de ejecución de sanciones penales.

QUINTO. En tanto se ordena la utilización de los libros de control electrónicos, el Administrador del Centro con el apoyo de su personal deberá realizar los registros de los asuntos que ingresen en libretas auxiliares.

SEXTO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el Portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,**CERTIFICA:**

Que este Acuerdo General 11/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—Ciudad de México, a dieciocho de febrero de dos mil dieciséis (D.O.F. DE 26 DE FEBRERO DE 2016).

Nota: Los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales; 36/2014, que regula los Centros de Justicia Penal Federal; y que reforma y adiciona disposiciones de diversos Acuerdos Generales; que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales; y, 28/2015, mediante el cual se habilita a los Jueces de Distrito de los Centros de Justicia Penal Federal para que ejerzan funciones de ejecución de sanciones penales citados, aparecen publicados en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Décima Época, Libro XXVI, Tomo 2, noviembre de 2013, página 1647; *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 12, Tomo IV, noviembre de 2014, página 3073; *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Novena Época, Tomo XXVII, marzo de 2008, página 2025; y, *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 19, Tomo III, junio de 2015, página 2513, respectivamente.

ACUERDO GENERAL 12/2016, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA Y ADICIONA EL SIMILAR 3/2013, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DEL NÚMERO Y LÍMITES TERRITORIALES DE LOS CIRCUITOS JUDICIALES EN QUE SE DIVIDE LA REPÚBLICA MEXICANA; Y AL NÚMERO, A LA JURISDICCIÓN TERRITORIAL Y ESPECIALIZACIÓN POR MATERIA DE LOS

TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO.

CONSIDERANDO

PRIMERO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo; 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 68 y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus atribuciones;

SEGUNDO. Los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 81, fracciones IV, V, VI y XXIV; y 144, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal determinar el número y límites territoriales y, en su caso, la especialización por materia de los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito, en cada uno de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana;

TERCERO. El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes; por lo que para cumplir con el mandato constitucional es necesaria la creación de órganos jurisdiccionales, a fin de garantizar que la impartición de justicia sea pronta, completa, imparcial y gratuita;

CUARTO. El dieciocho de junio de dos mil ocho, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto de modificación de diversos artículos constitucionales, para establecer en nuestro país el modelo de justicia procesal penal acusatorio y oral, que se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. Como resultado de lo anterior, el Consejo de la Judicatura Federal en ejercicio de sus atribuciones debe dictar, en su ámbito de competencia, las disposiciones administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de la norma constitucional, de manera tal que antes del dieciocho de junio de dos mil dieciséis, todo el territorio nacional opere bajo el nuevo modelo procesal penal;

QUINTO. En sesión de ocho de mayo de dos mil trece, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Plan Maestro de Implementación

de la Reforma Penal, en el cual se incluyó la instalación de Centros de Justicia Penal en los Estados de Aguascalientes, Colima, de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como en la Ciudad de México;

SEXTO. En ese contexto, el cinco de marzo de dos mil catorce se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Código Nacional de Procedimientos Penales, que tiene como objeto establecer las normas para la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y se repare el daño, señalando como ámbito de aplicación en la persecución de ilícitos, la competencia de los órganos jurisdiccionales federales en el marco de los principios y derechos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;

SÉPTIMO. El artículo segundo transitorio, primer párrafo, del Código Nacional de Procedimientos Penales, señala que la entrada en vigor del mismo, a nivel federal será gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión, sin que pueda exceder del dieciocho de junio de dos mil dieciséis.

El veinticinco de septiembre de dos mil quince se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto del Congreso de la Unión relativo a la Declaratoria de entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Penales, a partir del veintinueve de febrero de dos mil dieciséis, en los Estados de Aguascalientes, Colima, de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como en la Ciudad de México; y

OCTAVO. El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de veintisiete de enero de dos mil dieciséis, aprobó los dictámenes por los que se crearon los Centros de Justicia Penal Federal en los Estados de Aguascalientes, Colima, de México, Hidalgo, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo y Tabasco, así como en la Ciudad de México.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

ÚNICO. Se reforman los numerales 1 a 15 del **QUINTO BIS**; y se adicionan los numerales 16 a 26 del mismo, todos del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la

República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, para quedar como sigue:

"QUINTO BIS. ...

1. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Aguascalientes se integrará por tres Jueces de Distrito, y un Tribunal de Alzada, todos con residencia en la ciudad del mismo nombre.

2. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California Sur se integrará por tres Jueces de Distrito, y un Tribunal de Alzada, todos con residencia en La Paz, Baja California Sur.

3. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chiapas se integrará por tres Jueces de Distrito, y un Tribunal de Alzada, todos con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas.

4. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Chihuahua se integrará por tres Jueces de Distrito, y un Tribunal de Alzada, todos con residencia en la ciudad del mismo nombre.

5. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Coahuila de Zaragoza se integrará por tres Jueces de Distrito, y un Tribunal de Alzada, todos con residencia en Torreón, Coahuila.

6. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima se integrará por tres Jueces de Distrito, y un Tribunal de Alzada, todos con residencia en la ciudad del mismo nombre.

7. El Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el reclusorio Norte, se integrará por tres Jueces de Distrito; y un Tribunal de Alzada.

8. El Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el reclusorio Oriente, se integrará por tres Jueces de Distrito; y un Tribunal de Alzada.

9. El Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con residencia en el reclusorio Sur, se integrará por tres Jueces de Distrito; y un Tribunal de Alzada.

10. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Durango se integrará por cinco Jueces de Distrito, y un Tribunal de Alzada, todos con residencia en Durango, Durango.

11. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Guanajuato se integrará por tres Jueces de Distrito, y un Tribunal de Alzada, todos con residencia en la ciudad del mismo nombre.

12. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo se integrará por tres Jueces de Distrito, y un Tribunal de Alzada, todos con residencia en Pachuca, Hidalgo.

13. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México se integrará por tres Jueces de Distrito, y un Tribunal de Alzada, todos con residencia en Nezahualcóyotl, Estado de México.

14. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos se integrará por tres Jueces de Distrito, y un Tribunal de Alzada, todos con residencia en Cuernavaca, Morelos.

15. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nayarit se integrará por tres Jueces de Distrito, y un Tribunal de Alzada, todos con residencia en la ciudad de Tepic, Nayarit.

16. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León se integrará por tres Jueces de Distrito, y un Tribunal de Alzada, todos con residencia en Cadereyta, Nuevo León.

17. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Oaxaca se integrará por tres Jueces de Distrito, y un Tribunal de Alzada, todos con residencia en la ciudad del mismo nombre.

18. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Puebla se integrará por cuatro Jueces de Distrito, y dos Tribunales de Alzada, todos con residencia en San Andrés Cholula, Puebla.

19. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Querétaro se integrará por tres Jueces de Distrito, y un Tribunal de Alzada, todos con residencia en la ciudad del mismo nombre.

20. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo se integrará por tres Jueces de Distrito, y un Tribunal de Alzada, todos con residencia en Cancún, Quintana Roo.

21. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de San Luis Potosí se integrará por tres Jueces de Distrito, y un Tribunal de Alzada, todos con residencia en la ciudad del mismo nombre.

22. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Sinaloa se integrará por tres Jueces de Distrito, y un Tribunal de Alzada, todos con residencia en Culiacán, Sinaloa.

23. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tabasco se integrará por tres Jueces de Distrito, y un Tribunal de Alzada, todos con residencia en Villahermosa, Tabasco.

24. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tlaxcala se integrará por tres Jueces de Distrito, y un Tribunal de Alzada, todos con residencia en Apizaco, Tlaxcala.

25. El Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán se integrará por cuatro Jueces de Distrito, y un Tribunal de Alzada, todos con residencia en Mérida, Yucatán.

26. Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Zacatecas se integrará por cuatro Jueces de Distrito, y un Tribunal de Alzada, todos con residencia en la ciudad del mismo nombre.

..."

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente acuerdo entrará en vigor el veintinueve de febrero de dos mil dieciséis.

SEGUNDO. Publíquese el acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el Portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determi-

nación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de tres de febrero de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—Ciudad de México, a dieciocho de febrero de dos mil dieciséis (D.O.F. DE 26 DE FEBRERO DE 2016).

Nota: El Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Distritos y Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito citado, aparece publicado en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*, Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, página 1559.

ACUERDO GENERAL 14/2016, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL CAMBIO DE RESIDENCIA Y DE DOMICILIO DEL SEGUNDO TRIBUNAL UNITARIO EN MATERIAS CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

CONSIDERANDO

PRIMERO. Por decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, y once de junio de mil novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los artículos 94, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando la estructura y competencia del Poder Judicial de la Federación;

SEGUNDO. En términos de lo dispuesto por los artículos 94, párrafo segundo, 100, párrafos primero y octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los Tribunales de Circuito

y Juzgados de Distrito; con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado ejercicio de sus funciones;

TERCERO. El artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y el artículo 81, fracciones IV, V, XX y XXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen que son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal, determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de la República Mexicana, así como el número y, en su caso, especialización por materia, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito en cada uno de los mencionados circuitos. Asimismo, autorizar el cambiar la residencia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.

Por su parte, el artículo 81, fracciones XXXIV y XXXVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establece como atribución del Consejo de la Judicatura Federal, administrar los bienes muebles e inmuebles del Poder Judicial de la Federación, cuidando su mantenimiento, conservación y acondicionamiento, en ese sentido, las instalaciones para el funcionamiento de los tribunales federales deben ser acordes con las necesidades que exigen el buen servicio y el decoro, que deben distinguir a las oficinas públicas encargadas de impartir justicia;

CUARTO. Mediante Acuerdo General 9/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio temporal de residencia y de domicilio del Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal, al edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Nezahualcóyotl, Estado de México, se autorizó el cambio temporal del referido tribunal; y

QUINTO. El artículo 17 constitucional consagra el derecho que toda persona tiene a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual hace necesario que los órganos jurisdiccionales se encuentren en condiciones físicas convenientes para garantizar la impartición de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ordena el precepto constitucional invocado; por tal motivo, el Consejo de la Judicatura Federal estima conveniente realizar el cambio de residencia y de domicilio del Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito.

Por lo anterior, se expide el siguiente

ACUERDO

Artículo 1. Se autoriza el cambio de residencia y de domicilio del Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito.

Artículo 2. El nuevo domicilio del Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, será en el Edificio Sede del Poder Judicial de la Federación, ubicado en Avenida Insurgentes Sur número 2065, Colonia San Ángel, Delegación Álvaro Obregón, Código Postal 01000, en la Ciudad de México.

Artículo 3. El órgano jurisdiccional mencionado en el artículo 1 iniciará funciones en su nuevo domicilio de acuerdo a lo siguiente:

ÓRGANO JURISDICCIONAL A REUBICAR	DÍA INHÁBIL	INICIO DE FUNCIONES EN EL NUEVO DOMICILIO
Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito	No aplica	22 de febrero de 2016

Artículo 4. A partir de la fecha señalada en el artículo anterior, toda la correspondencia, trámites y diligencias relacionados con los asuntos de la competencia del órgano jurisdiccional de que se trata, deberán dirigirse y realizarse en el domicilio precisado en el artículo 2 de este Acuerdo.

Artículo 5. La Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, continuará prestando servicio al Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito; por tal motivo, la distribución de asuntos continuará efectuándose como regularmente se ha hecho, con la particularidad de que los mismos se tendrán que entregar en la nueva dirección especificada en el artículo 2 de este Acuerdo.

Artículo 6. El Pleno y la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, interpretarán y resolverán cualquier cuestión administrativa que pudiera suscitarse con motivo de la aplicación del presente Acuerdo.

TRANSITORIOS

PRIMERO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.

SEGUNDO. Publíquese el Acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y para su mayor difusión en el *Semanario Judicial de la Federación* y su *Gaceta*; así como en el Portal de Internet del Consejo de la Judicatura Federal.

TERCERO. El órgano jurisdiccional a que se refiere el presente Acuerdo y la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito deberán colocar avisos en lugares visibles con relación al cambio de domicilio.

EL LICENCIADO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,

CERTIFICA:

Que este Acuerdo General 14/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y de domicilio del Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, fue aprobado por el Pleno del propio Consejo, en sesión ordinaria de diez de febrero de dos mil dieciséis, por unanimidad de votos de los señores Consejeros: presidente Ministro Luis María Aguilar Morales, Felipe Borrego Estrada, Rosa Elena González Tirado, Martha María del Carmen Hernández Álvarez, Alfonso Pérez Daza, Manuel Ernesto Saloma Vera y J. Guadalupe Tafoya Hernández.—Ciudad de México a doce de febrero de dos mil dieciséis (D.O.F. DE 19 DE FEBRERO DE 2016).

Nota: El Acuerdo General 9/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio temporal de residencia y de domicilio del Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito, con sede en el Distrito Federal, al edificio sede del Poder Judicial de la Federación en Nezahualcóyotl, Estado de México citado, aparece publicado en el *Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta*, Décima Época, Libro XVII, Tomo 2, febrero de 2013, página 1653.

SÉPTIMA PARTE

ÍNDICES

Índice General Alfabético de Tesis de Jurisprudencia y Aisladas

	Número de identificación	Pág.
ABANDONO DE MENOR DE EDAD. LA SANCIÓN RELATIVA A LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD NO DEBE CONDICIONARSE A QUE SE COMPROMETA SU SALUD O SEGURIDAD (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 418, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN ABROGADO).	XI.2o.C.10 C (10a.)	2015
ACCIÓN PENAL. LAS PRUEBAS PARA PERFECCIONARLA, OFRECIDAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CASO DE QUE SE NIEGUE LA ORDEN DE APREHENSIÓN, REAPREHENSIÓN O COMPARECENCIA, A FIN DE QUE EL JUEZ ENTRE NUEVAMENTE AL ESTUDIO DE LA CAUSA Y SE PRONUNCIE RESPECTO DE DICHOS MANDATOS, DEBEN DESAHOGARSE POR LA REPRESENTACIÓN SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ) [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 75/2012 (10a.)].	IX.2o.3 P (10a.)	2016
ACTAS DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA. QUIÉNES DEBEN RATIFICARLAS ANTE EL TRIBUNAL, PARA QUE QUEDEN PERFECCIONADAS.	I.14o.T.2 L (10a.)	2017
ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LOS FORMULADOS POR EL QUEJOSO NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA RESOLVERLO.	XXVII.3o.95 K (10a.)	2018

	Número de identificación	Pág.
ALEGATOS. SI DE SU CONTENIDO SE ADVIERTE QUE EN REALIDAD CONSTITUYEN UNA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, EL JUZGADOR DEBE SUPLIR EL ERROR EN LA DENOMINACIÓN EN QUE INCURRA EL QUEJOSO.	XXVII.3o.94 K (10a.)	2019
ALIMENTOS VENCIDOS. FORMA EN QUE OPERAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y EL ESTÁNDAR DE PRUEBA CUANDO AQUÉLLOS DERIVAN DE UN ADEUDO CONTRAÍDO POR LOS ACREEDORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO).	PC.XXII. J/4 C (10a.)	991
AMPARO ADHESIVO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INTERPUESTO POR EL CODEMANDADO ABSUELTO, CUANDO NO EXISTE RIESGO DE QUE SE MODIFIQUE EL LAUDO QUE LE BENEFICIA, AUN CUANDO SE CONCEDA EL AMPARO PRINCIPAL.	VII.1o.T.2 L (10a.)	2020
AMPARO CONTRA LEYES. EL RECIBO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, ES EFICAZ PARA ESTABLECER LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS E INICIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE QUE LA QUEJOSA TUVO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN CON POSTERIORIDAD.	PC.XXII. J/5 A (10a.)	1062
AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS HETERO-APLICATIVAS. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL CONTRIBUYENTE PRETENDE RECLAMARLAS CON BASE EN EL INTERÉS LEGÍTIMO.	XXII.1o.12 A (10a.)	2020
AMPARO DIRECTO. EL PLAZO DE 15 DÍAS PARA PROMOVERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO Y EXACTO DEL LAUDO RECLAMADO, INDE-		

	Número de identificación	Pág.
PENDIENTEMENTE DE QUE CONTRA SU NOTIFICACIÓN HAYA PLANTEADO INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y ÉSTE SE HAYA DECLARADO FUNDADO.	VI.2o.T.8 L (10a.)	2021
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA DEBE VERIFICARSE SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZÓ UN VERDADERO CONTROL DE CONVENCIONALIDAD.	1a. XXI/2016 (10a.)	665
AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÁ OBLIGADO A OTORGAR AL QUEJOSO EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE DESAHOGUE LA PREVENCIÓN DE FORMULARLA, RESPECTO DE UN ACTO DIVERSO, VINCULADO CON EL RECLAMADO, ADVERTIDO DEL INFORME JUSTIFICADO, SI DE AUTOS SE APRECIA QUE AQUÉL, CON ANTERIORIDAD A QUE SE RINDIERA, TUVO CONOCIMIENTO DE SU EXISTENCIA.	I.5o.P.10 K (10a.)	2022
ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA CIVIL DENTRO DEL JUICIO. SE EQUIPARA A UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA Y REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FIANZA PARA RESPONDER POR LOS PROBABLES DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CON DICHO ACTO PUEDAN OCASIONARSE A LA CONTRAPARTE DEL SOLICITANTE DE LA MEDIDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).	VII.1o.C.27 C (10a.)	2023
ANTECEDENTES PENALES. NO LOS CONSTITUYEN LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES DE CAUSAS PENALES QUE SE ACUMULARON, POR LO QUE DEBE CONSIDERARSE AL INCUPLADO COMO DELINCUENTE PRIMARIO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LOS MÉTODOS ALTERNOS CONTEM-		

	Número de identificación	Pág.
PLADOS EN LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	III.2o.P.92 P (10a.)	2024
APELACIÓN EN CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR. EL ARTÍCULO 950 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.	1a. XLV/2016 (10a.)	665
AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. SI EL JUEZ DE CONTROL ADVIERTE QUE LOS HECHOS IMPUTADOS A LA PERSONA QUE COMPARECIÓ A LA AUDIENCIA INICIAL ACONTECIERON ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE, PERO NO DETERMINAR AQUÉL POR ESE MOTIVO.	XXII.4o.1 P (10a.)	2024
AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA QUE EL JUEZ DE CONTROL PUEDA DETERMINAR SI EL HECHO IMPUTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACUSADO ES O NO CONSTITUTIVO DE DELITO, DEBE ANALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL ILÍCITO CORRESPONDIENTE, ESTO ES, SUS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS.	XXVII.3o.20 P (10a.)	2025
AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EL IMPUTADO SOLICITÓ LA PRÓRROGA A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL PARA QUE SE LE RESUELVA SU SITUACIÓN JURÍDICA, EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ EN APTITUD DE REQUERIR QUE SE DECRETE AQUÉL, PREVIAMENTE A ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA CELEBRADA CON MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONSTITUCIONAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MORELOS).	XVIII.5o.1 P (10a.)	2026

	Número de identificación	Pág.
AVERIGUACIÓN PREVIA. SI DURANTE ÉSTA EL INCULPADO ES PUESTO EN LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, ES INAPLICABLE PARA EL MINISTERIO PÚBLICO EL TÉRMINO DE 48 HORAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA DEFINIR SU SITUACIÓN JURÍDICA MEDIANTE EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL O LIBERTAD CON LAS RESERVAS DE LEY.	PC.I.P. J/21 P (10a.)	1118
AYUDA ASISTENCIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 138, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE Y 164, FRACCIÓN IV, DE LA ABROGADA. CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LA CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO LABORAL CUANDO SE DEMANDA SU OTORGAMIENTO.	PC.VI.L. J/2 L (10a.)	1177
AYUDA SINDICAL POR DEFUNCIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL. CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DEL RECLAMO FORMULADO POR EL BENEFICIARIO DE UN TRABAJADOR FALLECIDO.	VIII.2o.C.T.1 L (10a.)	2026
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA FALTA DE RESPUESTA Y LA POSTERIOR CONTESTACIÓN DE UNA PETICIÓN FORMULADA EN EL CONTEXTO DEL PROCESO DE ELECCIÓN DEL RECTOR.	VI.1o.A.93 A (10a.)	2029
BONO DE PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL. AL TRATARSE DE UNA PRESTACIÓN EXTRALEGAL, SI DEMANDAN SU APLICACIÓN, DEBEN ACREDITAR LA EXISTENCIA DE LA CLÁUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO QUE LA PREVÉ, DEL RE-		

	Número de identificación	Pág.
GLAMENTO QUE REGULA SU OTORGAMIENTO Y EL DERECHO A PERCIBIRLA.	IV.4o.T.2 L (10a.)	2030
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA POR INACTIVIDAD PROCESAL. ES INAPLICABLE EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DEMANDAN ALIMENTOS A FAVOR DE MENORES, PERO SÍ OPERA CUANDO TENGA UN IMPACTO POSITIVO SOBRE ÉSTOS, ATENTO AL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ [LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS XIX.1o.A.C.51 C)].	XIX.1o.A.C.10 C (10a.)	2033
CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	2a./J. 2/2016 (10a.)	873
CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO DIRECTO. ES INNECESARIO DAR LA VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE ACTUALIZA ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CON MOTIVO DE LA DECISIÓN ADOPTADA POR EL PROPIO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN UN RECURSO DE REVISIÓN FISCAL RELACIONADO.	I.12o.A.3 A (10a.)	2034
CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. AL ACTUALIZARSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, NO ES OBLIGATORIO DAR VISTA DE OFICIO AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA PUES, DE HACERLO, SE AFECTARÍA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA PRE-		

	Número de identificación	Pág.
VISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	VIII.2o.C.T.6 K (10a.)	2035
COMPETENCIA ECONÓMICA. CONCEPTO DE "PODER SUSTANCIAL" EN ESA MATERIA.	I.1o.A.E.122 A (10a.)	2036
COMPETENCIA ECONÓMICA. EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 34 BIS 2 DE LA ABROGADA LEY FEDERAL RELATIVA PARA QUE LA COMISIÓN FEDERAL EN LA MATERIA RECABE INFORMACIÓN DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PUEDE PRORROGARSE, SIEMPRE QUE SEA POR CAUSA JUSTIFICADA Y NO EXCEDA EL LAPSO PARA CONCLUIR LA INVESTIGACIÓN.	I.1o.A.E.118 A (10a.)	2037
COMPETENCIA ECONÓMICA. LA EXIGENCIA DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN QUE PERMITA DETERMINAR EL MERCADO RELEVANTE Y EL PODER SUSTANCIAL DE UN DETERMINADO AGENTE ECONÓMICO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 33 BIS, FRACCIÓN I, DE LA ABROGADA LEY FEDERAL RELATIVA, NO IMPLICA QUE AMBOS ELEMENTOS SE DEFINIRÁN, EXCLUSIVAMENTE, CON LA INFORMACIÓN Y LAS PRUEBAS APORTADAS POR EL SOLICITANTE.	I.1o.A.E.117 A (10a.)	2038
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CASO EN EL QUE EL ACTO RECLAMADO HA COMENZADO A EJECUTARSE EN UN DISTRITO Y SIGUE EJECUTÁNDOSE EN OTRO (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO).	VI.2o.T.10 K (10a.)	2039
COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DE UN INCIDENTE NO ESPECIFICADO EN MATERIA PENAL. SI LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR		

	Número de identificación	Pág.
ESTA RESOLUCIÓN, NO SE TRADUCEN EN UNA EJECUCIÓN MATERIAL DEL ACTO RECLAMADO, DEBIDO A QUE NINGUNA CONSECUENCIA INMEDIATA Y DIRECTA ORIGINAN EN EL DERECHO SUSTANTIVO ALEGADO (LIBERTAD), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA.	II.2o.P.17 K (10a.)	2040
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE CONTRVIERTEN LA NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE UN IMPUESTO POR PAGO DE LO INDEBIDO, CON BASE EN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, SI ÉSTA NO SE RECLAMÓ OPORTUNAMENTE EN LA VÍA INDIRECTA CON MOTIVO DEL ENTERO DEL TRIBUTO.	XVI.1o.A.73 A (10a.)	2041
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE SOSTIENEN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA AUTOLIQUIDACIÓN DE CONTRIBUCIONES, SI EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ORIGEN SE IMPUGNARON LOS RECIBOS DE PAGO QUE LA CONSTITUYEN.	IV.2o.A.113 A (10a.)	2042
CONDENA CONDICIONAL Y SUSTITUTIVOS DE LA PENA. CUANDO UNA AUTORIDAD DEL FUERO COMÚN, EN EJERCICIO DE LA COMPETENCIA CONCURRENTES, CONOCE DE UN DELITO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE SALUD, DEBE RESOLVER RESPECTO DE DICHOS BENEFICIOS, ATENTO A LOS ARTÍCULOS 70 Y 90 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y NO A LO QUE ESTABLEZCA LA LEY SUSTANTIVA LOCAL CORRESPONDIENTE.	XXX.2o.1 P (10a.)	2043
CONFLICTO COMPETENCIAL. CORRESPONDE DIRIMIRLO A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN,		

	Número de identificación	Pág.
CUANDO SE SUSCITA ENTRE UNA DE SUS SALAS REGIONALES Y UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN.	XVI.1o.T.24 L (10a.)	2044
CONFRONTACIÓN. PARA QUE LA DILIGENCIA RELATIVA PRACTICADA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA PUEDA TENER VALIDEZ DURANTE EL PROCESO, ES NECESARIO QUE EL DEFENSOR DEL INculpADO ESTÉ PRESENTE DURANTE SU DESARROLLO, PARA SALVAGUARDAR SU DERECHO DE DEFENSA ADECUADA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).	I.3o.P43 P (10a.)	2045
CONTINENCIA DE LA CAUSA. SI EN EL RECURSO DE REVISIÓN SE IMPUGNA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE DECIDE SOBRE EL DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA (EL CUAL PUEDE CONTROVERTIRSE EN QUEJA) Y EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, PARA NO DIVIDIR AQUÉLLA, DEBE ESTUDIARLOS EN SU CONJUNTO, SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LA TEMPORALIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO PARA SU INTERPOSICIÓN, RESPECTO DEL ACTO QUE FUERE MATERIA DEL RECURSO DE QUEJA (DESECHAMIENTO).	I.3o.P6 K (10a.)	2046
CONTRADICCIÓN DE TESIS. ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. NO SE CALIFICA DE LEGAL EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR UN MAGISTRADO PARA CONOCER DE ELLA, AL NO ACTUALIZARSE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES XVI Y XVIII DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.	PC.III.L. 1 K (10a.)	1917
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD <i>EX OFFICIO</i> . CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO.	1a./J. 4/2016 (10a.)	430

	Número de identificación	Pág.
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD <i>EX OFFICIO</i> . EN EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO DEBE CONSTATARSE LA APLICABILIDAD DE LA NORMA, COMO PRESUPUESTO LÓGICO DE SU EJERCICIO.	1a. XXIV/2016 (10a.)	666
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD <i>EX OFFICIO</i> . LA APLICABILIDAD DE LA NORMA AL CASO CONCRETO ES UN REQUISITO LÓGICO PARA EL EJERCICIO DE AQUÉL.	1a. XXIII/2016 (10a.)	667
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD <i>EX OFFICIO</i> . LAS AUTORIDADES JUDICIALES, PREVIO A LA INAPLICACIÓN DE LA NORMA EN ESTUDIO, DEBEN JUSTIFICAR RAZONADAMENTE POR QUÉ SE DESTRUYÓ SU PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD.	1a. XXII/2016 (10a.)	667
CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL <i>EX OFFICIO</i> . LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE JALISCO, NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DEL ARTÍCULO 173 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, AL TRATARSE DE UNA NORMA QUE RIGE EL JUICIO DE ORIGEN QUE NO LES CORRESPONDE APLICAR.	III.2o.P94 P (10a.)	2047
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. NO TIENE EL ALCANCE DE QUE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES LOCALES CONOZCAN DE ASUNTOS RELACIONADOS CON VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTO DE ASUNTOS QUE NO SEAN DE SU COMPETENCIA.	1a. XXXIX/2016 (10a.)	668
CONTROL PROVISIONAL PREVENTIVO. PARÁMETROS A SEGUIR POR LOS ELEMENTOS DE LA POLI-		

	Número de identificación	Pág.
CÍA PARA QUE AQUÉL TENGA VALIDEZ CON POSTERIORIDAD A LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA.	1a. XXVI/2016 (10a.)	669
CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO.	I.3o.P41 P (10a.)	2049
COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE SU CONDENA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUN CUANDO HAYA PROCEDIDO LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA Y EL DEMANDADO OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE A PESAR DE NO APERSONARSE, AL REDUCIR EL JUEZ, EN EJERCICIO DEL CONTROL CONVENCIONAL <i>EX OFFICIO</i> , EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS POR SER USURARIOS.	XXVII.3o.30 C (10a.)	2050
COSTAS EN LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES. NO PROCEDE SU CONDENA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO.	XXVII.3o.28 C (10a.)	2050
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES OPTATIVO PARA LA PARTE ACTORA HACER VALER LA QUEJA REGULADA EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.	I.1o.A.32 K (10a.)	2051
DAÑOS Y PERJUICIOS. LA AFIANZADORA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR LA DETERMI-		

	Número de identificación	Pág.
NACIÓN QUE DECLARA FUNDADO EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN TRAMITADO EN UN JUICIO DE AMPARO BIINSTANCIAL.	I.14o.C.1 K (10a.)	2053
DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS. AL TENER DICHA RESOLUCIÓN ÚNICAMENTE EFECTOS DECLARATIVOS Y CONSTITUIR UN ACTO FUERA DE JUICIO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.	XXI.3o.C.T.1 L (10a.)	2054
DEFENSOR DEL QUEJOSO PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. CUENTA CON LEGITIMACIÓN LEGAL PARA DESIGNAR AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA.	I.3o.P.42 P (10a.)	2054
DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN AGRAVADA DE NARCÓTICOS. ANTES DE REALIZAR EL CONTROL CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DEL SUPUESTO NORMATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 195, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEBE VERIFICARSE SI LA PRESUNCIÓN LEGAL RELACIONADA CON LA FINALIDAD DE LA DROGA, SE APLICÓ EN PERJUICIO DEL REO.	XXI.1o.P.A.9 P (10a.)	2055
DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SI SU DESECHAMIENTO DE PLANO OCURRIÓ PORQUE EN EL AUTO ADMISORIO EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIRTIÓ UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, ES INNECESARIO DAR VISTA PREVIAMENTE AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA.	XXVII.3o.93 K (10a.)	2056
DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO SOBRE LA BASE DE QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE ES ILEGAL, SI DEL AUTO RESPECTIVO SE ADVIERTE QUE EL JUEZ FEDERAL CONSTRUYÓ		

	Número de identificación	Pág.
SU DETERMINACIÓN A PARTIR DE UNA INEXACTA PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE REVELA SU OMISIÓN DE PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU OCURSO.	I.1o.A.30 K (10a.)	2057
DEMANDA DE NULIDAD DE PAGARÉ O <i>VOUCHER</i> EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. PARA SU ADMISIÓN BASTA QUE EL PROMOVENTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ESTÁ IMPOSIBILITADO PARA PRESENTARLO (DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN) AL ENCONTRARSE EN PODER DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMANDADA.	VIII.2o.C.T.2 C (10a.)	2058
DEMANDA LABORAL. EL REQUERIMIENTO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA QUE EL PROMOVENTE ACREDITE SU IDENTIDAD, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE TENERLA POR NO INTERPUESTA, ES ILEGAL Y CONTRARÍA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).	VI.1o.T. J/2 (10a.)	1953
DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO.	VII.2o.P. J/2 (10a.)	1966
DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. LA AFECTACIÓN PRODUCIDA POR UNA DECISIÓN JURISDICCIONAL QUE RESUELVE SOBRE LA PROPIEDAD Y LA POSESIÓN NO IMPLICA UNA VULNERACIÓN A ESE DERECHO.	1a. XXXV/2016 (10a.)	670

	Número de identificación	Pág.
DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. SE VULNERA EN PERJUICIO DE LOS MENORES DE EDAD CON MOTIVO DE LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES Y SENSIBLES EN EL PORTAL DE INTERNET DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A TRAVÉS DE SU DEPARTAMENTO DE LOCATEL, A PROPÓSITO DE LA PETICIÓN DE UN PARTICULAR, QUE NO SE UBIQUE EN ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO INMINENTE DE SUFRIR DAÑO GRAVE EN SU INTEGRIDAD PERSONAL.	XXII.1o.1 CS (10a.)	2060
DESAHOGO DE PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL. SI EN EL TÉRMINO DE LA VISTA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 885 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO SE HACEN VALER LAS VIOLACIONES RELATIVAS A LOS MEDIOS PROBATORIOS ADMITIDOS (DESISTIMIENTO DEL COTEJO Y CERTIFICACIÓN), PRECLUYE EL DERECHO PARA PLANTEARLAS.	I.13o.T.142 L (10a.)	2062
DETENCIÓN DEL AUTOR INTELECTUAL DEL DELITO. NO PUEDE CONFIGURARSE BAJO LA HIPÓTESIS DE FLAGRANCIA PORQUE, DE LO CONTRARIO, ES ILEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).	VII.2o.T.5 P (10a.)	2062
DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. APRECIACIÓN DE SU VALIDEZ CONSTITUCIONAL CUANDO LA AUTORIDAD TIENE CONOCIMIENTO, POR MEDIO DE UNA DENUNCIA INFORMAL, QUE SE ESTÁ COMETIENDO O SE ACABA DE COMETER UN DELITO.	1a. XXV/2016 (10a.)	671
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES. EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO SE RIGE POR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA PREVIA.	1a. XXIX/2016 (10a.)	672

	Número de identificación	Pág.
DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO INDEBIDO. ES IMPROCEDENTE LA SOLICITUD RELATIVA SUSTENTADA EN QUE LA LEY QUE ESTABLECE LA CONTRIBUCIÓN NO ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA POR UN VICIO EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, SI NO SE RECLAMÓ OPORTUNAMENTE EN EL AMPARO INDIRECTO CON MOTIVO DEL ENTERO CORRESPONDIENTE.	XVI.1o.A.74 A (10a.)	2064
DICTÁMENES PERICIALES. LA NO RATIFICACIÓN DEL RENDIDO POR EL PERITO OFICIAL CONSTITUYE UN VICIO FORMAL SUBSANABLE, POR LO QUE EN NINGÚN CASO DEBE DAR LUGAR A CONSIDERAR QUE CONSTITUYE PRUEBA ILÍCITA QUE DEBA SER EXCLUIDA DEL ANÁLISIS PROBATORIO CORRESPONDIENTE.	1a. XXXIV/2016 (10a.)	673
DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. LA FALTA DE LLAMAMIENTO A UNA PERSONA CUANDO HAN CONCLUIDO CON EL RECONOCIMIENTO DEL SUCESOR DE DERECHOS AGRARIOS SIN QUE SE HAYA DEJADO LISTA DE SUCESORES, NO TRANSGREDE SUS DERECHOS HUMANOS.	IX.2o.8 A (10a.)	2064
DIVORCIO. ES IMPROCEDENTE EL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD EN LA APELACIÓN, CON BASE EN EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, SI EN PRIMERA INSTANCIA SE DECLARÓ LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).	IV.2o.C.7 C (10a.)	2065
EMANACIONES RADIATIVAS. PARA QUE EL MONTO DE DICHO CONCEPTO INTEGRO EL SALARIO PARA EL PAGO DE LA JUBILACIÓN O PENSIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL, DEBEN DEMOSTRAR QUE LO PERCIBIERON Y APORTARON		

	Número de identificación	Pág.
AL FONDO RESPECTIVO DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.	III.3o.T.33 L (10a.)	2067
EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE DEJAR CÉDULA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 751 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES INSUFICIENTE LA MENCIÓN "ANOTO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN" EN EL ACTA CORRESPONDIENTE.	III.3o.T.34 L (10a.)	2068
FACULTAD DE ATRACCIÓN. ES PROCEDENTE SU EJERCICIO SI EL RECURSO DE QUEJA PLANTEADO ACTUALIZA LA NECESIDAD DE DEFINIR EL ALCANCE DE UNA DISPOSICIÓN DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EN LA QUE SE INCORPORA UNA LIMITACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES QUE NO EXISTÍA EN LA LEY DE AMPARO ABROGADA.	1a. XXVII/2016 (10a.)	674
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. EL ARTÍCULO 243, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, QUE PREVE UNA AGRAVANTE PARA AQUEL DELITO, NO CONTIENE UNA PENA INUSITADA NI TRASCENDENTAL.	1a. XLIV/2016 (10a.)	675
FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.	XXIV.2o. J/1 (10a.)	1982
FONDO DE HABITACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES ELECTRICISTAS. LA COMI-		

	Número de identificación	Pág.
SIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTÁ EXENTA DE PAGAR LAS APORTACIONES PATRIMONIALES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, SALVO QUE SE ACREDITE QUE LA PRESTACIÓN DERIVADA DE AQUÉL ES INFERIOR AL 5%.	PC.I.L. J/15 L (10a.)	1235
HOGAR CONYUGAL. EL INMUEBLE EN QUE SE ENCUENTRE ESTABLECIDO Y QUE NO CONSTITUYA EL PATRIMONIO DE FAMILIA AL IGUAL QUE SU MENAJE SON INEMBARGABLES, SIEMPRE Y CUANDO SU VALOR SEGÚN AVALÚO CATASTRAL NO EXCEDA EL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 290 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SIN NECESIDAD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO.	VIII.2o.C.T.4 C (10a.)	2071
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. CARACTERÍSTICAS DEL ESCRUTINIO A QUE DEBEN SUJETARSE EN EL AMPARO LOS AJUSTES RAZONABLES, COMO GARANTÍA SECUNDARIA DE LOS DERECHOS RELATIVOS, CUANDO SEAN REFERENTES DE UNA DE LAS DENOMINADAS CATEGORÍAS SOSPECHOSAS.	IV.2o.A.5 CS (10a.)	2073
IMPEDIMENTO PARA CONOCER DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES DENTRO DE UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA SI EXISTE PARENTESCO POR AFINIDAD EN SEGUNDO GRADO ENTRE EL ACTUARIO JUDICIAL CUYA ACTUACIÓN SE CUESTIONA Y EL JUZGADOR QUE DEBE PARTICIPAR EN LA RESOLUCIÓN DE DICHO INCIDENTE.	PC.I.L. J/16 L (10a.)	1271
IMPEDIMENTO PARA CONOCER DE UNA CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGADOS DE CIRCUITO. NO DEBE DECLARARSE SIN MATERIA AUNQUE MEDIE DESISTIMIENTO DEL DENUNCIANTE.	PC.III.L. 2 K (10a.)	1918

	Número de identificación	Pág.
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA OBLIGACIÓN A CARGO DE LAS PERSONAS MORALES DE RETENER EL TRIBUTO QUE SE LES TRASLADA POR LA ADQUISICIÓN DE DESPERDICIOS PARA SER UTILIZADOS COMO INSUMO DE SU ACTIVIDAD INDUSTRIAL O PARA SU COMERCIALIZACIÓN, ES EXIGIBLE TRATÁNDOSE DE METALES PUESTOS EN CONDICIONES DE REUTILIZACIÓN.	I.1o.A.123 A (10a.)	2074
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE PREVÉ LA EXENCIÓN DE SU PAGO A LAS EROGACIONES QUE EFECTÚEN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.	PC.IV.A. J/21 A (10a.)	1320
IMPUESTOS A LA CONSTRUCCIÓN. LOS ARTÍCULOS 300 A 302 DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE EN 2011, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.	1a. XL/2016 (10a.)	676
IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY RELATIVA NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.	1a. XXVIII/2016 (10a.)	677
INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMAS. ES INTRASCENDENTE Y NO AMERITA CONCEDER EL AMPARO SOLICITADO, EL HECHO DE QUE LA JUNTA LABORAL LO ADMITA Y SUSTANCIE CON UNA DENOMINACIÓN DIVERSA, SI FINALMENTE RESUELVE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES.	III.1o.T.27 L (10a.)	2075
INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMAS. PUEDE PLANTEARSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO LABORAL, INCLUSO ANTES DE LA CONCILIATORIA.	III.1o.T.26 L (10a.)	2076

	Número de identificación	Pág.
INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. PROCEDE EN CUALQUIER ESTADO DEL PROCESO, INCLUSO, DESPUÉS DEL CIERRE DE INSTRUCCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 546 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL).	I.3o.P.46 P (10a.)	2076
INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SU PROMOCIÓN INTERRUMPE EL PLAZO DE 3 AÑOS PREVISTO POR EL ARTÍCULO 1079, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PARA EJECUTAR LA SENTENCIA QUE HA CAUSADO ESTADO, DICTADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.	PC.XX. J/5 C (10a.)	1347
INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES. NO ES EXIGIBLE QUE SE HAGA VALER CONTRA LA PRACTICADA A QUIEN DEJÓ DE SER APODERADO DE LA PARTE QUE SE PRETENDIÓ NOTIFICAR Y EN LUGAR DISTINTO DEL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIRLAS, POR TANTO, NO ES APTA PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO.	XVI.1o.T.22 L (10a.)	2077
INCOMPETENCIA, EXCEPCIÓN DE. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACUERDO DEL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESERVA SU RESOLUCIÓN PARA EMITIRLA DE FORMA CONJUNTA CON LA SENTENCIA.	XXI.1o.P.A.33 A (10a.)	2077
INFONAVIT. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.	I.1o.A.29 K (10a.)	2079
INFONAVIT. LA REGLA DÉCIMA PRIMERA DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DEL CITADO INSTITUTO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA TUTELADO POR EL		

	Número de identificación	Pág.
ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.	I.1o.A.7 CS (10a.)	2079
INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS QUE EL PATRÓN DEBE CONSERVAR Y EXHIBIR EN JUICIO. LA PARTE QUE LA OFREZCA DEBE PARTICULARIZAR LO QUE SE HA DE CONSTATAR CON ESA PRUEBA.	XVI.1o.T.28 L (10a.)	2080
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS. ESCRUTINIO DE LAS RELACIONES QUE ENTABLAN CON SUS USUARIOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE CONTROL CONSTITUCIONAL Y DE DERECHOS HUMANOS.	IV.2o.A.7 CS (10a.)	2080
INTERÉS DEL 2% MENSUAL. LA BASE DE SU CÁLCULO HA DE OBTENERSE CONSIDERANDO EL SALARIO INTEGRADO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012).	XXVII.3o.25 L (10a.)	2082
INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO. EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SE REFIERE A AMBOS, COMO CONDICIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD.	XXVII.3o.22 A (10a.)	2082
INTERÉS LEGÍTIMO EN AMPARO CONTRA LEYES PENALES. SE ACTUALIZA ANTE NORMAS CUYA MERA EXISTENCIA GENERA UN EFECTO DISUASIVO EN EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.	1a. XXXI/2016 (10a.)	678
INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NORMAS CUYA SOLA EXISTENCIA GENERA UNA AFECTACIÓN AUTOAPLICATIVA QUE LO ACTUALIZA.	1a. XXXII/2016 (10a.)	679

	Número de identificación	Pág.
INTERÉS PREVISTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. AL TENER LA MISMA NATURALEZA DE LOS SALARIOS CAÍDOS, PARA SU CONDENA NO SE REQUIERE RECLAMARLO EXPRESAMENTE EN LA DEMANDA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012).	XXVII.3o.24 L (10a.)	2083
INTERÉS PREVISTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. FORMA DE CUMPLIR SU CONDENA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012).	XXVII.3o.31 L (10a.)	2084
INTERÉS PREVISTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. HIPÓTESIS EN LAS QUE PROCEDE SU CONDENA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012).	XXVII.3o.26 L (10a.)	2086
JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE MORELOS DESIGNADOS TEMPORAL E INTERINAMENTE. PARÁMETROS PARA SU REMOCIÓN, CONFORME AL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL.	XVIII.5o.1 CS (10a.)	2087
JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE MORELOS DESIGNADOS TEMPORAL E INTERINAMENTE. TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ESTATAL QUE DA POR CONCLUIDO SU ENCARGO PARA NOMBRAR OTRO JUZGADOR CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS.	XVIII.5o.4 K (10a.)	2088
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE CONTRA LAS MULTAS IMPUESTAS COMO		

	Número de identificación	Pág.
MEDIDA DE APREMIO POR LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE.	I.16o.A.16 A (10a.)	2089
JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA POR EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA CUANDO EL QUEJOSO SOSTENGA HABER TENIDO CONOCIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, EN UNA FECHA POSTERIOR A LA QUE OSTENTA EL RECIBO DE PAGO RESPECTIVO.	PC.XXII. 1 A (10a.)	1919
JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN LA QUE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.	PC.XXVII. J/5 A (10a.)	1425
JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES.	PC.XXVII. J/4 A (10a.)	1426
JUICIO ORAL MERCANTIL. ES PROCEDENTE CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN PERSONAL DE COBRO DERIVADA DE UN CONTRATO DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA, CUANDO SEA DE CUANTÍA DETERMINADA E INFERIOR AL MONTO FIJADO EN EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.	PC.XXII. J/7 C (10a.)	1462
JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLE-		

	Número de identificación	Pág.
GIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA.	2a./J. 10/2016 (10a.)	705
JURISPRUDENCIA ESTABLECIDA POR UN PLENO DE CIRCUITO. ES OBLIGATORIA TANTO PARA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUE SE UBICUEN DENTRO DE ESE CIRCUITO COMO PARA LOS AUXILIARES QUE LOS APOYEN EN EL DICTADO DE SUS RESOLUCIONES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA REGIÓN A LA QUE ÉSTOS PERTENEZCAN.	REPUBLICADA POR CORRECCIÓN EN LA CITA DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN Y DE LA MATERIA (IV Región)2o.8 K (10a.)	2089
LAUDOS DICTADOS POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO. PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO PUEDE IMPONER DIVERSAS SANCIONES, ENTRE ELLAS, LA SUSPENSIÓN DE LA AUTORIDAD EN EL CARGO POR UN PLAZO DE 15 DÍAS SIN GOCE DE SUELDO.	III.3o.T.36 L (10a.)	2091
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LOS PERIODISTAS CUENTAN CON INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO, SIN ACTO DE APLICACIÓN PREVIO, EL ARTÍCULO 398 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, POR SU POTENCIAL DE AFECTACIÓN EN LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA.	1a. XXXIII/2016 (10a.)	680
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. TIPOS DE AFECTACIÓN RESENTIBLE A CAUSA DE NORMAS PENALES.	1a. XXX/2016 (10a.)	682
LINEAMIENTOS SOBRE <i>MUST CARRY</i> Y <i>MUST OFFER</i> EMITIDOS POR EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL		

	Número de identificación	Pág.
DE TELECOMUNICACIONES. EL CONCEPTO "MISMA ZONA DE COBERTURA GEOGRÁFICA", PREVISTO EN SU ARTÍCULO 3, RESPETA LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN QUE RIGEN EL SERVICIO DE CADA TELEVISORA.	I.1o.A.E.128 A (10a.)	2092
LINEAMIENTOS SOBRE <i>MUST CARRY</i> Y <i>MUST OFFER</i> EMITIDOS POR EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. LOS CONCESIONARIOS DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA TERRENAL CARECEN DE INTERÉS PARA RECLAMAR EN AMPARO LA RESTRICCIÓN QUE, ADUCEN, AQUÉLLOS IMPONEN A LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE AUTOR, CONSISTENTE EN ENTREGAR GRATUITAMENTE EL CONTENIDO QUE LES PERTENECE.	I.1o.A.E.127 A (10a.)	2093
MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. SE ACTUALIZA SU RATIFICACIÓN TÁCTICA SI AL CONCLUIR EL PERIODO CONSTITUCIONAL DE DURACIÓN DE SU CARGO NO SE HA EMITIDO EL DICTAMEN EN EL QUE SE DETERMINE SI DEBEN SER REELECTOS.	XX.2o.4 A (10a.)	2095
MARCA. SU REGISTRO AMPARA ÚNICAMENTE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DE FORMA EXPRESA Y ESPECÍFICA REFIERE SU TÍTULO.	I.1o.A.120 A (10a.)	2096
MERCADO RELEVANTE. CARACTERÍSTICAS Y UTILIDAD DE LA PRUEBA DE ELASTICIDAD CRUZADA DE LA DEMANDA Y DE LA OFERTA PARA DETERMINARLO.	I.1o.A.E.121 A (10a.)	2097
MERCADO RELEVANTE. SU DETERMINACIÓN A PARTIR DE LA PRUEBA DE INTERCAMBIABILIDAD RAZONABLE, CON BASE EN EL EXAMEN DE ELASTICIDAD DE LA DEMANDA Y DE LA OFERTA (LEGISLACIÓN ABROGADA).	I.1o.A.E.120 A (10a.)	2098

	Número de identificación	Pág.
MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU MONTO POR IMPEDIR EL INICIO O DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, AL NO PRESENTAR DE INMEDIATO LOS LIBROS Y REGISTROS QUE FORMEN PARTE DE LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE, ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, POR REMISIÓN EXPRESA DEL LEGISLADOR.	IV.2o.A.114 A (10a.)	2099
NOTARIOS PÚBLICOS. SU FALLECIMIENTO TRAE COMO CONSECUENCIA NECESARIA, INMEDIATA Y DIRECTA LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL CON LOS TRABAJADORES QUE UTILIZABAN PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA NOTARIAL, SIN QUE PUEDA CONSIDERARSE QUE DEBA CONTINUAR CON LA SUCESIÓN DEL <i>DE CUJUS</i> , O CON EL NOTARIO QUE SE DESIGNA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).	(IV Región)2o.12 L (10a.)	2101
OFRECIMIENTO DE TRABAJO. EL HECHO DE QUE SE REALICE CON UNA DIFERENCIA SALARIAL MÍNIMA DE ALGUNOS CENTAVOS DIARIOS, NO ES MOTIVO PARA CALIFICARLO DE MALA FE, AL NO MODIFICARSE LAS CONDICIONES FUNDAMENTALES DE TRABAJO, NI DEPRECIARSE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL TRABAJADOR.	PC.III.L. J/12 L (10a.)	1507
OFRECIMIENTO DE TRABAJO. EL REALIZADO EN OTRO JUICIO LABORAL EN EL QUE SE RECLAMÓ EL DESPIDO INJUSTIFICADO, POR SÍ SOLO, ES INSUFICIENTE PARA ESTIMAR QUE EL TRABAJADOR GENERÓ DERECHOS PARA EL PAGO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO, YA QUE SON NECESARIAS LA ACEPTACIÓN DE ESA OFERTA Y LA MATERIALIZACIÓN DE LA REINSTALACIÓN.	IV.4o.T.3 L (10a.)	2103

	Número de identificación	Pág.
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL. LA INCOMPATIBILIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN IV, DE LA LEY RELATIVA IMPLICA RESPONSABILIDAD SÓLO PARA EL REPRESENTANTE CIUDADANO Y NO PARA EL SERVIDOR PÚBLICO.	I.1o.A.118 A (10a.)	2105
PATENTE. LA DESTRUCCIÓN RETROACTIVA DE SUS EFECTOS, EN RAZÓN DE SU ANULACIÓN, SE LIMITA RESPECTO DEL DERECHO DE EXCLUSIÓN QUE OTORGA Y, POR TANTO, NO ELIMINA LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE SU EXPLOTACIÓN COMERCIAL MIENTRAS ESTUVO VIGENTE.	I.1o.A.121 A (10a.)	2105
PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. SI SU MONTO SE CALCULA CON BASE EN EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO, ES IMPROCEDENTE INCLUIR EL CONCEPTO DE AYUDAS ASISTENCIALES, AL ENCONTRARSE COMPRENDIDO EN AQUÉL (ARTÍCULO 168 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997).	IV.4o.T.1 L (10a.)	2106
PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. AL RESOLVER LA JUNTA SOBRE EL AJUSTE EN LA CUANTIFICACIÓN DE SU PAGO, DEBE ATENDER EL LÍMITE SUPERIOR PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, SIN QUE REPRESENTA OBSTÁCULO ALGUNO QUE EL DEMANDADO NO SE HUBIERE EXCEPCIONADO EN ESE SENTIDO.	2a./J. 8/2016 (10a.)	913
PENSIÓN POR VIUDEZ. PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A AQUÉLLA CON FUNDAMENTO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 97/2012 (10a.) (*).	2a./J. 3/2016 (10a.)	947

	Número de identificación	Pág.
PENSIONES DEL ISSSTE. EL INCREMENTO DE LAS QUE FUERON OTORGADAS AL AMPARO DE LA LEY DE 1959 DEBE ATENDER, PRIMERAMENTE, A LA MECÁNICA DE AUMENTO SEXENAL Y, A PARTIR DE LA REFORMA A SU ARTÍCULO 136, A LA VARIACIÓN DE LOS SUELDOS DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO.	I.1o.A.125 A (10a.)	2108
PERSONAS CON DIVERSIDADES FUNCIONALES. CONSIDERAR QUE DEBEN AGOTAR LAS POSIBILIDADES DE ADECUARSE A SU ENTORNO PARA EJERCER PLENAMENTE SUS DERECHOS HUMANOS EN CONDICIONES DE IGUALDAD, ANTES DE PRETENDER LA REALIZACIÓN DE AJUSTES RAZONABLES, ACENTÚA LA DISCRIMINACIÓN DE QUE SON OBJETO Y NO CORRESPONDE AL MODELO DE ENTENDIMIENTO SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD ACTUALMENTE ADOPTADO.	IV.2o.A.6 CS (10a.)	2109
PODER SUSTANCIAL EN EL MERCADO DE LOS DISTINTOS SERVICIOS DESAGREGADOS DE INTERCONEXIÓN. EL PRINCIPIO DE LIBERTAD TARIFARIA NO EXIME AUTOMÁTICAMENTE A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA IMPUTACIÓN DE CONTAR CON AQUÉL.	I.1o.A.E.125 A (10a.)	2110
PODER SUSTANCIAL EN UN MERCADO RELEVANTE. VARIABLES QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA DETERMINARLO.	I.1o.A.E.123 A (10a.)	2110
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA. LAS CAUSAS QUE LA INTERRUMPEN OPERAN TANTO PARA EL AVALISTA COMO PARA EL AVALADO.	XXIV.2o.1 C (10a.)	2111
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. TRATÁNDOSE DE DELITOS QUE SE PERSIGUEN POR QUERELLA DE LA VÍCTIMA O DEL OFENDIDO, SÓLO SE		

	Número de identificación	Pág.
INTERRUMPE POR LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).	PC.XXVII. J/1 P (10a.)	1555
PRIMA VACACIONAL. ES UNA PRESTACIÓN LEGAL Y CORRESPONDE AL PATRÓN DEMOSTRAR SU MONTO Y PAGO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD RECLAMADA.	XXVII.3o.27 L (10a.)	2112
PRINCIPIO DE IDENTIDAD. EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN EL FUERO MILITAR, POR LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, AQUÉL IMPERA ENTRE EL JUEZ QUE DESAHOGÓ LA AUDIENCIA DE DERECHO Y EL QUE RESOLVERÁ EN DEFINITIVA.	I.5o.P44 P (10a.)	2113
PRINCIPIO <i>NON REFORMATIO IN PEIUS</i> . NO ENCUESTRA APLICACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA CONCESIÓN DE AMPARO AL QUEJOSO, ANTE DISPOSICIÓN EXPRESA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 93, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO.	XVII.1o.C.T.37 K (10a.)	2114
PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN FORMA DE LAUDO Y ACTA DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN. SU AUSENCIA SIMULTÁNEA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL ORDINARIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PROCEDIMIENTO, AL NO HABER PARÁMETRO PARA ADVERTIR LA EXISTENCIA DE MODIFICACIONES Y ADICIONES DERIVADAS DE LA DISCUSIÓN, QUE DEBEN SER ATENDIDAS PARA LA VALIDEZ DEL LAUDO.	III.3o.T.35 L (10a.)	2115
PRUEBA PERICIAL EN EL INCIDENTE INNOMINADO TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. EN SU DESAHOGO SON		

	Número de identificación	Pág.
INAPLICABLES LAS REGLAS DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.	III.1o.A.7 K (10a.)	2116
PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. PARA SU ADMISIÓN ES INNECESARIO QUE EL OFERENTE SEÑALE EL NOMBRE DEL PERITO Y SU IDENTIDAD.	XXVII.3o.28 L (10a.)	2117
PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. SI NO SE IMPUGNÓ SU ADMISIÓN Y NO SE COMBATIÓ POR VICIOS PROPIOS, EL AUTO QUE ORDENA SU DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO.	XXVII.3o.29 L (10a.)	2118
PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL. ES VÁLIDO SU DESAHOGO A TRAVÉS DEL USO DE AVANCES TECNOLÓGICOS (VIDEOCONFERENCIA).	III.1o.T.28 L (10a.)	2119
PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE OFRECERLAS, CONFORME A LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA.	XXI.2o.P.A.12 K (10a.)	2119
RECONVENCIÓN. SU PROCEDENCIA EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).	I.9o.C.30 C (10a.)	2121
RECURSO DE APELACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DESECHA, ES INNECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 680 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, PREVIAMENTE A PROMOVER EL AMPARO DIRECTO.	1a. XXXVII/2016 (10a.)	683
RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA PENAL. AUN CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA HAYA SUS-		

	Número de identificación	Pág.
TENTADO SU DECISIÓN HACIENDO SUYOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, DEBIDO A QUE NO ENCONTRÓ MOTIVO PARA SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, CON BASE EN LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 40/97, ESA CIRCUNSTANCIA NO LO AUTORIZA A INCUMPLIR CON SU DEBER DE FUNDARLA Y MOTIVARLA (ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRIBUNALES DE ALZADA DE COMPLETITUD DE SUS DECISIONES, SUPLENIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS).	II.1o.32 P (10a.)	2122
RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA PENAL. PARA QUE LA AUTORIDAD DE ALZADA CUMPLA SU DEBER DE FUNDARLO Y MOTIVARLO Y OTORQUE AL RECURRENTE LA OPORTUNIDAD DE IMPUGNAR LAS CONSIDERACIONES EN LAS QUE AQUÉL SE FUNDA, DEBE PLASMAR EN SU SENTENCIA LAS RAZONES Y EL SENTIDO DE SU FALLO.	II.1o.31 P (10a.)	2124
RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO.	2a./J. 14/2016 (10a.)	717
RECURSO DE QUEJA. CONTRA EL AUTO EMITIDO POR EL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DISTRITAL QUE LO DESECHA PROCEDE EL DE RECONSIDERACIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA).	VIII.2o.C.T.3 C (10a.)	2124
RECURSO DE QUEJA CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. QUEDA SIN MATERIA SI SE DICTA SENTENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO DE ORIGEN.	XV.5o.7 K (10a.)	2126

	Número de identificación	Pág.
RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA O CONCEDE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA INTERPONERLO ES DE 5 DÍAS HÁBILES, AL NO TRATARSE DE ALGÚN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO.	PC.III.L. J/13 L (10a.)	1612
RECURSO DE QUEJA. CUANDO SE CONTROVIERTA ALGUNO DE LOS ASPECTOS QUE EL JUZGADOR DEBE RESOLVER EN FORMA INTEGRAL AL CONCEDER LA MEDIDA SUSPENSIVA PROVISIONAL, DEBE INTERPONERSE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO.	XXVII.3o.96 K (10a.)	2127
RECURSO DE QUEJA. CUANDO SE INTERPONE POR UNA PERSONA FÍSICA POR PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN DE UNA MORAL Y SÓLO SE EXPRESAN ARGUMENTOS TENDENTES A CONTROVERTIR EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS POR LA PRIMERA, EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTO POR LA SEGUNDA ES IMPROCEDENTE.	XXI.3o.C.T.1 K (10a.)	2128
RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, SI ÉSTE SE ACORDÓ EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y ENSEGUIDA SE DICTÓ SENTENCIA.	III.2o.P.13 K (10a.)	2129
RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. DEBE DECLARASE SIN MATERIA CUANDO EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO DEL QUE DERIVA AQUÉL SE REMITE POR INCOMPETENCIA A UN JUZGADO DE DISTRITO O TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO,		

	Número de identificación	Pág.
SEGÚN CORRESPONDA, PARA QUE SE SUSTANCIE COMO AMPARO BIINSTANCIAL, Y EL JUZGADOR DECLARADO COMPETENTE INICIA EL TRÁMITE DEL ASUNTO.	VII.1o.C.12 K (10a.)	2129
RECURSO DE QUEJA. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO AUXILIAR EN LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, POR LA QUE NIEGA PROVEER DE CONFORMIDAD LA SOLICITUD DEL TERCERO INTERESADO, DE DECRETAR QUE HA DEJADO DE SURTIR EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.	I.2o.C.7 K (10a.)	2130
RECURSO DE RECLAMACIÓN. CONSTITUYE EL MEDIO IDÓNEO PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO PARA IMPUGNAR LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE UN ARTÍCULO DE ESE ORDENAMIENTO APLICADO DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO EN LA VÍA DIRECTA.	1a. XLVI/2016 (10a.)	684
RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, EMITIDAS EN CUMPLIMIENTO A UN MANDATO DEL PLENO DE ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL.	PC.III.A. J/14 A (10a.)	1642
RECURSO DE RECLAMACIÓN. SI AL INTERPONERLO CONTRA UN ACUERDO DICTADO DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO NO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO DE LA LEY DE AMPARO APLICADO EN DICHO PROVEÍDO, PRECLUYE EL DERECHO DEL RECURRENTE PARA HACERLO.	1a. XLVII/2016 (10a.)	685
RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU INTERPOSICIÓN RESULTA OPORTUNA		

	Número de identificación	Pág.
AUN CUANDO OCURRA ANTES DE QUE INICIE EL CÓMPUTO DEL PLAZO RESPECTIVO.	2a./J. 16/2016 (10a.)	729
RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DE- RECHOS HUMANOS.	2a./J. 12/2016 (10a.)	763
RECURSO PREVISTO EN LAS NORMAS INTERNAS DE UN ENTE PATRONAL EN FAVOR DE SUS TRABAJADORES QUE SE CONSIDEREN AGRAVIADOS EN SUS DERECHOS LABORALES. SI SE HACE VALER PARA EL EXAMEN DE ALGUNA PRETENSIÓN, LA LITIS QUE SE PLANTEE ANTE LA JUNTA DEBE CENTRARSE EN LO DECIDIDO EN AQUÉL.	XVI.1o.T.26 L (10a.)	2131
RECURSOS EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, AL SER PARTE PERMANENTE EN TODOS LOS JUICIOS, ESTÁ FACULTADO PARA INTERPONERLOS, CUANDO SE RECLAMAN RESOLUCIONES EMITIDAS TANTO POR TRIBUNALES FEDERALES COMO POR LOCALES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN IV, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE LA MATERIA).	II.2o.P.18 K (10a.)	2132
REDUCCIÓN DE SANCIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 33 BIS 3 DE LA ABROGADA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. ES NOTORIA LA IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RELATIVA, INTERPUESTA POR PERSONA DISTINTA DEL BENEFICIADO.	I.1o.A.E.112 A (10a.)	2132
REDUCCIÓN DE SANCIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓ-		

	Número de identificación	Pág.
LICAS ABSOLUTAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 33 BIS 3 DE LA ABROGADA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. RELEVANCIA DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA IDENTIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS QUE SOLICITEN ACOGERSE A ESE BENEFICIO.	I.1o.A.E.113 A (10a.)	2134
REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS EXPEDIDOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO. CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.	2a./J. 11/2016 (10a.)	803
"REGLAS QUE CONFIEREN PODERES". SU CONCEPTO DESDE LOS ENFOQUES ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL Y SU DISTINCIÓN CON LAS "NORMAS DE MANDATO".	I.1o.A.E.114 A (10a.)	2135
REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS, AUNQUE SE DICTEN EN DISTINTAS DETERMINACIONES.	PC.II.C. J/2 K (10a.)	1685
REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER ESTE BENEFICIO A LOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (SECUESTRO), EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE NO TIENE APLICACIÓN RETROACTIVA EN SU BENEFICIO LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.	PC.I.P. J/20 P (10a.)	1732

	Número de identificación	Pág.
REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER ESTE BENEFICIO TRATÁNDOSE DE SENTENCIADOS POR EL DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (SECUESTRO), DE ACUERDO A LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ACTUALMENTE ABROGADA, HASTA ANTES DE LA REFORMA A SU ARTÍCULO 50, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 4 DE JUNIO DE 2004.	PC.I.P. J/19 P (10a.)	1733
REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA EN EL FUERO MILITAR. DEBE ORDENARSE SI EL JUEZ QUE DICTÓ LA SENTENCIA DEFINITIVA NO FUE EL MISMO QUE CELEBRÓ LA AUDIENCIA DE DERECHO EN LA QUE SE DECLARÓ VISTO EL ASUNTO.	I.5o.P.45 P (10a.)	2136
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ASPECTOS QUE DEBEN CONCURRIR PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN VÍA DE AGRAVIOS SE PLANTEA EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL APLICADA POR PRIMERA VEZ, EN LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.	2a./J. 13/2016 (10a.)	821
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ESTE RECURSO PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, CUANDO EXISTA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UNA NORMA CONSTITUCIONAL EN LA QUE SE SUSTENTE EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO RELATIVO.	1a. XXXVI/2016 (10a.)	685
REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR VICIOS FORMALES, AUN CUANDO SE SUSTENTEN EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN		

	Número de identificación	Pág.
DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 150/2010 Y 2a./J. 88/2011).	XVI.1o.A. J/24 (10a.)	1993
REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, POR AUSENCIA O DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, AL OMITIR PRECISAR EL PERIODO O PERIODOS SUJETOS A REVISIÓN (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 150/2010 Y 2a./J. 88/2011).	XVI.1o.A. J/25 (10a.)	2003
ROBO CALIFICADO. LA AGRAVANTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 224, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE ACTUALIZA AUNQUE EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO NO ESTÉ PRESTANDO EL SERVICIO A QUE ESTÁ DESTINADO.	PC.I.P. J/18 P (10a.)	1764
SALARIO BRUTO. LAS CONDENAS EN LOS LAUDOS DEBEN EFECTUARSE CON BASE EN AQUÉL.	XVI.1o.T.23 L (10a.)	2139
SALARIOS CAÍDOS. FORMA DE COMPUTARLOS CONFORME AL PLAZO FIJADO PARA EL PAGO DEL SUELDO.	I.13o.T.139 L (10a.)	2163
SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)].	2a. II/2016 (10a.)	951

	Número de identificación	Pág.
SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD.	2a./J. 9/2016 (10a.)	832
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN. LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA REQUERIR AL CONTRIBUYENTE QUE EXHIBA DOCUMENTOS O APOORTE INFORMACIÓN ADICIONAL A LA ORIGINALMENTE PRESENTADA, DEBE EJERCERSE BAJO UN CRITERIO DE NECESIDAD Y UN ESTÁNDAR DE RACIONALIDAD.	I.1o.A.119 A (10a.)	2184
SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. SUPUESTO EN EL QUE NO EXISTE VIOLACIÓN A DICHA MEDIDA CAUTELAR, NI EXCESO O DEFECTO EN SU CUMPLIMIENTO, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS QUE INVOLUCRAN A MENORES DE EDAD.	I.5o.P.9 K (10a.)	2185
SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REDUCE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. SI PROCEDE OTORGARLA CON GARANTÍA, ÉSTA DEBE FIJARSE DISCRECIONALMENTE SI NO EXISTEN DATOS QUE PERMITAN ESTABLECER SU MONTO, SIN PERJUICIO DE CONSIDERAR EL TIEMPO PROBABLE DE RESOLUCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL Y LA CANTIDAD QUE SE OBTENGA DE RESTAR AL MONTO DE LA PROVISIONAL CON LA CANTIDAD QUE FIJÓ AL RESOLVER LA RECLAMACIÓN Y EL RESULTADO DEBERÁ MULTIPLICARSE POR EL LAPSO EN QUE DURE.	VII.1o.C.26 C (10a.)	2186
SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA TRAMITAR LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PROCEDER EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 154 DE LA LEY DE AMPARO.	I.13o.T.19 K (10a.)	2187
SUSPENSIÓN DEFINITIVA. SI LA QUEJA PROMOVIDA CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ DE DISTRITO		

	Número de identificación	Pág.
DE SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN RELATIVO SE DECLARA FUNDADA, DEBE REMITÍRSELE EL EXPEDIENTE PARA QUE REASUMA SU JURISDICCIÓN.	I.13o.T.20 K (10a.)	2188
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PRESTEN ASISTENCIA HUMANA PERMANENTE PARA DESPLAZARSE A QUIEN ENFRENTA UNA DISCAPACIDAD FÍSICA, SI SE ADVIERTE QUE PUEDE HACERLO CON CIERTA INDEPENDENCIA.	IV.2o.A.86 K (10a.)	2188
SUSPENSIÓN EN EL CARGO DE UNA AUTORIDAD (MUNÍCIPE DE UN AYUNTAMIENTO) POR INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO. CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO INICIAR EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.	III.3o.T.37 L (10a.)	2189
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EXCEPCIONALMENTE, EN TUTELA DEL INTERÉS SOCIAL, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA INTERLOCUTORIA QUE CONCEDE AL ACTOR EN EL JUICIO DE NULIDAD LA MEDIDA CAUTELAR PARA QUE CONTINÚE EN OPERACIÓN CON LA ACTIVIDAD DE GASOLINERA.	PC.III.A. J/13 A (10a.)	1783
SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA PENAL. SI EL QUEJOSO ES LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, ES IMPROCEDENTE FIJARLE, DISCRECIONALMENTE, LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 125, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA, PARA QUE AQUÉLLA CONTINÚE SURTIENDO EFECTOS.	I.3o.P.45 P (10a.)	2190

	Número de identificación	Pág.
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO, POR UNA PARTE LA NIEGUE Y, POR OTRA, LA CONCEDA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PUEDE ANALIZAR, DE OFICIO, EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA SÓLO CONTRA LA NEGATIVA, SI EL OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA AFECTA EL INTERÉS SOCIAL O CONTRAVIENE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.	III.2o.A.7 K (10a.)	2222
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA EJECUCIÓN DE LA CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL NOMBRAMIENTO DE UN CONSEJERO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE GUERRERO Y SU SUSTITUCIÓN EN ESE CARGO.	XXI.1o.PA.32 A (10a.)	2223
TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, CONTENIDAS EN LOS DECRETOS NÚMEROS 24646/LX/13 Y 23711/LIX/11. LOS PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL ELEMENTO RELATIVO A LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRAN EN LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DE ESE ESTADO Y EL HECHO DE QUE LA DEFINICIÓN DE AQUÉLLOS ESTÉ EN EL REGLAMENTO DE ÉSTA, SÓLO IMPLICA QUE LOS DESARROLLA A DETALLE, POR LO QUE NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.	PC.III.A. J/12 A (10a.)	1843
TELECOMUNICACIONES. LA EMISIÓN DE UNA DECLARATORIA DE PODER SUSTANCIAL EN EL MERCADO CONTRA UN AGENTE ECONÓMICO NO IMPLICA, NECESARIAMENTE, LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE PREVÉN LA FACULTAD DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE LA EXTINTA COMISIÓN FEDERAL RELATIVA PARA IMPONER OBLIGACIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON TARIFAS, CALIDAD DEL SERVICIO E INFORMACIÓN A LOS		

	Número de identificación	Pág.
CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE LA MATERIA.	I.1o.A.E.116 A (10a.)	2225
TELECOMUNICACIONES. LAS DISPOSICIONES QUE PREVÉN LA FACULTAD DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE LA EXTINTA COMISIÓN FEDERAL RELATIVA PARA IMPONER OBLIGACIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON TARIFAS, CALIDAD DEL SERVICIO E INFORMACIÓN A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE LA MATERIA QUE TENGAN PODER SUSTANCIAL EN ALGÚN MERCADO RELEVANTE, CORRESPONDEN A UNA "REGLA QUE CONFIERE PODERES".	I.1o.A.E.115 A (10a.)	2226
TELECOMUNICACIONES. LOS COSTOS HUNDIDOS CONSTITUYEN UNA BARRERA A LA ENTRADA DE NUEVOS OPERADORES EN EL MERCADO DE LAS REDES PÚBLICAS DE LA MATERIA.	I.1o.A.E.124 A (10a.)	2227
TELECOMUNICACIONES. PARA ANALIZAR LA COMPETENCIA ECONÓMICA EN ESE SECTOR, LOS SERVICIOS DESAGREGADOS DE INTERCONEXIÓN (ENTRE ELLOS, LA ORIGINACIÓN DE TRÁFICO PÚBLICO CONMUTADO) PUEDEN CONSIDERARSE MERCADOS ESPECÍFICOS DE INSUMOS.	I.1o.A.E.119 A (10a.)	2228
TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. NO ES UN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, SINO UN JUICIO AUTÓNOMO.	XXVII.3o.97 K (10a.)	2229
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO. PRIMA DE ANTIGÜEDAD. RECLAMACIÓN IMPROCEDENTE.	III.1o.T. J/1 (10a.)	2011
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. JUSTIFICACIÓN EN LA DIFERENCIA DE TRATO ENTRE		

	Número de identificación	Pág.
LOS DE CONFIANZA PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LOS DE BASE.	2a./J. 21/2016 (10a.)	833
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ALCANCE DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD Y PERMANENCIA EN EL CARGO DENTRO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.	2a./J. 20/2016 (10a.)	834
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CON INDEPENDENCIA DE QUE PERTENEZCAN AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O HAYAN SIDO CONTRATADOS BAJO EL ESQUEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, NO TIENEN DERECHO A LA REINSTALACIÓN, AL EXISTIR UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL AL RESPECTO.	2a./J. 22/2016 (10a.)	836
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. DIFERENCIA ENTRE LOS PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LOS DE LIBRE DESIGNACIÓN.	2a./J. 18/2016 (10a.)	837
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. JUSTIFICACIÓN EN LA DIFERENCIA DE TRATO ENTRE LOS PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LOS DE LIBRE DESIGNACIÓN.	2a./J. 19/2016 (10a.)	839
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. NATURALEZA JURÍDICA Y SUSTENTO CONSTITUCIONAL DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN QUE CONFORMAN LOS PERTENECIENTES AL SER-		

	Número de identificación	Pág.
VICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.	2a./J. 17/2016 (10a.)	840
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY RELATIVA, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y 20 DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS.	2a./J. 23/2016 (10a.)	842
TRABAJADORES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA. TRATÁNDOSE DE APORTACIONES DE VIVIENDA, LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE PUEBLA Y LA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DE DICHA ENTIDAD, PREVEN LA FORMA Y EL ORGANISMO ANTE EL QUE DEBERÁN REALIZARSE, POR LO QUE SON INAPLICABLES, SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.	VI.2o.T.9 L (10a.)	2230
TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, AL EXIGIR LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE TRABAJO [ABANDONO DE LA TESIS IV.2o.A.80 A (10a.)].	IV.2o.A.4 CS (10a.)	2231
TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86,		

	Número de identificación	Pág.
FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, AL EXIGIR LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL [ABANDONO DE LAS TESIS IV.2o.A.78 A (10a.) Y IV.2o.A.81 A (10a.)].	IV.2o.A.3 CS (10a.)	2233
TRIBUNALES CONSTITUCIONALES LOCALES. CARECEN DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE ASUNTOS RELACIONADOS CON VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	1a. XXXVIII/2016 (10a.)	686
TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS EN LOS QUE LA LITIS SE CENTRE EN RESOLVER EL MEJOR DERECHO A SUCEDER LOS BIENES AGRARIOS DE UN EJIDATARIO, AUN CUANDO LA ACCIÓN O RECONVENCIÓN SE BASE EN UN TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO OTORGADO POR EL <i>DE CUJUS</i> EN FAVOR DE UNA DE LAS PARTES.	III.1o.A.26 A (10a.)	2235
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO. LA CONTROVERSI A SUSCITADA POR EL NOMBRAMIENTO DE MAESTRO EMÉRITO, AL SER DE NATURALEZA ACADÉMICA, DEBE RESOLVERSE POR SUS ÓRGANOS INTERNOS Y NO POR LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.	XXI.3o.C.T.2 L (10a.)	2237
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA CLÁUSULA QUINTA TRANSITORIA DEL CONVENIO QUE CREA Y REGULA EL RÉGIMEN DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		

	Número de identificación	Pág.
DE ESA INSTITUCIÓN, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.	2a. III/2016 (10a.)	953
VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).	1a. XLIII/2016 (10a.)	687
VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).	1a. XLII/2016 (10a.)	688
VALOR AGREGADO. EL TRATAMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES INAPLICABLE A LOS INTERESES DERIVADOS DE LOS PRÉSTAMOS OTORGADOS POR INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE A SUS TRABAJADORES, ACORDE CON SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).	1a. XLI/2016 (10a.)	689
VIDA SILVESTRE. LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA APLICACIÓN DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, NO PROVOCA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI CONTRAVIENE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.	PC.XVI.A. J/12 A (10a.)	1896
VIDA SILVESTRE. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, AL TRATARSE DE UNA NORMA PROHIBITIVA CON EFECTOS POSITIVOS.	PC.XVI.A. J/11 A (10a.)	1897

Índice de Ejecutorias

Amparo en revisión 295/2014.—Ministro Ponente: José Fernando Franco González Salas. Relativo a las tesis P/J. 30/2015 (10a.), P/J. 32/2015 (10a.), P/J. 31/2015 (10a.), P/J. 35/2015 (10a.), P/J. 33/2015 (10a.), P/J. 34/2015 (10a.), P/J. 37/2015 (10a.), P/J. 36/2015 (10a.) y P. XV/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: "PERSONAL DOCENTE AL SERVICIO DEL ESTADO. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN TANTO POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU LEY REGLAMENTARIA, COMO POR EL DIVERSO 3o., FRACCIONES II Y III, CONSTITUCIONAL.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO DE AUDIENCIA.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO RECONOCIDO EN EL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE TRABAJO.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN SU ASPECTO NEGATIVO DE NO REGRESIVIDAD, EN RELACIÓN CON EL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y NOVENO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL

Instancia Pág.

RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO A LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN PERJUICIO DEL PERSONAL DOCENTE CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL A SU ENTRADA EN VIGOR.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO A LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN PERJUICIO DEL PERSONAL DOCENTE QUE TUVIERA NOMBRAMIENTO DEFINITIVO A SU ENTRADA EN VIGOR." y "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LAS LIMITACIONES QUE LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA IMPONEN AL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, TIENEN UN FIN CONSTITUCIONALMENTE LEGÍTIMO Y SON IDÓNEAS, NECESARIAS Y PROPORCIONALES.", que aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, páginas 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 14 y 244, respectivamente.

P. 5

Contradicción de tesis 45/2015.—Entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito.—Ministro Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Relativa a la tesis P/J. 40/2015 (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTARLA, CUANDO EL ACTO RECLAMADO SE EMITE EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL.", que aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 11 de diciembre de 2015 a las 11:15 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 25, Tomo I, diciembre de 2015, página 5.....

P. 146

Recurso de reclamación 753/2014.—Ministro Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Relativo a la tesis 1a./J. 4/2016 (10a.), de título y subtítulo: "CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD *EX OFFICIO*. CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO.".....

1a. 411

Contradicción de tesis 390/2014.—Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Tri-

	Instancia	Pág.
bunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito.—Ministra Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Relativa a la tesis 1a./J. 72/2015 (10a.), de título y subtítulo: "COMPETENCIA TERRITORIAL DE EXCEPCIÓN, CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 10, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. SE ACTUALIZA CUANDO EL MINISTERIO PÚBLICO EJERCE ACCIÓN PENAL POR EL DELITO DE DELINCUENCIA ORGANIZADA.", que aparece publicada en el <i>Semanario Judicial de la Federación</i> del viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas y en la <i>Gaceta del Semanario Judicial de la Federación</i> , Décima Época, Libro 24, Tomo I, noviembre de 2015, página 672.....	1a.	433
Contradicción de tesis 419/2014.—Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.—Ministro Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Relativa a la tesis 1a./J. 75/2015 (10a.), de título y subtítulo: "CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO. A LA ACCIÓN DE VENCIMIENTO ANTICIPADO Y PAGO NO ES OPONIBLE LA EXCEPCIÓN DE CONTRATO NO CUMPLIDO POR LA FALTA DE CONTRATACIÓN DE SEGUROS, A MENOS QUE SE EXPONGA Y DEMUESTRE QUE LA CAUSA DE LA ACCIÓN DERIVA DE ALGUNO DE LOS SINIESTROS.", que aparece publicada en el <i>Semanario Judicial de la Federación</i> del viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas y en la <i>Gaceta del Semanario Judicial de la Federación</i> , Décima Época, Libro 24, Tomo I, noviembre de 2015, página 675.....	1a.	472
Contradicción de tesis 319/2014.—Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, con sede en Nezahualcóyotl, Estado de México y el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.—Ministra Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Relativa a la tesis 1a./J. 73/2015 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 201, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO. ES COMPETENTE EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ESPECIALIZADO QUE PREVINO EN EL CONOCIMIENTO DEL RECURSO DE REVISIÓN; DE NO EXISTIR ESPECIALIZADO, SERÁ EL QUE CONOCIÓ DE AQUÉL Y, DE NO HABERSE INTERPUESTO EL RECURSO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO QUE SE ENCUENTRE EN TURNO.", que aparece publicada en el <i>Semanario Judicial</i>		

	Instancia	Pág.
de la Federación del viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas y en la <i>Gaceta del Semanario Judicial de la Federación</i> , Décima Época, Libro 24, Tomo I, noviembre de 2015, página 779.....	1a.	492
Contradicción de tesis 52/2015.—Entre las sustentadas por el Pleno del Décimo Octavo Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito, el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito.—Ministro Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Relativa a la tesis 1a./J. 71/2015 (10a.), de título y subtítulo: "SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN UN JUICIO SUMARIO. LOS PRECEPTOS QUE NIEGUEN AL SENTENCIADO LA POSIBILIDAD DE RECURRERLA, SON CONTRARIOS A LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL; 14, NUMERAL 5, DEL PACTO INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y POLÍTICOS Y 8, NUMERAL 2, INCISO H), DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", que aparece publicada en el <i>Semanario Judicial de la Federación</i> del viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas y en la <i>Gaceta del Semanario Judicial de la Federación</i> , Décima Época, Libro 24, Tomo I, noviembre de 2015, página 844.	1a.	542
Contradicción de tesis 76/2015.—Entre las sustentadas por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito.—Ministro Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Relativa a la tesis 1a./J. 70/2015 (10a.), de título y subtítulo: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA PENAL. OPERA EN FAVOR DE LAS PERSONAS MORALES DE CARÁCTER PRIVADO CUANDO OSTENTAN LA CALIDAD DE VÍCTIMAS U OFENDIDOS DEL DELITO.", que aparece publicada en el <i>Semanario Judicial de la Federación</i> del viernes 27 de noviembre de 2015 a las 11:15 horas y en la <i>Gaceta del Semanario Judicial de la Federación</i> , Décima Época, Libro 24, Tomo I, noviembre de 2015, página 848.	1a.	625
Recurso de reclamación 1127/2015.—Ministro Ponente: Juan N. Silva Meza. Relativo a la tesis 2a./J. 10/2016 (10a.), de título y subtítulo: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA		

	Instancia	Pág.
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA."	2a.	695
Recurso de inconformidad 1152/2015.—Ministro Ponente: Alberto Pérez Dayán. Relativo a la tesis 2a./J. 14/2016 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO."	2a.	706
Amparo directo en revisión 199/2015.—Ministro Ponente: José Fernando Franco González Salas. Relativo a la tesis 2a./J. 16/2016 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU INTERPOSICIÓN RESULTA OPORTUNA AUN CUANDO OCURRA ANTES DE QUE INICIE EL CÓMPUTO DEL PLAZO RESPECTIVO."	2a.	718
Amparo en revisión 820/2015.—Ministro Ponente: José Fernando Franco González Salas. Relativo a la tesis 2a./J. 12/2016 (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS."	2a.	731
Amparo en revisión 722/2015.—Ministro Ponente: José Fernando Franco González Salas. Relativo a la tesis 2a./J. 11/2016 (10a.), de título y subtítulo: "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS EXPEDIDOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO. CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO."	2a.	765
Amparo directo en revisión 2984/2015.—Ministro Ponente: Juan N. Silva Meza. Relativo a la tesis 2a./J. 13/2016 (10a.), de título y subtítulo: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ASPECTOS QUE DEBEN CONCURRIR PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN VÍA DE AGRAVIOS SE PLANTEA EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE		

	Instancia	Pág.
UNA NORMA GENERAL APLICADA POR PRIMERA VEZ, EN LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO."	2a.	805
Recurso de inconformidad 1020/2015.—Ministro Ponente: Alberto Pérez Dayán. Relativo a la tesis 2a./J. 9/2016 (10a.), de título y subtítulo: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD."	2a.	823
Contradicción de tesis 243/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Décimo Sexto Circuito y Segundo del Séptimo Circuito, ambos en Materia Administrativa.—Ministro Ponente: Juan N. Silva Meza. Relativa a la tesis 2a./J. 2/2016 (10a.), de título y subtítulo: "CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'QUE CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS', CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES."	2a.	845
Contradicción de tesis 285/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Tercero del Primer Circuito y Tercero del Cuarto Circuito, ambos en Materia de Trabajo.—Ministro Ponente: Alberto Pérez Dayán. Relativa a la tesis 2a./J. 8/2016 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. AL RESOLVER LA JUNTA SOBRE EL AJUSTE EN LA CUANTIFICACIÓN DE SU PAGO, DEBE ATENDER EL LÍMITE SUPERIOR PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, SIN QUE REPRESENTE OBSTÁCULO ALGUNO QUE EL DEMANDADO NO SE HUBIERE EXCEPCIONADO EN ESE SENTIDO."	2a.	874
Contradicción de tesis 277/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito y Primero en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito.—Ministro Ponente: Juan N. Silva Meza. Relativa a la tesis 2a./J. 3/2016 (10a.), de título y subtítulo: "PENSIÓN POR		

	Instancia	Pág.
VIUDEZ. PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A AQUÉLLA CON FUNDAMENTO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 97/2012 (10a.) (*)."	2a.	915
Contradicción de tesis 4/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto, ambos del Vigésimo Segundo Circuito.—Magistrado Ponente: Fernando Reza Saldaña. Relativa a la tesis PC.XXII. J/4 C (10a.), de título y subtítulo: "ALIMENTOS VENCIDOS. FORMA EN QUE OPERAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y EL ESTÁNDAR DE PRUEBA CUANDO AQUÉLLOS DERIVAN DE UN ADEUDO CONTRAÍDO POR LOS ACREEDORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO)."	PC.	959
Contradicción de tesis 5/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto, ambos del Vigésimo Segundo Circuito.—Magistrado Ponente: Carlos Hinojosa Rojas. Relativa a las tesis PC.XXII. J/5 A (10a.) y PC.XXII. 1 A (10a.), de títulos y subtítulos: "AMPARO CONTRA LEYES. EL RECIBO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, ES EFICAZ PARA ESTABLECER LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS E INICIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE QUE LA QUEJOSA TUVO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN CON POSTERIORIDAD." y "JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA POR EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA CUANDO EL QUEJOSO SOSTENGA HABER TENIDO CONOCIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, EN UNA FECHA POSTERIOR A LA QUE OSTENTA EL RECIBO DE PAGO RESPECTIVO."	PC.	993
Contradicción de tesis 7/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Sexto, ambos en Materia Penal del Primer Circuito.—Magistrado Ponente: Héctor Lara González. Relativa a la tesis PC.I.P. J/21 P (10a.), de título y subtítulo: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SI DURANTE ÉSTA EL INculpADO ES PUESTO EN LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, ES INAPLICABLE PARA EL MINISTERIO PÚBLICO EL TÉRMINO DE 48 HORAS		

	Instancia	Pág.
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA DEFINIR SU SITUACIÓN JURÍDICA MEDIANTE EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL O LIBERTAD CON LAS RESERVAS DE LEY."	PC.	1064
Contradicción de tesis 3/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia de Trabajo del Sexto Circuito.—Magistrada Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Relativa a la tesis PC.VI.L. J/2 L (10a.), de título y subtítulo: "AYUDA ASISTENCIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 138, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE Y 164, FRACCIÓN IV, DE LA ABROGADA. CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LA CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO LABORAL CUANDO SE DEMANDA SU OTORGAMIENTO."	PC.	1120
Contradicción de tesis 8/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Quinto, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito.—Magistrado Ponente: Juan Alfonso Patiño Chávez. Relativa a la tesis PC.I.L. J/15 L (10a.), de título y subtítulo: "FONDO DE HABITACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES ELECTRICISTAS. LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTÁ EXENTA DE PAGAR LAS APORTACIONES PATRIMONIALES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, SALVO QUE SE ACREDITE QUE LA PRESTACIÓN DERIVADA DE AQUÉL ES INFERIOR AL 5%."	PC.	1178
Contradicción de tesis 11/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Segundo y Décimo Tercero, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito.—Magistrado Ponente: Francisco Javier Patiño Pérez. Relativa a la tesis PC.I.L. J/16 L (10a.), de título y subtítulo: "IMPEDIMENTO PARA CONOCER DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES DENTRO DE UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA SI EXISTE PARENTESCO POR AFINIDAD EN SEGUNDO GRADO ENTRE EL ACTUARIO JUDICIAL CUYA ACTUACIÓN SE CUESTIONA Y EL JUZGADOR QUE DEBE PARTICIPAR EN LA RESOLUCIÓN DE DICHO INCIDENTE."	PC.	1237

	Instancia	Pág.
Contradicción de tesis 5/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.—Magistrado Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Relativa a la tesis PC.IV.A. J/21 A (10a.), de título y subtítulo: "IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN , INCISO D), DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE PREVÉ LA EXENCIÓN DE SU PAGO A LAS EROGACIONES QUE EFECTÚEN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA."	PC.	1273
Contradicción de tesis 2/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Cancún, Quintana Roo y Cuarto del Vigésimo Circuito.—Magistrado Ponente: Manuel de Jesús Rosales Suárez. Relativa a la tesis PC.XX. J/5 C (10a.), de título y subtítulo: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SU PROMOCIÓN INTERRUMPE EL PLAZO DE 3 AÑOS PREVISTO POR EL ARTÍCULO 1079, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PARA EJECUTAR LA SENTENCIA QUE HA CAUSADO ESTADO, DICTADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL."	PC.	1322
Contradicción de tesis 3/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito.—Magistrado Ponente: Jorge Mercado Mejía. Relativa a las tesis PC.XXVII. J/5 A (10a.) y PC.XXVII. J/4 A (10a.), de títulos y subtítulos: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN LA QUE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO." y "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES."	PC.	1348
Contradicción de tesis 6/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos del Vigésimo Segundo Circuito.—Magistrada Ponente: Alma Rosa Díaz Mora. Relativa		

	Instancia	Pág.
a la tesis PC.XXII. J/7 (10a.), de título y subtítulo: "JUICIO ORAL MERCANTIL. ES PROCEDENTE CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN PERSONAL DE COBRO DERIVADA DE UN CONTRATO DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA, CUANDO SEA DE CUANTÍA DETERMINADA E INFERIOR AL MONTO FIJADO EN EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO."	PC.	1428
Contradicción de tesis 3/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.—Magistrada Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Relativa a la tesis PC.III.L. J/12 L (10a.), de título y subtítulo: "OFRECIMIENTO DE TRABAJO. EL HECHO DE QUE SE REALICE CON UNA DIFERENCIA SALARIAL MÍNIMA DE ALGUNOS CENTAVOS DIARIOS, NO ES MOTIVO PARA CALIFICARLO DE MALA FE, AL NO MODIFICARSE LAS CONDICIONES FUNDAMENTALES DE TRABAJO, NI DEPRECIARSE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL TRABAJADOR."	PC.	1463
Contradicción de tesis 4/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito.—Magistrada Ponente: Florida López Hernández. Relativa a la tesis PC.XXVII. J/1 P (10a.), de título y subtítulo: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. TRATÁNDOSE DE DELITOS QUE SE PERSIGUEN POR QUERRELLA DE LA VÍCTIMA O DEL OFENDIDO, SÓLO SE INTERRUMPE POR LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)."	PC.	1509
Contradicción de tesis 7/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito.—Magistrado Ponente: Alejandro López Bravo. Relativa a la tesis PC.III.L. J/13 L (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA O CONCEDE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA INTERPONERLO ES DE 5 DÍAS HÁBILES, AL NO TRATARSE DE ALGÚN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO."	PC.	1556
Contradicción de tesis 5/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito Tercero del Centro Auxiliar de la		

Instancia	Pág.
Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, y Tercero del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco.—Magistrado Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Relativa a la tesis PC.III.A. J/14 A (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, EMITIDAS EN CUMPLIMIENTO A UN MANDATO DEL PLENO DE ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL."	PC. 1614
Contradicción de tesis 1/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Civil del Segundo Circuito.—Magistrado Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez. Relativa a la tesis PC.II.C. J/2 K (10a.), de título y subtítulo: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS, AUNQUE SE DICTEN EN DISTINTAS DETERMINACIONES."	PC. 1644
Contradicción de tesis 8/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto, Primero y Séptimo, todos en Materia Penal del Primer Circuito.—Magistrado Ponente: Tereso Ramos Hernández. Relativa a las tesis PC.I.P. J/20 P (10a.) y PC.I.P. J/19 P (10a.), de títulos y subtítulos: "REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER ESTE BENEFICIO A LOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (SECUESTRO), EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE NO TIENE APLICACIÓN RETROACTIVA EN SU BENEFICIO LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL." y "REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER ESTE BENEFICIO TRATÁNDOSE DE SENTENCIADOS POR EL DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (SECUESTRO), DE ACUERDO A LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ACTUALMENTE ABROGADA, HASTA ANTES DE LA REFORMA A	

	Instancia	Pág.
SU ARTÍCULO 50, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 4 DE JUNIO DE 2004."	PC.	1686
Contradicción de tesis 9/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Noveno, ambos en Materia Penal del Primer Circuito.—Magistrada Ponente: Lilia Mónica López Benítez. Relativa a la tesis PC.I.P. J/18 P (10a.), de título y subtítulo: "ROBO CALIFICADO. LA AGRAVANTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 224, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE ACTUALIZA AUNQUE EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO NO ESTÉ PRESTANDO EL SERVICIO A QUE ESTÁ DESTINADO."	PC.	1734
Contradicción de tesis 18/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito.—Magistrado Ponente: Tomás Gómez Verónica. Relativa a la tesis PC.III.A. J/13 A (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EXCEPCIONALMENTE, EN TUTELA DEL INTERÉS SOCIAL, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA INTERLOCUTORIA QUE CONCEDE AL ACTOR EN EL JUICIO DE NULIDAD LA MEDIDA CAUTELAR PARA QUE CONTINÚE EN OPERACIÓN CON LA ACTIVIDAD DE GASOLINERA."	PC.	1766
Contradicción de tesis 2/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito.—Magistrado Ponente: Hugo Gómez Ávila. Relativa a la tesis PC.III.A. J/12 A (10a.), de título y subtítulo: "TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, CONTENIDAS EN LOS DECRETOS NÚMEROS 24646/LX/13 Y 23711/LIX/11. LOS PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL ELEMENTO RELATIVO A LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRAN EN LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DE ESE ESTADO Y EL HECHO DE QUE LA DEFINICIÓN DE AQUÉLLOS ESTÉ EN EL REGLAMENTO DE ÉSTA, SÓLO IMPLICA QUE LOS DESARROLLA A DETALLE, POR LO QUE NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA."	PC.	1784

	Instancia	Pág.
<p>Contradicción de tesis 1/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito.—Magistrado Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Relativa a las tesis PC.XVI.A. J/12 A (10a.) y PC.XVI.A. J/11 A (10a.), de títulos y subtítulos: "VIDA SILVESTRE. LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA APLICACIÓN DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, NO PROVOCA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI CONTRAVIENE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO." y "VIDA SILVESTRE. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, AL TRATARSE DE UNA NORMA PROHIBITIVA CON EFECTOS POSITIVOS."</p>	PC.	1845
<p>Impedimento para conocer de la contradicción de tesis 2/2015.—Magistrado Fernando Coteró Bernal.—Magistrado Ponente: Alejandro López Bravo. Relativo a las tesis PC.III.L. 1 K (10a.) y PC.III.L. 2 K (10a.), de títulos y subtítulos: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. NO SE CALIFICA DE LEGAL EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR UN MAGISTRADO PARA CONOCER DE ELLA, AL NO ACTUALIZARSE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES XVI Y XVIII DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN." e "IMPEDIMENTO PARA CONOCER DE UNA CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. NO DEBE DECLARARSE SIN MATERIA AUNQUE MEDIE DESISTIMIENTO DEL DENUNCIANTE."</p>	PC.	1901
<p>Amparo directo 387/2015.—Magistrado Ponente: Samuel Alvarado Echavarría. Relativo a la tesis VI.1o.T. J/2 (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA LABORAL. EL REQUERIMIENTO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA QUE EL PROMOVENTE ACREDITE SU IDENTIDAD, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE TENERLA POR NO INTERPUESTA, ES ILEGAL Y CONTRARÍA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."</p>	T.C.	1925
<p>Amparo en revisión 330/2015.—Magistrado Ponente: Antonio Soto Martínez. Relativo a la tesis VII.2o.P. J/2 (10a.), de título y subtítulo:</p>		

Instancia Pág.

"DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO."

T.C. 1955

Amparo en revisión 74/2015.—Ponente: Manuel Alejandro Méndez Romo, secretario de tribunal autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado, en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Relativo a la tesis XXIV.2o. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO."

T.C. 1967

Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 87/2015.—Director General de lo Contencioso y de Recursos de la Procuraduría Federal del Consumidor.—Magistrado Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Relativa a la tesis XVI.1o.A. J/24 (10a.), de título y subtítulo: "REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR VICIOS FORMALES, AUN CUANDO SE SUSTENTEN EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 150/2010 Y 2a./J. 88/2011)."

T.C. 1984

	Instancia	Pág.
Revisión administrativa (Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo) 73/2015.—Director General del Organismo de Cuenca Lerma Santiago Pacífico de la Comisión Nacional del Agua.—Magistrado Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo. Relativa a la tesis XVI.1o.A. J/25 (10a.), de título y subtítulo: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, POR AUSENCIA O DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, AL OMITIR PRECISAR EL PERIODO O PERIODOS SUJETOS A REVISIÓN (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 150/2010 Y 2a./88/2011)."	T.C.	1995
Amparo directo 851/2014.—Magistrado Ponente: José de Jesús Bañales Sánchez. Relativo a la tesis III.1o.T. J/1 (10a.), de título y subtítulo: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO. PRIMA DE ANTIGÜEDAD. RECLAMACIÓN IMPROCEDENTE."	T.C.	2005
Amparo directo 360/2015.—Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos.—Magistrado Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Relativo a la tesis I.13o.T.139 L (10a.), de título y subtítulo: "SALARIOS CAÍDOS. FORMA DE COMPUTARLOS CONFORME AL PLAZO FIJADO PARA EL PAGO DEL SUELDO."	T.C.	2140
Amparo directo 427/2015.—Magistrado Ponente: Joel Carranco Zúñiga. Relativo a la tesis I.1o.A.119 A (10a.), de título y subtítulo: "SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN. LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA REQUERIR AL CONTRIBUYENTE QUE EXHIBA DOCUMENTOS O APOORTE INFORMACIÓN ADICIONAL A LA ORIGINALMENTE PRESENTADA, DEBE EJERCERSE BAJO UN CRITERIO DE NECESIDAD Y UN ESTÁNDAR DE RACIONALIDAD."	T.C.	2164
Queja 309/2015.—Magistrado Ponente: Filemón Haro Solís. Relativa a la tesis III.2o.A.7 K (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO, POR UNA PARTE LA NIEGUE Y, POR OTRA, LA CONCEDA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PUEDE ANALIZAR, DE OFICIO, EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA SÓLO		

	Instancia	Pág.
CONTRA LA NEGATIVA, SI EL OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA AFECTA EL INTERÉS SOCIAL O CONTRAVIENE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO."	T.C.	2191

Índice de Votos Particulares y Minoritarios

Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.—Amparo en revisión 295/2014. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentaron las tesis P/J. 30/2015 (10a.), P/J. 32/2015 (10a.), P/J. 31/2015 (10a.), P/J. 35/2015 (10a.), P/J. 33/2015 (10a.), P/J. 34/2015 (10a.), P/J. 37/2015 (10a.), P/J. 36/2015 (10a.) y P. XV/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: "PERSONAL DOCENTE AL SERVICIO DEL ESTADO. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN TANTO POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU LEY REGLAMENTARIA, COMO POR EL DIVERSO 3o., FRACCIONES II Y III, CONSTITUCIONAL.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO DE AUDIENCIA.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO RECONOCIDO EN EL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE TRABAJO.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN SU ASPECTO NEGATIVO DE NO REGRESIVIDAD, EN RELACIÓN CON EL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y NOVENO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL

Pág.

RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO A LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN PERJUICIO DEL PERSONAL DOCENTE CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL A SU ENTRADA EN VIGOR.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO A LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN PERJUICIO DEL PERSONAL DOCENTE QUE TUVIERA NOMBRAMIENTO DEFINITIVO A SU ENTRADA EN VIGOR." y "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LAS LIMITACIONES QUE LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA IMPONEN AL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, TIENEN UN FIN CONSTITUCIONALMENTE LEGÍTIMO Y SON IDÓNEAS, NECESARIAS Y PROPORCIONALES.", que aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, páginas 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 14 y 244, respectivamente.....

122

Ministra Olga Sánchez Cordero De García Villegas.—Amparo en revisión 295/2014. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentaron las tesis P/J. 30/2015 (10a.), P/J. 32/2015 (10a.), P/J. 31/2015 (10a.), P/J. 35/2015 (10a.), P/J. 33/2015 (10a.), P/J. 34/2015 (10a.), P/J. 37/2015 (10a.), P/J. 36/2015 (10a.) y P. XV/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: "PERSONAL DOCENTE AL SERVICIO DEL ESTADO. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN TANTO POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU LEY REGLAMENTARIA, COMO POR EL DIVERSO 3o., FRACCIONES II Y III, CONSTITUCIONAL.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO DE AUDIENCIA.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO RECONOCIDO EN EL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.", "SERVICIO PROFE-

Pág.

SIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE TRABAJO.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN SU ASPECTO NEGATIVO DE NO REGRESIVIDAD, EN RELACIÓN CON EL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y NOVENO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO A LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN PERJUICIO DEL PERSONAL DOCENTE CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL A SU ENTRADA EN VIGOR.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO A LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN PERJUICIO DEL PERSONAL DOCENTE QUE TUVIERA NOMBRAMIENTO DEFINITIVO A SU ENTRADA EN VIGOR." y "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LAS LIMITACIONES QUE LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA IMPONEN AL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, TIENEN UN FIN CONSTITUCIONALMENTE LEGÍTIMO Y SON IDÓNEAS, NECESARIAS Y PROPORCIONALES.", que aparecen publicadas en el <i>Semanario Judicial de la Federación</i> del viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas y en la <i>Gaceta del Semanario Judicial de la Federación</i> , Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, páginas 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 14 y 244, respectivamente.	130
Ministro Luis María Aguilar Morales.—Amparo en revisión 295/2014. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentaron las tesis P/J. 30/2015 (10a.), P/J. 32/2015 (10a.), P/J. 31/2015 (10a.), P/J. 35/2015 (10a.), P/J. 33/2015 (10a.), P/J. 34/2015 (10a.), P/J. 37/2015 (10a.), P/J. 36/2015 (10a.) y P. XV/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: "PERSONAL DOCENTE AL SERVICIO DEL ESTADO. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN TANTO POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU LEY REGLAMENTARIA, COMO POR EL DIVERSO 3o., FRACCIONES II Y III, CONSTITUCIONAL.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO DE AUDIENCIA.", "SERVICIO PROFE-	

Pág.

SIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO RECONOCIDO EN EL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE TRABAJO.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN SU ASPECTO NEGATIVO DE NO REGRESIVIDAD, EN RELACIÓN CON EL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y NOVENO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO A LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN PERJUICIO DEL PERSONAL DOCENTE CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL A SU ENTRADA EN VIGOR.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO A LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN PERJUICIO DEL PERSONAL DOCENTE QUE TUVIERA NOMBRAMIENTO DEFINITIVO A SU ENTRADA EN VIGOR." y "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LAS LIMITACIONES QUE LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA IMPONEN AL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, TIENEN UN FIN CONSTITUCIONALMENTE LEGÍTIMO Y SON IDÓNEAS, NECESARIAS Y PROPORCIONALES.", que aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, páginas 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 14 y 244, respectivamente.....

134

Ministro Eduardo Medina Mora I.—Amparo en revisión 295/2014. Relativa a la ejecutoria en la que se sustentaron las tesis P/J. 30/2015 (10a.), P/J. 32/2015 (10a.), P/J. 31/2015 (10a.), P/J. 35/2015 (10a.), P/J. 33/2015 (10a.), P/J. 34/2015 (10a.), P/J. 37/2015 (10a.), P/J.

36/2015 (10a.) y P. XV/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: "PERSONAL DOCENTE AL SERVICIO DEL ESTADO. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN TANTO POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU LEY REGLAMENTARIA, COMO POR EL DIVERSO 3o., FRACCIONES II Y III, CONSTITUCIONAL.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO DE AUDIENCIA.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO RECONOCIDO EN EL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE TRABAJO.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN SU ASPECTO NEGATIVO DE NO REGRESIVIDAD, EN RELACIÓN CON EL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y NOVENO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO A LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN PERJUICIO DEL PERSONAL DOCENTE CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL A SU ENTRADA EN VIGOR.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO A LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN PERJUICIO DEL PERSONAL DOCENTE QUE TUVIERA NOMBRAMIENTO DEFINITIVO A SU ENTRADA EN VIGOR." y "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LAS LIMITACIONES QUE LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA IMPONEN AL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, TIENEN UN FIN CONSTITUCIONALMENTE LEGÍTIMO Y SON IDÓNEAS, NECESARIAS Y PROPORCIONALES.", que aparecen publicadas en el *Semanario Judicial*

Pág.

<i>de la Federación</i> del viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas y en la <i>Gaceta del Semanario Judicial de la Federación</i> , Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, páginas 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 14 y 244, respectivamente.....	138
---	-----

Ministro Juan N. Silva Meza.—Amparo en revisión 295/2014. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentaron las tesis P/J. 30/2015 (10a.), P/J. 32/2015 (10a.), P/J. 31/2015 (10a.), P/J. 35/2015 (10a.), P/J. 33/2015 (10a.), P/J. 34/2015 (10a.), P/J. 37/2015 (10a.), P/J. 36/2015 (10a.) y P. XV/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: "PERSONAL DOCENTE AL SERVICIO DEL ESTADO. SUS RELACIONES LABORALES SE RIGEN TANTO POR EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y SU LEY REGLAMENTARIA, COMO POR EL DIVERSO 3o., FRACCIONES II Y III, CONSTITUCIONAL.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO DE AUDIENCIA.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO RECONOCIDO EN EL PROTOCOLO ADICIONAL A LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS EN MATERIA DE DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO HUMANO A LA LIBERTAD DE TRABAJO.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD EN SU ASPECTO NEGATIVO DE NO REGRESIVIDAD, EN RELACIÓN CON EL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y NOVENO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VULNERAN EL DERECHO A LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN PERJUICIO DEL PERSONAL DOCENTE CON NOMBRAMIENTO PROVISIONAL A SU ENTRADA EN VIGOR.", "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LOS ARTÍCULOS 52, 53 Y OCTAVO TRANSITORIO DE LA LEY GENERAL RELATIVA NO VUL-

Pág.

NERAN EL DERECHO A LA IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN PERJUICIO DEL PERSONAL DOCENTE QUE TUVIERA NOMBRAMIENTO DEFINITIVO A SU ENTRADA EN VIGOR." y "SERVICIO PROFESIONAL DOCENTE. LAS LIMITACIONES QUE LOS ARTÍCULOS 52, 53, OCTAVO Y NOVENO TRANSITORIOS DE LA LEY GENERAL RELATIVA IMPONEN AL DERECHO HUMANO A LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO, TIENEN UN FIN CONSTITUCIONALMENTE LEGÍTIMO Y SON IDÓNEAS, NECESARIAS Y PROPORCIONALES.", que aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 25 de septiembre de 2015 a las 10:30 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 22, Tomo I, septiembre de 2015, páginas 5, 6, 8, 9, 11, 12, 16, 14 y 244, respectivamente.....

141

Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.—Contradicción de tesis 483/2013.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materia Penal del Primer Circuito, Primero en Materia Administrativa del Primer Circuito, Tercero en Materia Civil del Primer Circuito, Sexto en Materia de Trabajo del Primer Circuito, Cuarto del Décimo Octavo Circuito, Primero del Trigésimo Circuito y Tercero en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentaron las tesis P/J. 11/2015 (10a.), P/J. 8/2015 (10a.), P/J. 10/2015 (10a.) y P/J. 9/2015 (10a.), de títulos y subtítulos: "AMPARO ADHESIVO. EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO DEBE ESTUDIAR TANTO LA PROCEDENCIA COMO LOS PRESUPUESTOS DE LA PRETENSIÓN, PARA DETERMINAR SI ES FACTIBLE SOBRESEER EN ÉL, DEJARLO SIN MATERIA, NEGARLO O CONCEDERLO.", "AMPARO ADHESIVO. ES IMPROCEDENTE ESTE MEDIO DE DEFENSA CONTRA LAS CONSIDERACIONES QUE CAUSEN PERJUICIO A LA PARTE QUE OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE.", "AMPARO ADHESIVO. LA MODULACIÓN IMPUESTA PARA IMPUGNAR POR ESTA VÍA SÓLO CUESTIONES QUE FORTALEZCAN LA SENTENCIA O VIOLACIONES PROCESALES, ES RAZONABLE EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 17 CONSTITUCIONAL Y 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.", y "AMPARO ADHESIVO. PROCEDE CONTRA VIOLACIONES PROCESALES QUE PUDIERAN AFECTAR LAS DEFENSAS DEL ADHERENTE, TRASCENDIENDO AL RESULTADO DEL FALLO, ASÍ COMO CONTRA LAS COMETIDAS EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA QUE LE PUDIERAN PERJUDICAR, PERO NO LAS QUE YA LO PERJUDICAN AL DICTARSE LA SENTENCIA RECLAMADA.", que

Pág.

aparecen publicadas en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 22 de mayo de 2015 a las 9:30 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 18, Tomo I, mayo de 2015, páginas 31, 33, 35 y 37, respectivamente.....

143

Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.—Contradicción de tesis 248/2014.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Penal del Sexto Circuito y Tercero del Vigésimo Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis P/J. 12/2015 (10a.), de título y subtítulo: "AMPARO INDIRECTO. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO RELATIVO CONTRA AUTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DICTADOS EN EL PROCESO PENAL A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, ES EL GENÉRICO DE 15 DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA.", que aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 22 de mayo de 2015 a las 9:30 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 18, Tomo I, mayo de 2015, página 38.....

161

Ministro José Fernando Franco González Salas.—Acción de inconstitucionalidad 19/2015.—Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Relativo a la ejecutoria de temas síntesis: "Acceso a los servicios de salud. No debe condicionarse este derecho a que las instituciones de seguridad social reciban la totalidad de las cuotas y aportaciones correspondientes (inconstitucionalidad del artículo 10 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California).", "Aportaciones al fondo de pensiones a cargo de los pensionistas. Violación al principio de igualdad en relación con los trabajadores en activo (inconstitucionalidad del artículo 16, párrafos tercero y cuarto, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California).", "Seguro médico. Accidentes y enfermedades por caso fortuito o de fuerza mayor extraños al trabajo u ocurridos fuera del lugar donde se desempeña (artículo 39, fracción IV, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California)." y "Acción de inconstitucionalidad. Declaración de invalidez de normas generales en vía de consecuencia (inconstitucionalidad de los artículos 10 y 16, párrafos tercero y

	Pág.
cuarto, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California)."	197
Ministro Luis María Aguilar Morales.—Acción de inconstitucionalidad 45/2014 y sus acumuladas 46/2014, 66/2014, 67/2014, 68/2014, 69/2014 y 75/2014.—Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática en Tamaulipas, Partido Acción Nacional, Partido Político Nacional denominado "Morena" y Partido de la Revolución Democrática. Relativo a la ejecutoria de temas síntesis: "Acción de inconstitucionalidad. Desestimación respecto de los artículos 355, fracción VII y 356, fracción IV, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, adicionado el primero en aquella fracción mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial local el 30 de junio de 2014, por lo que se refiere a la incompetencia de la Asamblea Legislativa de esa entidad para regular en materia de coaliciones, al no haberse obtenido la mayoría calificada de ocho votos.", "Acción de inconstitucionalidad. Desestimación respecto del artículo 220 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, reformado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial local el 30 de junio de 2014, por lo que se refiere a la incompetencia de la Asamblea Legislativa de esa entidad para regular en materia de coaliciones, al no haberse obtenido la mayoría calificada de ocho votos.", "Acción de inconstitucionalidad. Desestimación respecto del artículo 316 Bis, apartado C, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, únicamente por lo que se refiere al planteamiento relativo a la incompetencia de la Asamblea Legislativa de esa entidad para regular en materia de coaliciones, adicionado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial local el 30 de junio de 2014, al no haberse obtenido la mayoría calificada de ocho votos.", "Acción de inconstitucionalidad. Desestimación respecto del artículo 318, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, únicamente por lo que se refiere al planteamiento relativo a la incompetencia de la Asamblea Legislativa de esa entidad para regular en materia de coaliciones, reformado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial local el 30 de junio de 2014, al no haberse obtenido la mayoría calificada de ocho votos.", "Candidaturas comunes en el Distrito Federal. El artículo 356, fracciones III –en la porción normativa que prevé 'en el caso de que el elector marque uno o más cuadros o	

círculos, el voto se asignará al partido postulante'– y IV –que establece que cuando el elector marque dos o más emblemas de partidos que sometan esas candidaturas, se contará voto válido para el candidato o fórmula pero nulo para los partidos políticos o coaliciones postulantes–, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la entidad, reformado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial local el 30 de junio de 2014, vulnera el principio de certeza en materia electoral.", "Candidaturas independientes en el Distrito Federal. El artículo 244 Bis, párrafo segundo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de esa entidad, adicionado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial local el 27 de junio de 2014, al establecer como requisito para obtener el registro como candidato independiente, entre otros, el no haber sido integrante de alguno de los órganos de dirección nacional o local en el Distrito Federal de algún partido político, cuando menos tres años anteriores a la solicitud de registro, es constitucional." "Candidaturas independientes en el Distrito Federal. El artículo 244 Ter, apartado A, párrafo primero, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de esa entidad, adicionado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial local el 27 de junio de 2014, al disponer que para obtener el registro correspondiente, entre otros requisitos, se deberá presentar un número de firmas de apoyo, con copia simple de la credencial de elector respectiva, es constitucional.", "Candidaturas independientes en el Distrito Federal. El artículo 244 Ter, apartado A, párrafo segundo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de esa entidad, adicionado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial local el 27 de junio de 2014, al prever que el porcentaje de firmas de apoyo exigible –cuando no lo prevea la legislación federal– será el equivalente al 2% de la lista nominal respectiva, distribuidas en por lo menos el 35% de las delegaciones o distritos electorales, para la elección de jefe de Gobierno, o de las secciones electorales de la demarcación o distrito correspondiente, en las elecciones de jefe delegacional o diputado a la Asamblea Legislativa, es constitucional.", "Diputados de representación proporcional. Los artículos 292, fracciones I y II y 293, fracción VI, numeral 1, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, reformados mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, que prevén el sistema de asignación de aquéllos a través de listas (A y B), y bajo criterios de equidad de género, son constitucionales, en tanto deben interpretarse en el sentido de que al principio de la lista B se deberá ubicar a una

persona del sexo diverso al del primer lugar de la lista A.", "Financiamiento público para candidaturas independientes. Los artículos 244 Quater y 244 Quintus del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, adicionados mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el 27 de junio de 2014, al establecer, respectivamente, que los candidatos independientes tendrán derecho a aquél únicamente para campañas electorales, equiparado a los recursos de campaña que se destinen a los candidatos del partido político con menor financiamiento público en el año de la elección y que éste no podrá exceder del 60% del tope de gastos de campaña correspondiente, son constitucionales.", "Propaganda electoral. El artículo 316 Bis, apartado B, fracciones I y II, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, adicionado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al establecer que los partidos políticos y los candidatos independientes, durante el periodo de campañas, podrán colocar aquélla de forma gratuita en el 50% de los bienes en los que se hayan otorgado permisos administrativos temporales revocables, así como las reglas de distribución correspondiente, no transgrede el principio de equidad en materia electoral.", "Propaganda electoral. El artículo 316 Bis, apartado C, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, adicionado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al establecer que en ningún momento los partidos políticos y candidatos independientes, entre otros, podrán contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, más espacios en permisos administrativos temporales revocables de los que le correspondan, no transgrede la libertad de expresión.", "Propaganda electoral. El artículo 318, fracción I, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal, reformado mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al prever que los partidos políticos, coaliciones y candidatos, previo convenio con la autoridad correspondiente, podrán colocar aquélla en elementos del equipamiento urbano, bastidores y mamparas, siempre que éste no se dañe, se impida la visibilidad de conductores de vehículos, se impida la circulación de peatones, o ponga en riesgo la integridad física de las personas, es constitucional." y "Propaganda electoral. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal está facultada para regular la que se difunda en espacios publicitarios con permisos administrativos temporales revocables.", que aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del

Pág.

viernes 27 de marzo de 2015 a las 9:30 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 16, Tomo I, marzo de 2015, página 675.....

199

Ministro José Ramón Cossío Díaz.—Acción de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014.—Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo y Partido Acción Nacional. Relativo a la ejecutoria de temas síntesis: "Acción de inconstitucionalidad. Desestimación respecto del artículo 30, párrafo penúltimo —en la porción normativa que prevé 'o coaliciones totales'—, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al no haberse obtenido la mayoría calificada de ocho votos.", "Acción de inconstitucionalidad. Desestimación respecto del artículo 35 Bis —en la porción normativa que prevé 'y coaliciones'—, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al no haberse obtenido la mayoría calificada de ocho votos.", "Acción de inconstitucionalidad. Desestimación respecto del artículo 38 —en la porción normativa que prevé 'coaliciones o'— del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al no haberse obtenido la mayoría calificada de ocho votos.", "Acción de inconstitucionalidad. Desestimación respecto del artículo 40, fracción IV —en las porciones normativas que prevén 'coaliciones' y 'coaliciones o'—, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al no haberse obtenido la mayoría calificada de ocho votos.", "Acción de inconstitucionalidad. Desestimación respecto del artículo 108, fracción I, párrafo décimo primero, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al no haberse obtenido la mayoría calificada de ocho votos.", "Acción de inconstitucionalidad. Desestimación respecto del artículo 108, fracción II, incisos b) y c), del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014,

al no haberse obtenido la mayoría calificada de ocho votos.", "Acción de inconstitucionalidad. Desestimación respecto del artículo 587 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al no haberse obtenido la mayoría calificada de ocho votos.", "Candidaturas comunes en el Estado de Chiapas. El artículo 38 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de esa entidad, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al establecer que para tener derecho a la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, tratándose de dichas candidaturas, formadas para la elección de Ayuntamientos, éstas deberán obtener a su favor en el Municipio correspondiente, al menos el 3% de la votación válida emitida, es constitucional.", "Candidaturas comunes en el Estado de Chiapas. El artículo 109, párrafo penúltimo, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de esa entidad, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al prever que los partidos políticos deberán acreditar que sus dirigencias nacionales y locales aprobaron participar bajo dicha modalidad, es constitucional.", "Candidaturas independientes en el Estado de Chiapas. El artículo 530, penúltimo y último párrafos, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de esa entidad, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al establecer que para efectos de registro el aspirante al cargo deberá presentar la documentación que acredite la creación de la persona jurídica colectiva constituida en asociación civil, es constitucional.", "Candidaturas independientes en el Estado de Chiapas. Los artículos 534 al 536 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de esa entidad, reformados mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al prever un porcentaje de respaldo ciudadano de la lista nominal de electores para las candidaturas a gobernador, diputados e integrantes de los Ayuntamientos, respectivamente, son constitucionales.", "Elecciones en el Estado de Chiapas. La declaración de invalidez de los artículos 17, párrafo primero y 19, párrafo primero, de la Constitución Política, así como 41 y 42 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, ambos ordenamientos de esa entidad, reformados mediante Decretos Números 514 y 521, publicados en el Periódico Oficial local el 25 y 30 de junio de 2014, respectivamente, surtirán efectos una vez que culmine el proceso

electoral de 2014-2015 en ese Estado.", "Elecciones en el Estado de Chiapas. La omisión en el sentido de que en la legislación electoral de esa entidad, no se previó un precepto transitorio en el que se contemple que las verificadas en 2018 se celebren el primer domingo de julio, no la torna inconstitucional.", "Elecciones en el Estado de Chiapas. Los artículos 17, párrafo primero y 19, párrafo primero, de la Constitución Política, así como 41 y 42 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, ambos ordenamientos de esa entidad, reformados mediante Decretos Números 514 y 521, publicados en el Periódico Oficial local el 25 y 30 de junio de 2014, respectivamente, en las porciones normativas que prevén que las elecciones de diputados y miembros de los Ayuntamientos se celebrarán el tercer domingo de julio del año de la elección, son inconstitucionales.", "Elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. El artículo 40, fracción IV, del código relativo, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al establecer que la asignación de las regidurías de representación proporcional se hará preferentemente conforme al orden de la planilla correspondiente, salvo que existan disposiciones en contrario en los estatutos de un partido político o en los convenios respectivos, tratándose de candidaturas comunes, no es inconstitucional, ni priva de efecto útil al principio de paridad de género.", "Elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. El artículo 52 del código relativo, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, que prevé el cumplimiento de ciertos requisitos cuando un partido político nacional pierda su registro, y éste opte por obtenerlo como partido político local, es inconstitucional.", "Elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. El artículo 69, fracción XI, del código relativo, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al establecer que el presidente del partido político será su representante legal y su 'identidad pública y privada', es violatorio de la constitución federal.", "Elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. El artículo 69, fracción XXIII, del código relativo, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al prever que los partidos políticos deben abstenerse en su propaganda política o electoral de cualquier expresión que denigre a las instituciones o a los partidos, es inconstitucional.", "Elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. El artículo 82, párrafo último, del código relativo,

reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al otorgar facultades al Instituto Nacional Electoral para investigar procedimientos relacionados con radio y televisión, es inconstitucional.", "Elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. El artículo 118 del código relativo, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al hacer una remisión a las causas de pérdida de registro o acreditación ante el Instituto Electoral local de los partidos políticos previstas en el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, es constitucional.", "Elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. El artículo 134 del código relativo, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al establecer como principios rectores de la función electoral, entre otros, los de veracidad y seguridad, no contraviene el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal.", "Elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. El artículo 196 del código relativo, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al prever que será el consejo general del organismo local electoral el que por conducto de su unidad técnica de fiscalización supere los secretos bancario, fiduciario y fiscal en caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue esa función, contraviene los artículos 41, base V, apartado B, penúltimo y último párrafos, y 190 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.", "Elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. El artículo 234, párrafo sexto, del código relativo, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, en la porción normativa que establece 'se exceptúan de lo anterior las candidaturas que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido', es contrario al artículo 41, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.", "Elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. Los artículos 24, 30 y 32 al 35 del código relativo, reformados mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, que establecen las reglas relativas a la asignación de diputados de representación proporcional, son constitucionales.", "Elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. Los artículos 67, fracción VI y 108 Bis, inciso a), del código

relativo, reformado y adicionado, respectivamente, mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al establecer la regla consistente en que las coaliciones deberán ser aprobadas por los órganos de dirección estatal y nacional de cada uno de los partidos coaligados, son inconstitucionales.", "Elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. Los artículos 208 al 215 del código relativo, reformados mediante decreto número 521, publicado en el periódico oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, que regulan lo relativo a las personas que desempeñan profesionalmente sus actividades en los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Electoral local, transgreden la Constitución Federal.", "Instituto de elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. El artículo 63, párrafo tercero, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de esa entidad, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al establecer que ningún partido político puede efectuar cambios a sus documentos básicos sin estar debidamente autorizados por aquel órgano, es constitucional.", "Instituto de elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. Los artículos 217 y 218 del código relativo, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, que establecen, respectivamente, que el régimen laboral al que se sujeta el personal de dicho organismo será conforme a lo dispuesto en la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal y que el órgano encargado de dirimir sus controversias será el Tribunal Electoral local, son constitucionales.", "Instituto de elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. El artículo quinto transitorio del Decreto Número 514 por el que se establece la decimoctava reforma a la Constitución Política de esa entidad, publicado en el Periódico Oficial local el 25 de junio de 2014, en la porción normativa que prevé 'cuyo titular será el actual presidente de la comisión de fiscalización electoral', es inconstitucional.", "Instituto de elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. El artículo décimo primero transitorio del Decreto Número 521, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de esa entidad, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al disponer que los gastos realizados por los partidos políticos en ese estado, hasta antes de la entrada en vigor de las leyes generales, serán fiscalizados por ese órgano, con sustento en las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes al momento

de su ejercicio, no invade las facultades del Instituto Nacional Electoral.", "Magistrados electorales del Estado de Chiapas. El artículo 508, párrafo segundo, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de esa entidad, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial el 30 de junio de 2014, al prever que en el caso de ausencia de alguno de ellos mayor a siete días y que no se trate de vacante definitiva, el presidente del Tribunal Electoral local deberá comunicarlo al Poder Ejecutivo estatal para efecto de que proponga una terna y sea enviada a la Legislatura, es constitucional.", "Nulidad de elecciones en el Estado de Chiapas. El artículo 469, fracción X, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de esa entidad, adicionado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, debe interpretarse en el sentido de que aquélla también es procedente con motivo de la adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en las leyes generales y demás disposiciones legales aplicables, en términos del artículo 41, base VI, de la Constitución Federal.", "Nulidad de elecciones en el Estado de Chiapas. El hecho de que el Código de Elecciones y Participación Ciudadana de esa entidad, no prevea lo dispuesto en el artículo 78 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, en cuanto establece lo que debe entenderse por violaciones graves, conductas dolosas y cobertura informativa, para efectos de la actualización de las causales de nulidad de elecciones federales o locales, no implica una omisión del legislador local.", "Paridad de género. El hecho de que la Constitución Política del Estado de Chiapas no establezca reglas de género para la integración de los Ayuntamientos, no implica una omisión del legislador local.", "Paridad de género. Los artículos 24, fracción II y 40, fracción IV, párrafo último, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, reformados mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al prever, respectivamente, que las listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional se integrarán por segmentos de dos candidaturas, una para cada género, en la que el orden de prelación será, para los noes, género femenino, y para los pares, género masculino, y que las planillas para la asignación de regidores por ese principio deberán garantizar la paridad entre los dos géneros, para lo cual, en el supuesto de que el número de regidurías asignadas

Pág.

sea impar, la mayoría deberá corresponder al género femenino y ser encabezada por una persona de dicho género, son acordes con aquel principio contenido en el artículo 41, base I, de la Constitución Federal." y "Voto en el extranjero. El artículo 35 Bis del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, que limita ese derecho en las elecciones relativas a los Ayuntamientos, es constitucional.", que aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 13 de febrero de 2015, a las 9:00 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 15, Tomo I, febrero de 2015, página 868.....

202

Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.—Acción de inconstitucionalidad 35/2014 y sus acumuladas 74/2014, 76/2014 y 83/2014.—Partidos Políticos de la Revolución Democrática, del Trabajo y Acción Nacional. Relativo a la ejecutoria de temas: "Acción de inconstitucionalidad. Desestimación respecto del artículo 30, párrafo penúltimo —en la porción normativa que prevé 'o coaliciones totales'—, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al no haberse obtenido la mayoría calificada de ocho votos.", "Acción de inconstitucionalidad. Desestimación respecto del artículo 35 Bis —en la porción normativa que prevé 'y coaliciones'—, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al no haberse obtenido la mayoría calificada de ocho votos.", "Acción de inconstitucionalidad. Desestimación respecto del artículo 38 —en la porción normativa que prevé 'coaliciones o'— del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al no haberse obtenido la mayoría calificada de ocho votos.", "Acción de inconstitucionalidad. Desestimación respecto del artículo 40, fracción IV —en las porciones normativas que prevén 'coaliciones' y 'coaliciones o'—, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al no haberse obtenido la mayoría calificada de ocho votos.", "Acción de inconstitucionalidad. Desestimación respecto del artículo

108, fracción I, párrafo décimo primero, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al no haberse obtenido la mayoría calificada de ocho votos.", "Acción de inconstitucionalidad. Desestimación respecto del artículo 108, fracción II, incisos b) y c), del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al no haberse obtenido la mayoría calificada de ocho votos.", "Acción de inconstitucionalidad. Desestimación respecto del artículo 587 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al no haberse obtenido la mayoría calificada de ocho votos.", "Candidaturas comunes en el Estado de Chiapas. El artículo 38 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de esa entidad, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al establecer que para tener derecho a la asignación de regidores por el principio de representación proporcional, tratándose de dichas candidaturas, formadas para la elección de Ayuntamientos, éstas deberán obtener a su favor en el Municipio correspondiente, al menos el 3% de la votación válida emitida, es constitucional.", "Candidaturas comunes en el Estado de Chiapas. El artículo 109, párrafo penúltimo, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de esa entidad, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al prever que los partidos políticos deberán acreditar que sus dirigencias nacionales y locales aprobaron participar bajo dicha modalidad, es constitucional.", "Candidaturas independientes en el Estado de Chiapas. El artículo 530, penúltimo y último párrafos, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de esa entidad, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al establecer que para efectos de registro el aspirante al cargo deberá presentar la documentación que acredite la creación de la persona jurídica colectiva constituida en asociación civil, es constitucional.", "Candidaturas independientes en el Estado de Chiapas. Los artículos 534 al 536 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de esa entidad, reformados mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al prever un porcentaje de respaldo ciudadano de la lista nominal de electores para

las candidaturas a gobernador, diputados e integrantes de los Ayuntamientos, respectivamente, son constitucionales.", "Elecciones en el Estado de Chiapas. La declaración de invalidez de los artículos 17, párrafo primero y 19, párrafo primero, de la Constitución Política, así como 41 y 42 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, ambos ordenamientos de esa entidad, reformados mediante Decretos Números 514 y 521, publicados en el Periódico Oficial local el 25 y 30 de junio de 2014, respectivamente, surtirán efectos una vez que culmine el proceso electoral de 2014-2015 en ese Estado.", "Elecciones en el Estado de Chiapas. La omisión en el sentido de que en la legislación electoral de esa entidad, no se previó un precepto transitorio en el que se contemple que las verificadas en 2018 se celebren el primer domingo de julio, no la torna inconstitucional.", "Elecciones en el Estado de Chiapas. Los artículos 17, párrafo primero y 19, párrafo primero, de la Constitución Política, así como 41 y 42 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, ambos ordenamientos de esa entidad, reformados mediante Decretos Números 514 y 521, publicados en el Periódico Oficial local el 25 y 30 de junio de 2014, respectivamente, en las porciones normativas que prevén que las elecciones de diputados y miembros de los Ayuntamientos se celebrarán el tercer domingo de julio del año de la elección, son inconstitucionales.", "Elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. El artículo 40, fracción IV, del código relativo, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al establecer que la asignación de las regidurías de representación proporcional se hará preferentemente conforme al orden de la planilla correspondiente, salvo que existan disposiciones en contrario en los estatutos de un partido político o en los convenios respectivos, tratándose de candidaturas comunes, no es inconstitucional, ni priva de efecto útil al principio de paridad de género.", "Elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. El artículo 52 del código relativo, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, que prevé el cumplimiento de ciertos requisitos cuando un partido político nacional pierda su registro, y éste opte por obtenerlo como partido político local, es inconstitucional.", "Elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. El artículo 69, fracción XI, del código relativo, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al establecer que el presidente del partido político será su representante legal y su

'identidad pública y privada', es violatorio de la constitución federal.", "Elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. El artículo 69, fracción XXIII, del código relativo, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al prever que los partidos políticos deben abstenerse en su propaganda política o electoral de cualquier expresión que denigre a las instituciones o a los partidos, es inconstitucional.", "Elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. El artículo 82, párrafo último, del código relativo, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al otorgar facultades al Instituto Nacional Electoral para investigar procedimientos relacionados con radio y televisión, es inconstitucional.", "Elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. El artículo 118 del código relativo, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al hacer una remisión a las causas de pérdida de registro o acreditación ante el Instituto Electoral local de los partidos políticos previstas en el artículo 94 de la Ley General de Partidos Políticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, es constitucional.", "Elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. El artículo 134 del código relativo, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al establecer como principios rectores de la función electoral, entre otros, los de veracidad y seguridad, no contraviene el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal.", "Elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. El artículo 196 del código relativo, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al prever que será el consejo general del organismo local electoral el que por conducto de su unidad técnica de fiscalización supere los secretos bancario, fiduciario y fiscal en caso de que el Instituto Nacional Electoral delegue esa función, contraviene los artículos 41, base V, apartado B, penúltimo y último párrafos, y 190 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.", "Elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. El artículo 234, párrafo sexto, del código relativo, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, en la porción normativa que establece 'se exceptúan de lo anterior las candidaturas que sean resultado de un proceso de elección democrático, conforme a los estatutos de cada partido', es contrario al

artículo 41, fracción I, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.", "Elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. Los artículos 24, 30 y 32 al 35 del código relativo, reformados mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, que establecen las reglas relativas a la asignación de diputados de representación proporcional, son constitucionales.", "Elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. Los artículos 67, fracción VI y 108 Bis, inciso a), del código relativo, reformado y adicionado, respectivamente, mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al establecer la regla consistente en que las coaliciones deberán ser aprobadas por los órganos de dirección estatal y nacional de cada uno de los partidos coaligados, son inconstitucionales.", "Elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. Los artículos 208 al 215 del código relativo, reformados mediante decreto número 521, publicado en el periódico oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, que regulan lo relativo a las personas que desempeñan profesionalmente sus actividades en los órganos ejecutivos y técnicos del Instituto Electoral local, transgreden la Constitución Federal.", "Instituto de elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. El artículo 63, párrafo tercero, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de esa entidad, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al establecer que ningún partido político puede efectuar cambios a sus documentos básicos sin estar debidamente autorizados por aquel órgano, es constitucional.", "Instituto de elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. Los artículos 217 y 218 del código relativo, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, que establecen, respectivamente, que el régimen laboral al que se sujeta el personal de dicho organismo será conforme a lo dispuesto en la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal y que el órgano encargado de dirimir sus controversias será el Tribunal Electoral local, son constitucionales.", "Instituto de elecciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. El artículo quinto transitorio del Decreto Número 514 por el que se establece la decimoctava reforma a la Constitución Política de esa entidad, publicado en el Periódico Oficial local el 25 de junio de 2014, en la porción normativa que prevé 'cuyo titular será el actual presidente de la comisión de fiscalización electoral', es inconstitucional.", "Instituto de elec-

ciones y participación ciudadana del Estado de Chiapas. El artículo décimo primero transitorio del Decreto Número 521, por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de esa entidad, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al disponer que los gastos realizados por los partidos políticos en ese estado, hasta antes de la entrada en vigor de las leyes generales, serán fiscalizados por ese órgano, con sustento en las disposiciones jurídicas y administrativas vigentes al momento de su ejercicio, no invade las facultades del Instituto Nacional Electoral.", "Magistrados electorales del Estado de Chiapas. El artículo 508, párrafo segundo, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de esa entidad, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial el 30 de junio de 2014, al prever que en el caso de ausencia de alguno de ellos mayor a siete días y que no se trate de vacante definitiva, el presidente del Tribunal Electoral local deberá comunicarlo al Poder Ejecutivo estatal para efecto de que proponga una terna y sea enviada a la Legislatura, es constitucional.", "Nulidad de elecciones en el Estado de Chiapas. El artículo 469, fracción X, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana de esa entidad, adicionado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, debe interpretarse en el sentido de que aquélla también es procedente con motivo de la adquisición de cobertura informativa o tiempos en radio y televisión, fuera de los supuestos previstos en las leyes generales y demás disposiciones legales aplicables, en términos del artículo 41, base VI, de la Constitución Federal.", "Nulidad de elecciones en el Estado de Chiapas. El hecho de que el Código de Elecciones y Participación Ciudadana de esa entidad, no prevea lo dispuesto en el artículo 78 Bis de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, en cuanto establece lo que debe entenderse por violaciones graves, conductas dolosas y cobertura informativa, para efectos de la actualización de las causales de nulidad de elecciones federales o locales, no implica una omisión del legislador local.", "Paridad de género. El hecho de que la Constitución Política del Estado de Chiapas no establezca reglas de género para la integración de los Ayuntamientos, no implica una omisión del legislador local.", "Paridad de género. Los artículos 24, fracción II y 40, fracción IV, párrafo último, del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, reformados mediante Decreto

Pág.

Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, al prever, respectivamente, que las listas de candidatos a diputados por el principio de representación proporcional se integrarán por segmentos de dos candidaturas, una para cada género, en la que el orden de prelación será, para los noes, género femenino, y para los pares, género masculino, y que las planillas para la asignación de regidores por ese principio deberán garantizar la paridad entre los dos géneros, para lo cual, en el supuesto de que el número de regidurías asignadas sea impar, la mayoría deberá corresponder al género femenino y ser encabezada por una persona de dicho género, son acordes con aquel principio contenido en el artículo 41, base I, de la Constitución Federal." y "Voto en el extranjero. El artículo 35 Bis del Código de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas, reformado mediante Decreto Número 521, publicado en el Periódico Oficial local el 30 de junio de 2014, que limita ese derecho en las elecciones relativas a los Ayuntamientos, es constitucional.", que aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 13 de febrero de 2015, a las 9:00 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 15, Tomo I, febrero de 2015, página 868.

210

Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.—Acciones de inconstitucionalidad acumuladas 22/2014, 26/2014, 28/2014 y 30/2014.—Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo, Partido de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, respectivamente. Relativo a la ejecutoria de temas síntesis: "Acción de inconstitucionalidad. Debe sobreseerse en el juicio, en términos del artículo 19, fracción V, en relación con el diverso 20, fracción II, de la ley reglamentaria de la materia, respecto del artículo 209, fracción XXXI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, adicionado mediante decreto publicado en el diario oficial de la federación EL 23 de mayo de 2014, en tanto que por diverso decreto publicado el 27 de junio siguiente en el citado órgano de difusión, se derogó dicha disposición y, por ende, cesaron sus efectos.", "Acción de inconstitucionalidad. Desestimación respecto de los artículos 44, párrafo 1, inciso u) y 320, párrafo 1, incisos d), e), j) y k), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al no haberse obtenido la mayoría calificada de ocho votos.", "Campaña y precampaña electorales. El artículo 3, párrafo 1, incisos a) y b), de la

Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al disponer lo que se entiende por actos anticipados de aquéllas, no es contrario al artículo 116, fracción IV, inciso b), constitucional.", "Candidatos independientes. El artículo 374, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al prever una sanción para los aspirantes que rebasen el tope de gastos de campaña que el propio numeral señala, es constitucional.", "Candidatos independientes. El artículo 378, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al establecer que los aspirantes que no entreguen el informe de ingresos y egresos dentro de los treinta días siguientes a la conclusión del periodo para recabar el apoyo ciudadano, les será negado el registro respectivo, y que aquellos que sin haberlo obtenido no entreguen los mismos, serán sancionados en términos del citado ordenamiento, es constitucional.", "Candidatos independientes. El artículo 383, inciso c), fracción II, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al establecer que la solicitud de registro respectiva deberá acompañarse de copia del acta de nacimiento y credencial para votar vigente, es constitucional.", "Candidatos independientes. El artículo 383, inciso c), fracción VI, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al señalar que la solicitud de registro respectiva deberá acompañarse de la cédula de respaldo ciudadano en términos del mencionado precepto, así como de la copia de la credencial para votar con fotografía vigente de cada uno de los ciudadanos que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido conforme a dicho ordenamiento, no es contrario a la Constitución Federal.", "Candidatos independientes. El artículo 383, inciso c), fracciones IV y V, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al disponer que la solicitud de registro respectiva deberá acompañarse de los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos de la candidatura independiente, así como de los informes de gastos y egresos de los actos tendientes a obtener el apoyo ciudadano, es

acorde con la Constitución Federal.", "Candidatos independientes. El artículo 384, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al prever que los requisitos omitidos en la solicitud de registro respectiva se subsanarán, siempre y cuando ello se realice dentro de los plazos que señala la propia ley, y que si no se subsanan aquéllos o se advierte que la solicitud se realizó en forma extemporánea, se tendrá por no presentada, no vulnera la garantía de audiencia contenida en el artículo 14 de la Constitución Federal.", "Candidatos independientes. El artículo 385, párrafo 2, inciso g), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al establecer que cuando una misma persona haya presentado manifestación en favor de más de un aspirante, sólo se computará la primera presentada, es constitucional.", "Candidatos independientes. El artículo 386, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al prever que si la solicitud respectiva no reúne el porcentaje requerido se tendrá por no presentada, no vulnera los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal.", "Candidatos independientes. El artículo 400 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al establecer que aquéllos tienen prohibido recibir aportaciones y donaciones en efectivo, así como de metales y piedras preciosas, por cualquier persona física o moral, es constitucional.", "Candidatos independientes. El artículo 401, párrafo 1, inciso i), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al señalar que, entre otros, las empresas mexicanas de carácter mercantil no podrán realizar aportaciones o donativos en efectivo, metales y piedras preciosas o en especie por sí o por interpósita persona, a los aspirantes o candidatos independientes a cargos de elección popular, bajo ninguna circunstancia, no viola el principio de certeza en materia electoral.", "Candidatos independientes. El artículo 412 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al disponer que aquéllos sólo tendrán acceso a radio y televisión en campaña electoral, y que el conjunto de candidatos indepen-

dientes, según el tipo de elección, accederán a esos medios, como si se tratara de un partido de nuevo registro, únicamente en el porcentaje que se distribuye en forma igualitaria a los partidos políticos, es constitucional.", "Candidatos independientes. El hecho de que el artículo 403, en relación con los diversos 368, párrafo 4, 383, párrafo 1, inciso c), fracción IV y 404, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, establezca, que para el manejo de los recursos de campaña electoral, se deberá utilizar la cuenta bancaria aperturada a que se refiere dicho ordenamiento y que todas las aportaciones deberán realizarse exclusivamente en ella, mediante cheque o transferencia bancaria, no implica la posibilidad de que aquéllos incurran por error en infracciones y delitos previstos en el Código Fiscal de la Federación.", "Candidatos independientes. La circunstancia de que el artículo 13, párrafo 1, inciso d), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, establezca que la presentación de los medios de impugnación corresponde a aquéllos, a través de sus representantes legítimos, entendiéndose por éstos a los que se encuentren acreditados ante el Instituto Nacional Electoral, no implica que su defensa legal deba ser forzosamente por dicho conducto.", "Candidatos independientes. La circunstancia de que el artículo 423 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, prevea que les son aplicables las normas sobre propaganda electoral contenidas en ese ordenamiento, no implica necesariamente un trato igualitario entre aquéllos y los partidos políticos.", "Candidatos independientes. Las sanciones que prevén los artículos 372, párrafos 1 y 2 y 375, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, cuando los aspirantes respectivos realicen actos anticipados de campaña, contraten propaganda en radio y televisión y rebasen el tope de gastos correspondiente, son idénticas a las que se imponen a los precandidatos de los partidos políticos al actualizarse dichas conductas, por ende, esos preceptos no transgreden el principio de equidad en materia electoral.", "Candidatos independientes. Los artículos 15, párrafo 2 y 437, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publi-

cado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al prever que en la votación nacional emitida para efectos de la asignación de diputados y senadores por el principio de representación proporcional, se deducirán o no se contabilizarán los votos emitidos a favor de aquéllos, son constitucionales.", "Candidatos independientes. Los artículos 391 y 392 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al prever, respectivamente, que tratándose de la fórmula de diputados, será cancelado el registro de la fórmula completa cuando falte el propietario, y que en el caso de las listas de fórmulas al cargo de senador, si por cualquier causa falta uno de los propietarios de una de ellas, se cancelará el registro de ambas, no contravienen la Constitución Federal.", "Candidatos independientes. Los artículos 407 y 408 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al prever, respectivamente, que para efectos de la distribución del financiamiento público a que tienen derecho aquéllos, en su conjunto, serán considerados como un partido político de nuevo registro, y que en el supuesto de que un solo candidato obtenga su registro, no podrá recibir financiamiento que exceda del 50% de los montos que se asignarán entre todos los candidatos, son constitucionales.", "Candidatos independientes. Los artículos 425 al 431 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, que prevén las reglas relativas a la fiscalización de esas candidaturas, así como el órgano encargado de esa tarea, no vulneran el principio de certeza en materia electoral.", "Candidatos independientes. Los plazos de ciento veinte, noventa y sesenta días para recabar el porcentaje de apoyo ciudadano requerido para los aspirantes a los cargos de presidente de la República, senador y diputado, respectivamente, previstos por el artículo 369 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, no son desproporionalmente menores al de un año que se otorga a las organizaciones que pretenden erigirse como partidos políticos de nueva creación, por ende, dicho precepto no transgrede el principio de equidad en materia electoral.", "Candidatos independientes. Los porcentajes para acreditar el apoyo ciudadano de los aspirantes para los cargos de Presidente de los

Estados Unidos Mexicanos, senadores y diputados, previstos en el artículo 371 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, son proporcionales y, por ende, el referido precepto es constitucional.", "Candidatos independientes. Son infundados los conceptos de invalidez sobre la inconstitucionalidad de los artículos 393 y 394 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, cuando no se aduce un mínimo razonamiento para explicar por qué se produce una regulación excesiva respecto de los derechos y obligaciones que tales preceptos prevén, en perjuicio de aquéllos.", "Candidaturas independientes. El libro séptimo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (artículos 357 a 439), expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, que prevé su regulación, distinta a la establecida para los partidos políticos, no contraviene la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos.", "Coaliciones. El artículo 87, párrafo 13, de la Ley General de Partidos Políticos, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, en la porción normativa que indica 'y sin que puedan ser tomados en cuenta para la asignación de representación proporcional u otras prerrogativas', es inconstitucional.", "Coaliciones. Las Legislaturas de los Estados carecen de competencia para legislar sobre aquéllas.", "Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Los artículos 190, párrafo 2; 192, párrafo 1, incisos f), g), j), k), m) y n); 199, párrafo 1, incisos f) y o); y 427, párrafo 1, incisos b) y c), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al prever diversas atribuciones de la comisión de fiscalización de ese organismo, en materia de fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos, así como en relación con la práctica de auditorías a las finanzas de los aspirantes y candidatos independientes, no transgreden los artículos 41, fracción V, apartado b, párrafos penúltimo y último de esa fracción, de la Constitución Federal y segundo transitorio, fracciones i, inciso g), subinciso 1) y II, inciso c), del decreto de reformas constitucionales publicado en el citado medio de difusión oficial el 10 de febrero de 2014.", "Debates entre candidatos. El artículo 218, párrafo 6, inciso b), de la Ley General de

Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al disponer que los medios de comunicación nacional y local podrán organizarlos libremente, siempre y cuando participen por lo menos dos candidatos de la misma elección, debe entenderse en el sentido de que existe la obligación de los organizadores de convocar en forma fehaciente a todos los candidatos registrados para el mismo cargo, pues de esa forma se satisface el principio de imparcialidad en ese tipo de eventos.", "Diputados de representación proporcional. La expresión 'votación total emitida' contenida en el artículo 15, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, constituye un concepto implícito en el artículo 54 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para efectos de la aplicación de la fórmula para la asignación de aquéllos.", "Elecciones federales y locales. El artículo 78 bis, párrafo 5, de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, adicionado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, que prevé la parte sustantiva del sistema de la nulidad de aquéllas por violaciones graves, dolosas y determinantes, es constitucional.", "Financiamiento público de los partidos políticos nacionales. Los artículos 72, párrafo 2, incisos b) y f) y 76, párrafo 3, de la Ley General de Partidos Políticos, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, son inconstitucionales al establecer los gastos de 'estructura partidista' y de 'estructuras electorales' dentro de las ministraciones destinadas al sostenimiento de las actividades ordinarias permanentes de aquellos entes y, en vía de consecuencia, el párrafo 3 del mencionado artículo 72.", "Instituciones y procedimientos electorales. El artículo 223 de la ley general relativa, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al prever que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público podrá coordinarse con otras autoridades supervisoras en materia de prevención y detección de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo, no vulnera los artículos 41, fracción III, apartado b, inciso a), subinciso 6, así como sus párrafos penúltimo y último, de la Constitución Federal y segundo transitorio, fracción II, inciso b), del decreto de reformas constitucionales, publicado en el citado medio de difusión oficial el 10 de febrero de 2014.", "Instituciones y procedimientos electorales. El artículo décimo transitorio de la ley general relativa,

expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al prever que 'para los procesos electorales locales cuya jornada electoral se realice en 2015 ...', deberán designarse a los respectivos consejeros electorales 'a más tardar el 30 de septiembre de 2014', no infringe lo dispuesto en el artículo cuarto transitorio del decreto de reformas constitucionales publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de febrero de 2014.", "Instituciones y procedimientos electorales. Los artículos noveno y vigésimo primero transitorios de la ley general relativa, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, no transgreden el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena publicar y promulgar leyes electorales por lo menos noventa días antes del inicio de los procesos electorales en que vayan a aplicarse, ni los principios de certeza y seguridad jurídica.", "Militantes. El artículo 40 de la Ley General de Partidos Políticos, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al establecer que los partidos políticos podrán establecer en sus estatutos las categorías de aquéllos conforme a su nivel de participación y responsabilidades, no transgrede el principio de igualdad, ni el derecho de asociación política.", "Partidos políticos. El artículo 85, párrafo 5, de la ley general relativa, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al prever que será facultad de las entidades federativas establecer en sus Constituciones Locales otras formas de participación o asociación de aquéllos con el fin de postular candidatos, es constitucional, en el entendido de que la expresión "en sus Constituciones Locales" debe comprender al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.", "Precampaña electoral. Los artículos 229, párrafo 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 79, párrafo 1, inciso a), fracción III, de la Ley General de Partidos Políticos, ambas expedidas mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, que prevén los plazos para que los candidatos presenten los informes de ingresos y gastos relativos, no transgreden el artículo 41, fracción V, apartado b), párrafos penúltimo y último de esa fracción, de la Constitución Federal.", "Procedimiento legislativo. El Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, publicado en

el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, es Constitucional.", "Propaganda electoral. El artículo 209, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, en la porción normativa que dice: 'que contenga propaganda política o electoral de partidos, coaliciones o candidatos', es inválido.", "Propaganda electoral. El artículo 242, párrafo 5, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al prever que el informe anual de labores de los servidores públicos, así como los mensajes que para darlos a conocer se difundan en los medios de comunicación social, no serán considerados como propaganda, es acorde con el párrafo octavo del artículo 134 constitucional.", "Propaganda electoral. El artículo 250, párrafo 1, incisos a), b) y d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al prever restricciones en la colocación de aquélla en elementos del equipamiento urbano, carretero o ferroviario y en inmuebles de propiedad privada, es constitucional.", "Radio y televisión. El artículo 167, párrafos 6 y 7, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al establecer que los mensajes de los partidos políticos se dividen en spots de una duración medida en unidades de treinta segundos, uno y dos minutos, sin fracciones, conforme a las pautas elaboradas considerando la totalidad de los mensajes y su distribución entre dichos partidos, responde al modelo de asignación del tiempo en aquellos medios, previsto en el artículo 41, fracción III, apartado a, incisos a), b), c) y d), constitucional.", "Radio y televisión. El artículo 178, párrafos 1 y 2, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, que prevé porcentajes diferenciados de distribución de tiempo en esos medios, para los partidos políticos nacionales tratándose de elecciones locales, no contraviene la Constitución Federal.", "Radio y televisión. El artículo 180, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al prever que el Instituto Nacional Electoral en ningún caso podrá autorizar a los partidos políticos tiempo o mensajes en esos medios, en contravención a las reglas estable-

cidas en el propio ordenamiento, es constitucional.", "Radio y televisión. El artículo 181, párrafo 1, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al disponer que en periodos no electorales, los partidos políticos nacionales tendrán derecho a mensajes de treinta segundos cada uno en esos medios, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 41, fracción III, apartado a, inciso g), constitucional.", "Radio y televisión. El artículo 182, párrafo 1, incisos a) y b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al señalar que el Instituto Nacional Electoral dispondrá de mensajes con duración de veinte y treinta segundos en esos medios para la difusión de sus propios fines, es constitucional.", "Representación proporcional. Los artículos 28, párrafo 2, incisos a) y b), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 9, párrafo 1, inciso c), fracciones I y II, de la Ley General de Partidos Políticos, ambas expedidas mediante decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, son inconstitucionales al prever la asignación de un diputado local por ese principio, al partido que obtenga el 3% de la votación válida emitida y, en vía de consecuencia, la última porción normativa del inciso c) y de la fracción III de los citados preceptos, respectivamente.", "Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El artículo 476, párrafo 2, incisos a) al d), de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, al prever la facultad de ese órgano jurisdiccional para verificar que en la integración del expediente respectivo no existan omisiones, deficiencias o violaciones a las reglas del procedimiento, así como la de ordenar al Instituto Nacional Electoral la realización de ciertas diligencias para mejor proveer, no contraviene los artículos 41, fracción III, apartado d) y 99, fracción IX, de la Constitución Federal.", "Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Los artículos 185, 192 y 195 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, que la instituyen, son constitucionales.", "Tribunales Electorales Locales. Los artículos que integran el libro tercero, título tercero, denominado de las autoridades electorales jurisdiccionales locales, así como el artículo vigésimo primero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante

Pág.

decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, que prevén, respectivamente, el proceso de renovación de aquéllos, y que el Senado de la República deberá designar a los Magistrados electorales con antelación al inicio del siguiente proceso electoral local que corresponda, son constitucionales." y "Voto de los mexicanos residentes en el extranjero. El artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, que prevé los supuestos de su ejercicio, es constitucional.", que aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 6 de febrero de 2015 a las 9:00 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 15, Tomo I, febrero de 2015, página 397.....

216

Ministro José Fernando Franco González Salas.—Controversia constitucional 25/2014.—Municipio de Xochitepec, Estado de Morelos. Relativo a la ejecutoria de temas síntesis: "Controversia constitucional. Sobreseimiento por ausencia de conceptos de invalidez (artículos quinto y noveno transitorios de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, publicada el veintidós de enero de dos mil catorce en el Periódico Oficial de dicha entidad).", "Pensiones de los servidores públicos municipales. El artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a las Legislaturas de los Estados a legislar en esa materia (validez de los artículos 24, fracción III, párrafo sexto, 41, fracción XXXVII, cuarto, séptimo y octavo transitorios del Decreto Número 1874 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, publicado el 22 de enero de 2014 en el Periódico Oficial de dicha entidad)." y "Pensiones de los servidores públicos municipales. La regulación relativa emitida por los Ayuntamientos, no invade la autonomía municipal ni la facultad reglamentaria prevista en el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (validez de los artículos 24, fracción III, párrafo sexto, 41, fracción XXXVII, cuarto, séptimo y octavo transitorios del Decreto Número 1874 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, publicado el 22 de enero de 2014 en el Periódico Oficial de dicha entidad)."

261

Ministro Juan N. Silva Meza.—Controversia constitucional 81/2013.—Poder Ejecutivo del Estado de Baja California. Relativo a la ejecutoria de temas síntesis: "Procedimiento legislativo de reforma y/o

Pág.

modificación a la Constitución y a las leyes locales. Su regulación corresponde a la Ley Suprema Local.", "Procedimiento de reforma a la Constitución Política del Estado de Baja California. Etapas que lo conforman.", "Decretos de reforma y/o adición a la Constitución Política del Estado de Baja California. Su publicación debe realizarse en el Periódico Oficial de la entidad (inconstitucionalidad del artículo segundo transitorio del Decreto por el cual se declara formalmente la incorporación constitucional relativa a la reforma a los artículos 69 y 70 de la Ley Suprema Local y se reforma el tercero transitorio del Decreto Número 342, por el que se adicionan un segundo párrafo al artículo 69 y los párrafos segundo a sexto al artículo 70, y se reforman los artículos 93 y 94 del mismo ordenamiento, publicado en la Gaceta Parlamentaria del Poder Legislativo de la entidad el 13 de junio de 2013).", y "Controversia constitucional. Efectos de la declaración de invalidez de una norma transitoria que da validez a una reforma a la Constitución Política de Baja California (inconstitucionalidad del artículo segundo transitorio del Decreto por el cual se declara formalmente la incorporación constitucional relativa a la reforma a los artículos 69 y 70 de la Ley Suprema Local y se reforma el tercero transitorio del Decreto Número 342, por el que se adicionan un segundo párrafo al artículo 69 y los párrafos segundo a sexto al artículo 70, y se reforman los artículos 93 y 94 del mismo ordenamiento, publicado en la Gaceta Parlamentaria del Poder Legislativo de la entidad el 13 de junio de 2013).", que aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 8 de enero de 2016 a las 10:10 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 26, Tomo I, enero de 2016, página 581.....

262

Ministro Luis María Aguilar Morales.—Acciones de inconstitucionalidad acumuladas 77/2015 y 78/2015.—Partidos de la Revolución Democrática y Morena. Relativo a la ejecutoria de temas síntesis: "Organismos electorales locales. La posibilidad de que los partidos políticos participen mediante un representante legislativo en las sesiones de su consejo general como 'invitados permanentes', es contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (invalidez del artículo 3, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Puebla).", "Coaliciones. Incompetencia de los Congresos Locales para regularlas (invalidez del artículo 4, fracción V, párrafo segundo, en la porción normativa que indica 'coaliciones', de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla).", "Frentes y fusiones. Ausencia de competencia

Pág.

de las Legislaturas Locales para regularlas (desestimación de la invalidez del artículo 4, fracción V, párrafo segundo, en la porción normativa que establece 'formar frentes,... o fusiones, ni', de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla).", "Campañas y precampañas. Plazos únicos e inflexibles para la elección de diputados locales, de Ayuntamientos y de gobernador (validez del artículo 4, fracción I, inciso c), en la porción normativa que señala 'las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas será de sesenta días para la elección de gobernador y de treinta días para la elección de diputados locales y Ayuntamientos', de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, al tenor de la interpretación conforme propuesta).", "Paridad de género. Inexistencia de una omisión con la emisión posterior de una norma por parte de la Legislatura Local, independientemente de su impugnación especial (validez del artículo 3, fracción III, en la porción normativa que indica 'así como establecer las reglas para garantizar la paridad entre géneros de las candidaturas a integrantes de la Legislatura', de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla).", "Representación proporcional. Congruencia entre el porcentaje exigido para que los partidos políticos locales conserven su registro y el previsto para la asignación de diputaciones por este principio (validez del artículo 35, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, al tenor de la interpretación conforme propuesta)." y "Fiscalización de partidos políticos y de campañas de candidatos. El Instituto Nacional Electoral puede delegar esta atribución a los organismos electorales locales (validez de los artículos 3, fracción II, párrafos último y penúltimo, y 4, fracciones II, párrafo penúltimo, y III, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Puebla)."

355

Ministro José Ramón Cossío Díaz.—Acción de inconstitucionalidad 39/2014 y sus acumuladas 44/2014, 54/2014 y 84/2014.—Partidos Políticos Verde Ecologista de México, Socialdemócrata de Morelos, Movimiento Ciudadano y Acción Nacional. Relativo a la ejecutoria de temas síntesis: "Acción de inconstitucionalidad. Desestimación respecto de los artículos 59, en la porción normativa 'coaliciones' y 223, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico

Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al no haberse obtenido la mayoría calificada de ocho votos.", "Acción de inconstitucionalidad. Desestimación respecto del artículo 262, párrafo tercero, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al no haberse obtenido la mayoría calificada de ocho votos.", "Acción de inconstitucionalidad. Sobreseimiento respecto de los artículos 87, párrafo 13 y 51 de la Ley General de Partidos Políticos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 2014, en tanto que su impugnación resultó extemporánea.", "Candidaturas comunes. El artículo 61, párrafo primero, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al establecer que cuando en la boleta electoral se marquen dos o más opciones que postulen al mismo candidato, el voto se sumará para éste y no contará para ninguno de los partidos políticos, contraviene los artículos 35 y 116 de la Constitución Federal.", "Candidaturas comunes. Las Legislaturas de los Estados están facultadas para legislar respecto de aquéllas.", "Candidaturas independientes. El artículo 268 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al prever que para recabar el porcentaje de apoyo ciudadano los aspirantes a candidato independiente para el cargo de gobernador contarán con cuarenta días, y que los aspirantes para el cargo de diputado, presidente municipal y síndico del Ayuntamiento, tendrán un plazo de treinta días, no viola el artículo 35, fracción II, de la Constitución Federal.", "Candidaturas independientes. El artículo 270 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al establecer los porcentajes de apoyo ciudadano para las candidaturas de gobernador, diputados, presidente municipal y síndico del Ayuntamiento, es constitucional.", "Candidaturas independientes. El artículo 273, párrafo segundo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al señalar que los aspirantes a esas candidaturas que rebasen los topes de gastos de campaña correspondientes serán sancionados con la negativa de su registro o, en caso de haberlo obtenido, con su cancelación, no viola los principios de legalidad, equidad y certeza en materia electoral.", "Candidaturas independientes. El artículo 283, párrafo segundo,

incisos a) y b), del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al establecer que las firmas para los efectos de acreditar el porcentaje de apoyo ciudadano correspondiente, no se computarán cuando se proporcionen nombres con datos falsos o erróneos, o no se acompañen las copias de la credencial para votar vigente, no es contrario a la Constitución Federal.", "Candidaturas independientes. Los artículos 287, 288 y 289 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, que establecen la imposibilidad de que los candidatos independientes que hayan obtenido su registro sean sustituidos en las etapas del proceso electoral, son constitucionales.", "Financiamiento público para las candidaturas independientes. El artículo 303 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al disponer que su monto será el que le correspondería a un partido de nuevo registro, así como la forma en que se distribuirá entre los candidatos independientes, no vulnera el principio de equidad en materia electoral.", "Financiamiento público para los partidos políticos. El artículo 23, fracción III, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Morelos, reformado mediante Decreto Número Mil Cuatrocientos Noventa y Ocho, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 27 de junio de 2014, que prevé las reglas para su distribución, no transgrede el artículo 14 de la Constitución Federal.", "Paridad de género. El artículo 179, párrafo segundo, del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al establecer una excepción a dicho principio respecto de las candidaturas de mayoría relativa que sean resultado de un proceso de elección democrático, viola el artículo 41, fracción I, constitucional, en relación con el diverso precepto 232, numerales 3 y 4 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales." y "Paridad de género. Los artículos 179, párrafo primero y 180 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, publicado en el Periódico Oficial de esa entidad el 30 de junio de 2014, al garantizar ese principio tanto en la postulación como en el registro de candidaturas a diputados de mayoría relativa e integrantes de Ayuntamientos, son acordes con el artículo 41, fracción I, de la Constitución Federal, en relación con el diverso precepto 232, numerales 3 y 4, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.", que aparece

	Pág.
publicada en el <i>Semanario Judicial de la Federación</i> del viernes 9 de enero de 2015 a las 9:30 horas y en la <i>Gaceta del Semanario Judicial de la Federación</i> , Décima Época, Libro 14, Tomo I, enero de 2015, página 199.....	358
Ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.—Acción de inconstitucionalidad 20/2013.—Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Relativo a la ejecutoria de temas síntesis: "Acción de inconstitucionalidad. La declaración de invalidez del artículo 113 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California Sur, reformado mediante Decreto Número 2087, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de esa entidad el 10 de julio de 2013, adquiere efectos generales retroactivos, al tratarse de una disposición general emitida por el Congreso Local.", "Acción de inconstitucionalidad. La declaración de invalidez respecto del artículo 113 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California Sur, reformado mediante Decreto 2087, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de esa entidad el 10 de julio de 2013, produce efectos, en términos de lo previsto en el artículo 45, en relación con el diverso 73, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a partir de la fecha en que entró en vigor aquel precepto, conforme al artículo primero transitorio del decreto citado." y "Arraigo. El artículo 113 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Baja California Sur, reformado mediante Decreto Número 2087, publicado en el Boletín Oficial del Gobierno de esa entidad el 10 de julio de 2013, que lo prevé, vulnera el artículo 73, fracción XXI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.", que aparece publicada en el <i>Semanario Judicial de la Federación</i> del viernes 13 de febrero de 2015 a las 9:00 horas y en la <i>Gaceta del Semanario Judicial de la Federación</i> , Décima Época, Libro 15, Tomo I, febrero de 2015, página 1140.....	361
Ministro Juan N. Silva Meza.—Acción de inconstitucionalidad 1/2013.—Diputados y Diputadas Integrantes de la Sexagésima Segunda Legislatura del Congreso de la Unión. Relativo a la ejecutoria de temas síntesis: "Acción de inconstitucionalidad. Desestimación respecto del artículo 27, párrafo último —en la porción normativa que prevé 'el secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad'—, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,	

Pág.

reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, al no haberse alcanzado la mayoría calificada de ocho votos.", "Comisionado nacional de seguridad. El artículo 27, párrafo último, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, en la porción normativa que indica 'el comisionado nacional de seguridad y ...', es inconstitucional.", "División de poderes. Finalidad y límites de ese principio contenido en el artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.", "Facultades del Poder Ejecutivo Federal. Delimitación constitucional del nombramiento y/o remoción de los funcionarios públicos de la Unión.", "Secretaría de Gobernación. Las fracciones XII y XXX del artículo 27 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, al prever, respectivamente, que al titular de aquélla corresponde 'comparecer cada seis meses ante las Comisiones de Gobernación y de Seguridad Pública del Senado para presentar la política criminal y darle seguimiento cuando ésta se apruebe o se modifique' e informar al Poder Legislativo Federal sobre los asuntos de su competencia en materia de seguridad nacional 'a través de comparecencia de su titular cada seis meses ante la Comisión Bicameral prevista en el artículo 56 de la Ley de Seguridad Nacional', transgreden el principio de división de poderes.» y «Secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. El artículo 27, fracción XVI, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de enero de 2013, al establecer que a la Secretaría de Gobernación corresponde proponer al presidente de la República el nombramiento de aquél 'en los términos que establece el párrafo final de este artículo', es constitucional.», que aparece publicada en el *Semanario Judicial de la Federación* del viernes 27 de marzo de 2015 a las 9:30 horas y en la *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación*, Décima Época, Libro 16, Tomo I, marzo de 2015, página 894.....

368

Ministros José Ramón Cossío Díaz y Jorge Mario Pardo Rebolledo.— Contradicción de tesis 5/2013.—Suscitada entre el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis

	Pág.
1a./J. 56/2014 (10a.), de título y subtítulo: "DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE LAS CANTIDADES RELATIVAS AL MONTO DEL PERJUICIO A LA HACIENDA PÚBLICA SEÑALADAS EN LAS FRACCIONES I A LA III DEL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, DE CONFORMIDAD CON EL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN EL PRECEPTO 17-A –RESOLUCIÓN DE MISCELÁNEA FISCAL– NO SE TRADUCE EN UNA REFORMA A LA NORMA PENAL QUE PERMITA LA APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE RETROACTIVIDAD PARA LA OBTENCIÓN DE LA SUSTITUCIÓN Y CONMUTACIÓN DE SANCIONES O CUALQUIER OTRO BENEFICIO PREVISTO EN LA LEY", que aparece publicada en el <i>Semanario Judicial de la Federación</i> del viernes 5 de diciembre de 2014 a las 10:05 horas y en la <i>Gaceta del Semanario Judicial de la Federación</i> , Décima Época, Libro 13, Tomo I, diciembre 2014, página 192.....	660
Magistrado Carlos Hinostrosa Rojas.—Contradicción de tesis 5/2015.— Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto, ambos del Vigésimo Segundo Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentaron las tesis PC.XXII. J/5 A (10a.) y PC.XXII. 1 A (10a.), de títulos y subtítulos: "AMPARO CONTRA LEYES. EL RECIBO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, ES EFICAZ PARA ESTABLECER LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS E INICIAR EL CÁLCULO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE QUE LA QUEJOSA TUVO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN CON POSTERIORIDAD." y "JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA POR EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA CUANDO EL QUEJOSO SOSTENGA HABER TENIDO CONOCIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, EN UNA FECHA POSTERIOR A LA QUE OSTENTA EL RECIBO DE PAGO RESPECTIVO."	1052
Magistrados Ricardo Paredes Calderón, Héctor Lara González, Lilia Mónica López Benítez y Taissia Cruz Parcero.—Contradicción de tesis 7/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Sexto, ambos en Materia Penal del Primer Circuito.	

Pág.

Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.I.P. J/21 P (10a.), de título y subtítulo: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SI DURANTE ÉSTA EL INCUPLADO ES PUESTO EN LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, ES INAPLICABLE PARA EL MINISTERIO PÚBLICO EL TÉRMINO DE 48 HORAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA DEFINIR SU SITUACIÓN JURÍDICA MEDIANTE EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL O LIBERTAD CON LAS RESERVAS DE LEY:"	1114
Magistrados Emma Herlinda Villagómez Ordóñez y Francisco Esteban González Chávez.—Contradicción de tesis 3/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia de Trabajo del Sexto Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.VI.L. J/2 L (10a.), de título y subtítulo: "AYUDA ASISTENCIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 138, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE Y 164, FRACCIÓN IV, DE LA ABROGADA. CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LA CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO LABORAL CUANDO SE DEMANDA SU OTORGAMIENTO."	1173
Magistrados Elisa Jiménez Aguilar, Herlinda Flores Irene, María Edith Cervantes Ortiz, Ricardo Castillo Muñoz, Héctor Landa Razo y Sergio Pallares y Lara.—Contradicción de tesis 8/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Quinto, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.I.L. J/15 L (10a.), de título y subtítulo: "FONDO DE HABITACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES ELECTRICISTAS. LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTÁ EXENTA DE PAGAR LAS APORTACIONES PATRIMONIALES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, SALVO QUE SE ACREDITE QUE LA PRESTACIÓN DERIVADA DE AQUEL ES INFERIOR AL 5%."	1231
Magistrado Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso.—Contradicción de tesis 11/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Segundo y Décimo Tercero, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.I.L. J/16 L (10a.), de título y subtítulo: "IMPEDIMENTO PARA CONOCER DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE	

	Pág.
NOTIFICACIONES DENTRO DE UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA SI EXISTE PARENTESCO POR AFINIDAD EN SEGUNDO GRADO ENTRE EL ACTUARIO JUDICIAL CUYA ACTUACIÓN SE CUESTIONA Y EL JUZGADOR QUE DEBE PARTICIPAR EN LA RESOLUCIÓN DE DICHO INCIDENTE."	1267
Magistrado José Elías Gallegos Benítez.—Contradicción de tesis 5/2015.— Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.IV.A. J/21 A (10a.), de título y subtítulo: "IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE PREVÉ LA EXENCIÓN DE SU PAGO A LAS EROGACIONES QUE EFECTÚEN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUITAD TRIBUTARIA."	1308
Magistrado Jorge Mercado Mejía.—Contradicción de tesis 3/2015.— Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentaron las tesis PC.XXVII. J/5 A (10a.) y PC.XXVII. J/4 A (10a.), de títulos y subtítulos: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN LA QUE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO." y "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES."	1416
Magistrado Ramiro Rodríguez Pérez.—Contradicción de tesis 6/2015.— Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos del Vigésimo Segundo Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.XXII. J/7 (10a.), de título y subtítulo: "JUICIO ORAL MERCANTIL. ES PROCEDENTE	

Pág.

CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN PERSONAL DE COBRO DERIVADA DE UN CONTRATO DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA, CUANDO SEA DE CUANTÍA DETERMINADA E INFERIOR AL MONTO FIJADO EN EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO."

1459

Magistrado José de Jesús López Arias.—Contradicción de tesis 3/2015.— Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.III.L. J/12 L (10a.), de título y subtítulo: "OFRECIMIENTO DE TRABAJO. EL HECHO DE QUE SE REALICE CON UNA DIFERENCIA SALARIAL MÍNIMA DE ALGUNOS CENTAVOS DIARIOS, NO ES MOTIVO PARA CALIFICARLO DE MALA FE, AL NO MODIFICARSE LAS CONDICIONES FUNDAMENTALES DE TRABAJO, NI DEPRECIARSE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL TRABAJADOR."

1486

Magistrado Jorge Mercado Mejía.—Contradicción de tesis 4/2015.— Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.XXVII. J/1 P (10a.), de título y subtítulo: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. TRATÁNDOSE DE DELITOS QUE SE PERSIGUEN POR QUERRELLA DE LA VÍCTIMA O DEL OFENDIDO, SÓLO SE INTERRUMPE POR LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)."

1546

Magistrado José de Jesús López Arias.—Contradicción de tesis 7/2015.— Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.III.L. J/13 L (10a.), de título y subtítulo: "RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA O CONCEDE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA INTERPONERLO ES DE 5 DÍAS HÁBILES, AL NO TRATARSE DE ALGÚN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO."

1608

Magistrado Ricardo Romero Vázquez.—Contradicción de tesis 1/2015.— Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Civil del Segundo Circuito. Relativo

Pág.

a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.II.C. J/2 K (10a.), de título y subtítulo: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS, AUNQUE SE DICTEN EN DISTINTAS DETERMINACIONES."

1680

Magistrado Ricardo Paredes Calderón.—Contradicción de tesis 8/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto, Primero y Séptimo, todos en Materia Penal del Primer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentaron las tesis PC.I.P. J/20 P (10a.) y PC.I.P. J/19 P (10a.), de títulos y subtítulos: "REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER ESTE BENEFICIO A LOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (SECUESTRO), EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE NO TIENE APLICACIÓN RETROACTIVA EN SU BENEFICIO LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL." y "REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER ESTE BENEFICIO TRATÁNDOSE DE SENTENCIADOS POR EL DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (SECUESTRO), DE ACUERDO A LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ACTUALMENTE ABROGADA, HASTA ANTES DE LA REFORMA A SU ARTÍCULO 50, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 4 DE JUNIO DE 2004."

1726

Magistrados Héctor Lara González, Armando Horacio Hernández Orozco y Taissia Cruz Parceró.—Contradicción de tesis 8/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto, Primero y Séptimo, todos en Materia Penal del Primer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentaron las tesis PC.I.P. J/20 P (10a.) y PC.I.P. J/9 P (10a.), de títulos y subtítulos: "REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER ESTE BENEFICIO A LOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (SECUESTRO), EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA

Pág.

DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE NO TIENE APLICACIÓN RETROACTIVA EN SU BENEFICIO LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL." y "REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER ESTE BENEFICIO TRATÁNDOSE DE SENTENCIADOS POR EL DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (SECUESTRO), DE ACUERDO A LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ACTUALMENTE ABROGADA, HASTA ANTES DE LA REFORMA A SU ARTÍCULO 50, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 4 DE JUNIO DE 2004."

1727

Magistrados Mario Ariel Acevedo Cedillo, Horacio Armando Hernández Orozco, Lilia Mónica López Benítez y Guadalupe Olga Mejía Sánchez.—Contradicción de tesis 9/2015.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Noveno, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis PC.I.P. J/18 P (10a.), de título y subtítulo: "ROBO CALIFICADO. LA AGRAVANTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 224, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE ACTUALIZA AUNQUE EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO NO ESTÉ PRESTANDO EL SERVICIO A QUE ESTÁ DESTINADO."

1759

Magistrada María del Rosario Mota Cienfuegos.—Amparo directo 360/2015.—Camino y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos. Relativo a la tesis I.13o.T.139 L (10a.), de título y subtítulo: "SALARIOS CAÍDOS. FORMA DE COMPUTARLOS CONFORME AL PLAZO FIJADO PARA EL PAGO DEL SUELDO."

2162

Magistrado Julio Humberto Hernández Fonseca.—Amparo directo 427/2015. Relativo a la ejecutoria en la que se sustentó la tesis I.1o.A.119 A (10a.), de título y subtítulo: "SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN. LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA REQUERIR AL CONTRIBUYENTE QUE EXHIBA DOCUMENTOS O APORTE INFORMACIÓN ADICIONAL A LA ORIGINALMENTE PRESEN-

	Pág.
TADA, DEBE EJERCERSE BAJO UN CRITERIO DE NECESIDAD Y UN ESTÁNDAR DE RACIONALIDAD."	2182
Magistrado Filemón Haro Solís.—Queja 309/2015. Relativo a la ejecución en la que se sustentó la tesis III.2o.A.7 K (10a.), de título y subtítulo: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO, POR UNA PARTE LA NIEGUE Y, POR OTRA, LA CONCEDA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PUEDE ANALIZAR, DE OFICIO, EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA SÓLO CONTRA LA NEGATIVA, SI EL OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA AFECTA EL INTERÉS SOCIAL O CONTRAVIENE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO."	2215

Índice de Acciones de Inconstitucionalidad y Controversias Constitucionales

	Instancia	Pág.
Acción de inconstitucionalidad 19/2015.—Comisión Nacional de los Derechos Humanos.—Ministro Ponente: Eduardo Medina Mora I. Relativa a los temas síntesis: "Acceso a los servicios de salud. No debe condicionarse este derecho a que las instituciones de seguridad social reciban la totalidad de las cuotas y aportaciones correspondientes (inconstitucionalidad del artículo 10 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California).", "Aportaciones al fondo de pensiones a cargo de los pensionistas. Violación al principio de igualdad en relación con los trabajadores en activo (inconstitucionalidad del artículo 16, párrafos tercero y cuarto, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California).", "Seguro médico. Accidentes y enfermedades por caso fortuito o de fuerza mayor extraños al trabajo u ocurridos fuera del lugar donde se desempeña (artículo 39, fracción IV, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California)." y "Acción de inconstitucionalidad. Declaración de invalidez de normas generales en vía de consecuencia (inconstitucionalidad de los artículos 10 y 16, párrafos tercero y cuarto, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Gobierno y Municipios del Estado de Baja California)."	P.	165

Instancia	Pág.
------------------	-------------

Controversia constitucional 25/2014.—Municipio de Xochitepec, Estado de Morelos.—Ministro Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Relativa a los temas síntesis: "Controversia constitucional. Sobreseimiento por ausencia de conceptos de invalidez (artículos quinto y noveno transitorios de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, publicada el veintidós de enero de dos mil catorce en el Periódico Oficial de dicha entidad).", "Pensiones de los servidores públicos municipales. El artículo 115, fracción VIII, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, faculta a las Legislaturas de los Estados a legislar en esa materia (validez de los artículos 24, fracción III, párrafo sexto, 41, fracción XXXVII, cuarto, séptimo y octavo transitorios del Decreto Número 1874 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, publicado el 22 de enero de 2014 en el Periódico Oficial de dicha entidad)." y "Pensiones de los servidores públicos municipales. La regulación relativa emitida por los Ayuntamientos, no invade la autonomía municipal ni la facultad reglamentaria prevista en el artículo 115, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (validez de los artículos 24, fracción III, párrafo sexto, 41, fracción XXXVII, cuarto, séptimo y octavo transitorios del Decreto Número 1874 por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Orgánica Municipal del Estado de Morelos, publicado el 22 de enero de 2014 en el Periódico Oficial de dicha entidad)."

P.

225

Controversia constitucional 1/2015.—Municipio de Cuernavaca, Estado de Morelos.—Ministro Ponente: José Fernando Franco González Salas. Relativa a los temas síntesis: "Hacienda municipal. La omisión de la Legislatura Local de cumplir con los requisitos mínimos de motivación y fundamentación para modificar la iniciativa presentada por un Municipio, transgrede el artículo 115, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos

	Instancia	Pág.
(inconstitucionalidad de los artículos 11, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 56, 61, 62, 66, 67, 68 y 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil quince)." y "Controversia constitucional. Efectos de la declaración de invalidez de una norma, por apartarse de la iniciativa presentada por un Municipio sin cumplir con los requisitos mínimos de motivación y fundamentación para modificarla (inconstitucionalidad de los artículos 11, 14, 15, 16, 20, 21, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 56, 61, 62, 66, 67, 68 y 93 de la Ley de Ingresos del Municipio de Cuernavaca, Morelos, para el ejercicio fiscal del año dos mil quince)."	P.	265
Acciones de inconstitucionalidad acumuladas 77/2015 y 78/2015.—Partidos de la Revolución Democrática y Morena.—Ministra Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Relativas a los temas síntesis: "Organismos electorales locales. La posibilidad de que los partidos políticos participen mediante un representante legislativo en las sesiones de su consejo general como 'invitados permanentes', es contraria a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (invalidez del artículo 3, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Puebla).", "Coaliciones. Incompetencia de los Congresos Locales para regularlas (invalidez del artículo 4, fracción V, párrafo segundo, en la porción normativa que indica 'coaliciones', de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla).", "Frentes y fusiones. Ausencia de competencia de las Legislaturas Locales para regularlas (desestimación de la invalidez del artículo 4, fracción V, párrafo segundo, en la porción normativa que establece 'formar frentes,... o fusiones, ni', de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla).", "Campañas y precampañas. Plazos únicos e inflexibles para la elección de diputados locales, de Ayuntamientos y de gobernador (validez del artículo 4, fracción I, inciso c), en la porción normativa que		

Instancia	Pág.
------------------	-------------

señala 'las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de las campañas será de sesenta días para la elección de gobernador y de treinta días para la elección de diputados locales y Ayuntamientos', de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, al tenor de la interpretación conforme propuesta).", "Paridad de género. Inexistencia de una omisión con la emisión posterior de una norma por parte de la Legislatura Local, independientemente de su impugnación especial (validez del artículo 3, fracción III, en la porción normativa que indica 'así como establecer las reglas para garantizar la paridad entre géneros de las candidaturas a integrantes de la Legislatura', de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla).", "Representación proporcional. Congruencia entre el porcentaje exigido para que los partidos políticos locales conserven su registro y el previsto para la asignación de diputaciones por este principio (validez del artículo 35, fracción II, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, al tenor de la interpretación conforme propuesta)." y "Fiscalización de partidos políticos y de campañas de candidatos. El Instituto Nacional Electoral puede delegar esta atribución a los organismos electorales locales (validez de los artículos 3, fracción II, párrafos último y penúltimo, y 4, fracciones II, párrafo penúltimo, y III, párrafo primero, de la Constitución Política del Estado de Puebla)."

P.	309
----	-----

Acción de inconstitucionalidad 104/2014 y su acumulada 105/2014.—Partido Encuentro Social y Partido Nueva Alianza.—Ministro Ponente: Alberto Pérez Dayán. Relativa a los temas síntesis: "Fiscalización de recursos de los partidos políticos. Su regulación transitoria no vulnera los principios de certeza y seguridad jurídicas (validez de los artículos décimo segundo y décimo tercero transitorios del Decreto No. 112, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Baja California el 17 de octubre de 2014, por

	Instancia	Pág.
el que se aprobaron reformas a diversos numerales de la Constitución Política Local)." y "Financiamiento público de los partidos políticos. Fórmula para determinar su monto (validez del artículo 5, apartado A, párrafo décimo primero, de la Constitución Política del Estado de Baja California, reformado mediante Decreto No. 112, publicado en el Periódico Oficial Local el 17 de octubre de 2014, interpretado armónicamente con los numerales 42 y 43 de la Ley de Partidos Políticos estatal)."	P.	375

Índice de Normativa y Acuerdos Relevantantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Pág.

Acuerdo General Número 1/2016, de quince de febrero de dos mil dieciséis, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se levanta el aplazamiento del dictado de la resolución en los amparos en revisión en los que subsista el problema de procedencia de demandas de amparo en las que se controvierta la constitucionalidad del Decreto número 536, mediante el cual se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones del diverso número 534.- "Decreto por el que se autoriza al Estado de Coahuila de Zaragoza a contratar empréstitos para ser destinados al refinanciamiento de la deuda pública estatal a su cargo que se indica, y a celebrar las demás operaciones financieras y actos jurídicos que se señalan", publicado en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila del veintinueve de septiembre de dos mil once o bien, el problema de constitucionalidad del citado decreto; relacionado con el diverso 5/2012, de veintiséis de marzo de dos mil doce.

2243

Instrumento Normativo aprobado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el quince de febrero de dos mil dieciséis, por el que se modifican el título y el punto tercero, párrafo primero, del Acuerdo General Número 10/2015, de diez de agosto de dos mil quince, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por el que se ordena a los Juzgados Primero y Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el Distrito Federal, la suspensión del envío a los Tribunales Colegiados de Circuito Primero y Cuarto del Centro Auxiliar de la Primera Región, también con residencia en el Distrito Federal, y en consecuencia la remisión directa a este Alto Tribunal de amparos en revisión en los que subsista el problema de constitucionalidad, indistintamente, de los artículos 17-K, 18, 28, fracciones

Pág.

III y IV, 29, y segundo transitorio, fracciones III, IV y VIII, del Código Fiscal de la Federación, reformados mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del nueve de diciembre de dos mil trece, del diverso 22, fracciones IV y VI, de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2015, así como de las diversas disposiciones de observancia general que regulan lo previsto en los referidos preceptos en relación con el buzón tributario y la contabilidad en medios electrónicos; y se dispone el aplazamiento en el dictado de la resolución de los asuntos de esa naturaleza que se radiquen en los citados Tribunales Colegiados.

2248

Índice de Normativa y Acuerdos Relevantes del Consejo de la Judicatura Federal

	Pág.
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo.	2257
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 36/2014 que regula los Centros de Justicia Penal Federal, así como los diversos acuerdos generales que crean los Centros de Justicia Penal Federal en los Estados de Puebla, Durango, Yucatán, Zacatecas, Guanajuato, Baja California Sur, Querétaro, San Luis Potosí, Coahuila De Zaragoza, Sinaloa, Oaxaca, Chihuahua, Chiapas, Nayarit y Tlaxcala, para precisar la temporalidad en el cargo de administrador.	2259
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar 48/2013, que constituye el Fideicomiso para el desarrollo de infraestructura que implementa la reforma constitucional en materia penal.	2268
Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, relativo al Programa de Vivienda para Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación.	2272
Acuerdo General 1/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la semiespecialización y cambio de denominación de los Tribunales Colegiados del Decimoctavo Circuito con sede en Cuernavaca, Morelos; a las reglas de turno, sistema de recep-	

	Pág.
ción y distribución de asuntos entre los mencionados órganos colegiados, así como al cambio de denominación de la actual Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados referidos y a la creación de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del citado Circuito.	2282
Acuerdo General 2/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones del Noveno Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Cuernavaca, Morelos y su transformación en Segundo Tribunal Unitario del Decimoctavo Circuito, así como a su competencia, jurisdicción territorial, domicilio, y fecha de inicio de funciones y residencia. Al cambio de denominación del Tribunal Unitario del mismo Circuito y residencia. Así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los Tribunales Unitarios del circuito y residencia indicados; y a la conclusión de funciones de la Oficina de Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la Primera Región en Cuernavaca, Morelos y su transformación en Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios del Decimoctavo Circuito en Cuernavaca, Morelos.	2292
Acuerdo General 3/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea los Centros de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en los Reclusorios Oriente, Sur y Norte.	2302
Acuerdo General 4/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl.	2312
Acuerdo General 5/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Morelos, con residencia en la ciudad de Cuernavaca.	2322
Acuerdo General 6/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca.	2331

	Pág.
Acuerdo General 7/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Colima, con residencia en la ciudad del mismo nombre.	2341
Acuerdo General 8/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Aguascalientes, con residencia en la ciudad del mismo nombre.	2350
Acuerdo General 9/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa.	2359
Acuerdo General 10/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Nuevo León, con residencia en Cadereyta.	2369
Acuerdo General 11/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún.	2378
Acuerdo General 12/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito.	2387
Acuerdo General 14/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de residencia y de domicilio del Segundo Tribunal Unitario en Materias Civil y Administrativa del Primer Circuito.	2393

Los índices en Materia Constitucional, en Materia Penal, en Materia Administrativa, en Materia Civil, en Materia Laboral, en Materia Común, de Jurisprudencia por Contradicción, de Ordenamientos, así como la Tabla General Temática de Tesis de Jurisprudencia y Aisladas correspondientes a las tesis publicadas en esta *Gaceta del Semanario Judicial de la Federación* son consultables en la Gaceta Electrónica.

OCTAVA PARTE

SENTENCIAS DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
CUYA PUBLICACIÓN NO ES OBLIGATORIA
Y LOS VOTOS RESPECTIVOS
(Véase base de datos)

NOVENA PARTE

SENTENCIAS RELEVANTES DICTADAS
POR OTROS TRIBUNALES,
PREVIO ACUERDO DEL PLENO
O DE ALGUNA DE LAS SALAS
DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DÉCIMA PARTE

OTROS ÍNDICES

Índice en Materia Constitucional

	Número de identificación	Pág.
APELACIÓN EN CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR. EL ARTÍCULO 950 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.	1a. XLV/2016 (10a.)	665
CONDENA CONDICIONAL Y SUSTITUTIVOS DE LA PENA. CUANDO UNA AUTORIDAD DEL FUERO COMÚN, EN EJERCICIO DE LA COMPETENCIA CONCURRENTE, CONOCE DE UN DELITO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE SALUD, DEBE RESOLVER RESPECTO DE DICHOS BENEFICIOS, ATENTO A LOS ARTÍCULOS 70 Y 90 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y NO A LO QUE ESTABLEZCA LA LEY SUSTANTIVA LOCAL CORRESPONDIENTE.	XXX.2o.1 P (10a.)	2043
CONFRONTACIÓN. PARA QUE LA DILIGENCIA RELATIVA PRACTICADA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA PUEDA TENER VALIDEZ DURANTE EL PROCESO, ES NECESARIO QUE EL DEFENSOR DEL INculpADO ESTÉ PRESENTE DURANTE SU DESARROLLO, PARA SALVAGUARDAR SU DERECHO DE DEFENSA ADECUADA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).	I.3o.P43 P (10a.)	2045
CONTROL PROVISIONAL PREVENTIVO. PARÁMETROS A SEGUIR POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA PARA QUE AQUÉL TENGA VALIDEZ CON POSTERIORIDAD A LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA.	1a. XXVI/2016 (10a.)	669

	Número de identificación	Pág.
COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE SU CONDENA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUN CUANDO HAYA PROCEDIDO LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA Y EL DEMANDADO OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE A PESAR DE NO APERSONARSE, AL REDUCIR EL JUEZ, EN EJERCICIO DEL CONTROL CONVENCIONAL EX OFFICIO, EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS POR SER USURARIOS.	XXVII.3o.30 C (10a.)	2050
DEMANDA LABORAL. EL REQUERIMIENTO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA QUE EL PROMOVENTE ACREDITE SU IDENTIDAD, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE TENERLA POR NO INTERPUESTA, ES ILEGAL Y CONTRARÍA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).	VI.1o.T. J/2 (10a.)	1953
DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO.	VII.2o.P. J/2 (10a.)	1966
DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. LA AFECTACIÓN PRODUCIDA POR UNA DECISIÓN JURISDICCIONAL QUE RESUELVE SOBRE LA PROPIEDAD Y LA POSESIÓN NO IMPLICA UNA VULNERACIÓN A ESE DERECHO.	1a. XXXV/2016 (10a.)	670
DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. SE VULNERA EN PERJUICIO DE LOS		

	Número de identificación	Pág.
MENORES DE EDAD CON MOTIVO DE LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES Y SENSIBLES EN EL PORTAL DE INTERNET DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A TRAVÉS DE SU DEPARTAMENTO DE LOCATEL, A PROPÓSITO DE LA PETICIÓN DE UN PARTICULAR, QUE NO SE UBIQUE EN ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO INMINENTE DE SUFRIR DAÑO GRAVE EN SU INTEGRIDAD PERSONAL.	XXII.1o.1 CS (10a.)	2060
DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. APRECIACIÓN DE SU VALIDEZ CONSTITUCIONAL CUANDO LA AUTORIDAD TIENE CONOCIMIENTO, POR MEDIO DE UNA DENUNCIA INFORMAL, QUE SE ESTÁ COMETIENDO O SE ACABA DE COMETER UN DELITO.	1a. XXV/2016 (10a.)	671
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES. EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO SE RIGE POR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA PREVIA.	1a. XXIX/2016 (10a.)	672
DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. LA FALTA DE LLAMAMIENTO A UNA PERSONA CUANDO HAN CONCLUIDO CON EL RECONOCIMIENTO DEL SUCESOR DE DERECHOS AGRARIOS SIN QUE SE HAYA DEJADO LISTA DE SUCESORES, NO TRANSGREDE SUS DERECHOS HUMANOS.	IX.2o.8 A (10a.)	2064
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. EL ARTÍCULO 243, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, QUE PREVÉ UNA AGRAVANTE PARA AQUEL DELITO, NO CONTIENE UNA PENA INUSITADA NI TRASCENDENTAL.	1a. XLIV/2016 (10a.)	675

	Número de identificación	Pág.
IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. CARACTERÍSTICAS DEL ESCRUTINIO A QUE DEBEN SUJETARSE EN EL AMPARO LOS AJUSTES RAZONABLES, COMO GARANTÍA SECUNDARIA DE LOS DERECHOS RELATIVOS, CUANDO SEAN REFERENTES DE UNA DE LAS DENOMINADAS CATEGORÍAS SOSPECHOSAS.	IV/2o.A.5 CS (10a.)	2073
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE PREVÉ LA EXENCIÓN DE SU PAGO A LAS EROGACIONES QUE EFECTÚEN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUITAD TRIBUTARIA.	PC.IV.A. J/21 A (10a.)	1320
IMPUESTOS A LA CONSTRUCCIÓN. LOS ARTÍCULOS 300 A 302 DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE EN 2011, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.	1a. XL/2016 (10a.)	676
IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY RELATIVA NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUITAD TRIBUTARIA.	1a. XXVIII/2016 (10a.)	677
INFONAVIT. LA REGLA DÉCIMA PRIMERA DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DEL CITADO INSTITUTO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA TUTELADO POR EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.	I.1o.A.7 CS (10a.)	2079
INSTITUCIONES EDUCATIVAS PRIVADAS. ESCRUTINIO DE LAS RELACIONES QUE ENTABLAN CON SUS		

	Número de identificación	Pág.
USUARIOS DESDE UNA PERSPECTIVA DE CONTROL CONSTITUCIONAL Y DE DERECHOS HUMANOS.	IV.2o.A.7 CS (10a.)	2080
INTERÉS LEGÍTIMO EN AMPARO CONTRA LEYES PENALES. SE ACTUALIZA ANTE NORMAS CUYA MERA EXISTENCIA GENERA UN EFECTO DISUASIVO EN EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.	1a. XXXI/2016 (10a.)	678
JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE MORELOS DESIGNADOS TEMPORAL E INTERINAMENTE. PARÁMETROS PARA SU REMOCIÓN, CONFORME AL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL.	XVIII.5o.1 CS (10a.)	2087
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. TIPOS DE AFECTACIÓN RESENTIBLE A CAUSA DE NORMAS PENALES.	1a. XXX/2016 (10a.)	682
MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. SE ACTUALIZA SU RATIFICACIÓN TÁCTICA SI AL CONCLUIR EL PERIODO CONSTITUCIONAL DE DURACIÓN DE SU CARGO NO SE HA EMITIDO EL DICTAMEN EN EL QUE SE DETERMINE SI DEBEN SER REELECTOS.	XX.2o.4 A (10a.)	2095
PERSONAS CON DIVERSIDADES FUNCIONALES. CONSIDERAR QUE DEBEN AGOTAR LAS POSIBILIDADES DE ADECUARSE A SU ENTORNO PARA EJERCER PLENAMENTE SUS DERECHOS HUMANOS EN CONDICIONES DE IGUALDAD, ANTES DE PRETENDER LA REALIZACIÓN DE AJUSTES RAZONABLES, ACENTÚA LA DISCRIMINACIÓN DE QUE SON OBJETO Y NO CORRESPONDE AL MODELO DE ENTENDIMIENTO SOCIAL DE LA DISCAPACIDAD ACTUALMENTE ADOPTADO.	IV.2o.A.6 CS (10a.)	2109

	Número de identificación	Pág.
PRINCIPIO DE IDENTIDAD. EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN EL FUERO MILITAR, POR LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, AQUÉL IMPERA ENTRE EL JUEZ QUE DESAHOGÓ LA AUDIENCIA DE DERECHO Y EL QUE RESOLVE-RÁ EN DEFINITIVA.	I.5o.P.44 P (10a.)	2113
RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS.	2a./J. 12/2016 (10a.)	763
REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS EXPEDIDOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO. CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO.	2a./J. 11/2016 (10a.)	803
REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER ESTE BENEFICIO A LOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (SECUESTRO), EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE NO TIENE APLICACIÓN RETROACTIVA EN SU BENEFICIO LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.	PC.I.P. J/20 P (10a.)	1732
SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011		

	Número de identificación	Pág.
Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*).]	2a. II/2016 (10a.)	951
SUSPENSIÓN EN EL CARGO DE UNA AUTORIDAD (MUNÍCIPE DE UN AYUNTAMIENTO) POR INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO. CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO INICIAR EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.	III.3o.T.37 L (10a.)	2189
TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, CONTENIDAS EN LOS DECRETOS NÚMEROS 24646/LX/13 Y 23711/LIX/11. LOS PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL ELEMENTO RELATIVO A LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRAN EN LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DE ESE ESTADO Y EL HECHO DE QUE LA DEFINICIÓN DE AQUÉLLOS ESTÉ EN EL REGLAMENTO DE ÉSTA, SÓLO IMPLICA QUE LOS DESARROLLA A DETALLE, POR LO QUE NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.	PC.III.A. J/12 A (10a.)	1843
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CON INDEPENDENCIA DE QUE PERTENEZCAN AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O HAYAN SIDO CONTRATADOS BAJO EL ESQUEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, NO TIENEN DERECHO A LA REINSTALACIÓN, AL EXISTIR UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL AL RESPECTO.	2a./J. 22/2016 (10a.)	836
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. NATURALEZA JURÍDICA Y SUSTENTO CONSTITUCIONAL DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN QUE CONFORMAN LOS PERTENECIENTES AL SERVICIO		

	Número de identificación	Pág.
PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.	2a./J. 17/2016 (10a.)	840
TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, AL EXIGIR LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE TRABAJO [ABANDONO DE LA TESIS IV.2o.A.80 A (10a.)].	IV.2o.A.4 CS (10a.)	2231
TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, AL EXIGIR LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL [ABANDONO DE LAS TESIS IV.2o.A.78 A (10a.) Y IV.2o.A.81 A (10a.)].	IV.2o.A.3 CS (10a.)	2233
TRIBUNALES CONSTITUCIONALES LOCALES. CARECEN DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE ASUNTOS RELACIONADOS CON VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	1a. XXXVIII/2016 (10a.)	686
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA CLÁUSULA QUINTA TRANSITORIA DEL CONVENIO QUE CREA Y REGULA EL RÉGIMEN DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE		

	Número de identificación	Pág.
ESA INSTITUCIÓN, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN.	2a. III/2016 (10a.)	953
VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).	1a. XLIII/2016 (10a.)	687
VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).	1a. XLII/2016 (10a.)	688

Índice en Materia Penal

	Número de identificación	Pág.
ACCIÓN PENAL. LAS PRUEBAS PARA PERFECCIONARLA, OFRECIDAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CASO DE QUE SE NIEGUE LA ORDEN DE APREHENSIÓN, REAPREHENSIÓN O COMPARECENCIA, A FIN DE QUE EL JUEZ ENTRE NUEVAMENTE AL ESTUDIO DE LA CAUSA Y SE PRONUNCIE RESPECTO DE DICHOS MANDATOS, DEBEN DESAHOGARSE POR LA REPRESENTACIÓN SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ) [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 75/2012 (10a.)].	IX.2o.3 P (10a.)	2016
ANTECEDENTES PENALES. NO LOS CONSTITUYEN LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES DE CAUSAS PENALES QUE SE ACUMULARON, POR LO QUE DEBE CONSIDERARSE AL INCUPLADO COMO DELINCUENTE PRIMARIO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LOS MÉTODOS ALTERNOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO.	III.2o.P92 P (10a.)	2024
AUTO DE NO VINCULACIÓN A PROCESO. SI EL JUEZ DE CONTROL ADVIERTE QUE LOS HECHOS IMPUTADOS A LA PERSONA QUE COMPARECIÓ A LA AUDIENCIA INICIAL ACONTECIERON ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO, DEBE DECLARARSE INCOMPETENTE, PERO NO DETERMINAR AQUÉL POR ESE MOTIVO.	XXII.4o.1 P (10a.)	2024

	Número de identificación	Pág.
AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA QUE EL JUEZ DE CONTROL PUEDA DETERMINAR SI EL HECHO IMPUTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACUSADO ES O NO CONSTITUTIVO DE DELITO, DEBE ANALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL ILÍCITO CORRESPONDIENTE, ESTO ES, SUS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS.	XXVII.3o.20 P (10a.)	2025
AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EL IMPUTADO SOLICITÓ LA PRÓRROGA A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL PARA QUE SE LE RESUELVA SU SITUACIÓN JURÍDICA, EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ EN APTITUD DE REQUERIR QUE SE DECRETE AQUÉL, PREVIAMENTE A ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA CELEBRADA CON MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONSTITUCIONAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MORELOS).	XVIII.5o.1 P (10a.)	2026
AVERIGUACIÓN PREVIA. SI DURANTE ÉSTA EL INculpado ES PUESTO EN LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, ES INAPLICABLE PARA EL MINISTERIO PÚBLICO EL TÉRMINO DE 48 HORAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA DEFINIR SU SITUACIÓN JURÍDICA MEDIANTE EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL O LIBERTAD CON LAS RESERVAS DE LEY.	PC.I.P. J/21 P (10a.)	1118
CONDENA CONDICIONAL Y SUSTITUTIVOS DE LA PENA. CUANDO UNA AUTORIDAD DEL FUERO COMÚN, EN EJERCICIO DE LA COMPETENCIA CONCURRENTES, CONOCE DE UN DELITO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE SALUD, DEBE RESOLVER RESPECTO DE DICHOS BENEFICIOS, ATENTO A LOS ARTÍCULOS 70 Y 90 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y NO A LO QUE ESTABLEZCA LA LEY SUSTANTIVA LOCAL CORRESPONDIENTE.	XXX.2o.1 P (10a.)	2043

	Número de identificación	Pág.
CONFRONTACIÓN. PARA QUE LA DILIGENCIA RELATIVA PRACTICADA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA PUEDA TENER VALIDEZ DURANTE EL PROCESO, ES NECESARIO QUE EL DEFENSOR DEL INculpADO ESTÉ PRESENTE DURANTE SU DESARROLLO, PARA SALVAGUARDAR SU DERECHO DE DEFENSA ADECUADA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).	I.3o.P43 P (10a.)	2045
CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL <i>EX OFFICIO</i> . LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE JALISCO, NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DEL ARTÍCULO 173 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, AL TRATARSE DE UNA NORMA QUE RIGE EL JUICIO DE ORIGEN QUE NO LES CORRESPONDE APLICAR.	III.2o.P94 P (10a.)	2047
CONTROL PROVISIONAL PREVENTIVO. PARÁMETROS A SEGUIR POR LOS ELEMENTOS DE LA POLICÍA PARA QUE AQUÉL TENGA VALIDEZ CON POSTERIORIDAD A LA DETENCIÓN EN FLAGRANCIA.	1a. XXVI/2016 (10a.)	669
CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO.	I.3o.P41 P (10a.)	2049
DEFENSOR DEL QUEJOSO PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. CUENTA CON LEGITIMACIÓN LEGAL PARA DESIGNAR AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA.	I.3o.P42 P (10a.)	2054

	Número de identificación	Pág.
DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN AGRAVADA DE NARCÓTICOS. ANTES DE REALIZAR EL CONTROL CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DEL SUPUESTO NORMATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 195, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEBE VERIFICARSE SI LA PRESUNCIÓN LEGAL RELACIONADA CON LA FINALIDAD DE LA DROGA, SE APLICÓ EN PERJUICIO DEL REO.	XXI.1o.PA.9 P (10a.)	2055
DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO.	VII.2o.P. J/2 (10a.)	1966
DETENCIÓN DEL AUTOR INTELECTUAL DEL DELITO. NO PUEDE CONFIGURARSE BAJO LA HIPÓTESIS DE FLAGRANCIA PORQUE, DE LO CONTRARIO, ES ILEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).	VII.2o.T.5 P (10a.)	2062
DETENCIÓN EN FLAGRANCIA. APRECIACIÓN DE SU VALIDEZ CONSTITUCIONAL CUANDO LA AUTORIDAD TIENE CONOCIMIENTO, POR MEDIO DE UNA DENUNCIA INFORMAL, QUE SE ESTÁ COMETIENDO O SE ACABA DE COMETER UN DELITO.	1a. XXV/2016 (10a.)	671
DICTÁMENES PERICIALES. LA NO RATIFICACIÓN DEL RENDIDO POR EL PERITO OFICIAL CONSTITUYE UN VICIO FORMAL SUBSANABLE, POR LO QUE EN NINGÚN CASO DEBE DAR LUGAR A CONSIDERAR QUE CONSTITUYE PRUEBA ILÍCITA QUE DEBA SER		

	Número de identificación	Pág.
EXCLUIDA DEL ANÁLISIS PROBATORIO CORRESPONDIENTE.	1a. XXXIV/2016 (10a.)	673
FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. EL ARTÍCULO 243, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, QUE PREVÉ UNA AGRAVANTE PARA AQUEL DELITO, NO CONTIENE UNA PENA INUSITADA NI TRASCENDENTAL.	1a. XLIV/2016 (10a.)	675
FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.	XXIV.2o. J/1 (10a.)	1982
INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. PROCEDE EN CUALQUIER ESTADO DEL PROCESO, INCLUSO, DESPUÉS DEL CIERRE DE INSTRUCCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 546 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL).	I.3o.P46 P (10a.)	2076
INTERÉS LEGÍTIMO EN AMPARO CONTRA LEYES PENALES. SE ACTUALIZA ANTE NORMAS CUYA MERA EXISTENCIA GENERA UN EFECTO DISUASIVO EN EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN.	1a. XXXI/2016 (10a.)	678
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LOS PERIODISTAS CUENTAN CON INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO, SIN ACTO DE APLICACIÓN PREVIO, EL		

	Número de identificación	Pág.
ARTÍCULO 398 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, POR SU POTENCIAL DE AFECTACIÓN EN LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA.	1a. XXXIII/2016 (10a.)	680
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. TIPOS DE AFECTACIÓN RESENTIBLE A CAUSA DE NORMAS PENALES.	1a. XXX/2016 (10a.)	682
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. TRATÁNDOSE DE DELITOS QUE SE PERSIGUEN POR QUERRELLA DE LA VÍCTIMA O DEL OFENDIDO, SÓLO SE INTERRUMPE POR LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).	PC.XXVII. J/1 P (10a.)	1555
PRINCIPIO DE IDENTIDAD. EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN EL FUERO MILITAR, POR LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, AQUEL IMPERA ENTRE EL JUEZ QUE DESAHOGÓ LA AUDIENCIA DE DERECHO Y EL QUE RESOLVERÁ EN DEFINITIVA.	I.5o.P44 P (10a.)	2113
RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA PENAL. AUN CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA HAYA SUSTENTADO SU DECISIÓN HACIENDO SUYOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, DEBIDO A QUE NO ENCONTRÓ MOTIVO PARA SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, CON BASE EN LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 40/97, ESA CIRCUNSTANCIA NO LO AUTORIZA A INCUMPLIR CON SU DEBER DE FUNDARLA Y MOTIVARLA (ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRIBUNALES DE ALZADA DE COMPLETITUD DE SUS DECISIONES, SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS).	II.1o.32 P (10a.)	2122

	Número de identificación	Pág.
RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA PENAL. PARA QUE LA AUTORIDAD DE ALZADA CUMPLA SU DEBER DE FUNDARLO Y MOTIVARLO Y OTORGUE AL RECURRENTE LA OPORTUNIDAD DE IMPUGNAR LAS CONSIDERACIONES EN LAS QUE AQUÉL SE FUNDA, DEBE PLASMAR EN SU SENTENCIA LAS RAZONES Y EL SENTIDO DE SU FALLO.	II.1o.31 P (10a.)	2124
REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER ESTE BENEFICIO A LOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (SECUESTRO), EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE NO TIENE APLICACIÓN RETROACTIVA EN SU BENEFICIO LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.	PC.I.P. J/20 P (10a.)	1732
REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER ESTE BENEFICIO TRATÁNDOSE DE SENTENCIADOS POR EL DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (SECUESTRO), DE ACUERDO A LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ACTUALMENTE ABROGADA, HASTA ANTES DE LA REFORMA A SU ARTÍCULO 50, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 4 DE JUNIO DE 2004.	PC.I.P. J/19 P (10a.)	1733
REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA EN EL FUERO MILITAR. DEBE ORDENARSE SI EL JUEZ QUE DICTÓ LA SENTENCIA DEFINITIVA NO FUE EL MISMO QUE CELEBRÓ LA AUDIENCIA DE DERECHO EN LA QUE SE DECLARÓ VISTO EL ASUNTO.	I.5o.P.45 P (10a.)	2136

	Número de identificación	Pág.
ROBO CALIFICADO. LA AGRAVANTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 224, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE ACTUALIZA AUNQUE EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO NO ESTÉ PRESTANDO EL SERVICIO A QUE ESTÁ DESTINADO.	PC.I.P. J/18 P (10a.)	1764
SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA PENAL. SI EL QUEJOSO ES LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, ES IMPROCEDENTE FIJARLE, DISCRECIONALMENTE, LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 125, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA, PARA QUE AQUÉLLA CONTINÚE SURTIENDO EFECTOS.	I.3o.P.45 P (10a.)	2190

Índice en Materia Administrativa

	Número de identificación	Pág.
ACTAS DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA. QUIÉ- NES DEBEN RATIFICARLAS ANTE EL TRIBUNAL, PARA QUE QUEDEN PERFECCIONADAS.	I.14o.T.2 L (10a.)	2017
AMPARO CONTRA LEYES. EL RECIBO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, ES EFICAZ PARA ESTABLECER LA FECHA DE CONOCIMIEN- TO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS E INICIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMO- VER EL JUICIO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE QUE LA QUEJO- SA TUVO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN CON POSTERIORIDAD.	PC.XXII. J/5 A (10a.)	1062
AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS HETE- ROAPLICATIVAS. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL CONTRIBUYENTE PRETENDE RECLAMARLAS CON BASE EN EL INTERÉS LEGÍTIMO.	XXII.1o.12 A (10a.)	2020
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUE- BLA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA FALTA DE RESPUESTA Y LA POSTERIOR CONTESTACIÓN DE UNA PETI- CIÓN FORMULADA EN EL CONTEXTO DEL PROCE- SO DE ELECCIÓN DEL RECTOR.	VI.1o.A.93 A (10a.)	2029
CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO DIRECTO. ES INNECESARIO DAR LA VISTA A QUE SE REFIERE		

	Número de identificación	Pág.
EL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE ACTUALIZA ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CON MOTIVO DE LA DECISIÓN ADOPTADA POR EL PROPIO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN UN RECURSO DE REVISIÓN FISCAL RELACIONADO.	I.12o.A.3 A (10a.)	2034
COMPETENCIA ECONÓMICA. CONCEPTO DE "PODER SUSTANCIAL" EN ESA MATERIA.	I.1o.A.E.122 A (10a.)	2036
COMPETENCIA ECONÓMICA. EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 34 BIS 2 DE LA ABROGADA LEY FEDERAL RELATIVA PARA QUE LA COMISIÓN FEDERAL EN LA MATERIA RECABE INFORMACIÓN DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PUEDE PRORROGARSE, SIEMPRE QUE SEA POR CAUSA JUSTIFICADA Y NO EXCEDA EL LAPSO PARA CONCLUIR LA INVESTIGACIÓN.	I.1o.A.E.118 A (10a.)	2037
COMPETENCIA ECONÓMICA. LA EXIGENCIA DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN QUE PERMITA DETERMINAR EL MERCADO RELEVANTE Y EL PODER SUSTANCIAL DE UN DETERMINADO AGENTE ECONÓMICO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 33 BIS, FRACCIÓN I, DE LA ABROGADA LEY FEDERAL RELATIVA, NO IMPLICA QUE AMBOS ELEMENTOS SE DEFINIRÁN, EXCLUSIVAMENTE, CON LA INFORMACIÓN Y LAS PRUEBAS APORTADAS POR EL SOLICITANTE.	I.1o.A.E.117 A (10a.)	2038
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE CONTRVIERTEN LA NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE UN IMPUESTO POR PAGO DE LO INDEBIDO, CON BASE EN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, SI ÉSTA NO SE RECLAMÓ OPORTUNAMENTE EN LA VÍA INDIRECTA CON MOTIVO DEL ENTERO DEL TRIBUTO.	XVI.1o.A.73 A (10a.)	2041

	Número de identificación	Pág.
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE SOSTIENEN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA AUTOLIQUIDACIÓN DE CONTRIBUCIONES, SI EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ORIGEN SE IMPUGNARON LOS RECIBOS DE PAGO QUE LA CONSTITUYEN.	IV.2o.A.113 A (10a.)	2042
DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES. EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO SE RIGE POR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA PREVIA.	1a. XXIX/2016 (10a.)	672
DEVOLUCIÓN DE PAGO DE LO INDEBIDO. ES IMPROCEDENTE LA SOLICITUD RELATIVA SUSTENTADA EN QUE LA LEY QUE ESTABLECE LA CONTRIBUCIÓN NO ES DE OBSERVANCIA OBLIGATORIA POR UN VICIO EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, SI NO SE RECLAMÓ OPORTUNAMENTE EN EL AMPARO INDIRECTO CON MOTIVO DEL ENTERO CORRESPONDIENTE.	XVI.1o.A.74 A (10a.)	2064
DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. LA FALTA DE LLAMAMIENTO A UNA PERSONA CUANDO HAN CONCLUIDO CON EL RECONOCIMIENTO DEL SUCESOR DE DERECHOS AGRARIOS SIN QUE SE HAYA DEJADO LISTA DE SUCESORES, NO TRANSGREDE SUS DERECHOS HUMANOS.	IX.2o.8 A (10a.)	2064
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA OBLIGACIÓN A CARGO DE LAS PERSONAS MORALES DE RETENER EL TRIBUTO QUE SE LES TRASLADA POR LA ADQUISICIÓN DE DESPERDICIOS PARA SER UTILIZADOS COMO INSUMO DE SU ACTIVIDAD INDUSTRIAL O PARA SU COMERCIALIZACIÓN, ES EXIGIBLE TRATÁNDOSE DE METALES PUESTOS EN CONDICIONES DE REUTILIZACIÓN.	I.1o.A.123 A (10a.)	2074

	Número de identificación	Pág.
IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE PREVE LA EXENCIÓN DE SU PAGO A LAS EROGACIONES QUE EFECTÚEN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.	PC.IV.A. J/21 A (10a.)	1320
IMPUESTOS A LA CONSTRUCCIÓN. LOS ARTÍCULOS 300 A 302 DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE EN 2011, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA.	1a. XL/2016 (10a.)	676
IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY RELATIVA NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.	1a. XXVIII/2016 (10a.)	677
INCOMPETENCIA, EXCEPCIÓN DE. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACUERDO DEL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESERVA SU RESOLUCIÓN PARA EMITIRLA DE FORMA CONJUNTA CON LA SENTENCIA.	XXI.1o.PA.33 A (10a.)	2077
INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO. EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SE REFIERE A AMBOS, COMO CONDICIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD.	XXVII.3o.22 A (10a.)	2082
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE CONTRA LAS MULTAS IMPUESTAS COMO MEDIDA DE APREMIO POR LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE.	I.16o.A.16 A (10a.)	2089
JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA POR EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA		

	Número de identificación	Pág.
CUANDO EL QUEJOSO SOSTENGA HABER TENIDO CONOCIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, EN UNA FECHA POSTERIOR A LA QUE OSTENTA EL RECIBO DE PAGO RESPECTIVO.	PC.XXII. 1 A (10a.)	1919
JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES.	PC.XXVII. J/4 A (10a.)	1426
LINEAMIENTOS SOBRE <i>MUST CARRY</i> Y <i>MUST OFFER</i> EMITIDOS POR EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. EL CONCEPTO "MISMA ZONA DE COBERTURA GEOGRÁFICA", PREVISTO EN SU ARTÍCULO 3, RESPETA LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN QUE RIGEN EL SERVICIO DE CADA TELEVISORA.	I.1o.A.E.128 A (10a.)	2092
LINEAMIENTOS SOBRE <i>MUST CARRY</i> Y <i>MUST OFFER</i> EMITIDOS POR EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. LOS CONCESIONARIOS DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA TERRENAL CARECEN DE INTERÉS PARA RECLAMAR EN AMPARO LA RESTRICCIÓN QUE, ADUCEN, AQUÉLLOS IMPONEN A LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE AUTOR, CONSISTENTE EN ENTREGAR GRATUITAMENTE EL CONTENIDO QUE LES PERTENECE.	I.1o.A.E.127 A (10a.)	2093
MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. SE ACTUALIZA SU RATIFICACIÓN TÁCITA SI AL CONCLUIR EL PERIODO CONSTITUCIONAL DE DURACIÓN DE SU CARGO NO SE HA EMITIDO EL DICTAMEN EN EL QUE SE DETERMINE SI DEBEN SER REELECTOS.	XX.2o.4 A (10a.)	2095

	Número de identificación	Pág.
MARCA. SU REGISTRO AMPARA ÚNICAMENTE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DE FORMA EXPRESA Y ESPECÍFICA REFIERE SU TÍTULO.	I.1o.A.120 A (10a.)	2096
MERCADO RELEVANTE. CARACTERÍSTICAS Y UTILIDAD DE LA PRUEBA DE ELASTICIDAD CRUZADA DE LA DEMANDA Y DE LA OFERTA PARA DETERMINARLO.	I.1o.A.E.121 A (10a.)	2097
MERCADO RELEVANTE. SU DETERMINACIÓN A PARTIR DE LA PRUEBA DE INTERCAMBIABILIDAD RAZONABLE, CON BASE EN EL EXAMEN DE ELASTICIDAD DE LA DEMANDA Y DE LA OFERTA (LEGISLACIÓN ABROGADA).	I.1o.A.E.120 A (10a.)	2098
MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU MONTO POR IMPEDIR EL INICIO O DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, AL NO PRESENTAR DE INMEDIATO LOS LIBROS Y REGISTROS QUE FORMEN PARTE DE LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE, ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, POR REMISIÓN EXPRESA DEL LEGISLADOR.	IV.2o.A.114 A (10a.)	2099
PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL. LA INCOMPATIBILIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN IV, DE LA LEY RELATIVA IMPLICA RESPONSABILIDAD SÓLO PARA EL REPRESENTANTE CIUDADANO Y NO PARA EL SERVIDOR PÚBLICO.	I.1o.A.118 A (10a.)	2105
PATENTE. LA DESTRUCCIÓN RETROACTIVA DE SUS EFECTOS, EN RAZÓN DE SU ANULACIÓN, SE LIMITA RESPECTO DEL DERECHO DE EXCLUSIÓN QUE		

	Número de identificación	Pág.
OTORGA Y, POR TANTO, NO ELIMINA LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE SU EXPLOTACIÓN COMERCIAL MIENTRAS ESTUVO VIGENTE.	I.1o.A.121 A (10a.)	2105
PENSIONES DEL ISSSTE. EL INCREMENTO DE LAS QUE FUERON OTORGADAS AL AMPARO DE LA LEY DE 1959 DEBE ATENDER, PRIMERAMENTE, A LA MECÁNICA DE AUMENTO SEXENAL Y, A PARTIR DE LA REFORMA A SU ARTÍCULO 136, A LA VARIACIÓN DE LOS SUELDOS DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO.	I.1o.A.125 A (10a.)	2108
PODER SUSTANCIAL EN EL MERCADO DE LOS DISTINTOS SERVICIOS DESAGREGADOS DE INTERCONEXIÓN. EL PRINCIPIO DE LIBERTAD TARIFARIA NO EXIME AUTOMÁTICAMENTE A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA IMPUTACIÓN DE CONTAR CON AQUÉL.	I.1o.A.E.125 A (10a.)	2110
PODER SUSTANCIAL EN UN MERCADO RELEVANTE. VARIABLES QUE DEBEN CONSIDERARSE PARA DETERMINARLO.	I.1o.A.E.123 A (10a.)	2110
RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, EMITIDAS EN CUMPLIMIENTO A UN MANDATO DEL PLENO DE ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL.	PC.III.A. J/14 A (10a.)	1642
REDUCCIÓN DE SANCIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 33 BIS 3 DE LA ABROGADA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. ES NOTORIA LA IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RELATIVA, INTERPUESTA POR PERSONA DISTINTA DEL BENEFICIADO.	I.1o.A.E.112 A (10a.)	2132

	Número de identificación	Pág.
REDUCCIÓN DE SANCIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 33 BIS 3 DE LA ABROGADA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. RELEVANCIA DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA IDENTIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS QUE SOLICITEN ACOGERSE A ESE BENEFICIO.	I.1o.A.E.113 A (10a.)	2134
"REGLAS QUE CONFIEREN PODERES". SU CONCEPTO DESDE LOS ENFOQUES ESTRUCTURAL Y FUNCIONAL Y SU DISTINCIÓN CON LAS "NORMAS DE MANDATO".	I.1o.A.E.114 A (10a.)	2135
REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR VICIOS FORMALES, AUN CUANDO SE SUSTENTEN EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 150/2010 Y 2a./J. 88/2011).	XVI.1o.A. J/24 (10a.)	1993
REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, POR AUSENCIA O DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, AL OMITIR PRECISAR EL PERIODO O PERIODOS SUJETOS A REVISIÓN (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 150/2010 Y 2a./J. 88/2011).	XVI.1o.A. J/25 (10a.)	2003
SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN. LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA REQUERIR AL CONTRIBUYENTE QUE EXHIBA DOCUMENTOS O APOORTE INFORMACIÓN ADICIONAL A LA ORIGINALMENTE		

	Número de identificación	Pág.
PRESENTADA, DEBE EJERCERSE BAJO UN CRITERIO DE NECESIDAD Y UN ESTÁNDAR DE RACIONALIDAD.	I.1o.A.119 A (10a.)	2184
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA EJECUCIÓN DE LA CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL NOMBRAMIENTO DE UN CONSEJERO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE GUERRERO Y SU SUSTITUCIÓN EN ESE CARGO.	XXI.1o.P.A.32 A (10a.)	2223
TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, CONTENIDAS EN LOS DECRETOS NÚMEROS 24646/LX/13 Y 23711/LIX/11. LOS PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL ELEMENTO RELATIVO A LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRAN EN LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DE ESE ESTADO Y EL HECHO DE QUE LA DEFINICIÓN DE AQUÉLLOS ESTÉ EN EL REGLAMENTO DE ÉSTA, SÓLO IMPLICA QUE LOS DESARROLLA A DETALLE, POR LO QUE NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.	PC.III.A. J/12 A (10a.)	1843
TELECOMUNICACIONES. LA EMISIÓN DE UNA DECLARATORIA DE PODER SUSTANCIAL EN EL MERCADO CONTRA UN AGENTE ECONÓMICO NO IMPLICA, NECESARIAMENTE, LA APLICACIÓN DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS QUE PREVÉN LA FACULTAD DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE LA EXTINTA COMISIÓN FEDERAL RELATIVA PARA IMPONER OBLIGACIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON TARIFAS, CALIDAD DEL SERVICIO E INFORMACIÓN A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE LA MATERIA.	I.1o.A.E.116 A (10a.)	2225
TELECOMUNICACIONES. LAS DISPOSICIONES QUE PREVÉN LA FACULTAD DE LA SECRETARÍA DE		

	Número de identificación	Pág.
COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE LA EX-TINTA COMISIÓN FEDERAL RELATIVA PARA IM-PONER OBLIGACIONES ESPECÍFICAS RELACIO-NADAS CON TARIFAS, CALIDAD DEL SERVICIO E INFORMACIÓN A LOS CONCESIONARIOS DE RE-DES PÚBLICAS DE LA MATERIA QUE TENGAN PODER SUSTANCIAL EN ALGÚN MERCADO RELE-VANTE, CORRESPONDEN A UNA "REGLA QUE CON-FIERE PODERES".	I.1o.A.E.115 A (10a.)	2226
TELECOMUNICACIONES. LOS COSTOS HUNDIDOS CONSTITUYEN UNA BARRERA A LA ENTRADA DE NUEVOS OPERADORES EN EL MERCADO DE LAS REDES PÚBLICAS DE LA MATERIA.	I.1o.A.E.124 A (10a.)	2227
TELECOMUNICACIONES. PARA ANALIZAR LA COM-PETENCIA ECONÓMICA EN ESE SECTOR, LOS SERVICIOS DESAGREGADOS DE INTERCONEXIÓN (ENTRE ELLOS, LA ORIGINACIÓN DE TRÁFICO PÚ-BLICO CONMUTADO) PUEDEN CONSIDERARSE MERCADOS ESPECÍFICOS DE INSUMOS.	I.1o.A.E.119 A (10a.)	2228
TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. SON COM-PETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS EN LOS QUE LA LITIS SE CENTRE EN RESOLVER EL MEJOR DERECHO A SUCEDER LOS BIENES AGRA-RIOS DE UN EJIDATARIO, AUN CUANDO LA ACCIÓN O RECONVENCIÓN SE BASE EN UN TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO OTORGADO POR EL <i>DE CUJUS</i> EN FAVOR DE UNA DE LAS PARTES.	III.1o.A.26 A (10a.)	2235
VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLA-CIÓN VIGENTE EN 2005).	1a. XLIII/2016 (10a.)	687
VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO		

	Número de identificación	Pág.
DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).	1a. XLII/2016 (10a.)	688
VALOR AGREGADO. EL TRATAMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES INAPLICABLE A LOS INTERESES DERIVADOS DE LOS PRÉSTAMOS OTORGADOS POR INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE A SUS TRABAJADORES, ACORDE CON SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005).	1a. XLI/2016 (10a.)	689
VIDA SILVESTRE. LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA APLICACIÓN DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, NO PROVOCA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI CONTRAVIENE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.	PC.XVI.A. J/12 A (10a.)	1896
VIDA SILVESTRE. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, AL TRATARSE DE UNA NORMA PROHIBITIVA CON EFECTOS POSITIVOS.	PC.XVI.A. J/11 A (10a.)	1897

Índice en Materia Civil

	Número de identificación	Pág.
ABANDONO DE MENOR DE EDAD. LA SANCIÓN RELATIVA A LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD NO DEBE CONDICIONARSE A QUE SE COMPROMETA SU SALUD O SEGURIDAD (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 418, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN ABROGADO).	XI.2o.C.10 C (10a.)	2015
ALIMENTOS VENCIDOS. FORMA EN QUE OPERAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y EL ESTÁNDAR DE PRUEBA CUANDO AQUÉLLOS DERIVAN DE UN ADEUDO CONTRAÍDO POR LOS ACREEDORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO).	PC.XXII. J/4 C (10a.)	991
ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA CIVIL DENTRO DEL JUICIO. SE EQUIPARA A UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA Y REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FIANZA PARA RESPONDER POR LOS PROBABLES DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CON DICHO ACTO PUEDAN OCASIONARSE A LA CONTRAPARTE DEL SOLICITANTE DE LA MEDIDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).	VII.1o.C.27 C (10a.)	2023
APELACIÓN EN CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR. EL ARTÍCULO 950 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA.	1a. XLV/2016 (10a.)	665

	Número de identificación	Pág.
CADUCIDAD DE LA INSTANCIA POR INACTIVIDAD PROCESAL. ES INAPLICABLE EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DEMANDAN ALIMENTOS A FAVOR DE MENORES, PERO SÍ OPERA CUANDO TENGA UN IMPACTO POSITIVO SOBRE ÉSTOS, ATENTO AL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ [LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS XIX.1o.A.C.51 C)].	XIX.1o.A.C.10 C (10a.)	2033
CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	2a./J. 2/2016 (10a.)	873
COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE SU CONDENA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUN CUANDO HAYA PROCEDIDO LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA Y EL DEMANDADO OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE A PESAR DE NO APERSONARSE, AL REDUCIR EL JUEZ, EN EJERCICIO DEL CONTROL CONVENCIONAL <i>EX OFFICIO</i> , EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS POR SER USURARIOS.	XXVII.3o.30 C (10a.)	2050
COSTAS EN LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES. NO PROCEDE SU CONDENA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO.	XXVII.3o.28 C (10a.)	2050
DEMANDA DE NULIDAD DE PAGARÉ O <i>VOUCHER</i> EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. PARA SU ADMISIÓN BASTA QUE EL PROMOVENTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ESTÁ IMPOSIBILITADO PARA PRESENTARLO (DOCUMENTO		

	Número de identificación	Pág.
BASE DE LA ACCIÓN) AL ENCONTRARSE EN PODER DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMANDADA.	VIII.2o.C.T.2 C (10a.)	2058
DIVORCIO. ES IMPROCEDENTE EL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD EN LA APELACIÓN, CON BASE EN EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, SI EN PRIMERA INSTANCIA SE DECLARÓ LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).	IV.2o.C.7 C (10a.)	2065
HOGAR CONYUGAL. EL INMUEBLE EN QUE SE ENCUENTRE ESTABLECIDO Y QUE NO CONSTITUYA EL PATRIMONIO DE FAMILIA AL IGUAL QUE SU MENAJE SON INEMBARGABLES, SIEMPRE Y CUANDO SU VALOR SEGÚN AVALÚO CATASTRAL NO EXCEDA EL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 290 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SIN NECESIDAD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO.	VIII.2o.C.T.4 C (10a.)	2071
INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SU PROMOCIÓN INTERRUMPE EL PLAZO DE 3 AÑOS PREVISTO POR EL ARTÍCULO 1079, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PARA EJECUTAR LA SENTENCIA QUE HA CAUSADO ESTADO, DICTADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.	PC.XX. J/5 C (10a.)	1347
JUICIO ORAL MERCANTIL. ES PROCEDENTE CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN PERSONAL DE COBRO DERIVADA DE UN CONTRATO DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA, CUANDO SEA DE CUANTÍA DETERMINADA E INFERIOR AL MONTO FIJADO EN EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.	PC.XXII. J/7 C (10a.)	1462
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA. LAS CAUSAS QUE LA INTERRUMPEN OPERAN TANTO PARA EL AVALISTA COMO PARA EL AVALADO.	XXIV.2o.1 C (10a.)	2111

	Número de identificación	Pág.
RECONVENCIÓN. SU PROCEDENCIA EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).	I.9o.C.30 C (10a.)	2121
RECURSO DE APELACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DESECHA, ES INNECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 680 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, PREVIAMENTE A PROMOVER EL AMPARO DIRECTO.	1a. XXXVII/2016 (10a.)	683
RECURSO DE QUEJA. CONTRA EL AUTO EMITIDO POR EL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DISTRITAL QUE LO DESECHA PROCEDE EL DE RECONSIDERACIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA).	VIII.2o.C.T.3 C (10a.)	2124
SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REDUCE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. SI PROCEDE OTORGARLA CON GARANTÍA, ÉSTA DEBE FIJARSE DISCRECIONALMENTE SI NO EXISTEN DATOS QUE PERMITAN ESTABLECER SU MONTO, SIN PERJUICIO DE CONSIDERAR EL TIEMPO PROBABLE DE RESOLUCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL Y LA CANTIDAD QUE SE OBTENGA DE RESTAR AL MONTO DE LA PROVISIONAL CON LA CANTIDAD QUE FIJÓ AL RESOLVER LA RECLAMACIÓN Y EL RESULTADO DEBERÁ MULTIPLICARSE POR EL LAPSO EN QUE DURE.	VII.1o.C.26 C (10a.)	2186

Índice en Materia Laboral

	Número de identificación	Pág.
ACTAS DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA. QUIÉ- NES DEBEN RATIFICARLAS ANTE EL TRIBUNAL, PARA QUE QUEDEN PERFECCIONADAS.	I.14o.T.2 L (10a.)	2017
AMPARO ADHESIVO. DEBE DECLARARSE SIN MA- TERIA EL INTERPUESTO POR EL CODEMANDADO ABSUELTO, CUANDO NO EXISTE RIESGO DE QUE SE MODIFIQUE EL LAUDO QUE LE BENEFICIA, AUN CUANDO SE CONCEDA EL AMPARO PRINCIPAL.	VII.1o.T.2 L (10a.)	2020
AMPARO DIRECTO. EL PLAZO DE 15 DÍAS PARA PROMOVERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLE- TO Y EXACTO DEL LAUDO RECLAMADO, INDEPEN- DIENTEMENTE DE QUE CONTRA SU NOTIFICACIÓN HAYA PLANTEADO INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y ÉSTE SE HAYA DECLARADO FUNDADO.	VI.2o.T.8 L (10a.)	2021
AYUDA ASISTENCIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 138, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE Y 164, FRACCIÓN IV, DE LA ABROGADA. CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SE- GURO SOCIAL LA CARGA PROBATORIA EN EL JUI- CIO LABORAL CUANDO SE DEMANDA SU OTOR- GAMIENTO.	PC.VI.L. J/2 L (10a.)	1177
AYUDA SINDICAL POR DEFUNCIÓN DE LOS TRABA- JADORES DEL SEGURO SOCIAL. CARGA DE LA		

	Número de identificación	Pág.
PRUEBA TRATÁNDOSE DEL RECLAMO FORMULADO POR EL BENEFICIARIO DE UN TRABAJADOR FALLECIDO.	VIII.2o.C.T.1 L (10a.)	2026
BONO DE PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL. AL TRATARSE DE UNA PRESTACIÓN EXTRALEGAL, SI DEMANDAN SU APLICACIÓN, DEBEN ACREDITAR LA EXISTENCIA DE LA CLÁUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO QUE LA PREVÉ, DEL REGLAMENTO QUE REGULA SU OTORGAMIENTO Y EL DERECHO A PERCIBIRLA.	IV.4o.T.2 L (10a.)	2030
CONFLICTO COMPETENCIAL. CORRESPONDE DIRIMIRLO A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO SE SUSCITA ENTRE UNA DE SUS SALAS REGIONALES Y UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN.	XVI.1o.T.24 L (10a.)	2044
DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS. AL TENER DICHA RESOLUCIÓN ÚNICAMENTE EFECTOS DECLARATIVOS Y CONSTITUIR UN ACTO FUERA DE JUICIO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.	XXI.3o.C.T.1 L (10a.)	2054
DEMANDA LABORAL. EL REQUERIMIENTO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA QUE EL PROMOVENTE ACREDITE SU IDENTIDAD, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE TENERLA POR NO INTERPUESTA, ES ILEGAL Y CONTRARÍA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).	VI.1o.T. J/2 (10a.)	1953
DESAHOGO DE PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL. SI EN EL TÉRMINO DE LA VISTA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 885 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO SE HACEN VALER LAS VIOLACIONES RELATIVAS		

	Número de identificación	Pág.
A LOS MEDIOS PROBATORIOS ADMITIDOS (DESISTIMIENTO DEL COTEJO Y CERTIFICACIÓN), PRECLUYE EL DERECHO PARA PLANTEARLAS.	I.13o.T.142 L (10a.)	2062
EMANACIONES RADIATIVAS. PARA QUE EL MONTO DE DICHO CONCEPTO INTEGRO EL SALARIO PARA EL PAGO DE LA JUBILACIÓN O PENSIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL, DEBEN DEMOSTRAR QUE LO PERCIBIERON Y APORTARON AL FONDO RESPECTIVO DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS.	III.3o.T.33 L (10a.)	2067
EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE DEJAR CÉDULA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 751 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES INSUFICIENTE LA MENCIÓN "ANOTO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN" EN EL ACTA CORRESPONDIENTE.	III.3o.T.34 L (10a.)	2068
FONDO DE HABITACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES ELECTRICISTAS. LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTÁ EXENTA DE PAGAR LAS APORTACIONES PATRIMONIALES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, SALVO QUE SE ACREDITE QUE LA PRESTACIÓN DERIVADA DE AQUÉL ES INFERIOR AL 5%.	PC.I.L. J/15 L (10a.)	1235
INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMAS. ES INTRASCENDENTE Y NO AMERITA CONCEDER EL AMPARO SOLICITADO, EL HECHO DE QUE LA JUNTA LABORAL LO ADMITA Y SUSTANCIE CON UNA DENOMINACIÓN DIVERSA, SI FINALMENTE RESUELVE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES.	III.1o.T.27 L (10a.)	2075
INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMAS. PUEDE PLANTEARSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO LABORAL, INCLUSO ANTES DE LA CONCILIATORIA.	III.1o.T.26 L (10a.)	2076

	Número de identificación	Pág.
INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES. NO ES EXIGIBLE QUE SE HAGA VALER CONTRA LA PRACTICADA A QUIEN DEJÓ DE SER APODERADO DE LA PARTE QUE SE PRETENDIÓ NOTIFICAR Y EN LUGAR DISTINTO DEL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIRLAS, POR TANTO, NO ES APTA PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO.	XVI.1o.T.22 L (10a.)	2077
INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS QUE EL PATRÓN DEBE CONSERVAR Y EXHIBIR EN JUICIO. LA PARTE QUE LA OFREZCA DEBE PARTICULARIZAR LO QUE SE HA DE CONSTATAR CON ESA PRUEBA.	XVI.1o.T.28 L (10a.)	2080
INTERÉS DEL 2% MENSUAL. LA BASE DE SU CÁLCULO HA DE OBTENERSE CONSIDERANDO EL SALARIO INTEGRADO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012).	XXVII.3o.25 L (10a.)	2082
INTERÉS PREVISTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. AL TENER LA MISMA NATURALEZA DE LOS SALARIOS CAÍDOS, PARA SU CONDENA NO SE REQUIERE RECLAMARLO EXPRESAMENTE EN LA DEMANDA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012).	XXVII.3o.24 L (10a.)	2083
INTERÉS PREVISTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. FORMA DE CUMPLIR SU CONDENA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012).	XXVII.3o.31 L (10a.)	2084
INTERÉS PREVISTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. HIPÓTESIS EN LAS QUE PROCEDE SU CONDENA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012).	XXVII.3o.26 L (10a.)	2086

	Número de identificación	Pág.
LAUDOS DICTADOS POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO. PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO PUEDE IMPONER DIVERSAS SANCIONES, ENTRE ELLAS, LA SUSPENSIÓN DE LA AUTORIDAD EN EL CARGO POR UN PLAZO DE 15 DÍAS SIN GOCE DE SUELDO.	III.3o.T.36 L (10a.)	2091
NOTARIOS PÚBLICOS. SU FALLECIMIENTO TRAE COMO CONSECUENCIA NECESARIA, INMEDIATA Y DIRECTA LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL CON LOS TRABAJADORES QUE UTILIZABAN PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA NOTARIAL, SIN QUE PUEDA CONSIDERARSE QUE DEBA CONTINUAR CON LA SUCESIÓN DEL <i>DE CUJUS</i> , O CON EL NOTARIO QUE SE DESIGNE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).	(IV Región)2o.12 L (10a.)	2101
OFRECIMIENTO DE TRABAJO. EL HECHO DE QUE SE REALICE CON UNA DIFERENCIA SALARIAL MÍNIMA DE ALGUNOS CENTAVOS DIARIOS, NO ES MOTIVO PARA CALIFICARLO DE MALA FE, AL NO MODIFICARSE LAS CONDICIONES FUNDAMENTALES DE TRABAJO, NI DEPRECIARSE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL TRABAJADOR.	PC.III.L. J/12 L (10a.)	1507
OFRECIMIENTO DE TRABAJO. EL REALIZADO EN OTRO JUICIO LABORAL EN EL QUE SE RECLAMÓ EL DESPIDO INJUSTIFICADO, POR SÍ SOLO, ES INSUFICIENTE PARA ESTIMAR QUE EL TRABAJADOR GENERÓ DERECHOS PARA EL PAGO DE VACACIONES, PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO, YA QUE SON NECESARIAS LA ACEPTACIÓN DE ESA OFERTA Y LA MATERIALIZACIÓN DE LA REINSTALACIÓN.	IV.4o.T.3 L (10a.)	2103
PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. SI SU MONTO SE CALCULA CON BASE EN EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENT-		

	Número de identificación	Pág.
TO, ES IMPROCEDENTE INCLUIR EL CONCEPTO DE AYUDAS ASISTENCIALES, AL ENCONTRARSE COMPRENDIDO EN AQUÉL (ARTÍCULO 168 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997).	IV.4o.T.1 L (10a.)	2106
PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. AL RESOLVER LA JUNTA SOBRE EL AJUSTE EN LA CUANTIFICACIÓN DE SU PAGO, DEBE ATENDER EL LÍMITE SUPERIOR PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, SIN QUE REPRESENTA OBSTÁCULO ALGUNO QUE EL DEMANDADO NO SE HUBIERE EXCEPCIONADO EN ESE SENTIDO.	2a./J. 8/2016 (10a.)	913
PENSIÓN POR VIUDEZ. PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A AQUÉLLA CON FUNDAMENTO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 97/2012 (10a.) (*).	2a./J. 3/2016 (10a.)	947
PENSIONES DEL ISSSTE. EL INCREMENTO DE LAS QUE FUERON OTORGADAS AL AMPARO DE LA LEY DE 1959 DEBE ATENDER, PRIMERAMENTE, A LA MECÁNICA DE AUMENTO SEXENAL Y, A PARTIR DE LA REFORMA A SU ARTÍCULO 136, A LA VARIACIÓN DE LOS SUELDOS DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO.	I.1o.A.125 A (10a.)	2108
PRIMA VACACIONAL. ES UNA PRESTACIÓN LEGAL Y CORRESPONDE AL PATRÓN DEMOSTRAR SU MONTO Y PAGO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD RECLAMADA.	XXVII.3o.27 L (10a.)	2112
PROYECTO DE RESOLUCIÓN EN FORMA DE LAUDO Y ACTA DE DISCUSIÓN Y VOTACIÓN. SU AUSENCIA SIMULTÁNEA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL ORDINARIO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN AL PRO-		

	Número de identificación	Pág.
CEDIMIENTO, AL NO HABER PARÁMETRO PARA ADVERTIR LA EXISTENCIA DE MODIFICACIONES Y ADICIONES DERIVADAS DE LA DISCUSIÓN, QUE DEBEN SER ATENDIDAS PARA LA VALIDEZ DEL LAUDO.	III.3o.T.35 L (10a.)	2115
PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. PARA SU ADMISIÓN ES INNECESARIO QUE EL OFERENTE SEÑALE EL NOMBRE DEL PERITO Y SU IDENTIDAD.	XXVII.3o.28 L (10a.)	2117
PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. SI NO SE IMPUGNÓ SU ADMISIÓN Y NO SE COMBATIÓ POR VICIOS PROPIOS, EL AUTO QUE ORDENA SU DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO.	XXVII.3o.29 L (10a.)	2118
PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL. ES VÁLIDO SU DESAHOGO A TRAVÉS DEL USO DE AVANCES TECNOLÓGICOS (VIDEOCONFERENCIA).	III.1o.T.28 L (10a.)	2119
RECURSO PREVISTO EN LAS NORMAS INTERNAS DE UN ENTE PATRONAL EN FAVOR DE SUS TRABAJADORES QUE SE CONSIDEREN AGRAVIADOS EN SUS DERECHOS LABORALES. SI SE HACE VALER PARA EL EXAMEN DE ALGUNA PRETENSIÓN, LA LITIS QUE SE PLANTEE ANTE LA JUNTA DEBE CENTRARSE EN LO DECIDIDO EN AQUÉL.	XVI.1o.T.26 L (10a.)	2131
SALARIO BRUTO. LAS CONDENAS EN LOS LAUDOS DEBEN EFECTUARSE CON BASE EN AQUÉL.	XVI.1o.T.23 L (10a.)	2139
SALARIOS CAÍDOS. FORMA DE COMPUTARLOS CONFORME AL PLAZO FIJADO PARA EL PAGO DEL SUELDO.	I.13o.T.139 L (10a.)	2163
SUSPENSIÓN EN EL CARGO DE UNA AUTORIDAD (MUNÍCIPE DE UN AYUNTAMIENTO) POR INCUM-		

	Número de identificación	Pág.
PLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO. CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO INICIAR EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO.	III.3o.T.37 L (10a.)	2189
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO. PRIMA DE ANTIGÜEDAD. RECLAMACIÓN IMPROCEDENTE.	III.1o.T. J/1 (10a.)	2011
TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. JUSTIFICACIÓN EN LA DIFERENCIA DE TRATO ENTRE LOS DE CONFIANZA PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LOS DE BASE.	2a./J. 21/2016 (10a.)	833
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ALCANCE DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD Y PERMANENCIA EN EL CARGO DENTRO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.	2a./J. 20/2016 (10a.)	834
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CON INDEPENDENCIA DE QUE PERTENEZCAN AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O HAYAN SIDO CONTRATADOS BAJO EL ESQUEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, NO TIENEN DERECHO A LA REINSTALACIÓN, AL EXISTIR UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL AL RESPECTO.	2a./J. 22/2016 (10a.)	836
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. DIFERENCIA ENTRE LOS PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LOS DE LIBRE DESIGNACIÓN.	2a./J. 18/2016 (10a.)	837

	Número de identificación	Pág.
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. JUSTIFICACIÓN EN LA DIFERENCIA DE TRATO ENTRE LOS PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LOS DE LIBRE DESIGNACIÓN.	2a./J. 19/2016 (10a.)	839
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. NATURALEZA JURÍDICA Y SUSTENTO CONSTITUCIONAL DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN QUE CONFORMAN LOS PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.	2a./J. 17/2016 (10a.)	840
TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY RELATIVA, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y 20 DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS.	2a./J. 23/2016 (10a.)	842
TRABAJADORES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA. TRATÁNDOSE DE APORTACIONES DE VIVIENDA, LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE PUEBLA Y LA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DE DICHA ENTIDAD, PREVEN LA FORMA Y EL ORGANISMO ANTE EL QUE DEBERÁN REALIZARSE, POR LO QUE SON INAPLICABLES, SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES.	VI.2o.T.9 L (10a.)	2230
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO. LA CONTROVERSI A SUSCITADA POR EL NOMBRAMIENTO DE MAESTRO EMÉRITO, AL SER DE NATURALEZA		

	Número de identificación	Pág.
ACADÉMICA, DEBE RESOLVERSE POR SUS ÓRGANOS INTERNOS Y NO POR LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.	XXI.3o.C.T.2 L (10a.)	2237

Índice en Materia Común

	Número de identificación	Pág.
ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LOS FORMULADOS POR EL QUEJOSO NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA RESOLVERLO.	XXVII.3o.95 K (10a.)	2018
ALEGATOS. SI DE SU CONTENIDO SE ADVIERTE QUE EN REALIDAD CONSTITUYEN UNA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, EL JUZGADOR DEBE SUPLIR EL ERROR EN LA DENOMINACIÓN EN QUE INCURRA EL QUEJOSO.	XXVII.3o.94 K (10a.)	2019
AMPARO ADHESIVO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INTERPUESTO POR EL CODEMANDADO ABSUELTO, CUANDO NO EXISTE RIESGO DE QUE SE MODIFIQUE EL LAUDO QUE LE BENEFICIA, AUN CUANDO SE CONCEDA EL AMPARO PRINCIPAL.	VII.1o.T.2 L (10a.)	2020
AMPARO CONTRA LEYES. EL RECIBO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, ES EFICAZ PARA ESTABLECER LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS E INICIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE QUE LA QUEJOSA TUVO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN CON POSTERIORIDAD.	PC.XXII. J/5 A (10a.)	1062
AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS HETEROAPLICATIVAS. ES IMPROCEDENTE CUANDO		

	Número de identificación	Pág.
EL CONTRIBUYENTE PRETENDE RECLAMARLAS CON BASE EN EL INTERÉS LEGÍTIMO.	XXII.1o.12 A (10a.)	2020
AMPARO DIRECTO. EL PLAZO DE 15 DÍAS PARA PROMOVERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO Y EXACTO DEL LAUDO RECLAMADO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE CONTRA SU NOTIFICACIÓN HAYA PLANTEADO INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y ÉSTE SE HAYA DECLARADO FUNDADO.	VI.2o.T.8 L (10a.)	2021
AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. PARA EFECTOS DE SU PROCEDENCIA DEBE VERIFICARSE SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE REALIZÓ UN VERDADERO CONTROL DE CONVENCIONALIDAD.	1a. XXI/2016 (10a.)	665
AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÁ OBLIGADO A OTORGAR AL QUEJOSO EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE DESAHOGUE LA PREVENCIÓN DE FORMULARLA, RESPECTO DE UN ACTO DIVERSO, VINCULADO CON EL RECLAMADO, ADVERTIDO DEL INFORME JUSTIFICADO, SI DE AUTOS SE APRECIA QUE AQUÉL, CON ANTERIORIDAD A QUE SE RINDIERA, TUVO CONOCIMIENTO DE SU EXISTENCIA.	I.5o.P.10 K (10a.)	2022
BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA FALTA DE RESPUESTA Y LA POSTERIOR CONTESTACIÓN DE UNA PETICIÓN FORMULADA EN EL CONTEXTO DEL PROCESO DE ELECCIÓN DEL RECTOR.	VI.1o.A.93 A (10a.)	2029
CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE CORRESPONDEN		

	Número de identificación	Pág.
A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.	2a./J. 2/2016 (10a.)	873
CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO DIRECTO. ES INNECESARIO DAR LA VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE ACTUALIZA ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CON MOTIVO DE LA DECISIÓN ADOPTADA POR EL PROPIO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN UN RECURSO DE REVISIÓN FISCAL RELACIONADO.	I.12o.A.3 A (10a.)	2034
CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. AL ACTUALIZARSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, NO ES OBLIGATORIO DAR VISTA DE OFICIO AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA PUES, DE HACERLO, SE AFECTARÍA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.	VIII.2o.C.T.6 K (10a.)	2035
COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CASO EN EL QUE EL ACTO RECLAMADO HA COMENZADO A EJECUTARSE EN UN DISTRITO Y SIGUE EJECUTÁNDOSE EN OTRO (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO).	VI.2o.T.10 K (10a.)	2039
COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DE UN INCIDENTE NO ESPECIFICADO EN MATERIA PENAL. SI LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR ESTA RESOLUCIÓN, NO SE TRADUCEN EN UNA		

	Número de identificación	Pág.
EJECUCIÓN MATERIAL DEL ACTO RECLAMADO, DEBIDO A QUE NINGUNA CONSECUENCIA INMEDIATA Y DIRECTA ORIGINAN EN EL DERECHO SUSTANTIVO ALEGADO (LIBERTAD), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA.	II.2o.P.17 K (10a.)	2040
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE CONTRAVIERTEN LA NEGATIVA A LA DEVOLUCIÓN DE UN IMPUESTO POR PAGO DE LO INDEBIDO, CON BASE EN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY, SI ÉSTA NO SE RECLAMÓ OPORTUNAMENTE EN LA VÍA INDIRECTA CON MOTIVO DEL ENTERO DEL TRIBUTO.	XVI.1o.A.73 A (10a.)	2041
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE SOSTIENEN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA AUTOLIQUIDACIÓN DE CONTRIBUCIONES, SI EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ORIGEN SE IMPUGNARON LOS RECIBOS DE PAGO QUE LA CONSTITUYEN.	IV.2o.A.113 A (10a.)	2042
CONFLICTO COMPETENCIAL. CORRESPONDE DIRIMIRLO A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO SE SUSCITA ENTRE UNA DE SUS SALAS REGIONALES Y UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN.	XVI.1o.T.24 L (10a.)	2044
CONTINENCIA DE LA CAUSA. SI EN EL RECURSO DE REVISIÓN SE IMPUGNA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE DECIDE SOBRE EL DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA (EL CUAL PUEDE CONTRAVERTIRSE EN QUEJA) Y EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, PARA NO DIVIDIR AQUÉLLA, DEBE ESTU-		

	Número de identificación	Pág.
DIARLOS EN SU CONJUNTO, SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LA TEMPORALIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO PARA SU INTERPOSICIÓN, RESPECTO DEL ACTO QUE FUERE MATERIA DEL RECURSO DE QUEJA (DESECHAMIENTO).	I.3o.P6 K (10a.)	2046
CONTRADICCIÓN DE TESIS. ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. NO SE CALIFICA DE LEGAL EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR UN MAGISTRADO PARA CONOCER DE ELLA, AL NO ACTUALIZARSE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES XVI Y XVIII DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.	PC.III.L. 1 K (10a.)	1917
CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD <i>EX OFFICIO</i> . CONDICIONES GENERALES PARA SU EJERCICIO.	1a./J. 4/2016 (10a.)	430
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD <i>EX OFFICIO</i> . EN EL ANÁLISIS DE LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO DEBE CONSTATARSE LA APLICABILIDAD DE LA NORMA, COMO PRESUPUESTO LÓGICO DE SU EJERCICIO.	1a. XXIV/2016 (10a.)	666
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD <i>EX OFFICIO</i> . LA APLICABILIDAD DE LA NORMA AL CASO CONCRETO ES UN REQUISITO LÓGICO PARA EL EJERCICIO DE AQUÉL.	1a. XXIII/2016 (10a.)	667
CONTROL DE CONVENCIONALIDAD <i>EX OFFICIO</i> . LAS AUTORIDADES JUDICIALES, PREVIO A LA INAPLICACIÓN DE LA NORMA EN ESTUDIO, DEBEN JUSTIFICAR RAZONADAMENTE POR QUÉ SE DESTRUYÓ SU PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD.	1a. XXII/2016 (10a.)	667

	Número de identificación	Pág.
CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL <i>EX OFFICIO</i> . LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE JALISCO, NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DEL ARTÍCULO 173 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, AL TRATARSE DE UNA NORMA QUE RIGE EL JUICIO DE ORIGEN QUE NO LES CORRESPONDE APLICAR.	III.2o.P94 P (10a.)	2047
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD. NO TIENE EL ALCANCE DE QUE LOS TRIBUNALES CONSTITUCIONALES LOCALES CONOZCAN DE ASUNTOS RELACIONADOS CON VIOLACIONES A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTO DE ASUNTOS QUE NO SEAN DE SU COMPETENCIA.	1a. XXXIX/2016 (10a.)	668
CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO.	I.3o.P.41 P (10a.)	2049
CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES OPTATIVO PARA LA PARTE ACTORA HACER VALER LA QUEJA REGULADA EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO.	I.1o.A.32 K (10a.)	2051
DAÑOS Y PERJUICIOS. LA AFIANZADORA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR LA DETERMINACIÓN QUE DECLARA FUNDADO EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN TRAMITADO EN UN JUICIO DE AMPARO BIINSTANCIAL.	I.14o.C.1 K (10a.)	2053

	Número de identificación	Pág.
DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS. AL TENER DICHA RESOLUCIÓN ÚNICAMENTE EFECTOS DECLARATIVOS Y CONSTITUIR UN ACTO FUERA DE JUICIO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO.	XXI.3o.C.T.1 L (10a.)	2054
DEFENSOR DEL QUEJOSO PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. CUENTA CON LEGITIMACIÓN LEGAL PARA DESIGNAR AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA.	I.3o.P.42 P (10a.)	2054
DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN AGRAVADA DE NARCÓTICOS. ANTES DE REALIZAR EL CONTROL CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DEL SUPUESTO NORMATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 195, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEBE VERIFICARSE SI LA PRESUNCIÓN LEGAL RELACIONADA CON LA FINALIDAD DE LA DROGA, SE APLICÓ EN PERJUICIO DEL REO.	XXI.1o.P.A.9 P (10a.)	2055
DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SI SU DESECHAMIENTO DE PLANO OCURRIÓ PORQUE EN EL AUTO ADMISORIO EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIRTIÓ UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, ES INNECESARIO DAR VISTA PREVIAMENTE AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA.	XXVII.3o.93 K (10a.)	2056
DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO SOBRE LA BASE DE QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE ES ILEGAL, SI DEL AUTO RESPECTIVO SE ADVIERTE QUE EL JUEZ FEDERAL CONSTRUYÓ SU DETERMINACIÓN A PARTIR DE UNA INEXACTA PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE REVELA SU OMISIÓN DE PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU OCURSO.	I.1o.A.30 K (10a.)	2057

	Número de identificación	Pág.
DIVORCIO. ES IMPROCEDENTE EL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD EN LA APELACIÓN, CON BASE EN EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, SI EN PRIMERA INSTANCIA SE DECLARÓ LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).	IV.2o.C.7 C (10a.)	2065
FACULTAD DE ATRACCIÓN. ES PROCEDENTE SU EJERCICIO SI EL RECURSO DE QUEJA PLANTEADO ACTUALIZA LA NECESIDAD DE DEFINIR EL ALCANCE DE UNA DISPOSICIÓN DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EN LA QUE SE INCORPORA UNA LIMITACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES QUE NO EXISTÍA EN LA LEY DE AMPARO ABROGADA.	1a. XXVII/2016 (10a.)	674
FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO.	XXIV.2o. J/1 (10a.)	1982
IMPEDIMENTO PARA CONOCER DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES DENTRO DE UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA SI EXISTE PARENTESCO POR AFINIDAD EN SEGUNDO GRADO ENTRE EL ACTUARIO JUDICIAL CUYA ACTUACIÓN SE CUESTIONA Y EL JUZGADOR QUE DEBE PARTICIPAR EN LA RESOLUCIÓN DE DICHO INCIDENTE.	PC.I.L. J/16 L (10a.)	1271
IMPEDIMENTO PARA CONOCER DE UNA CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIA-		

	Número de identificación	Pág.
DOS DE CIRCUITO. NO DEBE DECLARARSE SIN MATERIA AUNQUE MEDIE DESISTIMIENTO DEL DENUNCIANTE.	PC.III.L. 2 K (10a.)	1918
INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMAS. ES INTRASCENDENTE Y NO AMERITA CONCEDER EL AMPARO SOLICITADO, EL HECHO DE QUE LA JUNTA LABORAL LO ADMITA Y SUSTANCIE CON UNA DENOMINACIÓN DIVERSA, SI FINALMENTE RESUELVE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES.	III.1o.T.27 L (10a.)	2075
INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES. NO ES EXIGIBLE QUE SE HAGA VALER CONTRA LA PRACTICADA A QUIEN DEJÓ DE SER APODERADO DE LA PARTE QUE SE PRETENDIÓ NOTIFICAR Y EN LUGAR DISTINTO DEL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIRLAS, POR TANTO, NO ES APTA PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO.	XVI.1o.T.22 L (10a.)	2077
INCOMPETENCIA, EXCEPCIÓN DE. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACUERDO DEL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESERVA SU RESOLUCIÓN PARA EMITIRLA DE FORMA CONJUNTA CON LA SENTENCIA.	XXI.1o.PA.33 A (10a.)	2077
INFONAVIT. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.	I.1o.A.29 K (10a.)	2079
INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NORMAS CUYA SOLA EXISTENCIA GENERA UNA AFECTACIÓN AUTOAPLICATIVA QUE LO ACTUALIZA.	1a. XXXII/2016 (10a.)	679
JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE MORELOS DESIGNADOS TEMPORAL E INTERINAMENTE. TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA		

	Número de identificación	Pág.
LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ESTATAL QUE DA POR CONCLUIDO SU ENCARGO PARA NOMBRAR OTRO JUZGADOR CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS.	XVIII.5o.4 K (10a.)	2088
JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA POR EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA CUANDO EL QUEJOSO SOSTENGA HABER TENIDO CONOCIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, EN UNA FECHA POSTERIOR A LA QUE OSTENTA EL RECIBO DE PAGO RESPECTIVO.	PC.XXII. 1 A (10a.)	1919
JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN LA QUE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.	PC.XXVII. J/5 A (10a.)	1425
JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA.	2a./J. 10/2016 (10a.)	705
JURISPRUDENCIA ESTABLECIDA POR UN PLENO DE CIRCUITO. ES OBLIGATORIA TANTO PARA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUE SE UBIQUEN DENTRO DE ESE CIRCUITO COMO PARA LOS AUXILIARES QUE LOS APOYEN EN EL DICTADO DE SUS RESOLUCIONES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA REGIÓN A LA QUE ÉSTOS PERTENEZCAN.	REPUBLICADA POR CORRECCIÓN EN LA CITA DEL NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN Y DE LA MATERIA (IV Región)2o.8 K (10a.)	2089

	Número de identificación	Pág.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LOS PERIODISTAS CUENTAN CON INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO, SIN ACTO DE APLICACIÓN PREVIO, EL ARTÍCULO 398 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, POR SU POTENCIAL DE AFECTACIÓN EN LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA.	1a. XXXIII/2016 (10a.)	680
LINEAMIENTOS SOBRE <i>MUST CARRY</i> Y <i>MUST OFFER</i> EMITIDOS POR EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. LOS CONCESIONARIOS DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA TERRITORIAL CARECEN DE INTERÉS PARA RECLAMAR EN AMPARO LA RESTRICCIÓN QUE, ADUCEN, AQUÉLLOS IMPONEN A LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE AUTOR, CONSISTENTE EN ENTREGAR GRATUITAMENTE EL CONTENIDO QUE LES PERTENECE.	I.1o.A.E.127 A (10a.)	2093
PENSIÓN POR VIUDEZ. PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A AQUÉLLA CON FUNDAMENTO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 97/2012 (10a.) (*).	2a./J. 3/2016 (10a.)	947
PRINCIPIO <i>NON REFORMATIO IN PEIUS</i> . NO ENCUENTRA APLICACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA CONCESIÓN DE AMPARO AL QUEJOSO, ANTE DISPOSICIÓN EXPRESA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 93, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO.	XVII.1o.C.T.37 K (10a.)	2114
PRUEBA PERICIAL EN EL INCIDENTE INNOMINADO TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. EN SU DESAHOGO SON INAPLICABLES LAS REGLAS DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES.	III.1o.A.7 K (10a.)	2116

	Número de identificación	Pág.
PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. SI NO SE IMPUGNÓ SU ADMISIÓN Y NO SE COMBATIÓ POR VICIOS PROPIOS, EL AUTO QUE ORDENA SU DESAHOGO CONSTITUYE UN ACTO DERIVADO DE OTRO CONSENTIDO.	XXVII.3o.29 L (10a.)	2118
PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE OFRECERLAS, CONFORME A LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA.	XXI.2o.PA.12 K (10a.)	2119
RECURSO DE APELACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DESECHA, ES INNECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 680 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, PREVIAMENTE A PROMOVER EL AMPARO DIRECTO.	1a. XXXVII/2016 (10a.)	683
RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO.	2a./J. 14/2016 (10a.)	717
RECURSO DE QUEJA. CONTRA EL AUTO EMITIDO POR EL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DISTRITAL QUE LO DESECHA PROCEDE EL DE RECONSIDERACIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA).	VIII.2o.C.T.3 C (10a.)	2124
RECURSO DE QUEJA CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. QUEDA SIN MATERIA SI SE DICTA SENTENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO DE ORIGEN.	XV.5o.7 K (10a.)	2126
RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA O CONCEDE LA SUSPENSIÓN EN EL		

	Número de identificación	Pág.
AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA INTERPONERLO ES DE 5 DÍAS HÁBILES, AL NO TRATARSE DE ALGÚN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO.	PC.III.L. J/13 L (10a.)	1612
RECURSO DE QUEJA. CUANDO SE CONTROVIERTA ALGUNO DE LOS ASPECTOS QUE EL JUZGADOR DEBE RESOLVER EN FORMA INTEGRAL AL CONCEDER LA MEDIDA SUSPENSIVA PROVISIONAL, DEBE INTERPONERSE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO.	XXVII.3o.96 K (10a.)	2127
RECURSO DE QUEJA. CUANDO SE INTERPONE POR UNA PERSONA FÍSICA POR PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN DE UNA MORAL Y SÓLO SE EXPRESAN ARGUMENTOS TENDENTES A CONTROVERTIR EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS POR LA PRIMERA, EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTO POR LA SEGUNDA ES IMPROCEDENTE.	XXI.3o.C.T.1 K (10a.)	2128
RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, SI ÉSTE SE ACORDÓ EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y ENSEGUIDA SE DICTÓ SENTENCIA.	III.2o.P.13 K (10a.)	2129
RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. DEBE DECLARASE SIN MATERIA CUANDO EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO DEL QUE DERIVA AQUÉL SE REMITE POR INCOMPETENCIA A UN JUZGADO DE DISTRITO O TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO, SEGÚN CORRESPONDA, PARA QUE SE SUSTANCIE COMO AMPARO BIINSTANCIAL,		

	Número de identificación	Pág.
Y EL JUZGADOR DECLARADO COMPETENTE INICIA EL TRÁMITE DEL ASUNTO.	VII.1o.C.12 K (10a.)	2129
RECURSO DE QUEJA. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO AUXILIAR EN LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, POR LA QUE NIEGA PROVEER DE CONFORMIDAD LA SOLICITUD DEL TERCERO INTERESADO, DE DECRETAR QUE HA DEJADO DE SURTIR EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.	I.2o.C.7 K (10a.)	2130
RECURSO DE RECLAMACIÓN. CONSTITUYE EL MEDIO IDÓNEO PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO PARA IMPUGNAR LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE UN ARTÍCULO DE ESE ORDENAMIENTO APLICADO DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO EN LA VÍA DIRECTA.	1a. XLVI/2016 (10a.)	684
RECURSO DE RECLAMACIÓN. SI AL INTERPONERLO CONTRA UN ACUERDO DICTADO DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO NO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO DE LA LEY DE AMPARO APLICADO EN DICHO PROVEÍDO, PRECLUYE EL DERECHO DEL RECURRENTE PARA HACERLO.	1a. XLVII/2016 (10a.)	685
RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU INTERPOSICIÓN RESULTA OPORTUNA AUN CUANDO OCURRA ANTES DE QUE INICIE EL CÓMPUTO DEL PLAZO RESPECTIVO.	2a./J. 16/2016 (10a.)	729
RECURSOS EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, AL SER PARTE PERMANENTE EN TODOS LOS JUICIOS, ESTÁ FACULTADO PARA INTERPONERLOS, CUANDO SE RECLAMAN RESOLUCIONES EMITIDAS TANTO POR TRIBUNALES		

	Número de identificación	Pág.
FEDERALES COMO POR LOCALES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN IV, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE LA MATERIA).	II.2o.P:18 K (10a.)	2132
REDUCCIÓN DE SANCIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 33 BIS 3 DE LA ABROGADA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. ES NOTORIA LA IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RELATIVA, INTERPUESTA POR PERSONA DISTINTA DEL BENEFICIADO.	I.1o.A.E.112 A (10a.)	2132
REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS, AUNQUE SE DICTEN EN DISTINTAS DETERMINACIONES.	PC.II.C. J/2 K (10a.)	1685
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ASPECTOS QUE DEBEN CONCURRIR PARA SU PROCEDENCIA CUANDO EN VÍA DE AGRAVIOS SE PLANTEA EL ANÁLISIS DE CONSTITUCIONALIDAD DE UNA NORMA GENERAL APLICADA POR PRIMERA VEZ, EN LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.	2a./J. 13/2016 (10a.)	821
REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ESTE RECURSO PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, CUANDO EXISTA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UNA NORMA CONSTITUCIONAL EN LA QUE SE SUSTENTE EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO RELATIVO.	1a. XXXVI/2016 (10a.)	685
SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD.	2a./J. 9/2016 (10a.)	832

	Número de identificación	Pág.
SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. SUPUESTO EN EL QUE NO EXISTE VIOLACIÓN A DICHA MEDIDA CAUTELAR, NI EXCESO O DEFECTO EN SU CUMPLIMIENTO, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS QUE INVOLUCRAN A MENORES DE EDAD.	I.5o.P.9 K (10a.)	2185
SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REDUCE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. SI PROCEDE OTORGARLA CON GARANTÍA, ÉSTA DEBE FIJARSE DISCRECIONALMENTE SI NO EXISTEN DATOS QUE PERMITAN ESTABLECER SU MONTO, SIN PERJUICIO DE CONSIDERAR EL TIEMPO PROBABLE DE RESOLUCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL Y LA CANTIDAD QUE SE OBTENGA DE RESTAR AL MONTO DE LA PROVISIONAL CON LA CANTIDAD QUE FIJÓ AL RESOLVER LA RECLAMACIÓN Y EL RESULTADO DEBERÁ MULTIPLICARSE POR EL LAPSO EN QUE DURE.	VII.1o.C.26 C (10a.)	2186
SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA TRAMITAR LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PROCEDER EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 154 DE LA LEY DE AMPARO.	I.13o.T.19 K (10a.)	2187
SUSPENSIÓN DEFINITIVA. SI LA QUEJA PROMOVIDA CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ DE DISTRITO DE SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN RELATIVO SE DECLARA FUNDADA, DEBE REMITÍRSELE EL EXPEDIENTE PARA QUE REASUMA SU JURISDICCIÓN.	I.13o.T.20 K (10a.)	2188
SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA PARA QUE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PRESTEN ASISTENCIA HUMANA PERMANENTE PARA DESPLAZARSE A QUIEN ENFRENTA UNA DISCAPACIDAD FÍSICA, SI SE ADVIERTE QUE PUEDE HACERLO CON CIERTA INDEPENDENCIA.	IV.2o.A.86 K (10a.)	2188

	Número de identificación	Pág.
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EXCEPCIONALMENTE, EN TUTELA DEL INTERÉS SOCIAL, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA INTERLOCUTORIA QUE CONCEDE AL ACTOR EN EL JUICIO DE NULIDAD LA MEDIDA CAUTELAR PARA QUE CONTINÚE EN OPERACIÓN CON LA ACTIVIDAD DE GASOLINERA.	PC.III.A. J/13 A (10a.)	1783
SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA PENAL. SI EL QUEJOSO ES LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, ES IMPROCEDENTE FIJARLE, DISCRECIONALMENTE, LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 125, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA, PARA QUE AQUÉLLA CONTINÚE SURTIENDO EFECTOS.	I.3o.P.45 P (10a.)	2190
SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO, POR UNA PARTE LA NIEGUE Y, POR OTRA, LA CONCEDA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PUEDE ANALIZAR, DE OFICIO, EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA SÓLO CONTRA LA NEGATIVA, SI EL OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA AFECTA EL INTERÉS SOCIAL O CONTRAVIENE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.	III.2o.A.7 K (10a.)	2222
SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA EJECUCIÓN DE LA CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL NOMBRAMIENTO DE UN CONSEJERO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE GUERRERO Y SU SUSTITUCIÓN EN ESE CARGO.	XXI.1o.P.A.32 A (10a.)	2223
TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. NO ES UN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, SINO UN JUICIO AUTÓNOMO.	XXVII.3o.97 K (10a.)	2229

	Número de identificación	Pág.
VIDA SILVESTRE. LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA APLICACIÓN DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, NO PROVOCA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI CONTRAVIENE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.	PC.XVI.A. J/12 A (10a.)	1896
VIDA SILVESTRE. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, AL TRATARSE DE UNA NORMA PROHIBITIVA CON EFECTOS POSITIVOS.	PC.XVI.A. J/11 A (10a.)	1897

Índice de Jurisprudencia por Contradicción

	Número de identificación	Pág.
ALIMENTOS VENCIDOS. FORMA EN QUE OPERAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y EL ESTÁNDAR DE PRUEBA CUANDO AQUÉLLOS DERIVAN DE UN ADEUDO CONTRAÍDO POR LOS ACREEDORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO).	PC.XXII. J/4 C (10a.)	991

Contradicción de tesis 4/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto, ambos del Vigésimo Segundo Circuito. 29 de septiembre de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Magistrados Carlos Hinostrosa Rojas, Alma Rosa Díaz Mora, Fernando Reza Saldaña y Ramiro Rodríguez Pérez. Ponente: Fernando Reza Saldaña. Encargado del engrose: Ramiro Rodríguez Pérez. Secretario: Ramsés Samael Montoya Camarena.

AMPARO CONTRA LEYES. EL RECIBO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, ES EFICAZ PARA ESTABLECER LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS E INICIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE QUE LA QUEJOSA TUVO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN CON POSTERIORIDAD.	PC.XXII. J/5 A (10a.)	1062
---	-----------------------	------

Contradicción de tesis 5/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto,

ambos del Vigésimo Segundo Circuito. 29 de septiembre de 2015. Mayoría de tres votos de los Magistrados Alma Rosa Díaz Mora, Fernando Reza Saldaña y Ramiro Rodríguez Pérez. Disidente y Ponente: Carlos Hinostrosa Rojas. Encargada del engrose: Alma Rosa Díaz Mora. Secretaria: Dennisse Reza Anaya.

Número de identificación Pág.

AVERIGUACIÓN PREVIA. SI DURANTE ÉSTA EL INCUPLADO ES PUESTO EN LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, ES INAPLICABLE PARA EL MINISTERIO PÚBLICO EL TÉRMINO DE 48 HORAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA DEFINIR SU SITUACIÓN JURÍDICA MEDIANTE EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL O LIBERTAD CON LAS RESERVAS DE LEY.

PC.I.P. J/21 P (10a.) 1118

Contradicción de tesis 7/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Sexto, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 8 de diciembre de 2015. Mayoría de cinco votos de los Magistrados Mario Ariel Acevedo Cedillo, Horacio Armando Hernández Orozco, Tereso Ramos Hernández, Guadalupe Olga Mejía Sánchez y Ricardo Ojeda Bohórquez. Disidentes: Ricardo Paredes Calderón, Héctor Lara González, Lilia Mónica López Benítez y Taissia Cruz Parceró. Ponente: Héctor Lara González. Encargado del engrose: Tereso Ramos Hernández. Secretaria: Guillermina Alderete Porras.

AYUDA ASISTENCIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 138, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE Y 164, FRACCIÓN IV, DE LA ABROGADA. CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LA CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO LABORAL CUANDO SE DEMANDA SU OTORGAMIENTO.

PC.VI.L. J/2 L (10a.) 1177

Contradicción de tesis 3/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia de Trabajo del Sexto Circuito. 3 de noviembre de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados Livia Lizbeth Larumbe Radilla, Gloria García Reyes, Samuel Alvarado Echavarría y Miguel Mendoza Montes. Disidentes: Emma Herlinda Villagómez Ordóñez y Francisco Esteban González Chávez. Ponente: Livia Lizbeth Larumbe Radilla. Secretario: Juan Carlos Sierra Zenteno.

Número de identificación Pág.

CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "QUE CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS", CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES.

2a./J. 2/2016 (10a.) 873

Contradicción de tesis 243/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Décimo Sexto Circuito y Segundo del Séptimo Circuito, ambos en Materia Administrativa. 18 de noviembre de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ausente: Alberto Pérez Dayán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Fabiola Delgado Trejo.

FONDO DE HABITACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES ELECTRICISTAS. LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTÁ EXENTA DE PAGAR LAS APORTACIONES PATRIMONIALES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, SALVO QUE SE ACREDITE QUE LA PRESTACIÓN DERIVADA DE AQUEL ES INFERIOR AL 5%.

PC.I.L. J/15 L (10a.) 1235

Contradicción de tesis 8/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Quinto,

Número de identificación **Pág.**

ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 30 de noviembre de 2015. Mayoría de diez votos de los Magistrados: Francisco Javier Patiño Pérez, Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso, Salvador Castro Zavaleta, María Eugenia Olascuaga García, Genaro Rivera, Elías Álvarez Torres, Ricardo Rivas Pérez, Aristeo Martínez Cruz, Juan Alfonso Patiño Chávez y Alicia Rodríguez Cruz. Ausente: Edna Lorena Hernández Granados. Disidentes: Elisa Jiménez Aguilar, Herlinda Flores Irene, Ricardo Castillo Muñoz, Héctor Landa Razo, Sergio Pallares y Lara y María Edith Cervantes Ortiz. Ponente: Juan Alfonso Patiño Chávez. Secretario: Erick Fernando Cano Figueroa.

IMPEDIMENTO PARA CONOCER DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES DENTRO DE UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA SI EXISTE PARENTESCO POR AFINIDAD EN SEGUNDO GRADO ENTRE EL ACTUARIO JUDICIAL CUYA ACTUACIÓN SE CUESTIONA Y EL JUZGADOR QUE DEBE PARTICIPAR EN LA RESOLUCIÓN DE DICHO INCIDENTE.

PC.I.L. J/16 L (10a.) 1271

Contradicción de tesis 11/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Segundo y Décimo Tercero, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 7 de diciembre de 2015. Mayoría de once votos de los Magistrados Francisco Javier Patiño Pérez, María Eugenia Olascuaga García, Genaro Rivera, Elías Álvarez Torres, Edna Lorena Hernández Granados, Ricardo Rivas Pérez, Ricardo Castillo Muñoz, Aristeo Martínez Cruz, Sergio Pallares y Lara, Juan Alfonso Patiño Chávez y Alicia Rodríguez Cruz. Ausente: Magistrado Antonio Rebollo Torres. Magistrados disidentes: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso, Elisa Jiménez Aguilar, Salvador Castro Zavaleta, Héctor Landa Razo y María Edith Cervantes Ortiz. Encargado del engrose: Magistrado Francisco Javier Patiño Pérez. Secretaria: Lidia Granados Duarte.

IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA LEY DE

PC.IV.A. J/21 A (10a.) 1320

	Número de identificación	Pág.
HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE PREVÉ LA EXENCIÓN DE SU PAGO A LAS EROGACIONES QUE EFECTÚEN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.		
<p>Contradicción de tesis 5/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 10 de noviembre de 2015. Mayoría de dos votos de los Magistrados Jorge Meza Pérez y Sergio Javier Coss Ramos. Disidente y Ponente: José Elías Gallegos Benítez. Encargado del engrose: Sergio Javier Coss Ramos. Secretario: Edmundo Raúl González Villaumé.</p>		
INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SU PROMOCIÓN INTERRUPE EL PLAZO DE 3 AÑOS PREVISTO POR EL ARTÍCULO 1079, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PARA EJECUTAR LA SENTENCIA QUE HA CAUSADO ESTADO, DICTADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL.	PC.XX. J/5 C (10a.)	1347
<p>Contradicción de tesis 2/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero de Circuito del Centro Auxiliar de la Octava Región, con residencia en Cancún, Quintana Roo y Cuarto del Vigésimo Circuito. 29 de septiembre de 2015. Unanimidad de cuatro votos de los Magistrados, Presidente Daniel Sánchez Montalvo, Manuel de Jesús Rosales Suárez, Irma Caudillo Peña y Jorge Mason Cal y Mayor. Ponente: Manuel de Jesús Rosales Suárez. Secretario: José Emilio Ballinas Ramos.</p>		
JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN LA QUE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD	PC.XXVII. J/5 A (10a.)	1425

Número de identificación Pág.

DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.

Contradicción de tesis 3/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito. 10 de noviembre de 2015. Mayoría de dos votos de los Magistrados José Angel Máttar Oliva y Florida López Hernández. Disidente y Ponente: Jorge Mercado Mejía. Encargada del engrose: Florida López Hernández. Secretario: Edgar Alan Paredes García.

JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES.

PC.XXVII. J/4 A (10a.) 1426

Contradicción de tesis 3/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Tercero, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito. 10 de noviembre de 2015. Mayoría de dos votos de los Magistrados José Angel Máttar Oliva y Florida López Hernández. Disidente y Ponente: Jorge Mercado Mejía. Encargada del engrose: Florida López Hernández. Secretario: Edgar Alan Paredes García.

JUICIO ORAL MERCANTIL. ES PROCEDENTE CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN PERSONAL DE COBRO DERIVADA DE UN CONTRATO DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA, CUANDO SEA DE CUANTÍA DETERMINADA E INFERIOR AL MONTO FIJADO EN EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO.

PC.XXII. J/7 C (10a.) 1462

Contradicción de tesis 6/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos del Vigésimo Segundo Circuito. 27 de octu-

bre de 2015. Mayoría de tres votos de los Magistrados Alma Rosa Díaz Mora, Fernando Reza Saldaña y Carlos Hinostrosa Rojas. Disidente: Ramiro Rodríguez Pérez. Ponente: Alma Rosa Díaz Mora. Secretaria: Dennisse Reza Anaya.

OFRECIMIENTO DE TRABAJO. EL HECHO DE QUE SE REALICE CON UNA DIFERENCIA SALARIAL MÍNIMA DE ALGUNOS CENTAVOS DIARIOS, NO ES MOTIVO PARA CALIFICARLO DE MALA FE, AL NO MODIFICARSE LAS CONDICIONES FUNDAMENTALES DE TRABAJO, NI DEPRECIARSE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL TRABAJADOR.

PC.III.L. J/12 L (10a.)

1507

Contradicción de tesis 3/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo y Cuarto, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 27 de noviembre de 2015. Mayoría de tres votos de los Magistrados Alejandro López Bravo, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo y Fernando Coter Bernal. Disidente: José de Jesús López Arias. Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretaria: Yuridia Arias Álvarez.

PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. AL RESOLVER LA JUNTA SOBRE EL AJUSTE EN LA CUANTIFICACIÓN DE SU PAGO, DEBE ATENDER EL LÍMITE SUPERIOR PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, SIN QUE REPRESENTA OBSTÁCULO ALGUNO QUE EL DEMANDADO NO SE HUBIERE EXCEPCIONADO EN ESE SENTIDO.

2a./J. 8/2016 (10a.)

913

Contradicción de tesis 285/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Tercero del Primer Circuito y Tercero del Cuarto Circuito, ambos en Materia de Trabajo. 6 de enero de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I.,

Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votaron contra las consideraciones relacionadas con el aspecto financiero del Instituto Mexicano del Seguro Social, Margarita Beatriz Luna Ramos y José Fernando Franco González Salas. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretario: Jorge Antonio Medina Gaona.

Número de identificación Pág.

PENSIÓN POR VIUDEZ. PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A AQUÉLLA CON FUNDAMENTO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 97/2012 (10a.) (*).

2a./J. 3/2016 (10a.)

947

Contradicción de tesis 277/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Décimo Segundo en Materia Administrativa del Primer Circuito y Primero en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito. 25 de noviembre de 2015. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Juan N. Silva Meza, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretaria: Fabiola Delgado Trejo.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. TRATÁNDOSE DE DELITOS QUE SE PERSIGUEN POR QUERRELLA DE LA VÍCTIMA O DEL OFENDIDO, SÓLO SE INTERRUMPE POR LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).

PC.XXVII. J/1 P (10a.)

1555

Contradicción de tesis 4/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos del Vigésimo Séptimo Circuito. 10 de noviembre de 2015. Mayoría de dos votos de los Magistrados Florida López Hernández y José Angel Máttar Oliva. Disidente: Jorge Mercado Mejía. Ponente: Florida López Hernández. Secretaria: Angélica del Carmen Ortuño Suárez.

	Número de identificación	Pág.
RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA O CONCEDE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA INTERPONERLO ES DE 5 DÍAS HÁBILES, AL NO TRATARSE DE ALGÚN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO.	PC.III.L. J/13 L (10a.)	1612
<p>Contradicción de tesis 7/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero y Cuarto, ambos en Materia de Trabajo del Tercer Circuito. 11 de diciembre de 2015. Mayoría de tres votos de los Magistrados Alejandro López Bravo, Alfonsina Berta Navarro Hidalgo y Fernando Cotero Bernal. Disidente: José de Jesús López Arias. Ponente: Alejandro López Bravo. Secretaria: Yuridia Arias Álvarez.</p>		
RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, EMITIDAS EN CUMPLIMIENTO A UN MANDATO DEL PLENO DE ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL.	PC.III.A. J/14 A (10a.)	1642
<p>Contradicción de tesis 5/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados de Circuito Tercero del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con residencia en Culiacán, Sinaloa, y Tercero del Centro Auxiliar de la Tercera Región, con residencia en Guadalajara, Jalisco. 9 de noviembre de 2015. Unanimidad de cinco votos de los Magistrados Juan Bonilla Pizano, Jaime C. Ramos Carreón, Tomás Gómez Verónica, Hugo Gómez Ávila y Jorge Héctor Cortés Ortiz. Ponente: Jaime C. Ramos Carreón. Secretario: Mauricio Fernando Villaseñor Sandoval.</p>		
REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN	PC.II.C. J/2 K (10a.)	1685

Número de identificación Pág.

Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS, AUNQUE SE DICTEN EN DISTINTAS DETERMINACIONES.

Contradicción de tesis 1/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Tercero, ambos en Materia Civil del Segundo Circuito. 10 de noviembre de 2015. Mayoría de tres votos de los Magistrados Noé Adonai Martínez Berman, Juan Manuel Vega Sánchez y José Martínez Guzmán. Disidente: Ricardo Romero Vázquez. Ponente: Juan Manuel Vega Sánchez.

REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER ESTE BENEFICIO A LOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (SECUESTRO), EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE NO TIENE APLICACIÓN RETROACTIVA EN SU BENEFICIO LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL.

PC.I.P. J/20 P (10a.)

1732

Contradicción de tesis 8/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto, Primero y Séptimo, todos en Materia Penal del Primer Circuito. 8 de diciembre de 2015. Mayoría de seis votos de los Magistrados Ricardo Paredes Calderón, Mario Ariel Acevedo Cedillo, Tereso Ramos Hernández, Lilia Mónica López Benítez, Guadalupe Olga Mejía Sánchez y Ricardo Ojeda Bohórquez. Disidentes: Héctor Lara González, Horacio Armando Hernández Orozco y Taissia Cruz Parceró. Ponente: Tereso Ramos Hernández. Secretaria: Guillermina Alderete Porras.

REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER ESTE BENEFICIO TRATÁNDOSE DE SENTENCIADOS POR EL

PC.I.P. J/19 P (10a.)

1733

DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (SECUESTRO), DE ACUERDO A LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ACTUALMENTE ABROGADA, HASTA ANTES DE LA REFORMA A SU ARTÍCULO 50, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 4 DE JUNIO DE 2004.

Contradicción de tesis 8/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto, Primero y Séptimo, todos en Materia Penal del Primer Circuito. 8 de diciembre de 2015. Mayoría de seis votos de los Magistrados Ricardo Paredes Calderón, Mario Ariel Acevedo Cedillo, Tereso Ramos Hernández, Lilia Mónica López Benítez, Guadalupe Olga Mejía Sánchez y Ricardo Ojeda Bohórquez. Disidentes: Héctor Lara González, Horacio Armando Hernández Orozco y Taissia Cruz Parceró. Ponente: Tereso Ramos Hernández. Secretaria: Guillermina Alderete Porras.

ROBO CALIFICADO. LA AGRAVANTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 224, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE ACTUALIZA AUNQUE EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO NO ESTÉ PRESTANDO EL SERVICIO A QUE ESTÁ DESTINADO.

PC.I.P. J/18 P (10a.)

1764

Contradicción de tesis 9/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Noveno, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 24 de noviembre de 2015. Mayoría de cinco votos de los Magistrados Ricardo Paredes Calderón, Ricardo Ojeda Bohórquez, Héctor Lara González, Tereso Ramos Hernández y Taissia Cruz Parceró. Disidentes: Mario Ariel Acevedo Cedillo, Horacio Armando Hernández Orozco, Lilia Mónica López Benítez y Guadalupe Olga Mejía Sánchez. Ponente: Lilia Mónica López Benítez. Encargada del engrose: Taissia Cruz Parceró. Secretario: Ricardo Monterosas Castorena.

	Número de identificación	Pág.
SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EXCEPCIONALMENTE, EN TUTELA DEL INTERÉS SOCIAL, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA INTERLOCUTORIA QUE CONCEDE AL ACTOR EN EL JUICIO DE NULIDAD LA MEDIDA CAUTELAR PARA QUE CONTINÚE EN OPERACIÓN CON LA ACTIVIDAD DE GASOLINERA.	PC.III.A. J/13 A (10a.)	1783

Contradicción de tesis 18/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto y Tercero, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 19 de octubre de 2015. Unanimidad de cinco votos de los Magistrados Juan Bonilla Pizano, Jaime Crisanto Ramos Carreón, Jorge Héctor Cortés Ortiz, Hugo Gómez Ávila y Tomás Gómez Verónica. Ponente: Tomás Gómez Verónica. Secretario: Guillermo García Tapia.

TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, CONTENIDAS EN LOS DECRETOS NÚMEROS 24646/LX/13 Y 23711/LIX/11. LOS PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL ELEMENTO RELATIVO A LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRAN EN LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DE ESE ESTADO Y EL HECHO DE QUE LA DEFINICIÓN DE AQUÉLLOS ESTÉ EN EL REGLAMENTO DE ÉSTA, SÓLO IMPLICA QUE LOS DESARROLLA A DETALLE, POR LO QUE NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.	PC.III.A. J/12 A (10a.)	1843
--	-------------------------	------

Contradicción de tesis 2/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto y Cuarto, ambos en Materia Administrativa del Tercer Circuito. 19 de octubre de 2015. Mayoría de cuatro votos de los Magistrados Jaime Crisanto Ramos Carreón, Tomás Gómez Verónica, Hugo Gómez Ávila y Jorge Héctor Cortés Ortiz. Disidente: Juan Bonilla Pizano. Ponente: Hugo Gómez Ávila. Secretaria: Claudia de Anda García.

	Número de identificación	Pág.
VIDA SILVESTRE. LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA APLICACIÓN DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, NO PROVOCA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI CONTRAVIENE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO.	PC.XVI.A. J/12 A (10a.)	1896

Contradicción de tesis 1/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 17 de noviembre de 2015. Unanimidad de seis votos de los Magistrados Arturo Hernández Torres, Enrique Villanueva Chávez, Víctor Manuel Estrada Jungo, José de Jesús Quesada Sánchez, Ariel Alberto Rojas Caballero y José Gerardo Mendoza Gutiérrez. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Misael Esteban López Sandoval.

VIDA SILVESTRE. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, AL TRATARSE DE UNA NORMA PROHIBITIVA CON EFECTOS POSITIVOS.	PC.XVI.A. J/11 A (10a.)	1897
---	-------------------------	------

Contradicción de tesis 1/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Administrativa del Décimo Sexto Circuito. 17 de noviembre de 2015. Unanimidad de seis votos de los Magistrados Arturo Hernández Torres, Enrique Villanueva Chávez, Víctor Manuel Estrada Jungo, José de Jesús Quesada Sánchez, Ariel Alberto Rojas Caballero y José Gerardo Mendoza Gutiérrez. Ponente: Enrique Villanueva Chávez. Secretario: Misael Esteban López Sandoval.

Tabla General Temática de Tesis de Jurisprudencia y Aisladas

	Número de identificación	Pág.
Acceso a la información, derecho fundamental de.—Véase: "INTERÉS LEGÍTIMO EN AMPARO CONTRA LEYES PENALES. SE ACTUALIZA ANTE NORMAS CUYA MERA EXISTENCIA GENERA UN EFECTO DISUASIVO EN EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y EL DERECHO FUNDAMENTAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN."	1a. XXXI/2016 (10a.)	678
Acceso a la justicia completa, derecho fundamental de.—Véase: "RECURSO DE QUEJA. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO AUXILIAR EN LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, POR LA QUE NIEGA PROVEER DE CONFORMIDAD LA SOLICITUD DEL TERCERO INTERESADO, DE DECRETAR QUE HA DEJADO DE SURTIR EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO."	I.2o.C.7 K (10a.)	2130
Acceso a la justicia, violación al derecho humano de.—Véase: "DEMANDA LABORAL. EL REQUERIMIENTO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA QUE EL PROMOVENTE ACREDITE SU IDENTIDAD, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE TENERLA POR NO INTERPUESTA, ES ILEGAL Y CONTRARÍA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."	VI.1o.T. J/2 (10a.)	1953
Acceso a una completa solución de controversias, derecho de.—Véase: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO."		

	Número de identificación	Pág.
ES OPTATIVO PARA LA PARTE ACTORA HACER VALER LA QUEJA REGULADA EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO."	I.1o.A.32 K (10a.)	2051
Acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental de.—Véase: "FACULTAD DE ATRACCIÓN. ES PROCEDENTE SU EJERCICIO SI EL RECURSO DE QUEJA PLANTEADO ACTUALIZA LA NECESIDAD DE DEFINIR EL ALCANCE DE UNA DISPOSICIÓN DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EN LA QUE SE INCORPORE UNA LIMITACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES QUE NO EXISTÍA EN LA LEY DE AMPARO ABROGADA."	1a. XXVII/2016 (10a.)	674
Agravio personal y directo, principio de.—Véase: "DEFENSOR DEL QUEJOSO PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. CUENTA CON LEGITIMACIÓN LEGAL PARA DESIGNAR AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA."	I.3o.P.42 P (10a.)	2054
Amparo indirecto, procedencia del.—Véase: "INCOMPETENCIA, EXCEPCIÓN DE. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACUERDO DEL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESERVA SU RESOLUCIÓN PARA EMITIRLA DE FORMA CONJUNTA CON LA SENTENCIA."	XXI.1o.PA.33 A (10a.)	2077
Amparo indirecto, procedencia del.—Véase: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS, AUNQUE SE DICTEN EN DISTINTAS DETERMINACIONES."	PC.II.C. J/2 K (10a.)	1685
Audiencia, derecho de.—Véase: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SI SU DESECHAMIENTO DE PLANO		

	Número de identificación	Pág.
OCURRIÓ PORQUE EN EL AUTO ADMISORIO EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIRTIÓ UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, ES INNECESARIO DAR VISTA PREVIAMENTE AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA."	XXVII.3o.93 K (10a.)	2056
Audiencia, derecho de.—Véase: "PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL. ES VÁLIDO SU DESAHOGO A TRAVÉS DEL USO DE AVANCES TECNOLÓGICOS (VIDEOCONFERENCIA)."	III.1o.T.28 L (10a.)	2119
Audiencia, garantía de.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL CARGO DE UNA AUTORIDAD (MUNÍCIPE DE UN AYUNTAMIENTO) POR INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO. CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO INICIAR EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO."	III.3o.T.37 L (10a.)	2189
Audiencia previa, derecho fundamental de.—Véase: "DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES. EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO SE RIGE POR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA PREVIA."	1a. XXIX/2016 (10a.)	672
Autogobierno de las universidades, principio de.—Véase: "BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA FALTA DE RESPUESTA Y LA POSTERIOR CONTESTACIÓN DE UNA PETICIÓN FORMULADA EN EL CONTEXTO DEL PROCESO DE ELECCIÓN DEL RECTOR."	VI.1o.A.93 A (10a.)	2029
Autonomía, garantía institucional de.—Véase: "BENEMÉRITA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE PUEBLA.		

	Número de identificación	Pág.
ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LA FALTA DE RESPUESTA Y LA POSTERIOR CONTESTACIÓN DE UNA PETICIÓN FORMULADA EN EL CONTEXTO DEL PROCESO DE ELECCIÓN DEL RECTOR."	VI.1o.A.93 A (10a.)	2029
Celeridad, principio de.—Véase: "PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL. ES VÁLIDO SU DESAHOGO A TRAVÉS DEL USO DE AVANCES TECNOLÓGICOS (VIDEOCONFERENCIA)."	III.1o.T.28 L (10a.)	2119
Celeridad, principio de.—Véase: "RECONVENCIÓN. SU PROCEDENCIA EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.C.30 C (10a.)	2121
Completitud del acceso a la justicia, derecho de.—Véase: "RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA PENAL. AUN CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA HAYA SUSTENTADO SU DECISIÓN HACIENDO SUYOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, DEBIDO A QUE NO ENCONTRÓ MOTIVO PARA SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, CON BASE EN LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 40/97, ESA CIRCUNSTANCIA NO LO AUTORIZA A INCUMPLIR CON SU DEBER DE FUNDARLA Y MOTIVARLA (ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRIBUNALES DE ALZADA DE COMPLETITUD DE SUS DECISIONES, SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA Y PROTECCIÓN DE LOS DE-RECHOS HUMANOS)."	II.1o.32 P (10a.)	2122
Concentración, principio de.—Véase: "PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL. ES VÁLIDO SU DESAHOGO A TRAVÉS DEL USO DE AVANCES TECNOLÓGICOS (VIDEOCONFERENCIA)."	III.1o.T.28 L (10a.)	2119
Concentración, principio de.—Véase: "RECONVENCIÓN. SU PROCEDENCIA EN LOS JUICIOS DE		

	Número de identificación	Pág.
DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.C.30 C (10a.)	2121
Concentración, principio de.—Véase: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, SI ÉSTE SE ACORDÓ EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y ENSEGUIDA SE DICTÓ SENTENCIA."	III.2o.P:13 K (10a.)	2129
Congruencia, principio de.—Véase: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD."	2a./J. 9/2016 (10a.)	832
Continuidad, principio de.—Véase: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, SI ÉSTE SE ACORDÓ EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y ENSEGUIDA SE DICTÓ SENTENCIA."	III.2o.P:13 K (10a.)	2129
Cosa juzgada, principio de.—Véase: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES DEL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO, EMITIDAS EN CUMPLIMIENTO A UN MANDATO DEL PLENO DE ESE ÓRGANO JURISDICCIONAL."	PC.III.A. J/14 A (10a.)	1642
Defensa adecuada, derecho de.—Véase: "CONFRONTACIÓN. PARA QUE LA DILIGENCIA RELATIVA PRACTICADA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA PUEDA TENER VALIDEZ DURANTE EL PROCESO, ES		

	Número de identificación	Pág.
NECESARIO QUE EL DEFENSOR DEL INculpADO ESTÉ PRESENTE DURANTE SU DESARROLLO, PARA SALVAGUARDAR SU DERECHO DE DEFENSA ADECUADA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.3o.P.43 P (10a.)	2045
Defensa adecuada, derecho humano de.—Véase: "INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. PROCEDE EN CUALQUIER ESTADO DEL PROCESO, INCLUSO, DESPUÉS DEL CIERRE DE INSTRUCCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 546 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL)."	I.3o.P.46 P (10a.)	2076
Defensa, derecho de.—Véase: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA QUE EL JUEZ DE CONTROL PUEDA DETERMINAR SI EL HECHO IMPUTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACUSADO ES O NO CONSTITUTIVO DE DELITO, DEBE ANALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL ILÍCITO CORRESPONDIENTE, ESTO ES, SUS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS."	XXVII.3o.20 P (10a.)	2025
Definitividad de las resoluciones jurisdiccionales, principio de.—Véase: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. NO ES UN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO DENTRO DEL PROCEDIMIENTO, SINO UN JUICIO AUTÓNOMO."	XXVII.3o.97 K (10a.)	2229
Definitividad en el amparo, principio de.—Véase: "INCOMPETENCIA, EXCEPCIÓN DE. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACUERDO DEL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESERVA SU RESOLUCIÓN PARA EMITIRLA DE FORMA CONJUNTA CON LA SENTENCIA."	XXI.1o.PA.33 A (10a.)	2077
Definitividad en el amparo, principio de.—Véase: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO		

	Número de identificación	Pág.
AGRARIO. DEBE AGOTARSE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN LA QUE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO."	PC.XXVII. J/5 A (10a.)	1425
Definitividad en el amparo, principio de.—Véase: "RECURSO DE QUEJA. CONTRA EL AUTO EMITIDO POR EL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DISTRITAL QUE LO DESECHA PROCEDE EL DE RECONSIDERACIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA)."	VIII.2o.C.T.3 C (10a.)	2124
Distribución probatoria, principio de.—Véase: "AMPARO CONTRA LEYES. EL RECIBO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, ES EFICAZ PARA ESTABLECER LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS E INICIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE QUE LA QUEJOSA TUVO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN CON POSTERIORIDAD."	PC.XXII. J/5 A (10a.)	1062
Economía, principio de.—Véase: "PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL. ES VÁLIDO SU DESAHOGO A TRAVÉS DEL USO DE AVANCES TECNOLÓGICOS (VIDEOCONFERENCIA)."	III.1o.T.28 L (10a.)	2119
Economía, principio de.—Véase: "RECONVENCIÓN. SU PROCEDENCIA EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.C.30 C (10a.)	2121

	Número de identificación	Pág.
Eficiencia en el desempeño del servicio público, principio de.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. NATURALEZA JURÍDICA Y SUSTENTO CONSTITUCIONAL DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN QUE CONFORMAN LOS PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL."	2a./J. 17/2016 (10a.)	840
Equidad tributaria, principio de.—Véase: "IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE PREVE LA EXENCIÓN DE SU PAGO A LAS EROGACIONES QUE EFECTÚEN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA."	PC.IV.A. J/21 A (10a.)	1320
Equidad tributaria, principio de.—Véase: "IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY RELATIVA NO CONTRAVIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA."	1a. XXVIII/2016 (10a.)	677
Equidad tributaria, principio de.—Véase: "VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005)."	1a. XLIII/2016 (10a.)	687
Especialidad, principio de.—Véase: "MARCA. SU REGISTRO AMPARA ÚNICAMENTE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DE FORMA EXPRESA Y ESPECÍFICA REFIERE SU TÍTULO."	I.1o.A.120 A (10a.)	2096
Estabilidad y permanencia en el cargo, derecho a la.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ALCANCE DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD Y PERMANENCIA EN EL CARGO		

	Número de identificación	Pág.
DENTRO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL."	2a./J. 20/2016 (10a.)	834
Estabilidad y permanencia en el cargo, derecho a la.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. JUSTIFICACIÓN EN LA DIFERENCIA DE TRATO ENTRE LOS PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LOS DE LIBRE DESIGNACIÓN."	2a./J. 19/2016 (10a.)	839
Estabilidad y permanencia en el cargo, derecho a la.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY RELATIVA, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y 20 DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS."	2a./J. 23/2016 (10a.)	842
Exhaustividad, principio de.—Véase: "SENTENCIAS DE AMPARO. SU CUMPLIMIENTO DEBE SER TOTAL, ATENTO A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y DE EXHAUSTIVIDAD."	2a./J. 9/2016 (10a.)	832
Fundamentación y motivación derecho humano de.—Véase: "RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA PENAL. AUN CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA HAYA SUSTENTADO SU DECISIÓN HACIENDO SUYOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, DEBIDO A QUE NO ENCONTRÓ MOTIVO PARA SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, CON BASE EN LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 40/97, ESA CIRCUNSTANCIA NO LO AUTORIZA A INCUMPLIR CON SU DEBER DE FUNDARLA Y MOTIVARLA (ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRIBUNALES DE ALZADA DE COMPLETITUD		

	Número de identificación	Pág.
DE SUS DECISIONES, SUPLENIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS)."	II.1o.32 P (10a.)	2122
Fundamentación y motivación, derecho humano de.—Véase: "RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA PENAL. PARA QUE LA AUTORIDAD DE ALZADA CUMPLA SU DEBER DE FUNDARLO Y MOTIVARLO Y OTORQUE AL RECURRENTE LA OPORTUNIDAD DE IMPUGNAR LAS CONSIDERACIONES EN LAS QUE AQUÉL SE FUNDA, DEBE PLASMAR EN SU SENTENCIA LAS RAZONES Y EL SENTIDO DE SU FALLO."	II.1o.31 P (10a.)	2124
Identidad, principio de.—Véase: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA EN EL FUERO MILITAR. DEBE ORDENARSE SI EL JUEZ QUE DICTÓ LA SENTENCIA DEFINITIVA NO FUE EL MISMO QUE CELEBRÓ LA AUDIENCIA DE DERECHO EN LA QUE SE DECLARÓ VISTO EL ASUNTO."	I.5o.P45 P (10a.)	2136
Igualdad, derecho fundamental a la.—Véase: "FACULTAD DE ATRACCIÓN. ES PROCEDENTE SU EJERCICIO SI EL RECURSO DE QUEJA PLANTEADO ACTUALIZA LA NECESIDAD DE DEFINIR EL ALCANCE DE UNA DISPOSICIÓN DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EN LA QUE SE INCORPORA UNA LIMITACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES QUE NO EXISTÍA EN LA LEY DE AMPARO ABROGADA."	1a. XXVII/2016 (10a.)	674
Igualdad, principio de.—Véase: "ALIMENTOS VENCIDOS. FORMA EN QUE OPERAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y EL ESTÁNDAR DE PRUEBA CUANDO AQUÉLLOS DERIVAN DE UN ADEUDO CONTRAÍDO POR LOS ACREEDORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO)."	PC.XXII. J/4 C (10a.)	991
Igualdad, principio de.—Véase: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EL IMPUTADO SOLICITÓ		

	Número de identificación	Pág.
LA PRÓRROGA A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL PARA QUE SE LE RESUELVA SU SITUACIÓN JURÍDICA, EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ EN APTITUD DE REQUERIR QUE SE DECRETE AQUÉL, PREVIAMENTE A ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA CELEBRADA CON MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONSTITUCIONAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MORELOS)."	XVIII.5o.1 P (10a.)	2026
Igualdad, principio de.—Véase: "UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA CLÁUSULA QUINTA TRANSITORIA DEL CONVENIO QUE CREA Y REGULA EL RÉGIMEN DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESA INSTITUCIÓN, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN."	2a. III/2016 (10a.)	953
Igualdad procesal, derecho fundamental a la.—Véase: "DICTÁMENES PERICIALES. LA NO RATIFICACIÓN DEL RENDIDO POR EL PERITO OFICIAL CONSTITUYE UN VICIO FORMAL SUBSANABLE, POR LO QUE EN NINGÚN CASO DEBE DAR LUGAR A CONSIDERAR QUE CONSTITUYE PRUEBA ILÍCITA QUE DEBA SER EXCLUIDA DEL ANÁLISIS PROBATORIO CORRESPONDIENTE."	1a. XXXIV/2016 (10a.)	673
Igualdad, violación al derecho fundamental de.—Véase: "TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, AL EXIGIR LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE TRABAJO [ABANDONO DE LA TESIS IV.2o.A.80 A (10a.)]."	IV.2o.A.4 CS (10a.)	2231

	Número de identificación	Pág.
Igualdad, violación al derecho fundamental de.— Véase: "TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, AL EXIGIR LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL [ABANDONO DE LAS TESIS IV.2o.A.78 A (10a.) Y IV.2o.A.81 A (10a.)]."	IV.2o.A.3 CS (10a.)	2233
Imparcialidad, derecho de.— Véase: "IMPEDIMENTO PARA CONOCER DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES DENTRO DE UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA SI EXISTE PARENTESCO POR AFINIDAD EN SEGUNDO GRADO ENTRE EL ACTUARIO JUDICIAL CUYA ACTUACIÓN SE CUESTIONA Y EL JUZGADOR QUE DEBE PARTICIPAR EN LA RESOLUCIÓN DE DICHO INCIDENTE."	PC.I.L. J/16 L (10a.)	1271
Imparcialidad, principio de.— Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. NATURALEZA JURÍDICA Y SUSTENTO CONSTITUCIONAL DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN QUE CONFORMAN LOS PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL."	2a./J. 17/2016 (10a.)	840
Impartición de justicia, derecho a la.— Véase: "TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS EN LOS QUE LA LITIS SE CENTRE EN RESOLVER EL MEJOR DERECHO A SUCEDER LOS BIENES AGRARIOS DE UN EJIDATARIO, AUN CUANDO LA ACCIÓN O RECONVENCIÓN SE BASE EN UN TESTAMENTO		

	Número de identificación	Pág.
PÚBLICO ABIERTO OTORGADO POR EL <i>DE CUJUS</i> EN FAVOR DE UNA DE LAS PARTES."	III.1o.A.26 A (10a.)	2235
Indemnización, derecho a una.—Véase: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)]."	2a. II/2016 (10a.)	951
Indemnización, derecho a una.—Véase: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. JUSTIFICACIÓN EN LA DIFERENCIA DE TRATO ENTRE LOS DE CONFIANZA PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LOS DE BASE."	2a./J. 21/2016 (10a.)	833
Indemnización, derecho a una.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ALCANCE DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD Y PERMANENCIA EN EL CARGO DENTRO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL."	2a./J. 20/2016 (10a.)	834
Independencia judicial, principio de.—Véase: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE MORELOS DESIGNADOS TEMPORAL E INTERINAMENTE. PARÁMETROS PARA SU REMOCIÓN, CONFORME AL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL."	XVIII.5o.1 CS (10a.)	2087
Inmediación, principio de.—Véase: "PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL. ES VÁLIDO SU DESAHOGO		

	Número de identificación	Pág.
A TRAVÉS DEL USO DE AVANCES TECNOLÓGICOS (VIDEOCONFERENCIA)."	III.1o.T.28 L (10a.)	2119
Instancia de parte agraviada, principio de.—Véase: "DEFENSOR DEL QUEJOSO PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. CUENTA CON LEGITIMACIÓN LEGAL PARA DESIGNAR AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA."	I.3o.P.42 P (10a.)	2054
Instancia de parte, principio de.—Véase: "PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL. ES VÁLIDO SU DESAHOGO A TRAVÉS DEL USO DE AVANCES TECNOLÓGICOS (VIDEOCONFERENCIA)."	III.1o.T.28 L (10a.)	2119
Interés en el amparo, falta de.—Véase: "LINEAMIENTOS SOBRE <i>MUST CARRY</i> Y <i>MUST OFFER</i> EMITIDOS POR EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. LOS CONCESIONARIOS DE TELEVISIÓN RESTRINGIDA TERRENAL CARECEN DE INTERÉS PARA RECLAMAR EN AMPARO LA RESTRICCIÓN QUE, ADUCEN, AQUÉLLOS IMPONEN A LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE AUTOR, CONSISTENTE EN ENTREGAR GRATUITAMENTE EL CONTENIDO QUE LES PERTENECE."	I.1o.A.E.127 A (10a.)	2093
Interés jurídico en el amparo.—Véase: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE MORELOS DESIGNADOS TEMPORAL E INTERINAMENTE. TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ESTATAL QUE DA POR CONCLUIDO SU ENCARGO PARA NOMBRAR OTRO JUZGADOR CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS."	XVIII.5o.4 K (10a.)	2088
Interés jurídico en el amparo, falta de.—Véase: "REDUCCIÓN DE SANCIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE		

	Número de identificación	Pág.
INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 33 BIS 3 DE LA ABROGADA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. ES NOTORIA LA IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RELATIVA, INTERPUESTA POR PERSONA DISTINTA DEL BENEFICIADO."	I.1o.A.E.112 A (10a.)	2132
Interés legítimo en el amparo.—Véase: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LOS PERIODISTAS CUENTAN CON INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO, SIN ACTO DE APLICACIÓN PREVIO, EL ARTÍCULO 398 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, POR SU POTENCIAL DE AFECTACIÓN EN LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA."	1a. XXXIII/2016 (10a.)	680
Interés legítimo en el amparo, falta de.—Véase: "REDUCCIÓN DE SANCIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 33 BIS 3 DE LA ABROGADA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. ES NOTORIA LA IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RELATIVA, INTERPUESTA POR PERSONA DISTINTA DEL BENEFICIADO."	I.1o.A.E.112 A (10a.)	2132
Interés superior de la niñez, principio de.—Véase: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA POR INACTIVIDAD PROCESAL. ES INAPLICABLE EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DEMANDAN ALIMENTOS A FAVOR DE MENORES, PERO SÍ OPERA CUANDO TENGA UN IMPACTO POSITIVO SOBRE ÉSTOS, ATENTO AL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ [LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS XIX.1o.A.C.51 C)]."	XIX.1o.A.C.10 C (10a.)	2033

	Número de identificación	Pág.
Interés superior de la niñez, principio de.—Véase: "DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. SE VULNERA EN PERJUICIO DE LOS MENORES DE EDAD CON MOTIVO DE LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES Y SENSIBLES EN EL PORTAL DE INTERNET DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A TRAVÉS DE SU DEPARTAMENTO DE LOCATEL, A PROPÓSITO DE LA PETICIÓN DE UN PARTICULAR, QUE NO SE UBIQUE EN ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO INMINENTE DE SUFRIR DAÑO GRAVE EN SU INTEGRIDAD PERSONAL."	XXII.1o.1 CS (10a.)	2060
Interés superior del menor.—Véase: "ABANDONO DE MENOR DE EDAD. LA SANCIÓN RELATIVA A LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD NO DEBE CONDICIONARSE A QUE SE COMPROMETA SU SALUD O SEGURIDAD (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 418, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN ABROGADO)."	XI.2o.C.10 C (10a.)	2015
Interés superior del menor.—Véase: "SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. SUPUESTO EN EL QUE NO EXISTE VIOLACIÓN A DICHA MEDIDA CAUTELAR, NI EXCESO O DEFECTO EN SU CUMPLIMIENTO, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS QUE INVOLUCRAN A MENORES DE EDAD."	I.5o.P9 K (10a.)	2185
Interpretación más favorable a la persona, principio de.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY RELATIVA, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y 20 DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS."	2a./J. 23/2016 (10a.)	842

	Número de identificación	Pág.
Jerarquía normativa, violación al principio de.— Véase: "INFONAVIT. LA REGLA DÉCIMA PRIMERA DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DEL CITADO INSTITUTO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA TUTELADO POR EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."	I.1o.A.7 CS (10a.)	2079
Justicia completa, derecho fundamental de.— Véase: "CONTINENCIA DE LA CAUSA. SI EN EL RECURSO DE REVISIÓN SE IMPUGNA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE DECIDE SOBRE EL DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA (EL CUAL PUEDE CONTROVERTIRSE EN QUEJA) Y EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, PARA NO DIVIDIR AQUÉLLA, DEBE ESTUDIARLOS EN SU CONJUNTO, SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LA TEMPORALIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO PARA SU INTERPOSICIÓN, RESPECTO DEL ACTO QUE FUERE MATERIA DEL RECURSO DE QUEJA (DESECHAMIENTO)."	I.3o.P6 K (10a.)	2046
Justicia pronta, completa, imparcial y gratuita, principio de.— Véase: "PRINCIPIO DE IDENTIDAD. EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN EL FUERO MILITAR, POR LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, AQUÉL IMPERA ENTRE EL JUEZ QUE DESAHOGÓ LA AUDIENCIA DE DERECHO Y EL QUE RESOLVERÁ EN DEFINITIVA."	I.5o.P44 P (10a.)	2113
Justicia pronta y expedita, violación al derecho fundamental de.— Véase: "CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. AL ACTUALIZARSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, NO ES OBLIGATORIO DAR VISTA		

	Número de identificación	Pág.
DE OFICIO AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA PUES, DE HACERLO, SE AFECTARÍA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	VIII.2o.C.T.6 K (10a.)	2035
Legalidad, principio de.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. NATURALEZA JURÍDICA Y SUSTENTO CONSTITUCIONAL DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN QUE CONFORMAN LOS PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL."	2a./J. 17/2016 (10a.)	840
Legalidad tributaria, principio de.—Véase: "TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, CONTENIDAS EN LOS DECRETOS NÚMEROS 24646/LX/13 Y 23711/LIX/11. LOS PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL ELEMENTO RELATIVO A LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRAN EN LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DE ESE ESTADO Y EL HECHO DE QUE LA DEFINICIÓN DE AQUÉLLOS ESTÉ EN EL REGLAMENTO DE ÉSTA, SÓLO IMPLICA QUE LOS DESARROLLA A DETALLE, POR LO QUE NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA."	PC.III.A. J/12 A (10a.)	1843
Legalidad tributaria, principio de.—Véase: "VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005)."	1a. XLII/2016 (10a.)	688
Libertad de trabajo, violación al derecho fundamental a la.—Véase: "TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL		

	Número de identificación	Pág.
ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, AL EXIGIR LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE TRABAJO [ABANDONO DE LA TESIS IV.2o.A.80 A (10a.).]"	IV.2o.A.4 CS (10a.)	2231
Libertad, derecho a la.—Véase: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DE UN INCIDENTE NO ESPECIFICADO EN MATERIA PENAL. SI LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR ESTA RESOLUCIÓN, NO SE TRADUCEN EN UNA EJECUCIÓN MATERIAL DEL ACTO RECLAMADO, DEBIDO A QUE NINGUNA CONSECUENCIA INMEDIATA Y DIRECTA ORIGINAN EN EL DERECHO SUSTANTIVO ALEGADO (LIBERTAD), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA."	II.2o.P.17 K (10a.)	2040
Libertad tarifaria, principio de.—Véase: "PODER SUSTANCIAL EN EL MERCADO DE LOS DISTINTOS SERVICIOS DESAGREGADOS DE INTERCONEXIÓN. EL PRINCIPIO DE LIBERTAD TARIFARIA NO EXIME AUTOMÁTICAMENTE A LOS AGENTES ECONÓMICOS DE LA IMPUTACIÓN DE CONTAR CON AQUÉL."	I.1o.A.E.125 A (10a.)	2110
Libre desarrollo de la personalidad, derecho al.—Véase: "DIVORCIO. ES IMPROCEDENTE EL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD EN LA APELACIÓN, CON BASE EN EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, SI EN PRIMERA INSTANCIA SE DECLARÓ LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."	IV.2o.C.7 C (10a.)	2065

	Número de identificación	Pág.
Medio ambiente sano, derecho fundamental a un.— Véase: "VIDA SILVESTRE. LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA APLICACIÓN DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, NO PROVOCA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI CONTRAVIENE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO."	PC.XVI.A. J/12 A (10a.)	1896
No discriminación, principio de.—Véase: "UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA CLÁUSULA QUINTA TRANSITORIA DEL CONVENIO QUE CREA Y REGULA EL RÉGIMEN DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESA INSTITUCIÓN, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN."	2a. III/2016 (10a.)	953
No discriminación, violación al derecho fundamental de.—Véase: "TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, AL EXIGIR LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE TRABAJO [ABANDONO DE LA TESIS IV.2o.A.80 A (10a.)]."	IV.2o.A.4 CS (10a.)	2231
No discriminación, violación al derecho fundamental de.—Véase: "TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, AL EXIGIR LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, TRANSGREDE		

	Número de identificación	Pág.
LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL [ABANDONO DE LAS TESIS IV.2o.A.78 A (10a.) Y IV.2o.A.81 A (10a.)]."	IV.2o.A.3 CS (10a.)	2233
<i>Non reformatio in peius</i> , principio de.—Véase: "PRINCIPIO <i>NON REFORMATIO IN PEIUS</i> . NO ENCUENTRA APLICACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA CONCESIÓN DE AMPARO AL QUEJOSO, ANTE DISPOSICIÓN EXPRESA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 93, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO."	XVII.1o.C.T.37 K (10a.)	2114
Normas autoaplicativas.—Véase: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NORMAS CUYA SOLA EXISTENCIA GENERA UNA AFECTACIÓN AUTOAPLICATIVA QUE LO ACTUALIZA."	1a. XXXII/2016 (10a.)	679
Objetividad, principio de.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. NATURALEZA JURÍDICA Y SUSTENTO CONSTITUCIONAL DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN QUE CONFORMAN LOS PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL."	2a./J. 17/2016 (10a.)	840
Oralidad, principio de.—Véase: "PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL. ES VÁLIDO SU DESAHOGO A TRAVÉS DEL USO DE AVANCES TECNOLÓGICOS (VIDEOCONFERENCIA)."	III.1o.T.28 L (10a.)	2119
Presunción de inocencia, principio de.—Véase: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DE UN INCIDENTE NO ESPECIFICADO EN MATERIA PENAL. SI LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR ESTA RESOLUCIÓN, NO SE TRADUCEN EN UNA		

	Número de identificación	Pág.
EJECUCIÓN MATERIAL DEL ACTO RECLAMADO, DEBIDO A QUE NINGUNA CONSECUENCIA INMEDIATA Y DIRECTA ORIGINAN EN EL DERECHO SUSTANTIVO ALEGADO (LIBERTAD), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA."	II.2o.P.17 K (10a.)	2040
Previsión social, principio de.—Véase: "PENSIÓN POR VIUDEZ. PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A AQUÉLLA CON FUNDAMENTO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 97/2012 (10a.) (*)."	2a./J. 3/2016 (10a.)	947
Principio <i>in dubio pro operario</i> .—Véase: "INTERÉS DEL 2% MENSUAL. LA BASE DE SU CÁLCULO HA DE OBTENERSE CONSIDERANDO EL SALARIO INTEGRADO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012)."	XXVII.3o.25 L (10a.)	2082
Principio <i>pro persona</i> .—Véase: "RECURSO DE QUEJA. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO AUXILIAR EN LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, POR LA QUE NIEGA PROVEER DE CONFORMIDAD LA SOLICITUD DEL TERCERO INTERESADO, DE DECRETAR QUE HA DEJADO DE SURTIR EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO."	I.2o.C.7 K (10a.)	2130
Progresividad, principio de.—Véase: "FACULTAD DE ATRACCIÓN. ES PROCEDENTE SU EJERCICIO SI EL RECURSO DE QUEJA PLANTEADO ACTUALIZA LA NECESIDAD DE DEFINIR EL ALCANCE DE UNA DISPOSICIÓN DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EN LA QUE SE INCORPORE UNA LIMITACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES QUE NO EXISTÍA EN LA LEY DE AMPARO ABROGADA."	1a. XXVII/2016 (10a.)	674

	Número de identificación	Pág.
Pronta impartición de justicia, derecho fundamental a la.—Véase: "FACULTAD DE ATRACCIÓN. ES PROCEDENTE SU EJERCICIO SI EL RECURSO DE QUEJA PLANTEADO ACTUALIZA LA NECESIDAD DE DEFINIR EL ALCANCE DE UNA DISPOSICIÓN DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EN LA QUE SE INCORPORE UNA LIMITACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES QUE NO EXISTÍA EN LA LEY DE AMPARO ABROGADA."	1a. XXVII/2016 (10a.)	674
Proporcionalidad tributaria, principio de.—Véase: "IMPUESTOS A LA CONSTRUCCIÓN. LOS ARTÍCULOS 300 A 302 DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE EN 2011, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA."	1a. XL/2016 (10a.)	676
Protección de datos personales, derecho humano a la.—Véase: "DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. SE VULNERA EN PERJUICIO DE LOS MENORES DE EDAD CON MOTIVO DE LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES Y SENSIBLES EN EL PORTAL DE INTERNET DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A TRAVÉS DE SU DEPARTAMENTO DE LOCATEL, A PROPÓSITO DE LA PETICIÓN DE UN PARTICULAR, QUE NO SE UBIQUE EN ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO INMINENTE DE SUFRIR DAÑO GRAVE EN SU INTEGRIDAD PERSONAL."	XXII.1o.1 CS (10a.)	2060
Seguridad jurídica, derecho de.—Véase: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS."	2a./J. 12/2016 (10a.)	763
Seguridad jurídica, principio de.—Véase: "APELACIÓN EN CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR."		

	Número de identificación	Pág.
EL ARTÍCULO 950 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA."	1a. XLV/2016 (10a.)	665
Seguridad social, principio de.—Véase: "PENSIÓN POR VIUDEZ. PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A AQUÉLLA CON FUNDAMENTO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 97/2012 (10a.) (*)."	2a./J. 3/2016 (10a.)	947
Sencillez, principio de.—Véase: "PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL. ES VÁLIDO SU DESAHOGO A TRAVÉS DEL USO DE AVANCES TECNOLÓGICOS (VIDEOCONFERENCIA)."	III.1o.T.28 L (10a.)	2119
Solidaridad familiar, principio de.—Véase: "ALIMENTOS VENCIDOS. FORMA EN QUE OPERAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y EL ESTÁNDAR DE PRUEBA CUANDO AQUÉLLOS DERIVAN DE UN ADEUDO CONTRAÍDO POR LOS ACREEDORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO)."	PC.XXII. J/4 C (10a.)	991
Suplencia de la queja deficiente.—Véase: "RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA PENAL. AUN CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA HAYA SUSTENTADO SU DECISIÓN HACIENDO SUYOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, DEBIDO A QUE NO ENCONTRÓ MOTIVO PARA SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, CON BASE EN LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 40/97, ESA CIRCUNSTANCIA NO LO AUTORIZA A INCUMPLIR CON SU DEBER DE FUNDARLA Y MOTIVARLA (ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRIBUNALES DE ALZADA DE COMPLETITUD DE SUS DECISIONES, SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS)."	II.1o.32 P (10a.)	2122

	Número de identificación	Pág.
Unidad, principio de.—Véase: "RECONVENCIÓN. SU PROCEDENCIA EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.C.30 C (10a.)	2121
Unidad, principio de.—Véase: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, SI ÉSTE SE ACORDÓ EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y ENSEGUIDA SE DICTÓ SENTENCIA."	III.2o.P.13 K (10a.)	2129
Violación a las leyes del procedimiento.—Véase: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA EN EL FUERO MILITAR. DEBE ORDENARSE SI EL JUEZ QUE DICTÓ LA SENTENCIA DEFINITIVA NO FUE EL MISMO QUE CELEBRÓ LA AUDIENCIA DE DERECHO EN LA QUE SE DECLARÓ VISTO EL ASUNTO."	I.5o.P.45 P (10a.)	2136
Vivienda digna, derecho a una.—Véase: "FONDO DE HABITACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES ELECTRICISTAS. LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTÁ EXENTA DE PAGAR LAS APORTACIONES PATRIMONIALES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, SALVO QUE SE ACREDITE QUE LA PRESTACIÓN DERIVADA DE AQUÉL ES INFERIOR AL 5%."	PC.I.L.L. J/15 L (10a.)	1235

Índice de Ordenamientos

	Número de identificación	Pág.
Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones emite los Lineamientos generales en relación con lo dispuesto por la fracción I del artículo octavo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3 (D.O.F. 27-II-2014).— Véase: "LINEAMIENTOS SOBRE <i>MUST CARRY</i> Y <i>MUST OFFER</i> EMITIDOS POR EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES, EL CONCEPTO 'MISMA ZONA DE COBERTURA GEOGRÁFICA', PREVISTO EN SU ARTÍCULO 3, RESPETA LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN QUE RIGEN EL SERVICIO DE CADA TELEVISORA."	I.1o.A.E.128 A (10a.)	2092
Código Civil de Coahuila, artículo 290.—Véase: "HOGAR CONYUGAL. EL INMUEBLE EN QUE SE ENCUENTRE ESTABLECIDO Y QUE NO CONSTITUYA EL PATRIMONIO DE FAMILIA AL IGUAL QUE SU MENAJE SON INEMBARGABLES, SIEMPRE Y CUANDO SU VALOR SEGÚN AVALÚO CATASTRAL NO EXCEDA EL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 290 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SIN NECESIDAD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO."	VIII.2o.C.T.4 C (10a.)	2071
Código Civil de Coahuila, artículo 724.—Véase: "HOGAR CONYUGAL. EL INMUEBLE EN QUE SE ENCUENTRE ESTABLECIDO Y QUE NO CONSTITUYA		

	Número de identificación	Pág.
EL PATRIMONIO DE FAMILIA AL IGUAL QUE SU MENAJE SON INEMBARGABLES, SIEMPRE Y CUANDO SU VALOR SEGÚN AVALÚO CATASTRAL NO EXCEDA EL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 290 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SIN NECESIDAD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO."	VIII.2o.C.T.4 C (10a.)	2071
Código Civil de Coahuila, artículos 285 y 286.— Véase: "HOGAR CONYUGAL. EL INMUEBLE EN QUE SE ENCUENTRE ESTABLECIDO Y QUE NO CONSTITUYA EL PATRIMONIO DE FAMILIA AL IGUAL QUE SU MENAJE SON INEMBARGABLES, SIEMPRE Y CUANDO SU VALOR SEGÚN AVALÚO CATASTRAL NO EXCEDA EL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 290 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SIN NECESIDAD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO."	VIII.2o.C.T.4 C (10a.)	2071
Código Civil de Coahuila, artículos 714 y 715.— Véase: "HOGAR CONYUGAL. EL INMUEBLE EN QUE SE ENCUENTRE ESTABLECIDO Y QUE NO CONSTITUYA EL PATRIMONIO DE FAMILIA AL IGUAL QUE SU MENAJE SON INEMBARGABLES, SIEMPRE Y CUANDO SU VALOR SEGÚN AVALÚO CATASTRAL NO EXCEDA EL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 290 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SIN NECESIDAD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO."	VIII.2o.C.T.4 C (10a.)	2071
Código Civil de Coahuila, artículos 727 y 728.— Véase: "HOGAR CONYUGAL. EL INMUEBLE EN QUE SE ENCUENTRE ESTABLECIDO Y QUE NO CONSTITUYA EL PATRIMONIO DE FAMILIA AL IGUAL QUE SU MENAJE SON INEMBARGABLES, SIEMPRE Y CUANDO SU VALOR SEGÚN AVALÚO CATASTRAL NO EXCEDA EL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 290 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE		

	Número de identificación	Pág.
ZARAGOZA, SIN NECESIDAD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO."	VIII.2o.C.T.4 C (10a.)	2071
Código Civil de Querétaro, artículos 307 y 308.—Véase: "ALIMENTOS VENCIDOS. FORMA EN QUE OPERAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y EL ESTÁNDAR DE PRUEBA CUANDO AQUÉLLOS DERIVAN DE UN ADEUDO CONTRAÍDO POR LOS ACREEDORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO)."	PC.XXII. J/4 C (10a.)	991
Código de Comercio, artículo 1055 Bis.—Véase: "JUICIO ORAL MERCANTIL. ES PROCEDENTE CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN PERSONAL DE COBRO DERIVADA DE UN CONTRATO DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA, CUANDO SEA DE CUANTÍA DETERMINADA E INFERIOR AL MONTO FIJADO EN EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO."	PC.XXII. J/7 C (10a.)	1462
Código de Comercio, artículo 1061, fracción III.— Véase: "DEMANDA DE NULIDAD DE PAGARÉ O <i>VOUCHER</i> EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. PARA SU ADMISIÓN BASTA QUE EL PROMOVENTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ESTÁ IMPOSIBILITADO PARA PRESENTARLO (DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN) AL ENCONTRARSE EN PODER DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMANDADA."	VIII.2o.C.T.2 C (10a.)	2058
Código de Comercio, artículo 1079, fracción IV.— Véase: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SU PROMOCIÓN INTERRUMPE EL PLAZO DE 3 AÑOS PREVISTO POR EL ARTÍCULO 1079, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PARA EJECUTAR LA SENTENCIA QUE HA CAUSADO ESTADO, DICTADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL."	PC.XX. J/5 C (10a.)	1347
Código de Comercio, artículo 1084, fracción III.— Véase: "COSTAS EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. ES IMPROCEDENTE SU CONDENA EN TÉRMINOS		

	Número de identificación	Pág.
DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, AUN CUANDO HAYA PROCEDIDO LA ACCIÓN CAMBIARIA DIRECTA Y EL DEMANDADO OBTUVO SENTENCIA FAVORABLE A PESAR DE NO APERSONARSE, AL REDUCIR EL JUEZ, EN EJERCICIO DEL CONTROL CONVENCIONAL <i>EX OFFICIO</i> , EL PAGO DE LOS INTERESES MORATORIOS POR SER USURARIOS."	XXVII.3o.30 C (10a.)	2050
Código de Comercio, artículo 1084, fracción III.— Véase: "COSTAS EN LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES. NO PROCEDE SU CONDENA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO."	XXVII.3o.28 C (10a.)	2050
Código de Comercio, artículo 1339.—Véase: "JUICIO ORAL MERCANTIL. ES PROCEDENTE CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN PERSONAL DE COBRO DERIVADA DE UN CONTRATO DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA, CUANDO SEA DE CUANTÍA DETERMINADA E INFERIOR AL MONTO FIJADO EN EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO."	PC.XXII. J/7 C (10a.)	1462
Código de Comercio, artículo 1348.—Véase: "INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN. SU PROMOCIÓN INTERRUPE EL PLAZO DE 3 AÑOS PREVISTO POR EL ARTÍCULO 1079, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO DE COMERCIO, PARA EJECUTAR LA SENTENCIA QUE HA CAUSADO ESTADO, DICTADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL."	PC.XX. J/5 C (10a.)	1347
Código de Comercio, artículo 1390 bis 11, fracción V.—Véase: "DEMANDA DE NULIDAD DE PAGARÉ O <i>VOUCHER</i> EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. PARA SU ADMISIÓN BASTA QUE EL PROMOVENTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ESTÁ IMPOSIBILITADO PARA PRESENTARLO (DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN) AL ENCONTRARSE EN PODER DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMANDADA."	VIII.2o.C.T.2 C (10a.)	2058

	Número de identificación	Pág.
Código de Comercio, artículo 1390 bis 13.—Véase: "DEMANDA DE NULIDAD DE PAGARÉ O <i>VOUCHER</i> EN EL JUICIO ORAL MERCANTIL. PARA SU ADMISIÓN BASTA QUE EL PROMOVENTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE ESTÁ IMPOSIBILITADO PARA PRESENTARLO (DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN) AL ENCONTRARSE EN PODER DE LA INSTITUCIÓN BANCARIA DEMANDADA."	VIII.2o.C.T.2 C (10a.)	2058
Código de Comercio, artículos 1390 Bis a 1390 Bis 50.—Véase: "COSTAS EN LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES. NO PROCEDE SU CONDENA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO."	XXVII.3o.28 C (10a.)	2050
Código de Comercio, artículos 1390 Bis y 1390 Bis 1.—Véase: "JUICIO ORAL MERCANTIL. ES PROCEDENTE CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN PERSONAL DE COBRO DERIVADA DE UN CONTRATO DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA, CUANDO SEA DE CUANTÍA DETERMINADA E INFERIOR AL MONTO FIJADO EN EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO."	PC.XXII. J/7 C (10a.)	1462
Código de Comercio, artículos 1391 a 1414.—Véase: "COSTAS EN LOS JUICIOS ORALES MERCANTILES. NO PROCEDE SU CONDENA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 1084, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO."	XXVII.3o.28 C (10a.)	2050
Código de Justicia Militar, artículos 788 y 789.—Véase: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA EN EL FUERO MILITAR. DEBE ORDENARSE SI EL JUEZ QUE DICTÓ LA SENTENCIA DEFINITIVA NO FUE EL MISMO QUE CELEBRÓ LA AUDIENCIA DE DERECHO EN LA QUE SE DECLARÓ VISTO EL ASUNTO."	I.5o.P.45 P (10a.)	2136

	Número de identificación	Pág.
Código de Procedimientos Civiles de Michoacán, artículo 680.—Véase: "RECURSO DE APELACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DESECHA, ES INNECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 680 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, PREVIAMENTE A PROMOVER EL AMPARO DIRECTO."	1a. XXXVII/2016 (10a.)	683
Código de Procedimientos Civiles de Querétaro, artículo 279.—Véase: "ALIMENTOS VENCIDOS. FORMA EN QUE OPERAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y EL ESTÁNDAR DE PRUEBA CUANDO AQUÉLLOS DERIVAN DE UN ADEUDO CONTRAÍDO POR LOS ACREEDORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO)."	PC.XXII. J/4 C (10a.)	991
Código de Procedimientos Civiles de Querétaro, artículo 486.—Véase: "JUICIO ORAL MERCANTIL. ES PROCEDENTE CUANDO SE EJERCE LA ACCIÓN PERSONAL DE COBRO DERIVADA DE UN CONTRATO DE CRÉDITO CON GARANTÍA HIPOTECARIA, CUANDO SEA DE CUANTÍA DETERMINADA E INFERIOR AL MONTO FIJADO EN EL ARTÍCULO 1339 DEL CÓDIGO DE COMERCIO."	PC.XXII. J/7 C (10a.)	1462
Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas, artículo 1.—Véase: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA POR INACTIVIDAD PROCESAL. ES INAPLICABLE EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DEMANDAN ALIMENTOS A FAVOR DE MENORES, PERO SÍ OPERA CUANDO TENGA UN IMPACTO POSITIVO SOBRE ÉSTOS, ATENTO AL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ [LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS XIX.1o.A.C.51 C)]."	XIX.1o.A.C.10 C (10a.)	2033
Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas, artículo 103, fracción IV.—Véase: "CADUCIDAD DE		

	Número de identificación	Pág.
LA INSTANCIA POR INACTIVIDAD PROCESAL. ES INAPLICABLE EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DEMANDAN ALIMENTOS A FAVOR DE MENORES, PERO SÍ OPERA CUANDO TENGA UN IMPACTO POSITIVO SOBRE ÉSTOS, ATENTO AL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ [LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS XIX.1o.A.C.51 C)]."	XIX.1o.A.C.10 C (10a.)	2033
Código de Procedimientos Civiles de Veracruz, artículo 192.—Véase: "ANOTACIÓN REGISTRAL PREVENTIVA DE LA DEMANDA CIVIL DENTRO DEL JUICIO. SE EQUIPARA A UNA PROVIDENCIA PRECAUTORIA Y REQUIERE EL OTORGAMIENTO DE FIANZA PARA RESPONDER POR LOS PROBABLES DAÑOS Y PERJUICIOS QUE CON DICHO ACTO PUEDAN OCASIONARSE A LA CONTRAPARTE DEL SOLICITANTE DE LA MEDIDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."	VII.1o.C.27 C (10a.)	2023
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, artículo 81.—Véase: "RECONVENCIÓN. SU PROCEDENCIA EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.C.30 C (10a.)	2121
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, artículo 700.—Véase: "APELACIÓN EN CONTRAVERSAS DEL ORDEN FAMILIAR. EL ARTÍCULO 950 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA."	1a. XLV/2016 (10a.)	665
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, artículos 260 y 261.—Véase: "RECONVENCIÓN. SU PROCEDENCIA EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.C.30 C (10a.)	2121

	Número de identificación	Pág.
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, artículos 272 y 272 A.—Véase: "RECONVENCIÓN. SU PROCEDENCIA EN LOS JUICIOS DE DIVORCIO SIN EXPRESIÓN DE CAUSA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.9o.C.30 C (10a.)	2121
Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, artículos 950 y 951.—Véase: "APELACIÓN EN CONTROVERSIAS DEL ORDEN FAMILIAR. EL ARTÍCULO 950 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURÍDICA."	1a. XLV/2016 (10a.)	665
Código de Procedimientos Penales de Jalisco, artículo 173.—Véase: "CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL <i>EX OFFICIO</i> . LOS JUZGADOS DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL EN EL ESTADO DE JALISCO, NO ESTÁN FACULTADOS PARA EJERCERLO RESPECTO DEL ARTÍCULO 173 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA DICHA ENTIDAD FEDERATIVA, AL TRATARSE DE UNA NORMA QUE RIGE EL JUICIO DE ORIGEN QUE NO LES CORRESPONDE APLICAR."	III.2o.P94 P (10a.)	2047
Código de Procedimientos Penales de Morelos abrogado, artículo 275.—Véase: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EL IMPUTADO SOLICITÓ LA PRÓRROGA A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL PARA QUE SE LE RESUELVA SU SITUACIÓN JURÍDICA, EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ EN APTITUD DE REQUERIR QUE SE DECRETE AQUÉL, PREVIAMENTE A ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA CELEBRADA CON MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONSTITUCIONAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MORELOS)."	XVIII.5o.1 P (10a.)	2026
Código de Procedimientos Penales de Morelos abrogado, artículo 278.—Véase: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EL IMPUTADO SOLICITÓ LA PRÓ-		

	Número de identificación	Pág.
RROGA A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL PARA QUE SE LE RESUELVA SU SITUACIÓN JURÍDICA, EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ EN APTITUD DE REQUERIR QUE SE DECRETE AQUÉL, PREVIAMENTE A ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA CELEBRADA CON MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONSTITUCIONAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MORELOS)."	XVIII.5o.1 P (10a.)	2026
Código de Procedimientos Penales de Morelos abrogado, artículo 280.—Véase: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EL IMPUTADO SOLICITÓ LA PRÓRROGA A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL PARA QUE SE LE RESUELVA SU SITUACIÓN JURÍDICA, EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ EN APTITUD DE REQUERIR QUE SE DECRETE AQUÉL, PREVIAMENTE A ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA CELEBRADA CON MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONSTITUCIONAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MORELOS)."	XVIII.5o.1 P (10a.)	2026
Código de Procedimientos Penales de Morelos abrogado, artículos 272 y 273.—Véase: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EL IMPUTADO SOLICITÓ LA PRÓRROGA A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL PARA QUE SE LE RESUELVA SU SITUACIÓN JURÍDICA, EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ EN APTITUD DE REQUERIR QUE SE DECRETE AQUÉL, PREVIAMENTE A ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA CELEBRADA CON MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONSTITUCIONAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MORELOS)."	XVIII.5o.1 P (10a.)	2026
Código de Procedimientos Penales de San Luis Potosí, artículo 181 (abrogado).—Véase: "ACCIÓN PENAL. LAS PRUEBAS PARA PERFECCIONARLA, OFRECIDAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CASO DE QUE SE NIEGUE LA ORDEN DE APREHENSIÓN, REAPREHENSIÓN O COMPARECENCIA, A FIN DE QUE		

	Número de identificación	Pág.
EL JUEZ ENTRE NUEVAMENTE AL ESTUDIO DE LA CAUSA Y SE PRONUNCIE RESPECTO DE DICHOS MANDATOS, DEBEN DESAHOGARSE POR LA REPRESENTACIÓN SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ) [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 75/2012 (10a.).]"	IX.2o.3 P (10a.)	2016
Código de Procedimientos Penales de Veracruz, artículo 139 (abrogado).—Véase: "DETENCIÓN DEL AUTOR INTELLECTUAL DEL DELITO. NO PUEDE CONFIGURARSE BAJO LA HIPÓTESIS DE FLAGRANCIA PORQUE, DE LO CONTRARIO, ES ILEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."	VII.2o.T.5 P (10a.)	2062
Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, artículo 546.—Véase: "INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. PROCEDE EN CUALQUIER ESTADO DEL PROCESO, INCLUSO, DESPUÉS DEL CIERRE DE INSTRUCCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 546 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL)."	I.3o.P.46 P (10a.)	2076
Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, artículos 217 a 224 Bis.—Véase: "CONFRONTACIÓN. PARA QUE LA DILIGENCIA RELATIVA PRACTICADA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA PUEDA TENER VALIDEZ DURANTE EL PROCESO, ES NECESARIO QUE EL DEFENSOR DEL INCUPLADO ESTÉ PRESENTE DURANTE SU DESARROLLO, PARA SALVAGUARDAR SU DERECHO DE DEFENSA ADECUADA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.3o.P.43 P (10a.)	2045
Código Familiar de Michoacán, artículo 418, fracción IV (abrogado).—Véase: "ABANDONO DE MENOR DE EDAD. LA SANCIÓN RELATIVA A LA PÉRDIDA DE LA PATRIA POTESTAD NO DEBE CONDICIONARSE A QUE SE COMPROMETA SU SALUD O SEGURIDAD (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 418, FRACCIÓN		

	Número de identificación	Pág.
IV, DEL CÓDIGO FAMILIAR PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN ABROGADO)."	XI.2o.C.10 C (10a.)	2015
Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 50.—Véase: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. NO SE CALIFICA DE LEGAL EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR UN MAGISTRADO PARA CONOCER DE ELLA, AL NO ACTUALIZARSE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES XVI Y XVIII DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN."	PC.III.L. 1 K (10a.)	1917
Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 50.—Véase: "IMPEDIMENTO PARA CONOCER DE UNA CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. NO DEBE DECLARARSE SIN MATERIA AUNQUE MEDIE DESISTIMIENTO DEL DENUNCIANTE."	PC.III.L. 2 K (10a.)	1918
Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 83.—Véase: "AMPARO CONTRA LEYES. EL RECIBO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, ES EFICAZ PARA ESTABLECER LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS E INICIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE QUE LA QUEJOSA TUVO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN CON POSTERIORIDAD."	PC.XXII. J/5 A (10a.)	1062
Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 129.—Véase: "CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'QUE CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS', CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES."	2a./J. 2/2016 (10a.)	873

	Número de identificación	Pág.
Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 210-A.—Véase: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO."	I.3o.P.41 P (10a.)	2049
Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 217.—Véase: "CERTIFICACIÓN DE COPIAS FOTOSTÁTICAS. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN 'QUE CORRESPONDEN A LO REPRESENTADO EN ELLAS', CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 217 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, TRATÁNDOSE DE LA EMITIDA POR AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES."	2a./J. 2/2016 (10a.)	873
Código Federal de Procedimientos Penales, artículo 235.—Véase: "DICTÁMENES PERICIALES. LA NO RATIFICACIÓN DEL RENDIDO POR EL PERITO OFICIAL CONSTITUYE UN VICIO FORMAL SUBSANABLE, POR LO QUE EN NINGÚN CASO DEBE DAR LUGAR A CONSIDERAR QUE CONSTITUYE PRUEBA ILÍCITA QUE DEBA SER EXCLUIDA DEL ANÁLISIS PROBATORIO CORRESPONDIENTE."	1a. XXXIV/2016 (10a.)	673
Código Fiscal de la Federación, artículo 22.—Véase: "SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN. LA FACULTAD DE LA AUTORIDAD PARA REQUERIR AL CONTRIBUYENTE QUE EXHIBA DOCUMENTOS O APOORTE INFORMACIÓN ADICIONAL A LA ORIGINALMENTE PRESENTADA, DEBE EJERCERSE BAJO UN CRITERIO DE NECESIDAD Y UN ESTÁNDAR DE RACIONALIDAD."	I.1o.A.119 A (10a.)	2184
Código Fiscal de la Federación, artículo 38, fracción IV.—Véase: "REVISIÓN FISCAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, POR		

	Número de identificación	Pág.
AUSENCIA O DEFICIENTE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DEL REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN, AL OMITIR PRECISAR EL PERIODO O PERIODOS SUJETOS A REVISIÓN (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 150/2010 Y 2a./J. 88/2011)."	XVI.1o.A. J/25 (10a.)	2003
Código Fiscal de la Federación, artículo 40, fracción II.—Véase: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU MONTO POR IMPEDIR EL INICIO O DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, AL NO PRESENTAR DE INMEDIATO LOS LIBROS Y REGISTROS QUE FORMEN PARTE DE LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE, ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, POR REMISIÓN EXPRESA DEL LEGISLADOR."	IV.2o.A.114 A (10a.)	2099
Código Fiscal de la Federación, artículo 41, fracción II.—Véase: "DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES. EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO SE RIGE POR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA PREVIA."	1a. XXIX/2016 (10a.)	672
Código Fiscal de la Federación, artículo 53.—Véase: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU MONTO POR IMPEDIR EL INICIO O DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, AL NO PRESENTAR DE INMEDIATO LOS LIBROS Y REGISTROS QUE FORMEN PARTE DE LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE, ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, POR REMISIÓN EXPRESA DEL LEGISLADOR."	IV.2o.A.114 A (10a.)	2099

	Número de identificación	Pág.
Código Fiscal de la Federación, artículo 85, fracción I.—Véase: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU MONTO POR IMPEDIR EL INICIO O DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, AL NO PRESENTAR DE INMEDIATO LOS LIBROS Y REGISTROS QUE FORMEN PARTE DE LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE, ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, POR REMISIÓN EXPRESA DEL LEGISLADOR."	IV.2o.A.114 A (10a.)	2099
Código Fiscal de la Federación, artículo 86, fracción I.—Véase: "MULTA COMO MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 40, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. SU MONTO POR IMPEDIR EL INICIO O DESARROLLO DEL EJERCICIO DE LAS FACULTADES DE LAS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, AL NO PRESENTAR DE INMEDIATO LOS LIBROS Y REGISTROS QUE FORMEN PARTE DE LA CONTABILIDAD DEL CONTRIBUYENTE, ES EL PREVISTO EN EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 85, FRACCIÓN I, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, POR REMISIÓN EXPRESA DEL LEGISLADOR."	IV.2o.A.114 A (10a.)	2099
Código Fiscal de Querétaro, artículo 19.—Véase: "AMPARO CONTRA LEYES. EL RECIBO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, ES EFICAZ PARA ESTABLECER LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS E INICIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE QUE LA QUEJOSA TUVO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN CON POSTERIORIDAD."	PC.XXII. J/5 A (10a.)	1062
Código Fiscal de Querétaro, artículo 22, fracciones I y XIII.—Véase: "AMPARO CONTRA LEYES. EL RE-		

	Número de identificación	Pág.
CIBO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, ES EFICAZ PARA ESTABLECER LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS E INICIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE QUE LA QUEJOSA TUVO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN CON POSTERIORIDAD."	PC.XXII. J/5 A (10a.)	1062
Código Fiscal de Querétaro, artículo 35.—Véase: "AMPARO CONTRA LEYES. EL RECIBO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, ES EFICAZ PARA ESTABLECER LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS E INICIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE QUE LA QUEJOSA TUVO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN CON POSTERIORIDAD."	PC.XXII. J/5 A (10a.)	1062
Código Fiscal de Querétaro, artículo 37.—Véase: "AMPARO CONTRA LEYES. EL RECIBO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, ES EFICAZ PARA ESTABLECER LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS E INICIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE QUE LA QUEJOSA TUVO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN CON POSTERIORIDAD."	PC.XXII. J/5 A (10a.)	1062
Código Fiscal de Querétaro, artículo 96, fracción VIII.—Véase: "AMPARO CONTRA LEYES. EL RECIBO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, ES EFICAZ PARA ESTABLECER LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS E INICIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO EN SU CONTRA,		

	Número de identificación	Pág.
SALVO QUE SE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE QUE LA QUEJOSA TUVO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN CON POSTERIORIDAD."	PC.XXII. J/5 A (10a.)	1062
Código Fiscal del Distrito Federal, artículos 300 a 302 (vigente en 2011).—Véase: "IMPUESTOS A LA CONSTRUCCIÓN. LOS ARTÍCULOS 300 A 302 DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE EN 2011, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA."	1a. XL/2016 (10a.)	676
Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 316, fracción III.—Véase: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA QUE EL JUEZ DE CONTROL PUEDA DETERMINAR SI EL HECHO IMPUTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACUSADO ES O NO CONSTITUTIVO DE DELITO, DEBE ANALIZAR LOS ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL ILÍCITO CORRESPONDIENTE, ESTO ES, SUS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS."	XXVII.3o.20 P (10a.)	2025
Código Penal de Chiapas, artículo 398 Bis.—Véase: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. LOS PERIODISTAS CUENTAN CON INTERÉS LEGÍTIMO PARA IMPUGNAR EN AMPARO, SIN ACTO DE APLICACIÓN PREVIO, EL ARTÍCULO 398 BIS, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE CHIAPAS, POR SU POTENCIAL DE AFECTACIÓN EN LAS CONDICIONES DE ACCESO A LA DELIBERACIÓN PÚBLICA."	1a. XXXIII/2016 (10a.)	680
Código Penal de Quintana Roo, artículo 79.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. TRÁTÁNDOSE DE DELITOS QUE SE PERSIGUEN POR QUERRELA DE LA VÍCTIMA O DEL OFENDIDO, SÓLO SE INTERRUMPE POR LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)."	PC.XXVII. J/1 P (10a.)	1555

	Número de identificación	Pág.
Código Penal de Quintana Roo, artículo 81.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. TRATÁNDOSE DE DELITOS QUE SE PERSIGUEN POR QUERRELLA DE LA VÍCTIMA O DEL OFENDIDO, SÓLO SE INTERRUMPE POR LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA ANTE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO)."	PC.XXVII. J/1 P (10a.)	1555
Código Penal del Distrito Federal, artículo 224, fracción III.—Véase: "ROBO CALIFICADO. LA AGRAVANTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 224, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE ACTUALIZA AUNQUE EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO NO ESTÉ PRESTANDO EL SERVICIO A QUE ESTÁ DESTINADO."	PC.I.P. J/18 P (10a.)	1764
Código Penal Federal, artículo 70.—Véase: "CONDENA CONDICIONAL Y SUSTITUTIVOS DE LA PENA. CUANDO UNA AUTORIDAD DEL FUERO COMÚN, EN EJERCICIO DE LA COMPETENCIA CONCURRENTE, CONOCE DE UN DELITO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE SALUD, DEBE RESOLVER RESPECTO DE DICHOS BENEFICIOS, ATENTO A LOS ARTÍCULOS 70 Y 90 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y NO A LO QUE ESTABLEZCA LA LEY SUSTANTIVA LOCAL CORRESPONDIENTE."	XXX.2o.1 P (10a.)	2043
Código Penal Federal, artículo 90.—Véase: "CONDENA CONDICIONAL Y SUSTITUTIVOS DE LA PENA. CUANDO UNA AUTORIDAD DEL FUERO COMÚN, EN EJERCICIO DE LA COMPETENCIA CONCURRENTE, CONOCE DE UN DELITO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE SALUD, DEBE RESOLVER RESPECTO DE DICHOS BENEFICIOS, ATENTO A LOS ARTÍCULOS 70 Y 90 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y NO A LO QUE ESTABLEZCA LA LEY SUSTANTIVA LOCAL CORRESPONDIENTE."	XXX.2o.1 P (10a.)	2043
Código Penal Federal, artículo 195.—Véase: "DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD		

	Número de identificación	Pág.
DE POSESIÓN AGRAVADA DE NARCÓTICOS. ANTES DE REALIZAR EL CONTROL CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DEL SUPUESTO NORMATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 195, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEBE VERIFICARSE SI LA PRESUNCIÓN LEGAL RELACIONADA CON LA FINALIDAD DE LA DROGA, SE APLICÓ EN PERJUICIO DEL REO."	XXI.1o.PA.9 P (10a.)	2055
Código Penal Federal, artículo 243.—Véase: "FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. EL ARTÍCULO 243, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, QUE PREVE UNA AGRAVANTE PARA AQUEL DELITO, NO CONTIENE UNA PENA INUSITADA NI TRASCENDENTAL."	1a. XLIV/2016 (10a.)	675
Código Procesal Civil de Coahuila, artículo 861.—Véase: "RECURSO DE QUEJA. CONTRA EL AUTO EMITIDO POR EL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DISTRICTAL QUE LO DESECHA PROCEDE EL DE RECONSIDERACIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA)."	VIII.2o.C.T.3 C (10a.)	2124
Código Procesal Civil de Coahuila, artículo 866.—Véase: "RECURSO DE QUEJA. CONTRA EL AUTO EMITIDO POR EL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DISTRICTAL QUE LO DESECHA PROCEDE EL DE RECONSIDERACIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA)."	VIII.2o.C.T.3 C (10a.)	2124
Código Procesal Civil de Coahuila, artículo 886.—Véase: "RECURSO DE QUEJA. CONTRA EL AUTO EMITIDO POR EL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DISTRICTAL QUE LO DESECHA PROCEDE EL DE RECONSIDERACIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA)."	VIII.2o.C.T.3 C (10a.)	2124

	Número de identificación	Pág.
Código Procesal Civil de Coahuila, artículo 942, fracción I.—Véase: "HOGAR CONYUGAL. EL INMUEBLE EN QUE SE ENCUENTRE ESTABLECIDO Y QUE NO CONSTITUYA EL PATRIMONIO DE FAMILIA AL IGUAL QUE SU MENAJE SON INEMBARGABLES, SIEMPRE Y CUANDO SU VALOR SEGÚN AVALÚO CATASTRAL NO EXCEDA EL ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 290 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, SIN NECESIDAD DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO."	VIII.2o.C.T.4 C (10a.)	2071
Constitución Política de Chiapas, artículo 57.—Véase: "MAGISTRADOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE CHIAPAS. SE ACTUALIZA SU RATIFICACIÓN TÁCITA SI AL CONCLUIR EL PERIODO CONSTITUCIONAL DE DURACIÓN DE SU CARGO NO SE HA EMITIDO EL DICTAMEN EN EL QUE SE DETERMINE SI DEBEN SER REELECTOS."	XX.2o.4 A (10a.)	2095
Constitución Política de Guerrero, artículo 83 (en su texto anterior a la reforma publicada en el Periódico Oficial de la entidad el 29 de abril de 2014).—Véase: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA EJECUCIÓN DE LA CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL NOMBRAMIENTO DE UN CONSEJERO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE GUERRERO Y SU SUSTITUCIÓN EN ESE CARGO."	XXI.1o.P.A.32 A (10a.)	2223
Constitución Política de Jalisco, artículo 46.—Véase: "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS EXPEDIDOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO. CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO."	2a./J. 11/2016 (10a.)	803
Constitución Política de Jalisco, artículo 50.—Véase: "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS EXPEDIDOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO. CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO."	2a./J. 11/2016 (10a.)	803

	Número de identificación	Pág.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "ALIMENTOS VENCIDOS. FORMA EN QUE OPERAN EL PRINCIPIO DE IGUALDAD Y EL ESTÁNDAR DE PRUEBA CUANDO AQUÉLLOS DERIVAN DE UN ADEUDO CONTRAÍDO POR LOS ACREEDORES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUERÉTARO)."	PC.XXII. J/4 C (10a.)	991
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "CONTROL DE CONVENCIONALIDAD <i>EX OFFICIO</i> . LAS AUTORIDADES JUDICIALES, PREVIO A LA INAPLICACIÓN DE LA NORMA EN ESTUDIO, DEBEN JUSTIFICAR RAZONADAMENTE POR QUÉ SE DESTRUYÓ SU PRESUNCIÓN DE CONSTITUCIONALIDAD."	1a. XXII/2016 (10a.)	667
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "DELITO CONTRA LA SALUD EN SU MODALIDAD DE POSESIÓN AGRAVADA DE NARCÓTICOS. ANTES DE REALIZAR EL CONTROL CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD DEL SUPUESTO NORMATIVO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 195, PÁRRAFO TERCERO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, DEBE VERIFICARSE SI LA PRESUNCIÓN LEGAL RELACIONADA CON LA FINALIDAD DE LA DROGA, SE APLICÓ EN PERJUICIO DEL REO."	XXI.1o.PA.9 P (10a.)	2055
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO."	VII.2o.P. J/2 (10a.)	1966

	Número de identificación	Pág.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. SE VULNERA EN PERJUICIO DE LOS MENORES DE EDAD CON MOTIVO DE LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES Y SENSIBLES EN EL PORTAL DE INTERNET DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A TRAVÉS DE SU DEPARTAMENTO DE LOCATEL, A PROPOSITO DE LA PETICIÓN DE UN PARTICULAR, QUE NO SE UBIQUE EN ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO INMINENTE DE SUFRIR DAÑO GRAVE EN SU INTEGRIDAD PERSONAL."	XXII.1o.1 CS (10a.)	2060
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "DIVORCIO. ES IMPROCEDENTE EL CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD EN LA APELACIÓN, CON BASE EN EL DERECHO AL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD, SI EN PRIMERA INSTANCIA SE DECLARÓ LA DISOLUCIÓN DEL VÍNCULO MATRIMONIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN)."	IV.2o.C.7 C (10a.)	2065
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "FACULTAD DE ATRACCIÓN. ES PROCEDENTE SU EJERCICIO SI EL RECURSO DE QUEJA PLANTEADO ACTUALIZA LA NECESIDAD DE DEFINIR EL ALCANCE DE UNA DISPOSICIÓN DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EN LA QUE SE INCORPORE UNA LIMITACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES QUE NO EXISTÍA EN LA LEY DE AMPARO ABROGADA."	1a. XXVII/2016 (10a.)	674
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. CARACTERÍSTICAS DEL ESCRUTINIO A QUE DEBEN SUJETARSE EN EL AMPARO LOS		

	Número de identificación	Pág.
AJUSTES RAZONABLES, COMO GARANTÍA SECUNDARIA DE LOS DERECHOS RELATIVOS, CUANDO SEAN REFERENTES DE UNA DE LAS DENOMINADAS CATEGORÍAS SOSPECHOSAS."	IV.2o.A.5 CS (10a.)	2073
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NORMAS CUYA SOLA EXISTENCIA GENERA UNA AFECTACIÓN AUTOAPLICATIVA QUE LO ACTUALIZA."	1a. XXXII/2016 (10a.)	679
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE CONTRA LAS MULTAS IMPUESTAS COMO MEDIDA DE APREMIO POR LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE."	I.16o.A.16 A (10a.)	2089
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA."	2a./J. 10/2016 (10a.)	705
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA PENAL. AUN CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA HAYA SUSTENTADO SU DECISIÓN HACIENDO SUYOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, DEBIDO A QUE NO ENCONTRÓ MOTIVO PARA SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA, CON BASE EN LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 40/97, ESA CIRCUNSTANCIA NO LO AUTORIZA A INCUMPLIR CON SU DEBER DE FUN-		

	Número de identificación	Pág.
DARLA Y MOTIVARLA (ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRIBUNALES DE ALZADA DE COMPLETITUD DE SUS DECISIONES, SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS)."	II.1o.32 P (10a.)	2122
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "RECURSO DE QUEJA. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO AUXILIAR EN LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, POR LA QUE NIEGA PROVEER DE CONFORMIDAD LA SOLICITUD DEL TERCERO INTERESADO, DE DECRETAR QUE HA DEJADO DE SURTIR EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO."	I.2o.C.7 K (10a.)	2130
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, ALEXIGIR LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE TRABAJO [ABANDONO DE LA TESIS IV.2o.A.80 A (10a.)]."	IV.2o.A.4 CS (10a.)	2231
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, AL EXIGIR LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS AFECTOS A LOS SISTEMAS Y		

	Número de identificación	Pág.
MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL [ABANDONO DE LAS TESIS IV.2o.A.78 A (10a.) Y IV.2o.A.81 A (10a.)]."	IV.2o.A.3 CS (10a.)	2233
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 1o.—Véase: "UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA CLÁUSULA QUINTA TRANSITORIA DEL CONVENIO QUE CREA Y REGULA EL RÉGIMEN DE PENSIONES, JUBILACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESA INSTITUCIÓN, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN."	2a. III/2016 (10a.)	953
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 3o., fracción VII.—Véase: "UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO. LA CONTROVERSIA SUSCITADA POR EL NOMBRAMIENTO DE MAESTRO EMÉRITO, AL SER DE NATURALEZA ACADÉMICA, DEBE RESOLVERSE POR SUS ÓRGANOS INTERNOS Y NO POR LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE."	XXI.3o.C.T.2 L (10a.)	2237
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o.—Véase: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA POR INACTIVIDAD PROCESAL. ES INAPLICABLE EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DEMANDAN ALIMENTOS A FAVOR DE MENORES, PERO SÍ OPERA CUANDO TENGA UN IMPACTO POSITIVO SOBRE ÉSTOS, ATENTO AL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ [LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS XIX.1o.A.C.51 C)]."	XIX.1o.A.C.10 C (10a.)	2033
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o.—Véase: "DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ		

	Número de identificación	Pág.
DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO."	VII.2o.P. J/2 (10a.)	1966
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o.—Véase: "DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. SE VULNERA EN PERJUICIO DE LOS MENORES DE EDAD CON MOTIVO DE LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES Y SENSIBLES EN EL PORTAL DE INTERNET DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A TRAVÉS DE SU DEPARTAMENTO DE LOCATEL, A PROPÓSITO DE LA PETICIÓN DE UN PARTICULAR, QUE NO SE UBIQUE EN ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO INMINENTE DE SUFRIR DAÑO GRAVE EN SU INTEGRIDAD PERSONAL."	XXII.1o.1 CS (10a.)	2060
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o.—Véase: "VIDA SILVESTRE. LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA APLICACIÓN DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, NO PROVOCA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI CONTRAVIENE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO."	PC.XVI.A. J/12 A (10a.)	1896
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5o.—Véase: "PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL. LA INCOMPATIBILIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN IV, DE LA LEY RELATIVA IMPLICA RESPONSABILIDAD SÓLO PARA EL REPRESENTANTE CIUDADANO Y NO PARA EL SERVIDOR PÚBLICO."	I.1o.A.118 A (10a.)	2105

	Número de identificación	Pág.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5o.—Véase: "TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, AL EXIGIR LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE TRABAJO [ABANDONO DE LA TESIS IV.2o.A.80 A (10a.)]."	IV.2o.A.4 CS (10a.)	2231
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 6o., apartado A, fracción II.—Véase: "DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. SE VULNERA EN PERJUICIO DE LOS MENORES DE EDAD CON MOTIVO DE LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES Y SENSIBLES EN EL PORTAL DE INTERNET DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A TRAVÉS DE SU DEPARTAMENTO DE LOCATEL, A PROPÓSITO DE LA PETICIÓN DE UN PARTICULAR, QUE NO SE UBIQUE EN ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO INMINENTE DE SUFRIR DAÑO GRAVE EN SU INTEGRIDAD PERSONAL."	XXII.1o.1 CS (10a.)	2060
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA POR INACTIVIDAD PROCESAL. ES INAPLICABLE EN LOS JUICIOS EN LOS QUE SE DEMANDAN ALIMENTOS A FAVOR DE MENORES, PERO SÍ OPERA CUANDO TENGA UN IMPACTO POSITIVO SOBRE ÉSTOS, ATENTO AL PRINCIPIO DE INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ [LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS (ABANDONO DEL CRITERIO SOSTENIDO EN LA TESIS XIX.1o.A.C.51 C)]."	XIX.1o.A.C.10 C (10a.)	2033

	Número de identificación	Pág.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "PRINCIPIO DE IDENTIDAD. EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN EL FUERO MILITAR, POR LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, AQUÉL IMPERA ENTRE EL JUEZ QUE DESAHOGÓ LA AUDIENCIA DE DERECHO Y EL QUE RESOLVERÁ EN DEFINITIVA."	I.5o.P.44 P (10a.)	2113
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "AVERIGUACIÓN PREVIA. SI DURANTE ÉSTA EL INculpADO ES PUESTO EN LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, ES INAPLICABLE PARA EL MINISTERIO PÚBLICO EL TÉRMINO DE 48 HORAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PARA DEFINIR SU SITUACIÓN JURÍDICA MEDIANTE EL EJERCICIO DE LA ACCIÓN PENAL O LIBERTAD CON LAS RESERVAS DE LEY."	PC.I.P. J/21 P (10a.)	1118
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. SE VULNERA EN PERJUICIO DE LOS MENORES DE EDAD CON MOTIVO DE LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES Y SENSIBLES EN EL PORTAL DE INTERNET DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A TRAVÉS DE SU DEPARTAMENTO DE LOCATEL, A PROPÓSITO DE LA PETICIÓN DE UN PARTICULAR, QUE NO SE UBIQUE EN ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO INMINENTE DE SUFRIR DAÑO GRAVE EN SU INTEGRIDAD PERSONAL."	XXII.1o.1 CS (10a.)	2060
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "DETENCIÓN DEL AUTOR INTELLECTUAL DEL DELITO. NO PUEDE CONFIGURARSE BAJO LA HIPÓTESIS DE FLAGRANCIA		

	Número de identificación	Pág.
PORQUE, DE LO CONTRARIO, ES ILEGAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ)."	VII.2o.T.5 P (10a.)	2062
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "PRINCIPIO DE IDENTIDAD. EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA EN EL FUERO MILITAR, POR LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA, AQUÉL IMPERA ENTRE EL JUEZ QUE DESAHOGÓ LA AUDIENCIA DE DERECHO Y EL QUE RESOLVERÁ EN DEFINITIVA."	I.5o.P.44 P (10a.)	2113
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "ACCIÓN PENAL. LAS PRUEBAS PARA PERFECCIONARLA, OFRECIDAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CASO DE QUE SE NIEGUE LA ORDEN DE APREHENSIÓN, REAPREHENSIÓN O COMPARECENCIA, A FIN DE QUE EL JUEZ ENTRE NUEVAMENTE AL ESTUDIO DE LA CAUSA Y SE PRONUNCIE RESPECTO DE DICHOS MANDATOS, DEBEN DESAHOGARSE POR LA REPRESENTACIÓN SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ) [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 75/2012 (10a.)]."	IX.2o.3 P (10a.)	2016
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. AL ACTUALIZARSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, NO ES OBLIGATORIO DAR VISTA DE OFICIO AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA PUES, DE HACERLO, SE AFECTARÍA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	VIII.2o.C.T.6 K (10a.)	2035
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "CONTINENCIA DE LA		

	Número de identificación	Pág.
CAUSA. SI EN EL RECURSO DE REVISIÓN SE IMPUGNA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE DECIDE SOBRE EL DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA (EL CUAL PUEDE CONTROVERTIRSE EN QUEJA) Y EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, PARA NO DIVIDIR AQUÉLLA, DEBE ESTUDIARLOS EN SU CONJUNTO, SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LA TEMPORALIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO PARA SU INTERPOSICIÓN, RESPECTO DEL ACTO QUE FUERE MATERIA DEL RECURSO DE QUEJA (DESECHAMIENTO)."	I.3o.P.6 K (10a.)	2046
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES OPTATIVO PARA LA PARTE ACTORA HACER VALER LA QUEJA REGULADA EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO."	I.1o.A.32 K (10a.)	2051
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "DEMANDA LABORAL. EL REQUERIMIENTO DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE PARA QUE EL PROMOVENTE ACREDITE SU IDENTIDAD, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE TENERLA POR NO INTERPUESTA, ES ILEGAL Y CONTRARÍA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."	VI.1o.T. J/2 (10a.)	1953
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "DERECHO FUNDAMENTAL A UNA VIVIENDA DIGNA Y DECOROSA. LA AFECTACIÓN PRODUCIDA POR UNA DECISIÓN JURISDICCIONAL QUE RESUELVE SOBRE LA PROPIEDAD Y LA POSESIÓN NO IMPLICA UNA VULNERACIÓN A ESE DERECHO."	1a. XXXV/2016 (10a.)	670

	Número de identificación	Pág.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "IMPEDIMENTO PARA CO- NOCER DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTI- FICACIONES DENTRO DE UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA SI EXISTE PARENTESCO POR AFINIDAD EN SEGUNDO GRADO ENTRE EL ACTUARIO JUDICIAL CUYA ACTUACIÓN SE CUES- TIONA Y EL JUZGADOR QUE DEBE PARTICIPAR EN LA RESOLUCIÓN DE DICHO INCIDENTE."	PC.I.L. J/16 L (10a.)	1271
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica- nos, artículo 17.—Véase: "INTERÉS PREVISTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. FORMA DE CUMPLIR SU CONDENA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012)."	XXVII.3o.31 L (10a.)	2084
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica- nos, artículo 17.—Véase: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE MORELOS DESIGNA- DOS TEMPORAL E INTERINAMENTE. PARÁME- TROS PARA SU REMOCIÓN, CONFORME AL PRIN- CIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL."	XVIII.5o.1 CS (10a.)	2087
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica- nos, artículo 17.—Véase: "RECURSO DE APELACIÓN EN MATERIA PENAL. AUN CUANDO EL TRIBUNAL DE ALZADA HAYA SUSTENTADO SU DECISIÓN HACIENDO SUYOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO, DEBIDO A QUE NO ENCONTRÓ MOTIVO PARA SUPLIR LA DEFI- CIENCIA DE LA QUEJA, CON BASE EN LA JURIS- PRUDENCIA 1a./J. 40/97, ESA CIRCUNSTANCIA NO LO AUTORIZA A INCUMPLIR CON SU DEBER DE FUNDARLA Y MOTIVARLA (ALCANCE DE LAS OBLIGACIONES DE LOS TRIBUNALES DE ALZADA DE COMPLETITUD DE SUS DECISIONES, SUPLEN- CIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA Y PRO- TECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS)."	II.1o.32 P (10a.)	2122

	Número de identificación	Pág.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "RECURSO DE QUEJA. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO AUXILIAR EN LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, POR LA QUE NIEGA PROVEER DE CONFORMIDAD LA SOLICITUD DEL TERCERO INTERESADO, DE DECRETAR QUE HA DEJADO DE SURTIR EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO."	I.2o.C.7 K (10a.)	2130
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS EN LOS QUE LA LITIS SE CENTRE EN RESOLVER EL MEJOR DERECHO A SUCEDER LOS BIENES AGRARIOS DE UN EJIDATARIO, AUN CUANDO LA ACCIÓN O RECONVENCIÓN SE BASE EN UN TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO OTORGADO POR EL <i>DE CUJUS</i> EN FAVOR DE UNA DE LAS PARTES."	III.1o.A.26 A (10a.)	2235
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 18.—Véase: "DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO."	VII.2o.P. J/2 (10a.)	1966
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 19.—Véase: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA QUE EL JUEZ DE CONTROL PUEDA DETERMINAR SI EL HECHO IMPUTADO POR EL MINISTERIO PÚBLICO AL ACUSADO ES O NO CONSTITUTIVO DE DELITO, DEBE ANALIZAR		

	Número de identificación	Pág.
LOS ELEMENTOS DE LA DESCRIPCIÓN TÍPICA DEL ILÍCITO CORRESPONDIENTE, ESTO ES, SUS ELEMENTOS OBJETIVOS, NORMATIVOS Y SUBJETIVOS."	XXVII.3o.20 P (10a.)	2025
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 19.—Véase: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. SI EL IMPUTADO SOLICITÓ LA PRÓRROGA A QUE ALUDE EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL PARA QUE SE LE RESUELVA SU SITUACIÓN JURÍDICA, EL MINISTERIO PÚBLICO ESTÁ EN APTITUD DE REQUERIR QUE SE DECRETE AQUÉL, PREVIAMENTE A ORDENAR LA SUSPENSIÓN DE LA AUDIENCIA CELEBRADA CON MOTIVO DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO CONSTITUCIONAL (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE MORELOS)."	XVIII.5o.1 P (10a.)	2026
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20.—Véase: "INCIDENTE DE LIBERTAD POR DESVANECIMIENTO DE DATOS. PROCEDE EN CUALQUIER ESTADO DEL PROCESO, INCLUSO, DESPUÉS DEL CIERRE DE INSTRUCCIÓN (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 546 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL)."	I.3o.P.46 P (10a.)	2076
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, apartado A, fracción IX (texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008).—Véase: "CONFRONTACIÓN. PARA QUE LA DILIGENCIA RELATIVA PRACTICADA EN LA AVERIGUACIÓN PREVIA PUEDA TENER VALIDEZ DURANTE EL PROCESO, ES NECESARIO QUE EL DEFENSOR DEL INculpADO ESTÉ PRESENTE DURANTE SU DESARROLLO, PARA SALVAGUARDAR SU DERECHO DE DEFENSA ADECUADA (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL)."	I.3o.P.43 P (10a.)	2045
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21.—Véase: "ACCIÓN PENAL. LAS PRUE-		

	Número de identificación	Pág.
BAS PARA PERFECCIONARLA, OFRECIDAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN CASO DE QUE SE NIEGUE LA ORDEN DE APREHENSIÓN, REAPREHENSIÓN O COMPARECENCIA, A FIN DE QUE EL JUEZ ENTRE NUEVAMENTE AL ESTUDIO DE LA CAUSA Y SE PRONUNCIE RESPECTO DE DICHOS MANDATOS, DEBEN DESAHOGARSE POR LA REPRESENTACIÓN SOCIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ) [APLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 75/2012 (10a.)]."	IX.2o.3 P (10a.)	2016
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22.—Véase: "FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS. EL ARTÍCULO 243, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL, QUE PREVÉ UNA AGRAVANTE PARA AQUEL DELITO, NO CONTIENE UNA PENA INUSITADA NI TRASCENDENTAL."	1a. XLIV/2016 (10a.)	675
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22.—Véase: "TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, AL EXIGIR LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL [ABANDONO DE LAS TESIS IV.2o.A.78 A (10a.) Y IV.2o.A.81 A (10a.)]."	IV.2o.A.3 CS (10a.)	2233
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 28.—Véase: "REDUCCIÓN DE SANCIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 33 BIS 3 DE LA ABROGADA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. ES		

	Número de identificación	Pág.
NOTORIA LA IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RELATIVA, INTERPUESTA POR PERSONA DISTINTA DEL BENEFICIADO."	I.1o.A.E.112 A (10a.)	2132
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 28.—Véase: "REDUCCIÓN DE SANCIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 33 BIS 3 DE LA ABROGADA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. RELEVANCIA DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA IDENTIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS QUE SOLICITEN ACOGERSE A ESE BENEFICIO."	I.1o.A.E.113 A (10a.)	2134
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "DETERMINACIÓN PRESUNTIVA DE CONTRIBUCIONES. EL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN QUE LA PREVÉ, NO SE RIGE POR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE AUDIENCIA PREVIA."	1a. XXIX/2016 (10a.)	672
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE PREVÉ LA EXENCIÓN DE SU PAGO A LAS EROGACIONES QUE EFECTÚEN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA."	PC.IV.A. J/21 A (10a.)	1320
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "IMPUESTOS A LA CONSTRUCCIÓN. LOS ARTÍCULOS 300 A 302 DEL CÓDIGO FISCAL DEL DISTRITO FEDERAL, VIGENTE EN 2011, NO VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA."	1a. XL/2016 (10a.)	676
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "IMPUESTOS		

	Número de identificación	Pág.
GENERALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY RELATIVA NO CONTRA- VIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA."	1a. XXVIII/2016 (10a.)	677
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica- nos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JA- LISCO, CONTENIDAS EN LOS DECRETOS NÚME- ROS 24646/LX/13 Y 23711/LIX/11. LOS PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL ELEMENTO RELATIVO A LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRAN EN LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DE ESE ES- TADO Y EL HECHO DE QUE LA DEFINICIÓN DE AQUÉLLOS ESTÉ EN EL REGLAMENTO DE ÉSTA, SÓLO IMPLICA QUE LOS DESARROLLA A DETALLE, POR LO QUE NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA."	PC.III.A. J/12 A (10a.)	1843
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica- nos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "VALOR AGRE- GADO. EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUES- TO RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005)."	1a. XLIII/2016 (10a.)	687
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica- nos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "VALOR AGREGA- DO. EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005)."	1a. XLII/2016 (10a.)	688
Constitución Política de los Estados Unidos Mexica- nos, artículo 73, fracción XXI.—Véase: "CONDENA CONDICIONAL Y SUSTITUTIVOS DE LA PENA. CUAN- DO UNA AUTORIDAD DEL FUERO COMÚN, EN EJERCICIO DE LA COMPETENCIA CONCURRENTE, CONOCE DE UN DELITO PREVISTO EN LA LEY GE- NERAL DE SALUD, DEBE RESOLVER RESPECTO		

	Número de identificación	Pág.
DE DICHOS BENEFICIOS, ATENTO A LOS ARTÍCULOS 70 Y 90 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y NO A LO QUE ESTABLEZCA LA LEY SUSTANTIVA LOCAL CORRESPONDIENTE."	XXX.2o.1 P (10a.)	2043
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 73, fracciones X y XI.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. NATURALEZA JURÍDICA Y SUSTENTO CONSTITUCIONAL DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN QUE CONFORMAN LOS PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL."	2a./J. 17/2016 (10a.)	840
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 89, fracción I.—Véase: "INFONAVIT. LA REGLA DÉCIMA PRIMERA DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DEL CITADO INSTITUTO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA TUTELADO POR EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."	I.1o.A.7 CS (10a.)	2079
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 94.—Véase: "CONFLICTO COMPETENCIAL. CORRESPONDE DIRIMIRLO A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO SE SUSCITA ENTRE UNA DE SUS SALAS REGIONALES Y UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN."	XVI.1o.T.24 L (10a.)	2044
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 99.—Véase: "CONFLICTO COMPETENCIAL. CORRESPONDE DIRIMIRLO A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO SE SUSCITA ENTRE UNA DE SUS SALAS REGIONALES Y UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN."	XVI.1o.T.24 L (10a.)	2044

	Número de identificación	Pág.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 103.—Véase: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS HETEROAPLICATIVAS. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL CONTRIBUYENTE PRETENDE RECLAMARLAS CON BASE EN EL INTERÉS LEGÍTIMO."	XXII.1o.12 A (10a.)	2020
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción I.—Véase: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS HETEROAPLICATIVAS. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL CONTRIBUYENTE PRETENDE RECLAMARLAS CON BASE EN EL INTERÉS LEGÍTIMO."	XXII.1o.12 A (10a.)	2020
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción III.—Véase: "RECURSO DE APELACIÓN. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DESECHA, ES INNECESARIO AGOTAR EL RECURSO DE REVOCACIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 680 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE MICHOACÁN, PREVIAMENTE A PROMOVER EL AMPARO DIRECTO."	1a. XXXVII/2016 (10a.)	683
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción VII.—Véase: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CASO EN EL QUE EL ACTO RECLAMADO HA COMENZADO A EJECUTARSE EN UN DISTRITO Y SIGUE EJECUTÁNDOSE EN OTRO (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO)."	VI.2o.T.10 K (10a.)	2039
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción IX.—Véase: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. ESTE RECURSO PROCEDE DE MANERA EXCEPCIONAL, CUANDO EXISTA INTERPRETACIÓN DIRECTA DE UNA NORMA CONSTITUCIONAL EN LA QUE SE SUSTENTE EL SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO RELATIVO."	1a. XXXVI/2016 (10a.)	685

	Número de identificación	Pág.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción X.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EXCEPCIONALMENTE, EN TUTELA DEL INTERÉS SOCIAL, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA INTERLOCUTORIA QUE CONCEDE AL ACTOR EN EL JUICIO DE NULIDAD LA MEDIDA CAUTELAR PARA QUE CONTINÚE EN OPERACIÓN CON LA ACTIVIDAD DE GASOLINERA."	PC.III.A. J/13 A (10a.)	1783
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción X.—Véase: "VIDA SILVESTRE. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, AL TRATARSE DE UNA NORMA PROHIBITIVA CON EFECTOS POSITIVOS."	PC.XVI.A. J/11 A (10a.)	1897
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracciones V y VIII.—Véase: "FACULTAD DE ATRACCIÓN. ES PROCEDENTE SU EJERCICIO SI EL RECURSO DE QUEJA PLANTEADO ACTUALIZA LA NECESIDAD DE DEFINIR EL ALCANCE DE UNA DISPOSICIÓN DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013, EN LA QUE SE INCORPORE UNA LIMITACIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES QUE NO EXISTÍA EN LA LEY DE AMPARO ABROGADA."	1a. XXVII/2016 (10a.)	674
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 113 (texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de mayo de 2015).—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. NATURALEZA JURÍDICA Y SUSTENTO CONSTITUCIONAL DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN QUE CONFORMAN LOS PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL."	2a./J. 17/2016 (10a.)	840

	Número de identificación	Pág.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 115, fracción I.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL CARGO DE UNA AUTORIDAD (MUNÍCIPE DE UN AYUNTAMIENTO) POR INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO. CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO INICIAR EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO."	III.3o.T.37 L (10a.)	2189
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 116, fracción III.—Véase: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE MORELOS DESIGNADOS TEMPORAL E INTERINAMENTE. PARÁMETROS PARA SU REMOCIÓN, CONFORME AL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA JUDICIAL."	XVIII.5o.1 CS (10a.)	2087
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 116, fracción III.—Véase: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE MORELOS DESIGNADOS TEMPORAL E INTERINAMENTE. TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ESTATAL QUE DA POR CONCLUIDO SU ENCARGO PARA NOMBRAR OTRO JUZGADOR CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS."	XVIII.5o.4 K (10a.)	2088
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 116, fracción VI.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. NATURALEZA JURÍDICA Y SUSTENTO CONSTITUCIONAL DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN QUE CONFORMAN LOS PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL."	2a./J. 17/2016 (10a.)	840
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN		

	Número de identificación	Pág.
LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY RELATIVA, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y 20 DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS."	2a./J. 23/2016 (10a.)	842
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado A, fracción XII.—Véase: "FONDO DE HABITACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES ELECTRICISTAS. LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTÁ EXENTA DE PAGAR LAS APORTACIONES PATRIMONIALES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, SALVO QUE SE ACREDITE QUE LA PRESTACIÓN DERIVADA DE AQUÉL ES INFERIOR AL 5%."	PC.I.L. J/15 L (10a.)	1235
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado A, fracción XXII.—Véase: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)]."	2a. II/2016 (10a.)	951
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado B, fracción XIII.—Véase: "SEGURIDAD PÚBLICA. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y DE 20 DÍAS POR CADA AÑO LABORADO [ABANDONO DE LAS TESIS DE JURISPRUDENCIA 2a./J. 119/2011 Y AISLADAS 2a. LXIX/2011, 2a. LXX/2011 Y 2a. XLVI/2013 (10a.) (*)]."	2a. II/2016 (10a.)	951

	Número de identificación	Pág.
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado B, fracción XIV.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. CON INDEPENDENCIA DE QUE PERTENEZCAN AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL O HAYAN SIDO CONTRATADOS BAJO EL ESQUEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN, NO TIENEN DERECHO A LA REINSTALACIÓN, AL EXISTIR UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL AL RESPECTO."	2a./J. 22/2016 (10a.)	836
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado B, fracciones VII, VIII, IX y XIV.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. NATURALEZA JURÍDICA Y SUSTENTO CONSTITUCIONAL DEL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN QUE CONFORMAN LOS PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL."	2a./J. 17/2016 (10a.)	840
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 6o. y 7o.—Véase: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. TIPOS DE AFECTACIÓN RESENTIBLE A CAUSA DE NORMAS PENALES."	1a. XXX/2016 (10a.)	682
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículos 39 y 40.—Véase: "LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. TIPOS DE AFECTACIÓN RESENTIBLE A CAUSA DE NORMAS PENALES."	1a. XXX/2016 (10a.)	682
Constitución Política de Morelos, artículo 92.—Véase: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE MORELOS DESIGNADOS TEMPORAL E INTERINAMENTE. TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ESTATAL QUE DA POR CONCLUIDO SU ENCARGO PARA NOMBRAR OTRO JUEZGADOR CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS."	XVIII.5o.4 K (10a.)	2088

	Número de identificación	Pág.
Contrato Colectivo de Trabajo celebrado entre la Universidad Autónoma de Guerrero y su Sindicato de Trabajadores Académicos, cláusula 134.—Véase: "UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO. LA CONTROVERSI A SUSCITADA POR EL NOMBRAMIENTO DE MAESTRO EMÉRITO, AL SER DE NATURALEZA ACADÉMICA, DEBE RESOLVERSE POR SUS ÓRGANOS INTERNOS Y NO POR LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE."	XXI.3o.C.T.2 L (10a.)	2237
Contrato Colectivo de Trabajo de la Comisión Federal de Electricidad, cláusula 68.—Véase: "FONDO DE HABITACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES ELECTRICISTAS. LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTÁ EXENTA DE PAGAR LAS APORTACIONES PATRIMONIALES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, SALVO QUE SE ACREDITE QUE LA PRESTACIÓN DERIVADA DE AQUÉL ES INFERIOR AL 5%."	PC.I.L. J/15 L (10a.)	1235
Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, cláusula 18a. transitoria.—Véase: "BONO DE PRODUCTIVIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD DE LOS TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL. AL TRATARSE DE UNA PRESTACIÓN EXTRALEGAL, SI DEMANDAN SU APLICACIÓN, DEBEN ACREDITAR LA EXISTENCIA DE LA CLÁUSULA DEL CONTRATO COLECTIVO QUE LA PREVÉ, DEL REGLAMENTO QUE REGULA SU OTORGAMIENTO Y EL DERECHO A PERCIBIRLA."	IV.4o.T.2 L (10a.)	2030
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8, numeral 1.—Véase: "INTERÉS PREVISTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. FORMA DE CUMPLIR SU CONDENA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012)."	XXVII.3o.31 L (10a.)	2084
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 8, numeral 1.—Véase: "RECURSO DE		

	Número de identificación	Pág.
QUEJA. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO AUXILIAR EN LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, POR LA QUE NIEGA PROVEER DE CONFORMIDAD LA SOLICITUD DEL TERCERO INTERESADO, DE DECRETAR QUE HA DEJADO DE SURTIR EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO."	I.2o.C.7 K (10a.)	2130
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 25.—Véase: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS."	2a./J. 12/2016 (10a.)	763
Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 25, numeral 1.—Véase: "RECURSO DE QUEJA. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO AUXILIAR EN LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, POR LA QUE NIEGA PROVEER DE CONFORMIDAD LA SOLICITUD DEL TERCERO INTERESADO, DE DECRETAR QUE HA DEJADO DE SURTIR EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO."	I.2o.C.7 K (10a.)	2130
Convención sobre los Derecho del Niño, artículo 12.—Véase: "SUSPENSIÓN DE PLANO EN EL JUICIO DE AMPARO. SUPUESTO EN EL QUE NO EXISTE VIOLACIÓN A DICHA MEDIDA CAUTELAR, NI EXCESO O DEFECTO EN SU CUMPLIMIENTO, TRATÁNDOSE DE PROCEDIMIENTOS QUE INVOLUCRAN A MENORES DE EDAD."	I.5o.P.9 K (10a.)	2185
Convenio que crea y regula el Régimen de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones de Seguridad Social de la Universidad de Guadalajara, cláusula quinta transitoria.—Véase: "UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA CLÁUSULA QUINTA TRANSITORIA DEL CONVENIO QUE CREA Y REGULA EL RÉGIMEN DE		

	Número de identificación	Pág.
PENSIONES, JUBILACIONES Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL DE ESA INSTITUCIÓN, NO TRANSGREDE LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN."	2a. III/2016 (10a.)	953
Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, artículo XI.—Véase: "DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO."	VII.2o.P. J/2 (10a.)	1966
Declaración Universal de los Derechos Humanos, artículo 25.—Véase: "DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO."	VII.2o.P. J/2 (10a.)	1966
Decreto por el que se crea la Comisión Federal de Telecomunicaciones, artículo segundo, fracción XI (D.O.F. 9-VIII-1996).—Véase: "TELECOMUNICACIONES. LAS DISPOSICIONES QUE PREVÉN LA FACULTAD DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE LA EXTINTA COMISIÓN FEDERAL RELATIVA PARA IMPONER OBLIGACIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON TARIFAS, CALIDAD DEL SERVICIO E INFORMACIÓN A LOS CON-		

	Número de identificación	Pág.
CESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE LA MATERIA QUE TENGAN PODER SUSTANCIAL EN ALGÚN MERCADO RELEVANTE, CORRESPONDEN A UNA 'REGLA QUE CONFIERE PODERES'."	I.1o.A.E.115 A (10a.)	2226
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, artículo octavo transitorio, fracción I (D.O.F. 11-VI-2013).—Véase: "LINEAMIENTOS SOBRE <i>MUST CARRY</i> Y <i>MUST OFFER</i> EMITIDOS POR EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. EL CONCEPTO 'MISMA ZONA DE COBERTURA GEOGRÁFICA', PREVISTO EN SU ARTÍCULO 3, RESPETA LOS TÍTULOS DE CONCESIÓN QUE RIGEN EL SERVICIO DE CADA TELEVISORA."	I.1o.A.E.128 A (10a.)	2092
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 6o., 7o., 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, artículo octavo transitorio, fracción I (D.O.F. 11-VI-2013).—Véase: "LINEAMIENTOS SOBRE <i>MUST CARRY</i> Y <i>MUST OFFER</i> EMITIDOS POR EL PLENO DEL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. LOS CONCESIONARIOS DE TELEVISIÓN RES-TRINGIDA TERRENAL CARECEN DE INTERÉS PARA RECLAMAR EN AMPARO LA RESTRICCIÓN QUE, ADUCEN, AQUÉLLOS IMPONEN A LOS TITULARES DE LOS DERECHOS DE AUTOR, CONSISTENTE EN ENTREGAR GRATUITAMENTE EL CONTENIDO QUE LES PERTENECE."	I.1o.A.E.127 A (10a.)	2093
Decreto por el que se reforman y adicionan los artículos 97, 110, 136 al 151 inclusive y 782 de la Ley Federal del Trabajo, artículo tercero transitorio (D.O.F. 24-IV-1972).—Véase: "FONDO DE HABITACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES ELECTRICISTAS. LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTÁ EXENTA DE PAGAR LAS APORTA-		

	Número de identificación	Pág.
CIONES PATRIMONIALES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, SALVO QUE SE ACREDITE QUE LA PRES-TACIÓN DERIVADA DE AQUEL ES INFERIOR AL 5%."	PC.I.L. J/15 L (10a.)	1235
Ley Agraria, artículo 18.—Véase: "DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. LA FALTA DE LLAMAMIENTO A UNA PERSONA CUANDO HAN CONCLUIDO CON EL RECONOCIMIENTO DEL SUCESOR DE DERECHOS AGRARIOS SIN QUE SE HAYA DEJADO LISTA DE SUCESTORES, NO TRANSGREDE SUS DERECHOS HUMANOS."	IX.2o.8 A (10a.)	2064
Ley Agraria, artículo 160.—Véase: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN LA QUE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO."	PC.XXVII. J/5 A (10a.)	1425
Ley Agraria, artículo 160.—Véase: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES."	PC.XXVII. J/4 A (10a.)	1426
Ley Agraria, artículo 163.—Véase: "DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. LA FALTA DE LLAMAMIENTO A UNA PERSONA CUANDO HAN CONCLUIDO CON EL RECONOCIMIENTO DEL SUCESOR DE DERECHOS AGRARIOS SIN QUE SE HAYA DEJADO LISTA DE SUCESTORES, NO TRANSGREDE SUS DERECHOS HUMANOS."	IX.2o.8 A (10a.)	2064

	Número de identificación	Pág.
Ley Agraria, artículo 163.—Véase: "TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS EN LOS QUE LA LITIS SE CENTRE EN RESOLVER EL MEJOR DERECHO A SUCEDER LOS BIENES AGRARIOS DE UN EJIDATARIO, AUN CUANDO LA ACCIÓN O RECONVENCIÓN SE BASE EN UN TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO OTORGADO POR EL <i>DE CUJUS</i> EN FAVOR DE UNA DE LAS PARTES."	III.1o.A.26 A (10a.)	2235
Ley de Amparo, artículo 1o., fracción I.—Véase: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS."	2a./J. 12/2016 (10a.)	763
Ley de Amparo, artículo 2o.—Véase: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO."	I.3o.P41 P (10a.)	2049
Ley de Amparo, artículo 5o., fracción I.—Véase: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS."	2a./J. 12/2016 (10a.)	763
Ley de Amparo, artículo 5o., fracción II.—Véase: "INFONAVIT. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO."	I.1o.A.29 K (10a.)	2079

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículo 5o., fracción IV.—Véase: "RECURSOS EN EL AMPARO INDIRECTO EN MATERIA PENAL. EL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, AL SER PARTE PERMANENTE EN TODOS LOS JUICIOS, ESTÁ FACULTADO PARA INTERPONERLOS, CUANDO SE RECLAMAN RESOLUCIONES EMITIDAS TANTO POR TRIBUNALES FEDERALES COMO POR LOCALES (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN IV, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA LEY DE LA MATERIA)."	II.2o.P18 K (10a.)	2132
Ley de Amparo, artículo 6o.—Véase: "DEFENSOR DEL QUEJOSO PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. CUENTA CON LEGITIMACIÓN LEGAL PARA DESIGNAR AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA."	I.3o.P42 P (10a.)	2054
Ley de Amparo, artículo 12.—Véase: "DEFENSOR DEL QUEJOSO PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. CUENTA CON LEGITIMACIÓN LEGAL PARA DESIGNAR AUTORIZADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE LA MATERIA."	I.3o.P42 P (10a.)	2054
Ley de Amparo, artículo 17.—Véase: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LOS FORMULADOS POR EL QUEJOSO NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA RESOLVERLO."	XXVII.3o.95 K (10a.)	2018
Ley de Amparo, artículo 17.—Véase: "INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES. NO ES EXIGIBLE QUE SE HAGA VALER CONTRA LA PRACTICADA A QUIEN DEJÓ DE SER APODERADO DE LA PARTE QUE SE PRETENDIÓ NOTIFICAR Y EN LUGAR DISTINTO DEL DOMICILIO SEÑALADO PARA RECIBIRLAS, POR TANTO, NO ES APTA PARA EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO."	XVI.1o.T.22 L (10a.)	2077

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículo 22.—Véase: "RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU INTERPOSICIÓN RESULTA OPORTUNA AUN CUANDO OCURRA ANTES DE QUE INICIE EL CÓMPUTO DEL PLAZO RESPECTIVO."	2a./J. 16/2016 (10a.)	729
Ley de Amparo, artículo 36 (abrogada).—Véase: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CASO EN EL QUE EL ACTO RECLAMADO HA COMENZADO A EJECUTARSE EN UN DISTRITO Y SIGUE EJECUTÁNDOSE EN OTRO (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO)."	VI.2o.T.10 K (10a.)	2039
Ley de Amparo, artículo 37.—Véase: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. CASO EN EL QUE EL ACTO RECLAMADO HA COMENZADO A EJECUTARSE EN UN DISTRITO Y SIGUE EJECUTÁNDOSE EN OTRO (INTERPRETACIÓN DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 37 DE LA LEY DE AMPARO)."	VI.2o.T.10 K (10a.)	2039
Ley de Amparo, artículo 37.—Véase: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA DETERMINACIÓN QUE CONFIRMA LA IMPROCEDENCIA DE UN INCIDENTE NO ESPECIFICADO EN MATERIA PENAL. SI LOS EFECTOS PRODUCIDOS POR ESTA RESOLUCIÓN, NO SE TRADUCEN EN UNA EJECUCIÓN MATERIAL DEL ACTO RECLAMADO, DEBIDO A QUE NINGUNA CONSECUENCIA INMEDIATA Y DIRECTA ORIGINAN EN EL DERECHO SUSTANTIVO ALEGADO (LIBERTAD), AQUÉLLA SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE PRESENTÓ LA DEMANDA."	II.2o.P.17 K (10a.)	2040
Ley de Amparo, artículo 51, fracción VIII.—Véase: "IMPEDIMENTO PARA CONOCER DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES DENTRO DE		

	Número de identificación	Pág.
UN JUICIO DE AMPARO DIRECTO. SE ACTUALIZA SI EXISTE PARENTESCO POR AFINIDAD EN SEGUNDO GRADO ENTRE EL ACTUARIO JUDICIAL CUYA ACTUACIÓN SE CUESTIONA Y EL JUZGADOR QUE DEBE PARTICIPAR EN LA RESOLUCIÓN DE DICHO INCIDENTE."	PC.I.L. J/16 L (10a.)	1271
Ley de Amparo, artículo 61, fracción XIV.—Véase: "AMPARO DIRECTO. EL PLAZO DE 15 DÍAS PARA PROMOVERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO Y EXACTO DEL LAUDO RECLAMADO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE CONTRA SU NOTIFICACIÓN HAYA PLANTEADO INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y ÉSTE SE HAYA DECLARADO FUNDADO."	VI.2o.T.8 L (10a.)	2021
Ley de Amparo, artículo 61, fracción XIV.—Véase: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES EN EL AMPARO DIRECTO. LO SON AQUELLOS QUE SOSTIENEN LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS NORMAS QUE REGULAN LA AUTOLIQUIDACIÓN DE CONTRIBUCIONES, SI EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE ORIGEN SE IMPUGNARON LOS RECIBOS DE PAGO QUE LA CONSTITUYEN."	IV.2o.A.113 A (10a.)	2042
Ley de Amparo, artículo 61, fracción XVIII.—Véase: "RECURSO DE QUEJA. CONTRA EL AUTO EMITIDO POR EL MAGISTRADO DEL TRIBUNAL DISTRITAL QUE LO DESECHA PROCEDE EL DE RECONSIDERACIÓN, PREVIO A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO, ATENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COAHUILA)."	VIII.2o.C.T.3 C (10a.)	2124
Ley de Amparo, artículo 61, fracción XVIII.—Véase: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. NO ES UN RECURSO O MEDIO DE DEFENSA ORDINARIO DEN-		

	Número de identificación	Pág.
TRO DEL PROCEDIMIENTO, SINO UN JUICIO AUTÓNOMO."	XXVII.3o.97 K (10a.)	2229
Ley de Amparo, artículo 61, fracción XX.—Véase: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN LA QUE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO."	PC.XXVII. J/5 A (10a.)	1425
Ley de Amparo, artículo 61, fracción XXI.—Véase: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO DIRECTO. ES INNECESARIO DAR LA VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE ACTUALIZA ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CON MOTIVO DE LA DECISIÓN ADOPTADA POR EL PROPIO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN UN RECURSO DE REVISIÓN FISCAL RELACIONADO."	I.12o.A.3 A (10a.)	2034
Ley de Amparo, artículo 61, fracción XXI.—Véase: "CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. AL ACTUALIZARSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, NO ES OBLIGATORIO DAR VISTA DE OFICIO AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA PUES, DE HACERLO, SE AFECTARÍA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	VIII.2o.C.T.6 K (10a.)	2035
Ley de Amparo, artículo 63, fracción V.—Véase: "CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. AL ACTUALIZARSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, NO ES		

	Número de identificación	Pág.
OBLIGATORIO DAR VISTA DE OFICIO AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA PUES, DE HACERLO, SE AFECTARÍA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	VIII.2o.C.T.6 K (10a.)	2035
Ley de Amparo, artículo 64.—Véase: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL AMPARO DIRECTO. ES INNECESARIO DAR LA VISTA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI SE ACTUALIZA ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA CON MOTIVO DE LA DECISIÓN ADOPTADA POR EL PROPIO TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN UN RECURSO DE REVISIÓN FISCAL RELACIONADO."	I.12o.A.3 A (10a.)	2034
Ley de Amparo, artículo 64.—Véase: "CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. AL ACTUALIZARSE EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO ESA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, NO ES OBLIGATORIO DAR VISTA DE OFICIO AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA PUES, DE HACERLO, SE AFECTARÍA EL DERECHO FUNDAMENTAL DE JUSTICIA PRONTA Y EXPEDITA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS."	VIII.2o.C.T.6 K (10a.)	2035
Ley de Amparo, artículo 64.—Véase: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SI SU DESECHAMIENTO DE PLANO OCURRIÓ PORQUE EN EL AUTO ADMISORIO EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIRTIÓ UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, ES INNECESARIO DAR VISTA PREVIAMENTE AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA."	XXVII.3o.93 K (10a.)	2056

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículo 75.—Véase: "PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SUPUESTOS EN LOS QUE PROCEDE OFRECERLAS, CONFORME A LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 75, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA."	XXI.2o.P.A.12 K (10a.)	2119
Ley de Amparo, artículo 76.—Véase: "ALEGATOS. SI DE SU CONTENIDO SE ADVIERTE QUE EN REALIDAD CONSTITUYEN UNA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO, EL JUZGADOR DEBE SUPLIR EL ERROR EN LA DENOMINACIÓN EN QUE INCURRA EL QUEJOSO."	XXVII.3o.94 K (10a.)	2019
Ley de Amparo, artículo 77.—Véase: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS."	2a./J. 12/2016 (10a.)	763
Ley de Amparo, artículo 81, fracción I.—Véase: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, SI ÉSTE SE ACORDÓ EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y ENSEGUIDA SE DICTÓ SENTENCIA."	III.2o.P.13 K (10a.)	2129
Ley de Amparo, artículo 86.—Véase: "RECURSO DE REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SU INTERPOSICIÓN RESULTA OPORTUNA AUN CUANDO OCURRA ANTES DE QUE INICIE EL CÓMPUTO DEL PLAZO RESPECTIVO."	2a./J. 16/2016 (10a.)	729
Ley de Amparo, artículo 93, fracción III.—Véase: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. CUANDO		

	Número de identificación	Pág.
EL JUEZ DE DISTRITO, POR UNA PARTE LA NIEGUE Y, POR OTRA, LA CONCEDA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PUEDE ANALIZAR, DE OFICIO, EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA SÓLO CONTRA LA NEGATIVA, SI EL OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA AFECTA EL INTERÉS SOCIAL O CONTRAVIENE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO."	III.2o.A.7 K (10a.)	2222
Ley de Amparo, artículo 93, fracción VI.—Véase: "PRINCIPIO <i>NON REFORMATIO IN PEIUS</i> . NO ENCUENTRA APLICACIÓN EN EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA CONCESIÓN DE AMPARO AL QUEJOSO, ANTE DISPOSICIÓN EXPRESA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 93, FRACCIÓN VI, DE LA LEY DE AMPARO."	XVII.1o.C.T.37 K (10a.)	2114
Ley de Amparo, artículo 97, fracción I.—Véase: "CONTINENCIA DE LA CAUSA. SI EN EL RECURSO DE REVISIÓN SE IMPUGNA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE DECIDE SOBRE EL DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA (EL CUAL PUEDE CONTROVERTIRSE EN QUEJA) Y EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, PARA NO DIVIDIR AQUÉLLA, DEBE ESTUDIARLOS EN SU CONJUNTO, SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LA TEMPORALIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO PARA SU INTERPOSICIÓN, RESPECTO DEL ACTO QUE FUERE MATERIA DEL RECURSO DE QUEJA (DESECHAMIENTO)."	I.3o.P.6 K (10a.)	2046
Ley de Amparo, artículo 97, fracción I.—Véase: "RECURSO DE QUEJA CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. QUEDA SIN MATERIA SI SE DICTA SENTENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO DE ORIGEN."	XV.5o.7 K (10a.)	2126
Ley de Amparo, artículo 97, fracción I.—Véase: "RECURSO DE QUEJA. CUANDO SE CONTROVERTA ALGUNO DE LOS ASPECTOS QUE EL JUZGA-		

	Número de identificación	Pág.
DOR DEBE RESOLVER EN FORMA INTEGRAL AL CONCEDER LA MEDIDA SUSPENSIVA PROVISIONAL, DEBE INTERPONERSE CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO."	XXVII.3o.96 K (10a.)	2127
Ley de Amparo, artículo 97, fracción I.—Véase: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, SI ÉSTE SE ACORDÓ EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y ENSEGUIDA SE DICTÓ SENTENCIA."	III.2o.P.13 K (10a.)	2129
Ley de Amparo, artículo 97, fracción I.—Véase: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA TRAMITAR LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PROCEDER EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 154 DE LA LEY DE AMPARO."	I.13o.T.19 K (10a.)	2187
Ley de Amparo, artículo 97, fracción II.—Véase: "RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA O CONCEDE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA INTERPONERLO ES DE 5 DÍAS HÁBILES, AL NO TRATARSE DE ALGÚN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO."	PC.III.L. J/13 L (10a.)	1612
Ley de Amparo, artículo 97, fracción II.—Véase: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN II, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. DEBE DECLARASE SIN MATERIA CUANDO EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO DEL QUE DERIVA AQUÉL SE REMITE POR INCOMPETENCIA A UN JUZGADO DE DISTRITO O TRIBUNAL UNITARIO DE CIRCUITO, SEGÚN CORRESPONDA, PARA QUE SE		

	Número de identificación	Pág.
SUSTANCIE COMO AMPARO BIINSTANCIAL, Y EL JUZGADOR DECLARADO COMPETENTE INICIA EL TRÁMITE DEL ASUNTO."	VII.1o.C.12 K (10a.)	2129
Ley de Amparo, artículo 97, fracción II.—Véase: "RECURSO DE QUEJA. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN DICTADA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE COMO AUXILIAR EN LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO, POR LA QUE NIEGA PROVEER DE CONFORMIDAD LA SOLICITUD DEL TERCERO INTERESADO, DE DECRETAR QUE HA DEJADO DE SURTIR EFECTOS LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO."	I.2o.C.7 K (10a.)	2130
Ley de Amparo, artículo 98.—Véase: "CONTINENCIA DE LA CAUSA. SI EN EL RECURSO DE REVISIÓN SE IMPUGNA LA DETERMINACIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO QUE DECIDE SOBRE EL DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA (EL CUAL PUEDE CONTROVERTIRSE EN QUEJA) Y EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE LA AUDIENCIA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, PARA NO DIVIDIR AQUÉLLA, DEBE ESTUDIARLOS EN SU CONJUNTO, SIEMPRE QUE SE CUMPLA CON LA TEMPORALIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO PARA SU INTERPOSICIÓN, RESPECTO DEL ACTO QUE FUERE MATERIA DEL RECURSO DE QUEJA (DESECHAMIENTO)."	I.3o.P6 K (10a.)	2046
Ley de Amparo, artículo 98, fracción I.—Véase: "RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA O CONCEDE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA INTERPONERLO ES DE 5 DÍAS HÁBILES, AL NO TRATARSE DE ALGÚN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO."	PC.III.L. J/13 L (10a.)	1612
Ley de Amparo, artículo 101.—Véase: "RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA		

	Número de identificación	Pág.
O CONCEDE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA INTERPONERLO ES DE 5 DÍAS HÁBILES, AL NO TRATARSE DE ALGÚN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO."	PC.III.L. J/13 L (10a.)	1612
Ley de Amparo, artículo 103.—Véase: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. SI LA QUEJA PROMOVIDA CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ DE DISTRITO DE SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN RELATIVO SE DECLARA FUNDADA, DEBE REMITÍRSELE EL EXPEDIENTE PARA QUE REASUMA SU JURISDICCIÓN."	I.13o.T.20 K (10a.)	2188
Ley de Amparo, artículo 104.—Véase: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SI SU DESECHAMIENTO DE PLANO OCURRIÓ PORQUE EN EL AUTO ADMISORIO EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIRTIÓ UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, ES INNECESARIO DAR VISTA PREVIAMENTE AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA."	XXVII.3o.93 K (10a.)	2056
Ley de Amparo, artículo 107, fracción I.—Véase: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS HETEROAPLICATIVAS. ES IMPROCEDENTE CUANDO EL CONTRIBUYENTE PRETENDE RECLAMARLAS CON BASE EN EL INTERÉS LEGÍTIMO."	XXII.1o.12 A (10a.)	2020
Ley de Amparo, artículo 107, fracción I.—Véase: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL JUICIO DE AMPARO CUMPLE CON LAS CARACTERÍSTICAS DE EFICACIA E IDONEIDAD A LA LUZ DEL ARTÍCULO 25 DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DE-RECHOS HUMANOS."	2a./J. 12/2016 (10a.)	763

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículo 107, fracción IV.—Véase: "DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS. AL TENER DICHA RESOLUCIÓN ÚNICAMENTE EFECTOS DECLARATIVOS Y CONSTITUIR UN ACTO FUERA DE JUICIO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO."	XXI.3o.C.T.1 L (10a.)	2054
Ley de Amparo, artículo 107, fracción IV.—Véase: "REMATE. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN ES LA QUE ORDENA OTORGAR LA ESCRITURA DE ADJUDICACIÓN Y ENTREGAR LA POSESIÓN DE LOS INMUEBLES REMATADOS, AUNQUE SE DICTEN EN DISTINTAS DETERMINACIONES."	PC.II.C. J/2 K (10a.)	1685
Ley de Amparo, artículo 107, fracción VIII.—Véase: "INCOMPETENCIA, EXCEPCIÓN DE. PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO CONTRA EL ACUERDO DEL TRIBUNAL AGRARIO QUE RESERVA SU RESOLUCIÓN PARA EMITIRLA DE FORMA CONJUNTA CON LA SENTENCIA."	XXI.1o.PA.33 A (10a.)	2077
Ley de Amparo, artículo 111, fracción II.—Véase: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÁ OBLIGADO A OTORGAR AL QUEJOSO EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE DESAHOGUE LA PREVENCIÓN DE FORMULARLA, RESPECTO DE UN ACTO DIVERSO, VINCULADO CON EL RECLAMADO, ADVERTIDO DEL INFORME JUSTIFICADO, SI DE AUTOS SE APRECIA QUE AQUÉL, CON ANTERIORIDAD A QUE SE RINDIERA, TUVO CONOCIMIENTO DE SU EXISTENCIA."	I.5o.P.10 K (10a.)	2022
Ley de Amparo, artículo 113.—Véase: "JUICIO DE AMPARO. NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA POR		

	Número de identificación	Pág.
EXTEMPORANEIDAD DE LA DEMANDA CUANDO EL QUEJOSO SOSTENGA HABER TENIDO CONOCIMIENTO DE LA APLICACIÓN DE LAS NORMAS TRIBUTARIAS QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, EN UNA FECHA POSTERIOR A LA QUE OSTENTA EL RECIBO DE PAGO RESPECTIVO."	PC.XXII. 1 A (10a.)	1919
Ley de Amparo, artículo 114, fracción IV.—Véase: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO SOBRE LA BASE DE QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE ES ILEGAL, SI DEL AUTO RESPECTIVO SE ADVIERTE QUE EL JUEZ FEDERAL CONSTRUYÓ SU DETERMINACIÓN A PARTIR DE UNA INEXACTA PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE REVELA SU OMISIÓN DE PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU OCURSO."	I.1o.A.30 K (10a.)	2057
Ley de Amparo, artículo 125 (abrogada).—Véase: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA PENAL. SI EL QUEJOSO ES LA VÍCTIMA U OFENDIDO DEL DELITO, ES IMPROCEDENTE FIJARLE, DISCRECIONALMENTE, LA GARANTÍA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 125, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO ABROGADA, PARA QUE AQUÉLLA CONTINÚE SURTIENDO EFECTOS."	I.3o.P.45 P (10a.)	2190
Ley de Amparo, artículo 126.—Véase: "RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA O CONCEDE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA INTERPONERLO ES DE 5 DÍAS HÁBILES, AL NO TRATARSE DE ALGÚN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO."	PC.III.L. J/13 L (10a.)	1612

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículo 128.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EXCEPCIONALMENTE, EN TUTELA DEL INTERÉS SOCIAL, CUANDO EL ACTO RECLAMADO LO CONSTITUYE LA INTERLOCUTORIA QUE CONCEDE AL ACTOR EN EL JUICIO DE NULIDAD LA MEDIDA CAUTELAR PARA QUE CONTINÚE EN OPERACIÓN CON LA ACTIVIDAD DE GASOLINERA."	PC.III.A. J/13 A (10a.)	1783
Ley de Amparo, artículo 128, fracción II.—Véase: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL AMPARO. CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO, POR UNA PARTE LA NIEGUE Y, POR OTRA, LA CONCEDA, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO PUEDE ANALIZAR, DE OFICIO, EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA SÓLO CONTRA LA NEGATIVA, SI EL OTORGAMIENTO DE LA MEDIDA AFECTA EL INTERÉS SOCIAL O CONTRAVIENE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO."	III.2o.A.7 K (10a.)	2222
Ley de Amparo, artículo 128, fracción II.—Véase: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA EJECUCIÓN DE LA CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL NOMBRAMIENTO DE UN CONSEJERO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE GUERRERO Y SU SUSTITUCIÓN EN ESE CARGO."	XXI.1o.PA.32 A (10a.)	2223
Ley de Amparo, artículo 128, fracción II.—Véase: "VIDA SILVESTRE. LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA APLICACIÓN DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, NO PROVOCA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI CONTRAVIENE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO."	PC.XVI.A. J/12 A (10a.)	1896
Ley de Amparo, artículo 132.—Véase: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REDUCE LA PENSIÓN ALIMENTICIA PROVISIONAL. SI PROCEDE OTORGARLA CON GARANTÍA, ÉSTA DEBE		

	Número de identificación	Pág.
FIJARSE DISCRECIONALMENTE SI NO EXISTEN DATOS QUE PERMITAN ESTABLECER SU MONTO, SIN PERJUICIO DE CONSIDERAR EL TIEMPO PROBABLE DE RESOLUCIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL Y LA CANTIDAD QUE SE OBTENGA DE RESTAR AL MONTO DE LA PROVISIONAL CON LA CANTIDAD QUE FIJÓ AL RESOLVER LA RECLAMACIÓN Y EL RESULTADO DEBERÁ MULTIPLICARSE POR EL LAPSO EN QUE DURE."	VII.1o.C.26 C (10a.)	2186
Ley de Amparo, artículo 147.—Véase: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA EJECUCIÓN DE LA CONCLUSIÓN ANTICIPADA DEL NOMBRAMIENTO DE UN CONSEJERO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO DE GUERRERO Y SU SUSTITUCIÓN EN ESE CARGO."	XXI.1o.P.A.32 A (10a.)	2223
Ley de Amparo, artículo 147.—Véase: "VIDA SILVESTRE. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, AL TRATARSE DE UNA NORMA PROHIBITIVA CON EFECTOS POSITIVOS."	PC.XVI.A. J/11 A (10a.)	1897
Ley de Amparo, artículo 148.—Véase: "VIDA SILVESTRE. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, AL TRATARSE DE UNA NORMA PROHIBITIVA CON EFECTOS POSITIVOS."	PC.XVI.A. J/11 A (10a.)	1897
Ley de Amparo, artículo 154.—Véase: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA TRAMITAR LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PROCEDER EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 154 DE LA LEY DE AMPARO."	I.13o.T.19 K (10a.)	2187

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículo 154.—Véase: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. SI LA QUEJA PROMOVIDA CONTRA LA NEGATIVA DEL JUEZ DE DISTRITO DE SUSTANCIAR EL PROCEDIMIENTO DE MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN RELATIVO SE DECLARA FUNDADA, DEBE REMITÍRSELE EL EXPEDIENTE PARA QUE REASUMA SU JURISDICCIÓN."	I.13o.T.20 K (10a.)	2188
Ley de Amparo, artículo 156.—Véase: "DAÑOS Y PERJUICIOS. LA AFIANZADORA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA IMPUGNAR LA DETERMINACIÓN QUE DECLARA FUNDADO EL INCIDENTE DE LIQUIDACIÓN TRAMITADO EN UN JUICIO DE AMPARO BIINSTANCIAL."	I.14o.C.1 K (10a.)	2053
Ley de Amparo, artículo 173, fracciones I y XXII.—Véase: "REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE PRIMERA INSTANCIA EN EL FUERO MILITAR. DEBE ORDENARSE SI EL JUEZ QUE DICTÓ LA SENTENCIA DEFINITIVA NO FUE EL MISMO QUE CELEBRÓ LA AUDIENCIA DE DERECHO EN LA QUE SE DECLARÓ VISTO EL ASUNTO."	I.5o.P.45 P (10a.)	2136
Ley de Amparo, artículo 179.—Véase: "DEMANDA DE AMPARO DIRECTO. SI SU DESECHAMIENTO DE PLANO OCURRIÓ PORQUE EN EL AUTO ADMISORIO EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO ADVIRTIÓ UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, ES INNECESARIO DAR VISTA PREVIAMENTE AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA."	XXVII.3o.93 K (10a.)	2056
Ley de Amparo, artículo 181.—Véase: "ALEGATOS EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. LOS FORMULADOS POR EL QUEJOSO NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA RESOLVERLO."	XXVII.3o.95 K (10a.)	2018

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículo 182.—Véase: "AMPARO ADHESIVO. DEBE DECLARARSE SIN MATERIA EL INTERPUESTO POR EL CODEMANDADO ABSUELTO, CUANDO NO EXISTE RIESGO DE QUE SE MODIFIQUE EL LAUDO QUE LE BENEFICIA, AUN CUANDO SE CONCEDA EL AMPARO PRINCIPAL."	VII.1o.T.2 L (10a.)	2020
Ley de Amparo, artículo 190.—Véase: "RECURSO DE QUEJA CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE NIEGA O CONCEDE LA SUSPENSIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. EL PLAZO PARA INTERPONERLO ES DE 5 DÍAS HÁBILES, AL NO TRATARSE DE ALGÚN SUPUESTO DE EXCEPCIÓN DEL ARTÍCULO 98 DE LA LEY DE AMPARO."	PC.III.L. J/13 L (10a.)	1612
Ley de Amparo, artículo 196.—Véase: "PRUEBA PERICIAL EN EL INCIDENTE INNOMINADO TRAMITADO EN LA ETAPA DE EJECUCIÓN DE UNA SENTENCIA DE AMPARO. EN SU DESAHOGO SON INAPLICABLES LAS REGLAS DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES."	III.1o.A.7 K (10a.)	2116
Ley de Amparo, artículo 196.—Véase: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. SON INEFICACES LOS AGRAVIOS QUE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUMPLIMIENTO QUE NO FUERON OBJETO DE ANÁLISIS EN EL AMPARO."	2a./J. 14/2016 (10a.)	717
Ley de Amparo, artículo 217.—Véase: "JURISPRUDENCIA ESTABLECIDA POR UN PLENO DE CIRCUITO. ES OBLIGATORIA TANTO PARA LOS TRIBUNALES COLEGIADOS QUE SE UBIQUEN DENTRO DE ESE CIRCUITO COMO PARA LOS AUXILIARES QUE LOS APOYEN EN EL DICTADO DE SUS RESOLUCIONES, INDEPENDIENTEMENTE DE LA REGIÓN A LA QUE ÉSTOS PERTENEZCAN."	(IV Región)2o.8 K (10a.)	2089

REPUBLICADA POR
CORRECCIÓN EN LA
CITA DEL NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN Y
DE LA MATERIA

	Número de identificación	Pág.
Ley de Amparo, artículos 17 y 18.—Véase: "AMPARO DIRECTO. EL PLAZO DE 15 DÍAS PARA PROMOVERLO DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO Y EXACTO DEL LAUDO RECLAMADO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE CONTRA SU NOTIFICACIÓN HAYA PLANTEADO INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES Y ÉSTE SE HAYA DECLARADO FUNDADO."	VI.2o.T.8 L (10a.)	2021
Ley de Amparo, artículos 17 y 18.—Véase: "AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO NO ESTÁ OBLIGADO A OTORGAR AL QUEJOSO EL PLAZO GENÉRICO DE QUINCE DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA QUE DESAHOGUE LA PREVENCIÓN DE FORMULARLA, RESPECTO DE UN ACTO DIVERSO, VINCULADO CON EL RECLAMADO, ADVERTIDO DEL INFORME JUSTIFICADO, SI DE AUTOS SE APRECIA QUE AQUÉL, CON ANTERIORIDAD A QUE SE RINDIERA, TUVO CONOCIMIENTO DE SU EXISTENCIA."	I.5o.P.10 K (10a.)	2022
Ley de Amparo, artículos 99 y 100.—Véase: "RECURSO DE QUEJA. CUANDO SE INTERPONE POR UNA PERSONA FÍSICA POR PROPIO DERECHO Y EN REPRESENTACIÓN DE UNA MORAL Y SÓLO SE EXPRESAN ARGUMENTOS TENDENTES A CONTROVERTIR EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO RESPECTO DE LOS ACTOS RECLAMADOS POR LA PRIMERA, EL MEDIO DE IMPUGNACIÓN INTERPUESTO POR LA SEGUNDA ES IMPROCEDENTE."	XXI.3o.C.T.1 K (10a.)	2128
Ley de Amparo, artículos 104 a 106.—Véase: "RECURSO DE RECLAMACIÓN. CONSTITUYE EL MEDIO IDÓNEO PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO PARA IMPUGNAR LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL DE UN ARTÍCULO DE ESE ORDENAMIENTO		

	Número de identificación	Pág.
APLICADO DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO EN LA VÍA DIRECTA."	1a. XLVI/2016 (10a.)	684
Ley de Amparo, artículos 111 a 113.—Véase: "RECURSO DE QUEJA CONTRA EL DESECHAMIENTO DE LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA. QUEDA SIN MATERIA SI SE DICTA SENTENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO DE ORIGEN."	XV.5o.7 K (10a.)	2126
Ley de Amparo, artículos 112 y 113.—Véase: "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO SOBRE LA BASE DE QUE SE ACTUALIZA UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE ES ILEGAL, SI DEL AUTO RESPECTIVO SE ADVIERTE QUE EL JUEZ FEDERAL CONSTRUYÓ SU DETERMINACIÓN A PARTIR DE UNA INEXACTA PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS QUE REVELA SU OMISIÓN DE PREVENIR AL QUEJOSO PARA QUE ACLARE SU OCURSO."	I.1o.A.30 K (10a.)	2057
Ley de Amparo, artículos 125 a 147.—Véase: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA. PARA TRAMITAR LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN O REVOCACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PROCEDER EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 154 DE LA LEY DE AMPARO."	I.13o.T.19 K (10a.)	2187
Ley de Amparo, artículos 192 y 193 (abrogada).—Véase: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA."	2a./J. 10/2016 (10a.)	705

	Número de identificación	Pág.
Ley de Catastro Municipal de Jalisco, artículo 4o., fracción XXIII.—Véase: "TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, CONTENIDAS EN LOS DECRETOS NÚMEROS 24646/LX/13 Y 23711/LIX/11. LOS PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL ELEMENTO RELATIVO A LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRAN EN LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DE ESE ESTADO Y EL HECHO DE QUE LA DEFINICIÓN DE AQUÉLLOS ESTÉ EN EL REGLAMENTO DE ÉSTA, SÓLO IMPLICA QUE LOS DESARROLLA A DETALLE, POR LO QUE NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA."	PC.III.A. J/12 A (10a.)	1843
Ley de Catastro Municipal de Jalisco, artículo 58.—Véase: "TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, CONTENIDAS EN LOS DECRETOS NÚMEROS 24646/LX/13 Y 23711/LIX/11. LOS PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL ELEMENTO RELATIVO A LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRAN EN LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DE ESE ESTADO Y EL HECHO DE QUE LA DEFINICIÓN DE AQUÉLLOS ESTÉ EN EL REGLAMENTO DE ÉSTA, SÓLO IMPLICA QUE LOS DESARROLLA A DETALLE, POR LO QUE NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA."	PC.III.A. J/12 A (10a.)	1843
Ley de Ejecución de Sanciones Penales del Distrito Federal, artículo 50 (abrogada).—Véase: "REMI-SIÓN PARCIAL DE LA PENA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER ESTE BENEFICIO TRATÁNDOSE DE SENTENCIADOS POR EL DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (SECUESTRO), DE ACUERDO A LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES PARA EL DISTRITO FEDERAL ACTUALMENTE ABROGADA, HASTA ANTES DE LA REFORMA A SU		

	Número de identificación	Pág.
ARTÍCULO 50, PUBLICADA EN LA GACETA OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 4 DE JUNIO DE 2004."	PC.I.P. J/19 P (10a.)	1733
Ley de Ejecución de Sanciones Penales y Reinserción Social del Distrito Federal, artículo 39.—Véase: "REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER ESTE BENEFICIO A LOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (SECUESTRO), EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE NO TIENE APLICACIÓN RETROACTIVA EN SU BENEFICIO LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL."	PC.I.P. J/20 P (10a.)	1732
Ley de Hacienda de Nuevo León, artículo 160, fracción II.—Véase: "IMPUESTO SOBRE NÓMINAS. EL ARTÍCULO 160, FRACCIÓN II, INCISO D), DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN, QUE PREVE LA EXENCIÓN DE SU PAGO A LAS EROGACIONES QUE EFECTÚEN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUITAD TRIBUTARIA."	PC.IV.A. J/21 A (10a.)	1320
Ley de Instituciones de Crédito, artículo 106, fracción VI (vigente hasta el 1o. de febrero de 2008).—Véase: "VALOR AGREGADO. EL TRATAMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES INAPLICABLE A LOS INTERESES DERIVADOS DE LOS PRÉSTAMOS OTORGADOS POR INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE A SUS TRABAJADORES, ACORDE CON SUS		

	Número de identificación	Pág.
CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005)."	1a. XLI/2016 (10a.)	689
Ley de Justicia Administrativa de Quintana Roo, artículo 63, fracción III.—Véase: "INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO. EL ARTÍCULO 63, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO DE QUINTANA ROO SE REFIERE A AMBOS, COMO CONDICIÓN PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD."	XXVII.3o.22 A (10a.)	2082
Ley de Justicia Alternativa de Jalisco, artículo 5o.—Véase: "ANTECEDENTES PENALES. NO LOS CONSTITUYEN LOS REGISTROS CORRESPONDIENTES DE CAUSAS PENALES QUE SE ACUMULARON, POR LO QUE DEBE CONSIDERARSE AL INCUPLADO COMO DELINCUENTE PRIMARIO PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE LOS MÉTODOS ALTERNOS CONTEMPLADOS EN LA LEY DE JUSTICIA ALTERNATIVA DEL ESTADO DE JALISCO."	III.2o.P92 P (10a.)	2024
Ley de la Propiedad Industrial, artículo 79.—Véase: "PATENTE. LA DESTRUCCIÓN RETROACTIVA DE SUS EFECTOS, EN RAZÓN DE SU ANULACIÓN, SE LIMITA RESPECTO DEL DERECHO DE EXCLUSIÓN QUE OTORGA Y, POR TANTO, NO ELIMINA LA PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD DE SU EXPLOTACIÓN COMERCIAL MIENTRAS ESTUVO VIGENTE."	I.1o.A.121 A (10a.)	2105
Ley de la Propiedad Industrial, artículo 93.—Véase: "MARCA. SU REGISTRO AMPARA ÚNICAMENTE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DE FORMA EXPRESA Y ESPECÍFICA REFIERE SU TÍTULO."	I.1o.A.120 A (10a.)	2096
Ley de la Propiedad Industrial, artículo 113, fracción IV.—Véase: "MARCA. SU REGISTRO AMPARA		

	Número de identificación	Pág.
ÚNICAMENTE LOS PRODUCTOS O SERVICIOS QUE DE FORMA EXPRESA Y ESPECÍFICA REFIERE SU TÍTULO."	I.1o.A.120 A (10a.)	2096
Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación, artículo 1o.—Véase: "IMPUESTOS GENERALES DE IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN. EL ARTÍCULO 1o. DE LA LEY RELATIVA NO CONTRA- VIENE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA."	1a. XXVIII/2016 (10a.)	677
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, artículo 34, fracción VI.—Véase: "TRA- BAJADORES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA. TRATÁNDOSE DE APORTACIONES DE VIVIENDA, LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE PUEBLA Y LA DEL INSTI- TUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PO- DERES DE DICHA ENTIDAD, PREVÉN LA FORMA Y EL ORGANISMO ANTE EL QUE DEBERÁN REALI- ZARSE, POR LO QUE SON INAPLICABLES, SU- PLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES."	VI.2o.T.9 L (10a.)	2230
Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, artículo 85.—Véase: "DEMANDA LABORAL. EL REQUERIMIENTO DEL TRIBUNAL DE ARBI- TRAJE PARA QUE EL PROMOVENTE ACREDITE SU IDENTIDAD, BAJO EL APERCIBIMIENTO DE TENERLA POR NO INTERPUESTA, ES ILEGAL Y CON- TRARÍA EL DERECHO HUMANO DE ACCESO A LA JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)."	VI.1o.T. J/2 (10a.)	1953
Ley de Movilidad del Distrito Federal, artículo 2.— Véase: "ROBO CALIFICADO. LA AGRAVANTE PRE- VISTA EN EL ARTÍCULO 224, FRACCIÓN III, DEL		

	Número de identificación	Pág.
CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE ACTUALIZA AUNQUE EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO NO ESTÉ PRESTANDO EL SERVICIO A QUE ESTÁ DESTINADO."	PC.I.P. J/18 P (10a.)	1764
Ley de Movilidad del Distrito Federal, artículo 5.— Véase: "ROBO CALIFICADO. LA AGRAVANTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 224, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL, SE ACTUALIZA AUNQUE EL VEHÍCULO DE TRANSPORTE PÚBLICO NO ESTÉ PRESTANDO EL SERVICIO A QUE ESTÁ DESTINADO."	PC.I.P. J/18 P (10a.)	1764
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, artículo 213, fracción IV.—Véase: "PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL DISTRITO FEDERAL. LA INCOMPATIBILIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 213, FRACCIÓN IV, DE LA LEY RELATIVA IMPLICA RESPONSABILIDAD SÓLO PARA EL REPRESENTANTE CIUDADANO Y NO PARA EL SERVIDOR PÚBLICO."	I.1o.A.118 A (10a.)	2105
Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable de Nuevo León, artículo 86, fracción I.—Véase: "TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, AL EXIGIR LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, TRANSGREDE EL DERECHO FUNDAMENTAL A LA LIBERTAD DE TRABAJO [ABANDONO DE LA TESIS IV.2o.A.80 A (10a.)]."	IV.2o.A.4 CS (10a.)	2231
Ley de Transporte para la Movilidad Sustentable de Nuevo León, artículo 86, fracción I.—Véase: "TRANSPORTE PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE DEL		

	Número de identificación	Pág.
ESTADO DE NUEVO LEÓN. EL ARTÍCULO 86, FRACCIÓN I, INCISO E), DE LA LEY RELATIVA, AL EXIGIR LA PRESENTACIÓN DE LA CARTA DE NO ANTECEDENTES PENALES COMO REQUISITO PARA OBTENER LA LICENCIA ESPECIAL PARA LA CONDUCCIÓN DE LOS VEHÍCULOS AFECTOS A LOS SISTEMAS Y MODALIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE TRANSPORTE, TRANSGREDE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN Y EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL [ABANDONO DE LAS TESIS IV.2o.A.78 A (10a.) Y IV.2o.A.81 A (10a.)]."	IV.2o.A.3 CS (10a.)	2233
Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículo 1o.-A, fracción II.—Véase: "IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA OBLIGACIÓN A CARGO DE LAS PERSONAS MORALES DE RETENER EL TRIBUTO QUE SE LES TRASLADA POR LA ADQUISICIÓN DE DESPERDICIOS PARA SER UTILIZADOS COMO INSUMO DE SU ACTIVIDAD INDUSTRIAL O PARA SU COMERCIALIZACIÓN, ES EXIGIBLE TRATÁNDOSE DE METALES PUESTOS EN CONDICIONES DE REUTILIZACIÓN."	I.1o.A.123 A (10a.)	2074
Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículo 18-A (vigente en 2005).—Véase: "VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005)."	1a. XLIII/2016 (10a.)	687
Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículo 18-A (vigente en 2005).—Véase: "VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005)."	1a. XLII/2016 (10a.)	688
Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículo 18-A (vigente en 2005).—Véase: "VALOR AGREGADO.		

	Número de identificación	Pág.
EL TRATAMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES INAPLICABLE A LOS INTERESES DERIVADOS DE LOS PRÉSTAMOS OTORGADOS POR INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE A SUS TRABAJADORES, ACORDE CON SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005)."	1a. XLI/2016 (10a.)	689
Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 8o. (abrogada).—Véase: "VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005)."	1a. XLIII/2016 (10a.)	687
Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 8o. (abrogada).—Véase: "VALOR AGREGADO. EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005)."	1a. XLII/2016 (10a.)	688
Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 8o. (abrogada).—Véase: "VALOR AGREGADO. EL TRATAMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 18-A DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, ES INAPLICABLE A LOS INTERESES DERIVADOS DE LOS PRÉSTAMOS OTORGADOS POR INSTITUCIONES DE BANCA MÚLTIPLE A SUS TRABAJADORES, ACORDE CON SUS CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2005)."	1a. XLI/2016 (10a.)	689
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de Puebla, artículo 5.—Véase: "TRABAJADORES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA. TRATÁNDOSE DE APORTACIONES DE VIVIENDA, LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE PUEBLA Y LA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD		

	Número de identificación	Pág.
Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DE DICHA ENTIDAD, PREVÉN LA FORMA Y EL ORGANISMO ANTE EL QUE DEBERÁN REALIZARSE, POR LO QUE SON INAPLICABLES, SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES."	VI.2o.T.9 L (10a.)	2230
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de Puebla, artículo 12, fracción II.—Véase: "TRABAJADORES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA. TRATÁNDOSE DE APORTACIONES DE VIVIENDA, LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE PUEBLA Y LA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DE DICHA ENTIDAD, PREVÉN LA FORMA Y EL ORGANISMO ANTE EL QUE DEBERÁN REALIZARSE, POR LO QUE SON INAPLICABLES, SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES."	VI.2o.T.9 L (10a.)	2230
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio de los Poderes de Puebla, artículo 143.—Véase: "TRABAJADORES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA. TRATÁNDOSE DE APORTACIONES DE VIVIENDA, LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE PUEBLA Y LA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DE DICHA ENTIDAD, PREVÉN LA FORMA Y EL ORGANISMO ANTE EL QUE DEBERÁN REALIZARSE, POR LO QUE SON INAPLICABLES, SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LA LEY DEL INSTITUTO DEL		

	Número de identificación	Pág.
FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES."	VI.2o.T.9 L (10a.)	2230
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, artículo 136 (vigente hasta el 2 de enero de 1981).—Véase: "PENSIONES DEL ISSSTE. EL INCREMENTO DE LAS QUE FUERON OTORGADAS AL AMPARO DE LA LEY DE 1959 DEBE ATENDER, PRIMERAMENTE, A LA MECÁNICA DE AUMENTO SEXENAL Y, A PARTIR DE LA REFORMA A SU ARTÍCULO 136, A LA VARIACIÓN DE LOS SUELDOS DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO."	I.1o.A.125 A (10a.)	2108
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores, artículo 136 (vigente hasta el 31 de diciembre de 1983).—Véase: "PENSIONES DEL ISSSTE. EL INCREMENTO DE LAS QUE FUERON OTORGADAS AL AMPARO DE LA LEY DE 1959 DEBE ATENDER, PRIMERAMENTE, A LA MECÁNICA DE AUMENTO SEXENAL Y, A PARTIR DE LA REFORMA A SU ARTÍCULO 136, A LA VARIACIÓN DE LOS SUELDOS DE LOS TRABAJADORES EN ACTIVO."	I.1o.A.125 A (10a.)	2108
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículo 15 (vigente hasta el 31 de marzo de 2007).—Véase: "PENSIÓN POR VIUDEZ. PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A AQUÉLLA CON FUNDAMENTO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 97/2012 (10a.) (*)."	2a./J. 3/2016 (10a.)	947
Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, artículo 51 (vigente hasta el 31 de marzo de 2007).—Véase: "PENSIÓN POR VIUDEZ. PROCEDENCIA DE LA DEVOLUCIÓN DE LOS DESCUENTOS REALIZADOS A AQUÉLLA CON		

	Número de identificación	Pág.
FUNDAMENTO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 97/2012 (10a.) (*)."	2a./J. 3/2016 (10a.)	947
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, artículo 42.—Véase: "INFO-NAVIT. LA REGLA DÉCIMA PRIMERA DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DEL CITADO INSTITUTO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA TUTELADO POR EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."	I.1o.A.7 CS (10a.)	2079
Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, artículo 47.—Véase: "INFO-NAVIT. ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO."	I.1o.A.29 K (10a.)	2079
Ley del Notariado de Querétaro, artículo 8.—Véase: "AMPARO CONTRA LEYES. EL RECIBO DE PAGO DE CONTRIBUCIONES QUE, POR DISPOSICIÓN LEGAL, DEBE RETENER EL NOTARIO PÚBLICO, ES EFICAZ PARA ESTABLECER LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO DE APLICACIÓN DE LAS NORMAS E INICIAR EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO EN SU CONTRA, SALVO QUE SE DEMUESTRE FEHACIENTEMENTE QUE LA QUEJOSA TUVO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN CON POSTERIORIDAD."	PC.XXII. J/5 A (10a.)	1062
Ley del Notariado de Tabasco, artículo 11.—Véase: "NOTARIOS PÚBLICOS. SU FALLECIMIENTO TRAE COMO CONSECUENCIA NECESARIA, INMEDIATA Y DIRECTA LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL CON LOS TRABAJADORES QUE UTILIZABAN PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA NOTARIAL, SIN QUE PUEDA CONSIDERARSE QUE DEBA CONTINUAR CON LA SUCESIÓN		

	Número de identificación	Pág.
DEL <i>DE CUJUS</i> , O CON EL NOTARIO QUE SE DESIGNE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO)."	(IV Región)2o.12 L (10a.)	2101
Ley del Seguro Social, artículo 33 (derogada).—Véase: "PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. AL RESOLVER LA JUNTA SOBRE EL AJUSTE EN LA CUANTIFICACIÓN DE SU PAGO, DEBE ATENDER EL LÍMITE SUPERIOR PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, SIN QUE REPRESENTE OBSTÁCULO ALGUNO QUE EL DEMANDADO NO SE HUBIERE EXCEPCIONADO EN ESE SENTIDO."	2a./J. 8/2016 (10a.)	913
Ley del Seguro Social, artículo 138, fracciones I a V.—Véase: "AYUDA ASISTENCIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 138, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE Y 164, FRACCIÓN IV, DE LA ABROGADA. CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LA CARGA PROBATORIA EN EL JUICIO LABORAL CUANDO SE DEMANDA SU OTORGAMIENTO."	PC.VI.L. J/2 L (10a.)	1177
Ley del Seguro Social, artículo 147 (derogada).—Véase: "PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. SI SU MONTO SE CALCULA CON BASE EN EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO, ES IMPROCEDENTE INCLUIR EL CONCEPTO DE AYUDAS ASISTENCIALES, AL ENCONTRARSE COMPRENDIDO EN AQUÉL (ARTÍCULO 168 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997)."	IV.4o.T.1 L (10a.)	2106
Ley del Seguro Social, artículo 164, fracciones I a V (abrogada).—Véase: "AYUDA ASISTENCIAL PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 138, FRACCIÓN IV, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE Y 164, FRACCIÓN IV, DE LA ABROGADA. CORRESPONDE AL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL LA CARGA		

	Número de identificación	Pág.
PROBATORIA EN EL JUICIO LABORAL CUANDO SE DEMANDA SU OTORGAMIENTO."	PC.VI.L. J/2 L (10a.)	1177
Ley del Seguro Social, artículos 167 y 168 (derogada).— Véase: "PENSIÓN DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. SI SU MONTO SE CALCULA CON BASE EN EL SALARIO MÍNIMO GENERAL VIGENTE PARA EL DISTRITO FEDERAL EN LA FECHA DE SU OTORGAMIENTO, ES IMPROCEDENTE INCLUIR EL CONCEPTO DE AYUDAS ASISTENCIALES, AL ENCONTRARSE COMPRENDIDO EN AQUÉL (ARTÍCULO 168 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997)."	IV.4o.T.1 L (10a.)	2106
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 5.—Véase: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. JUSTIFICACIÓN EN LA DIFERENCIA DE TRATO ENTRE LOS DE CONFIANZA PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LOS DE BASE."	2a./J. 21/2016 (10a.)	833
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 8.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. JUSTIFICACIÓN EN LA DIFERENCIA DE TRATO ENTRE LOS PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LOS DE LIBRE DESIGNACIÓN."	2a./J. 19/2016 (10a.)	839
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 9.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ALCANCE DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD Y PERMANENCIA EN EL CARGO DENTRO		

	Número de identificación	Pág.
DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL."	2a./J. 20/2016 (10a.)	834
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 10, fracción X.— Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY RELATIVA, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y 20 DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS."	2a./J. 23/2016 (10a.)	842
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 10, fracciones I, II y X.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ALCANCE DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD Y PERMANENCIA EN EL CARGO DENTRO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL."	2a./J. 20/2016 (10a.)	834
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 11.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ALCANCE DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD Y PERMANENCIA EN EL CARGO DENTRO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL."	2a./J. 20/2016 (10a.)	834
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 11, fracciones III a V.—Véase: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. JUSTIFICACIÓN EN LA DIFERENCIA DE TRATO ENTRE LOS DE CONFIANZA PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LOS DE BASE."	2a./J. 21/2016 (10a.)	833

	Número de identificación	Pág.
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 13, fracción VI.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ALCANCE DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD Y PERMANENCIA EN EL CARGO DENTRO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL."	2a./J. 20/2016 (10a.)	834
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 35.—Véase: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. JUSTIFICACIÓN EN LA DIFERENCIA DE TRATO ENTRE LOS DE CONFIANZA PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LOS DE BASE."	2a./J. 21/2016 (10a.)	833
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 39.—Véase: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. JUSTIFICACIÓN EN LA DIFERENCIA DE TRATO ENTRE LOS DE CONFIANZA PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LOS DE BASE."	2a./J. 21/2016 (10a.)	833
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 60.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. DIFERENCIA ENTRE LOS PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LOS DE LIBRE DESIGNACIÓN."	2a./J. 18/2016 (10a.)	837
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 63.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ALCANCE DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD Y PERMANENCIA EN EL CARGO DENTRO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL."	2a./J. 20/2016 (10a.)	834

	Número de identificación	Pág.
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículo 75, fracción IX.— Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ALCANCE DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD Y PERMANENCIA EN EL CARGO DENTRO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL."	2a./J. 20/2016 (10a.)	834
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículos 4 a 6.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ALCANCE DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD Y PERMANENCIA EN EL CARGO DENTRO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL."	2a./J. 20/2016 (10a.)	834
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículos 44 a 46.—Véase: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. JUSTIFICACIÓN EN LA DIFERENCIA DE TRATO ENTRE LOS DE CONFIANZA PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LOS DE BASE."	2a./J. 21/2016 (10a.)	833
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículos 53 a 55.—Véase: "TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. JUSTIFICACIÓN EN LA DIFERENCIA DE TRATO ENTRE LOS DE CONFIANZA PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL Y LOS DE BASE."	2a./J. 21/2016 (10a.)	833
Ley del Servicio Profesional de Carrera en la Administración Pública Federal, artículos 59 y 60.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. ALCANCE DEL DERECHO A LA ESTABILIDAD Y PERMANENCIA EN EL CARGO DENTRO DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL."	2a./J. 20/2016 (10a.)	834

	Número de identificación	Pág.
Ley Federal de Competencia Económica, artículo 9o. (abrogada).—Véase: "REDUCCIÓN DE SANCIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 33 BIS 3 DE LA ABROGADA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. ES NOTORIA LA IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RELATIVA, INTERPUESTA POR PERSONA DISTINTA DEL BENEFICIADO."	I.1o.A.E.112 A (10a.)	2132
Ley Federal de Competencia Económica, artículo 12 (abrogada).—Véase: "MERCADO RELEVANTE. SU DETERMINACIÓN A PARTIR DE LA PRUEBA DE INTERCAMBIABILIDAD RAZONABLE, CON BASE EN EL EXAMEN DE ELASTICIDAD DE LA DEMANDA Y DE LA OFERTA (LEGISLACIÓN ABROGADA)."	I.1o.A.E.120 A (10a.)	2098
Ley Federal de Competencia Económica, artículo 13 (abrogada).—Véase: "COMPETENCIA ECONÓMICA. CONCEPTO DE 'PODER SUSTANCIAL' EN ESA MATERIA."	I.1o.A.E.122 A (10a.)	2036
Ley Federal de Competencia Económica, artículo 30 (abrogada).—Véase: "REDUCCIÓN DE SANCIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 33 BIS 3 DE LA ABROGADA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. ES NOTORIA LA IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RELATIVA, INTERPUESTA POR PERSONA DISTINTA DEL BENEFICIADO."	I.1o.A.E.112 A (10a.)	2132
Ley Federal de Competencia Económica, artículo 33 bis, fracción I (abrogada).—Véase: "COMPETENCIA ECONÓMICA. LA EXIGENCIA DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN QUE PERMITA DETERMINAR EL MERCADO RELEVANTE Y EL PODER SUSTANCIAL DE		

	Número de identificación	Pág.
UN DETERMINADO AGENTE ECONÓMICO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 33 BIS, FRACCIÓN I, DE LA ABROGADA LEY FEDERAL RELATIVA, NO IMPLICA QUE AMBOS ELEMENTOS SE DEFINIRÁN, EXCLUSIVAMENTE, CON LA INFORMACIÓN Y LAS PRUEBAS APORTADAS POR EL SOLICITANTE."	I.1o.A.E.117 A (10a.)	2038
Ley Federal de Competencia Económica, artículo 33 bis 3 (abrogada).—Véase: "REDUCCIÓN DE SANCIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 33 BIS 3 DE LA ABROGADA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. ES NOTORIA LA IMPROCEDENCIA DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN RELATIVA, INTERPUESTA POR PERSONA DISTINTA DEL BENEFICIADO."	I.1o.A.E.112 A (10a.)	2132
Ley Federal de Competencia Económica, artículo 33 bis 3 (abrogada).—Véase: "REDUCCIÓN DE SANCIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 33 BIS 3 DE LA ABROGADA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. RELEVANCIA DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA IDENTIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS QUE SOLICITEN ACOGERSE A ESE BENEFICIO."	I.1o.A.E.113 A (10a.)	2134
Ley Federal de Competencia Económica, artículo 34 bis 2 (abrogada).—Véase: "COMPETENCIA ECONÓMICA. EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 34 BIS 2 DE LA ABROGADA LEY FEDERAL RELATIVA PARA QUE LA COMISIÓN FEDERAL EN LA MATERIA RECABE INFORMACIÓN DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PUEDE PRORROGARSE, SIEMPRE QUE SEA POR CAUSA JUSTIFICADA Y NO EXCEDA EL LAPSO PARA CONCLUIR LA INVESTIGACIÓN."	I.1o.A.E.118 A (10a.)	2037

	Número de identificación	Pág.
Ley Federal de Competencia Económica, artículos 12 y 13 (abrogada).—Véase: "COMPETENCIA ECONÓMICA. LA EXIGENCIA DE PRESENTAR LA INFORMACIÓN QUE PERMITA DETERMINAR EL MERCADO RELEVANTE Y EL PODER SUSTANCIAL DE UN DETERMINADO AGENTE ECONÓMICO, ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 33 BIS, FRACCIÓN I, DE LA ABROGADA LEY FEDERAL RELATIVA, NO IMPLICA QUE AMBOS ELEMENTOS SE DEFINIRÁN, EXCLUSIVAMENTE, CON LA INFORMACIÓN Y LAS PRUEBAS APORTADAS POR EL SOLICITANTE."	I.1o.A.E.117 A (10a.)	2038
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 51, fracción IV.—Véase: "REVISIÓN FISCAL. DICHO RECURSO ES IMPROCEDENTE CONTRA SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA QUE DECLAREN LA NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA POR VICIOS FORMALES, AUN CUANDO SE SUSTENTEN EN LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 51 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (APLICACIÓN DE LAS JURISPRUDENCIAS 2a./J. 150/2010 Y 2a./J. 88/2011)."	XVI.1o.A. J/24 (10a.)	1993
Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, artículo 58, fracción II.—Véase: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. ES OPTATIVO PARA LA PARTE ACTORA HACER VALER LA QUEJA REGULADA EN EL ARTÍCULO 58 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO."	I.1o.A.32 K (10a.)	2051
Ley Federal de Telecomunicaciones, artículo 9-A, fracción XI (abrogada).—Véase: "TELECOMUNICACIONES. LAS DISPOSICIONES QUE PREVÉN LA FACULTAD DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE LA EXTINTA COMISIÓN FEDERAL RELATIVA PARA IMPONER OBLIGACIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON TARIFAS, CALIDAD		

	Número de identificación	Pág.
DEL SERVICIO E INFORMACIÓN A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE LA MATERIA QUE TENGAN PODER SUSTANCIAL EN ALGÚN MERCADO RELEVANTE, CORRESPONDEN A UNA 'REGLA QUE CONFIERE PODERES'."	I.1o.A.E.115 A (10a.)	2226
Ley Federal de Telecomunicaciones, artículo 63 (abrogada).—Véase: "TELECOMUNICACIONES. LAS DISPOSICIONES QUE PREVÉN LA FACULTAD DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE LA EXTINTA COMISIÓN FEDERAL RELATIVA PARA IMPONER OBLIGACIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON TARIFAS, CALIDAD DEL SERVICIO E INFORMACIÓN A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE LA MATERIA QUE TENGAN PODER SUSTANCIAL EN ALGÚN MERCADO RELEVANTE, CORRESPONDEN A UNA 'REGLA QUE CONFIERE PODERES'."	I.1o.A.E.115 A (10a.)	2226
Ley Federal del Trabajo, artículo 48.—Véase: "INTERÉS DEL 2% MENSUAL. LA BASE DE SU CÁLCULO HA DE OBTENERSE CONSIDERANDO EL SALARIO INTEGRADO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012)."	XXVII.3o.25 L (10a.)	2082
Ley Federal del Trabajo, artículo 48.—Véase: "INTERÉS PREVISTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. AL TENER LA MISMA NATURALEZA DE LOS SALARIOS CAÍDOS, PARA SU CONDENA NO SE REQUIERE RECLAMARLO EXPRESAMENTE EN LA DEMANDA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012)."	XXVII.3o.24 L (10a.)	2083
Ley Federal del Trabajo, artículo 48.—Véase: "INTERÉS PREVISTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. FORMA DE CUMPLIR SU CONDENA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012)."	XXVII.3o.31 L (10a.)	2084

	Número de identificación	Pág.
Ley Federal del Trabajo, artículo 48.—Véase: "INTERÉS PREVISTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. HIPÓTESIS EN LAS QUE PROCEDE SU CONDENA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012)."	XXVII.3o.26 L (10a.)	2086
Ley Federal del Trabajo, artículo 49.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY RELATIVA, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y 20 DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS."	2a./J. 23/2016 (10a.)	842
Ley Federal del Trabajo, artículo 50, fracción II.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO PERTENECIENTES AL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL. LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 10, FRACCIÓN X, DE LA LEY RELATIVA, COMPRENDE EL PAGO DE 3 MESES DE SUELDO Y 20 DÍAS DE SALARIO POR CADA AÑO DE SERVICIOS PRESTADOS."	2a./J. 23/2016 (10a.)	842
Ley Federal del Trabajo, artículo 80.—Véase: "PRIMA VACACIONAL. ES UNA PRESTACIÓN LEGAL Y CORRESPONDE AL PATRÓN DEMOSTRAR SU MONTO Y PAGO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD RECLAMADA."	XXVII.3o.27 L (10a.)	2112
Ley Federal del Trabajo, artículo 84.—Véase: "PRIMA VACACIONAL. ES UNA PRESTACIÓN LEGAL Y CORRESPONDE AL PATRÓN DEMOSTRAR SU MONTO Y PAGO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA CANTIDAD RECLAMADA."	XXVII.3o.27 L (10a.)	2112

	Número de identificación	Pág.
Ley Federal del Trabajo, artículo 84.—Véase: "SALARIO BRUTO. LAS CONDENAS EN LOS LAUDOS DEBEN EFECTUARSE CON BASE EN AQUÉL."	XVI.1o.T.23 L (10a.)	2139
Ley Federal del Trabajo, artículo 97, fracciones I y III.—Véase: "SALARIO BRUTO. LAS CONDENAS EN LOS LAUDOS DEBEN EFECTUARSE CON BASE EN AQUÉL."	XVI.1o.T.23 L (10a.)	2139
Ley Federal del Trabajo, artículo 136.—Véase: "FONDO DE HABITACIÓN Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES ELECTRICISTAS. LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD ESTÁ EXENTA DE PAGAR LAS APORTACIONES PATRIMONIALES AL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES, SALVO QUE SE ACREDITE QUE LA PRESTACIÓN DERIVADA DE AQUÉL ES INFERIOR AL 5%."	PC.I.L. J/15 L (10a.)	1235
Ley Federal del Trabajo, artículo 434, fracción I.—Véase: "NOTARIOS PÚBLICOS. SU FALLECIMIENTO TRAE COMO CONSECUENCIA NECESARIA, INMEDIATA Y DIRECTA LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL CON LOS TRABAJADORES QUE UTILIZABAN PARA EL DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA NOTARIAL, SIN QUE PUEDA CONSIDERARSE QUE DEBA CONTINUAR CON LA SUCESIÓN DEL <i>DE CUJUS</i> , O CON EL NOTARIO QUE SE DESIGNE (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO)."	(IV Región)2o.12 L (10a.)	2101
Ley Federal del Trabajo, artículo 685 (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMAS. ES INTRASCENDENTE Y NO AMERITA CONCEDER EL AMPARO SOLICITADO, EL HECHO DE QUE LA JUNTA LABORAL LO ADMITA Y SUSTANCIE CON UNA DENOMINACIÓN DIVERSA, SI FINALMENTE RESUELVE LAS PRETENSIONES DE LAS PARTES."	III.1o.T.27 L (10a.)	2075

	Número de identificación	Pág.
Ley Federal del Trabajo, artículo 685 (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL. ES VÁLIDO SU DESAHOGO A TRAVÉS DEL USO DE AVANCES TECNOLÓGICOS (VIDEOCONFERENCIA)."	III.1o.T.28 L (10a.)	2119
Ley Federal del Trabajo, artículo 701.—Véase: "CONFLICTO COMPETENCIAL. CORRESPONDE DIRIMIRLO A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO SE SUSCITA ENTRE UNA DE SUS SALAS REGIONALES Y UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN."	XVI.1o.T.24 L (10a.)	2044
Ley Federal del Trabajo, artículo 705, fracción III.—Véase: "CONFLICTO COMPETENCIAL. CORRESPONDE DIRIMIRLO A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO SE SUSCITA ENTRE UNA DE SUS SALAS REGIONALES Y UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN."	XVI.1o.T.24 L (10a.)	2044
Ley Federal del Trabajo, artículo 721.—Véase: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE DEJAR CÉDULA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 751 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES INSUFICIENTE LA MENCIÓN 'ANOTO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN' EN EL ACTA CORRESPONDIENTE."	III.3o.T.34 L (10a.)	2068
Ley Federal del Trabajo, artículo 735.—Véase: "INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMAS. PUEDE PLANTEARSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO LABORAL, INCLUSO ANTES DE LA CONCILIATORIA."	III.1o.T.26 L (10a.)	2076
Ley Federal del Trabajo, artículo 744.—Véase: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE DEJAR CÉDULA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 751 DE LA LEY FE-		

	Número de identificación	Pág.
DERAL DEL TRABAJO, ES INSUFICIENTE LA MENCIÓN 'ANOTO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN' EN EL ACTA CORRESPONDIENTE."	III.3o.T.34 L (10a.)	2068
Ley Federal del Trabajo, artículo 751.—Véase: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL, PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE DEJAR CÉDULA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 751 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES INSUFICIENTE LA MENCIÓN 'ANOTO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN' EN EL ACTA CORRESPONDIENTE."	III.3o.T.34 L (10a.)	2068
Ley Federal del Trabajo, artículo 763 (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMAS. PUEDE PLANTEARSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO LABORAL, INCLUSO ANTES DE LA CONCILIATORIA."	III.1o.T.26 L (10a.)	2076
Ley Federal del Trabajo, artículo 764.—Véase: "INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMAS. PUEDE PLANTEARSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO LABORAL, INCLUSO ANTES DE LA CONCILIATORIA."	III.1o.T.26 L (10a.)	2076
Ley Federal del Trabajo, artículo 765 (vigente hasta el 30 de noviembre).—Véase: "INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMAS. PUEDE PLANTEARSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO LABORAL, INCLUSO ANTES DE LA CONCILIATORIA."	III.1o.T.26 L (10a.)	2076
Ley Federal del Trabajo, artículo 776 (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL. ES VÁLIDO SU DESAHOGO A TRAVÉS DEL USO DE AVANCES TECNOLÓGICOS (VIDEOCONFERENCIA)."	III.1o.T.28 L (10a.)	2119
Ley Federal del Trabajo, artículo 780.—Véase: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. PARA SU AD-		

	Número de identificación	Pág.
MISIÓN ES INNECESARIO QUE EL OFERENTE SEÑALE EL NOMBRE DEL PERITO Y SU IDENTIDAD."	XXVII.3o.28 L (10a.)	2117
Ley Federal del Trabajo, artículo 821.—Véase: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. PARA SU ADMISIÓN ES INNECESARIO QUE EL OFERENTE SEÑALE EL NOMBRE DEL PERITO Y SU IDENTIDAD."	XXVII.3o.28 L (10a.)	2117
Ley Federal del Trabajo, artículo 825, fracción IV (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "PRUEBA PERICIAL EN MATERIA LABORAL. ES VÁLIDO SU DESAHOGO A TRAVÉS DEL USO DE AVANCES TECNOLÓGICOS (VIDEOCONFERENCIA)."	III.1o.T.28 L (10a.)	2119
Ley Federal del Trabajo, artículo 842.—Véase: "PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. AL RESOLVER LA JUNTA SOBRE EL AJUSTE EN LA CUANTIFICACIÓN DE SU PAGO, DEBE ATENDER EL LÍMITE SUPERIOR PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO DE 1997, SIN QUE REPRESENTA OBSTÁCULO ALGUNO QUE EL DEMANDADO NO SE HUBIERE EXCEPCIONADO EN ESE SENTIDO."	2a./J. 8/2016 (10a.)	913
Ley Federal del Trabajo, artículo 843.—Véase: "INTERÉS PREVISTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. FORMA DE CUMPLIR SU CONDENA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012)."	XXVII.3o.31 L (10a.)	2084
Ley Federal del Trabajo, artículo 878, fracción IV.—Véase: "PENSIÓN POR CESANTÍA EN EDAD AVANZADA. AL RESOLVER LA JUNTA SOBRE EL AJUSTE EN LA CUANTIFICACIÓN DE SU PAGO, DEBE ATENDER EL LÍMITE SUPERIOR PREVISTO EN EL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO 33 DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL, VIGENTE HASTA EL 30 DE JUNIO		

	Número de identificación	Pág.
DE 1997, SIN QUE REPRESENTE OBSTÁCULO ALGUNO QUE EL DEMANDADO NO SE HUBIERE EXCEPCIONADO EN ESE SENTIDO."	2a./J. 8/2016 (10a.)	913
Ley Federal del Trabajo, artículo 885.—Véase: "DESAHOGO DE PRUEBAS EN EL JUICIO LABORAL. SI EN EL TÉRMINO DE LA VISTA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 885 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO NO SE HACEN VALER LAS VIOLACIONES RELATIVAS A LOS MEDIOS PROBATORIOS ADMITIDOS (DESISTIMIENTO DEL COTEJO Y CERTIFICACIÓN), PRECLUYE EL DERECHO PARA PLANTEARLAS."	I.13o.T.142 L (10a.)	2062
Ley Federal del Trabajo, artículo 945.—Véase: "INTERÉS PREVISTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. FORMA DE CUMPLIR SU CONDENA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012)."	XXVII.3o.31 L (10a.)	2084
Ley Federal del Trabajo, artículo 945.—Véase: "INTERÉS PREVISTO EN EL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 48 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. HIPÓTESIS EN LAS QUE PROCEDE SU CONDENA (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 1o. DE DICIEMBRE DE 2012)."	XXVII.3o.26 L (10a.)	2086
Ley Federal del Trabajo, artículos 82 y 83.—Véase: "SALARIOS CAÍDOS. FORMA DE COMPUTARLOS CONFORME AL PLAZO FIJADO PARA EL PAGO DEL SUELDO."	I.13o.T.139 L (10a.)	2163
Ley Federal del Trabajo, artículos 88 y 89.—Véase: "SALARIOS CAÍDOS. FORMA DE COMPUTARLOS CONFORME AL PLAZO FIJADO PARA EL PAGO DEL SUELDO."	I.13o.T.139 L (10a.)	2163
Ley Federal del Trabajo, artículos 742 y 743 (vigente hasta el 30 de noviembre de 2012).—Véase: "EMPLA-		

	Número de identificación	Pág.
ZAMIENTO A JUICIO EN MATERIA LABORAL. PARA CUMPLIR CON EL REQUISITO DE DEJAR CÉDULA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 751 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, ES INSUFICIENTE LA MENCIÓN 'ANOTO CÉDULA DE NOTIFICACIÓN' EN EL ACTA CORRESPONDIENTE."	III.3o.T.34 L (10a.)	2068
Ley Federal del Trabajo, artículos 761 y 762.—Véase: "INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMAS. PUEDE PLANTEARSE EN CUALQUIER ETAPA DEL PROCEDIMIENTO LABORAL, INCLUSO ANTES DE LA CONCILIATORIA."	III.1o.T.26 L (10a.)	2076
Ley Federal del Trabajo, artículos 823 a 825.—Véase: "PRUEBA PERICIAL EN EL JUICIO LABORAL. PARA SU ADMISIÓN ES INNECESARIO QUE EL OFERENTE SEÑALE EL NOMBRE DEL PERITO Y SU IDENTIDAD."	XXVII.3o.28 L (10a.)	2117
Ley Federal del Trabajo, artículos 982 a 991.—Véase: "DECLARACIÓN DE BENEFICIARIOS. AL TENER DICHA RESOLUCIÓN ÚNICAMENTE EFECTOS DECLARATIVOS Y CONSTITUIR UN ACTO FUERA DE JUICIO, ES IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO."	XXI.3o.C.T.1 L (10a.)	2054
Ley General de Salud, artículo 474.—Véase: "CONDENA CONDICIONAL Y SUSTITUTIVOS DE LA PENA. CUANDO UNA AUTORIDAD DEL FUERO COMÚN, EN EJERCICIO DE LA COMPETENCIA CONCURRENTE, CONOCE DE UN DELITO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE SALUD, DEBE RESOLVER RESPECTO DE DICHOS BENEFICIOS, ATENTO A LOS ARTÍCULOS 70 Y 90 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y NO A LO QUE ESTABLEZCA LA LEY SUSTANTIVA LOCAL CORRESPONDIENTE."	XXX.2o.1 P (10a.)	2043
Ley General de Salud, artículo 480.—Véase: "CONDENA CONDICIONAL Y SUSTITUTIVOS DE LA PENA.		

	Número de identificación	Pág.
CUANDO UNA AUTORIDAD DEL FUERO COMÚN, EN EJERCICIO DE LA COMPETENCIA CONCURRENTE, CONOCE DE UN DELITO PREVISTO EN LA LEY GENERAL DE SALUD, DEBE RESOLVER RESPECTO DE DICHS BENEFICIOS, ATENTO A LOS ARTÍCULOS 70 Y 90 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL Y NO A LO QUE ESTABLEZCA LA LEY SUSTANTIVA LOCAL CORRESPONDIENTE."	XXX.2o.1 P (10a.)	2043
Ley General de Vida Silvestre, artículo 78.—Véase: "VIDA SILVESTRE. LA CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA APLICACIÓN DEL TERCER PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 78 DE LA LEY GENERAL RELATIVA, NO PROVOCA PERJUICIO AL INTERÉS SOCIAL NI CONTRAVIENE DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO."	PC.XVI.A. J/12 A (10a.)	1896
Ley General de Vida Silvestre, artículo 78.—Véase: "VIDA SILVESTRE. PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA LA APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 78, TERCER PÁRRAFO, DE LA LEY GENERAL RELATIVA, AL TRATARSE DE UNA NORMA PROHIBITIVA CON EFECTOS POSITIVOS."	PC.XVI.A. J/11 A (10a.)	1897
Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la Fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 19.—Véase: "REMISIÓN PARCIAL DE LA PENA. ES IMPROCEDENTE CONCEDER ESTE BENEFICIO A LOS SENTENCIADOS POR EL DELITO DE PRIVACIÓN ILEGAL DE LA LIBERTAD (SECUESTRO), EN TÉRMINOS DE LA LEY GENERAL PARA PREVENIR Y SANCIONAR LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, REGLAMENTARIA DE LA FRACCIÓN XXI DEL ARTÍCULO 73 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE NO TIENE APLICACIÓN RETROACTIVA EN SU BENEFICIO LA LEY DE EJECUCIÓN DE SANCIONES PENALES Y REINSERCIÓN SOCIAL PARA EL DISTRITO FEDERAL."	PC.I.P. J/20 P (10a.)	1732

	Número de identificación	Pág.
Ley Orgánica de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, artículo 25.—Véase: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE CONTRA LAS MULTAS IMPUESTAS COMO MEDIDA DE APREMIO POR LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE."	I.16o.A.16 A (10a.)	2089
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, artículo 18, fracción IV.—Véase: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN LA QUE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO."	PC.XXVII. J/5 A (10a.)	1425
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, artículo 18, fracción IV.—Véase: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES."	PC.XXVII. J/4 A (10a.)	1426
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, artículo 18, fracción VII.—Véase: "DILIGENCIAS DE JURISDICCIÓN VOLUNTARIA EN MATERIA AGRARIA. LA FALTA DE LLAMAMIENTO A UNA PERSONA CUANDO HAN CONCLUIDO CON EL RECONOCIMIENTO DEL SUCESOR DE DERECHOS AGRARIOS SIN QUE SE HAYA DEJADO LISTA DE SUCESORES, NO TRANSGREDE SUS DERECHOS HUMANOS."	IX.2o.8 A (10a.)	2064
Ley Orgánica de los Tribunales Agrarios, artículo 18, fracción VII.—Véase: "TRIBUNALES UNITARIOS AGRARIOS. SON COMPETENTES PARA CONOCER DE LOS JUICIOS EN LOS QUE LA LITIS SE CENTRE EN RE-		

	Número de identificación	Pág.
SOLVER EL MEJOR DERECHO A SUCEDER LOS BIENES AGRARIOS DE UN EJIDATARIO, AUN CUANDO LA ACCIÓN O RECONVENCIÓN SE BASE EN UN TESTAMENTO PÚBLICO ABIERTO OTORGADO POR EL <i>DE CUJUS</i> EN FAVOR DE UNA DE LAS PARTES."	III.1o.A.26 A (10a.)	2235
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo de Jalisco, artículo 13.—Véase: "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS EXPEDIDOS POR EL CONGRESO DEL ESTADO DE JALISCO. CORRESPONDE ÚNICAMENTE AL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO."	2a./J. 11/2016 (10a.)	803
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículo 35.—Véase: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO."	XXIV.2o. J/1 (10a.)	1982
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículo 51, fracción I.—Véase: "FALTA DE ATENCIÓN MÉDICA ADECUADA EN LOS CENTROS DE RECLUSIÓN. LA COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA SE SURTE A FAVOR DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO EN MATERIA PENAL, AUN CUANDO DICHO ACTO RECLAMADO PROVENGA DE UNA AUTORIDAD FORMALMENTE ADMINISTRATIVA (PENITENCIARIA) Y CON INDEPENDENCIA DE QUE EL INTERNO TENGA LA CALIDAD DE PROCESADO O SENTENCIADO."	XXIV.2o. J/1 (10a.)	1982
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículo 146, fracciones XVI y XVIII.—Véase: "CONTRA-		

	Número de identificación	Pág.
DICCIÓN DE TESIS. ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. NO SE CALIFICA DE LEGAL EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR UN MAGISTRADO PARA CONOCER DE ELLA, AL NO ACTUALIZARSE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES XVI Y XVIII DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN."	PC.III.L. 1 K (10a.)	1917
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículo 189, fracción XIII.—Véase: "CONFLICTO COMPETENCIAL. CORRESPONDE DIRIMIRLO A LA SALA SUPERIOR DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO SE SUSCITA ENTRE UNA DE SUS SALAS REGIONALES Y UNA JUNTA DE CONCILIACIÓN."	XVI.1o.T.24 L (10a.)	2044
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículos 146 a 149.—Véase: "IMPEDIMENTO PARA CONOCER DE UNA CONTRADICCIÓN DE TESIS ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. NO DEBE DECLARARSE SIN MATERIA AUNQUE MEDIE DESISTIMIENTO DEL DENUNCIANTE."	PC.III.L. 2 K (10a.)	1918
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, artículos 147 a 149.—Véase: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. ENTRE TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. NO SE CALIFICA DE LEGAL EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR UN MAGISTRADO PARA CONOCER DE ELLA, AL NO ACTUALIZARSE LAS HIPÓTESIS PREVISTAS EN LAS FRACCIONES XVI Y XVIII DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN."	PC.III.L. 1 K (10a.)	1917
Ley Orgánica del Poder Judicial de Morelos, artículo 117, fracciones III a V.—Véase: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE MORELOS DESIGNADOS TEMPORAL E INTERINAMENTE. TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL		

	Número de identificación	Pág.
CONSEJO DE LA JUDICATURA ESTATAL QUE DA POR CONCLUIDO SU ENCARGO PARA NOMBRAR OTRO JUZGADOR CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS."	XVIII.5o.4 K (10a.)	2088
Ley Orgánica del Poder Judicial de Morelos, artículo 177.—Véase: "JUECES DE PRIMERA INSTANCIA DEL ESTADO DE MORELOS DESIGNADOS TEMPORAL E INTERINAMENTE. TIENEN INTERÉS JURÍDICO PARA PROMOVER JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA ESTATAL QUE DA POR CONCLUIDO SU ENCARGO PARA NOMBRAR OTRO JUZGADOR CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS."	XVIII.5o.4 K (10a.)	2088
Ley Orgánica del Poder Legislativo de Jalisco, artículos 224 a 232.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL CARGO DE UNA AUTORIDAD (MUNÍCIPE DE UN AYUNTAMIENTO) POR INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO. CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO INICIAR EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO."	III.3o.T.37 L (10a.)	2189
Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, artículo 14, fracción III.—Véase: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. PROCEDE CONTRA LAS MULTAS IMPUESTAS COMO MEDIDA DE APREMIO POR LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE."	I.16o.A.16 A (10a.)	2089
Ley Orgánica Municipal de Puebla, artículo 277.—Véase: "TRABAJADORES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE PUEBLA. TRATÁNDOSE DE APORTACIONES DE VIVIENDA, LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE PUEBLA Y LA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DE LOS PODERES DE DICHA ENTIDAD, PREVEN LA FOR-		

	Número de identificación	Pág.
MAY EL ORGANISMO ANTE EL QUE DEBERÁN REALIZARSE, POR LO QUE SON INAPLICABLES, SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO Y LA LEY DEL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES."	VI.2o.T.9 L (10a.)	2230
Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes de Querétaro, artículo 8 (abrogada).—Véase: "DERECHO HUMANO A LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. SE VULNERA EN PERJUICIO DE LOS MENORES DE EDAD CON MOTIVO DE LA PUBLICACIÓN DE SUS DATOS PERSONALES Y SENSIBLES EN EL PORTAL DE INTERNET DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, A TRAVÉS DE SU DEPARTAMENTO DE LOCATEL, A PROPÓSITO DE LA PETICIÓN DE UN PARTICULAR, QUE NO SE UBIQUE EN ALGUNA DE LAS HIPÓTESIS PARA CONSIDERAR QUE SE ENCUENTRAN EN RIESGO INMINENTE DE SUFRIR DAÑO GRAVE EN SU INTEGRIDAD PERSONAL."	XXII.1o.1 CS (10a.)	2060
Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 143.—Véase: "SUSPENSIÓN EN EL CARGO DE UNA AUTORIDAD (MUNÍCIPE DE UN AYUNTAMIENTO) POR INCUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO. CORRESPONDE AL CONGRESO DEL ESTADO INICIAR EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO."	III.3o.T.37 L (10a.)	2189
Ley para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículos 140 a 143.—Véase: "LAUDOS DICTADOS POR EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO. PARA LOGRAR SU EJECUCIÓN Y CUMPLIMIENTO PUEDE IMPONER DIVERSAS SANCIONES, ENTRE ELLAS, LA SUSPENSIÓN DE LA AUTORIDAD EN EL CARGO POR UN PLAZO DE 15 DÍAS SIN GOCE DE SUELDO."	III.3o.T.36 L (10a.)	2091

	Número de identificación	Pág.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 10.—Véase: "DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO."	VII.2o.P. J/2 (10a.)	1966
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, artículo 12.—Véase: "DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO."	VII.2o.P. J/2 (10a.)	1966
Principios Básicos para el Tratamiento de Reclusos, artículo 5.—Véase: "DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO."	VII.2o.P. J/2 (10a.)	1966
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Eco-		

	Número de identificación	Pág.
nómicos, Sociales y Culturales, artículo 1.—Véase: "DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO."	VII.2o.P. J/2 (10a.)	1966
Régimen de Jubilaciones y Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social, artículo 5.—Véase: "EMANACIONES RADIATIVAS. PARA QUE EL MONTO DE DICHO CONCEPTO INTEGRO EL SALARIO PARA EL PAGO DE LA JUBILACIÓN O PENSIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL, DEBEN DEMOSTRAR QUE LO PERCIBIERON Y APORTARON AL FONDO RESPECTIVO DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS."	III.3o.T.33 L (10a.)	2067
Reglamento de Fondo de Ayuda Sindical por Defunción 2011, del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social, artículo 17.—Véase: "AYUDA SINDICAL POR DEFUNCIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL. CARGA DE LA PRUEBA TRATÁNDOSE DEL RECLAMO FORMULADO POR EL BENEFICIARIO DE UN TRABAJADOR FALLECIDO."	VIII.2o.C.T.1 L (10a.)	2026
Reglamento de Infectocontagiosidad y Emanaciones Radiactivas del Instituto Mexicano del Seguro Social, artículo 11.—Véase: "EMANACIONES RADIATIVAS. PARA QUE EL MONTO DE DICHO CONCEPTO INTEGRO EL SALARIO PARA EL PAGO DE LA JUBILACIÓN O PENSIÓN DE LOS TRABAJADORES DEL SEGURO SOCIAL, DEBEN DEMOSTRAR QUE LO PERCIBIERON Y APORTARON AL FONDO RESPECTIVO DURANTE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS."	III.3o.T.33 L (10a.)	2067

	Número de identificación	Pág.
Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, artículo 110.—Véase: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN LA QUE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO."	PC.XXVII. J/5 A (10a.)	1425
Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, artículo 110.—Véase: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES."	PC.XXVII. J/4 A (10a.)	1426
Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, artículo cuarto transitorio.—Véase: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. DEBE AGOTARSE CONTRA LA RESOLUCIÓN EMITIDA POR LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO EN LA QUE ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES, ANTES DE PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO."	PC.XXVII. J/5 A (10a.)	1425
Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, artículo cuarto transitorio.—Véase: "JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO. PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN EN LA QUE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO, ORDENA EL ARCHIVO DEL EXPEDIENTE DE SOLICITUD DE ENAJENACIÓN DE TERRENOS NACIONALES."	PC.XXVII. J/4 A (10a.)	1426

	Número de identificación	Pág.
Reglamento de la Ley de Catastro Municipal de Jalisco, artículo 20, fracción III.—Véase: "TABLAS DE VALORES UNITARIOS DE SUELO Y CONSTRUCCIÓN DEL MUNICIPIO DE TLAJOMULCO DE ZÚÑIGA, JALISCO, CONTENIDAS EN LOS DECRETOS NÚMEROS 24646/LX/13 Y 23711/LIX/11. LOS PARÁMETROS PARA DETERMINAR EL ELEMENTO RELATIVO A LA CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN SE ENCUENTRAN EN LA LEY DE CATASTRO MUNICIPAL DE ESE ESTADO Y EL HECHO DE QUE LA DEFINICIÓN DE AQUÉLLOS ESTÉ EN EL REGLAMENTO DE ÉSTA, SÓLO IMPLICA QUE LOS DESARROLLA A DETALLE, POR LO QUE NO VULNERAN EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA."	PC.III.A. J/12 A (10a.)	1843
Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículo 2.—Véase: "IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. LA OBLIGACIÓN A CARGO DE LAS PERSONAS MORALES DE RETENER EL TRIBUTO QUE SE LES TRASLADA POR LA ADQUISICIÓN DE DESPERDICIOS PARA SER UTILIZADOS COMO INSUMO DE SU ACTIVIDAD INDUSTRIAL O PARA SU COMERCIALIZACIÓN, ES EXIGIBLE TRATÁNDOSE DE METALES PUESTOS EN CONDICIONES DE REUTILIZACIÓN."	I.1o.A.123 A (10a.)	2074
Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica, artículos 11 a 13.—Véase: "COMPETENCIA ECONÓMICA. CONCEPTO DE 'PODER SUSTANCIAL' EN ESA MATERIA."	I.1o.A.E.122 A (10a.)	2036
Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica, artículos 43 y 44.—Véase: "REDUCCIÓN DE SANCIONES EN EL PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN DE PRÁCTICAS MONOPÓLICAS ABSOLUTAS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 33 BIS 3 DE LA ABROGADA LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA. RELEVANCIA DE LA CONFIDENCIALIDAD DE LA IDENTIDAD DE LOS AGENTES ECONÓMICOS QUE SOLICITEN ACOGERSE A ESE BENEFICIO."	I.1o.A.E.113 A (10a.)	2134

	Número de identificación	Pág.
Reglamento de la Ley Federal de Competencia Económica, artículos 60 y 61.—Véase: "COMPETENCIA ECONÓMICA. EL PLAZO DE DIEZ DÍAS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 34 BIS 2 DE LA ABROGADA LEY FEDERAL RELATIVA PARA QUE LA COMISIÓN FEDERAL EN LA MATERIA RECABE INFORMACIÓN DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN PUEDE PRORROGARSE, SIEMPRE QUE SEA POR CAUSA JUSTIFICADA Y NO EXCEDA EL LAPSO PARA CONCLUIR LA INVESTIGACIÓN."	I.1o.A.E.118 A (10a.)	2037
Reglamento de Maestro Emérito de la Universidad Autónoma de Guerrero, artículos 12 a 14.—Véase: "UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE GUERRERO. LA CONTROVERSI A SUSCITADA POR EL NOMBRAMIENTO DE MAESTRO EMÉRITO, AL SER DE NATURALEZA ACADÉMICA, DEBE RESOLVERSE POR SUS ÓRGANOS INTERNOS Y NO POR LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE."	XXI.3o.C.T.2 L (10a.)	2237
Reglamento del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, artículo 17.—Véase: "DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO."	VII.2o.P. J/2 (10a.)	1966
Reglamento Interno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, artículo 9o., fracción X.—Véase: "TELECOMUNICACIONES. LAS DISPOSICIONES QUE PREVÉN LA FACULTAD DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE LA EXTINTA COMISIÓN FEDERAL RELATIVA PARA IMPONER		

	Número de identificación	Pág.
OBLIGACIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON TARIFAS, CALIDAD DEL SERVICIO E INFORMACIÓN A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE LA MATERIA QUE TENGAN PODER SUSTANCIAL EN ALGÚN MERCADO RELEVANTE, CORRESPONDEN A UNA 'REGLA QUE CONFIERE PODERES'."	I.1o.A.E.115 A (10a.)	2226
Reglamento Interno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones, artículo 23, apartado B), fracción VIII.—Véase: "TELECOMUNICACIONES. LAS DISPOSICIONES QUE PREVÉN LA FACULTAD DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE LA EXTINTA COMISIÓN FEDERAL RELATIVA PARA IMPONER OBLIGACIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON TARIFAS, CALIDAD DEL SERVICIO E INFORMACIÓN A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE LA MATERIA QUE TENGAN PODER SUSTANCIAL EN ALGÚN MERCADO RELEVANTE, CORRESPONDEN A UNA 'REGLA QUE CONFIERE PODERES'."	I.1o.A.E.115 A (10a.)	2226
Reglas del servicio local (Comisión Federal de Telecomunicaciones), regla trigésimaprimera (D.O.F. 23-X-1997).—Véase: "TELECOMUNICACIONES. LAS DISPOSICIONES QUE PREVÉN LA FACULTAD DE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y DE LA EXTINTA COMISIÓN FEDERAL RELATIVA PARA IMPONER OBLIGACIONES ESPECÍFICAS RELACIONADAS CON TARIFAS, CALIDAD DEL SERVICIO E INFORMACIÓN A LOS CONCESIONARIOS DE REDES PÚBLICAS DE LA MATERIA QUE TENGAN PODER SUSTANCIAL EN ALGÚN MERCADO RELEVANTE, CORRESPONDEN A UNA 'REGLA QUE CONFIERE PODERES'."	I.1o.A.E.115 A (10a.)	2226
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, artículo 22.—Véase: "DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPON-		

	Número de identificación	Pág.
SABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO."	VII.2o.P. J/2 (10a.)	1966
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, artículo 62.—Véase: "DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO."	VII.2o.P. J/2 (10a.)	1966
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, artículos 24 a 26.—Véase: "DERECHO A LA SALUD DE LOS INTERNOS EN UN CENTRO FEDERAL DE READAPTACIÓN SOCIAL. ACCIONES QUE EL JUEZ DE AMPARO DEBE EXIGIR A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES PARA PRESERVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS RECLUSOS ENFERMOS Y GESTIONES QUE ÉSTAS DEBEN REALIZAR CUANDO SE ACREDITE QUE LA OPCIÓN MÁS ADECUADA PARA TRATAR SU PADECIMIENTO ES INCOMPATIBLE CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA DE SALUD IMPLEMENTADAS EN DICHO CENTRO."	VII.2o.P. J/2 (10a.)	1966
Reglas para el otorgamiento de créditos a los trabajadores derechohabientes del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, regla décima primera (D.O.F 27-II-2013).—Véase: "INFO-NAVIT. LA REGLA DÉCIMA PRIMERA DE LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE APRUEBAN LAS REGLAS		

	Número de identificación	Pág.
PARA EL OTORGAMIENTO DE CRÉDITOS A LOS TRABAJADORES DERECHOHABIENTES DEL CITADO INSTITUTO ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE JERARQUÍA NORMATIVA TUTELADO POR EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL."	I.1o.A.7 CS (10a.)	2079

